

GUILLERMO I. ORTIZ MAYA COMPA
MINISTRA MARCO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN

JUNIO/21/2005 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (HORAS)

Reg. 427/2005 Reg. 7/2005
NOV. 26 2009

Año: 2005

Número: 1070

ARCHIVO CENTRAL

Quejoso: CONSEJO DE REGULACIÓN FEDERAL

Promoviente del recurso: TERCERO PERJUDICADO

Contra actos del SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO

Acto reclamado: LA SENTENCIA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE
DE 2004, DICTADA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 351/2003 Y SU
ACUMULADO DE 1/2003

Juzgador de Distrito de Origen: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

Julio de Amparo Directo Promovido A.D. 128/2004 II

Fecha de la Resolución: 01 DE JUNIO DE 2005

El Juzgado Resolvió: AMPARO

Ministro Ponente:

JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

Expediente Constante de los Cuadernos de Expediente

ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA GENERAL

RED DE INFORMÁTICA JURIDICA

Registro	Procedimiento	Tipo de Asunto	Procedimiento, Datos de Origen	Fecha de Ingreso	Contenido	Destino	Consideraciones
913409	607020001	AMPARO DIRECTO CON DIVISION MATERIA ADMINISTRATIVA	QUEJAS CONGRESO DE LA REPUBLICA FIDELES	2004/09/24	CUADERNO CON CUADERNO Y UN FOLIO RECIBIDO DE ESTAFETA CON NUMERO DE GUÍA 301810101- 30050057325 CON EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NUMERO 3002004- DE 337 FOLIOS SEGUN SU ULTIMO FOLIO DEL ORIGINAL DEL SUPLENTE DE AGRAVIO DE ALFREDO DE GUADALUPE MARTINEZ GARZA EN LA FOJA QUE SE AGREGA AL CANTO DUEÑO DE AMPARO DIRECTO ALFONSO PÉREZ SACA SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ACTO RECONOCIDO LA SENTENCIA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004, SE ENTREGA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 3002004 Y SU ACUMULADO 3002005 FECHA RESOLUCION 3004/2005 ENGRUPO 1 / RESOL. PRECUBIDA: AMPARO TRIBUNAL COLEGIADO: ADJ. 02002004- III	SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS	E.U.N. 3120325
			SUBJTO RELACIONADO RENEDE LOEZ GERNANDEZ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE QUEJOSA)				
			TERCERO PERJUDICADO GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON				
			TERCERO PERJUDICADO DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION LOGICO DESCENTRALIZADA DENOMINADA SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MONTEALEY				
			SUBJTO RELACIONADO ALFREDO DE GUADALUPE MARTINEZ GARZA (AMPARADO GENERAL DE LA PARTE TERCERO PERJUDICADO)				
			RECONOCIMIENTO TERCERO PERJUDICADO				
			OSCAR INSOLUCIONAL 2 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE 4 CUEPOS ENTIDAD FEDERATIVA NUEVO LEON				
			070000001				

EL ASESOR GABRIEL FIDEL ENRIQUEZ

RECIBIÓ EL ASUNTO



11-12

tercero por

FORMA B-1

AMPARO DIRECTO 328/2004
REF. AL EXP. 251/2003

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

8017 SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

EN EL AMPARO DIRECTO 328/2004, SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

AMPARO DIRECTO
328/2004

Monterrey, Nuevo León, a quince de junio de dos mil cinco.

Vista la cuenta que antecede; y como Alfredo de Guadalupe Martínez Garza, en representación de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, quien tiene el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio de garantías, interpone recurso de revisión en contra de la ejecutoria pronunciada por este Tribunal, de uno de abril de dos mil cinco, dentro del juicio de amparo directo número 328/2004; con apoyo en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 84, fracción II, 86, 88 y 89, párrafos primero y cuarto de la Ley de Amparo, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, agréguese a los autos copia del recurso de revisión, distribúyanse el resto entre las partes y remítase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el escrito original que lo contiene, con copia del mismo para el fiscal federal correspondiente, el disquete de la sentencia respectiva y el expediente en cuestión, para lo que tenga a bien acordar.

Así mismo, con fundamento en el artículo 89, último párrafo de la Ley de Amparo, lo conducente es hacer constar en este proveído, así como en el oficio de remisión de este asunto al máximo Tribunal, que la resolución que se recurre contiene la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la aplicación del artículo 9 del decreto expedido por el gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cinco:

Se tiene a la recurrente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Matamoros mil setecientos diecisiete poniente, de la colonia Obispado de esta ciudad; y se autoriza para tal efecto, con las limitaciones a que se refiere el artículo 27 de la Ley de Amparo, a Patricio R. Kalife del Valle, José Héctor Sánchez Barco, Luis Felipe Dávila Ayala, Ernesto Maldonado Pérez, Gerardo Cano Mendoza, Gerardo Treviño Cavazos, David A. Maldonado Martínez y David A. Guajardo Ramos, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el libro de control, que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y artículo 19, párrafo segundo, del Acuerdo General 30/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado este último, en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil tres; **dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la Inteligencia de que la falta de aprobación expresa conlleva su oposición.**

Notifíquese a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y al agente del ministerio público adscrito acompañándoles copia del escrito de expresión de agravios.

Así lo acordó y firma el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, licenciado Sergio Eduardo Alvarado Puente, ante la secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe. FIRMAS.- LO QUE ME PERMITO COMUNICARLE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE SE CONTRAE EL PROVEIDO INSERTO.- PROTESTO A USTED MI ATENTA CONSIDERACION.

Monterrey, Nuevo León a 15 de junio de 2005

EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
PODER JUDICIAL DE LA MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

LIC. ALEJANDRO ULISES LEÓN RODRÍGUEZ

103-V-2005

013108

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2005 JUN 21 AM 11 12

OFICINA DE LA NACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

1070/04
DPM

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2005 JUN 23 P 12:17

SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y LEGISLACIÓN

Recibido de esta fe tu quin.

80151 a 7070 - 556500 57 3925 car.

- (1) Disquette
- J.A.D. 328/2004 en (337) Fojus
Segun su Ultimo folio
en el Sobre que se ayrega

Julio A Reyes Moron



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GEN

Condiciones del contrato del envío especificadas en la factura

CARTA PORTE

MGDO. SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE
PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMVA.
DEL CUARTO CIRCUITO.
DIAGONAL SANTA ENGRACIA 221
FRACC. LOMAS DE SAN FRANCISCO
MONTERREY, N. L. C.P. 64710

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN

PINO SUÁREZ NÚM. 2 PUERTA 3039
MÉXICO, D.F. C.P. 06065.

SRIA. DE ACUERDOS.
OF.8017. ANEXA EXPEDIENTE.
AMPARO DIRECTO 028/2004.

COMANDO EN JEFE
 FUERZA DE LA ARMADA
 ★ 21 JUN 2005 ★
 OFICINA DE CERTIFICACION
 OFICIAL Y CORRESPONDENCIA

11:30

AMT

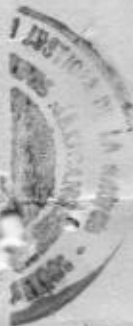
06065

MEXICO D.F.

b A 1



CORTE DE
LA NACION.
DE ACUERDO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO:
1070/2005

SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y ASUNTOS
VARIOS



En México, Distrito Federal, a veintidós de junio de dos mil cinco, se da cuenta al Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio 8017, de ~~quince~~ veinte del mes y año citados, suscrito por el Secretario de ~~Acuerdos~~ Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, recibido en la Subsecretaría General de Acuerdos el día de ayer, al cual se anexan el juicio de amparo directo 328/2004 y un disquete. Conste.

R 21

México, Distrito Federal, a veintidós de junio de dos mil cinco.

Con el oficio de remisión de los autos y el escrito original de expresión de agravios, fórmese y regístrese el toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de ~~lo~~ Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León. Ahora bien, como en el caso el tercero perjudicado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado general Alfredo de Guadalupe Martínez Garza, hace valer recurso de revisión en contra de la sentencia de primero de abril del año en curso, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el juicio de amparo directo 328/2004, fallo en el cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, asimismo, se decidió

sobre la constitucionalidad del **"artículo 9° del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de febrero de dos mil tres"**; es de concluirse que el Pleno de este Alto Tribunal no es legalmente competente para conocer del citado recurso, por lo que deben remitirse el presente toca, los autos del aludido juicio de amparo directo y las demás constancias que sean necesarias a la Segunda Sala de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales consiguientes. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 84, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en lo señalado en el punto Segundo del Acuerdo Plenario número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, se acuerda:

I.- El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no es legalmente competente para conocer del recurso de revisión que se formula.

II.- Remítanse a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, el toca de revisión 1070/2005, el juicio de amparo directo 328/2004 y las demás constancias que sean necesarias para los efectos legales consiguientes.

III.- Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan Díaz Romero, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Fco. Javier Barreiro Perera.

FJBP/VPMM





SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA DE



SUPREMA
JUSTICIA DE
SEGUNDA
SECRETARIA DE

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y ASUNTOS VARIOS.
FAX: 55 22 80 31

PARA FACILITAR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA
A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
DIRÍJALA A LA OFICINA DE SERVICIOS DIRECTOS J-
17, DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, LOCALIZADA
EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE ESTE ALTO
TRIBUNAL, UBICADO EN PINO SUÁREZ # 2, PLANTA
BAJA, COL. CENTRO, MÉXICO, D.F. C.P. 06065

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO: **1070/2005**
JUICIO DE AMPARO DIRECTO: 328/2004
OFICIO NÚMERO: 77122

LICENCIADO MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN.

En el toca de revisión relativo al juicio de amparo directo
promovido por el **CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL**, se
proveyó un acuerdo cuya copia certificada me permito remitirle, para los
efectos legales consiguientes. Asimismo, le remito la siguiente
documentación:

CONTENIDO:	FOJAS:	PRESENTADO EN:
1.- Autos del juicio de amparo directo 328/2004.	337	Original
2.- Toca de revisión 1070/2005.	3	Original
3.- Un disquete.	--	Una pieza.

Le reitero mi atenta consideración.

México, Distrito Federal, a veintidós de junio de dos mil

cinco

LICENCIADO FCO. JAVIER BARREIRO PERERA
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FJBP/VPMM

27 JUN 23 P 12:17



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENE



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMA CORTE DE JUSTIC
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE A



SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDOS

QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO:
1070/2005
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y ASUNTOS
VARIOS

En México, Distrito Federal, a veintidós de junio de dos mil cinco, se da cuenta al Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio 8017, de quince del mes y año citados, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, recibido en la Subsecretaría General de Acuerdos el día de ayer, al cual se anexan el juicio de amparo directo 328/2004 y un disquete. Conste.

A FEDERACION
DE ACUERDOS
DE ACUERDOS
DE ACUERDOS

R

2/1

México, Distrito Federal, a veintidós de junio de dos mil cinco.

Con el oficio de remisión de los autos y el escrito original de expresión de agravios, fórmese y regístrese el toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León. Ahora bien, como en el caso el tercero perjudicado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado general Alfredo de Guadalupe Martínez Garza, hace valer recurso de revisión en contra de la sentencia de primero de abril del año en curso, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el juicio de amparo directo 328/2004, fallo en el cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, asimismo, se decidió

sobre la constitucionalidad del **"artículo 9° del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de febrero de dos mil tres"**; es de concluirse que el Pleno de este Alto Tribunal no es legalmente competente para conocer del citado recurso, por lo que deben remitirse el presente toca, los autos del aludido juicio de amparo directo y las demás constancias que sean necesarias a la Segunda Sala de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales consiguientes. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 84, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en lo señalado en el punto Segundo del Acuerdo Plenario número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, se acuerda:

I.- El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no es legalmente competente para conocer del recurso de revisión que se formula.

II.- Remítanse a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, el toca de revisión 1070/2005, el juicio de amparo directo 328/2004 y las demás constancias que sean necesarias para los efectos legales consiguientes.

III.- Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el **Presidente en funciones** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan Díaz Romero, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Fco. Javier Barreiro Perera.

FJBP/VPMM

2

ES COPIA FIEL COMPULSADA DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE CITADO AL RUBRO Y SE EXPIDE EN UNA FOJA ÚTIL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PROVEÍDO DE ESTA FECHA.

México, Distrito Federal, a veintidós de junio de dos mil cinco.

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER BARREIRO PERERA.
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.



SUPREMA C
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA G
SECCION



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE
MONTERREY, I.P.D.

DIRECCIÓN JURÍDICA

MATAMOROS NUM. 1717 PTE. COL. OBISPADO, MONTERREY, N. L. C. P. 64010

JUICIO DE AMPARO DIRECTO No. 328/2004-III
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
VS.
PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
TERCERO PERJUDICADO: SERVICIOS DE AGUA Y
DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
RECURSO DE REVISIÓN: EN CONTRA DE LA EJECUTORIA
DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2005

ORTE 24
NACIONAL
DE ACUERDO

C. MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO FEDERAL
MATERIA ADMINISTRATIVA.

Presente.-

EDERACION
JOEN MATERIA
O CIRCUITO
LEON

LIC. ALFREDO DE GUADALUPE MARTÍNEZ GARZA, mexicano, mayor de edad, funcionario público y con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en Matamoros 1717 poniente de la Colonia Obispado de esta ciudad de Monterrey Nuevo León, autorizando en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor, a los Licenciados en Derecho Patricio R. Kalife del Valle, José Héctor Sánchez Barco, Luis Felipe Dávila Ayala, Ernesto Maldonado Pérez, Gerardo Cano Mendoza, Gerardo Treviño Cavazos, David A. Maldonado Martínez y David A. Guajardo Ramos, ante Usted comparezco a exponer:

Que por medio del presente instrumento y en mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución Pública Descentralizada denominada **SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY**, personalidad que me permito acreditar con la copia certificada de la Escritura Pública No. 5,869 de fecha 18 de diciembre del 2003, pasada ante la fe del Lic. Ramiro A. Garza Ponce, Notario Público No. 116, con ejercicio en el Primer Distrito Registral, e inscrita bajo el número 3286, Volumen 114, Libro 33 Sección IV, Resoluciones y Convenios Diversos de fecha 19 de diciembre del 2003, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del mismo Distrito Registral, ocurro en nombre de mi representada a promover **RECURSO DE REVISIÓN**, en contra de la Ejecutoria dictada por ese H. Tribunal el día 01 de abril de 2005, dentro del juicio y expediente al rubro indicado, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 83 fracción V y 84 fracción III de la Ley de Amparo en vigor.

ACUERDO

(

(

Page 1
1
2

(

Solicitando desde este momento se suspendan la ejecución de ejecutoria de mérito y la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 7

Asimismo, solicito se remita el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser la instancia competente para conocer y resolver el presente recurso. 2

Justa y legal mi petición, espero se admita de conformidad.

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO
Monterrey, Nuevo León, a 14 de junio del 2005.



LIC. ALFREDO DE GUADALUPE MARTÍNEZ GARZA
APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS
DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

FEDERACION
JO EN MATERIA
TO CIRCUITO
LEON

TE DE
ACION
ACUERDOS

(

(

(



DIRECCIÓN JURÍDICA

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE
MONTERREY, I.P.D.

MATAMOROS NUM. 1717 PTE. COL. OBISPADO, MONTERREY, N.L. C.P. 64010



OPTA DE
A NACIÓN
DE AGUA

JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO. 328/2004-III
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
VS.
PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
TERCERO PERJUDICADO: SERVICIOS DE AGUA Y
DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
RECURSO DE REVISIÓN: CONTRA LA EJECUTORIA
DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2005, DICTADA POR EL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO
CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

FEDERACION
DOEN MATERIA
CIRCUITO
LEON

C. MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Presentes:

LIC. ALFREDO DE GUADALUPE MARTÍNEZ GARZA, mexicano, mayor de edad, funcionario público y con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en Matamoros 1717 poniente de la Colonia Obispado de esta ciudad de Monterrey Nuevo León, autorizando en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo en vigor, a los Licenciados en Derecho Patricio R. Kalife del Valle, José Héctor Sánchez Barco, Luis Felipe Dávila Ayala, Ernesto Maldonado Pérez, Gerardo Cano Mendoza, Gerardo Treviño Lavazos, David A. Maldonado Martínez y David A. Guajardo Ramos, ante Usted comparezco a exponer:

Que por medio del presente instrumento y en mi carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la Institución Pública Descentralizada denominada SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, personalidad que me permito acreditar con la copia certificada de la Escritura Pública No. 5,869 de fecha 18 de diciembre del 2003, pasada ante la fe del Lic. Ramiro A. Garza Ponce, Notario Público No. 116, con ejercicio en el Primer Distrito Registral, ocurro en nombre de mi representada a promover RECURSO DE REVISIÓN, en contra de la Ejecutoria de fecha 01 de abril del 2005, emanada por Los C. Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, dentro del juicio y expediente al rubro indicado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto con los artículos 83 fracción V y 84 fracción III de la Ley de Amparo en vigor, solicitando desde este momento se suspenda la ejecución de Ejecutoria y se le

1

2

3

1000
1000
1000

notifique a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la misma y la suspensión de la resolución dictada por ese H. Tribunal el 16 de mayo de 2005 y notificada el 26 del mismo mes y año. Al efecto me permito señalar los siguientes:

ANTECEDENTES:

1.- Que en fecha 03 de febrero del 2003, el C. Víctor Manuel Mendicuti Gómez, en su carácter de Encargado de la Dirección General de asuntos Jurídicos de Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, compareció ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a demandar al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., reclamando lo siguiente:

1.- La resolución de fecha 5 de diciembre del 2002, contenida en el oficio No. 179-R-10-A-12-2002, por medio de la cual el Señor Jesús Hinojosa Tijerina, Director General de la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, niega la exención de pago por concepto de servicio público de agua potable y drenaje, solicitada al Gobernador de esa Entidad Federativa. 2.- Cobro contenido en las facturas números T00114085, con fecha de vencimiento 29 de noviembre de 2002, y T00121863, con fecha de vencimiento 29 de enero del 2003. 3.- La amenaza de corte o suspensión de servicio de agua potable y drenaje contenida en las facturas señaladas anteriormente. 4.- La omisión de resolver la mencionada solicitud exención formulada por el Consejo de la Judicatura Federal, en la cual incurrió el Gobernador del Estado de Nuevo León, al turnar indebidamente la misma para su atención a la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

FEDERACIÓN
GOBIERNO
ESTADAL
CIRCUITO
LEÓN

Respecto al inmueble ubicado en Diagonal Santa Engracia No. 221 de la colonia Lomas de San Francisco de Monterrey, Nuevo León.

Juicio que se radicó bajo el número de expediente 051/2003.

En cuanto a la nulidad de las facturas que se indican en el párrafo anterior, a esa fecha tenían un atraso de 5 y 7 meses respectivamente, como es de observarse en las documentales que aportaron como prueba, lo que significa que los actos fueron consentidos.

Cabe hacer mención que en la fecha de la petición estaba vigente el Acuerdo Administrativo de tarifa 1998, dictado por el Ejecutivo del Estado y publicado el día 28 de enero del mismo año, acuerdo que fue abrogado el día 26 de febrero del 2003, sin ampliar la demanda en contra del nuevo acuerdo, por lo que en concepto de la Ley de Amparo quedó el juicio sin materia y lo procedente era dictar el sobreseimiento del mismo.

2.- Que en fecha 30 de mayo del 2003, el C. Alejandro Romero Gudiño, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos y representante legal del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, compareció ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a demandar a mi representada lo siguiente:

"1.- Por cuanto hace a la resolución negativa ficta del Gobernador del Estado, es de mencionarse que ha transcurrido en exceso el plazo de 60 días para considerar como resuelta negativamente la solicitud del 29 de enero del 2003, que establece el artículo 39 en relación con el 13, ambos del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, en que a la fecha se haya notificado la resolución correspondiente por lo que ha de considerarse que la autoridad resolvió en forma negativa tal petición. 2.- Por otro lado, en lo referente al

(

(

(

10
cobro realizado mediante la factura No. T00131509, con fecha de vencimiento 28 de abril del 2003, así como la amenaza de corte o suspensión contenida en la misma el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, tuvo conocimiento de los mismos el día 30 de abril del presente año. 3. - Finalmente, por cuanto hace a la factura No. T00134126, con fecha de vencimiento al 29 de mayo del presente año (sic año 2003), así como la amenaza de corte y suspensión contenida en la misma el Consejo de la Judicatura Federal tuvo conocimiento de los mismos el día 19 de mayo del presente año (sic año 2003).

Respecto al inmueble ubicado en la Avenida Constitución No. 241 Pte. centro de Monterrey, N. L.

Juicio que se radico bajo el número de expediente 251/2003.

COF Por lo que respecta a la factura que se indica en ese acto impugnado y cuya nulidad LA demandó, tenía la demandante un adeudo de 4 meses, lo que significa que los actos BAL de fueron consentidos.

3.- En fecha 10 de septiembre del 2003, el C. Alejandro Romero Gudiño, se le tuvo por ampliando la demanda en contra del Oficio No. 135-10.-R/2003 signado por el entonces Director General Ing. Fernando Villarreal Palomo, mediante el cual se le generó respuesta al Derecho de Petición.

Es necesario señalar que de los actos reclamados, la demandante jamás motivó su demanda en actos de inconstitucionalidad, solamente la nulidad de los actos señalados.

DE LA FEDERACIÓN
COLEGIADO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN
4.- Mediante visto de fecha 08 de enero del año 2004, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo decretó la acumulación de autos del expediente 251/2003, al expediente 051/2003, motivo por el cual los referidos juicios contencioso administrativo se resolvieron en el mismo fallo.

5.- En fecha 30 de marzo de 2004, la Primera Sala Ordinaria del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado dictó sentencia definitiva que declaro improcedente el Juicio Contencioso Administrativo.

El demandante Consejo de la Judicatura Federal no conforme con dicha resolución, presentó el Recurso de Revisión ante la Sala Superior de ese Órgano Jurisdiccional.

6.- En fecha 24 de septiembre de 2004, la Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió en definitiva el Recurso de Revisión confirmando la resolución del inferior, dictada por la Primera Sala Ordinaria.

7.-Inconforme con lo anterior el Consejo de la Judicatura Federal demandó de amparo directo, la cual se radicó ante el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito Federal, el cual se radicó bajo el expediente No. 328/2004-III. Incursionado y variando la quejosa respecto a la inconstitucionalidad del artículo 9° del acuerdo que establece la tarifa 2003, dictado por el Ejecutivo del Estado en fecha 26 de febrero de 2003, y su fe de erratas de fecha 27 del mismo mes y año.

8.-Por ultimo, en fecha 01 de abril del 2005, el Tribunal antes mencionado dictó la ejecutoria de amparo en la que le concedió la protección constitucional decretando la Inconstitucionalidad del artículo 9° del Acuerdo de Tarifa 2003, dictada por Ejecutivo del

Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 26 de febrero de 2003, y su fe de erratas de fecha 27 del mismo mes y año, ordenando además, a la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, y en su lugar emita otra en la que declare fundados los agravios primero, tercero y cuarto, expresados por la quejosa en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, que se encuentran estrechamente vinculados entre si y con base en ello, decreta la nulidad de la resolución expresa que negó la exención solicitada por la demandante para el efecto de que se emita una nueva resolución en la que se reconozca que si procede dicha exención.

9.- En fecha 10 de junio del 2005, la autoridad emisora de la Ejecutoria notificaron a mi representada el auto de fecha 8 de junio del año en curso, que contiene la regularización del procedimiento ordenando a notificar a los Terceros Perjudicados C. Gobernador del Estado, Subprocurador Jurídico del Estado y a mi representada, sin suspender la ejecución de la misma, ya que primero notificó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y este a su vez dictó la nueva resolución, dejando a los Terceros Perjudicados en completo estado de indefensión.

En virtud de lo anterior, la Ejecutoria dictada por los C. Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito Federal en Materia Administrativa, es contraria a derecho, causándole perjuicios de imposible reparación, por tal motivo se formula los siguientes:

AGRAVIOS

1.- La Ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo, es violatoria y contraria a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que al efecto me permito transcribir:

FEDERACION
ADO EN MATERIA
RTO CIRCUITO
JOLION

Artículo 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

I.- La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;

II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;

III.- Los puntos resolutivos con que deban terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por lo que se sobresea, conceda o niegue el amparo".

En efecto de las documentales aportadas por la parte demandante en los dos juicios contenciosos, en virtud de que los mismos derivan de la aplicación de la tarifas aprobadas por el Ejecutivo del Estado, pasando la emisora de la ejecutoria por desapercibidos dichos conceptos reclamados, ya que era motivo suficiente para decretar el sobreseimiento del juicios, por derivar de actos consentidos, que se indican en las fracciones IV, XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Asimismo, El Consejo de la Judicatura Federal al reclamar la inconstitucionalidad del artículo 9° de Acuerdo de tarifa 1998 y 2003, para que proceda esta causa, era necesario que se hubiera combatido a la entrada en vigor de dichos acuerdos, y no posteriormente, ya que constituye un acto totalmente consentido, así lo dispone la el párrafo segundo de la fracciones IV y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que dicho juicio era

1

2

3

improcedente, lo que se denota una violación legal a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de la materia. 12

La falta de estudio de las causales de improcedencia, las que el juzgador dejó de observar, violó en perjuicio de mi representada las disposiciones de orden público contenida en la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que se avocó a hacer un estudio a favor del Consejo de la Judicatura Federal, para emitir su ejecutoria.



CORTE
A NACIÓN
DE JUDICATURA

La Ejecutoria dictada carece de la debida precisión, convirtiéndola en una sentencia incongruente, faltando la fundamentación y motivación, aplicando e interpretando incorrectamente lo dispuesto en el artículo 115 Constitucional, que fue la parte medular del A Quo, para emitir la misma. Ante esa incongruencia y la indebida aplicación del dispositivo legal mencionado emitió una Ejecutoria (equivalente a una sentencia), a favor del Consejo de la Judicatura Federal, en perjuicio de mi representada "SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D., obligándola a emitir una nueva resolución que declare que el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación está exenta en el pago de las cuotas y tarifas por el servicio de agua potable y drenaje sanitario.

VIOLACIÓN EN PERJUICIO DE MI REPRESENTADA A LA NORMA JURÍDICA CONSTITUCIONAL

I.- Del estudio de la Ejecutoria que se combate por medio de recurso, se deducen las siguientes violaciones, que dejó de aplicar, en lugar de sobreseer el juicio, hechos visibles en la pagina 110 de la ejecutoria de mérito en su parte final dice lo siguiente:

FEDERACIÓN
JO EN MATERIA
CIRCUITO
LEÓN

"En otro aspecto, debe dejarse en claro que del análisis de las disposiciones transcritas en párrafos precedentes, particularmente del Artículo 81 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el Consejo de la Judicatura federal, es el órgano encargado de administrar los bienes del Poder Judicial Federal con excepción de los que les corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que evidentemente se encuentra facultado para acudir en defensa de dichos bienes y gestionar todo lo que se relacione con los mismos, lo que obviamente incluye la facultad de promover el Juicio de Garantías en contra de los actos de autoridad que los afectan, defensa que puede ejercer a través de su Dirección General de asuntos jurídicos, en términos de los acuerdos generales 5/2000, 25/2004 y 46/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobados en sesiones en fecha 8 de febrero del 2000, 21 de abril del 2004, y 14 de julio del 2004, respectivamente."

Del anterior razonamiento expuesto por el Tribunal Colegiado, es de advertirse que en el acuerdo No. 5/2000, de fecha 8 de febrero del mismo año, el Consejo de la Judicatura Federal requería para iniciar los juicios antes mencionados, el acuerdo previo del Pleno de la misma, por lo que los acuerdos Nos. 25/2004 y 46/2004, fueron posteriores a las demandas promovidas por los comparecientes Víctor Manuel Mendicuti y Alejandro Romero Gudiño, en consecuencia dichos funcionarios públicos no tenían atribuciones para demandar o promover los juicios antes mencionados y por lo tanto carecían de legitimación y personería, por lo que era una causa suficiente para que los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Federal desecharan la demanda de amparo directo, por incurrir en una causal de improcedencia prevista en los artículos 4 de la Ley de Amparo y 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria al artículo 2° de la Ley de Amparo.

✓

✓

✓

En consecuencia, dejaron de observar lo contenido en la parte final del artículo 73 de la misma ley, el cual establece que las causales de improcedencia deben ser estudiadas de oficio, por ser de orden público. 13

De lo anterior se deduce que es un hecho notorio que los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa, contra todo derecho y en contra de los principios de impartición imparcial de justicia señalados en el considerando Quinto de la ejecutoria de mérito, le concedieron a favor del Consejo de la Judicatura Federal la protección constitucional en perjuicio de "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D".

II.- Otra violación en la que incurrieron los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, es el hecho que se consigna en el considerando sexto particularmente en su párrafo segundo, es decir la variación de la acción por el Consejo de la Judicatura Federal y por consecuencia se encuentra como una ejecutoria incongruente por la introducción de situaciones particulares no consideradas en las demandas originalmente planteadas consistentes en aspectos de inconstitucionalidad del artículo 9° del acuerdo de tarifa ya mencionada, y para pronta referencia me permito transcribir el párrafo antes mencionado que a la letra dice:

"Cabe hacer la declaración de que, aunque en la demanda de amparo se expresan otros conceptos de violación vinculados con cuestiones de legalidad, algunos por vicios de forma y otros por vicios de fondo que se dicen cometidos al dictarse la sentencia que se reclama, lo cierto es que los aspectos de inconstitucionalidad de las normas en que se funda el acto reclamado, que se plantean en el amparo directo, merecen estudio preferente, ya que de resultar fundados tales argumentos producirán mayores beneficios para la parte quejosa de ahí que se deben reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros (cuestiones de legalidad), en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

La introducción de un nuevo concepto en la demanda de amparo se encuentran influenciados, al hacer los Magistrados el estudio de las constancias del juicio según se desprenden de las fojas números 128 al 141 de la ejecutoria de mérito, los cuales transcriben en su parte medular las reclamaciones planteadas por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que ninguna parte de los mismos se reclamó la inconstitucionalidad del acuerdo de tarifa 1998 (abrogado) y acuerdo tarifa 2003, que en esencia y en especie la acción de nulidad demandada promovida dicho por Consejo fueron por las resoluciones emitidas por el Director General, así como en las contenidas en las facturas. Por lo que al permitir los C. Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito Federal en Materia Administrativa, variaron la acción de garantías en beneficio del Consejo de la Judicatura Federal del mismo órgano del tribunal y variando la acción legal en perjuicio de mi representada, por consecuencia se altera la litis, violentándose los artículos 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Federal, dictando una Ejecutoria incongruente, solicitando desde este momento se supla la deficiencia de la queja en beneficio de mi poderdante.

Ahora bien, en virtud de que los juicios fueron acumulados en la Primera Sala Ordinaria del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados emisores de la ejecutoria, se perdieron al hacer el estudio de fondo, ya que la primera petición fue en contra del acuerdo de tarifa 1998 y en los razonamientos solamente se avocan al acuerdo de tarifa 2003, siendo esto ilegal, es por ello que es uno de los motivos del medio de

(

(

(

100
100
100

defensa plantado en el presente ocurso, solicitando se supla la deficiencia de la queja a favor de mi representada.

Por otra parte, los emisores de la ejecutoria debieron haber sobreseído el juicio de Amparo Directo ya que no constituye para el Consejo de la Judicatura Federal, el primer acto de aplicación, en virtud de que el acuerdo de tarifa 1998, entró en vigor el día 01 de febrero del mismo año, y hasta el año de 2003, promovió el juicio contencioso administrativo, y el juicio de amparo debió resolverse como improcedente, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Por otra parte y en el mismo sentido que el anterior punto, el Consejo de la Judicatura Federal, en cuanto al acuerdo de tarifa 2003, no es el primer acto de aplicación, en virtud de que el mismo entró en vigor el día 27 de febrero del 2003, y la demanda se presentó en el mes de abril del mismo año, por lo que el primer acto de aplicación fue consentido, por ello el amparo era improcedente.

En esa tesitura, resulta que los Magistrados, dejaron de observar los principios establecidos en los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, dictando a favor de dicho Consejo una Ejecutoria favorable, sin importar los perjuicios de mi representada en su patrimonio que son de imposible reparación, solicitando que por medio de este recurso se revoque dicha ejecutoria y se dicte otra decretando el legal y constitucional artículo 9° del acuerdo de tarifa 2003.

III.- Otra violación que le causa agravio a mi presentada es la que se consigna en las páginas 175 a la 182 del Considerando Quinto de la Ejecutoria de mérito, dice lo siguiente:

En las relatadas condiciones, es incuestionable que se demostró que los inmuebles descritos se encuentran destinados a los fines a que se refieren las fracciones I y II del artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales vigente en dos mil dos y dos mil tres, es decir, a la prestación del servicio público federal de impartición de justicia, por lo cual encuadran en el supuesto de exención, previsto en el artículo 115, fracción IV, inciso c), Constitucional.

Así como el servicio público de agua potable y alcantarillado es prestado por el Municipio a favor de un organismo del poder judicial de la federación titular de un inmueble sujeto al régimen de dominio público, como en el caso resulta ser el Consejo de la Judicatura Federal, debe entenderse que se actualiza la exención prevista en la norma constitucional objeto del análisis, considerando que fue el propio legislador quien, al remitir la exención a los incisos a) y c) de la fracción relativa, señaló con toda precisión que la exención no sólo requiría para contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sino también para los servicios prestados por el Municipio. Tal precisión carecería de todo significado y no surtiría por tanto algún efecto, si se estimara que la exención se refiere exclusivamente a los gravámenes que se causan por la propiedad raíz, pues tal criterio no sería aplicable, desde luego, a ninguna contribución generada por la prestación de servicios públicos, en la medida en que su hecho generador no se localiza en el bien raíz sino en la actividad desplegada por la administración.

Siendo clara la remisión de la norma a las contribuciones derivadas de la prestación de servicios públicos, no es dable al intérprete acudir a algún criterio que prácticamente deje sin efectos dicha remisión, sobre todo si se considera que cuando el órgano creador vincula los conceptos de contribuciones derivados de los servicios públicos y bienes de

✓

✓

✓

dominio público, permite comprender que se refiere a aquellos servicios que se prestan con motivo, precisamente, de la titularidad de un bien de dominio público, es decir, que se causan por la Federación, los Estados, o los Municipios, en tanto tales servicios los reciben por su calidad de titulares de dichos bienes.

No se trata, como podría estimarse, de una exención que beneficie a las personas públicas por su sola condición de tales, esto es, por el elemento subjetivo de la relación tributaria, sino que opera cuando esas personas públicas utilizan ciertos bienes que por su destino o naturaleza se hallan incorporadas al régimen excepcional de dominio público, lo cual explica que para tales personas, en lo que se refiere a los tributos que causen en relación con esos bienes, sea por su propiedad, fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o cambio de valores, sea por los servicios públicos que reciban en relación con esos bienes, estén liberados del pago de los tributos destinados a las arcas municipales, por la trascendencia de la función que desempeñan mediante el empleo de esos bienes y su afectación a un fin determinado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 21002/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 247, tomo V, mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. (se transcribe)

ELAFEDDF
OLEGIM
ELAGUA
NUEVOLEON

Sin embargo, el artículo 9° del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de febrero de dos mil tres, que sirvió de fundamento al director de la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para sustentar los actos impugnados en los juicios contenciosos administrativos de origen, ya que la sala responsable para apoyar la resolución que se reclama, desatendiendo esa norma suprema dispone:

"Artículo 9° (se transcribe)

De ello se desprende que, conforme al citado acuerdo del Gobierno del Estado, la Federación se encuentra obligada a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario, sin excepción alguna, según las cuotas y tarifas que le sean aplicables; disposición que contraviene abiertamente el mandato constitucional consagrado en el artículo 115, fracción IV inciso c), acorde al cual los bienes de la Federación, como los destinados por el Poder Judicial de la Federación al servicio público de impartición de la justicia, se encuentran exentos del pago de esas contribuciones.

Así, debe estimarse que le corresponde la razón a la parte quejosa, cuando argumenta que el mencionado acuerdo del Gobierno local resulta inconstitucional, porque al pretenderse que una dependencia federal que opera con bienes inmuebles del dominio público de la Federación, pague los derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado, no obstante que la Carta Magna dispone que estarán exentos de esa obligación, significa que la autoridad estatal fue más allá de sus atribuciones en quebranto

POUR LE...
S...
1000/1000/1000

del régimen fiscal federal especial de exención o, más propiamente, de no causación de contribuciones, que rige a los bienes del dominio público de la Federación. /6

Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación en estudio resultan fundados y suficientes, para acreditar infracción a los dispositivos constitucionales que invoca la quejosa, particularmente al artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución General de la República, que previene, en la parte que interesa en este asunto, que los bienes del dominio público de la Federación están exentos de las contribuciones que se refieran a los ingresos derivados de los servicios que presten los municipios, como lo son los relacionados con el servicio de que agua y drenaje

Por lo tanto, la autoridad responsable debió en todo caso atender el principio de supremacía constitucional que consagra el artículo 133 de la Carta Magna, acorde al cual, la Constitución Federal constituye la ley suprema de toda la Unión, por lo que las autoridades locales de orden jurisdiccional, se arreglarán a la misma a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las normas locales, como en el caso lo es el suscrito acuerdo del Ejecutivo del Estado.

Como corolario, se impone conceder el amparo demandado, para que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, y en su lugar emita otra en la que declare fundados los agravios primero, tercero y cuarto, expresados por la quejosa en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, que se encuentra estrechamente vinculados entre sí y, con base en ello, decreta la nulidad de la resolución expresa que negó la exención solicitada por la demandante, para el efecto de que emita una nueva resolución en la que reconozca que si es procedente dicha exención.

FEDERACION
ADJUNTA MATERIA
RTO CIRCUITO
O LEON

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte Quejosa Consejo de la Judicatura Federal, en contra del acto y por la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y para los efectos indicados en él ultimo considerando de la misma.

NOTIFIQUESE: con testimonio de esta resolución, devuélvase los autos al Juzgado de origen y en su oportunidad archívese el expediente."

El anterior razonamiento de los Magistrados emisores de la ilegal ejecutoria, expresaron que el servicio es prestado por el municipio y que se dan los supuestos del artículo 115 constitucional, en esa tesitura, la interpretación es contraria a la propia constitución, ya que los intérpretes deducen que es inconstitucional el artículo 9° del Acuerdo de Tarifa 2003, y que la quejosa esta exento de las contribuciones, considerándolas la tarifa como contribuciones cuando en la especie no se dan esos supuesto.

Asimismo, los Magistrados, dejaron de observar lo dispuesto en el artículo 40 Constitucional, que establece que los Estados de la republica, son libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, esto quiere decir que están legalmente facultados emitir sus propias leyes y la creación de dependencias y organismos en los términos de lo dispuesto en los artículos 29, 81, 85 fracciones III, V, X, Y XXVIII de la Constitución Local y 1, 2, 5, 8, 9, y 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, por lo que a todas luces es incongruente y la

✓

✓

✓

interpretación aplicada es ilegal, tienen aplicación los siguientes criterios de jurisprudencia que a la letra dicen:

"Novena Época

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO
DEL VIGESIMO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IV, Noviembre de 1996

Tesis: XX.93 K

Página: 414

CONGRUENCIA, SI EL JUZGADOR NO ANALIZA TODAS LAS CUESTIONES PLANTeadas EN LA DEMANDA Y SU CONTESTACION, LA RESOLUCION QUE SE PRONUNCIE CARECE DE. De conformidad con el artículo 81 de la ley adjetiva civil, el juzgador tiene la ineludible obligación de analizar todos los puntos litigiosos que fueron objeto del debate, es decir, lo manifestado tanto en la demanda como en la contestación de la misma, haciendo las declaraciones que pretendieron las partes oportunamente, y así condenar o absolver de acuerdo a lo reclamado, atendiendo desde luego a las probanzas de autos; por tanto, si de las constancias de autos se advierte que dejó de analizar alguna cuestión planteada en la demanda o en la contestación de ésta, tal proceder se traduce en una falta de congruencia que debe mediar entre las resoluciones y las pretensiones deducidas en el pleito.

FEDERACION
ADOEN MATER
TO CIRCUITO
OLEON

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.

Amparo directo 332/96. Angel Suárez Camacho. 10 de julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Noé Gutiérrez Díaz.

Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 21 Cuarta Parte

Página: 57

INTERPRETACION DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.- Para que haya interpretación directa de un precepto de la Constitución, es indispensable que el tribunal sentenciador fije por sí mismo el sentido de una disposición constitucional, determinando su alcance jurídico, pero no la hay cuando se deje de aplicar o se viole una norma de la Constitución, que es cuestión muy distinta a establecer la interpretación directa de un precepto constitucional, que requiere que el juzgador lo examine directamente y determine su alcance jurídico en la forma antes expuesta.

Reclamación 353/69. Miguel González Rul. 2 de septiembre de 1970. Cinco votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas".

Por lo anterior, es de deducirse que la prestación de los servicios públicos de agua potable y drenaje sanitario, a cargo de la Institución Pública Descentralizada "SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY" por lo que no es contrario a la constitución por tal motivo mi representada solicita que sea revocada la Ejecutoria que se combate por

—

—

—

este medio de impugnación, se dicte otra que disponga que el artículo 9° del Acuerdo de tarifa 2003, es constitucional y legal, por lo tanto, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, si esta obligada al pago de las cuotas y tarifas de agua potable y drenaje sanitario, en los términos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, solicitando se supla la deficiencia de la queja a favor de mi poderdante. 018

IV.- Lo ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado, resulta contraria a los principios de justicia que persigue la Constitución Federal a través de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, además de ser arbitraria, porque su decisión fue totalmente parcial al Consejo de la Judicatura Federal y actuó en su beneficio.

Como parte medular del estudio fue lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Federal que en lo conducente establece lo siguiente:

Artículo 115.- (se Transcribe)-----

OR^{ta} Del análisis e interpretación de lo anteriormente transcrito se observa que los municipios
N^o tienen la facultad de administrar libremente su hacienda, la cual se conforma de los
DE rendimientos que produzcan sus bienes y de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas estatales establezcan a su favor, entre estos últimos se encuentran los ingresos derivados de los servicios públicos que los Municipios tengan a su cargo. I+

Además, no es posible que se contemple exención alguna con respecto a los ingresos correspondientes a la hacienda pública municipal, con excepción de aquellos que recauden contribuciones respecto a bienes dominio de la Nación, como es el caso de los inmuebles utilizados por el Poder Judicial.

Debe resaltarse, que de la interpretación literal, armónica y hermenéutica del artículo 115, fracción IV Constitucional, se tiene que la exención que se contempla respecto de los bienes dominio de la Nación, sólo es aplicable por cuanto hace a los ingresos contemplados por las legislaturas estatales para ingresar a la hacienda municipal, pues el precepto constitucional contiene únicamente referencia a la libre administración hacendaria de los Municipios, no así respecto de las contribuciones o ingresos estatales como el impuesto predial u otros impuestos respecto de los cuales no existe la exención de mérito. #

Ahora, entre los ingresos que el precepto constitucional contempla para formar parte de la hacienda municipal, están los impuestos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria, respecto de los cuales el municipio puede celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas funciones administrativas relacionadas con esas contribuciones, no para que el municipio renuncie a su derecho de percibir tales contribuciones; así mismo se contempla, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de los Municipios.

En este último supuesto, es decir, respecto de los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos, no se señala específicamente a cuales servicios públicos se refiere; no obstante resulta claro que se refiere a aquellos que son prestados por el Municipio, no por el Estado o por diversa entidad de derecho público. Esto es así, pues de la lectura íntegra del texto del citado artículo, específicamente en la fracción IV, se advierte que únicamente se refiere a la atribución consignada a los Municipios, no al Estado, o de cualquier otra entidad estatal de administrar libremente su hacienda en

1

2

3

4

cuanto a los ingresos obtenidos entre otros "... de la prestación de servicios públicos a su cargo".

En ese orden de ideas, lo tocante a la exención constitucional prevista respecto a los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, se prevé solamente de los ingresos destinados a integrarse a la hacienda municipal derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo; pues como ya se precisó, de la interpretación realizada al artículo 115 fracción IV Constitucional, se desprende que la exención que el Legislador Federal contempló **NO ABARCA LAS CONTRIBUCIONES QUE EL ESTADO PERCIBA O CUALQUIER OTRA ENTIDAD ESTATAL**, sino solamente las destinadas a favor de los Municipios.

Para determinar con toda prontitud y exactitud de la aplicación del artículo 115 fracción IV inciso c) Constitucional, es necesario tomar en cuenta dos aspectos importantes que son los siguientes:

- a).- Que el cobro de cuotas y tarifas por el servicio público de agua y drenaje esté a cargo del Municipio.
- b).- Que dichas cuotas y tarifas por los mencionados servicios públicos estén destinados a ingresar a la Hacienda Municipal.

Por lo que de acuerdo a la correcta interpretación del artículo 115 Constitucional es necesario que el sentenciador fije el mismo sentido literal de la disposición a aplicar lo que hizo incorrectamente, violentando en perjuicio de mi representada la inexacta aplicación de la norma constitucional. Tiene aplicación el siguiente criterio que a la letra dice:

Séptima Época
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 21 Cuarta Parte
Página: 57

INTERPRETACION DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.- Para que haya interpretación directa de un precepto de la Constitución, es indispensable que el tribunal sentenciador fije por sí mismo el sentido de una disposición constitucional, determinando su alcance jurídico, pero no la hay cuando se deje de aplicar o se viole una norma de la Constitución, que es cuestión muy distinta a establecer la interpretación directa de un precepto constitucional, que requiere que el juzgador lo examine directamente y determine su alcance jurídico en la forma antes expuesta.

Reclamación 353/69. Miguel González Rul. 2 de septiembre de 1970. Cinco votos.
Ponente: Rafael Rojina Villegas.

De lo anterior se colige que los ingresos que percibe mi representada, por concepto de cuotas y tarifas se estarán a lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 9 y 10 de la ley que Crea a la Institución con personalidad jurídica propia y patrimonio propio 2, 15, 29, 40 inciso a) y 41 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, no constituyen impuestos contribuciones o derechos.

Como se ve, con el objeto de que sean prestados los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y

1

2

3

drenajes sanitario y pluvial, la legislatura estatal creó a la Institución Pública Descentralizada denominada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", con personalidad jurídica propia y patrimonio propio independiente a la del Estado o de los Municipios y su patrimonio comprende entre otros bienes, las cuotas y tarifas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje, además de lo anterior, los bienes que integran el patrimonio de mi representada están afectos a los fines de la misma.

En ese orden de ideas, se encuentra debidamente acreditado que las cuotas y tarifas por la prestación de los servicios públicos que presta mi representada a los habitantes del Estado de Nuevo León, no tienen la naturaleza de derechos, impuestos o contribuciones, por que su regulación no se encuentran establecidas en las leyes fiscales estatales, sino son establecidas por el Ejecutivo del Estado a propuesta del Consejo de Administración, por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Federal esta obligado al pago de las mismas, aunado a que el servicio público no lo presta el Municipio, sino un organismo público descentralizado estatal, por tal motivo no se da los supuestos expresamente señalados en el artículo 115 Constitucional. A mayor abundamiento el Código Tributario Federal en su artículo 2 fracción IV, establece que no se consideran derechos cuando los servicios son prestados por organismos descentralizados. lo anterior, viene a reforzar el criterio sustentado en el cuerpo de este escrito, por lo que es incorrecta la interpretación que se le da al artículo 115 constitucional, por parte de la emisora de la Ejecutoria, en virtud de que el servicio público de agua potable en el Estado de Nuevo León es prestado por un Organismo Público Descentralizado Estatal y sus cobros no tienen la naturaleza de derechos.

Por las consideraciones expuestas en el presente libelo, resultan por demás inaplicables los criterios sustentados por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, por que no se da los supuestos de hecho y de derecho al caso concreto respecto al régimen jurídico normativo Estatal

Cabe hacer mención que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió dos expedientes con los números 1770/99, promovido por Celulosa y Derivados, S. A. de C. V., y 138/2000, promovido por Papelera Maldonado, S.A. de C. V., en la que determinó que las cuotas y tarifas son legales y constitucionales y para los efectos de la legislación se consideran aprovechamientos y no tienen la naturaleza de derechos, en virtud de que no se dan los supuestos del precitado artículo 115 constitucional, y por lo tanto al Consejo de la Judicatura Federal no le corresponde solicitar la inconstitucionalidad, sino que esta acción le correspondería al Municipio, por tal motivo carece de legitimación.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito en nombre de mi representada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., que con el presente recurso de revisión se revoque la Ejecutoria dictada y se dicte otra que declare la Constitucionalidad del artículo 9 del Acuerdo de Tarifa 2003, Expedido por el Ejecutivo del Estado en fecha 26 de febrero del 2003 y su fe de erratas de fecha 27 del mismo mes y año y por consiguiente, dicte una nueva Ejecutoria en la que declare que el Consejo de la Judicatura Federal si esta obligada al pago de las cuotas y tarifas por el Servicio público de agua potable y drenaje sanitario.

Por lo anteriormente expuesto y fundado de esa H. Suprema Corte de justicia de la Nación, atentamente solicito:

DERACION
EN MATERIA
DE RECURSO
DE REVISION

1

2

3

PRIMERO.- Se tenga a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., por mi conducto promoviendo Recurso de Revisión en tiempo y forma.

SEGUNDO.- Se admita a tramite y una vez hecho el estudio de las violaciones en que incurrieron los Magistrados del Tribunal de mérito, revoque la misma y se dicte otra que declare la Constitucionalidad y legalidad del precitado artículo 9 del acuerdo de tarifa 2003.

Monterrey, Nuevo León a 14 de junio de 2005

COPIA DE
LA FOLIA
DE ACUERDO

Alfredo de Guadalupe Martínez Garza
LIC. ALFREDO DE GUADALUPE MARTÍNEZ GARZA
APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

ESTUDIO DE LA VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
EN MATERIA DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE

2005 JUN 14 P 1:12

EDERACION
OEN MAT
CIRCUITO

SECCION DE CIRCUITO
DE MONTERREY

Recibi el presente escrito
en 14 fojas con 5 copias -
del mismo, escrito de pre-
sentación en 2 fojas con
5 copias del mismo, copia
certificada de escritura
pública en 4 fojas con 5
copias del mismo.
consta

3513

SIN TEXTO



SUPREMA C
JUSTICIA DE I
SECRETARIA GENERAL



PODER JUDICIAL
SUPLENTE
SECCION



PODER JUDICIAL DE L
SEGUNDO TRIBUNAL COLEC
ADMINISTRATIVA DEL CO
MONTERREY N.L.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ, SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HACE CONSTAR Y, -----

-----CERTIFICA-----:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE DIECISÉIS FOJAS ÚTILES, CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL, LA CUAL FUE TOMADA DEL EXPEDIENTE DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 1070/2005, Y SE EXPIDE EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE PRESIDENCIA DE ESTA MISMA FECHA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES. DOY FE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

A large, bold, handwritten signature in black ink, which appears to be "Mario", written over the printed name of the official.

✓

✓

✓

SEGUNDA SALA
AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN
1070/2005.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

En veintiocho de junio del año dos mil cinco, el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala da cuenta a su Presidente **con el oficio número 77122**, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, recibido en la Secretaría de Acuerdos de esta Segunda Sala el veintitrés del mes en curso, con anexos y **se hace constar que el recurso de revisión fue presentado el catorce del mes en curso. Conste.**

México, Distrito Federal, a veintiocho de junio del año dos mil cinco.

Visto el oficio de cuenta número 77122, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, al que acompaña copia certificada del proveído dictado por el Presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en este asunto, el veintidós del mes en curso, en el que se declaró que el Tribunal Pleno no es legalmente competente para conocer del **recurso de revisión interpuesto por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado general**, parte tercero perjudicado en el juicio de amparo directo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en contra de la resolución dictada por dicho Órgano Colegiado el primero de abril último, en el citado juicio de amparo directo, **en la cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y asimismo se decidió sobre la constitucionalidad del "artículo 9º. del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y**

Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de febrero de dos mil tres". Acútese recibo.

Previa copia certificada que al efecto se deje en el referido amparo directo, **desglóse el recurso de revisión de mérito y su copia simple, la cual contiene el sello de presentación de dicho recurso y agréguese a este toca.**

Ahora bien, como el señalado recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma legales, con fundamento en los artículos 29, fracción II, 83, fracción V, 84, fracción II, 86 y 90, de la Ley de Amparo, 21, fracción III, inciso a) y 25, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto primero, fracción I, inciso a), punto segundo, fracciones I y II y primero transitorio del Acuerdo 5/1999, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, **se admite el recurso de revisión de referencia**, sin perjuicio, del análisis que posteriormente se haga para determinar si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

consistente en que la resolución que al efecto deba dictarse
entrañe la fijación de un criterio de importancia y
trascendencia.

Dése a conocer el presente acuerdo al
Procurador General de la República por el término de
diez días con copia del oficio de agravios, para que si así
lo considera, por conducto del Agente del Ministerio Público
Federal adscrito emita el pedimento correspondiente.

Téngase como delegados en términos del artículo 19
de la Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el
oficio de agravios. Notifíquese y cúmplase.

Lo acordó y firma el señor Ministro Juan Díaz Romero,
Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que
autoriza y da fe.

RGH/met.

EN 01 JUL. 2005 SE FIJO LISTA PARA NOTIFICAR
A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR, CONSTE

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION
POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.

En esta misma fecha se giraron los oficios números E-247/2005
al E-249/2005, para notificar el auto que antecede al Subsecretario
General de Acuerdos de este Alto Tribunal, al Presidente del Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y al
Ministerio Público Federal adscrito. Conste.

concederle en que se le otorga el beneficio de la ley de amnistía y
rehabilitación de los reos de la ley de amnistía y rehabilitación y

Después de conocer el presente acuerdo el
Procurador General de la República no el ha de

concederle en que se le otorga el beneficio de la ley de amnistía y
rehabilitación de los reos de la ley de amnistía y rehabilitación y

Después de conocer el presente acuerdo el
Procurador General de la República no el ha de

concederle en que se le otorga el beneficio de la ley de amnistía y
rehabilitación de los reos de la ley de amnistía y rehabilitación y

Después de conocer el presente acuerdo el
Procurador General de la República no el ha de

SIN TEXTO

EM 01 JUL. 2005 SE FUE LISTA PARA NOTIFICAR
A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR CONSTE

SE HAN HECHO LAS NOTIFICACIONES DE LA LEY DE AMNISTIA Y REHABILITACION
Y EN VISTAS DE LO HACER COMPARANDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA Dicha NOTIFICACION
POR MEDIO DE LISTA NOT RE

SE HAN HECHO LAS NOTIFICACIONES DE LA LEY DE AMNISTIA Y REHABILITACION
Y EN VISTAS DE LO HACER COMPARANDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA Dicha NOTIFICACION
POR MEDIO DE LISTA NOT RE

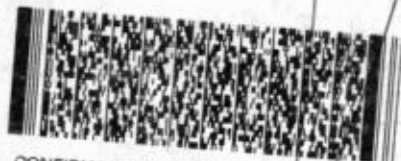


41

estateta

Hamburg 213 piso 14 Col. Juárez C.P. 06600 México, D.F.
Tel 5-270-8300 R.F.C. EMER80309SKS Tipo 0026

Condiciones del contrato del envío especificadas en la factura



CONFIRMACION

20151QT070-556500575342



CONFIRMACION

20151QT070-556500575342

Remision 556005626

01 KG

MGDO. SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE
PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMVA.
DEL CUARTO CIRCUITO.
DIAGONAL SANTA ENGRACIA 221
FRACC. LOMAS DE SAN FRANCISCO
MONTERREY, N. L. C.P. 64710.

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PINO SUÁREZ NÚM. 2 PUERTA 3039
MÉXICO, D.F. C.P. 06065.

SRIA. DE ACUERDOS.

OF. 9179 se anexan tres expedientes
251/2003, relativo al recurso de revisión 51/2003, así
como el relativo al juicio contencioso administrativo
51/2003 y original de agravios.

Dto 328/2004.

Exp. 251/2003.

41

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
129 JUN 2005
OFICINA DE CERTIFICACION JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

CARTA PORTE

REMITENTE

17

DESPRENDER AQUÍ

SUPREMA
JUSTICIA
SECRETARIA



UPREMA C
USTICIA DE I
SECRETARIA





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

AMPARO DIRECTO 328/2004
REF. AL EXP. 251/2003

9174 SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO.

9175 GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

9176 SUBPROCURADOR JURÍDICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

9177 DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DENOMINADA AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY.

9178 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

9179 SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

EN EL AMPARO DIRECTO 328/2004, SE DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

AMPARO DIRECTO
328/2004

Monterrey, Nuevo León, a veintisiete de junio de dos mil cinco.

Vista la cuenta que antecede; téngase por recibido el oficio Q-1031/2005 que remite el magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, mediante el que en atención al oficio 9004 de este Tribunal, acompaña el expediente relativo al juicio de nulidad 251/2003, el relativo al recurso de revisión 51/2003, así como el relativo al juicio contencioso administrativo 51/2003; al efecto, téngase a dicha autoridad dando cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil cinco, y remítanse los citados expedientes en alcance al oficio 8017, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que esté en condiciones de substanciar el recurso de revisión interpuesto por la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Por otra parte, y como José Natividad González Parás, gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, quien tiene el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio de garantías, interpone recurso de revisión en contra de la ejecutoria pronunciada por este Tribunal, de uno de abril de dos mil cinco, dentro del juicio de amparo directo número 328/2004; con apoyo en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 84, fracción II, 86, 88 y 89, párrafos primero y cuarto de la Ley de Amparo, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, agréguese a los autos copia del recurso de revisión, y remítase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el escrito original que lo contiene, con copia del mismo para el fiscal federal correspondiente, el disquete de la sentencia respectiva y el expediente en cuestión, para lo que tenga a bien acordar.

Así mismo, con fundamento en el artículo 89, último párrafo de la Ley de Amparo, lo conducente es hacer constar en este proveído, así como en el oficio de remisión de este asunto al máximo Tribunal, que la resolución que se recurre contiene la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la aplicación del artículo 9 del decreto expedido por el gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cinco.

De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, téngase como delegados designados por la autoridad tercero perjudicada a los profesionistas que se señalan en su escrito de agravios.

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
DE ACUERDOS

Pública Gubernamental y artículo 19, párrafo segundo, del Acuerdo General 30/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado este último, en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil tres; **dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de aprobación expresa conlleva su oposición.**

Notifíquese a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y al agente del ministerio público adscrito acompañándoles copia del escrito de expresión de agravios.

Así lo acordó y firma el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, licenciado Sergio Eduardo Alvarado Puente, ante la secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe. FIRMAS.-LO QUE ME PERMITO COMUNICARLE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE SE CONTRAE EL PROVEIDO INSERTO.- PROTESTO A USTED MI ATENTA CONSIDERACION.

Monterrey, Nuevo León a 27 de junio de 2005

EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

LIC. ALEJANDRO ULISES LEÓN RODRÍGUEZ

014616

2005 JUN 29 AM 11:52

2005 JUN 29 P 12:44

Recibido de esta fe tu guía
2051ATD70 - 556500 575342 con
- Escrito Original de Agravios
en (125) Fojas
- T. 251/2002 en (98) Fojas
Según su último folio.
- J.N. OSI/2003 en (195) Fojas
Según su último folio
- J.N. 251/2003 en (259) Fojas
Según su último folio; con
el Sobre que se agrega

Julio A. Reyes M.





GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

CORTE DE
LA NACIÓN
DE JUSTICIA

JUICIO DE AMPARO DIRECTO No. 328/2004-III
QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIO No. 2395/2005 No. INTERNO 51/2003
ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN.

Monterrey, N. L., Junio 25 de 2005.

**H. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO
P R E S E N T E.**

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y autoridad señalada como tercero perjudicado dentro del juicio de amparo que al rubro se indica; respetuosamente comparezco a expresar lo siguiente:

Con fundamento en lo establecido en los artículos 107 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 82, 83 fracción V, 84 fracción II, 86 y 88 de la Ley de Amparo, por su digno conducto interpongo **RECURSO DE REVISIÓN** en contra de la resolución constitucional dictada por ese H. Tribunal, por mayoría de votos (no por unanimidad), en el juicio de amparo de referencia, aclaración hecha de que en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del último de los preceptos citados, a medida que se expresen los respectivos agravios quedará transcrita en su totalidad (pero en diversos fragmentos según sea conducente por razón de metodología) la parte de la sentencia recurrida que contiene tanto la calificación de inconstitucionalidad del acuerdo emitido por la autoridad ahora a mi cargo, como la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

En tal virtud, atentamente solicito, con fundamento en el artículo 89 de la ley invocada, sean remitidos este escrito de agravios y el expediente original del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en dicho dispositivo.

Esta impugnación está motivada por la causación de los agravios que a continuación se detallan.

A A



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

AGRAVIOS

PRIMERO. En el quinto considerando de la sentencia ahora recurrida se vertieron los argumentos que a continuación se transcriben:

QUINTO.- Como una cuestión previa al estudio de los conceptos de violación, se estima oportuno aludir a la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal, parte quejosa en el juicio de garantías, a fin de dejar en claro que desde el punto de vista jurisdiccional, e incluso en el orden administrativo interno, no existe relación de dependencia entre este tribunal colegiado y ese órgano técnico-administrativo, que impida resolver con imparcialidad el asunto que nos ocupa, tal como se deduce de los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero, segundo y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 81, fracciones II y XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que expresamente disponen:

"Art. 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes."

Art. 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones.

(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999)

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

(...)

(REFORMADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 1999)

Los Consejeros no representan a Quien los designa por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución."

"ARTICULO 68. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de

0

1

2



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley.

El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este último."

"ARTICULO 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:

(...)

II. Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la Federación, y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones en términos del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

(...)

XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia;

(...)"

De tales preceptos se desprende que el Consejo de la Judicatura Federal es un organismo con independencia técnica de gestión, del Poder Judicial de la Federación, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, pero no es un órgano de naturaleza jurisdiccional, sino meramente administrativo encargado de las labores señaladas; de ahí que, en el ámbito jurisdiccional, e incluso en el orden administrativo interno de cada órgano judicial, los magistrados de Circuito, así como los jueces de Distrito, cuentan con autonomía e independencia respecto de dicho organismo, pues en tal aspecto conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos, además de que mantienen intactas sus atribuciones para dirigir el órgano jurisdiccional en su aspecto administrativo interior.

En lo conducente resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia por Contradicción número P./J. 25/2004, del Pleno del Máximo Tribunal de la República, publicada en la página 5, tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente:

ORTEGOA CONTRA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. Los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer y penúltimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado

(

(

(



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y cuenta independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones las cuales serán definitivas e inatacables, por lo que no procede juicio ni recurso alguno en su contra. Esa regla sólo admite las excepciones expresamente consignadas en el indicado penúltimo párrafo del artículo 100 constitucional, relativas a la designación, adscripción, modificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las que podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el recurso de revisión administrativa, únicamente para verificar que se hayan emitido de conformidad con las "disposiciones legales aplicables. Atento a lo anterior, resulta indudable que contra los actos y resoluciones emitidos por el citado consejo no procede el juicio de garantías, aun cuando éste se intente por un particular ajeno al Poder Judicial de la Federación, lo cual no pugna con la garantía de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, pues ésta no es absoluta e irrestricta y, por ende, no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador y menos aún de los previstos por el Constituyente Permanente."

También cobra aplicación, en la parte relativa, la tesis aislada número 1a. XVI/2004, sustentada por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, consultable en la página 300, tomo XIX, marzo de 2004, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS ACTOS QUE EMITA Y TRASCIENDAN A LA ESFERA JURÍDICA DE LOS GOBERNADOS FUERA DEL ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SON SUSCEPTIBLES DE IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. De ahí que se dotara al citado consejo de diversas atribuciones relacionadas con la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial pero, se insiste, en el ámbito administrativo de ese Poder de la Unión, otorgándosele a sus resoluciones las características de definitivas e inatacables, salvo respecto a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, conforme lo dispone el párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues estas resoluciones podrán ser revisadas por el Máximo Tribunal de la República únicamente para verificar que se hayan adoptado conforme a las normas que establece la ley orgánica del poder judicial de la federación. No obstante lo anterior, la expresión enunciativa contenida en el citado precepto constitucional no debe interpretarse literalmente, en el sentido de que el principio de inimpugnabilidad rija de manera absoluta en todas y cada uno de los actos desarrolle el consejo, porque se dejaría en estado de indefensión a los particulares que no guardan relación alguna con

(

(

(



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON**
PODER EJECUTIVO

aquel, pero que pudieran resultar afectados en su esfera jurídica con motivo de alguna resolución emitida por dicho ente. En atención a lo antes expuesto, es indudable que tratándose de los mencionados actos del Consejo de la Judicatura Federal que trascienden a la esfera jurídica de los gobernados estos se convierten en actos de autoridad y, por ende, son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, máxime que la intención del Constituyente Permanente que consta en la exposición de motivos no fue que el mencionado órgano tuviera un rango igual o superior al de la Suprema Corte de Justicia, sino que fuera un órgano de carácter eminentemente administrativo."

Así como la tesis aislada número P.XLII/2000, del propio Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 88, tomo XI, marzo de 2000, Novena Epoca, del citado semanario, que a la letra señala:

"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO PUEDE, SIN MENOSCATO DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES, EXAMINAR EL APEGO A LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. Para cumplir con las funciones en materia de disciplina al resolver sobre la responsabilidad administrativa de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, el Consejo de la Judicatura Federal puede analizar la correcta aplicación del derecho en las consideraciones expresadas al emitir sus decisiones, siendo que en el caso específico de remoción, la resolución respectiva debe ser aprobada por mayoría de cinco votos, situación que garantiza un suficiente consenso en cuanto a la determinación de responsabilidad, grave de esos funcionarios. Asimismo, cabe destacar que como la única finalidad de esta revisión consiste en determinar si la actuación de los juzgadores se apegó a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben caracterizar su actividad, no es susceptible de modificar las situaciones jurídicas derivadas de las resoluciones judiciales, por no tratarse de un recurso o medio de defensa, debiendo referirse a aquellas actuaciones que constituyan una desviación de la legalidad que no sea una cuestión de criterio o arbitrio debatible u opinable, en la que puedan sustentarse válidamente diversas situaciones, sino que deriven de datos subjetivo, como serían un evidente error o descuido por haberse emitido en clara contravención al texto expreso de la ley aplicable o por ignorar constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto, lo cual no atenta contra la autonomía e independencia con que deben contar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones, pues estos conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos, los que deben ser apegados a derecho."



ORTE
NA
DE ACUERDO

A



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

Los rasgos de independencia y autonomía con que cuentan magistrados y jueces respecto del Consejo de la Judicatura Federal, se corroboran si se tiene en consideración que el artículo 17 constitucional atribuye a los tribunales la función jurisdiccional, y que el término "jurisdicción" tiene las siguientes acepciones: a).- Como ámbito territorial; b).- Como sinónimo de competencia; c).- Como conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del poder público; d).- En su sentido preciso y técnico, de función pública de hacer justicia ("fundamentos del Derecho Procesal Civil", de Eduardo J. Couture, tercera edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1990).

Además, entre los elementos formales del acto jurisdiccional, que derivan del propio artículo 17 constitucional, están los gobernados y administrados, traducidos como las partes en el juicio, actor, demandado y eventualmente terceros interesados, y, claro está, los jueces o administradores de justicia designados por el estado para ejercer la función jurisdiccional.

Bajo esa óptica, se concluye que la administración de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal, no sólo se refiere a la función formalmente jurisdiccional desplegada por el juzgador, sino también implica la administración del órgano bajo su dirección; esto es, los jueces y los magistrados están facultados para dictar todas aquellas medidas de carácter administrativo que estimen convenientes, a efecto de organizar, coordinar y supervisar el funcionamiento de los tribunales a su cargo, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional, en el sentido de que la administración de justicia sea pronta, completa e imparcial.

AL DE ACUERDO

Así, la administración de la Justicia Federal, en sus dos aspectos señalados (jurisdicción y administración interna), es exclusivamente responsabilidad del juzgador, pues para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 constitucional, en el ejercicio de su encomienda, debe, no sólo resolver, dirigir y distribuir las tareas del órgano jurisdiccional y supervisar que éstas se realicen, sino también en cuanto administrador de su tribunal debe de hacerse llegar de los requerimientos materiales y humanos que estime necesarios para desahogar las cargas de trabajo existentes, y para ello actúa con autonomía e independencia.

En tales términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión administrativa número 11/97, en sesión de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, de cuyas consideraciones se desprende, en lo que interesa, lo que enseguida se transcribe:

"OCTAVO. El agravio referido en el numeral 2, debe estimarse infundado por las/siguientes consideraciones:

A



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

En primer término se considera pertinente establecer qué son los Juzgados de Distrito. El artículo 94, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Federal, establecen:

"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal.

"La competencia de la Suprema Corte su funcionamiento en pleno y salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral ... se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece."

En cuanto a la competencia de los tribunales federales, la propia Carta Magna en sus artículos 103 y 107, confieren a éstos la atribución de conocer del medio de control constitucional denominado juicio de amparo, al disponer:

"Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;

"II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

DE ACUERDO. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. "

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... "

La misma Constitución Federal en su artículo 104, confiere también la atribución a los tribunales federales para conocer de:

"I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo, afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado;

"I-B. ...

"II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

"III. De aquellas en que la Federación fuese parte;

"IV. ...

4

(

)

(



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

**"V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y
"VI. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular. "**

Por su parte, el artículo 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece la atribución del Ministerio Público de la Federación, de perseguir ante los tribunales federales, de todos los delitos del orden federal.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación, conforme a lo establecido en la ley fundamental, dispone:

"Artículo 1º. El Poder Judicial de la Federación se ejerce por:

"...

"IV. Los Juzgados de Distrito ... "

"Artículo 48. Los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente capítulo. "

"Artículo 50. Los Jueces Federales Penales conocerán: ... "

"Artículo 51. Los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán: ... " "Artículo 52. Los Jueces de Distrito Materia Administrativa conocerán: ... "

"Artículo 53. Los Jueces de Distrito Civiles Federales conocerán: ... "

"Artículo 54. Los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil conocerán: ... "

"Artículo 55. Los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo conocerán:

DE ACUERDO

Como se colige los Juzgados de Distrito son los tribunales jurisdiccionales unipersonales establecidos en la Constitución Federal que forman parte del Poder Judicial Federal y que conocen en primera instancia de aquellos asuntos del orden federal que les han sido encomendados por la propia Ley Suprema y, se podría decir, que son los órganos jurisdiccionales federales de rango jerárquico inferior, en los que se ha depositado el ejercicio del Poder Judicial de la Federación.

Pues bien, establecido lo anterior, cabe señalar enseguida la forma en que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, integra para su funcionamiento a los Juzgados de Distrito.

"Artículo 42. Los Juzgados de Distrito se compondrán de un Juez y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. "

"Artículo 43. Cuando un Juez de Distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente.

"En las ausencias del Juez de Distrito superiores a quince días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia. Entre tanto se hace la designación o autoriza al secretario, este último se encargará del despacho del juzgado en los términos del párrafo anterior sin resolver en definitiva."

De los preceptos anteriores se desprende que el sustrato físico de los Juzgados de Distrito, comprende al personal juzgador y al personal no juzgador, esto es, al juez que es el juzgador y a secretarios, actuarios y demás personal de apoyo al juzgador, que son el personal no juzgador.

Se dice personal juzgador y personal no juzgador, si se tienen en consideración las acepciones de los siguientes términos:

El Diccionario de la Real Academia Española dice:

Juez. Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. -

- Juez ad quem. Juez ante quien se interpone la apelación de otro inferior. - - Juez a quo. Juez de quien se apela ante el superior. - Juez

de primera instancia y de instrucción. El ordinario de un partido o Distrito, que conoce en primera instancia de los asuntos civiles no cometidos por la ley a los Jueces municipales, y en materia criminal dirige la instrucción de los sumarios. - Juez ordinario. El que en primera instancia conoce de las causas y pleitos.

Juzgar. Deliberar, quien tiene autoridad para ello, acerca de la culpabilidad de alguno, o de la razón que le asiste en cualquier asunto, y sentenciar lo procedente.

Secretario. Dícese de la persona a quien se comunica algún secreto para que lo calle. Persona encargada de escribir la correspondencia, extender las actas, etc., en una oficina, asamblea o corporación. La que redacta la correspondencia de la persona a quien sirve para este fin. En algunos países, ministro, jefe de los departamentos del Estado. Amanuense. Escribano.

Actuario. Auxiliar judicial que da fe en los autos procesales.

Tribunal. Lugar destinado a los Jueces para administrar justicia.

Por su parte el "Diccionario Razonado de Legislación Civil, Penal, Comercial y Forense", de Joaquín Escriche con citas del derecho, notas y adiciones del licenciado Juan Rodríguez de San Miguel, UNAM, 1996, dice:

Juez. La persona puesta por una autoridad pública para administrar justicia; o el que tiene jurisdicción para decidir los pleitos civiles o criminales.

Autenticar. Autorizar o legalizar jurídicamente alguna cosa o poner a un instrumento la atestación de los Magistrados y el sello público para su mayor firmeza.

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

Escribano. El oficial o secretario público destinado a redactar cuanto pasa en el juicio y autorizar las escrituras de los actos y contratos que se celebran entre los particulares.

Actuario. El escribano o notario ante quien pasan los autos.

Tribunal. El lugar o sitio destinado a los Jueces para la administración de la justicia y pronunciación de las sentencias.

Por su parte, Eduardo J. Couture, en su libro "Vocabulario Jurídico", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1983, dice:

Juez. Magistrado integrante del Poder Judicial, investido de la autoridad oficial requerida para desempeñar la función jurisdiccional y obligado al cumplimiento de los deberes propios de la misma, bajo la responsabilidad que establecen la Constitución y las leyes.

Etimología. Del latín iudex, licis, "Juez"; propiamente "el que indica o dice el derecho". Esta palabra proviene de un arcaico: iou-dek-s, compuesto de iou= ius "derecho" y deik- que es una raíz indoeuropea que significa "mostrar" o "decir".

Tribunal. Órgano del Poder Judicial, unipersonal o colegiado, investido de la función jurisdiccional. Edificio en el cual tiene su sede un órgano unipersonal o colegiado, integrante del Poder Judicial.

Etimología. Del latín tribunal, -is, neutro sustantivo del adjetivo tribunalis, e- "relativo o perteneciente a los tributos". Es un derivado de tribunus, -i "tribuno, Magistrado de la tribu", y éste de tribus, -us "tribu".

El tribunal era al principio el lugar donde actuaban los tribunos, más tarde los diversos Magistrados, principalmente los Jueces. Finalmente se llamó así, por metonimia, el conjunto de los Jueces actuantes.

Secretario. Actuario. Funcionario permanente de los tribunales de apelación y de la Suprema Corte de Justicia, a quien incumbe refrendar las resoluciones y documentos de la corporación, llevar las actas de sus deliberaciones, ordenar y custodiar los expedientes y cumplir con los demás cometidos que la ley le asigna.

Etimología. Del latín medioeval secretarius, -ia, -ium "confidente, depositario de secretos" (adjetivo), derivado de secretum, -i "secreto".

Actuario. Funcionario judicial a quien la ley asigna el cometido de actuar como secretario del Juez, refrendar y autenticar las actuaciones, comunicar las resoluciones del proceso y ejercer la jefatura inmediata de la oficina judicial.

Etimología. Voz oculta del siglo XIX, que aparece primero en inglés actuary, de donde lo toma el francés actuair y de ahí al castellano, el italiano, etc. Fue tomada del latín actuarius, -ii "actuario, notario", nombre que se daba al funcionario encargado de escribir las actas.

Juzgado. Tribunal. Órgano integrante del Poder Judicial. Locución utilizada por los Jueces para referirse a sí mismos en la redacción de sus sentencias.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

Sede o local que ocupa la oficina de un tribunal determinado. Decidido, fallado, resuelto.

Etimología. Del latín iudicatus, -us que propiamente significaba "oficio o calidad de Juez" o "judicatura". Es derivado de iudex, ícis "Juez". Durante los siglos IX y X, se llamaba en España "Jueces" a los gobernadores locales y "juzgados" los territorios dominados por ellos, así como los lugares donde ellos tenían su sede. De la contaminación de estas dos acepciones surgió probablemente el significado actual de esta palabra, que no es un derivado del verbo juzgar.

Por último, el Diccionario Jurídico de Espasa Calpe, Madrid-1991, dice: Jueces. Son los funcionarios que integran el personal juzgador que, junto con el no juzgador, constituyen el sustrato físico de los órganos jurisdiccionales. En sentido amplio, Jueces son las personas encargadas de estudiar y decidir si procede o no, en derecho dispensar las tutelas jurídicas que los sujetos solicitan mediante el proceso. A la hora de juzgar, los Jueces sólo están sometidos al imperio de la ley y el derecho, lo que significa que para determinar si se otorga o no la tutela pedida, deben proceder ateniéndose a las normas del derecho objetivo. Asimismo, son responsables en el ejercicio de su función, pudiendo incurrir, en determinados casos, en responsabilidad disciplinaria, civil y penal.

De lo anterior bien se puede sostener que Juez de Distrito es la persona encargada de un tribunal federal de carácter unipersonal, que se encuentra investida de la autoridad para desempeñar la función jurisdiccional, esto es, de juzgar y sentenciar los asuntos del orden federal que le atribuye la Constitución Federal y las leyes, y en esa medida al ser el administrador de la Justicia Federal, está obligado al cumplimiento de los deberes que le atribuyen las mismas, bajo la responsabilidad que en su ejercicio pudiera incurrir.

Por otra parte, los secretarios y actuarios de los Juzgados de Distrito, son aquellos auxiliares judiciales de carácter técnico, que redactan, autorizan o legalizan las actuaciones del juzgador, ordenan, custodian los expedientes y en fin deben cumplir con los cometidos que las leyes les asignen.

Como se colige, pues, la función jurisdiccional o de administración de la Justicia Federal, en los Juzgados de Distrito está encomendada a los juzgadores, esto es, a los titulares de dichos órganos y no a los secretarios, actuarios o personal de apoyo administrativo, que deben estimarse únicamente como auxiliares de aquél.

La anterior conclusión se corrobora si además se tiene en consideración:

A) Que el artículo 17 de la Constitución Federal atribuye a los tribunales la función jurisdiccional el término "tribunal" de acuerdo a las acepciones antes mencionadas, se encuentra referido al lugar en que tiene su sede un órgano ya unipersonal o colegiado, integrante

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

del Poder Judicial, encargado de administrar justicia y pronunciar sus sentencias.

B) Que el término "jurisdicción" según el libro "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", de Eduardo J. Couture, tercera edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires 1990, tiene las siguientes acepciones: como ámbito territorial; como sinónimo de competencia; como conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del poder público; y en su sentido preciso y técnico de función pública de hacer justicia.

C) Por último, debe señalarse elementos formales del acto jurisdiccional que derivan del propio artículo 17 constitucional, están los gobernados o administrados, traducidos como las partes en el juicio, actor, demandado y eventualmente terceros interesados y claro esta, los jueces o administradores de justicia designados por el Estado para ejercer la función jurisdiccional.

Bajo esta misma tesitura debe decirse que la administración de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal, no sólo refiere a la función propiamente jurisdiccional desplegada por el juzgador, sino también implica administración de su tribunal y por ello, el administrador, esto es, el Juez, debe dictar todas aquellas medidas de carácter administrativo que estime convenientes, a efecto de organizar, coordinar y supervisar el funcionamiento del mismo, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional, en el sentido de que la administración de justicia sea pronta, completa e imparcial; y como apoyo al correcto ejercicio de las obligaciones de carácter administrativo, el Acuerdo Plenario 7/89, punto primero quinto y décimo quinto, vigentes en el momento de las irregularidades detectadas en la segunda visita de inspección, dotaban al Juez de Distrito de atribuciones para imponer sanciones disciplinarias y para suspender en sus funciones a los funcionarios judiciales y los artículos 13, fracción X, en relación con los artículos 12, fracciones VII, XXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente hasta el día veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la atribución para hacer llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requerimientos materiales y humanos del tribunal.

Así, la administración de la Justicia Federal, en sus dos aspectos es exclusivamente responsabilidad del titular del órgano jurisdiccional. Quien en el ejercicio de su encomienda, debe, no sólo distribuir las tareas, del órgano jurisdiccional en su personal de apoyo técnico y administrativo, sino también, coordinar y supervisar que éstos las realicen, de tal manera que el administrador del tribunal, esté en aptitud, en caso de incumplimiento por parte de estos últimos, entonces sí, por cuanto al incumplimiento de las tareas encomendadas aplicar los correctivos y medidas disciplinarias procedentes.

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

En consecuencia de lo anterior, si al titular de un Juzgado de Distrito es a quien se le atribuye la función jurisdiccional como encargado de administrar justicia, en sus dos aspectos, y en el ejercicio de su función debe someterse a los dispositivos constitucionales y legales aplicables, es claro, que la inobservancia

a éstos acarrea responsabilidad para el mismo y si bien para sustanciar los asuntos que son sometidos a su conocimiento debe apoyarse en los auxiliares judiciales, como los son los secretarios, actuarios y demás personal administrativo, su función jurisdiccional propiamente dicha, no la puede delegar en éstos y, por tanto, tampoco la responsabilidad, salvo aquellos casos expresamente establecidos en los artículos 43, de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 57, de la anterior, que refieren a las ausencias accidentales o temporales del Juez de Distrito, en que un secretario puede, en el primer supuesto, dictar las providencias de trámite, resoluciones de carácter urgente y, en el segundo supuesto, sustituir de manera completa al titular del juzgado, en cuyo caso asume las responsabilidades y prerrogativas inherentes al cargo.

Cabe citar al respecto las tesis CXXII/95 y CXLIII/97, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas, respectivamente, en las páginas 226 y 202, Tomos II y VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a los meses de diciembre y octubre de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y siete, que dicen:

"JUEZ DE DISTRITO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR AUSENCIA DE AQUEL, CARECE DE FACULTADES PARA RESOLVER EN DEFINITIVA, SI NO CUENTA PARA ELLO CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (ARTÍCULO 57 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA 1994). El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé dos hipótesis respecto de las faltas o ausencias del Juez de Distrito, distinguiendo entre las accidentales y las temporales. En el primer caso, dispone que el secretario practicará las diligencias y dictará las providencias de trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; y por cuanto a las segundas que para desempeñar las funciones del titular, el secretario deberá estar autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo anterior se infiere que, en este segundo caso, esto es, cuando se autorice al secretario, como encargado del despacho, éste debe precisar si se encuentra autorizado para sustituir en sus funciones al titular del juzgado, de acuerdo con el precepto legal de que se trata, pues de lo contrario no se puede determinar si está o no facultado para resolver en definitiva."

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE LA INTERPUESTA POR UN SECRETARIO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE LO DESTITUYE POR SU ACTUACIÓN COMO ENCARGADO DEL DESPACHO. Conforme al artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran, entre otros casos, a la remoción de Magistrados de Circuito. Con base en lo anterior, y considerando que formal y materialmente los actos realizados por los secretarios en funciones de Magistrados, por ministerio de ley y por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, son auténticos actos de autoridad, avalados por la ley, así como que el asumir tal encargo implica adquirir las responsabilidades y prerrogativas inherentes, debe concluirse que en el supuesto de que el Consejo de la Judicatura Federal destituya a un secretario por alguna falta cometida durante el tiempo en que estuvo en funciones de Magistrado de Circuito, dicha sanción derivó, precisamente, de las actuaciones realizadas con tal carácter, con independencia de que los efectos de la sanción los resienta en su cargo original, por lo que en tal caso resulta procedente el recurso de revisión administrativa intentado por el secretario removido, pues de lo contrario, se estaría desconociendo el carácter con el que actuó, la naturaleza de la sanción impuesta y los derechos que se adquieren en razón del encargo."

Por las anteriores consideraciones, los razonamientos del recurrente devienen infundados, ...

NOVENO. ...

DÉCIMO. ...

DÉCIMO PRIMERO. En el quinto argumento de agravio, manifiesta el recurrente que, aun en el caso de que hubieren ocurrido las irregularidades señaladas en la cuarta visita de inspección, éstas no se realizaron con ánimo doloso o de mala fe, sino en todo caso por falla humana derivada de la excesiva carga de trabajo en la sección penal, tan es así que se autorizó una nueva plaza de secretario en el juzgado.

Este agravio debe estimarse inoperante por cuanto se refiere a que las irregularidades detectadas en la cuarta visita de inspección no se realizaron con ánimo doloso o de mala fe, pues, la buena o mala fe y, dolo o no, con que haya actuado en su labor de juzgador en el periodo de seis años para el cual fue nombrado, es una cuestión de fondo en la presente revisión, si se considera que la buena fe de los administradores de justicia se presume salvo prueba en contrario, en tanto que al momento de ser nombrados de ellos se espera que en cumplimiento a su deber adopten una actitud de respeto, lealtad y honradez en el tráfico jurídico.

Lo anterior es así, si se toma en consideración lo siguiente:

La buena fe, desde el punto de vista doctrinario*(2), se traduce en el estado de ánimo consistente en ignorar, con base en cualquier error o ignorancia excusable, la ilicitud de nuestra conducta o de nuestra

1

2

3

4



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

posición jurídica y que en la formación de ese estado de ánimo, se haya desplegado la diligencia socialmente exigible, con lo cual, sólo tiene buena fe quien sufre un error o ignorancia excusable.

**(2) Diccionario Jurídico Espasa Calpe, Madrid, 1991, páginas 120 y 121.*

Eduardo J. Couture, en su libro "Vocabulario Jurídico", ediciones Depalma, Buenos Aires, 1983, página 127, define y nos da los siguientes antecedentes, de la buena fe.

Definición. Calidad jurídica de la conducta, legalmente exigida, de actuar en el proceso con probidad, en el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón.

Etimología. Bueno del latín bonus, -as -um, de igual significado. En cuanto a fe, véase esa palabra. La expresión buena fe, común en la mayoría de las lenguas occidentales, es un calco del latín bona fide "con sinceridad", en la cual fides, -ei "fe" se emplea, en la acepción de lealtad, sinceridad, fidelidad a la palabra dada.

Por lo que se refiere al dolo, el mismo autor antes mencionado refiere:

Definición: 1. (Penal) Calificación jurídica de la conducta de quien, con conciencia y voluntad, incurre en la acción u omisión calificados como delitos por la ley penal. 2. (Civil) Calificación jurídica de la conducta de quien con intención de dañar, causa a otro un perjuicio material o moral. 3. (Procesal) Calificación jurídica de la conducta de quien, maliciosamente, se sirve del proceso para causar a otro un daño material o moral.

Etimología.

Voz culta del latín dolus, -i "fraude", engaño.

En torno al tema, cabe citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CXL VII/97, publicada en la página 188, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y siete que dice:

"NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO COMO CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El referido precepto, en la fracción aludida, dispone que será causa de responsabilidad para los servidores públicos de dicho poder, actuar con notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. El sustento de la notoria ineptitud es el error inexcusable, el que deberá valorarse tomando en cuenta los antecedentes personales, profesionales y laborales del agente, tales como su preparación, honorabilidad, experiencia y antigüedad tanto en el ejercicio profesional en el Poder Judicial de la Federación y, específicamente, en el órgano jurisdiccional en que labore; asimismo, resulta relevante para llegar a la calificación del error inexcusable apreciar otros factores, como lo son la carga de trabajo con que cuente el juzgado o tribunal; la premura con que deban resolverse los asuntos. dados los términos que para ese fin marca la

—

—

—



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

ley; la complejidad de los mismos sea por el volumen, por la dificultad del problema Jurídico a resolver o por ambas cosas; y en general, todas aquellas circunstancias que tengan relación con los elementos materiales y humanos con que cuente el juzgador para apoyarse en su actividad como tal; pues así se podrá llegar a una conclusión que revele precisamente la ineptitud o descuido del funcionario en virtud de la comisión de errores inexcusables. Es preciso señalar que la notoria ineptitud o descuido inexcusable puede manifestarse en cualquier etapa o faceta de la actividad judicial, bien sea en la meramente administrativa o de organización del órgano jurisdiccional, al sustanciar los procedimientos a su cargo, o al dictar las resoluciones con que culminan dichos procedimientos."

Si se toman en consideración las anteriores concepciones de la buena fe y dolo y, el criterio ya sustentado por este alto tribunal, debe decirse que en un procedimiento de ratificación de Jueces de Distrito o Magistrados de Circuito, en cuanto que en éste se analizará la labor que desarrollaron, en el término de seis años para el que son nombrados, de tal modo que el Consejo de la Judicatura Federal, llegue al conocimiento cierto de que su actuación ética profesional ha sido la exigida y no han ocasionado, sabiéndolo, daños a los justiciables y, por tanto, tienen la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional bajo los principios de independencia, responsabilidad e independencia, es de estimarse que, la buena o mala fe y, la actitud dolosa o no, con que haya actuado el juzgador, dependerá precisamente de la valoración que realice el Consejo de la Judicatura Federal respecto de la actitud asumida por el juzgador federal en su labor diaria y en el término de tiempo para el que fue nombrado, a efecto de encuadrarla en los supuestos establecidos en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por las anteriores razones, los argumentos de agravio deben estimarse inoperantes, por cuanto se limitan a realizar afirmaciones en el sentido de que la actuación que desplegó como juzgador federal en el periodo de seis años para el que fue nombrado, obró de buena fe y sin dolo, pues en todo caso, lo que debe probar a través del recurso de revisión administrativa, con los razonamientos lógico-jurídicos que al efecto se expresen, es el que, contrariamente a lo decidido en la resolución de no ratificación, no se dieron las irregularidades a que se aluden en la visita de inspección mencionada, o en su caso, que existen ciertos factores que influyeron para que éstas se dieran y pudieran considerarse como excusables, como lo hace el recurrente en su segunda parte del argumento de agravio, en que manifiesta que había una excesiva carga de trabajo en la sección penal y por ello se autorizó una nueva plaza de secretario de juzgado.

No obstante que este último argumento de agravio en cuanto se sostiene que había una excesiva carga de trabajo en la sección penal y por ello se autorizó una nueva plaza de secretario de juzgado, de acuerdo con las consideraciones anteriores es procedente porque pudiera dar lugar a excusar al juzgador federal, ahora recurrente, de las irregularidades

A

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON

PODER EJECUTIVO

detectadas en la cuarta visita de inspección, en la especie, no es así, por lo siguiente:

Ya anteriormente se señaló, que la administración de justicia no sólo refiere a la función jurisdiccional desplegada por el juzgador, sino también implica la administración de su tribunal, esto es, el administrador, que es el juez, debe dictar todas aquellas medidas de carácter administrativo tendientes a organizar, coordinar y supervisar su funcionamiento, para que la administración de justicia sea pronta, completa e imparcial, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional.

Así, como ya antes quedó estimado, la administración de la justicia federal, en sus dos aspectos, es exclusivamente responsabilidad del titular del órgano jurisdiccional y, para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 constitucional, en el ejercicio de su encomienda, debe, no solo distribuir las tareas del órgano jurisdiccional, en su personal de apoyo técnico y administrativo y, supervisar que éstos las realicen, sino también en cuanto administrador de su tribunal, debe de hacerse llegar de los requerimientos materiales y humanos que estime necesarios para desahogar las cargas de trabajo existentes y, para ello, con toda oportunidad debe llamar la atención al Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que le ministre éstos, si se toma en consideración que conforme a lo dispuesto por el artículo 81, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho consejo tiene la encomienda de dictar las medidas que exijan el buen servicio en las oficinas de los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito y órganos auxiliares del mismo, ..."

Tal es la independencia de los órganos jurisdiccionales en esas áreas, que con el fin de salvaguardarla se ha dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su párrafo noveno, que las decisiones que tome el Consejo de la Judicatura Federal sobre designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de verificar que hayan sido adoptadas conforme a las normas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de donde se deduce la voluntad del legislador de asegurar la independencia e imparcialidad de los juzgadores federales con el fin de mantener la aplicación adecuada del derecho. Ello se logra precisamente a través de la implantación de ese recurso jurisdiccional, llamado recurso de revisión administrativa, que jueces y magistrados tienen a su alcance para impugnar las decisiones sobre adscripción, ratificación y remoción que en ejercicio de sus facultades administrativas emita el Consejo de la Judicatura Federal.

En relación con este último aspecto, cabe señalar el criterio adoptado por el Pleno del Máximo Tribunal de la República, al fallar la consulta a trámite en el recurso de revisión administrativa 2/96, en sesión de fecha dieciséis de

A



59

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

mayo de mil novecientos noventa y seis, cuya resolución en lo conducente dice:

"... Puntualizado lo anterior, habrá de determinarse si el recurso de revisión administrativa que prevé el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe ser considerado materialmente como de índole administrativa o bien jurisdiccional para así determinar la procedencia o no del recurso de reclamación interpuesto por el recurrente, motivo de la presente consulta.

En primer término tenemos que este Tribunal Pleno ha establecido que las atribuciones de la Suprema Corte al conocer del recurso de revisión administrativa es la de realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, para determinar si se cumplieron con los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma, tomando en cuenta para ello que la garantía de audiencia que resguarda el artículo 14 constitucional sólo puede cumplirse cabalmente, cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa, todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente proceda y que la finalidad fundamental del establecimiento del recurso es la de otorgar la seguridad al Juez o Magistrado recurrente, que la decisión que lo afecta, será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal.

(...)

De igual forma, ha de tenerse presente que una noción objetiva del acto jurisdiccional indica que éste existe cuando se decide una cuestión promovida por quien alega que se ha lesionado su derecho o su interés legítimo por una resolución general o acto determinado.

En efecto, tanto la jurisdicción como el acto jurisdiccional deben determinarse en sentido material, es decir, por la naturaleza de la función y no de la calificación jurídica que resulte del texto de la ley, pues ha de tenerse presente que el legislador no es jurista.

Por tanto, aun cuando la ley designe al recurso de revisión de las resoluciones del Consejo de la Judicatura como de 'revisión administrativa', ello per se no otorga al mismo dicha naturaleza, la que como se ha mencionado no comparte en sentido material las características de un recurso administrativo ya que el Pleno de la Suprema Corte no se instituye en relación al Consejo de la Judicatura Federal, como su superior jerárquico ni mucho menos como un órgano creado especialmente para conocer del recurso, sino que su función deriva de las atribuciones que como órgano jurisdiccional por antonomasia le confiere la Constitución General de la República, sobre

A



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

todo si se tiene presente que su resolución determina la validez o nulidad del acto impugnado.

Por tanto, el acto de nombramiento de un Juez o Magistrado, evidentemente es de índole administrativo porque tal decisión se dicta después de realizado un proceso en el que no se declara un hecho controvertido sino que se verifica legalmente una condición de idoneidad que crea el derecho a ser propuesto para ocupar dicho cargo; empero, el acto jurisdiccional surgirá cuando el interesado promueva el recurso contra ese acto por considerar que ilegalmente se le ha negado el derecho a detentar tal nombramiento, pues será entonces cuando se declarará su derecho en términos de ley lo que implica que el órgano encargado de llevar a cabo tal función evidentemente realiza una función jurisdiccional. "

Sobre el mismo tema de la independencia y autonomía de magistrados y jueces, también se pronunció ese Alto Tribunal al resolver la revisión administrativa número 7/96, en sesión de fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, de cuya ejecutoria se advierte lo siguiente:

"Por otra parte, el método sistemático, que pretende investigar la costumbre para resolver conforme a ella el caso dudoso, obliga a actuar con apoyo en las conclusiones derivadas de los anteriores métodos. Así es, la reforma que entró en vigor el Primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, provocó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no interviniera directamente en las designaciones, pues se consideró que no constituía una función propiamente jurisdiccional -que el propio Constituyente reservó como conocimiento exclusivo del máximo tribunal de la República-; y, por ende determinó que el nuevo órgano denominado Consejo de la Judicatura Federal llevara a cabo las funciones de administración y vigilancia que anteriormente correspondían a la Suprema Corte. Por tanto, como la referida reforma -aparte de que no desapareció la multicitada condición-, no estableció reglas distintas en el procedimiento de ratificación, es fácil también concluir que las tareas que con anterioridad desempeñaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben continuar realizándolas la institución creada con ese concreto fin.

En esas condiciones, las tareas administrativas de las que se descargó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligan al referido órgano de administración a elaborar los correspondientes dictámenes, según lo consideró siempre el propio Tribunal Pleno al interpretar el espíritu del legislador, lo que se puede corroborar de las actuaciones que se observan en los expedientes personales de los funcionarios que, en su momento, fueron confirmados o separados de sus cargos.

Lo anterior se fortalece si se considera que uno de los puntos de mayor relieve de las reformas constitucionales relativas al Poder Judicial de la Federación, fue el establecimiento de la carrera judicial



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

garantizar que la sociedad, por un lado, contara con Magistrados idóneos y, por otro, que a éstos, con objetividad, se les permitiera su actuación, lográndose -cuando se actuara con los requeridos-, la seguridad y estabilidad en el desempeño de sus funciones y la posibilidad de ser promovidos a otros superiores. En referencia al método dialéctico, que sirve para determinar el alcance de la norma, tomando en cuenta no sólo la costumbre sino el fin social que se persiguió al dictarla, conviene también aplicarlo conjuntamente con el causal, que persigue la finalidad de encontrar la verdad investigada, los fines políticos y sociales, así como la naturaleza de su

JUNTA DE LA FEDERACIÓN
COMITÉ DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

Al respecto, no hay duda de que la elaboración de dictámenes constituye un objetivo que necesariamente debe cumplirse, pues es en él donde habrá de reflejarse el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los funcionarios, que permitirá arribar a la conclusión de si continúan con la capacidad de desempeñar la difícil labor de juzgar a sus semejantes bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia. En efecto, es en el dictamen donde queda patentizado el examen cualitativo de quienes se han desempeñado como Jueces y Magistrados Federales y sirve, como lo indicó la exposición de motivos que dio la pauta para modificar la estructura del Poder Judicial Federal, para "garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional."

RTE

NA

DE ACUERDO

Además, la emisión de ese dictamen es congruente con los objetivos políticos y sociales del régimen constitucional que la propia reforma, en su exposición de motivos, trazó como fin a alcanzar, pues lo "inscribe en la larga tradición nacional que ha buscado subordinar los actos del poder público a la Constitución y las leyes", y permite que, conforme al régimen constitucional, el interesado y la sociedad en general estén en aptitud de conocer a ciencia cierta si el procedimiento para ratificarlo es congruente o no con la finalidad de "garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional."

Finalmente, el método crítico, que parte de la letra de la ley y de la voluntad del legislador para procurar la verdad mediante la libre investigación por el juzgador, queda subsumido en todos los anteriores razonamientos, pues las consideraciones expuestas toman en cuenta las condiciones económicas, sociales y políticas que impuso el Constituyente al cumplir los requerimientos de la sociedad en general; esto es, que la función judicial se realice por personas probas e independientes. Toman en cuenta, además, las condiciones particulares de los individuos que son seleccionados para desempeñar las tareas jurisdiccionales.

4

✓

✓

✓



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

Así, en los términos ya explicados, es fácil concluir que el solo transcurso del término de seis años, en que un funcionario judicial se desempeña con el cargo de Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, no impide que continúe en sus funciones ni sirve para que el Consejo de la Judicatura Federal le impida desempeñarse como tal, pues de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución General de la República se deriva una obligación, consistente en la emisión de un dictamen con el que el órgano administrativo facultado para ello determina legalmente si procede o no ratificarlo en esos cargos.

Establecido lo anterior, procede examinar si contra la "no ratificación", contenida en el dictamen de marras, procede o no el recurso de revisión que la comentada reforma constitucional estableció en el artículo 109, párrafo octavo, de la Constitución General de la República para los casos "que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces.". Para ese efecto, es preciso interpretar asimismo el precepto constitucional que la contiene y con ello fijar el alcance de ese medio de impugnación.

Sobre el particular, el Consejo de la Judicatura Federal argumentó que la "no ratificación" no se equipara a la "remoción" del cargo, ya que la ley de la materia hace la distinción entre una y otra al establecer la excepción de indicar cuáles son las decisiones impugnables. De ahí deduce que el precepto que prevé la revisión no resulte aplicable a caso alguno que no esté expresamente especificado en el mismo ordenamiento.

Al respecto, es inexacto que la ley, por el hecho de indicar cuáles son las decisiones impugnables, haya distinguido entre la "remoción" y la "no ratificación", ya que el señalamiento de ciertos términos no implica exclusión de otros que refieran un hecho idéntico. Menos aún constituye el establecimiento de una hipótesis de excepción que excluya casos iguales, pues para que ello ocurra es necesario que la norma contenga una regla general en la que se comprendan situaciones pertenecientes a una misma categoría y, a la vez, excluya de ésta a las que, por su particularidad, no puede considerar idénticas. De este modo se constituye la hipótesis de excepción.

Por tanto, si se atiende a la lógica elemental, la regla general que se advierte del precepto es que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables y la excepción se constituye por establecer la procedencia para las que, por su particularidad, si son revisables. En el caso, la de remoción, independientemente de las causas que la hubieran motivado tal como lo es la no ratificación.

Si bien es cierto que, en el caso, es inaplicable la tesis jurisprudencial que se invocó para apoyar el argumento de procedencia de la revisión, emitida al resolver el recurso de revisión administrativa 2/95, no lo es por el hecho de que, en las palabras del Consejo, "contemple la posibilidad de extender sin límite los casos de excepción que fija en

✓

✓

✓



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

número cerrado el mencionado precepto", sino porque lo ahí establecido no refiere que la revisión administrativa proceda para el caso de que un Magistrado de Circuito o Juez Federal no hayan sido ratificados. Es más, ni siquiera se discutió ese aspecto porque el caso ahí examinado derivó concretamente de la remoción que se hizo respecto de un Juez Federal.

Ahora bien, para interpretar el alcance de lo dispuesto en el mencionado artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal, no es necesario aplicar todos los métodos de interpretación ya señalados según se verá enseguida.

Desde el aspecto puramente gramatical, basta con destacar el sentido que, a través del lenguaje quiso expresar el legislador. Es decir, si utilizó en específico los términos "designación, adscripción y remoción", debe atenderse sólo al significado de esos enunciados o expresiones, en tanto que no limitó la procedencia del recurso a los casos en que expresamente se utilizaran esas palabras. Por ende, si por el primer término se entiende el señalamiento o destino que se da a una persona o cosa para determinado fin; por el segundo, el agregar a una persona al servicio de un cuerpo o destino; y, por el tercero, la privación de un cargo u oficio, cualquier acto o acción que actualice o tienda a ese fin debe considerarse como las hipótesis de excepción contra las que sí procede el recurso de revisión administrativa.

Incluso, sin considerar la existencia de términos o expresiones, ya que éstos, en un caso de arbitrariedad extremo, ni siquiera podrían existir.

Así, por "designación" debe entenderse cualquier acción que tienda a elegir, escoger, señalar, llamar, requerir, solicitar, investir, ascender, denominar, indicar, etc., a cualquier persona que sea considerada para ocupar el cargo de Juez o Magistrado Federal. Por "adscribir" debe entenderse cualquier acción que tienda a asegurar, atribuir, inscribir, agregar, destinar, etc., a dichos funcionarios en un lugar o destino específico. Finalmente, por "remoción" debe entenderse cualquier acción que tienda a cesar, despedir, relevar, remover, expulsar, eliminar, suspender, licenciar, apartar, excluir, separar, etc., a los referidos funcionarios en el ejercicio de su encargo.

Si bien es cierto que una decisión de esa naturaleza queda inmersa en la facultad administrativa, la singularidad que se reconoce para esos casos, es fácil advertirla de la letra de la ley, pues de ésta se deduce con exactitud que la voluntad del legislador fue la de instaurar la revisión contra cualquier determinación tenga como consecuencia remover de sus cargos a Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, ya que por tratarse de los juzgadores y, por consiguiente, de los guardianes del sistema jurídico del mayor nivel, con mayor razón se debe evitar cualquier acción arbitraria que atente contra su persona y velar, además, por la aplicación adecuada del derecho que respecto de ellos se haga, pues redundaría en beneficio de su independencia e

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

imparcialidad. Por esa razón, es obligado establecer que el alcance de la norma constitucional es en el sentido de que se permita enterar a los precitados funcionarios judiciales del juicio que sobre ellos se emite para determinar si son o no merecedores de continuar en el ejercicio de sus cargos y, a la vez, escucharles en la defensa del desempeño que como Jueces o Magistrados hubieran tenido..."

Ahora, el hecho que el presente asunto verse sobre la pretensión del Consejo de Judicatura Federal en obtener una resolución favorable, en la que se determine que los bienes inmuebles destinados a la impartición de justicia federal en el Estado de Nuevo León, como el que ocupa éste órgano jurisdiccional, están exentos del pago del servicio de agua potable y alcantarillado, no implica que el tribunal vea afectada la imparcialidad de su decisión, dado que aun si se llegara a estimar fundada dicha pretensión, ello ningún beneficio o derecho le generaría al propio órgano judicial, porque quien finalmente efectúa la erogación respectiva para el pago de tales servicios es el propio consejo mediante la partida correspondiente, sin que ello trascienda en la actividad jurisdiccional y administrativa interna de este tribunal, ni en su beneficio ni en su perjuicio, pues éste se limita a la realización de sus consabidas funciones netamente jurisdiccionales en el inmueble que se le asigne para ello, y se mantiene al margen del manejo económico y de administración de recursos que efectúa el Consejo de la Judicatura Federal conforme a las atribuciones que le han sido encomendadas exclusivamente. De ahí que no quepa jurídicamente el cuestionamiento en el sentido que, de resolverse el asunto por el tribunal mencionado, éste obtenga algún provecho para sí o, en su caso, se produzca a él mismo un perjuicio.

En tal orden de ideas, se debe convenir en que este órgano jurisdiccional no puede rehusar el conocimiento y resolución del juicio de amparo directo que ahora nos ocupa, pues en principio ningún juez o tribunal puede negarse a conocer de un asunto salvo que se estime legalmente incompetente, en términos del artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º; aunado a que dicho principio tiende a velar por el respeto a la garantía de acceso a la justicia, que debe ser expedita, pronta, completa e imparcial, como lo estatuye el artículo 17 de la Carta Magna.

Tampoco sería válido pretender, que los magistrados integrantes del tribunal manifiesten estar impedidos para conocer del juicio, y con base en ello rechacen el conocimiento del litigio, porque en primer lugar, según se ha dejado en claro, no hay relación de dependencia entre este órgano y el Consejo de la Judicatura Federal, ni existen intereses compartidos entre uno y otro, que afecten la imparcialidad de la resolución que se emita; y, por otro lado, no se da ninguna de las causas de impedimento que limitativamente

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON**

PODER EJECUTIVO

establece el artículo 66 de la Ley de Amparo; amén de que, en términos del artículo 37, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la calificación del impedimento que se llegara a plantear, de ser el caso, no le correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a otro tribunal colegiado de Circuito que se encontraría en idéntica situación jurídica que éste que ahora resuelve.

Menos aún pudiera pensarse en formular consulta al propio Consejo de la Judicatura Federal, para que brinde asistencia técnica-jurídica a este órgano jurisdiccional, a fin determinar la actuación que debe realizar para ajustarse al marco normativo correspondiente, de conformidad con los artículos 37 y 38, fracción X, del Acuerdo General 25/2004 del Pleno del Consejo; porque este último constituye una de las partes que intervienen en el juicio de garantías, esto es, participa con intereses propios en la controversia al tener la calidad de quejoso situación que por sí misma excluye la posibilidad de que se actúe con independencia y autonomía al resolver la consulta que llegara a presentarse.

25 Pero sobre todo debe atenderse a que, tratándose como en el caso, de un juicio de amparo directo en el que se plantea la inconstitucionalidad de un acuerdo dictado por el gobernador local, que se caracteriza por su impersonalidad, generalidad y abstracción, en contra de la sentencia que se emita es posible interponer el recurso de revisión, en términos del artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al diverso 84, fracción III, del citado ordenamiento legal; de tal suerte que la decisión que se llegue a sustentar en esta instancia no sería inmutable, sino que cabe la posibilidad de que sea el máximo Tribunal del País quien finalmente resuelva lo que en derecho corresponda, si se agota el recurso relativo, es decir, el fallo que adopte el tribunal colegiado puede ser reformado por ese alto tribunal, el que incluso puede abordar el estudio no sólo de los temas de inconstitucionalidad, sino también está en aptitud de emprender el análisis de las cuestiones que atañen a los presupuestos procesales de orden público que estime pertinentes.

Ello trae como consecuencia que tampoco sea válido admitir, como pudiera pretenderse, que este órgano jurisdiccional evada el conocimiento y resolución del asunto bajo el subterfugio de solicitar el ejercicio de la facultad de atracción, ya que dicha institución jurídica no opera tratándose de un juicio de amparo directo donde se plantea un tema de inconstitucionalidad de leyes, o de invasión de esferas, dado que, de cualquier manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para conocer de la revisión de la sentencia dictada en vía uniinstancial; es decir, la facultad de atracción en amparo directo corresponde ejercerla cuando los temas de la demanda atañen exclusivamente a cuestiones de

✓

✓

✓



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

legalidad, que por su importancia y trascendencia, merecen la atención del máximo tribunal de la Nación, porque en tales supuestos no cabe ni procede el recurso de revisión, de modo que la única posibilidad de que la Corte conozca de los mismos, es a través del ejercicio de la facultad de atracción, caso que no se surte en la especie, donde legal y constitucionalmente se prevé la procedencia del recurso de revisión.

En otro aspecto, debe dejarse en claro que del análisis de las disposiciones transcritas en párrafos precedentes, particularmente del artículo 81, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de administrar los bienes del Poder Judicial Federal, con excepción de los que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que evidentemente se encuentra facultado para acudir en defensa de dichos bienes y gestionar todo lo que se relacione con los mismos, lo que obviamente incluye la facultad de promover el juicio de garantías en contra de los actos de autoridad que los afecten, defensa que puede ejercer a través de su Dirección General de Asuntos Jurídicos en términos de los acuerdos generales 5/2000, 2/2004 y 46/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobados en sesiones de fechas ocho de febrero de 2000, 21 de abril de 2004 y 14 de julio de 2004, respectivamente.

Dichos acuerdos disponen, en lo conducente:

ACUERDO GENERAL NUMERO 5/2000, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE DETERMINA LA ADSCRIPCION DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LA PRESIDENCIA DEL MISMO, Y ACTUALIZA LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO, CON LAS DIRECCIONES GENERALES QUE LES CORRESPONDEN.

(...)

Artículo 1º.- Estructura. La Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal contará, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, con las siguientes Direcciones Generales:

(I...)

II. De Asuntos Jurídicos;

(...)

Artículo 4o.- Objetivo. La Dirección General de Asuntos Jurídicos se encargará de llevar a cabo gestiones legales ante toda clase de autoridades, instituciones, entidades y personas para el debido resguardo de los intereses del Consejo de la Judicatura Federal; de participar en la elaboración de la normatividad del propio Consejo; así como de brindar asesoría y asistencia técnico-jurídica a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que lo integran, a efecto de que los actos que realicen se ajusten al marco normativo que regula su actuación.

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

Artículo 5o.- Atribuciones. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

VIII. Representar al Presidente del Consejo de la Judicatura Federal en los asuntos jurídicos que éste le encomiende;

IX. Intervenir, previo acuerdo del Consejo y en su representación, sin perjuicio de las facultades y atribuciones exclusivas de sus integrantes, Secretarías Ejecutivas y Organos, en todas las controversias jurídicas en que éste sea parte y con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público cuando así proceda, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, incluso de juicio de amparo y otorgar el perdón si procediere, previa autorización del Consejo transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recibir pagos, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, recusar jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo y los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, para que promueva o realice todos los actos permitidos por las leyes que favorezcan a los derechos el Consejo de la Judicatura Federal. Por virtud de esta disposición, se entenderá ratificado por dicho órgano colegiado todo lo que se haga, en los términos de ley, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y los representantes o delegados que designe, quienes gozarán de todas las facultades antes enunciadas;

(...)

"ACUERDO GENERAL 25/2004, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE DEROGA LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTICULO 1º., ASI COMO LOS NUMERALES 4º., 5º., 6º. Y 7º., Y ADICIONA LOS ARTICULOS 36, 37, 38, 39 Y 40, TODOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2000, CON EL PROPOSITO DE MODIFICAR LA ADSCRIPCION Y ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

CONSIDERANDO

(...)

TERCERO.- Mediante el Acuerdo General 5/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se modificó la estructura y organización del Consejo de la Judicatura Federal, determinando la adscripción de diversas Unidades Administrativas a la Presidencia del mismo, y actualizando las atribuciones del Secretariado Ejecutivo, con las Direcciones Generales que les corresponden;

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

CUARTO.- Dadas las funciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, consistentes en llevar a cabo las gestiones legales para el debido resguardo de los intereses del Consejo de la Judicatura Federal, así como de la Dirección General de Comunicación Social, instancia encargada de dar a conocer a la ciudadanía las acciones emprendidas por el Consejo, se estima necesario que, éstas dependan directamente del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de sus Comisiones en términos del presente acuerdo. Asimismo, que sus titulares sean nombrados por mayoría calificada de cinco votos de los Consejeros, a propuesta que haga el Presidente;

QUINTO.- En consonancia con lo anterior, es necesario realizar un cambio estructural del Acuerdo General 5/2000, mediante el cual se reascribían la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Comunicación Social al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, bajo la coordinación de sus Comisiones, en los términos del presente Acuerdo, y se modifiquen sus atribuciones.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

UNICO.- Se derogan la fracciones II y III del artículo 1º, así como los artículos 4º, 5º, 6º y 7º, y se adicionan los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, todos del Acuerdo General 5/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1º.- ...

NACION.

II. Derogado.

III. Derogado.

IV a V. ..."

"Artículo 4º.- Derogado."

"Artículo 5º.- Derogado."

"Artículo 6º.- Derogado."

"Artículo 7º.- Derogado."

"Artículo 36.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Comunicación Social dependerán directamente del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Administración y de la de Vigilancia, Información y Evaluación, respectivamente.

"Los titulares de las referidas Direcciones Generales serán nombrados por mayoría calificada de cinco votos de los Consejeros, a propuesta que haga el Presidente."

"Artículo 37.- Objetivo. La Dirección General de Asuntos Jurídicos se encargará de llevar a cabo gestiones legales ante toda clase de autoridades, instituciones, entidades y personas para el debido resguardo de los intereses del Consejo de la Judicatura Federal; de

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

participar en la elaboración de la normatividad del propio Consejo; así como de brindar asesoría y asistencia técnico-jurídica a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que lo integran, a efecto de que los actos que realicen se ajusten al marco normativo que regula su actuación. "

"Artículo 38.- Atribuciones. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:

(I....)

VIII. Representar en los asuntos jurídicos que se le encomienden, al Pleno y a la Comisión de Administración;

IX. Intervenir, previo acuerdo del Consejo y en su representación, sin perjuicio de las facultades y atribuciones exclusivas de sus integrantes, Secretarías Ejecutivas y Organos, en todas las controversias jurídicas en que éste sea parte y con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público cuando así proceda, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, incluso del juicio de amparo y otorgar el perdón si procediere, previa autorización del Consejo transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recibir pagos, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, recusar jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo y los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, para que promueva o realice todos los actos permitidos por las leyes que favorezcan a los derechos del Consejo de la Judicatura Federal. Por virtud de esta disposición, se entenderá ratificado por dicho Organo Colegiado todo lo que se haga, en los términos de ley, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y los representantes o delegados que designe, quienes gozarán de facultades antes enunciadas; ..."

"ACUERDO GENERAL 46/2004, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 38 DEL ACUERDO GENERAL 5/2000, CON EL PROPÓSITO DE ACTUALIZAR LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

CONSIDERANDO

(I...)

TERCERO.- Mediante el Acuerdo General 5/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se modificó la estructura y organización del Consejo de la Judicatura Federal, determinando la adscripción de diversas unidades administrativas a la presidencia del mismo, y actualizando las atribuciones del secretariado ejecutivo, con las direcciones generales que les corresponden;



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

CUARTO.- El Acuerdo General 25/2004 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformó el acuerdo general previsto en el considerando anterior, readscribiendo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, bajo la coordinación de sus comisiones;

QUINTO.- Dada la naturaleza y funciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se estima necesario suprimir la autorización previa del consejo para que la dirección intervenga de manera expedita y oportuna en representación de éste órgano colegiado en todas las controversias jurídicas en que sea parte.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

ÚNICO.- Se modifica la fracción IX del artículo 38 del Acuerdo General 5/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para quedar como sigue:

IX. Intervenir, en representación del consejo, sin perjuicio de las facultades y atribuciones exclusivas de sus integrantes, secretarías ejecutivas y órganos, en todas las controversias jurídicas en que éste sea parte y con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público cuando así proceda, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos incluso del juicio de amparo y de otorgar el perdón si procediera, previa autorización del consejo, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recibir pagos, ofrecer y rendir toda clase de pruebas recusar Jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo y los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, para que promueva o realice todos los actos permitidos por las leyes que favorezcan a los derechos del Consejo de la Judicatura Federal. Por virtud de esta disposición se entenderá ratificado por dicho órgano colegiado todo lo que se haga, en los términos de ley, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y los representantes o delegados que designe, quienes gozarán de todas las facultades antes enunciadas, debiendo, en todo caso, informar al Pleno de las actuaciones realizadas de una manera cuatrimestral; ..."

Como se ve, si bien es cierto que conforme a los acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 5/2000 y 25/2004, inicialmente se requería previo acuerdo del presidente de dicho órgano, y posteriormente de su pleno, en el que se autorizara a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que interviniera en las controversias jurídicas en que el



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

consejo tuviera la calidad de parte; dicho requisito fue suprimido en el diverso Acuerdo General 46/2004, según se advierte de su considerando quinto, en el que expresamente se estableció:

"QUINTO.- Dada la naturaleza y funciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se estima necesario suprimir la autorización previa del consejo para que la dirección intervenga de manera expedita y oportuna en representación de éste órgano colegiado en todas las controversias jurídicas en que sea parte. . . ."

Sin que se pueda considerar que la facultad de esa dirección, para intervenir en las controversias jurídicas en que el consejo sea parte, en representación de éste y sin necesidad de autorización previa, se encuentre limitada a aquellos asuntos ya iniciados, y que en cambio para aquellos que apenas se vayan a iniciar, se siga requiriendo preliminar acuerdo del consejo, pues en el único punto del acuerdo 46/2004 se dejó en claro que las atribuciones de representación conferidas, sin necesidad de un acuerdo anterior del pleno, incluyen las de presentar demandas, ejercer acciones e incluso la de promover el juicio de garantías, y que el único acto de representación que necesita un previo acuerdo del pleno para su realización, es el relativo al otorgamiento del perdón en las causas criminales, así como el desistimiento de recursos y del juicio de amparo.

Por lo tanto, no queda duda de que en la actualidad la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, no requiere previo acuerdo del pleno de dicho órgano, o de su presidente, para promover el juicio de amparo, como sucedió en la especie.

DRTE
I N A I O N

DE BUENA demás, tampoco se puede perder de vista que en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, cuando el promovente del juicio de garantías tenga reconocida su personalidad (o mejor dicho su personería) ante la autoridad responsable, la misma será admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, siempre que se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas; y es el caso que, según se advierte de las constancias de autos en el juicio contencioso administrativo se reconoció la facultad de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para promover y actuar en esa vía en representación del Consejo, tan es así que, habiendo sido materia de excepción dicho aspecto, el tribunal de primera instancia reconoció expresamente la atribución de que se hace mérito, como se desprende del considerando primero de la sentencia correspondiente, en la que expresamente se resolvió:

"... Asimismo, y por tener el carácter de presupuesto procesal se entra al estudio de la personalidad de la parte actora, al efecto, la Institución Pública Descentralizada denominada Agua y Drenaje de Monterrey, manifiesta que Víctor M. Mendicuti Gómez, quien comparece en el juicio 51/2003, con el supuesto cargo de Encargado de la Dirección

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, en ningún momento justifica tener suficientes facultades para comparecer en nombre y representación del Consejo de la Judicatura Federal, en los juicios ante autoridades jurisdiccionales; al respecto se considera infundada dicha manifestación puesto que contrario a lo que aduce la autoridad demandada antes citada, se tiene que el C. Víctor Manuel Mendicuti Gómez, acreditó tener el carácter de encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos que representa, según se prueba mediante la documental pública consistente en el oficio SEP/PLE/005/8667/2002, emitido por el Secretario Ejecutivo del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, el 23 (veintitrés) de septiembre de 2002 (dos mil dos), al cual se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 81, fracción 1, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, asimismo, cabe destacar que, dicha dirección es la encargada de intervenir y representar al mencionado consejo, en todas las controversias jurídicas en que éste sea parte y con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para contestarlas; lo cual se desprende claramente del artículo 5, fracción IX, del Acuerdo General 5/2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 (dieciséis) de febrero de 2000 (dos mil) el que se correlaciona con el acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su punto PLE/004, tomado dentro de la sesión ordinaria del pleno de fecha 24 (veinticuatro) de mayo de 2000 (dos mil), en donde se emitió un acuerdo genérico que faculta al Director General de Asuntos Jurídicos del propio Consejo, para intervenir en su nombre y representación en todas las controversias jurídicas en que el mismo sea parte; concluyendo esta Primera Sala que dicho órgano del Consejo de la Judicatura Federal, sí tiene legitimación para interponer demandas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; en consecuencia el titular de dicha dependencia tiene personalidad para representar a ese Consejo.

Tal porción del fallo del primer grado, no fue impugnado por la parte demandada, no obstante que estaba en aptitud de cuestionar lo resuelto al respecto, y la autoridad de segunda instancia aun cuando estuvo en posibilidad de abordar oficiosamente el tema, no advirtió la falta de personería en la actora; por tanto, en términos de la Ley de Amparo, reconocida la "personalidad" en juicio de la quejosa, ese tema no podría introducirse oficiosamente a la litis constitucional.

A lo anterior sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio que se comparte, derivado de la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 966, tomo XI, mayo de 2000,



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente:

"PERSONALIDAD. ESTUDIO IMPROCEDENTE EN EL AMPARO DIRECTO RESPECTO DEL REPRESENTANTE DEL QUEJOSO, SI LA IMPUGNACIÓN YA FUE DESESTIMADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO NATURAL. Si el actor durante la sustanciación del juicio natural objetó la representación de quien acudió en nombre de la demandada y la autoridad responsable declaró infundado el incidente de falta de personalidad, sin que se haya impugnado en amparo indirecto el acto respectivo y el representante de la patronal promueve con posterioridad amparo directo en contra del laudo relativo, no puede válidamente el tercero perjudicado objetar el reconocimiento hecho por el presidente del Tribunal Colegiado de tal representación, el que tiene lugar conforme al artículo 13 de la Ley de Amparo, en cuanto que si alguno de los interesados tiene reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, la misma será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales. Consecuentemente, tal cuestión de personalidad no puede ser objeto de estudio en el amparo directo, dado que el reconocimiento hecho por la responsable debió recurrirse en amparo indirecto, en su oportunidad. "

Tampoco es aceptable pensar que en el caso particular se trate de un problema de legitimación procesal activa, y no de personalidad, o más propiamente dicho de personería, el que se presenta en relación con la representación que ejerce la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, pues si bien tanto la personalidad como la personería y la legitimación constituyen -entre otros presupuestos procesales- requisitos que previamente han de cumplirse para la procedencia de la acción, pues son necesarios para que la relación procesal pueda válidamente constituirse y mediante su desarrollo, obtenerse la sentencia; entre ellos existen claras diferencias, pues la personalidad consiste en la capacidad en la causa para accionar en ella, o sea, es la facultad procesal de una persona para comparecer a juicio por encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos; de suerte que habrá falta de personalidad cuando la parte a la que se imputa no se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos para actuar por sí en el proceso. En tanto que la personería estriba en la facultad conferida para actuar en juicio en representación de otra persona, pudiendo ser esa representación tanto legal como voluntaria; surtiéndose la falta de personería, por tanto, ante la ausencia de las facultades conferidas a la persona a quien se le atribuye, o ante la insuficiencia de las mismas o ineficacia de la documentación presentada para acreditarla, entre otros casos. Mientras que, por legitimación procesal activa, se entiende la potestad legal para acudir al



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

74

órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular (como lo sería en el Consejo de la Judicatura Federal); en cambio, la personería es la facultad conferida para actuar en juicio en representación de otra persona, pudiendo ser esa representación tanto legal como voluntaria (situación que se materializa en la hipótesis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del citado consejo).

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
LA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

El Funcionario Jurídico Mexicano del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (Editorial Porrúa), se define a la legitimación procesal de la siguiente manera: "Desde el punto de vista doctrinal la legitimación deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser partes en un proceso civil, según enseña Hugo Rocco. La capacidad para ser parte, dice Guasp, es la aptitud jurídica para ser titular de derechos o de obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere"; en cambio, en lo que corresponde a la personería, la describe del siguiente modo: "Atributo del personero, procurador o representante de otro en juicio. Se emplea en el sentido de personalidad, o capacidad para comparecer en un juicio".

DE ACUERDO

Luego, es evidente que tratándose de un problema relacionado con las atribuciones del director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, para promover y actuar en representación del propio consejo, titular del derecho ejercido, no se cuestiona un aspecto de legitimación procesal activa, sino de personal, o más propiamente de personería.

Sentados los razonamientos precedentes, cabe concluir que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, el caso específico, sí se encuentra facultada para promover y actuar en juicio en representación de esa persona moral, sin necesidad de una acuerdo previo que autorice a intervenir en las controversias jurídicas en que aquél sea parte.

Por lo tanto, se debe convenir, además, en que el presente juicio de amparo resulta procedente, pues es promovido por el órgano facultado para acudir en defensa de los bienes que forman parte del Poder Judicial de la Federación, y que se destinan al servicio público federal de impartición de justicia, como se verá más adelante."

,

,

,



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

Al respecto cabe decir que es inusitado y nada convincente el esfuerzo del tribunal "a quo" por justificar su independencia e imparcialidad frente al inapropiado quejoso Consejo de la Judicatura Federal, pues tal propósito se desvanece con suma facilidad advirtiendo la clara dependencia y sumisión resultante del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según el cual el mencionado Consejo tiene atribuciones para:

- Hacer el nombramiento de los magistrados de circuito y jueces de distrito, y resolver sobre su ratificación, adscripción y remoción;
- Acordar las renunciaciones que presenten los magistrados de circuito y los jueces de distrito;
- Acordar el retiro forzoso de los magistrados de circuito y jueces de distrito;
- Suspender en sus cargos a los magistrados de circuito y jueces de distrito a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra. En estos casos, la resolución que se dicte deberá comunicarse a la autoridad que la hubiere solicitado. La suspensión de los magistrados de circuito y jueces de distrito por parte del Consejo de la Judicatura Federal, constituye un requisito previo indispensable para su aprehensión y enjuiciamiento. Si llegare a celebrarse o a efectuarse alguna detención en desacato a lo previsto en este precepto, se procederá en términos de la fracción XIX del artículo 225 del Código Penal. El Consejo de la Judicatura Federal determinará si el juez o magistrado debe continuar percibiendo una remuneración y, en su caso, el monto de ella durante el tiempo en que se encuentre suspendido;
- Suspender en sus funciones a los magistrados de circuito y jueces de distrito que aparecieren involucrados en la comisión de un delito, y formular denuncia o querrela contra ellos en los casos en que proceda;
- Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de servidores públicos en términos de lo que dispone esta ley incluyendo aquellas que se refieran a la violación de los impedimentos previstos en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de los correspondientes miembros del Poder Judicial de la Federación, salvo los que se refieran a los miembros de la Suprema Corte de Justicia;
- Emitir las bases mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder Judicial de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su presupuesto de egresos, se ajuste a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

- Cambiar la residencia de los tribunales de circuito y la de los juzgados de distrito;
- Conceder licencias en los términos previstos en esta ley;
- Autorizar a los secretarios de los tribunales de circuito y juzgados de distrito para desempeñar las funciones de los magistrados y jueces, respectivamente, en las ausencias temporales de los titulares y facultarlos para designar secretarios interinos;
- Amonizar en términos de esta ley, a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito para que, en casos de ausencias de alguno de sus servidores públicos o empleados, nombren a un interino;
- Convocar periódicamente a congresos nacionales o regionales de magistrados, jueces, asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, a fin de evaluar el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación y proponer las medidas pertinentes para mejorarlos;
- Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, con excepción del de la Suprema Corte de Justicia;
- Fijar los períodos vacacionales de los magistrados de circuito y jueces de distrito;
- Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia;
- Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos y empleados del propio Consejo, de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, en los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que por el Consejo dicte en materia disciplinaria;



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

- Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el pleno de la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Vicaría Judicial o a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación;
- Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas de los tribunales de circuito, juzgados de distrito y órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal;
- Regular las autorizaciones para abandonar el lugar de residencia de los funcionarios judiciales a que se refiere el artículo 153 de esta ley;

En efecto, cada Tribunal Colegiado de Circuito depende del Consejo de la Judicatura Federal para los aspectos operativos, administrativos, de vigilancia e incluso personales (autorizaciones para abandonar residencia) que con subrayado se destacaron anteriormente, circunstancia que se tradujo en un pesado lastre desestabilizante e impeditivo del libre y cabal despliegue de la potestad jurisdiccional por parte del tribunal emisor de la sentencia ahora recurrida, al grado de haber propiciado la inadvertencia de que en el caso en mención el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano sin personalidad jurídica y no apto para ser titular de garantías individuales, así como de haber soslayado la existencia de múltiples circunstancias de hecho y de derecho motivantes de improcedencia y sobreseimiento, e incluso de la negativa del amparo.

La dependencia entre el quejoso y la autoridad resolutora se infiere de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponerse en su artículo 94, segundo párrafo, que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación corre a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. No es óbice para así estimarlo lo manifestado en la sentencia recurrida en cuanto a que los Consejeros no representan a quien los designa y ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad; pues debe notarse sobre el particular que dicho fragmento normativo se refiere a la independencia que debe existir entre quienes designan a los Consejeros de la Judicatura Federal (los magistrados de circuito carecen de esa facultad de designación) y los propios Consejeros.

Por tanto, aun suponiendo que en teoría los magistrados de circuito "...conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos..." e "...intactas sus atribuciones para dirigir el órgano jurisdiccional en su aspecto administrativo...", en la realidad práctica de este caso particular no han estado en aptitud para ejercerlas con la imparcialidad exigida por el artículo 17 constitucional, dada su situación de dependencia ante el Consejo de la Judicatura

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON****PODER EJECUTIVO**

Federal para los aspectos antes mencionados, tales como su vigilancia y administración, e inclusive la administración del inmueble en el cual tengan establecidos los tribunales colegiados sus recintos oficiales, y el nombramiento, ratificación, adscripción y remoción de los propios magistrados, siendo importante hacer notar que de la resolución relativa al recurso de revisión 11/97 (misma que aparece transcrita a partir del final de la página 74 de la resolución impugnada) se desprende que la ratificación de los magistrados de circuito depende de la valoración que realice el Consejo de la Judicatura Federal respecto de la actitud asumida por el juzgador federal en su labor diaria y en el término de tiempo para el que fue nombrado.

Al corresponder al Consejo de la Judicatura Federal ejercer el Poder Judicial de la Federación conjuntamente con los Tribunales Colegiados de Circuito (artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), no es posible que uno (Consejo de la Judicatura Federal) promueva un juicio de amparo y otro (Tribunal Colegiado de Circuito) resuelva concederle el amparo, pues técnica y jurídicamente resulta paradójico que el amparo se haya concedido por el Poder Judicial de la Federación, a través del Tribunal Colegiado de Circuito, a favor de uno de sus órganos integrantes, independientemente de que una dirección u órgano en particular tenga la atribución administrativa del referido poder. Es decir, la concesión del amparo no sólo fue producto de haberse roto el equilibrio procesal en el juicio de garantías, sino equivale a que el Poder Judicial de la Federación se favoreció a sí mismo, pues rememórese que al órgano indebidamente quejoso (Consejo) corresponde, entre otros aspectos, la administración en ese ámbito de poder (con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), por disposición expresa consignada en el artículo 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es pertinente recordar que el sentido de la sentencia ahora impugnada se determinó por mayoría (no por unanimidad) de los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, y que el magistrado disidente manifestó en su voto particular, con toda sinceridad y entereza, lo siguiente:

"... este Tribunal Colegiado ocupa un inmueble administrado por el Consejo de la Judicatura federal; y, por tanto, se beneficia de tales servicios, existe un evidente conflicto de intereses... pues de resolver el propio Tribunal Colegiado a favor del Consejo de la Judicatura Federal se establecería, a sí mismo, un beneficio o prerrogativa, por la relación de dependencia administrativa que mantiene el órgano con la institución quejosa..."

1

2

3

1000



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

79

“... Así, en atención a lo expuesto, es claro el conflicto de intereses por parte de este órgano colegiado para resolver este asunto, en atención a ~~que sus funciones~~ las desarrolla en un inmueble administrado por el Consejo de la Judicatura Federal.

Ciertamente, al Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también pertenece el Consejo de la Judicatura Federal, quien con motivo de sus facultades de administración, acude a dirimir una controversia relacionada con los inmuebles en donde se ubican los órganos encargados de impartir justicia, lo cual implica resolver un asunto en el cual se ven involucrados intereses comunes entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Colegiado de Circuito al que se somete la jurisdicción.

Es decir, al determinar este órgano colegiado que es fundada la pretensión del director de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, y considerar que debe concederse el amparo y la protección de la justicia federal para el efecto de que deje de cubrir las cuotas y tarifas cobrables por el servicio de agua y drenaje que recibe, se establece un beneficio o privilegio a sí mismo, lo que resulta contrario a los principios de justicia que persigue la Constitución federal a través de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; además, de ser arbitraria la resolución que en esos términos se dicte, pues equivaldría a que este órgano colegiado actúe en beneficio propio.

NACION en cuestiones de orden jurisdiccional debe existir una total independencia por parte de este Tribunal Colegiado respecto al Consejo de la Judicatura Federal.

A mayor abundamiento, si bien es cierto que el Consejo se encarga de la administración del Poder Judicial de la Federación (a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), ello no implica que sea un órgano o ente desligado del Poder Judicial de la Federación. Esto es, los magistrados soslayaron que el Consejo de la Judicatura Federal ejerce el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación, lo cual se infiere de lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En esas condiciones, el tribunal “a quo” debió apreciar la ausencia de competencia subjetiva y abstenerse del conocimiento del caso, máxime que éste debió plantearse con sujeción a los dictados del artículo 105 constitucional y de la Ley Reglamentaria de sus fracciones I y II; y también debió detectar que el juicio de amparo es improcedente de conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción XVIII, en relación con el artículo 103 constitucional, toda vez que al

24



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

Poder Judicial corresponde resolver los asuntos en que se suscite controversia por actos de autoridad que violenten garantías individuales de los gobernados, calidad esta última de la cual carece el Poder Judicial de la Federación como institución y el Consejo de la Judicatura Federal como uno de sus órganos integrantes. Seguidamente se abundará en el tema.

En otras palabras el Poder Judicial de la Federación debe resolver, no suscitar, las controversias derivadas de actos de autoridad que vulneren las garantías individuales, por lo cual estimo que la sentencia recurrida deberá revocarse a fin de imponer el sobreseimiento conducente.

Cabe destacar que este agravio es procedente en virtud de que, según lo previsto en el artículo 73, parte final, de la Ley de Amparo, el examen de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público, oficiosa y preferente a la materia de fondo.

SEGUNDO. A partir del considerando sexto del fallo ahora impugnado, y hasta su parte final, se consideró y resolvió textualmente lo siguiente:

SEXTO.- Los conceptos de violación tercero y octavo, que se encuentran estrechamente relacionados entre sí, resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional que se demanda, tal como se desprende de las posteriores consideraciones.

Para hacer la aclaración de que, aunque en la demanda de amparo se expresan otros conceptos de violación vinculados con cuestiones de legalidad, algunos por vicios de forma y otros por vicios de fondo que se dicen cometidos al dictarse la sentencia que se reclama, lo cierto es que los aspectos de inconstitucionalidad de las normas en que se funda el acto reclamado, que se plantean en el amparo directo, merecen estudio preferente, ya que de resultar fundados tales argumentos producirían mayores beneficios para la parte quejosa, de ahí que se deben reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros (cuestiones de legalidad), en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, como en el caso específico se hacen valer cuestiones que aluden a la inconstitucionalidad de un ordenamiento general en el que se fundan tanto el acto impugnado en el procedimiento contencioso de origen, como la sentencia reclamada, lo que procede es analizar en primer término esos argumentos.

✓

✓

✓

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN****PODER EJECUTIVO**

Sirve de apoyo al respecto, la tesis aislada número 2a. CXIX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente:

**AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE
CONSTITUCIONAL DEBE**

REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando en amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el criterio citado no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito

ajusten sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.

DE ACUERDO

Pues bien, con el propósito de resolver lo que en derecho corresponde, se estima oportuno reseñar brevemente los antecedentes del caso, en lo que interesa para la solución del asunto.

Del estudio de las constancias que integran los expedientes de origen, de pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º; se advierte que la sentencia reclamada se emitió en relación con dos juicios contenciosos administrativos que fueron acumulados, que se integran elementalmente con las actuaciones que enseguida se relatan:

Expediente número 051/2003:

a).- Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil tres, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Ordinaria de ese órgano



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**
PODER EJECUTIVO

jurisdiccional, Víctor Manuel Mendicuti Gómez, en su carácter de encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, promovió la nulidad de la omisión atribuida al gobernador del Estado, de resolver sobre la solicitud de exención de pago del servicio de agua potable que le formuló el citado consejo; la nulidad de la resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil dos, en la que el director general de la Institución Pública Descentralizada que se denomina "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", negó la exención de pago por concepto del servicio público de agua potable y drenaje solicitada por el Consejo de la Judicatura Federal; así como la nulidad de los actos de cobro, amenaza de corte y suspensión de servicio, contenidos en las facturas números TOO114085 y TOO121863, con fechas de vencimiento veintinueve de noviembre de dos mil dos y veintinueve de enero de dos mil tres, respectivamente.

Por acuerdo recaído el día seis de febrero de dos mil tres, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, admitió trámite la demanda y ordenó correr traslado y emplazar a las autoridades demandadas, así como al subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, por tener la calidad de parte en ese juicio, conforme al artículo 33, fracción 111, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. También concedió a la actora la suspensión de los actos impugnados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban,

hasta que tanto se dictara la sentencia respectiva, esto es, para que no se efectuara el corte o suspensión del servicio de agua potable, y para que no se realizara el cobro del crédito fiscal derivado de las facturas impugnadas.

c).- Por escrito presentado ante la sala ordinaria, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil tres, el director general del organismo denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, dio contestación a la demanda; el gobernador del Estado hizo lo propio, mediante promoción presentada el veinticinco de marzo del mismo año; y el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, contestó el escrito de demanda en la misma fecha que el gobernador de esa Entidad Federativa.

Expediente número 251/2003:

a).- Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil tres, Alejandro Romero Gudiño, en su calidad de director general de Asuntos Jurídicos y representante legal del Consejo de la Judicatura Federal, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución negativa ficta atribuida al gobernador del Estado de Nuevo León, respecto de la solicitud de exención que dicho consejo le planteó, en relación con los derechos de agua potable y alcantarillado, presentada el veintinueve de enero de ese año; así como la



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

nulidad de los actos de cobro, amenaza de corte y suspensión del servicio, realizados por la institución pública descentralizada .Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, derivados de las facturas números TOO131509 y TOO134126, con fechas de vencimiento de veintiocho de abril y veintinueve de mayo del mismo año.

b).- La demanda de nulidad se admitió en los términos planteados el dieciséis del mes de mayo de dos mil tres, por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien ordenó emplazar a las autoridades demandadas y otorgó la suspensión de los actos impugnados, para el efecto de que no se efectuara el corte o suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado, y para que no se realizara el cobro del crédito fiscal derivado de las facturas impugnadas.

c).- El treinta de julio de dos mil tres, dio contestación a la demanda el apoderado general para pleitos y cobranzas y representante legal del organismo denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; lo propio hizo el gobernador del Estado, por conducto del secretario General de Gobierno, mediante promoción presentada el ocho de agosto de dos mil tres.

d).- El día diez de septiembre de dos mil tres, la parte actora amplió su demanda de nulidad, misma que fue admitida el once del mismo mes y año.

e).- El apoderado general para pleitos y cobranzas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, acudió a contestar la ampliación de demanda el día uno de octubre de dos mil tres; mientras que el gobernador del Estado y el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo hicieron el veinticinco de noviembre de esa anualidad.

Ambos expedientes:

a).- Por acuerdo de fecha ocho de dos mil cuatro, antes de que en ambos juicios se llevara a cabo la audiencia de pruebas y alegatos respectiva, a que se refiere el artículo 82 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, se ordenó la acumulación del diverso juicio contencioso número 251/2003, del índice de la misma sala ordinaria, al juicio contencioso número 051/2003, por ser éste el más antiguo.

b).- En fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro, la Primera Sala Ordinaria procedió a calificar las pruebas ofrecidas por las partes, y se señaló hora y fecha para que se llevaran a cabo las audiencias de pruebas y alegatos en los juicios contenciosos acumulados

DRTE D
INA
E ACUE

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON**
PODER EJECUTIVO

c).- Sin mayores actuaciones relevantes, para la reseña que se realiza, la parte actora presentó sus alegatos el día dieciocho de febrero de dos mil cuatro.

d).- El veinte de febrero del mismo año, a las diez horas, se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente al juicio contencioso número 051/2003; y en la misma fecha, pero a las once horas del día, se practicó la relativa al diverso juicio acumulado 251/2003.

e).- El treinta de marzo de la misma anualidad se dictó al sentencia de primera instancia por parte de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.

d).- En contra de esa determinación, la parte actora interpuso recurso de revisión, mismo que admitido y tramitado, fue resuelto por magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.

e) Dicha resolución constituye el acto que en esta vía se reclama, y se basó en las siguientes consideraciones elementales:

1.- Sostuvo la sala, que por técnica procesal analizaría los agravios hechos valer en el recurso de revisión, en el siguiente orden: primero, cuarto, segundo, tercero y quinto.

2).- Que el primero de los agravios planteados en el recurso de revisión era fundado pero inoperante, pues si bien del análisis integral efectuado al agravio segundo de la demanda de nulidad, se advertía que la actora no hizo referencia a la inconstitucionalidad del acto impugnado, sino que señaló que el artículo 9° del acuerdo expedido por el Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho no se encontraba en armonía con lo previsto en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, de lo que se infiere la existencia de una violación al principio de supremacía constitucional; sin embargo, la inconstitucionalidad reclamada por el consejo de la Judicatura Federal, no podía ser objeto de estudio por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues carece de competencia para ello, en razón de que su propósito fundamental es salvaguardar y controlar la legalidad.

3.- Que el cuarto de los agravios planteados en el recurso de revisión por la ahora quejosa, era infundado, pues el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo número 051/2003, consistente en la resolución contenida en el oficio número 179-R-1 0-1/2002, de fecha 05-

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**
PODER EJECUTIVO

cinco de diciembre de dos mil dos, emitida por el director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, institución pública descentralizada, en la que se determinó negar la exención solicitada; resulta legal, si se toma en cuenta que las cuotas por el servicio de agua potable y alcantarillado no son contribuciones, pues una de las características principales de la contribución es la existencia de una relación tributaria, que consiste en un vínculo jurídico que se establece entre un sujeto llamado activo (Estado), y otro sujeto llamado pasivo (el contribuyente), cuya única fuente es la ley y nace en virtud de la ley, por la cual en la realización el contribuyente se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con ciertas obligaciones formales y entregar al Estado cierta cantidad de bienes, generalmente dinero que éste debe destinar a la satisfacción del gasto público, supuestos que en el caso no se reúnen; en tanto a que la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, establece el pago de derechos por servicios prestados por diversas secretarías del Gobierno Local, por lo que para que a un particular se le exija el pago de una cuota por concepto de derechos, es preciso que haya recibido un servicio a través de una secretaría de Estado y no por conducto de un organismo descentralizado (Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey); que la obligación del usuario para el pago del servicio de agua y drenaje no deriva de una ley tributaria, pues la misma deviene de un contrato administrativo de adhesión, que al efecto celebra la institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey con los usuarios, por lo que en este caso no existe una relación tributaria entre el Estado y el contribuyente, la cual es característica propia de las contribuciones; que los ingresos que se obtienen por el pago del servicio de agua y drenaje, pasan a formar parte del patrimonio del organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues así se establece en el artículo 3º inciso c) de la ley que crea la institución pública descentralizada, por lo que los ingresos que se obtienen por los servicios de agua y drenaje no van encaminados a satisfacer el presupuesto de egresos de la Administración Pública Estatal, sino que éstos son destinados para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema; que, de conformidad al artículo 63 fracciones IX y X de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es facultad exclusiva del Congreso del Estado, establecer contribuciones y demás ingresos que deberán formar la Hacienda Pública Estatal y Municipal, y en el presente caso, no son establecidas por dicho Congreso, pues de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado, estas son aprobadas por las siguientes instancias: a) En las zonas conurbadas cuyos servicios se presten por los organismos públicos descentralizados o concesionarios, su aprobación será por el Estado, a través del Ejecutivo a propuesta del Consejo de Administración, en los términos de lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera del Estado; b) En los Municipios

1

2

3

100



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**
PODER EJECUTIVO

cuyos servicios se presten por organismos públicos descentralizados Municipales, a propuesta de la Junta de Gobierno de éstos mismos, su aprobación corresponderá al Ayuntamiento; c) En el caso de los Municipios, si el servicio es prestado por concesionarios, las cuotas o tarifas serán aprobadas por el Ayuntamiento; d) En el caso de los organismos intermunicipales, se estará a los convenios que celebren los municipios correspondientes; que la fijación de las tarifas y cuotas por la prestación del servicio, no depende de la voluntad o de la capacidad económica de los consumidores, sino de los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el Estado; que la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que presta el servicio no dispone de medios auxiliares y coactivos para el cobro de las tarifas, en forma directa.

Con base en todo ello, la autoridad responsable concluyó que, contrario a lo manifestado por la recurrente en su recurso de revisión, el pago por servicios de agua y drenaje no constituye una contribución, por lo que se demuestra que en el presente caso es inaplicable el artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución Federal, y de la tesis de jurisprudencia que invocó la recurrente en su escrito de recurso, cuyo rubro es: BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DETENTAN ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO C).

§ 4.- Que el pago de servicios de agua y drenaje de conformidad al artículo 4 o del Código Fiscal del Estado, es considerado como un aprovechamiento, pues así lo prevé dicho numeral, en su primer párrafo.

§ 5.- Que no existe norma constitucional ni ley secundaria que establezca que la exención prevista en el artículo 115, apartado IV inciso c), deba hacerse extensiva a los servicios prestados por las instituciones públicas descentralizadas del sector estatal; ni la parte actora establece cuál es el dispositivo legal que obligue al Estado, y/o a la mencionada institución pública descentralizada, a respetar las cargas motivadas al haberse arrogado la prestación de los servicios de agua potable que originariamente le correspondía a los municipios, por lo que, al no estar establecido en forma expresa en un dispositivo legal la exención pretendida por la demandante, lo procedente era confirmar la determinación de la sala de origen en el sentido de que, en el Estado de Nuevo León los bienes inmuebles del dominio público sí están obligados a pagar los servicios de agua potable y drenaje, cuando éstos sean prestados por organismos diversos a los municipios y que no pertenezcan a la administración pública municipal.

RT
NA
E ACUERDO



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

§ 6. - En cuanto a los agravios segundo y tercero, sostuvo que eran infundados, ya que al respecto se debía tomar en considerarse lo resuelto, en cuanto a que el pago por la prestación del servicio de agua y drenaje, no constituye un derecho, sino un aprovechamiento, de ahí que con base en esas ideas, no puede sostenerse válidamente que el gobernador del Estado sea la autoridad competente para resolver la solicitud de exención por concepto de pago de servicios de agua y alcantarillado planteada ante él, por la parte actora, puesto que si bien es verdad que, el artículo 41 fracción I del Código Fiscal para el Estado, faculta al Ejecutivo Estatal, para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago en plazos y diferido o en parcialidades; no menos cierto resulta que, el pago por servicios de agua y drenaje no constituye una contribución, pues a éste no le es atribuido el carácter de derecho, como expresamente lo manifestó la recurrente en su escrito de agravios.

§ 7.- Que, contrario a lo aducido por la accionante en el juicio, el director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, sí tiene competencia para dar contestación al escrito elevado al gobernador del Estado, la cual deriva de los artículos 15 y 41 de la Ley de Agua potable y saneamiento del Estado, así como de los diversos artículos 9 y 10 de la ley que crea la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues del contenido de dichos preceptos legales se puede advertir que la referida institución es la encargada de prestar, operar, dar el debido mantenimiento y administrar el servicio público de agua y drenaje.

§ 8.- Que por lo tanto, resultaba legal el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo número 051/2003, tocante al acto atribuido al gobernador del Estado, consistente en la omisión de contestar la solicitud de exención presentada por la parte actora, pues del contenido del diverso acto impugnado, consistente en la resolución de fecha cinco de diciembre del año dos mil dos, emitida por el director General de Agua y Drenaje de Monterrey, se advierte que dicha solicitud fue contestada, y por ende el gobernador del Estado, quien es el presidente del Consejo de Administración de la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, respetó el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal pues una autoridad subordinada suya, como lo es el director General de la referida institución, emitió la respuesta a la precitada solicitud de exención.

§ 9.- Que por otra parte, carecía de fundamento jurídico la aseveración hecha por la recurrente en el sentido de que, el gobernador del Estado, debió comunicarle que no era competente, una vez que remitiera su escrito

RT
NACION
ACUERDO

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**
PODER EJECUTIVO

al director General de Agua y Drenaje de Monterrey, pues la demandante no establece qué dispositivo legal fue violentado por el gobernador del Estado, al remitir su solicitud al director General de Agua y Drenaje de Monterrey, para que éste le diera respuesta, y aunque el gobernador del Estado no dio respuesta directamente, una autoridad de la misma dependencia, en este caso, de la institución pública descentralizada, Agua y Drenaje de Monterrey, de la cual aquél es el presidente de su Consejo de Administración, fue la que dio contestación a la solicitud de exención del pago de servicios de agua y alcantarillado.

§ 130.- En cuanto al quinto agravio, en el cual se adujo substancialmente, que la sentencia recurrida violaba el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos, por no haberse aplicado el artículo 115, fracción IV inciso c), constitucional, la responsable, consideró que la sentencia recurrida no violenta el principio de supremacía constitucional, puesto que dicho dispositivo no establece que los jueces de cada Estado, (en el presente caso sería la magistrada de la Primera Sala Ordinaria de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Nuevo León) en sus resoluciones tengan el deber de aplicar la Constitución, las leyes federales que de ella emanen y los tratados suscritos por el presidente de la República y aprobados por el Senado del Congreso de la Unión, en lugar de las leyes ordinarias; además de que el tribunal contencioso administrativo carece de competencia para dilucidar tal cuestión

En relación con tales estimaciones de la sala responsable, la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, en sus conceptos de violación tercero y octavo, que se vinculan entre sí, plantea en esencia, que la sentencia que se impugna transgrede en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la autoridad responsable no analizó debidamente el contenido del artículo 115 fracción IV incisos a) y c), de la Carta Magna, disposición en la que fue sustentada la solicitud de exención del pago de derechos por la prestación del servicio de agua y alcantarillado, en relación con los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, que se destinan al servicio público de impartición de justicia, ya que de haber hecho una interpretación correcta de esa norma cimera, habría arribado a la conclusión de que dichos bienes corresponden al dominio público de la Federación y que, por ende, la aplicación del precepto constitucional indicado, debe prevalecer sobre una norma sustantiva de carácter estatal, en términos del numeral 133 de la propia Constitución Federal, porque este último ordenamiento es norma de normas, que por su naturaleza de suprema niega la posibilidad de estar sometida a otro cuerpo normativo inferior, y en cambio requiere que toda ley o acto de autoridad esté sometido a ella; de ahí que, si la responsable desestimó los argumentos que al respecto se hicieron valer ante su

TE. D.
LACION
ACUERDO



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

potestad, con base en normas locales, pasó por alto las cuestiones apuntadas, y no ponderó que la figura jurídica de la exención de pago de derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado, a favor de los inmuebles que albergan órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se encuentra prevista y regulada en la propia Carta Fundamental del País, como se señala en las tesis de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevan por rubro: 'BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DEPENDEN, ARTÍCULO, 115 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO C)' y 'DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DE ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL'.

Añade la accionante de amparo, que por lo tanto, también reclama en esta vía de amparo la inconstitucionalidad del artículo 9 del Acuerdo Tarifa 2006 expedido por el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y que se publicó en el Periódico Oficial de esa Entidad el día veintiséis de Febrero de dos mil tres, así como su fe de erratas publicada el día veintisiete del mismo mes, conforme al cual la Federación, y cualquier otra institución o entidad pública, están obligadas a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario, de acuerdo con las tarifas y cuotas que les sean aplicables, en términos de los artículos 27, 29, 40, inciso a), y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León; debido a que tal acuerdo del ejecutivo local, contraviene lo que al respecto establecen los artículos 115 fracción IV, incisos a) y c), y 133 de la Constitución Federal, porque en el primero de esos ordinales de la ley Suprema, se plasma la voluntad del legislador federal de considerar exentos del pago señalado, a los bienes del dominio público de la Federación, con independencia de que sea el municipio en forma exclusiva, o en coordinación con otros niveles de gobierno, quien preste el servicio de agua potable y alcantarillado.

Como se puede advertir, el argumento que se propone en los apartados descritos, se encuentra estrechamente relacionado con la inconstitucionalidad de un acuerdo expedido por el gobernador del Estado de Nuevo León, que tanto la parte demandada en el juicio contencioso de origen, como la sala responsable, utilizaron como fundamento para determinar que en el caso particular los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal a que se refiere la litis, que se encuentran destinados a la impartición de justicia, no encajan en el supuesto de exención de pago de derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado.

RECE
NACIONAL
ACUERDO



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

Ahora bien, a fin de resolver lo que corresponde, sobre el alcance de la exención autorizada por el artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución General de la República, en relación con las contribuciones que por servicio de agua y drenaje se determinan a favor de las instituciones titulares de bienes inmuebles de dominio público, es menester tomar en cuenta lo que dicho precepto prevé sobre el particular, en los siguientes términos:

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberá n contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando al inicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;

IV. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Peribirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por bases y cambio de valor de los inmuebles.

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Esta norma de máxima jerarquía, encuentra su origen en el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del día tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, por cuya virtud se establecieron en la Constitución un conjunto de reglas básicas tendientes a fortalecer y preservar al Municipio libre y, específicamente, a la Hacienda Municipal, a modo de garantizarle un mínimo de ingresos por diversos conceptos, según se explica en la iniciativa presidencial de la cual derivó el decreto de reformas referido, cuando en la parte conducente dice:

RTE
NACIONAL
DE
'Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los Municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica. Por ende, en este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en primer término, como concepto originario del artículo 115 la libre administración de su hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones que los Municipios podrán celebrar convenios con los Estados para que éstos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración contributiva. Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y fundamentalmente también los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos a su cargo.'

2

2

2



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

Por último, en esta área hacendaria, se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas participaciones. Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consustanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios. Además, como consecuencia lógica del principio de la libre administración de la Hacienda Municipal, se propone que los presupuestos de egresos de los Municipios deban ser aprobados sólo por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos que se les hubiesen autorizado.'

La decisión de preservar la Hacienda Municipal frente a las decisiones de política fiscal de las Legislaturas Estatales, a fin de evitar que aquélla fuera gravemente afectada por cualquier género de exenciones en favor de sujetos determinados, provocó que en la iniciativa presidencial de que se trata y en los dictámenes elaborados por las comisiones respectivas, los órganos parlamentarios, se sentara con toda claridad que el propósito del órgano reformador fue disponer, como regla general, que no se autorizaban las exenciones del pago de las contribuciones reservadas a la hacienda municipal y que sólo por excepción procedían aquellas referentes a los bienes de dominio público de la Federación, los Estados y los propios Municipios, como se corrobora con la lectura de los dictámenes formulados sobre la iniciativa de reformas, de los cuales se transcriben las partes de interés:

'En forma particularmente acuciosa fueron estudiados por las comisiones dictaminadoras, los términos en que la iniciativa redactó la fracción IV del artículo 115, sobre la que fue notable el número de aportaciones y comentarios de los ciudadanos senadores. Por principio, en esta fracción se orienta lo que por origen ha correspondido siempre a los Municipios, o sea, su facultad de administrar libremente la Hacienda Municipal, la que en los términos del proyecto se enriquece notablemente al conformarla con contribuciones y participaciones que el propio texto enumera, mereciendo particular relevancia las participaciones por contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y su tasa adicional por todos los conceptos. Se

ACUERDO

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

establece así un sentido de territorialidad en materia fiscal, que hace que los ingresos por impuestos prediales se reviertan en favor de la localidad en la que los predios y toda propiedad inmobiliaria adquieran valor económico por su uso y circulación, lo cual ya no estará sujeto, una vez establecida la vigencia de esta fracción, a reversión de ningún tipo. Como un principio de congruencia y también de justicia, formarán parte de la Hacienda Municipal los ingresos que provengan por la prestación de los servicios públicos a cargo de los Municipios. Cabe destacar que, según el texto de la iniciativa, de su exposición de motivos y de las explicaciones escuchadas durante la comparecencia del ciudadano secretario de Gobernación, los ingresos municipales no quedan limitados a lo que expresamente consigna la fracción IV, sino que las Legislaturas Locales podrán agregar otros renglones importantes como aprovechamientos, productos, financiamientos, cooperaciones diversas, y otros rubros cuya terminología varía con la dinámica del propio desarrollo y no es por ello susceptible de quedar consignado en un precepto de rango constitucional. Quedó entendido asimismo que la distribución de las participaciones que la Federación entrega a los Municipios habrá de realizarse a través de las normas que expidan los Congresos Locales, los cuales adecuarán en forma equitativa lo que corresponda a cada uno de ellos, con lo que se eliminan arbitrariedades, caprichos y desórdenes. Novedad que fortalece al Municipio es la autorización para que con el gobierno de su Estado celebre convenios de coordinación de alguna de las funciones relacionadas con la administración impositiva, sin necesidad de organización compartida que no deba gravitar sobre los recursos municipales ni entenderse como forma obligatoriamente perpetua, sino susceptible de eliminarse en la medida en que la autosuficiencia municipal acceda al campo de su capacidad administrativa. La determinación de los impuestos cuya recaudación beneficiará al Municipio así como de ciertos derechos, no hace limitativos los renglones de ingresos y sí permite, inicialmente, conocer con certeza las fuentes primarias propias e intocables del haber municipal, estableciendo la posibilidad de convenir con el Estado que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones. Rasgo importante de su autonomía es que sus presupuestos de egresos serán aprobados internamente por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Siendo pues clara la intención del órgano reformador de la Constitución de garantizar, por un lado, la subsistencia de la Hacienda Municipal, delimitando con toda claridad las fuentes de ingreso reservadas al Municipio y, por otro, restringir las exenciones de pago de los ingresos provenientes de dichas fuentes, permitiendo sólo las relativas a los bienes de dominio público, importa identificar con precisión tales fuentes de ingreso reservadas al Municipio, que se enumeran en los incisos a) al c), de la fracción IV, del numeral 115 en análisis, y que son las siguientes:

12



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

- a).- contribuciones sobre propiedad inmobiliaria
- b).- participaciones federales
- c).- ingresos por la prestación de servicios públicos

De estas tres categorías, interesan para la resolución del presente asunto las descritas en los incisos a) y c), que son las vinculadas a las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria y a las contribuciones derivadas con motivo de los servicios públicos prestados por la administración municipal.

Sobre esos ingresos de la Hacienda Municipal, la fracción IV, del artículo 115 constitucional, dispone expresamente: 'Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) ni concederán exenciones en relación con las mismas. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.'

De ello se infiere que el autor de la norma, al disponer que los bienes de dominio público de la Federación se encontrarán exentos del pago de las contribuciones previstas para los municipios, se refirió tanto a las derivadas de la propiedad inmobiliaria, como a las que surgen de ingresos captados por la hacienda municipal por la prestación de servicios públicos.

Luego, si a estas dos categorías de ingresos tributarios se refiere claramente el autor de la norma, cuando prescribe que sólo se autorizarán las exenciones por los bienes de dominio público, resulta por tanto claro para este tribunal colegiado, que el caso de las contribuciones (derechos) por el servicio de agua que presta el Municipio, se halla efectivamente incluido en el supuesto de exención de mérito, con independencia de que el servicio público de agua potable y alcantarillado lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, como en el caso lo es "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", pues la propia norma fundamental que contempla la exención, dispone en su fracción III, que una de las bases de la organización política y administrativa municipal, que tienden a asegurar su libertad hacendaria, consiste en que los municipios tengan a su cargo, entre otras funciones, la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y que únicamente cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo

(

(

(

1



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; de ahí que tal disposición no implica que los ingresos que por tales rubros se obtienen, dejen de formar parte de los recursos municipales y pasen a pertenecer al Estado, sino que solamente se trató de apoyar a dichas haciendas para darles oportunidad de que adquirieran autosuficiencia en la administración de tales haberes, como se aprecia de la lectura de los dictámenes de las comisiones legislativas. A que se ha hecho alusión en párrafos precedentes, y que en la porción relativa indican:

... Novedad que fortalece al Municipio es la autorización para que con el gobierno de su Estado concerte convenios de coordinación y éste ejecute alguna de las funciones relacionadas con la administración impositiva, necesidad de organización compartida que no deba gravitar sobre los recursos municipales ni entenderse como forma obligatoriamente perpetua, sino susceptible de eliminarse en la medida en que la autosuficiencia municipal acceda al camino de su capacidad administrativa.

La determinación de los impuestos cuya recaudación beneficiará al Municipio así como de ciertos derechos, no hace limitativos los renglones de ingresos y sí permite, inicialmente, conocer con certeza las fuentes primarias propias e intocables del haber municipal, estableciendo la posibilidad de convenir con el Estado que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones...

Por lo tanto, no es óbice lo que argumenta la autoridad responsable en la sentencia reclamada, en el sentido de que el supuesto de exención establecido en el artículo 115, fracción IV inciso c), no se surte en el caso, porque no es el municipio quien presta el servicio público de agua potable y drenaje, sino que el mismo es prestado por un organismo público descentralizado del Estado, denominado 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey', pues tal como ya se ha señalado, las cuotas que pagan los particulares por la prestación del servicio público de agua y drenaje forman parte de los recursos municipales por propia disposición constitucional, y participan de las características de los derechos, con independencia de que el servicio que preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, porque la coordinación celebrada con el Estado para que éste preste el servicio por medio de un organismo como el señalado, que fue creado exclusivamente para ese fin, no es perpetua sino temporal por mandato de la norma suprema, y no debe afectar la calidad de 'recursos municipales' que corresponde a esas cuotas, sino que es factible revertirla cuando los municipios tengan la capacidad de hacerse cargo directamente de la prestación del servicio



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

público. Dicho de otro modo, no se debe atender a una interpretación estrictamente literal (que se queda en la superficie) del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal para desentrañar de qué naturaleza son, y a quién corresponden en realidad, los recursos de que se habla, sino que es necesario efectuar una interpretación sistemática y hermenéutica de esa disposición para entender su verdadera naturaleza y justificación.

ANTE DE

Reflexión de lo anterior, es el hecho de que en la Constitución Política del Estado de Nuevo León, también se dispuso la libertad hacendaria de los municipios de la Entidad, y que la prestación del servicio público de que se trata queda a cargo de los mismos, de manera exclusiva y temporal, con la posibilidad de revertir el acuerdo de coordinación con el Estado, cuando la necesidad que lo justifica desaparezca. Así se deduce de los artículos 119, 120 y 132 de ese ordenamiento local, que en lo relativo dicen:

ARTICULO 119.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la que se integrará por las contribuciones, aprovechamientos, productos, financiamientos y otros ingresos que la Legislatura establezca a su favor, así como con las participaciones y aportaciones federales que les correspondan o reciban de acuerdo a la ley.

El Congreso del Estado no expedirá leyes que establezcan exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y los de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

(...)

ARTICULO 130.- Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal deberá expedir el Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivos territorios, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

(...)

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

4



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente la Legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

ARTÍCULO 132.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera de los municipios, los que previo acuerdo entre sus ayuntamientos y sujeción a la ley, podrán coordinarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponde. Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

Las funciones y servicios públicos enumerados, que sean prestados por el Estado, por sí o de manera coordinada con los municipios, podrán ser asumidos por el municipio que corresponda. La autoridad municipal, previa autorización del ayuntamiento, deberá remitir al Gobierno del Estado la solicitud respectiva a fin de que éste disponga lo necesario para que la transferencia se realice de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la solicitud.

(...)"

No escapa al juicio de los que resuelven, que los artículos 15 y 41 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado e Nuevo León, así como los artículos 2° y 3° de la Ley que Crea una Institución Pública Descentralizada con Personalidad Jurídica Propia y con Domicilio en la Ciudad de Monterrey, que se denomina 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey'; prevén que en la zona conurbada del área metropolitana, que comprende los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y el parque Ciudad Industrial Mitras, en García, Nuevo León; los servicios de agua potable y saneamiento, se prestarán por el organismo público estatal descentralizado a que se hace alusión, quien se encargará de la operación, mantenimiento y administración de las fuentes

,

,

,



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**
PODER EJECUTIVO

de abasto de agua subterránea y superficial que se aprovechan para el suministro del área metropolitana; que las cuotas y tarifas que se fijan por tales servicios se destinarán a cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mantenimiento del sistema; y, que el patrimonio de tal organismo se integrará con los bienes y derechos afectos al servicio público de que se habla; sin embargo, no es dable sostener que la institución pública descentralizada es absolutamente independiente del Estado y de los municipios que conforman el área metropolitana, dado que no se debe perder de vista que es un organismo estatal y que, por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que se debe atender en todo caso en atención al principio de supremacía, la prestación del servicio corresponde originariamente a los municipios, quienes se pueden coordinar con el Estado para que éste se encargue de prestarlo por sí o por conducto del organismo que se cree al efecto, como también se preconiza en la propia Constitución Local y en el artículo 15 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León; además de que en términos del numeral 4° de la ley que creó tal ente público, los consabidos bienes y derechos están afectos exclusivamente a la consecución de su objeto, que es la prestación de un servicio que originalmente está a cargo de los municipios y, por ende, será nulo cualquier acto o contrato que los distraiga de ese fin.

La naturaleza originaria de un servicio público a cargo de los municipios, que le corresponde al servicio de agua potable y alcantarillado, no puede desconocerse si se toma en cuenta que de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, su órgano de gobierno estará integrada por los presidentes de los municipios que integran la zona conurbada, entre otros miembros.

Consecuentemente, sería inexacto pensar que los bienes y derechos que conforman el patrimonio de la paraestatal, y que se le han otorgado con el exclusivo fin de que cumpla con la prestación del servicio público de la mejor manera, para descargar a los municipios que conforman el área metropolitana de esa tarea; se encuentran destinados a fines particulares de tal institución, o que las cuotas que recibe a cambio puedan destinarse a otros propósitos propios del servicio que, se insiste, originalmente está a cargo de los municipios y se prestan por un organismo creado por el Estado para la consecución de esos fines específicos.

Además, conforme al artículo 3° del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, las contribuciones locales se clasifican en impuestos, derechos, contribuciones especiales, y por los segundos se entienden las contribuciones que establece la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que

1

2

3

4

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

presta el Estado en sus funciones de derecho público, dentro de los cuales presta el servicio de agua y alcantarillado; sin que se pueda considerar a dichas cuotas como un aprovechamiento, como incorrectamente lo pretende la responsable, dado que los aprovechamientos son otro tipo de ingresos que percibe el Estado, también por funciones de derecho público, pero que no tienen el carácter de contribuciones, según lo señala el artículo 4° de la citado código, que expresamente dice:

Artículo 4.- Son aprovechamientos los ingresos distintos de las contribuciones que percibe el Estado por funciones de derecho público, como los ingresos derivados de financiamientos y los que obtengan los organismos descentralizados que no tengan la naturaleza de derechos."

Es decir, mientras que los derechos siempre son ingresos que consisten en sumas de dinero, que el Estado cobra a las personas que se benefician por la prestación de un servicio en funciones de derecho público, como lo es el servicio de agua y alcantarillado, o bien por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, esto es, una remuneración legal, por un servicio, uso o aprovechamiento de bienes proporcionados por el Estado; los aprovechamientos son ingresos que derivan de otro tipo de funciones de derecho público, como las multas y los recargos, pero no constituyen una cantidad que se entrega a cambio de un beneficio prestado por el Estado.

La calidad de contribuciones que les corresponde a las cuotas indicadas, se corrobora con la circunstancia consistente en que el artículo 16 de la Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada que se denomina "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", clasifica como créditos fiscales los adeudas relacionados con las mismas, y permite que tal organismo las haga efectivas a través de la vía económica coactiva, con apoyo de la Tesorería General del Estado; dicho precepto dispone:

Artículo 16.- Los adeudas procedentes de la prestación de los servicios de agua y drenaje tendrán el carácter de créditos fiscales; para hacerlos efectivos la Tesorería General del Estado auxiliará a la Institución aplicando la facultad económico-coactiva.

Amén de lo expresado, existen diversas tesis del Máximo Tribunal de la República, en las que se ha dado el tratamiento de derechos a las cuotas que nacen del servicio de agua potable, como la que se identifica con el número 2º. CLXV/2000, sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 423, tomo XII, diciembre de 2000, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce enseguida:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

AGUA POTABLE. EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO NÚMERO 8 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 20 DE DICIEMBRE DE 1996, QUE ESTABLECE DIVERSAS TARIFAS PARA CALCULAR EL MONTO DE LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Conforme a lo dispuesto en las cuatro fracciones que integran el referido precepto para calcular el monto de los derechos por el servicio de suministro de agua potable son aplicables diversas tarifas con diferentes estructuras de rangos y tasas, dependiendo de que el vital líquido se obtenga de tomas para uso doméstico popular, doméstico residencial, comercial o industrial, o de inmuebles del sector público. Ante ello, atendiendo al criterio contenido en la tesis jurisprudencial P./J. 4/98, visible en la página 5 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1998 cuyo rubro dispone: "DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD.", debe concluirse que las tarifas establecidas en el referido precepto, no son violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que, por una parte, respecto de los contribuyentes que reciben el servicio de una toma del mismo tipo, la aplicación de una cuota diferente atendiendo al volumen consumido de agua se justifica por la circunstancia de que mientras mayor sea el consumo del vital líquido, el costo por metro cúbico también se incrementará, pues ante la escasez de ese recurso, su mayor consumo provoca renovar los gastos para su captación y suministro, por lo que la actividad de la administración encaminada a la prestación de ese servicio no implica un esfuerzo uniforme; y por otra parte, la aplicación de una tarifa diferente atendiendo al tipo de toma de agua se justifica por el hecho de que en razón del destino que se dé a ésta el costo de su suministro tampoco será el mismo pues al existir entre los diversos grupos de usuarios del servicio una propensión a utilizar en promedio diferentes volúmenes de agua, dependiendo del tipo de toma, serán mayores o menores los recursos que el Estado debe destinar para procurar la continuidad del servicio de que se trata.'

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

tesis número 2ª. CXXVIII/2000, de la citada sala, publicada en la página 20, tomo XII, octubre de 2000, Novena Epoca, del indicado Semanario, que a continuación se transcribe:

AGUAS NACIONALES. PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DERECHOS QUE GRAVAN SU APROVECHAMIENTO, DEBE DISTINGUIRSE RESPECTO DE LAS DIVERSAS CONTRIBUCIONES QUE RETRIBUYEN EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Para abordar el estudio de constitucionalidad de las disposiciones que regulan los derechos por aprovechamiento de aguas nacionales, es necesario distinguir entre éstos y los diversos que se causan en virtud de recibir el servicio público de suministro de agua potable, los que se diferencian, entre otros factores, por su hecho imponible o tasable, por los principios que rigen el análisis de su proporcionalidad y equidad, así como por el órgano legislativo que en ejercicio de su potestad tributaria los establece. En cuanto a las aguas nacionales a que se refiere el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución General de la República, el legislador ha determinado gravar su aprovechamiento mediante un derecho de los previstos en la ley federal relativa, cuyo hecho tasable se traduce en la explotación, uso o aprovechamiento del agua con motivo del acto permisionario del Estado, para obtener un beneficio individual y determinado; y atendiendo a la naturaleza de este hecho, en la tesis jurisprudencial P./J. 87/97, visible en la página 171 del Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las contribuciones de esa naturaleza cumplen con el principio tributario de proporcionalidad cuando el monto a pagar guarda una relación directa con el grado de aprovechamiento del bien, con el beneficio obtenido por el gobernado y con la zona de disponibilidad de la que se deduce el valor de dicho bien, tomando en cuenta su abundancia o escasez, el demérito que sufre con su uso y la importancia que el mismo representa para el desarrollo de la nación; además, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, punto 2o, de la propia Norma Fundamental, el establecimiento de contribuciones que graven el aprovechamiento de aguas nacionales corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión. Ahora bien, a diferencia de lo anterior, existen diversos derechos establecidos generalmente por las Legislaturas Locales, cuyo hecho tasable es el servicio municipal de suministro de agua potable, prestado en términos de lo previsto en el artículo 115, fracción 111, constitucional, tributos que al tenor de la tesis jurisprudencia P./J. 4/98, consultable en la página 5 del Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cumplen con los referidos principios constitucionales cuando al establecerlos se

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

atiende objeto real del servicio prestado por la administración pública considerando su costo y otros elementos que inciden en su continuidad, en razón de que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución. Por tanto, al analizar la constitucionalidad de las disposiciones que regulan los derechos por aprovechamiento de aguas nacionales, el juzgador de garantías debe tomar en cuenta las distinciones antes

tesis de jurisprudencia número P./J. 4/98., del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 5, tomo de enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y texto siguiente:

DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUITAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD. La Suprema Corte ha sustentado en diversas tesis jurisprudenciales que las leyes que establecen contribuciones, en su especie derechos por servicios, fijando una tarifa o una cuota aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos ajenos al costo del servicio público prestado, violan los principios de proporcionalidad y equidad, ya que ello da lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso. Por otro lado, tratándose de los derechos por el servicio de agua potable, ha tomado en consideración, para juzgar sobre los citados principios constitucionales, no la simple correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y otras razones de tipo extrafiscal. Del examen de ambos criterios, se concluye que este Alto Tribunal ha sentado criterios distintos para derechos por servicios de naturaleza diversa, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público, que trasciende tanto a su costo como a otros elementos que inciden en la continuidad y permanencia de su prestación. Ello porque tratándose de derechos causados por servicios el objeto real de la actividad pública se traduce, generalmente, en la realización de actividades que exige de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del diverso de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación,



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable de los usuarios, repercuten en la prestación del servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas.'

Ahora bien, en el caso específico, la solicitud de exención presentada por el Consejo de la Judicatura Federal al gobernador del Estado de Nuevo León, se fundó, entre otras disposiciones, en el artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales vigente en los años dos mil dos y dos mil tres. Es el caso que dicho ordinal, así como los numerales 1º y 2º de ese mismo cuerpo de normas, que no habían sufrido reformas desde el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, señalaban:

'Artículo 1º.- El patrimonio nacional se compone de:
I. Bienes de dominio público de la Federación y
II. Bienes de dominio privado de la Federación. '

'Artículo 2º.- Son bienes de dominio público:

(...)

V. Los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos conforme a la ley;

(...).'

'Artículo 34.- Están destinados a un servicio público y por tanto se hayan comprendidos en la fracción V del artículo 2º:

I. Los inmuebles utilizados por los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación así como por el Poder Ejecutivo y sus dependencias;

II. Los inmuebles destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial;

(...).'

A la luz de los preceptos transcritos se aprecia que se daba la característica de ser de dominio público, a los bienes señalados en el artículo 2º de la Ley General de Bienes Nacionales vigente en esas anualidades, como lo son entre otros, aquellos afectos o destinados por la Federación a la realización de fines e servicios públicos, y dentro de estos últimos se encuentran los que se utilizan por el Poder Judicial de la Federación, o los que ese poder destina a sus servicios.

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

Conviene hacer la aclaración, de que la ley de que se trata fue abrogada por el decreto que creó la nueva Ley General de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil cuatro, en el que también se consideran como bienes sujetos al régimen de dominio público de la Nación, a los inmuebles propiedad de las instituciones federales destinados a la prestación de un servicio público, como se desprende de los artículos 1°, fracciones I y II, 2°, fracción IV, 3°, fracción III y 6°, fracción VI, de ese cuerpo normativo, que expresamente señalan:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer:

I.- Los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación;

II.- El régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los inmuebles de los organismos descentralizados de carácter federal;

AL DE

DE JUST

GENE

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

(...)

IV.- Federación: el orden de gobierno que en los términos de esta Ley ejerce sus facultades en materia de bienes nacionales, a través de los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial;

(...)

Artículo 3.- Son bienes nacionales:

(...)

III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación;

(...)

Artículo 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación:

(...)

VI.- Los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley;

(...)

Por otro lado, es necesario precisar que la pertenencia de los bienes al dominio público de la Federación, en el evento particular, debe acreditarse con la demostración de dos extremos: a) Que forman parte del patrimonio de la quejosa, y b) Que se destinan a la realización de un servicio público.

En el caso, en los antecedentes de las demandas de nulidad presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, así como en

(

(

(

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

relativos a la demanda de amparo, la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal adujo ser propietaria de los inmuebles ubicados en calle Diagonal Santa Engracia, número 221, Fraccionamiento Lomas de San Francisco, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y del situado en Avenida Constitución poniente, número 241, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; y manifestó, que tales inmuebles se adquirieron para la prestación de un servicio público federal, ya que en los mismos se encuentran instalados diversos órganos jurisdiccionales que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, de ahí que se trate de bienes sujetos al dominio público.

Se sostuvo además, que respecto de dichos inmuebles se solicitó la exención de pago por el servicio de agua potable y drenaje, petición que fue planteada al gobernador del Estado de Nuevo, por ser ésta la autoridad competente para ello en los términos del artículo 41, fracción I, del Código Fiscal del Estado, solicitudes que fueron elevadas a esa autoridad en fechas once de noviembre de dos mil dos y veintinueve de enero de dos mil tres, respectivamente, que, sin embargo, los días once de diciembre de dos mil dos, veintitrés de enero, treinta de abril y diecinueve de mayo de dos mil tres, la accionante tuvo conocimiento de los requerimientos de pago que le hizo la institución pública descentralizada que se denomina Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, organismo que pretende hacer efectivo el pago del servicio de que se trata, no obstante que, de conformidad con el artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución Federal, los bienes del dominio público de la Federación se encuentran exentos del pago de ese tipo de contribuciones municipales.

La promovente de la instancia constitucional demostró en autos que los inmuebles de que se trata, se encuentran ubicados en alguno de los supuestos que la Ley General de Bienes Nacionales antes citada, considera como bienes del dominio público de la Federación.

En efecto, entre las constancias exhibidas en el juicio contencioso administrativo de origen, se encuentran las siguientes pruebas:

E. DE
a. Testimonio de la escritura pública número uno, libro uno, pasada ante la fe del notario público número ciento setenta y cuatro del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal, en la que consta el contrato de compraventa celebrado el trece de diciembre de dos mil uno, a través del cual el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, adquirió el inmueble ubicado en Diagonal Santa Engracia, número 221, Fraccionamiento Lomas de San Francisco, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

(

(

(



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

106

b) Testimonio del contrato de compraventa número CV/002/95, de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, representada por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, con la intervención del secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, adquirió el inmueble ubicado en Avenida Constitución poniente número 241, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Ahora bien, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se estima que las pruebas ya mencionadas, correlacionadas con la circunstancia de que es un hecho notorio para este tribunal colegiado, que dichos inmuebles se encuentran ocupados por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, demuestran que los citados bienes son del dominio público de la Federación, pues de ello se deduce que se encuentran destinados directamente a la prestación del servicio público federal de impartición de justicia, en términos de los artículos 17, 94, 103, 104, 106 y 107 constitucionales, 1º, 29, 37, 48, 50, 50 bis, 50 ter, 51, 52, 53, 54, 55 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En las relatadas condiciones, es incuestionable que se demostró que los inmuebles descritos se encuentran destinados a los fines a que se refieren las fracciones I y II del artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales, vigentes en dos mil dos y dos mil tres, es decir, a la prestación del servicio público federal de impartición de justicia, por lo cual encuadran en el supuesto de exención, previsto en el artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional.

Así, si el servicio público de agua potable y alcantarillado es prestado por el Municipio en favor de un organismo del Poder Judicial de la Federación, titular de un inmueble sujeto al régimen de dominio público, como en el caso resulta ser el Consejo de la Judicatura Federal, debe entenderse que se actualiza la exención prevista en la norma constitucional objeto de análisis, considerando que fue el propio legislador quien, al remitir la exención a los incisos a) y c) de la fracción relativa, señaló con toda precisión que la exención no sólo regiría para contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sino también para los servicios prestados por el Municipio. Tal precisión carecería de todo significado y no surtiría por tanto algún efecto, si se estimara que la exención se refiere exclusivamente a los gravámenes que se causan por la propiedad raíz, pues tal criterio no sería aplicable, desde luego, a ninguna contribución generada por la prestación

1

2

3

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

de servicios públicos, en la medida en que su hecho generador no se localiza en el bien raíz sino en la actividad desplegada por la administración.

Siendo clara la remisión de la norma a las contribuciones derivadas de la prestación de servicios públicos, no es dable al intérprete acudir a algún criterio que prácticamente deje sin efectos dicha remisión, sobre todo si se considera que cuando el órgano creador vincula los conceptos de contribuciones derivadas de los servicios públicos y bienes de dominio público, permite comprender que se refiere a aquellos servicios que se prestan con motivo, precisamente, de la titularidad de un bien de dominio público, es decir, que se causan por la Federación, los Estados, o los Municipios; en tanto tales servicios los reciben por su calidad de titulares de dichos bienes.

No se trata, como podría estimarse, de una exención que beneficie a las personas públicas por su sola condición de tales, esto es, por el elemento subjetivo de la relación tributaria, sino que opera cuando esas personas públicas utilizan ciertos bienes que por su destino o naturaleza se hallan incorporados al régimen excepcional de dominio público, lo cual explica que para tales personas, en lo que se refiere a los tributos que causen en relación con esos bienes, sea por su propiedad, fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o cambio de valor, sea por los servicios públicos que reciban en relación con esos bienes, estén liberados del pago de los tributos destinados a las arcas municipales, por la trascendencia de la función que desempeñan mediante el empleo de esos bienes y su afectación a un fin determinado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2º/JJ. 22/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 247, tomo V, mayo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

'DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. El penúltimo párrafo de la base IV del artículo 115 constitucional, al cual remite el texto vigente del artículo 122, base primera, fracción V inciso b), del mismo Ordenamiento Fundamental, se debe interpretar en el sentido de que dentro de la exención autorizada para bienes del dominio público de la Federación y los Estados, quedan comprendidos los organismos descentralizados, como titulares de los inmuebles descritos en el artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, por los servicios que



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

12
preste el Municipio en materia de agua potable, toda vez que el autor del precepto constitucional, al autorizar la exención, claramente la hace extensiva no sólo a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, sino también a los ingresos que obtenga el Municipio por los servicios públicos a su cargo, lo cual significa que se refirió a las contribuciones causadas por aquellos servicios que se presten en relación con los bienes de dominio público en favor de la Federación, Estados u organismos descentralizados, en razón de la importancia que atribuyó a la función desarrollada a través de la afectación y destino de tales bienes sometidos al régimen de protección de que se trata.'

Sin embargo, el artículo 9° del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de febrero de dos mil tres, que sirvió de fundamento al director de la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para sustentar los actos impugnados en los juicios contenciosos administrativos de origen, y a la sala responsable para revocar la resolución que se reclama, desatendiendo esa norma suprema

Artículo 9°.- La Federación, el Estado, los Municipios, las empresas de participación estatal, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública o Privada, Universidades, Colegios, Escuelas y demás Centros de Enseñanza, oficiales o privados, y cualquier otra Institución o Entidad Pública, están obligados a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario de acuerdo a las tarifas y cuotas que le sean aplicables de acuerdo a los establecido los artículos 27, 29, 40 inciso "a" y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León.'

De ello se desprende que, conforme al citado acuerdo del gobierno del Estado, la Federación se encuentra obligada a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario, sin excepción alguna, según las cuotas y tarifas que le sean aplicables; disposición que contraviene abiertamente el mandato constitucional consagrado en el artículo 115, fracción IV inciso c), acorde al cual los bienes afectos al régimen de dominio público de la Federación, como los destinados por el Poder Judicial de la Federación al servicio público de impartición de justicia, se encuentran exentos del pago de esas contribuciones.

4

1

2

3

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON**

PODER EJECUTIVO

Así, debe estimarse que le corresponde la razón a la parte quejosa, cuando argumenta que el mencionado acuerdo del gobierno local resulta inconstitucional, porque al pretenderse que una dependencia federal que opera con bienes inmuebles del dominio público de la Federación, pague los derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado, no obstante que la Carta Magna dispone que estarán exentos de esa obligación, significa que la autoridad estatal fue más allá de sus atribuciones en quebranto del régimen fiscal federal especial de exención o, más propiamente, de no causación de contribuciones, que rige a los bienes del dominio público de la Federación.

Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación en estudio resultan fundados y suficientes, para acreditar infracción a los dispositivos constitucionales que invoca la quejosa, particularmente al artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución General de la República, que previene, en la parte que interesa en este asunto, que los bienes del dominio público de la Federación están exentos de las contribuciones que se refieran a los ingresos derivados de los servicios que presten los municipios, como lo son los relacionados con el servicio de agua y drenaje.

Por lo tanto, la autoridad responsable debió en todo caso atender el principio de supremacía constitucional que consagra el artículo 133 de la Carta Magna, acorde al cual, la Constitución Federal constituye la ley suprema de toda la Unión, por lo que las autoridades locales de orden municipal, se arreglarán a la misma a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las normas locales, como en el caso lo es el citado acuerdo del Ejecutivo del Estado.

Como corolario, se impone conceder el amparo demandado, para que la sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, y en su lugar emita otra en la que decrete fundados los agravios primero, tercero y cuarto expresados por la quejosa en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, que se encuentran estrechamente vinculados entre sí y, con base en ello, decrete la nulidad de la resolución expresa que negó la exención solicitada por la demandante, para el efecto de que se emita una nueva resolución en la que se reconozca que sí procede dicha exención.

Al resultar fundados los conceptos de violación que han sido estudiados en este fallo, y suficientes para otorgar la protección federal demandada por aspectos de constitucionalidad, es innecesario ocuparse del estudio de los restantes, relacionados con cuestiones que son propiamente de legalidad, pues la quejosa no podría obtener mayor beneficio que el alcanzado.

1

2

3

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON**

PODER EJECUTIVO

Sobre el particular sirve de apoyo, el criterio que se comparte, derivado de la tesis de jurisprudencia número V.2°, J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser consultada en la página 86, tomo VII, abril de 1991, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia.

Así como la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 72, volúmenes 175 al 180, Cuarta Parte, Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.

Independientemente de lo argumentado en el apartado anterior en este escrito de agravios, pero sin perjuicio del ello, el hecho de que el tribunal "a quo" haya abordado el estudio de lo que consideró como el fondo de la litis constitucional constituye una franca violación al artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo según el cual "... Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.". Como es sabido, este principio jurídico procesal se encuentra reiterado a nivel jurisprudencial, duplicándose así el deber de incursionar el máximo en ese tema, por tratarse de una cuestión de eminente orden público.

No pasa desapercibido para el suscrito lo expuesto en la página 127 de la sentencia recurrida en el sentido de que "... Por lo tanto, se debe convenir, además, en que el presente juicio de amparo resulta procedente, pues es promovido por el órgano facultado para acudir en defensa de los bienes que forman parte del Poder Judicial de la Federación, y que se destinan al servicio público de impartición de justicia...". Pero ese fragmento, en vez de revelar el estudio oficioso de posibles causales de improcedencia, refleja en toda su magnitud el incumplimiento de dicha obligación legal y jurisprudencial, pues evidencia que a esa simple y lacónica (además de incorrecta) consideración se redujo la visualización del tribunal "a quo" sobre la procedencia del juicio de amparo, siendo que la panorámica del tema es

—

—

—



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

muchto más amplia y arroja múltiples causales inadvertidas por el órgano resolutor, debido a su extraño apresuramiento por ocuparse de lo que finalmente resolvió.

Cabe destacar que lo argumentado en todo este agravio puede ser materia del recurso de revisión ahora interpuesto y del cual habrá de conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la siguiente tesis de jurisprudencia:

Jovenes Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VIII, Julio de 1998

Tesis: 2a./J. 46/98

Página: 130

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS CONSIDERACIONES PARA NO ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL O SOBRE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN, DEBEN CONSIDERARSE COMO "CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES" Y, POR TANTO, PROPIAS DE ESTUDIO EN ESE RECURSO. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que entró en vigor el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en la fracción III del artículo 10, estableció que el Pleno de la Suprema Corte conocerá del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las "cuestiones propiamente constitucionales". Como se advierte, dicha disposición reitera el principio constitucional de que en estos casos la materia del recurso debe limitarse a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. Ahora bien, para dar coherencia a las prescripciones anteriores debe considerarse que por "cuestiones propiamente constitucionales" no se entienden exclusivamente los argumentos relativos a la contrastación entre la norma y la Constitución o a la interpretación directa de un precepto de la Carta Fundamental, sino todas aquellas que al expresarse apoyen la imposibilidad de estudiar tales planteamientos. De lo contrario, la citada fracción III sería incompleta, pues bastaría cualquier afirmación del Tribunal Colegiado, por absurda que fuese, para impedir en el recurso de revisión el análisis de los conceptos de violación, relativos a

—

—

—



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

la inconstitucionalidad de normas generales o interpretación dentro de un precepto constitucional.

Tesis de jurisprudencia 46/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho.

ORTE
NACION
DE ALBERTO

En ese sentido, es agravante el haber omitido percibirse de la existencia de las causales de improcedencia que a continuación se detallarán, en la inteligencia de que esto es sin perjuicio de las que de oficio detecte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estará en aptitud de hacerlo al tratarse de una cuestión de orden público que puede hacerse efectiva incluso en la instancia de revisión.

a) El tribunal "a quo" debió percibir y hacer efectiva la causal de improcedencia a que se contrae la interrelación de las fracciones XII y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en que el Acuerdo emitido por la autoridad ahora a mi cargo y respecto del cual se concedió el amparo mediante la sentencia recurrida, deriva de otros actos ya consentidos tácitamente al no haberse reclamado en juicio de garantías dentro del término legal, siendo dichos actos consentidos los artículos 29 y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, cuya vigencia inició al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de fecha 3 de octubre de 1997, o sea más de seis años antes de la fecha del Acuerdo declarado inconstitucional (18 de febrero de 2003).

Para mayor explicitud procedo a transcribir en lo conducente los citados artículos 29 y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León:

ARTICULO 29.- Todo usuario está obligado al pago de las cuotas o tarifas por los servicios de agua potable, drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales.

ARTICULO 43.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios se clasifican en:

I.- CUOTAS.

a) Por cooperación.

b) Por instalación de tomas domiciliarias.

c) Por conexión al drenaje sanitario para aguas residuales provenientes de uso doméstico.

d) Por conexión al drenaje sanitario para aguas residuales provenientes de actividades empresariales (no domésticas), cuando la descarga no sea superior a las concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales

✓

✓

✓



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO



mexicanas y las condiciones particulares de descarga vigentes, en los términos de la legislación aplicable.

b) Por instalación de medidor.

c) Por otros servicios.

II. TARIFAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO EL SANEAMIENTO:

a) Por cargo fijo.

b) Por uso doméstico.

c) Por uso comercial.

d) Por uso industrial.

e) Por servicios a Gobierno y organismos públicos.

f) Por uso de drenaje sanitario solamente.

g) Por uso de aguas residuales.

h) Por uso de aguas residuales tratadas.

i) Por entrega de agua en bloque.

j) Por servicios de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales provenientes de uso doméstico.

k) Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes de actividades empresariales no domésticas, cuando la descarga no sea superior a las concentraciones permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas y condiciones particulares de descargas vigentes, en los términos de la legislación aplicable.

l) Por otros usos.

III.- CUOTAS DE APORTACION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

El organismo público prestador de los servicios de agua y drenaje sanitario establecerá una cuota de aportación para la recuperación del valor actualizado de las inversiones de infraestructura hidráulica maestra realizadas por el mismo y lo recaudado formará parte de los recursos requeridos para la construcción de las obras de infraestructura que consisten esencialmente en las de captación, conducción, potabilización, tanques de almacenamiento, sistemas de bombeo, redes maestras de agua potable, colectores de drenaje sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales, que le hagan posible comprometerse a proporcionar los servicios dentro de las condiciones normales.

En el caso que los servicios sean prestados por un concesionario, se aplicará lo dispuesto en el contrato de concesión.

Para fines de cobro se correlacionará el costo de litro por segundo que corresponda con el tipo de urbanización, el área a ser servida, la demanda o el uso a que sean destinados los servicios según el caso, por lo que la cuota respectiva se determinará de acuerdo a dichos factores, celebrándose el convenio correspondiente entre el interesado y el organismo público prestador del servicio, conforme a los lineamientos establecidos para este efecto.

El cobro de dichas cuotas se podrá hacer por los siguientes conceptos:

a) Terrenos urbanos.

A



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

- a.1) Para fraccionamientos habitacionales.
- a.2) Para fraccionamientos comerciales e industriales.
- b) Subdivisión de lotes.
- c) Locales comerciales e industriales y cambio de giro.
- d) Departamentos habitacionales.
- e) Por contrato de medidor dependiendo del diámetro solicitado.
- f) Por descargas de drenaje sanitario.

Para los usuarios que cuenten con el servicio de drenaje sanitario se cobrará un porcentaje sobre el valor del servicio facturado de agua potable; dicho porcentaje se determinará con base en el costo de la prestación de este servicio.

Notese que son estos dos preceptos los que originariamente imponen a "todo usuario" y al Gobierno y organismos públicos, sin distinción alguna, la obligación de pagar las cuotas o tarifas de agua potable y drenaje sanitario, mas sin embargo el Consejo de la Judicatura Federal no controvertió en forma alguna la constitucionalidad de los mismos, a pesar de haber sido invocado expresamente como sustento del Acuerdo declarado inconstitucional, pues en su artículo 9º se expresa con toda claridad que "La Federación, el Estado, los Municipios, las empresas de participación estatal, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública o Privada, Universidades, Colegios, Escuelas y demás Centros de Enseñanza, oficiales o privados y cualquier otra Institución o Entidad Pública, están obligados a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario de acuerdo a las tarifas y cuotas que les sean aplicables de acuerdo a lo establecido en los artículos 27, 29, 40 inciso 'a' y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León".

Como puede observarse con facilidad, el Acuerdo de referencia es una mera reiteración o reflejo de la disposición legal en el sentido de que "todo usuario", así como el Gobierno y los organismos públicos, deben pagar las cuotas o tarifas de agua potable y drenaje sanitario, y a ello se debe, en el artículo 9º, la mención expresa de La Federación, el Estado, los Municipios, las empresas de participación estatal, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública o Privada, Universidades, Colegios, Escuelas y demás Centros de Enseñanza, oficiales o privados y cualquier otra Institución o Entidad Pública.

Ante esas condiciones, considerando que los invocados artículos 29 y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León no han sido antes ni ahora objeto de acción constitucional alguna, por lo que se encuentran tácitamente consentidos por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 73 fracción XII, primer párrafo de la Ley de Amparo; así como que esos preceptos constituyeron antecedente y sustento expreso del artículo

✓

✓

✓



115

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

9º del Acuerdo antes mencionado, es indudable la integración de la causal de improcedencia antes dicha, corroborándolo así las tesis jurisprudenciales que enseguida transcribo:

Quinta Época
Instancia: Pleno
Fuente: Apéndice de 1995
Tomo: Tomo VI, Parte SCJN
Tesis: 17
Página: 12

ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.
El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.

Amparo en revisión 8/17. Flores Teófilo. 17 de julio de 1918. Unanimidad de once votos.

Tomo III, pág. 411. Amparo en revisión. Sánchez Gavito Indalecio. 7 de agosto de 1918. Mayoría de nueve votos.

Amparo en revisión 84/17. Ruiz vda. de Fuentes Antonia. 9 de octubre de 1918. Mayoría de ocho votos.

Tomo IV, pág. 153. Amparo en revisión. Lobo de González Herminia. 13 de febrero de 1919. Mayoría de diez votos.

Tomo V, pág. 154. Amparo en revisión. López Negrete Laureano. 16 de julio de 1919. Unanimidad de once votos.

Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: VI, Agosto de 1997
Tesis: 2a./J. 32/97
Página: 79

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI SÓLO SE IMPUGNÓ UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOYÁNDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATIÓ. Cuando se reclama un acto de autoridad que se funda en dos ordenamientos distintos y sólo se impugna uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que, aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, sería imposible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía

✓

✓

✓



116

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

individual violada, siempre y cuando el acto reclamado subsista con el solo apoyo del diverso ordenamiento que no se combatió.

Tesis de jurisprudencia 32/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal en sesión privada de dos de julio de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. México, Distrito Federal, a dos de julio de mil novecientos noventa y siete.

Extraña sobremanera que el tribunal "a quo" no haya reaccionado conforme a la ley ante la relatada circunstancia de improcedencia, siendo que en la página 179 de la sentencia recurrida transcribió con toda fidelidad el Acuerdo cuestionado, y por ende tuvo pleno conocimiento de su sustento legal, así como de su sentido y alcance jurídico. Además, en otras partes del fallo desplegó virtudes técnicas que dificultan admitir la incomprensión y efectos de los aspectos reseñados.

b) El tribunal "a quo" también debió detectar y hacer efectiva la causal de improcedencia resultante de la vinculación de los artículos 73 fracción XVIII y 166 fracción VI de la Ley de Amparo, consistente en que lo argumentado por la parte quejosa en su demanda de amparo en torno a la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo de referencia, no constituye propiamente concepto de violación alguno, resultando en consecuencia incumplido el requisito legal de expresarlos al ejercer la acción de garantías.

Para clarificar la causa de improcedencia en alusión es pertinente destacar que, ciertamente, en la demanda de amparo se incluyó como materia de reclamación "... la inconstitucionalidad del artículo 9º del acuerdo tarifa 2003, expedido por el Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 26 de febrero de 2003 y su fe de erratas publicada en el mismo medio de difusión el 27 siguiente..."; pero sobre el particular tan sólo se expuso, en el "Octavo" apartado del capítulo de "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" de la demanda de amparo del caso, lo que a continuación reproduzco literalmente:

Del precepto transcrito se desprende que contraviene lo que al respecto establecen los artículos 115, fracción IV, incisos a) y c), 133 y 31 fracción IV, de nuestra Carta Fundamental.

En efecto, tal y como ya se dijo con anterioridad ningún dispositivo puede ir en contra de nuestra Constitución que es nuestra norma de normas, por lo que el principio de supremacía constitucional en relación con el orden normativo estatal y los órganos de autoridad local no podrán contravenir

✓

✓

✓



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

las estipulaciones de nuestra Carta Magna, por ello, basta la lectura del precepto cuya inconstitucionalidad se reclama para advertir que va en contra de lo que al respecto establece el artículo 115 fracción IV, incisos a) y c), el que claramente el legislador expresó su voluntad de considerar exentos a los bienes del dominio público de la Federación de la obligación de pagar las contribuciones a que se refiere el inciso c), de la fracción IV del precepto anteriormente citado, con independencia de que sea el municipio en forma exclusiva o en concurrencia con otros niveles de gobierno el que preste el servicio, motivo por el cual se reclama su inconstitucionalidad.

Por increíble que parezca, a estos dos breves e insubstanciales fragmentos se constriñen los argumentos vertidos a modo de "conceptos de violación", pues si bien se agregó una tesis aislada de rubro "AMPARO DIRECTO. ES VALIDO QUE EN LA DEMANDA RELATIVA SE ARGUMENTEN CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, AUN CUANDO EN LA VÍA ORDINARIA NO SE HAYAN PLANTEADO", así como una jurisprudencia intitulada "JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AUNQUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL EMITIR SUS ACTOS, SÍ DEBEN CUMPLIR LAS SENTENCIAS EN LAS QUE, CON BASE EN AQUELLA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE SU NULIDAD"; ello nada arroja en cuanto a la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo controvertido en la vía constitucional, por ser completamente ajenas a ese tema de fondo.

RTD
NA 10N
Dichos argumentos esbozados por el Consejo de la Judicatura Federal (dos párrafos conformados por dieciséis líneas) son por completo inatendibles a título de conceptos de violación, pues en verdad no llegan a integrar éstos al tratarse de simples afirmaciones dogmáticas y subjetivas, y no de verdaderos razonamientos específicos y detallados que revelen con precisión la causa de pedir y confronten el Acuerdo reclamado y la normatividad constitucional, para evidenciar la colisión en detrimento de la supremacía de la ley fundamental. Al respecto son elocuentes las siguientes tesis de jurisprudencia:

Novena Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Noviembre de 1999

Tesis: 1a./J. 58/99

Página: 150

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquella, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes.

Tesis de jurisprudencia 58/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

(

(

(



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

Novena Epoca

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Mayo de 1996

Tesis: VI.3o. J/6

Página: 479

CONCEPTO DE VIOLACION EN AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. REQUISITOS DEL.

Los conceptos de violación que se formulen para impugnar un precepto que se estime inconstitucional, deben consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto que demuestre por qué se considera que aquél es contrario a una norma de la Ley Fundamental, siendo por tanto un requisito sine qua non la especificación de ésta, condición que no se satisface si se cita genéricamente un artículo de la Constitución que contiene varias garantías.

Amparo directo 259/88. Consuelo López Cordero. 9 de agosto de 1988.

Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.

Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.

Amparo directo 153/91. Robinson, S.A. de C.V. 24 de mayo de 1991.

Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.

Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.

Amparo directo 166/91. Instituto Mexicano del Seguro Social. 7 de junio de 1991.

Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.

Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.

Amparo directo 416/95. Francisco Flores Sosa. 21 de septiembre de 1995.

Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.

Secretario: Othón Manuel Ríos Flores.

Amparo directo 126/96. Cristal Fémina, S.A. 20 de marzo de 1996.

Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria:

María de la Paz Flores Berruecos.

De nuevo causa extrañeza que dos breves párrafos de una extensión total de 16 líneas hayan dado lugar a una sentencia de 217 páginas en las que, sin surtirle alguno de los supuestos a que se contrae el artículo 76 bis de la Ley de Amparo o cualquiera otro apropiado para ello, se supla la deficiente expresión de agravios del quejoso en abierta violación a los principios rectores del juicio de amparo establecidos en los artículos 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4 y 166 fracción VI de la Ley de Amparo.



No debe soslayarse que el único argumento de la quejosa en relación con la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo reclamado se reduce a la ínfima expresión en el sentido de que "...basta la lectura del precepto cuya inconstitucionalidad se reclama para advertir que va en contra de lo que al respecto establece el artículo 115 fracción IV (incisos a) y c)...". Conforme a la técnica del juicio de amparo no es dable que con tan burda, difusa, insubstancial e insuficiente manifestación de la parte quejosa se coloque válidamente al órgano jurisdiccional en aptitud de penetrar al fondo del caso, pues sencillamente ante tal situación no existe fondo alguno hacia el cual deba converger la función juzgadora; es decir, en estricto sentido jurídico nada hay por resolver ante la falta de verdaderos conceptos de violación, de ahí la necesidad de haber sobreesido, en vez de suplir las deficiencias al respecto, como indebidamente lo hizo el tribunal "a quo", habida cuenta que las consideraciones esgrimidas en la sentencia ahora impugnada no tienen por origen la demanda de garantías, sino la inapropiada intervención oficiosa del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en contradicción con su endeble prego de imparcialidad.

c) Suponiendo, sin conceder, que pudieran reputarse como conceptos de violación las insubstanciales manifestaciones de la parte quejosa en torno a la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo reclamado, aun así serían inoperantes y generadores de la improcedencia y sobreseimiento del juicio de amparo, en atención a los siguientes razonamientos.

Es causante de agravio la resolución recurrida porque se declaró la inconstitucionalidad del Acuerdo expedido por el entonces Gobernador del Estado el 18 de febrero de 2003, específicamente en lo que respecta a su artículo 9º, sin que dicha disposición hubiera sido el fundamento de la sentencia definitiva reclamada del Magistrado de la Sala Superior y Presidente del tribunal de lo Contencioso Administrativo. En otras palabras, contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, el Magistrado Responsable no fundó su determinación en lo dispuesto por el artículo 9º del Acuerdo antes mencionado.

En efecto, en la sentencia recurrida se afirmó que "...Como se puede advertir, el argumento que se propone en los apartados descritos, se encuentra estrechamente relacionado con la inconstitucionalidad de un acuerdo expedido por el gobernador del Estado de Nuevo León, que tanto la parte demandada en el juicio contencioso de origen, como la sala responsable, utilizaron como fundamento para determinar que en el caso particular los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal a que se refiere la litis, que se encuentran destinados a la impartición de justicia, no encajan en el supuesto de exención de pago de derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado...", a lo cual se agregó que "...Sin embargo, el artículo 9º del Acuerdo por el



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de febrero de dos mil tres, que sirvió de fundamento al director de la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para sustentar los actos impugnados en los juicios contenciosos administrativos de origen, y a la sala responsable para apoyar la resolución que se reclama, desatendiendo esa norma suprema dispone...", lo cual es totalmente falso, en virtud de que en la sentencia objeto de reclamo en el juicio de amparo directo no se encuentra apoyada en lo dispuesto por el artículo 9º del Acuerdo tildado antijurídicamente de inconstitucional.

Para constatar lo anterior basta con hacer una simple revisión visual de las consideraciones establecidas en la sentencia reclamada en el juicio uniinstancial de garantías, mismas que me permito volver a transcribir en las partes conducentes, destacando con subrayado algo de lo más trascendente:

La inconstitucionalidad reclamada por el Consejo de la Judicatura Federal, en opinión del suscrito magistrado resolutor no puede ser objeto de estudio en este tribunal, pues carece de competencia para ello, en razón de que su propósito fundamental es salvaguardar y controlar la legalidad de los actos administrativos, lo cual excluye el análisis de la constitucionalidad de las disposiciones legales, como en el presente caso sería el artículo 9º del acuerdo expedido por el titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León, antes mencionado...

"... esta sala superior estima que tales argumentos son infundados, pues en primer lugar el artículo 115 apartado IV inciso c) de la Constitución Federal, establece la exención de contribuciones en favor de los bienes del dominio público de la federación, de los estados o de los municipios la cual no opera a favor de la parte actora, independientemente de que el servicio público de agua potable lo preste un organismo público descentralizado, distinto al municipio; en el caso particular, en los párrafos que anteceden quedó plenamente establecido que, tales servicios no son derechos, y por lo tanto, no son contribuciones en los términos de lo previsto en los artículos 3º del Código Fiscal del Estado y 2º del Código Fiscal de la Federación, sino que se trata de aprovechamientos que no van a formar parte de la hacienda pública del estado o de los municipios... en segundo lugar como bien lo dijo la sala a quo, no existe norma constitucional ni ley secundaria que establezca que la exención prevista en preinvocado artículo 115 apartado IV inciso c), deba hacerse extensiva a los servicios prestados por las instituciones públicas descentralizadas del sector estatal; en tercer lugar, la parte actora no establece cuáles es el dispositivo legal que obliga al estado y/o a la mencionada institución pública descentralizada a respetar

✓

✓

✓



122

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON**

PODER EJECUTIVO

las cargas motivadas al haberse arrogado la prestación de los servicios de agua potable..."

"... no puede sostenerse válidamente que el C. Gobernador del Estado sea la autoridad competente para resolver la solicitud de exención por concepto de pago de servicios de agua y alcantarillado (drenaje) planteada ante el, por la parte actora, puesto que si bien es cierto que, el artículo 41 fracción I del Código Fiscal para el Estado, faculta al ejecutivo estatal, para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazos, diferido o en parcialidades; no menos cierto es que, el pago por servicios de agua y drenaje no constituye una contribución, pues a éste no le es atribuido el carácter de derecho, como erróneamente lo manifiesta la recurrente en su escrito de recurso... En tal sentido, resulta fácil determinar que la norma legal que se examina no resulta aplicable a su favor, ya que la multicitada solicitud, no coincide con ninguna de las situaciones previstas en el preindicado artículo 41 fracción I

... contrario a lo aducido por la accionante en el juicio, el director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, si tiene competencia para dar contestación al escrito elevado al Gobernador del Estado, la cual deriva de los artículos 15 y 41 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento del Estado, así como de los artículos 9 y 10 de la Ley que crea la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey..."

NACIONAL
"Esta sala revisora considera que, la sentencia recurrida no violenta el principio de supremacía constitucional plasmado en el artículo 133..."

Lo anterior es causante de agravio debido a que cuando no se aplica en la sentencia definitiva la disposición de observancia general tildada de inconstitucional, los conceptos de violación aducidos al respecto son inoperantes, lo cual acontece en la especie en razón de que el artículo 158, último párrafo, de la Ley de Amparo dispone que "...Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o solución que pongan fin al juicio..." y por su parte el artículo 166 fracción IV, segundo párrafo, de la propia ley establece que "...Cuando se impugna la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia...", de lo cual se deduce que para la impugnación de cuestiones de constitucionalidad vía amparo directo, es requisito

1

2

3

4



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

esencial el haberse aplicado el dispositivo cuya constitucionalidad se controvierta, y que esa aplicación haya trascendido al resultado del fallo. Es decir, de acuerdo a lo artículos de la ley de la materia antes indicados, las consideraciones de la sentencia reclamada deben afectar al quejoso por estar fundadas en el ordenamiento que se estime inconstitucional.

Además, de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias deben ser congruentes con aquellas actuaciones que constituyan el antecedente de los actos reclamados, lo cual no se cumple en el caso particular en virtud de que es completamente falso que en las consideraciones de la sentencia reclamada se hayan fundado en el acuerdo tildado ilegalmente de inconstitucional.

Sobre el particular son elocuentes los criterios jurisprudenciales que transcribo enseguida.

Novena Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XI, Junio de 2000

Tesis: 1a. V/2000

Página: 55

INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. No es dable en un juicio de amparo directo, ni en la revisión correspondiente emitir pronunciamiento sobre preceptos en los que no se apoya la sentencia reclamada, al hacerlo en sentido contrario se contravendría el principio de congruencia que debe regir en toda sentencia de amparo, habida cuenta que el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal en el juicio de garantías uniinstancial, en el que se impugna la constitucionalidad de una norma (de resultar fundado el concepto de violación respectivo) es sólo para que no se aplique la disposición de que se trate en la sentencia reclamada. Es inconcuso, en tal virtud, que si la sentencia no se apoyó en el precepto que se tilda de inconstitucional es jurídicamente imposible que se dé el efecto restitutorio que es propio de este tipo de juicios de amparo. Por tanto, si la procedencia de la revisión en amparo directo depende no sólo de la expresión de conceptos de inconstitucionalidad en la demanda, sino además de que los artículos impugnados se hayan aplicado en perjuicio del quejoso e influido en el sentido de la resolución reclamada, debe necesariamente concluirse que al no existir aplicación tales conceptos de inconstitucionalidad devienen en inoperantes.



124

✓ **GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**
PODER EJECUTIVO

Amparo directo en revisión 848/99. Constructora Pesa, S.A. 8 de marzo de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teófilo Ángeles Espino.

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VIII, Diciembre de 1998

Tesis: 2a. CLII/98

Página: 430

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO.
LO SON AQUELLOS EN QUE SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS QUE SI BIEN FUERON CITADOS EN LA SENTENCIA IMPUGNADA, SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS NO FUERON APLICADAS EN ELLA. Son inoperantes los argumentos planteados en la demanda de garantías mediante los cuales se controvierte la constitucionalidad de diversos preceptos legales que fueron citados en la sentencia impugnada, con el único propósito de señalar que las hipótesis normativas previstas en ellos no eran aplicables al caso, dado que la litis planteada se resolvió conforme a lo previsto en diversas disposiciones, pues en tales circunstancias debe estimarse que no tuvo lugar una aplicación de las normas impugnadas en perjuicio del quejoso, que le genere un agravio personal y directo.

ORTE D
Amparo en revisión 3413/97. Esperanza Martínez Grado. 6 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo L. Báez López.

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VI, Septiembre de 1997

Tesis: P. CXXXIII/97

Página: 203

CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ. De conformidad con lo ordenado por el último párrafo del artículo 158 y el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una ley en amparo directo se requiere que ésta se haya aplicado dentro de la secuela procedimental o en la sentencia señalada como acto reclamado,

A- A

1

2

3

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

por lo que resultan inoperantes los conceptos de violación que se formulen en contra de los preceptos que no fueron aplicados.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de agosto en curso, aprobó, con el número CXXXIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Novenia Epoca

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Julio de 2002

Tesis: I.3o.C.33 K

Página: 1247

AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SI NO SE ACTUALIZÓ EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL, DE MANERA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN PERJUICIO DEL QUEJOSO, O SI ESA APLICACIÓN NO TRASCENDIÓ AL RESULTADO DEL ACTO RECLAMADO O SE PRESENTÓ EN UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 158, último párrafo y 166, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que los presupuestos para que en el juicio de amparo directo se analice la constitucionalidad de una norma general son: que se haya aplicado en el acto reclamado, ya sea en la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, o durante la secuela del procedimiento respectivo, en un acto procesal que no haya revestido una ejecución irreparable, pues en este último supuesto, de lo contrario, en su momento debió promoverse al respecto el juicio de amparo indirecto, para no consentir la violación; que esa aplicación se haya actualizado en perjuicio del solicitante de la protección constitucional y trascendido al resultado del fallo, en tanto que de no ser así, no sería bastante para conceder el amparo, pues no habría afectación o ésta no habría determinado el sentido del fallo reclamado; y, finalmente, que sobre el particular se esgriman conceptos de violación o se surta una de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para suplir la queja deficiente. Por consiguiente, si no se actualiza la satisfacción de esos presupuestos mínimos, las alegaciones de inconstitucionalidad de la norma general o, en su caso, los propios conceptos de violación esgrimidos sin la reunión de los otros requisitos, deben estimarse inoperantes, ya que no pueden conducir a demostrar la inconstitucionalidad de la sentencia o



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

resolución reclamados, que constituye la pretensión en el juicio de amparo directo.

Amparo directo 15723/2001. María Alejandra Islas Caro. 17 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Ante lo narrado se impone revocar la sentencia recurrida para decretar el sobreseimiento consecuente, por la inoperancia de los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías por el quejoso, en razón de que se trata de cuestionar la constitucionalidad del acuerdo expedido el 18 de febrero de 2003, sin que el mismo haya sido aplicado en la sentencia reclamada o le sirva de sustento.

d) Por otra parte, el tribunal "a quo" debió advertir oficiosamente que el juicio de amparo es improcedente, con motivo de que en contra de los actos de autoridad del Estado de Nuevo León, el quejoso, como órgano de la Federación, estuvo en aptitud de promover controversia constitucional en los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el "quejoso" señala que la sentencia reclamada violenta sus garantías individuales, lo cual es incierto en virtud de que las garantías individuales consagradas en la Constitución son prerrogativas creadas a favor de los gobernados, con la finalidad de que esos derechos mínimos sean respetados por el Estado mediante el ejercicio de poder que llevan a cabo las autoridades, y cuyo medio de defensa legal para frenar la conducta desbordante de los órganos estatales es el juicio de amparo, cuyo fundamento se encuentra en los numerales 103 y 107 de la Constitución. Sin embargo, cuando una autoridad resiente un acto de otra autoridad diversa, ya sea de igual o de diferente nivel de gobierno, que de alguna manera afecte la normatividad constitucional, ello no implica que se vulneren sus "garantías individuales", sino que se vulnera el orden jurídico constitucional propiamente dicho, lo cual es impugnabile en los términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 constitucional, la Suprema Corte conoce de las controversias constitucionales que se susciten entre la Federación y un Estado; así se tutelan las controversias que se susciten entre distintas autoridades que actúan con base a sus funciones de derecho público, tal como acontece en la especie, puesto que la controversia suscitada entre el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y el suscrito Gobernador y el Director de la Institución Pública Descentralizada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" debió resolverse en los términos previstos en la Ley

1

2

3

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON****PODER EJECUTIVO**

reglamentaria de los fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, insisto, el juicio de amparo en el medio para tutelar a los gobernados sus prerrogativas constitucionales.

Por consecuencia estimo que deberá sobreseerse el juicio de amparo en los términos del artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 4º de la propia ley, aplicado a contrario impero, y en relación también con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Es causante de agravio la resolución recurrida por contravenir lo establecido en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que en la misma se estableció que el Consejo de la Judicatura Federal dependiente del Poder Judicial de la Federación, puede promover el juicio de garantías, lo cual es incierto e improcedente con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVIII del precepto legal invocado en este párrafo en relación con lo establecido en los artículos 1 y 4 del mismo cuerpo normativo.

En la sentencia recurrida se estableció que el Consejo de la Judicatura Federal puede promover juicio de garantías por actos de autoridad que los afecten, lo cual es incierto por improcedente, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley de la materia *“Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas...”*, lo cual no se cumple en el caso particular, tan es así que ni siquiera se indica en la sentencia recurrida.

Ciertamente, se hizo total abstracción acerca de la procedencia o improcedencia del juicio de amparo promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, en franca contravención al principio de oficiosidad establecido en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual trascendió a los efectos del fallo impugnado, pues el Tribunal Colegiado abordó temas de inconstitucionalidad sin darse los presupuestos procesales necesarios para ello.

Afirmo que es improcedente el juicio de amparo incoado por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que las solicitudes de exención que a la postre motivaron los litigios originales ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, desembocaron finalmente en el juicio de amparo en relación con el cual comparezco, se formularon por el propio Consejo como sujeto de derecho público, pues sus correspondientes solicitudes se fundaron en los artículos 115 fracción IV inciso “c” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 34 de la

—

—

—

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON**

PODER EJECUTIVO

Ley General de Bienes Nacionales, entre otros. Es decir, tanto las solicitudes de exención, como la promoción del juicio de garantías, se realizaron dentro del ámbito de atribuciones de derecho público referentes a los bienes nacionales que son utilizados para un servicio público (impartición de justicia), de ahí que no se integra el supuesto previsto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, pues dicho artículo se refiere a la procedencia del juicio de amparo promovido por autoridades cuando el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales, como persona de derecho privado, lo cual no acontece en la especie. Por lo tanto, estimo improcedente el juicio de amparo interpuesto por el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, ya que, insisto, al solicitar las exenciones dicho Consejo actuó como persona moral oficial de derecho público. En virtud de su analogía con el caso, es elocuente sobre el particular la jurisprudencia que transcribo enseguida.

Novena Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Junio de 2003

Folio: 2a./J. 45/2003

Folio: 254

Materia: Administrativa Jurisprudencia.

PERSONAS MORALES OFICIALES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado.

Contradicción de tesis 4/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 16 de mayo de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Tesis de jurisprudencia

✓

✓

✓



129

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

45/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil tres

Significa esto que en la especie no se ha surtido el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1 fracción I de la Ley de Amparo; sino el supuesto que podría haberse surtido sería el del planteamiento de la controversia constitucional previsto en el artículo 105, fracción I de la propia Constitución Federal, en relación con los artículos 1, 10, 11 y 22 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del citado precepto constitucional. Al respecto reitero lo aducido en el inciso inmediato anterior a éste, solicitando que se tenga aquí por reproducido a la letra, para evitar innecesarias repeticiones.

ACG
TERCERO. La sentencia recurrida contiene una serie sorprendentemente extensa de errores tanto de orden procesal como de fondo, todos los cuales trascendieron al sentido del propio fallo, en agravio de los intereses jurídicos que represento. A saber:

1. Ingeniosa, pero ilegalmente, se distorsionó la litis constitucional para lograr el abordaje de la inexistente inconstitucionalidad del ya referido Acuerdo emitido por la autoridad ahora a mi cargo, y llega así al reprochable extremo de invadir el Tribunal Colegiado "a quo" la jurisdicción común de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, asumiendo prácticamente la temática integral de los juicios generadores de la sentencia reclamada en vía de amparo directo.

La distorsión de la litis contraviene lo dispuesto en los artículos 77 fracción I y 78 de la Ley de Amparo, pues implica que no se fijaron con precisión los actos reclamados, ni se apreciaron éstos tal como aparecen probados ante la autoridad responsable.

En efecto, adviértase lo afirmado en el segundo párrafo de la página 107 del fallo ahora impugnado, en el erróneo sentido de que el asunto versa sobre la pretensión del Consejo de la Judicatura Federal en obtener una resolución favorable en la que se determine que los bienes inmuebles destinados a la impartición de justicia federal en el Estado de Nuevo León, están exentos del pago del servicio de agua potable y alcantarillado. Semejante apreciación revela que por lo visto ese era el objetivo preconcebido por el tribunal "a quo", mas no que esa sea la litis materia del juicio de amparo, pues la misma sólo consiste, de conformidad con el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, en la determinación de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sentencia reclamada (dictada por el Magistrado de la Sala

A

—

—

—



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

Superior y Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado) y del artículo 9º del también reclamado Acuerdo emitido por la autoridad ahora a mi cargo.

Así se gestó el arbitrario conocimiento y decisión, por parte del tribunal a quo, en torno a la supuesta inconstitucionalidad determinada en el sexto considerando y el único punto resolutive de la resolución ahora impugnada.

2. En el segundo párrafo de la página 128 de la sentencia ahora controvertida se asevera con ligereza inexactitud que en caso específico se hacen valer cuestiones que aluden a la inconstitucionalidad de un ordenamiento general (Acuerdo emitido por la autoridad ahora a mi cargo) en el que, según lo ahí afirmado, se fundan tanto el acto impugnado en el procedimiento contencioso de origen, como la sentencia reclamada en el juicio de amparo.

Lo cierto no es así, pues en la sentencia objeto del reclamo en el juicio de amparo se hizo total abstracción del Acuerdo emitido por el Ejecutivo del Estado, y por ende en ninguna parte de esa resolución se invocó ese Acuerdo a manera de sustento o fundamento, tal como paradójicamente consta a partir de la mediación de la página 141 y hasta el segundo párrafo de la página 141 del fallo ahora recurrido, donde se hizo una síntesis de lo resuelto en la sentencia reclamada en vía de amparo, y de ninguna manera se hace referencia a la invocación del Acuerdo en alusión. A mayor abundamiento, me remito a lo expresado en el inciso "c" de este mismo agravio, solicitando que se tenga aquí como reproducido a la letra, para evitar ociosas repeticiones.

DE ACUERDO lo concerniente a que el ordenamiento general (Acuerdo) sirvió de fundamento del "acto impugnado en el procedimiento contencioso de origen", se cometió el error de creer que fue sólo uno "el acto impugnado" (cuando en realidad fueron varios) y que también fue en singular "el procedimiento contencioso de origen" (cuando en realidad fueron dos procedimientos que a la postre se acumularon y fueron resueltos en la misma sentencia de primer grado dictada por la Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado).

En la propia sentencia objeto del recurso ahora interpuesto hay elementos para desvirtuar la ante dicha apreciación errónea, pues a partir del último párrafo de la página 129 y hasta la mediación de la página 134, se hizo una reseña de los dos juicios contenciosos administrativos (expedientes 051/2003 y 251/2003) y de la materia disímbola de ellos, pues mientras en el expediente 051/2003 se demandó: a) la nulidad de la omisión atribuida al Gobernador del Estado, de resolver sobre la solicitud de exención del pago de servicio de agua potable formulada por el Consejo de Judicatura Federal; b) la nulidad de la resolución de

✓

✓

✓



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

131

fecha 8 de diciembre de 2002 en la que el Director General de la institución pública descentralizada denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, negó la exención de pago por concepto del servicio público de agua potable y drenaje solicitada por el mismo Consejo de la Judicatura Federal; c) la nulidad de los actos de cobro, amenaza de corte y suspensión de servicio contenidas en las facturas números T00114085 y T00121863; en cambio, en el expediente 251/2003 se demandó la nulidad de la resolución negativa ficta atribuida al Gobernador del Estado de Nuevo León, respecto de la solicitud de exención que dicho Consejo le planteó ~~con~~ con los derechos de agua potable y alcantarillado presentada el 29 de enero de 2003 y b) la nulidad de los actos de cobro, amenaza de corte y suspensión del servicio, realizados por la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, derivados de las facturas números T00131509 y T00134116 (faltó destacar en la sentencia recurrida que las dos solicitudes de exención se realizaron respecto de inmuebles distintos, y que si bien hubo una ampliación de demanda en el juicio contencioso administrativo número 251/2003 pretendiendo incluir como acto impugnado la resolución contenida en el oficio 135-R-10/2003 de fecha 25 de junio de 2003, emitido por el Director General de la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; dicha ampliación no llegó a integrar la litis correspondiente, pues a partir del segundo párrafo de la página 53 y hasta el primer párrafo de la página 55 de la sentencia de fecha 30 de marzo de 2004 pronunciada por la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dicha ampliación fue desestimada por completo, centrándose la materia litigiosa en la negativa ficta antes mencionada).

Entonces, conforme a la lógica y al derecho no es posible que en una resolución negativa ficta como la cuestionada en el juicio contencioso administrativo número 251/2003 pueda haberse invocado el Acuerdo cuya inconstitucionalidad indebidamente se estableció en la sentencia ahora impugnada (recuérdese que la negativa ficta se produce únicamente por la falta de respuesta expresa, razón por la cual no puede haberse invocado el Acuerdo en mención).

Pero es importante hacer notar que otra vez causa extrañeza el hecho de que el tribunal "a quo", sabedor de la existencia antecedente de dos juicios contenciosos administrativos en los cuales se demandó la nulidad de actos diferentes, haya optado por visualizarlos como una unidad o amalgama procesal y haya fusionado la específica materia litigiosa de cada uno de ellos, siendo que, a pesar de la acumulación decretada, conservan su autonomía jurídica y no deben fundirse ni confundirse uno con el otro, según los criterios inmersos en las tesis que a continuación cito, los cuales por analogía y por igualdad de razón son extensivos a este caso:

A

✓

✓

✓



ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.—La acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias contradictorias.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-181/98 y acumulado.—Partido Acción Nacional.—23 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-226/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—13 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-106/2003 y acumulado.—Partido de la Revolución Democrática.—28 de julio de 2003.—Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 02/2004.

Novena Época

Instancia: SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: V, Marzo de 1997

Tesis: I.7o.T. J/13

Página: 673

ACUMULACION, EFECTOS DE LA, EN LOS JUICIOS LABORALES. En el caso de juicios promovidos por diversos actores contra el mismo demandado, teniendo el conflicto su origen en el mismo hecho derivado de



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

relación de trabajo, supuesto previsto en el artículo 766, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la acumulación sólo tiene por efecto que los conflictos acumulados se resuelvan en un solo laudo, a fin de evitar resoluciones contradictorias, sin que sea dable que las excepciones opuestas y las pruebas que se desahoguen en uno mismo deban ser consideradas en el otro.

Acción
Amparo directo 9467/90. Maurilio Salinas Franco. 23 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: María Yolanda Múgica García. Secretario: Antonio Hernández Meza.

Amparo directo 3347/91. Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados en las Industrias Cervecera, de Aguas Gaseosas, de Alimentos Envasados, su Distribución, Similares y Conexos, CROC. 12 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Secretario: Noé Herrera Perea.

Amparo directo 11197/92. Ferrocarriles Nacionales de México. 3 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Secretario: Noé Herrera Perea.

Amparo directo 1447/96. Ferrocarriles Nacionales de México. 28 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Sofía Verónica Avalos Díaz.

Amparo directo 13167/96. J. Rosario Pérez Posadas y otros. 13 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Sofía Verónica Avalos Díaz.

El irregular proceder del Tribunal Colegiado del Circuito coadyuvó a incrementar la magnitud de la distorsión de la litis no sólo del juicio de amparo, sino de los juicios contenciosos administrativos antecedentes, circunstancia que trascendió al fondo del fallo cuestionado ahora en revisión, pues dio lugar a que en la sentencia ahora recurrida se incurriera en el error de no hacer distinción entre el juicio contencioso administrativo ventilado bajo el expediente número 051/2003 y el tramitado bajo el expediente número 251/2003, no obstante su autonomía jurídica procesal y a pesar de que la materia litigiosa de ambos juicios difiere entre sí. En ese tenor, el sentido de la sentencia ahora impugnada se hace efectivo indebidamente por igual a los dos juicios contenciosos administrativos, sin importar que en uno de ellos (expediente número 251/2003) sólo se demandó la nulidad de una negativa ficta y de ninguna manera se aplicó el Acuerdo incorrectamente declarado inconstitucional.

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON**
PODER EJECUTIVO

Más clara resulta la irregularidad apuntada al observar que en la sentencia reclamada en vía de amparo y en la de primer grado dictada por la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, sí se respetó la autonomía de los juicios contenciosos administrativos, haciéndose por separado el estudio específico de cada uno en lo particular, con sujeción a sus peculiaridades inconfundibles y sin involucrarlos en modo alguno, como lo indica la técnica procesal que increíblemente fue ignorada por el tribunal "a quo".

3. Otro matiz de la irregularidad apuntada en el punto inmediato anterior estriba en que el tribunal "a quo" en forma indebida relegó de su óptica jurisdiccional la verdadera pretensión del Consejo de la Judicatura Federal al promover los juicios contenciosos administrativos cuya segunda instancia generó la sentencia reclamada en el juicio de amparo.

No apreció el Tribunal Colegiado de Circuito lo que el promovente del juicio contencioso administrativo número 051/2003 manifestó en la parte final del sexto apartado correspondiente al capítulo de hechos de la demanda relativa, en el sentido de que su acción de nulidad tiende y en el cuarto de los petitorios finales, que su acción de nulidad tiende a que sea precisamente el Gobernador Constitucional del Estado, y no el Director General de la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, quien resuelva la solicitud de exención formulada mediante oficio número DGAJ/3172/2002 de 11 de noviembre de 2002. En consecuencia, la sentencia ahora recurrida dictada por el tribunal "a quo" tampoco se ciñó a esa pretensión original, la cual convertía en inviable el estudio de constitucionalidad en cuanto al Acuerdo emitido por la gubernatura ahora a mi cargo, al no tener trascendencia alguna, pues la intención de la demanda en la vía contenciosa administrativa se limitó a lo antes indicado, o sea a que se obligara al Gobernador del Estado a responder la solicitud de exención, ante la supuesta incompetencia del Director General del organismo público descentralizado de referencia.

4. En la sentencia recurrida se violó el principio de congruencia inmerso en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues la determinación de inconstitucionalidad del Acuerdo emitido por la autoridad ahora a mi cargo se realizó a virtud de argumentos o conceptos de violación que no fueron los formulados por la parte quejosa.

Para hacer evidente la incongruencia en mención, procedo a repetir lo manifestado en el inciso "b" del segundo de los agravios expresados mediante este ocurso.

A



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

PODER EJECUTIVO

Es pertinente destacar que, ciertamente, en la demanda de amparo se incluyó como materia de reclamación "... la inconstitucionalidad del artículo 9º del acuerdo Tarifa 2003, expedido por el Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 26 de febrero de 2003 y su fe de erratas publicada en el mismo medio de difusión el 27 siguiente..."; pero sobre el particular tan sólo se expuso, en el Octavo, apartado del capítulo de "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" de la demanda de amparo del caso, lo que a continuación reproduzco literalmente:

Del precepto transcrito se desprende que contraviene lo que al respecto establecen los artículos 115, fracción IV, incisos a) y c), 133 y 31 fracción IV, de nuestra Carta Fundamental.

En efecto, tal y como ya se dijo con anterioridad ningún dispositivo puede ir en contra de nuestra Constitución que es nuestra norma de normas, por lo que el principio de supremacía constitucional en relación con el orden normativo estatal y los órganos de autoridad local no podrán contravenir las estipulaciones de nuestra Carta Magna, por ello, basta la lectura del precepto cuya inconstitucionalidad se reclama para advertir que va en contra de lo que al respecto establece el artículo 115 fracción IV, incisos a) y c), el que claramente el legislador expresó su voluntad de considerar exentos a los bienes del dominio público de la Federación de la obligación de pagar las contribuciones a que se refiere el inciso c), de la fracción IV del precepto anteriormente citado, con independencia de que sea el municipio en forma exclusiva o en concurrencia con otros niveles de gobierno el que preste el servicio, motivo por el cual se reclama su inconstitucionalidad.

Por increíble que parezca, a estos dos breves e insustanciales fragmentos se constriñen los argumentos vertidos a modo de "conceptos de violación", pues si bien se agregó una tesis aislada de rubro "AMPARO DIRECTO. ES VÁLIDO QUE EN LA DEMANDA RELATIVA SE ARGUMENTEN CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, AUN CUANDO EN LA VÍA ORDINARIA NO SE HAYAN PLANTEADO", así como una jurisprudencia intitulada "JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AUNQUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL EMITIR SUS ACTOS, SÍ DEBEN CUMPLIR LAS SENTENCIAS EN LAS QUE, CON BASE EN AQUÉLLA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE SU NULIDAD"; ello nada arroja en cuanto a la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo controvertido en la vía constitucional, por ser completamente ajenas a ese tema de fondo.

A



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

Dichos argumentos esbozados por el Consejo de la Judicatura Federal **(dos párrafos conformados por dieciséis líneas)** son por completo inatendibles a título de conceptos de violación, pues en verdad no llegan a integrar éstos al tratarse de simples afirmaciones dogmáticas y subjetivas, y **no de verdaderos razonamientos específicos y detallados que revelen con precisión la causa de pedir** y confronten el Acuerdo reclamado y la normatividad constitucional, para evidenciar la omisión en detrimento de la supremacía de la ley fundamental. Al respecto son las siguientes tesis de jurisprudencia:

DE ACUERDO

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Noviembre de 1999

Tesis: 1a./J. 58/99

Página: 150

**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.
LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES
LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER.**

La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que



137

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

ayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes.

Tesis de jurisprudencia 58/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Novena Epoca

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Mayo de 1996

Tesis: VI.3o. J/6

Página: 479

CONCEPTO DE VIOLACION EN AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. REQUISITOS DEL. Los conceptos de violación que se formulan para impugnar un precepto que se estime inconstitucional, deben consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto que demuestre por qué se considera que aquél es contrario a una norma de la Ley Fundamental, siendo por tanto un requisito sine qua non la especificación de ésta, condición que no se satisface si se cita genéricamente un artículo de la Constitución que contiene varias garantías.

Amparo directo 259/88. Consuelo López Cordero. 9 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.

Amparo directo 153/91. Robinson, S.A. de C.V. 24 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.

Amparo directo 166/91. Instituto Mexicano del Seguro Social. 7 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.

41

—

—

—



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

97

138

Amparo directo 416/95. Francisco Flores Sosa. 21 de septiembre de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.
Secretario: Othón Manuel Ríos Flores.

Amparo directo 126/96. Cristal Fémina, S.A. 20 de marzo de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretaria:
María de la Paz Flores Berruecos.

Causa extrañeza que dos breves párrafos de una extensión total de 16 líneas hayan dado lugar a una sentencia de 217 páginas en las que, sin surtirle alguno de los supuestos a que se contrae el artículo 76 bis de la Ley de Amparo o cualquiera otro apropiado para ello, se supla la deficiente expresión de agravios del quejoso en abierta violación a los principios rectores del juicio de amparo establecidos en los artículos 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4 y 166 fracción VI de la Ley de Amparo.

No debe soslayarse que el único argumento de la quejosa en relación con la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo reclamado se reduce a la ínfima expresión en el sentido de que "...basta la lectura del precepto cuya inconstitucionalidad se reclama para advertir que va en contra de lo que al respecto establece el artículo 115 fracción IV, incisos a) y c)...". Conforme a la técnica del juicio de amparo no es dable que con tan burda, difusa, insubstancial e insuficiente manifestación de la parte quejosa se coloque válidamente al órgano jurisdiccional en aptitud de penetrar al fondo del caso, pues sencillamente ante tal situación no existe fondo alguno hacia el cual deba converger la función juzgadora, es decir, en estricto sentido jurídico nada hay por resolver ante la falta de verdaderos conceptos de violación, de ahí la necesidad de haber sobreseído, en vez de suplir las deficiencias al respecto, como indebidamente lo hizo el tribunal "a quo", habida cuenta que las consideraciones esgrimidas en la sentencia ahora impugnada no tienen por origen la demanda de garantías, sino la inapropiada intervención oficiosa del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en contradicción con su endeble pregon de imparcialidad.

Hasta aquí la repetición del segundo agravio, inciso "b", por ser perfectamente aplicable para evidenciar la incongruencia argumentada.

Ahora bien, además de haberse aclarado así que lo considerado y resuelto en la sentencia ahora impugnada no fue generado por conceptos de violación que se hayan aducido en la demanda de garantías por lo que respecta a la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo emitido por la gubernatura que en la actualidad ejerzo; conviene dirigir la atención al primer párrafo del considerando



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

sexto de la resolución ahora impugnada en grado de revisión, pues allí se indica toda nitidez que "... Los conceptos de violación tercero y octavo, que se encuentran estrechamente relacionados entre sí, resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional que se demanda...".

Esto es propiamente una clara confesión de la incongruencia antedicha, pues se hace énfasis en la eficacia del tercer concepto de violación, sin haber advertido que el mismo no se expuso en relación con la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo que a la postre fue indebidamente declarado inconstitucional, sino al iniciar enfocándose hacia "... La sentencia que se impugna...". Se deduce que indudablemente fue vertido con referencia exclusiva a la supuesta inconstitucionalidad de la sentencia objeto de reclamo en el juicio de amparo, siendo que, dada su ajeridad con el tema resuelto por el tribunal "a quo", no debió tomarse en cuenta para estudiar la constitucionalidad del Acuerdo referido, ni vincularlo con el octavo mal llamado concepto de violación, pues esa hibridez equivale a la incongruencia aquí destacada, máxime que conforme a lo expresado en el segundo agravio, inciso "b" de este escrito, ese octavo apartado ni siquiera constituye en derecho concepto de violación alguno, y no cabe decir sobre el particular que la demanda debe apreciarse como un todo integral, ya que el principio de congruencia y las circunstancias del caso lo impiden, porque, repitiendo, el tercer concepto de violación tiende a controvertir la sentencia reclamada y no la constitucionalidad del aludido Acuerdo, lo cual edifica una sólida frontera de separación jurídicamente insalvable, debido a que en la sentencia ahora impugnada el tribunal "a quo" no penetró a lo relativo al cuestionamiento de la sentencia también reclamada (dictada por el Magistrado de la Sala Superior y Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado), tan es así que en la página 181 de la resolución ahora recurrida dejó en claro que "... Al resultar fundados los conceptos de violación que han sido materia de estudio en este fallo, y suficientes para otorgar la protección federal demandada por aspectos de constitucionalidad, es innecesario ocuparse del estudio de los restantes, relacionados con cuestiones que son propiamente de legalidad...".

Nótese que extrañamente el tribunal "a quo" hizo alarde de excelsitud técnica en ciertas partes de su fallo, y, en forma contrastante, en otras (referentes a circunstancias que obstaculizarían el sentido de lo resuelto) dio muestras de lo contrario.

5. Ante la extensa variedad de causales de improcedencia develadas en el segundo de los agravios vertidos en torno a este recurso de revisión, es incorrecto e indebido que en el sexto considerando y el consecuente resolutivo del fallo ahora impugnado, el tribunal "a quo" haya incursionado en el fondo de la

✓

✓

✓



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

supuesta inconstitucional que finalmente acogió con referencia al Acuerdo emitido por la gubernatura ahora a mi cargo. Por añadidura es indebido que lo haya hecho pretextando que "... aunque en la demanda de amparo se expresan otros conceptos de violación vinculados con cuestiones de legalidad, algunos por vicios de forma y otros por vicios de fondo que se dicen cometidos al dictarse la sentencia que se reclama, lo cierto es que los aspectos de inconstitucionalidad de las normas en que se funda el acto reclamado, que se plantean en el amparo directo, merecen estudio preferente, ya que de resultar fundados tales argumentos producirían mayores beneficios para la parte quejosa, de ahí que se deben reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros (cuestiones de legalidad), en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...", e invocando la tesis aislada número 2ª. CXIX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD".

En efecto, la erroneidad al respecto consiste en que la tesis antes mencionada se refiere exclusivamente a las cuestiones de "fondo" que sean analizadas sin que ello implique que las cuestiones relacionadas con la "forma" pueden ser excluidas o relegadas a un segundo plano, sino, por el contrario, virtud de la naturaleza de éstas, deben examinarse en primer orden. Ello es así, porque de ninguna manera la invocación del mayor beneficio al quejoso se impone sobre la lógica jurídica ni sobre la aplicación estricta del derecho. Además, la propia tesis de referencia es elocuente en el sentido literal de que es únicamente "... al pronunciarse respecto al fondo." cuando procede analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros; sin olvidar que para ocuparse del fondo, deben superarse ante todo los aspectos litigiosos de forma.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que la procedencia de los conceptos de violación relacionados con cuestiones de forma del acto reclamado, excluye el examen de aquellos en los cuales se expresen cuestiones relacionadas con el fondo del asunto. Transcribo al efecto la jurisprudencia mencionada.

Séptima Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Apéndice de 1995
Tomo: Tomo VI, Parte SCJN
Tesis: 171

—

—

—



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

Página: 115

CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESAN POR FALTAS DE FONDO. (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo.

Amparo en revisión 5495/70. María Concepción Mercado y otra. 30 de octubre de 1972. Cinco votos.

Amparo en revisión 1993/72. Nicolasa Pichardo Guisa y otros. 8 de noviembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos.

TE
ACUERDO
Amparo en revisión 2507/72. Elías Nares Gómez. 23 de noviembre de 1972. Cinco votos.

Amparo en revisión 376/72. J. Jesús Gómez García. 29 de noviembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos.

Amparo en revisión 4710/72. Federico Eusebio Martínez y otros. 5 de abril de 1973. Cinco votos.

En el caso particular, el tribunal "a quo" desatendió (contra su mismo principio) los conceptos de violación relacionados con la falta de competencia del Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, los cuales, en caso de haber resultado procedentes, conllevarían a la nulidad lisa y llana del acto impugnado originalmente en el juicio contencioso administrativo.

Así es, la parte "quejosa" hizo valer como concepto de violación en el cuarto concepto de violación (hoja 13) de su demanda de amparo directo que "...la responsable no tomó en cuenta los argumentos que ante ella se hicieron valer, pues de haberlo hecho hubiera llegado a la conclusión de que el Director General del organismo público descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey carece de competencia legal para resolver las peticiones de exención a que se ha hecho mención, ello debido a

A A

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

que, los preceptos con base en los cuales pretendió fundar su competencia 15 y Tercero Transitorio de la Ley de Agua Potable y Saneamiento del Estado...no lo facultan para resolverlas. Lo cual constituye una cuestión una cuestión formal que debió dilucidarse antes de ocuparse del fondo. En cuanto a esto es aplicable por analogía la tesis siguiente:

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. ORDEN LOGICO EN EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE NULIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 237 (reformado por el Decreto de 5 de Enero de 1988) y 238 del Código Fiscal de la Federación, el orden lógico en el estudio de las causales de nulidad tiene que ser el siguiente: Se debe analizar en primer lugar, la incompetencia del funcionario que haya dictado la resolución reclamada u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; si dicha causal resulta fundada, ello es bastante para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución, sin que deban estudiarse las siguientes. En cambio, si la misma resultara infundada, se debe entrar al estudio de la totalidad de los argumentos relativos a la omisión de requisitos formales y a vicios del procedimiento, aun cuando uno o más de esos argumentos resulten fundados; y solamente en el caso de que la totalidad de los argumentos antes precisados resultaran infundados, se entrará al estudio de las cuestiones de fondo. El principio de exhaustividad en el estudio de las violaciones formales y de los vicios de procedimiento tiene la finalidad de administrar una justicia completa y evitar, en lo posible el reenvío "que es causa de retardo injustificado en la resolución de asuntos y que implicaría labor injustificada para la Justicia Federal", según se apunta en el Dictamen de la Cámara de Diputados, de fecha 26 de diciembre de 1987, conforme al cual se aprobó la reforma al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación indicada.

Revisión fiscal 1322/93. Eduardo Peña Núñez. (Recurrente: Director General Jurídico de la Contraloría General de la Federación). 11 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María del Consuelo Núñez de González.

Revisión fiscal 2067/93. Maquilas Madrid, S. A. (Recurrente: Administrador de lo Contencioso "2" de la S.H.C.R.). 25 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María del Consuelo Núñez de González.

Amparo directo 1182/94. Operaciones Técnicas, S. A. de C.V. 14 de julio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.

A. A.

✓

✓

✓



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

*Amparo directo 1062/95. Miguel Horta Cepeda. 18 de mayo de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretario: Mario
Flores García.*

*Amparo directo 1202/96. Tomografía Computada, S. A. 23 de mayo de
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretaria: Alma
Delia Aguilar Chávez Nava.*

A mayor abundamiento, no se percató el tribunal "a quo" que en la sentencia de primer grado de fecha 30 de marzo de 2004, pronunciada por la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en relación con los juicios contenciosos administrativos acumulados, se determinó en el primer punto resolutivo que "... Se sobresee el juicio 051/2003, en lo que respecta al C. Gobernador del Estado, en atención a los fundamentos y motivos expresados en el considerando cuarto...", sobreseimiento el cual fue confirmado en los puntos resolutivos primero y segundo de la resolución de segundo grado dictada el 24 de septiembre de 2004 por el Magistrado de la Sala Superior y Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, habiéndose reclamado la misma mediante la demanda de amparo motivante del juicio de amparo directo en torno al que ahora comparezco, demanda de garantías en cuyo quinto concepto de violación el Consejo de la Judicatura Federal cuestionó en la vía constitucional el sobreseimiento en alusión, razón por la cual, por tratarse de una cuestión de forma prioritaria frente al análisis de fondo, debió estudiarse antes de penetrar a éste, en obediencia de las reglas destacadas en este punto, máxima que mientras perdure dicho sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo número 051/2003 en lo relativo a la autoridad ahora a mi cargo, carecería de sentido el examen del Acuerdo que resultó declarado inconstitucional, toda vez que, como se dijo con antelación, la pretensión deducida en tal juicio se hizo consistir en que se obligara al Gobernador del Estado a responder la respectiva solicitud de exención, en lo cual ninguna trascendencia tiene el mencionado Acuerdo. En tanto que, como también se dijo antes, en el diverso juicio contencioso administrativo número 251/2003 se pretendió la nulidad de la negativa ficta de la gubernatura ahora a mi cargo, por lo que atañe a la otra solicitud de exención presentada por el Consejo de la Judicatura Federal, y esa negativa de ninguna forma entraña la aplicación del Acuerdo en mención, y por tanto es ocioso e indebido que el tribunal "a quo" haya penetrado al tema de la inconstitucionalidad de ese acto.

CUARTO. Independientemente de los agravios precedentes, pero sin perjuicio de ellos, también hago valer los que a continuación procedo a expresar en torno a las cuestiones propiamente constitucionales, con apego a lo dispuesto en el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

✓

✓

✓



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

1. Contra todo derecho en la sentencia ahora recurrida se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo conceda la exención "prevista" en el artículo 115 Constitucional a favor del Consejo de la Judicatura Federal (no al Poder Judicial de la Federación). Sin embargo, la concesión del amparo constituye un desacierto, así como una equivocada interpretación y aplicación del artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo que enseguida precisaré.

a) Se afirmó erróneamente en la sentencia recurrida que el servicio de agua potable y alcantarillado lo presta el Municipio "por medio" de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, lo cual es incierto, en virtud de que el referido servicio lo presta la referida Institución Pública Descentralizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley que crea la referida institución, y no el municipio por medio de la misma.

Semejante afirmación sólo podría ser cierta si el patrimonio de la referida institución se integrara por aportaciones municipales de Monterrey o de otras entidades similares, pero no fue ni es así, porque el patrimonio de la misma institución se integró con los bienes y derechos adquiridos por el Estado (no por el Municipio) a la Compañía de Servicios de Agua y Drenaje, entre otros, lo cual se desprende de lo establecido en el artículo 3º de la ley antes citada. El único titular de dicho patrimonio es en exclusiva la propia Institución, y no los que participan en su administración.

b) La erroneidad de la sentencia que destaque en el inciso anterior, deriva en el también equivocado criterio establecido por el Tribunal "a quo" (a partir de la página 155 de la sentencia ahora recurrida) en el sentido de que las cuotas que pagan los particulares por la prestación del servicio de agua y drenaje forman parte de los recursos municipales, por disposición del artículo 115 Constitucional.

En vez de interpretar el precepto constitucional, el tribunal "a quo" se alejó de su teleología y de las razones que lo inspiraron, pues lo que verdaderamente dispone el artículo 115, fracción IV inciso "c" de la Constitución Federal es que la hacienda pública municipal se forma entre otros aspectos por "...Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo...", lo cual, interpretado armónicamente con lo establecido en la fracción III del propio numeral, se traduce en que la libertad hacendaria de los municipios aplica a los ingresos que reciban por los servicios que efectivamente presten, y no a que deba

—

—

—



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

recibir (indiscriminadamente) los ingresos de la prestación del servicio de agua potable, aunque no sea el Municipio quien brinde tal servicio.

La mencionada errónea consideración podría equipararse a que los Municipios indiscriminadamente exijan "utilidades" captadas por el cobro de esos servicios, aunque ellos no inviertan recursos ni intervengan en la prestación de los mismos, como sucede en la especie. Es decir, en el caso de Nuevo León, en el no concedido supuesto de que fuera acertado el criterio asumido por el tribunal "a quo", los Municipios serían propietarios absolutos del patrimonio de la Institución Pública Descentralizada "Agua y Drenaje de Monterrey", sin importar que ellos no hayan hecho inversión o trabajo alguno para conformarlo.

En otras palabras, el artículo constitucional objeto de interpretación refiere únicamente que los municipios **percibirán los ingresos por los servicios que presten**, pues de la exposición de motivos referente a la reforma del precepto en cita se desprende que la misma tuvo como origen la necesidad de dar autonomía financiera a los municipios, y en razón específica de ello se enunció cuáles eran los ingresos con los que se formaría su hacienda, pero sin que ello tuviera otra implicación. De ello no se desprende que, como equivocadamente se aduce en la sentencia recurrida, a los municipios pertenezca cualquier ingreso que se reciba por el servicio de agua potable.

Por lo tanto, es óbice lo señalado en la sentencia recurrida en el sentido de que atendiendo al principio de supremacía constitucional, es al Municipio al que corresponde originariamente prestar el servicio público de agua potable, y que por ello no importa que en los artículos 15 y 41 de la Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" establezcan que el patrimonio es propio de dicha institución, a lo cual agrega que no puede desconocerse la naturaleza originaria del servicio. Tales estimaciones no pueden tener su fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, ya que si bien es cierto que el servicio de agua potable corresponde en teoría prestarlo a los municipios, no menos cierto es que dicho servicio puede ser prestado por el Estado cuando así se estime necesario a solicitud de los municipios, y en el caso de Nuevo León, los Municipios no prestan el servicio de agua, pues este se brinda en realidad por "Servicios Agua y Drenaje de Monterrey" sin que ello haya sido objetado por los Municipios, de manera que no por el sólo hecho de que se establezca dicha competencia teórica u originaria, los ingresos captados por el servicio de agua y alcantarillado prestado por "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" pertenecerán a la entidad municipal, a lo cual cabe agregar que la propia Constitución establece que los Municipios percibirán los ingresos derivados de los servicios públicos que

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

presten, no por aquellos derivados de los servicios públicos prestados por otro organismo o dependencia gubernamental.

Robustece lo antes dicho lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Controversia Constitucional 51/1996, en el siguiente sentido:

En efecto, la autorización otorgada en su Artículo Primero, al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para contratar dos créditos con una Institución Bancaria, evidentemente no le causa perjuicio alguno al Municipio, al no encontrarse previsto legalmente que la autorización para que dicho Sistema Operador contrate créditos, sea facultado a competencia del Ayuntamiento actor, o bien, que este último sea quien tenga que contratar dichos créditos.

El Artículo Segundo, como se indicó antes, determina la autorización al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para que en cumplimiento de las obligaciones que contraiga con motivo de créditos bancarios, afecte en y a favor de la Institución Bancaria, como fuente de pago, el producto de la recaudación derivada de la cobranza de las cuotas, tasas y tarifas a cargo de los propietarios, poseedores o usuarios beneficiarios de la obra pública objeto de la inversión.

ACUERDO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Ahora, de la lectura del Decreto de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante el cual se creó el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, publicado el veintisiete del citado mes y año, el cual obra a fojas ciento dieciséis del expediente, se puede apreciar que el citado Sistema Operador es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Puebla, con personalidad y patrimonio propios; que tiene por objeto, entre otros, la planeación, programación, estudio y proyección, administración y operación de obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y en general la prestación o concesión de servicios, conforme lo establezcan las disposiciones aplicables; recaudar y administrar los ingresos y recursos financieros del Sistema; que forman parte de su patrimonio los bienes que por cualquier título le sean transmitidos por particulares, la Federación, el Estado o el Municipio y, que los ingresos que percibe se aplicarán íntegramente a sus objetivos.

De lo anterior se desprende que al citado Sistema Operador, a través del referido Decreto (respecto del cual, como ya se estableció antes, resulta extemporánea la presente controversia constitucional), le fue encomendado legalmente la prestación de los servicios de agua potable y

(

(

(

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON**

PODER EJECUTIVO

alcantarillado en el Municipio de Puebla y que, dentro de su patrimonio se encuentran las cuotas que recauda por la prestación del indicado servicio.

Por su parte, los artículos 29, fracción II, inciso a), 84, ambos de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla y Décimo Tercero, fracción VI, mismo inciso del Decreto de veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro que creó originalmente al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, establecen:

"ARTÍCULO 29.- Los Organismos Operadores, "ejercerán las facultades que en el Decreto de su "creación se establezcan y que en forma "enunciativa pero no limitativa, podrán ser:...

II.- La administración de las contribuciones, que "de conformidad con las leyes se deriven por la "prestación de los servicios públicos a su cargo, "quedando facultados para ejercer todas las "funciones operativas inherentes a la recaudación, "comprobación, determinación de créditos y "cobranzas, como son:
Recaudación, notificación y cobranza..."

ARTÍCULO 84.- Los adeudos a cargo de los "usuarios por la prestación de los servicios objeto "de esta Ley, tendrán el carácter de créditos "fiscales".

DÉCIMO TERCERO.- Son facultades del Consejo "Directivo:...

Para la administración de las contribuciones "a que se refiere la fracción anterior, el organismo "queda facultado para ejercer a excepción del "recurso de revisión, todas las funciones "operativas inherentes a la recaudación, "comprobación, determinación de créditos y "cobranzas en los términos de la Legislación "Municipal aplicable de manera enunciativa pero no "limitativa se indican a continuación:

"a).- Recaudación, notificación y cobranza..."

De los preceptos transcritos, se desprende que a las cuotas por la prestación del servicio de agua potable, se les da el carácter de cobros fiscales por equiparación, así como que el multirreferido Sistema Operador puede llevar a cabo la recaudación, notificación y cobranza de las cuotas correspondientes por los servicios que presta.

En consecuencia, al quedar de manifiesto con lo anteriormente asentado, que no es al municipio actor a quien legalmente le corresponde prestar directamente el referido Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Puebla, sino que tal es competencia del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

de Puebla, Organismo Descentralizado de composición mixta, con personalidad y patrimonio propios, en cumplimiento de su Decreto de creación, debe concluirse que la autorización de la Legislatura Estatal contenida en el Artículo Segundo del Decreto impugnado publicado el dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, para que dicho Organismo comprometa sus ingresos en garantía de créditos bancarios, evidentemente no puede ni debe considerarse que afecte de manera directa la libre administración de la hacienda municipal de la parte actora o su autonomía, puesto que los ingresos correspondientes a los servicios de agua potable y alcantarillado, al ser recaudados por el aludido Sistema Operador, quien presta ese servicio, ya no son parte de aquéllos respecto de los cuales puede tener libre disposición el municipio actor, al tratarse de un patrimonio propio del multicitado Sistema Operador y diferente al del Municipio de Puebla.

Por lo tanto, mientras el servicio de agua potable y alcantarillado se siga prestando por el Organismo Descentralizado de mérito y no directamente por la administración Municipal, la afectación de los ingresos no puede entenderse que lesione los principios de libre administración municipal o la autonomía del Municipio actor. De ahí que la autorización a que se refiere el Artículo Segundo del Decreto impugnado publicado el dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, no causa perjuicio a la parte actora.

De igual forma, la autorización contenida en los Artículos Tercero y Cuarto del Decreto de mérito, al Gobierno del Estado, para constituirse en garante de dichos créditos y, de manera independiente contratar un crédito diverso, es claro que tampoco invade ninguna facultad establecida legalmente a favor del Municipio actor, pues resulta inconcuso que exclusivamente se trata de una autorización al citado Gobierno, de la cual éste puede o no hacer uso, por lo que no trae implícita ninguna obligación para el mismo y, mucho menos para el Municipio actor; tampoco es violatorio lo dispuesto en el Artículo Quinto del Decreto, el que se autorice al referido Gobierno Estatal, y al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para pactar condiciones más convenientes a fin de reducir los cargos financieros en los créditos motivo de la autorización, pues sin duda tal circunstancia no afecta en forma alguna la esfera jurídica del Municipio actor, al no imponerle ninguna obligación, ni invadir alguna facultad prevista legalmente a su favor.

Por lo que respecta a los artículos Transitorios Segundo y Tercero, del Decreto publicado el dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, que se impugnan por inconstitucionales, mediante los cuales se faculta al Sistema Operador para aprobar las cuotas, tasas y tarifas por los servicios

4 A

—

—

—

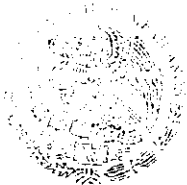


GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

que presta, en términos de los artículos 96A, 96B y 96C, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, y se establece que una vez que entren en vigor los contratos de crédito autorizados, se suspenderán hasta la amortización de los créditos a que se refiere el Decreto, los artículos 75, 76 y 77, de la Ley mencionada. Debe precisarse, que una de las características particulares que rigen en las Controversias Constitucionales, es en el sentido de que con la emisión de la norma o acto materia de impugnación, debe existir un agravio en perjuicio del actor, y de no existir éste, tal norma o acto no puede ser materia de impugnación a través de dicho medio de control Constitucional.

Lo anterior, se desprende claramente de la exposición de motivos que en virtud de la iniciativa de reformas al Poder Judicial de la Federación, aparece publicada el seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el Diario de los Debates del Senado, del Congreso de la Unión, que en la parte que interesa, precisamente en relación a las Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, precisa:

El Artículo 105 del texto original de la "Constitución le otorga competencia exclusiva a la "Suprema Corte de Justicia para conocer las "controversias que se susciten entre dos o más "estados, entre uno o más estados y el Distrito "Federal; entre los poderes de un mismo Estado y "entre órganos de gobierno del Distrito Federal "sobre la constitucionalidad de sus actos. Los "mencionados supuestos del Artículo 105 no "prevén muchos de los conflictos entre los órganos "federales, estatales y municipales que la realidad cotidiana está planteando...— ...Con la "modificación propuesta, cuando alguno de los "órganos mencionados en el párrafo anterior "estime vulnerada su competencia por actos "concretos de autoridad o por disposiciones "generales provenientes de otro de esos órganos, "podrá ejercitar las acciones necesarias para "plantear a la Suprema Corte la anulación del acto "o disposición general...— ...El segundo proceso "que se propone recoger en el Artículo 105 "constitucional es el de las denominadas acciones "de inconstitucionalidad. En este caso, se trata de "que con el voto de un porcentaje de los "integrantes de las Cámaras de Diputados y de "Senadores, de las legislaturas locales de la "Asamblea de Representantes del Distrito Federal "se puedan impugnar aquellas leyes que se "estimen como contrarias a la Constitución. El "Procurador General de la República podrá también "impugnar leyes que estime contrarias a la "Constitución.— A diferencia de lo que acontece en "el juicio de amparo y en las controversias "constitucionales, en las acciones de "inconstitucionalidad no es necesario que exista "agravio para que sean iniciadas. Mientras que en "el amparo se requiere de una afectación de las "garantías individuales y en las controversias

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

“constitucionales de una invasión de esferas, las “acciones de inconstitucionalidad se promueven “con el puro interés genérico de preservar la “supremacía constitucional. Se trata, entonces, de reconocer en nuestra Carta Magna una vía para “que una representación parlamentaria calificada, o “el Procurador General de la República, puedan “plantearle a la Suprema Corte de Justicia si las normas aprobadas por la mayoría de un órgano “legislativo son, o no, acordes con la “Constitución...”.

Atendiendo a lo anterior, debe concluirse que todo concepto de invalidez o documento expresado en la demanda de controversia constitucional relativo a controvertir la legalidad de un acto o norma impugnado, resulta inatendible, si del análisis verificado a dicho acto o norma, no se desprende que su contenido cause un agravio a la parte actora, entendiéndose por esto último, la invasión a su esfera de facultades y competencia.

En consecuencia, al establecer el artículo 75, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla:

ARTÍCULO 75.- El H. Congreso del Estado “aprobará las contribuciones y productos que se “causarán por la prestación de los servicios que “regula esta Ley correspondiendo a la Comisión “Estatutaria a los Organismos Operadores actualizar “las cuotas, tasas y tarifas respectivas, conforme al “artículo 76, de este ordenamiento.
“El H. Congreso del Estado fijará mediante Decreto “las sanciones por infracción a las disposiciones “que regula esta Ley y su Reglamento”.

Es inconcuso, que lo determinado en el referido artículo Segundo Transitorio del Decreto, del dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el sentido de facultar al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable, para aprobar las cuotas, tasas o tarifas, por los servicios que prestan, en términos de los artículos 96A, 96B y 96C, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, no causa perjuicio al Municipio actor, al no ser a éste, a quien legalmente le está encomendada la citada actividad, sino que como se desprende del precepto transcrito y, lo acepta la propia actora en su segundo concepto de invalidez, corresponde al Congreso del Estado. Por lo tanto, los argumentos formulados en relación a la inconstitucionalidad del indicado artículo transitorio, son inatendibles.

Por los mismos motivos indicados en el párrafo precedente, son inatendibles también, los argumentos referentes al artículo Tercero Transitorio del aludido Decreto, publicado el dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, que señala en lo conducente: que una vez que entren en vigor los contratos de crédito respectivos, se suspenderán hasta

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

la amortización de los créditos a que se refiere el Decreto, los artículos 75, 76 y 77, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, ya que en los últimos preceptos, en síntesis sólo establecen que será el Congreso del Estado, quien aprobará las contribuciones y productos que se causarán por la prestación de los servicios que regula dicha Ley de Agua; que para el establecimiento y actualización de las cuotas, tasas y tarifas a que se refiere el artículo anterior se considerarán los gastos en dicho precepto enumerados; y que las inversiones de infraestructura hidráulica serán recuperables a través del establecimiento de las cuotas a que se refieren los artículos 75 y 76, ya citados, o bien a través de contribuciones de mejoras u otro mecanismo legal. De todo lo cual no se desprende ninguna determinación que pueda causar perjuicio al Municipio actor.

Los citados numerales, son del tenor literal siguiente:

ARTICULO 75.- El H. Congreso del Estado "aprobará las contribuciones y productos que se causarán por la prestación de los servicios que regula esta Ley correspondiendo a la Comisión Estatal y a los Organismos Operadores actualizar las cuotas, tasas y tarifas respectivas, conforme al artículo 76 de este ordenamiento.

El H. Congreso del Estado fijará mediante Decreto las sanciones por infracción a las disposiciones que regula esta Ley y su Reglamento".

ARTICULO 76.- Para el establecimiento y actualización de las cuotas, tasas y tarifas a que se refiere el artículo 75 de esta Ley se considerarán los gastos de operación, administración, mantenimiento, amortización de créditos y la constitución de un fondo de reserva para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los sistemas, la depreciación de activos fijos y los demás gastos que correspondan al costo real de la prestación del servicio.

Para su validez el Decreto o Acuerdo que contenga la actualización deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado."

ARTICULO 77.- Las inversiones de infraestructura hidráulica serán recuperables, por lo que se considera dicho concepto en el establecimiento o actualización de las cuotas, tasas y tarifas a que se refieren los artículos 75 y 76 de esta Ley, o bien podrán recuperarse a través de contribuciones de mejoras u otro mecanismo que establezca la Ley."

En otro aspecto, argumenta el citado Municipio, que son inconstitucionales los artículos 96A, 96B y 96C, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, adicionados en el Decreto impugnado, publicado el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, pues

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

su contenido viola el artículo 31, fracción IV, y 49, de la Constitución General de la República.

El Decreto indicado de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, como antes se precisó, reforma el artículo 29, en su fracción VII, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, y adiciona al título cuarto de dicho ordenamiento el capítulo IV, mismo que comprende los aludidos artículos 96A, 96B y 96C.

Tales dispositivos son del tenor literal siguiente:

ARTÍCULO 96-A.- Los Organismos Operadores que celebren operaciones de financiamiento con la "autorización del Congreso del Estado, estarán "facultados para aprobar las cuotas, tasas y tarifas "relacionadas con la prestación de los servicios de "agua potable, "alcantarillado y saneamiento, hasta "la amortización del crédito que se contrate.

Los adeudos a cargo de los usuarios por la "prestación de los servicios objeto de esta Ley, se "equiparan a créditos fiscales, y le serán aplicables "los recargos, sanciones, gastos de ejecución, "actualización, indemnizaciones e intereses, en los "términos de este ordenamiento y de la legislación "hacendaria aplicable. Dichos adeudos serán "exigibles por los Organismos Operadores a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución."

NACIONAL

ARTÍCULO 96-B.- El órgano de gobierno de los "Organismos Operadores aprobará las cuotas, tasas "y tarifas de cada uno de los servicios que presten, "debiendo publicarse en el Periódico Oficial del "Estado.

"En la fijación de las cuotas, tasas y tarifas por los "servicios, se deberán incluir los costos de "operación, administración, conservación, "mantenimiento y mejoramiento, así como los "recursos necesarios para constituir un fondo que "permita la rehabilitación, ampliación y "mejoramiento de los sistemas, la recuperación del "valor actualizado de las inversiones del Organismo "Operador y el servicio de su deuda; dicho fondo se "constituirá y operará de conformidad con las "reglas técnicas que apruebe el "Órgano de Gobierno "del Organismo.

"La recuperación del valor actualizado de las "inversiones de infraestructura hidráulica realizadas "por el Organismo Operador respectivo, por sí o por "terceros, deberá tomarse en cuenta para su "incorporación en la fijación de las cuotas, tasas y "tarifas respectivas o para su cobro por separado a "los directamente beneficiados por las mismas, se "podrán celebrar con los beneficiarios convenios "que garanticen la recuperación de la inversión, "salvo cuando ésta se

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

efectúe a través de leyes de "contribuciones de mejoras por obras públicas "hidráulicas en el Estado o Municipio, o a través de "una legislación fiscal similar.

"Se deberán revisar y ajustar las cuotas, tasas y "tarifas a fin de actualizarlas semestralmente o "antes, si así se conviene en los "contratos de "crédito que al efecto celebre el Organismo "Operador; para cualquier modificación se deberá "elaborar un estudio que justifique las nuevas "cuotas, tasas y tarifas.

"Los Organismos Operadores deberán disponer lo "necesario para que, de acuerdo con la naturaleza "del servicio de que se trate, se establezcan tarifas "por rangos de consumo y tipo de uso.

"Las cuotas, tasas y tarifas que determine el "Organismo Operador en los términos de este "capítulo, no podrán ser materia de condonaciones, "exenciones o reducciones o cualquier otro acto "que merme o atrase la recaudación, salvo los "casos de siniestros que afecten la situación "económica de un grupo de la colectividad o se "autorice su pago a plazos, en ambos casos previo "acuerdo del "Órgano de Gobierno del Organismo "Operador y con los requisitos que este mismo "establezca.

"El Estado y los Municipios no serán sujetos de "pago de las cuotas, tasas y tarifas que se emitan "conforme a este capítulo, respecto de los bienes de "los sean propietarios o poseedores.

"Las cuotas, las tasas y tarifas que se determinen "conforme a este capítulo no estarán sujetas al "procedimientos de actualización previsto en los "artículos 75, 76, 77 y 78 de esta Ley, por lo que al "reintegro en vigor el Decreto del H. Congreso del "Estado en el que se autoriza la contratación del "financiamiento, se suspenderá la aplicación de las "mismas, las correlativas de la misma Ley y las "contenidas en los demás ordenamientos que "resulten aplicables hasta la amortización total del "crédito.

"Los adeudos de los usuarios que se hubieren "generado conforme a las disposiciones que se "suspendan de acuerdo a lo previsto en este "artículo, se calcularán y pagarán en términos de las "disposiciones vigentes en el momento en que se "generaron.

"Los adeudos de los usuarios que se hubieren "causado conforme a las disposiciones de este "capítulo se calcularán y pagarán en términos de "las disposiciones vigentes en el momento en que "se generaron."

"ARTÍCULO 96-C.- Los Organismos Operadores "deberán celebrar Convenios de Colaboración "Administrativa con el Gobierno Estatal, en el caso "de que requiera su garantía en las operaciones de "financiamiento.

"En los casos en que el patrimonio estatal "garantice el cumplimiento de las obligaciones de "los Organismos Operadores, deberán

153

112

A

—

—

—



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

preverse en "los contratos respectivos las condiciones que "garanticen la participación estatal en el "seguimiento del cumplimiento de las obligaciones "crediticias y del destino de las inversiones. Las "circunstancias posteriores a la suscripción de los "documentos, que limiten la facultad estatal para "establecer el seguimiento a que se refiere este "párrafo, implicarán el retiro de la garantía por el "monto del crédito que aún no se hubiere desembolsado o ejercido, debiendo notificarse a la "Institución acreditante con una anticipación de 30 "días para que se proceda en los términos pactados "al efecto, en el contrato respectivo.

"Será responsabilidad de los Organismos "Operadores prever en su presupuesto de egresos, "las partidas necesarias para el servicio de la "deuda."

"El H. Congreso del Estado podrá en el Decreto "respectivo, autorizar a los Organismos Operadores "a reestructurar su deuda pública, a efecto de "reducir las cargas financieras modificando tasas "de interés, plazos y formas de pago."

De lo transcrito se desprende de forma indiscutible, que las facultades otorgadas a los Organismos Operadores, de ninguna forma inciden en la esfera jurídica de atribuciones y facultades del Municipio actor, toda vez que si bien aluden a la aprobación por éstos de cuotas, tasas y tarifas, relacionadas con la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, qué costos deben incluirse al fijar lo anterior y, que dichos organismos deben celebrar convenios de colaboración administrativa con el Gobierno del Estado, en caso de que requieran su garantía en las operaciones de financiamiento, no menos exacto es que como se precisó en párrafos precedentes, la facultad de aprobación de las cuotas referidas, legalmente corresponde al Congreso de la Entidad y no a los Municipios, y la circunstancia de que se indique que costos deben incluirse al fijarse dichas cuotas, así como la obligación de los organismos operadores de celebrar los convenios a que se alude, evidentemente no puede estimarse que cause agravio alguno al Municipio actor, ya que se reitera, no se trata de facultades o atribuciones reglamentadas en su favor.

No es obstáculo alguno que en el segundo párrafo del artículo 96A, del Decreto de mérito, publicado el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, se determine que los adeudos a cargo de los usuarios por la prestación de los servicios objeto de la Ley de Agua y Servicios del Estado de Puebla, se equiparán a los créditos fiscales, argumentando al respecto el Municipio actor como conceptos de invalidez, que para la equiparación citada, es necesario que la contribución se encuentre prevista y determinada expresamente en una ley; ya que con independencia de que tal argumento resulte o no atinado, lo cierto es que la determinación de que se trata, sin duda, no causa agravio alguno al Municipio actor, pues éste se

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

encuentra excluido, al determinarse en el párrafo sexto del artículo siguiente (96B).

"...El Estado y los Municipios no serán sujetos del "pago de las cuotas, tasas y tarifas que se emitan "conforme a este capítulo, respecto de los bienes "de los que sean propietarios o poseedores.."

Puede apreciarse de las consideraciones vertidas por el Pleno de la Corte que por servicios no prestados directamente por el Municipio es imposible que los ingresos le correspondan a éste, pues en todo caso corresponderán al ente que en realidad preste el servicio. Recuérdese que en el caso de Nuevo León, el servicio lo presta "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" y por ende los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado no le corresponden a los Municipios, pues así lo dispone la Constitución, ya que lo que verdaderamente se dispone en ésta es que los ingresos derivados del servicio público de agua corresponderán al Municipio cuando el mismo preste efectivamente el referido servicio.

No pasa desapercibido para el suscrito lo aseverado en la sentencia ahora impugnada en cuanto a que los "inmuebles de que se trata" son del dominio público de la Federación, lo cual pone de relieve que no es verdad que al Consejo de la Judicatura Federal le pertenezcan dichos bienes, sino, como bien lo afirmó el tribunal "a quo", le pertenecen a la Federación, lo cual confirma que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues en todo caso corresponde precisamente a la Federación, por conducto de quien la represente, promover lo conducente en defensa de lo que a esos inmuebles se refiere.

La eroneidad e ilegalidad de la sentencia recurrida se confirma con lo enunciado por el propio tribunal "a quo", ya que manifestó en el propio fallo que la extensión prevista en el artículo 115 constitucional se actualiza cuando el servicio lo presta el Municipio, lo cual no acontece en la especie, pues, repitiendo, el servicio lo presta "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey".

Cabe resaltar que el Magistrado disidente del Tribunal "a quo" se pronunció hacia una justa y recta interpretación del artículo 115 constitucional, pues al formular su voto particular, lo hizo bajo los argumentos que a continuación transcribiré, los cuales hago propios a modo de agravios:

Ahora, entre los ingresos que el precepto constitucional contempla para formar parte de la hacienda municipal, están los impuestos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria, respecto de los cuales el municipio puede

1

2

3

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas funciones administrativas relacionadas con esas contribuciones, no para que el Municipio renuncie a su derecho de percibir tales contribuciones; así mismo se contemplan, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de los Municipios.

En este último supuesto, es decir, respecto de los ingresos provenientes de la prestación de servicios públicos, no se señala específicamente a cuáles servicios públicos se refiere; no obstante, resulta claro que se refiere a aquéllos que son prestados por el Municipio, no por el Estado o por diversa entidad jurídica. Esto es así, pues de la lectura del texto constitucional de mérito, específicamente de la fracción IV, se advierte que únicamente se refiere a la atribución consignada a los Municipios, no al Estado, de administrar libremente su hacienda en cuanto a los ingresos obtenidos, entre otros, 'de la prestación de servicios públicos a su cargo'.

En ese orden, lo tocante a la exención constitucional prevista respecto de los bienes de dominio público de la federación, de los Estados o de los Municipios, se prevé solamente respecto de los ingresos destinados a ser repartidos a la hacienda de los Municipios, como el supuesto de aquéllos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo; pues, como ya se precisó, de la interpretación realizada al citado artículo 115, fracción IV, constitucional, se desprende que la exención que el Constituyente contempló, no abarca las contribuciones que el Estado perciba, sino solamente las destinadas a favor de los Municipios.

NACIONAL

En consecuencia, el Director General de Asuntos Jurídicos arguyó que se le debe considerar, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, como exento del pago de las cuotas originadas por la prestación del servicio público de agua y drenaje, por lo que es necesario que se determine si tal prestación de servicios se encuentra o no a cargo del Municipio y, más aún, si los derechos percibidos por la prestación de tal servicio público, están destinados a ingresar a la hacienda municipal.

En la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, específicamente en sus artículos 2, 15, 29 Y 41, se establece lo siguiente:

'Artículo 2º. Compete a los Municipios de la Entidad, con el concurso del Estado, conforme lo determina esta Ley, la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.'

'Artículo 15. En cada zona de conurbación los servicios públicos de agua potable y saneamiento se prestarán por los Municipios, bajo los esquemas organizacionales previstos en esta Ley, y podrán éstos acordar con el Estado que la prestación de estos servicios se lleve a

A



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

cabo por los organismos públicos descentralizados del Estado que serán creados para tal efecto, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 131 fracción 11, inciso a) de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; Artículo 26 de la Ley General de Asentamientos Humanos; las disposiciones aplicables en materia de Desarrollo Urbano en el Estado de Nuevo León, y Título Cuarto de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

En la zona conurbada del Área Metropolitana que comprende los Municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y el parque Ciudad Industrial Mitras, en García, N.L. los servicios se prestarán por el organismo público estatal descentralizado denominado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. I.P.D. No obstante, y por circunstancias más favorables de carácter financiero, de eficiencia en la prestación de los servicios y de beneficio comunitario los servicios que actualmente presta 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.' I.P.D. podrán ser concesionados a particulares, conforme a las prescripciones establecidas en el Artículo 7 fracción V y en el Capítulo V de esta ley.

El Organismo Público denominado 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey', I.P.D., efectuará la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y ~~superficiales~~ que se aprovechan para el suministro del área metropolitana de Monterrey, con sus respectivos acueductos, y podrá en su caso, celebrar convenios con los Municipios donde se originan las fuentes de abasto o los que están aledaños a los que conducen el agua al área metropolitana, para entregarles agua en bloque, de acuerdo a la dotación que establezca la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y conforme a las tarifas que tenga establecidas para tal efecto 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey', I. P. D.'

'Artículo 29. Todo usuario está obligado al pago de las cuotas o tarifas por los servicios de agua potable, drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales.'

'Artículo 41. Las cuotas y tarifas deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema. Entendiéndose por costo financiero el derivado del servicio de la deuda.'

✓

✓

✓



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

De lo anterior se advierte que la legislatura estatal previó que la prestación del servicio público de agua y drenaje corresponde a los Municipios, con el concurso del Estado y en los términos establecidos en la Ley. No obstante, en el caso de Monterrey y su zona conurbada, el legislador estableció que la prestación de dicho servicio público corresponde al organismo público descentralizado 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,' I.P.D.

También se advierte, que los usuarios del citado servicio están obligados a pagar las cuotas y tarifas establecidas por la legislatura del Estado, las que son destinadas para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y reserva para la rehabilitación y mejoramiento.

Luego, en la Ley que Crea una Institución Pública Descentralizada con Personalidad Jurídica Propia y con Domicilio en la Ciudad de Monterrey, que se denominará 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey', específicamente en sus artículos 2, 3 y 4, se establece:

Artículo 2. La Institución tendrá por objeto prestar los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial a los habitantes del Estado de Nuevo León, conforme a las disposiciones de esta Ley, de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. Para tal efecto, realizará la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial, así como de las redes de conducción y distribución de las aguas, quedando facultado para la formalización de los actos jurídicos necesarios para la consecución de su objeto, así mismo, impulsar y desarrollar la investigación para el aprovechamiento de todo subproducto que se genere en los procesos de potabilización, tratamiento y saneamiento de las aguas residuales. La Institución y los municipios podrán convenir su participación en el desarrollo de los servicios públicos indicados.

CORTE

LA La Institución podrá prestar además servicios de asesoría técnica en el saneamiento de las aguas residuales, así como en el monitoreo y verificación de la calidad de éstas y en relación con todas las actividades y servicios que presta, a las personas físicas y morales, públicas o privadas que se lo soliciten, cubriendo los interesados los costos que se originen por la prestación de los mismos, sin que se pueda estipular ningún tipo de subordinación ni dirección, respecto a la Institución.

A

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

'Artículo 3. El patrimonio de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey se integrará en la siguiente forma:

- a) Con la red de agua y drenaje y demás bienes y derechos adquiridos por el Estado de Nuevo León de la Compañía de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, con fecha 25 de julio de 1945, cuya propiedad el Estado le transfiere por esta Ley. Los bienes que dejaren de estar afectos directamente a la prestación de los servicios de agua y drenaje, revertirán al patrimonio del Estado.**
- b) Con las ampliaciones y mejoras hechas al sistema con posterioridad al 25 de Julio de 1945.**
- c) Con las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje.**
- d) Con el producto del impuesto de plusvalía y con el derecho de Cooperación establecidos por el Decreto número 55 de fecha 31 de Enero de 1946, expedido por la H. Legislatura del Estado y en los términos de las leyes de ingresos relativas.**
- e) Con los bienes y derechos que en el futuro aporten o afecten a la prestación de los servicios: La Federación, el Estado, los Municipios u otras instituciones públicas o privadas, y, NACIONES UNIDAS.**
- f) Con los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título jurídico.**

Los bienes y derechos a que se refiere este artículo pasarán a formar el patrimonio de la institución con los gravámenes que las inversiones en el sistema ocasionaron. Deberá procederse desde luego a formular un balance para determinar el activo de la institución.'

'Artículo 4. Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la institución estarán afectos a los fines de la misma, entre los cuales, se considera también la posibilidad de afectarlos como garantía y fuente de pago para créditos obtenidos con destino a ampliar o mejorar los sistemas de agua y drenaje. En consecuencia, será nulo cualquier acto o contrato que los distraiga de su objeto.'

Como se ve, con el objeto de que sean prestados los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial, la legislatura del Estado

1

2

3



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO**

creó la Institución Pública Descentralizada 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey'.

Dicho organismo descentralizado tiene personalidad jurídica propia, independiente de la del Estado o de los Municipios y, patrimonio propio, el cual se compone, de entre otros bienes, de la infraestructura de la red de agua y drenaje, así como sus mejoras y ampliaciones y; de las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje.

Finalmente, se observa que los bienes que forman el patrimonio de la paraestatal están afectados únicamente a los fines de la misma paraestatal.

En dicho orden, no es válido decir que las cuotas y tarifas que cobra la Institución Paraestatal Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, constituyan derechos de los que el Consejo de la Judicatura Federal pueda estar exento en los términos a los que se refiere el artículo 115 constitucional; pues, en primer lugar, tal precepto constitucional es preciso en precisar, como ya se señaló, que la exención prevista respecto de bienes de dominio público de la Nación, es aplicable solamente respecto de los ingresos obtenidos por los servicios públicos a cargo de los Municipios, circunstancia que en la especie no sucede, pues el servicio de agua y drenaje de Monterrey y su zona conurbada corresponde a una institución paraestatal descentralizada, por lo que no está a cargo de los Municipios.

A NACIÓN
DE AGUA
En segundo lugar, la exención a que se refiere el artículo 115 constitucional, es relativa a los ingresos derivados de la prestación del servicio público a cargo del Municipio y, en la especie, el Municipio no percibe ingreso alguno por concepto del servicio público de agua y drenaje (que además no está a su cargo), sino que las cuotas y tarifas percibidas por ese concepto forman parte del patrimonio propio de la empresa paraestatal en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley que Crea una Institución Pública Descentralizada con Personalidad Jurídica Propia y con Domicilio en la Ciudad de Monterrey, que se denominará 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey'.

Así, no es posible concluir, en cuanto al fondo del asunto, que el Consejo de la Judicatura Federal deba estar exento, en términos de lo establecido en el citado artículo 115 de la Constitución Federal, del pago de las cuotas y tarifas aplicables por la prestación del servicio público brindado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Paraestatal Descentralizada. Máxime, pues lo que protege la norma constitucional de mérito es la hacienda municipal y su libre administración, no el patrimonio de un organismo público descentralizado.

A

1

2

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

Admitir lo contrario llevaría al extremo de imponer exenciones de las prohibidas en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo si se observa que en ningún precepto constitucional se prevé expresamente que los servicios de agua y drenaje no deba causar cargos a los entes públicos, como el Consejo de la Judicatura Federal.

En efecto, el precepto constitucional 115, aquí analizado, refiere únicamente a los ingresos que los municipios perciben, y establece una exención a favor de los bienes de dominio público de la Nación, respecto de los ingresos que el Municipio perciba por la prestación de algún servicio público. Por tanto, si el Municipio no presta el servicio público de agua y drenaje, ni percibe los ingresos obtenidos por la prestación de tal servicio, es palmario que la exención prevista en el numeral 115 constitucional no es aplicable al caso; pues, como ya se ha reiterado, el servicio público es prestado por un organismo distinto incluso al Estado, cuyo patrimonio le es propio, llegan a la hacienda municipal.

Por último, no desatiendo el hecho de que no corresponde al Consejo de la Judicatura Federal impugnar la ley mediante la cual se determina que la prestación del servicio de agua y drenaje corresponde a una empresa estatal descentralizada y no al Municipio, ya que solo al Municipio corresponde la facultad, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción 1, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de impugnar tal ley, pues es a la hacienda Municipal a quien afecta esta determinación al no permitirle obtener ingresos por la prestación de tal servicio.

ACUERDO

Por lo expuesto en el inciso anterior resulta inexplicable que en la sentencia recurrida se haya establecido que el Acuerdo tildado de inconstitucional contravenga lo dispuesto en el artículo 115 fracción IV inciso "c" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello tiene como endeble premisa la suposición de que dicho numeral exenta a la Federación del pago del servicio de agua potable, lo cual es incierto, pues lo que verdaderamente dispone es que respecto de los ingresos que perciba el Municipio por los servicios que preste el mismo (no otra dependencia u organismo), los bienes de la Federación estarán exentos, sin que sea dable estimar contra todo derecho que los ingresos que reciban otras dependencias u organismos pertenezca a los Municipios, aunque éstos no presten el servicio, tal y como lo señalé en el inciso anterior.

Nótese que la verdad legal y lo establecido en la Constitución Política de nuestro país no puede desconocerse tan fácilmente como indebidamente lo hizo el tribunal "a quo". Nótese que el propio órgano jurisdiccional estableció que los bienes del dominio público de la Federación "...están exentos de pagar las



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

contribuciones que se refieran a los ingresos derivados de los servicios que presten los municipios, como lo son los relacionados con el servicio de que agua y drenaje...". Es decir, el mismo órgano de justicia confirmó, como lo hizo el Pleno de la Corte al resolver la Controversia Constitucional 51/1996, que los ingresos por los servicios de agua y drenaje se percibirán por los Municipios cuando sean éstos los que presten el servicio, lo cual no acontece en la especie.

En consecuencia, no es veraz que el acuerdo tildado ilegalmente de inconstitucional, contravenga lo dispuesto en el artículo 115 de la ley fundamental, pues no se dan los supuestos para la actualización de la exención allí prevista, al no prestarse el servicio de agua y drenaje por los Municipios del Estado de Nuevo León.

d) Por añadidura debo señalar que la exención tampoco se surte a favor de la Federación, porque las tarifas de agua y drenaje constituyen un aprovechamiento y no una contribución (derecho), debido a las siguientes consideraciones, que también fueron así fundadas y motivadas por el Magistrado Responsable, sin que el Tribunal Colegiado "a quo" las hubiera desvirtuado, o bien sin que hubiera señalado su incorrección, por lo que me sumo a ellas a manera de agravios, insistiendo en lo que enseguida replanteo:

Primero: La obligación de usuario para el pago del servicio de agua y drenaje deriva de un contrato administrativo de adhesión y no de una ley, el cual celebran con "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey". Por tanto es incierto que entre los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado y la institución mencionada exista una relación tributaria. En efecto, en el señalado contrato administrativo se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, por lo que la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio es de coordinación voluntaria y de correspondencia, independientemente de que por el servicio deba de hacerse pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido cuando aquél no se cubre dará lugar al que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo.

Segundo: El servicio no lo presta alguna Secretaría o dependencias del Estado, sino un Organismo Paraestatal, por lo que los ingresos que se obtienen por el pago del servicio de agua y drenaje, pasan a forma parte del patrimonio de dicho organismo, pues así se establecen en el artículo 3° inciso c) de la Ley que crea la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Tercero: Los ingresos que se obtienen por los servicios de agua y drenaje no van encaminados a satisfacer el presupuesto de egresos de la Administración Pública Estatal, sino que éstos son destinados para cubrir los costos

19

✓

✓

✓

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema, ella de conformidad con el artículo 41 de la Ley Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, que a la letra dice: "Artículo 41.- las cuotas y tarifas deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema. Entendiéndose por costo financiero el derivado del servicio de la deuda.", de igual forma el artículo 10 de la Ley que crea la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, señala: "ARTÍCULO 10.- Las tarifas que hayan de someterse a la aprobación del Estado se elaboraran con el propósito de lograr que sus productos sean bastantes para cubrir los gastos de operación y mantenimiento, la depreciación, amortización de instalaciones y equipo, la amortización de principales e intereses de empréstitos a cargo de la institución, las reservas adecuadas para ampliaciones normales del sistema y aquellas otras reservas que aconseja una prudente administración."

Cuarto: De conformidad al artículo 63 fracciones IX y X de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es facultad exclusiva del Congreso del Estado establecer contribuciones y demás ingresos que deberán formar la Hacienda Pública Estatal y Municipal, y en el presente caso, las cuotas y tarifas que apliquen los distintos organismos operadores de los servicios públicos de agua potable no son establecidas por dicho Congreso, pues de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado, éstas son aprobadas por las siguientes instancias:

a) En las zonas conurbadas cuyos servicios se presten por los organismos públicos descentralizados o concesionarios, su aprobación será por el Estado, a través del Ejecutivo a propuesta del Consejo de Administración, en los términos de lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera del Estado.

b) En los municipios cuyos servicios se presten por organismos públicos descentralizados Municipales, a propuesta de la Junta de Gobierno de éstos mismos, su aprobación corresponderá al Ayuntamiento.

c) En el caso de los municipios, si el servicio es prestado por concesionarios, las cuotas o tarifas serán aprobadas por el Ayuntamiento.

d) En el caso de los organismos intermunicipales, se estará a los convenios que celebren los municipios correspondientes.

1

2

3



164

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

Las cuotas o tarifas una vez aprobadas, serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad.

Quinto: La fijación de las tarifas y cuotas por la prestación del servicio no depende de la voluntad o de la capacidad económica de los consumidores, sino como se dijo antes, de los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el Estado.

Sexto: La Institución Pública Descentralizada de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que presta el servicio no dispone de medios auxiliares y coactivos para el cobro de las tarifas, en forma directa.

Consecuentemente, el pago por servicios de agua y drenaje no constituye una contribución, pues no reúne las características de un derecho, puesto que la obligación de cubrir el pago deriva del contrato administrativo de adhesión que al efecto celebrara en su momento con la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y no así de una ley; la institución pública referida no forma parte de la administración activa del Estado; los ingresos que se obtienen para la prestación del servicio público de agua y drenaje pasan a formar parte de patrimonio de la precitada institución pública; las cuotas y tarifas no son determinadas o aprobadas por el Congreso del Estado. Y por tanto es inaplicable el artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, en razón que efectivamente no se cumplen cabalmente los supuestos que establece dicho dispositivo legal, como son entre otros; que el servicio de agua potable y drenaje esté a cargo del municipio y que por dicho servicio el municipio cobre un ingreso que tenga el carácter de contribución; ello en virtud de que el servicio de agua y drenaje en este caso es prestado por la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el cual se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo entre el usuario y dicha institución, en el que se estipula las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, por otro lado, la obligación de pagar está sujeta a ese contrato y no así a alguna ley, consecuentemente, el precio que se paga por el aprovechamiento de tal servicio, no puede considerarse como un derecho y por ende contribución. De ahí la inaplicación en el caso concreto de dicho dispositivo constitucional, cuando del mismo se advierte claramente que los bienes de dominio público de la federación estarán exentos sólo del pago de las contribuciones fijadas por el Congreso Local a favor del Municipio.

A mayor abundamiento, el pago de servicios de agua y drenaje, de conformidad con artículo 4° del Código Fiscal del Estado, es considerado como un

4

1

2

3

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PODER EJECUTIVO

aprovechamiento, pues así lo prevé dicho numeral, en su primer párrafo. De igual forma, la Ley de Ingresos para el Estado de Nuevo León, en su artículo Primero, vigente para el ejercicio fiscal 2002-dos mil dos, e su fracción IV, apartado 4, determina: "**ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio fiscal del año 2002 la Hacienda Pública del Estado de Nuevo León, percibirá los ingresos que a continuación se enumeran;.... IV.- Aprovechamientos:..... 5. Aportaciones de entidades paraestatales...**". Con base en tales disposiciones legales, es indiscutible que los ingresos obtenidos por el pago de servicios de agua y drenaje a cargo de la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, no constituyen una contribución, pues se trata de aprovechamientos, los cuales no forman parte de la clasificación que hace el artículo 3° del citado Código Fiscal, respecto a las contribuciones, por lo tanto, no se le puede dar tal carácter.

2. La incorrecta y deficiente interpretación "constitucional" realizada en la sentencia recurrida en lo relativo al artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, colisiona gravemente con el sistema federal acogido en el artículo 40 de la propia Carta Magna, e incluso en el mismo 115, pues se traduce en identificar y confundir el interés de la Federación con el de los Estados federados y con las entidades municipales, desconociendo la autonomía jurídico-política de su existencia y la individualidad de sus prerrogativas y de su patrimonio.

Carece de sustento pretender que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey deba brindar gratuitamente sus servicios institucionales, a costa de sus recurso financieros. De prevalecer tan reprochable idea se constituiría un peligroso precedente que generaría desconfianza por sus alcances y anunciaría un irreversible deterioro en las finanzas institucionales, a la vez que condenaría a la Institución Pública Descentralizada prácticamente a su extinción, arriesgando innecesariamente a la comunidad del estado.

Confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de evitar que así suceda.

Como corolario de lo expuesto con antelación en este ocurso, solicito respetuosamente que la sentencia recurrida sea revocada, en respuesta a todos y cada uno de los argumentos manifestados en vía de agravio.

✓

✓

✓



166

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO**

Autorizo para los efectos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Amparo, a los Licenciados en Derecho LUIS CARLOS TREVIÑO BERCHELMANN, Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León, LUIS DAVID ORTIZ SALINAS, Subprocurador Jurídico de la propia Procuraduría, CÉSAR LUIS ARANDA GARZA, JORGE LUIS FLORES LÓPEZ, MARCELO ALEJANDRO CASTAÑO SANTOS, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ROCHA, NÉLIDA JANNETTE GONZÁLEZ EVARISTO y ERVEY SERGIO CUÉLLAR TIJERINA.



**EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS



ITE DE
SACION
ACUERDO



CORTE DE
LA JUSTICIA
DA S. J. A.
DE ACUERDO

125

2007 JUN 21 11:04

Recibi el presente Recurso de Revisión
en original en 125 fojas; conste *[signature]*

SECRETARÍA DE JUSTICIA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Recibi de la Oficialia de
Partes Comun el presente
recurso de revisión en
125 fojas. conste.

2007 JUN 21 11:04

(3901)

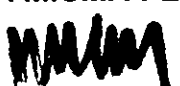
[signature]



SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA GENERAL DE

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ, SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HACE CONSTAR Y, -----

-----C E R T I F I C A-----

: QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE CIENTO VEINTISÉIS FOJAS ÚTILES, CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL, LA CUAL FUE TOMADA DEL EXPEDIENTE AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 1070/2005, Y SE EXPIDEN EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE PRESIDENCIA DE ESTA MISMA FECHA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES. DOY FE. 

VPMM

SECRETARÍA DE LA SUPREMACÍA DE LA LEY
SECRETARÍA DE LA SUPREMACÍA DE LA LEY
SECRETARÍA DE LA SUPREMACÍA DE LA LEY

—

—

—



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En seis de julio del año dos mil cinco, el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala da cuenta a su Presidente **con el oficio número 9179**, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintinueve de junio último, con los anexos que constan en la razón asentada por la citada Oficina al reverso del mismo **y se hace constar que el recurso de revisión fue presentado el veinticuatro de junio del año en curso. Conste.**

México, Distrito Federal, a seis de julio del año dos mil cinco.

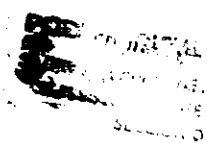
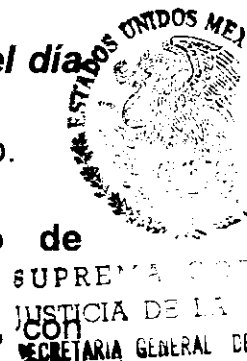
Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta número 9179 y sus anexos, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, mediante el cual remite el oficio número 2395/2005, signado por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, por el cual dicha autoridad interpone **recurso de revisión, en su carácter de** tercero perjudicado en el juicio de amparo directo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, del índice del citado Tribunal Colegiado, en contra de la resolución dictada por dicho Órgano Jurisdiccional el primero de abril último, en el citado juicio de amparo directo, en la cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y asimismo se decidió sobre la constitucionalidad del **"artículo 9º. del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y**

TE DE
ACIONE
ACUERDO

Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de febrero de dos mil tres". Acútese recibo.

Ahora bien, como el señalado recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma legales, **con** fundamento en los artículos 29, fracción II, 83, fracción V, 84, fracción II, 86 y 90, de la Ley de Amparo, 21, fracción III, inciso a) y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto primero, fracción I, inciso a), punto segundo, fracciones I y II y primero transitorio del Acuerdo 5/1999, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, **se admite el recurso de revisión de referencia,** sin perjuicio, del análisis que posteriormente se haga para determinar si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la resolución que al efecto deba dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Dése a conocer el presente acuerdo al Procurador General de la República por el término de diez días con copia del oficio de agravios, para que si así





168

lo considera, por conducto del Agente del Ministerio Público Federal adscrito emita el pedimento correspondiente.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Téngase como delegados en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el oficio de agravios. Notifíquese y cúmplase.

TE DE
NACION
ACUERDO

Lo acordó y firma el señor Ministro Juan Díaz Romero, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe

SECRETARÍA DE ACUERDOS
SECRETARÍA DE ACUERDOS
SECRETARÍA DE ACUERDOS

RGH/met.

[Firma]
[Firma]
RECEBIDO
08 JUL 2005
SE FIJO LISTA PARA NOTIFICAR
A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR. CONSTE
EN LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION
POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.

En esta misma fecha se giraron los oficios números E-259/2005 y E-260/2005, para notificar el auto que antecede al Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y al Ministerio Público Federal adscrito. Conste *[Firma]*

EN MEXICO DISTRITO FEDERAL,

13 JUL. 2005

SE

NOTIFICO EL ACUERDO QUE ANTEDEDE AL PROCURADOR GE-
NERAL DE LA REPUBLICA MEDIANTE OFICIOS NUMEROS E-249/2005 y E-260/2005
DE LA 2ª Sala LA CUAL FUE RECIBIDO POR EL
Sr. Gabriel Escudero Sevilla AGENTE DEL MINISTERIO
PUBLICO, QUIEN FIRMA PARA CONSTANCIA.

CONSTE

SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL



SUP
JUST
2005



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Of. E-247/2005 C. SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE
ESTE ALTO TRIBUNAL.
P R E S E N T E.
Of. E-248/2005 C. PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.
Of. E-249/2005 C. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.
P R E S E N T E.

SEGUNDA SALA
NACIONAL
SRIA. DE ACUERDOS

AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN
1070/2005

ANEXO
Copia simple de
mérito

DIRECCION GENERAL DE AMPARO
RECIBIDO
JUL 13 2005
DIRECCION DE CONTROL TECNICO DE
AMPARO METROPOLITANO



SECRETARIA
NACIONAL
DE LA

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

"México, Distrito Federal, a veintiocho de junio del año dos mil cinco. -----

Visto el oficio de cuenta número 77122, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, al que acompaña copia certificada del proveído dictado por el Presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este asunto, el veintidós del mes en curso, en el que se declaró que el Tribunal Pleno no es legalmente competente para conocer del recurso de revisión interpuesto por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado general, parte tercero perjudicado en el juicio de amparo directo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en contra de la resolución dictada por dicho Órgano Colegiado el primero de abril último, en el citado juicio de amparo directo, en la cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y asimismo se decidió sobre la constitucionalidad del "artículo 9º. del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de febrero de dos mil tres". Acúsesse recibo. -----

Prevía copia certificada que al efecto se deje en el referido amparo directo, desglóse el recurso de revisión de mérito y su copia simple, la cual contiene el sello de presentación de dicho recurso y agréguese a este toca. -----

Ahora bien, como el señalado recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma legales, con fundamento en los artículos 29, fracción II, 83, fracción V, 84, fracción II, 86 y 90, de la Ley de Amparo, 21, fracción III, inciso a) y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto primero, fracción I, inciso a), punto segundo, fracciones I y II y primero transitorio del Acuerdo 5/1999, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, se admite el recurso de revisión de referencia, sin perjuicio, del análisis que posteriormente se haga para determinar si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del

artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la resolución que al efecto deba dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. -----

Dése a conocer el presente acuerdo al Procurador General de la República por el término de diez días con copia del oficio de agravios, para que si así lo considera, por conducto del Agente del Ministerio Público Federal adscrito emita el pedimento correspondiente. -----

Téngase como delegados en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el oficio de agravios. Notifíquese y cúmplase. -----

Lo acordó y firma el señor Ministro Juan Díaz Romero, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe".
FIRMADO.-----

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

México, Distrito Federal, 28 de junio del año 2005.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA SEGUNDA SALA.



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SEGUNDA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.

S U
F U
A
R G H m e



SUPREMA
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA DE ACUERDOS

170



Of. E-259/2005 C. PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.
Of. E-260/2005 C. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.
P R E S E N T E.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

SEGUNDA SALA.

SRIA. DE ACDOS.

AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN
1070/2005.

ANEXO:
Copia simple de
mérito

CORTE
LA
A D E
SALA

DIRECCION GENERAL DE AMPARO

RECIBIDO
JUL 13 2005
DIRECCION DE CONTROL TECNICO DE
AMPARO CONSTITUCIONAL

RUBRO
NACIONAL

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

"México, Distrito Federal, a seis de julio del año dos mil cinco. -----

Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta número 9179 y sus anexos, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, mediante el cual remite el oficio número 2395/2005, signado por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, por el cual dicha autoridad interpone recurso de revisión, en su carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo directo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, del índice del citado Tribunal Colegiado, en contra de la resolución dictada por dicho Órgano Jurisdiccional el primero de abril último, en el citado juicio de amparo directo, en la cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y asimismo se decidió sobre la constitucionalidad del "artículo 9º. del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de febrero de dos mil tres". Acúsese recibo. -----

Ahora bien, como el señalado recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma legales, con fundamento en los artículos 29, fracción II, 83, fracción V, 84, fracción II, 86 y 90, de la Ley de Amparo, 21, fracción III, inciso a) y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto primero, fracción I, inciso a), punto segundo, fracciones I y II y primero transitorio del Acuerdo 5/1999, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, se admite el recurso de revisión de referencia, sin perjuicio, del análisis que posteriormente se haga para determinar si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la resolución que al efecto deba dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. -----

Dése a conocer el presente acuerdo al Procurador General de la República por el término de diez días con copia del oficio de agravios, para que si así lo considera, por conducto del Agente del Ministerio Público Federal adscrito emita el pedimento correspondiente. -----

Téngase como delegados en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el oficio de agravios. Notifíquese y cúmplase.

Lo acordó y firmó el señor Ministro Juan Díaz Romero, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe".
FIRMADO:-----

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

México, Distrito Federal, 6 de julio del año 2005.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA SEGUNDA SALA.



LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SEGUNDA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

RCH/meta

SU
IUS
A

171

000110



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA



CORTE DE
NACIÓN
DE ACUERDO

PEDIMENTO NO. V/103/2005

TOCA NO. 1070/2005.

**RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN
INTERPUESTO POR SERVICIOS DEL
AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, Y
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN
CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA
POR EL SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO, DE FECHA PRIMERO DE
ABRIL DEL DOS MIL CINCO, EN LA QUE
EN SU ÚNICO PUNTO RESOLUTIVO
AMPARA AL QUEJOSO EN EL
PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS NO.
D.A. 328/2005-III.**

**H. SEGUNDA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN**

El Suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, designado por el C. Procurador General de la República, para intervenir en el presente asunto con fundamento en los artículos 107, fracción XV Constitucional, 5º, fracción IV y 89 de la Ley de Amparo; 3º y 4º, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 39 fracción I, de su Reglamento atentamente expone:



CORTE DE
LA NACIÓN
A DEL
SALA

ALFREDO DE GUADALUPE MARTINEZ GARZA, apoderado general de **SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, y JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS,** Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de fecha primero de abril de dos mil cinco, en la que en su único punto resolutive ampara al quejoso, en el presente juicio de garantías número: D.A. 328/2004-III.

Por acuerdo de fecha 06 de julio del 2005, el C. Presidente de la H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el



SUPREMA COP
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL DE

SIN TEXTO

SU
JU
1



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

presente recurso de revisión y ordenó se hiciera del conocimiento del C. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

ANTECEDENTES

1.- Por escrito presentado con fecha primero de noviembre de dos mil cuatro, Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Monterrey Nuevo León, **REBECA LOPEZ HERNÁNDEZ**, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura General y representante legal de este Órgano Colegiado, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal.

ACTOS RECLAMADOS

1.- La sentencia definitiva de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo contencioso administrativo en el Estado de Nuevo León, en el expediente número 251/2003 y su acumulado 051/2003.

2.- Correspondió conocer de dicho juicio de garantías al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien por auto de fecha primero de diciembre de dos mil cuatro, tuvo por admitida la demanda de garantías interpuesta, formándose el expediente número: A.D.328/2004-III.

3.- Previo el desahogo de las diligencias necesarias, con fecha primero de abril de dos mil cinco, los CC. Magistrados integrantes de dicho Tribunal Colegiado, dictaron sentencia definitiva, en la que en su único punto resolutivo concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.

PROCEDENCIA DEL RECURSO.

El recurso de revisión se encuentra previsto como tal en el artículo 82 de la Ley de Amparo, y es el idóneo para controvertir, como ocurre en la especie, las resoluciones que en Materia de Amparo Directo pronuncian los Tribunal Colegiados de Circuito, en términos de la fracción V, del diverso numeral 83 de la propia Ley de la Materia.

Los escritos de expresión de agravios de los terceros perjudicado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., se presentaron el día catorce de junio de dos mil cinco, y de el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León se presentaron el día

RITE
NACIONAL
DE LA
SALA



SUPREMA C
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

SIN TEXTO



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

veinticuatro de junio del mismo año. ante el tribunal resolutor, de conformidad exigida por el artículo 88 de la Ley en cita, y las notificaciones de las sentencias se tuvieron hechas el día diez de junio del dos mil cinco.

Por lo tanto, al descontar los días inhábiles que mediaron entre la fecha de presentación del recurso y la notificación de la sentencia recurrida, se estima en tiempo por haberse presentado dentro del término legal a que alude el artículo 86, de la multicitada Ley de Amparo.

COMPETENCIA

Con fundamento en lo establecido por la fracción II, del artículo 84 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna se estima, que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de revisión, en el cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y asimismo se decidió sobre la constitucionalidad del artículo 9º. del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Presentación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernado del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de febrero de dos mil tres.

Es suscrito queda enterado que el recurso de revisión fue admitido con la reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realice de conformidad con los puntos Primero, fracción I, inciso a), Segundo, fracciones I y II, y Primero transitorio del acuerdo 5/1999 del Tribunal Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CORTE
DE LA
NACIÓN
CIUDAD DE
MEXICO

En atención a lo anterior, el suscrito estima que en la especie no se surten los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del recurso de revisión en amparo directo en términos de lo previsto en el artículo 107 de la fracción IX, Constitucional y en el inciso b) de la creación II, del Punto Primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, por ende debe desecharse el presente recurso de revisión.



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

SIN TEXTO



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

La parte recurrente tercero perjudicado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. hizo valer, en síntesis y en lo conducente, las siguientes

AGRAVIOS

1.- La Ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo, es violatoria y contraria a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo.

La Ejecutoria dictada carece de la debida precisión, convirtiéndola en una sentencia incongruente, faltando la fundamentación y motivación, aplicando e interpretando incorrectamente lo dispuesto en el artículo 115 Constitucional, que fue la parte medular del A Quo, para emitir la misma. Ante esa incongruencia y la indebida aplicación del dispositivo legal mencionado emitió un Ejecutoria (equivalente a una sentencia), a favor del Consejo de la Judicatura Federal, en perjuicio de mi representada "SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.", obligándola a emitir una nueva resolución que declare que el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación esta exenta en el pago de las cuotas y tarifas por el servicio de agua potable y drenaje sanitario.

VIOLACIÓN EN PERJUICIO DE MI REPRESENTADA A LA NORMA JURÍDICA CONSTITUCIONAL.

1.- Del estudio de la Ejecutoria que se combate por medio de recurso, se deducen las siguientes violaciones, que dejo de aplicar, en lugar de sobreseer el juicio, hechos visibles en la página 110 de la ejecutoria de mérito en su parte final dice lo siguiente:

"En otro aspecto, debe dejarse en claro que del análisis de las disposiciones transcritas en párrafos precedentes, particularmente del Artículo 81 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el Consejo de la Judicatura federal, es el órgano encargado de administrar los bienes del Poder Judicial Federal con excepción de los que les corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que evidentemente se encuentra facultado para acudir en defensa de dichos bienes y gestionar todo lo que se relacione con los mismos, lo que obviamente incluye la facultad de promover el Juicio de Garantías en contra de los actos de autoridad que los afectan, defensa que puede ejercer a través de su Dirección General de asuntos jurídicos, en términos de los acuerdos generales 5/2000,



SUPREMA CORTE
JUSTICIA DE LA NA
SECRETARIA GENERAL DE A

EN TEXTO

SU
JUS
A
S



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

25/2004 y 46/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobados en sesiones en fecha 8 de febrero del 2000, 21 de abril del 2004, y 14 de julio del 2004, respectivamente".

II.- Otra violación en la que incurrieron los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, es el hecho que se consigna en el considerando sexto particularmente en su párrafo segundo, es decir la variación de la acción por el Consejo de la Judicatura Federal y por consecuencia se encuentra como una ejecutoria incongruente por la introducción de situaciones particulares no consideradas en las demandas originalmente planteadas consistentes en aspectos de Inconstitucionalidad del artículo 9º del acuerdo de tarifa ya mencionada, y para pronta referencia me permito transcribir el párrafo antes mencionado que a la letra dice:

"Cabe hacer la declaración de que, aunque en la demanda de amparo se expresan otros conceptos de violación vinculados con cuestiones de legalidad, algunos por vicios de forma y otros por vicios de fondo que se dicen cometidos al dictarse la sentencia que se reclama, lo cierto es que los aspectos de inconstitucionalidad de las normas en que se funda el acto reclamado, que se plantean en el amparo directo, merecen estudio preferente, ya que de resultar fundados tales argumentos producirán mayores beneficios para la parte quejosa de ahí que se deben reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros (cuestiones de legalidad), en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

La introducción de un nuevo concepto en la demanda de amparo se encuentran injustificados, al hacer los Magistrados el estudio de las constancias del juicio según se desprenden de las fojas números 128 al 141 e la ejecutoria de merito, los cuales transcriben en su parte medular las reclamaciones planteadas por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que ninguna parte de los mismos se reclamó la inconstitucionalidad del acuerdo de tarifa 1998 (abrogado) y acuerdo tarifa 2003, que en esencia y en especie la acción de nulidad demandada promovida dicho por Consejo fueron por las resoluciones emitidas por el Director General, así como en las contenidas en las facturas. Por lo que al permitir los C. Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito Federal en Materia Administrativa, variaron la acción de garantías en beneficio del Consejo de la Judicatura Federal del mismo órgano del tribunal y variando la acción legal en perjuicio de mi representada, por consecuencia se altera la litis, violentándose los

R 2003
UNION
DE LA
SALA



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GEN.

10/11/1914

SUP
JUSC
A



artículos 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Federal, dictando una Ejecutoria incongruente, solicitando desde este momento se supla la deficiencia de la queja en beneficio de mi poderdante.

CORTE DE LA NACION

III.- Otra violación que le causa agravio a mi representada ~~en el punto~~ se consigna en las páginas 175 a la 182 del Considerando Quinto de la Ejecutoria de mérito, dice lo siguiente:

"En las relatadas condiciones, es incuestionable que se demostró que los inmuebles descritos se encuentran destinados a los fines a que se refieren las fracciones I y II el artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales vigente en dos mil dos y dos mil tres, es decir, a la prestación del servicio público federal de impartición de justicia, por lo cual encuadran en el supuesto de exención, previsto en el artículo 115, fracción IV, inciso c), Constitucional.

Así si el servicio público de agua potable y alcantarillado es prestado por el Municipio a favor de un organismo del poder judicial de la federación titular de un inmueble sujeto al régimen de dominio, público, como en el caso resulta ser el Consejo de la Judicatura Federal, debe entenderse que se actualiza la exención prevista en la norma constitucional objeto del análisis, considerando que fue el propio legislador quien, al remitir la exención a objeto del análisis, considerando que fue el propio legislador quien, al remitir la exención a los incisos a) y c) de la fracción relativa, señaló con toda precisión que la exención no sólo regiría para contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sino también para los servicios prestados por el Municipio. Tal precisión carecería de todo significado y no surtiría por tanto algún efecto, si se estimara que la exención se refiere exclusivamente a los gravámenes que se causan por la propiedad raíz, pues tal criterio no sería aplicable, desde luego, a ninguna contribución generada por la prestación de servicios públicos, en la medida en que su hecho generador no se localiza en el bien raíz sino en la actividad desplegada por la administración.

Sin embargo, el artículo 9º del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de febrero de dos mil tres, que sirvió de fundamento al director de la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GEN.

SIN TEXTO

BU
BU



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

su apoyo a los actos impugnados en los juicios contenciosos administrativos de origen, ya que la sala responsable para apoyar la resolución que se reclama, desatendiendo esa norma suprema dispone:

"Artículo 9º (se transcribe)

CORTE DE

LA NACIÓN. De ello se desprende que, conforme al citado acuerdo del Gobierno del Estado, la Federación se encuentra obligada a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario, sin excepción alguna, según las cuotas y tarifas que le sean aplicables; disposición que contraviene abiertamente el mandato constitucional consagrado en el artículo 115, fracción IV inciso c), acorde al cual los bienes de la Federación, como los destinados por el Poder Judicial de la Federación al servicio público de impartición de la justicia, se encuentran exentos del pago de esas contribuciones.

Así, debe estimarse que le corresponde la razón a la parte quejosa, cuando argumenta que el mencionado acuerdo del Gobierno local resulta inconstitucional, porque al pretenderse que una dependencia federal que opera con bienes inmuebles del dominio público de la Federación, pague los derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado, no obstante que la Carta Magna dispone que estarán exentos de esa obligación, significa que la autoridad estatal fue más allá de sus atribuciones en quebranto del régimen fiscal federal especial de exención o, más propiamente, de no causación de contribuciones, que rige a los bienes del dominio público de la Federación.

Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación en estudio resultan fundados y suficientes para acreditar infracción a los dispositivos constitucionales que invoca la quejosa, particularmente al artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución General de la República, que previene, en la parte que interesa en este asunto, que los bienes del dominio público de la Federación están exentos de las contribuciones que se refieran a los ingresos derivados de los servicios que presten los municipios, como lo son los relacionados con el servicio de que agua y drenaje.

Por lo tanto, la autoridad responsables debió en todo caso atender el principio de supremacía constitucional que consagra el artículo 133 de la Carta Magna, acorde al cual, la Constitución Federal constituye la ley suprema de toda la Unión, por lo que las autoridades locales de orden jurisdiccional, se arreglarán a la misma a pesar de las



SUPREMA COR
JUSTICIA DE LA I
SECRETARIA GENERAL DE

SIN TEXTO

178



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

disposiciones en contrario que pueda haber en las normas locales, como en el caso lo es el citado acuerdo del Ejecutivo del Estado.

TE DE Como corolario, se impone conceder el amparo **ADON** demandado, para que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, y en su lugar emita otra en la que declare fundados los agravios primero, tercero y cuarto, expresados por la quejosa en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, que se encuentra estrechamente vinculados entre sí, y, con base en ello, decreto la nulidad de la resolución expresa que negó la exención solicitada por la demandante, para el efecto de que emita una nueva resolución en la que reconozca que si es procedente dicha exención.

IV.- La ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado, resulta contraria a los principios de justicia que persigue la Constitución Federal a través de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, además de ser arbitraria, porque su decisión fue totalmente parcial al Consejo de la Judicatura Federal y actuó en su beneficio.

Como parte medular del estudio fue lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Federal.

Del análisis e interpretación de lo anteriormente transcrito se observa que los municipios tienen la facultad de administrar libremente su hacienda, la cual se conforma de los rendimientos que produzcan sus bienes y de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas estatales establezcan a su favor, entre estos últimos se encuentran los ingresos derivados de los servicios públicos que los Municipios tengan a su cargo.

Además, no es posible que se contemple exención alguna con respecto a los ingresos correspondientes a la hacienda pública municipal, con excepción de aquellos que recauden contribuciones respecto a bienes dominio de la Nación, como es el caso de los inmuebles utilizados por el Poder Judicial.

Debe resaltarse, que de la interpretación literal, armónica y hermeutica del artículo 115, fracción IV Constitucional, se tiene que la exención que se contempla respecto a los bienes dominio de la Nación, sólo es aplicable por cuanto hace a los ingresos contemplados por las legislaturas estatales para ingresar a la hacienda municipal, pues el

SIN FE



SUPREMA C
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

179



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

precepto constitucional contiene únicamente referencia a la libre administración hacendaria de los Municipios, no así respecto de las contribuciones o ingresos estatales como el impuesto predial u otros impuestos respecto de los cuales no existe la exención de mérito.

Ahora, entre los ingresos que el precepto constitucional contempla para formar parte de la hacienda municipal, están los impuestos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria, respecto de los cuales el municipio puede celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo de algunas funciones administrativas relacionadas con esas contribuciones, no para que el municipio renuncie a su derecho de percibir tales contribuciones; así mismo se contempla, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de los Municipios.

Para determinar con toda prontitud y exactitud de la aplicación del artículo 115 fracción IV inciso c) Constitucional, es necesario tomar en cuenta dos aspectos importantes que son los siguientes:

a).- Que el cobro e cuotas y tarifas por el servicio público de agua y drenaje esté a cargo del Municipio.

b).- Que dichas cuotas y tarifas por los mencionados servicios públicos estén destinados a ingresar a la Hacienda Municipal.

Por lo que de acuerdo a la correcta interpretación del artículo 115 Constitucional es necesario que el sentenciador fije el mismo sentido literal de la disposición a aplicar lo que hizo incorrectamente, violentando en perjuicio de mi representada la inexacta aplicación de la norma constitucional.

La parte recurrente tercero perjudicado, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, hizo valer en síntesis y en lo conducente el siguiente:

AGRAVIO

CUARTO.- Independientemente de los agravios de los recurrentes, pero sin perjuicio de ellos, también hago valer los que a continuación procedo a expresar en torno a las cuestiones propiamente constitucionales, con apego a lo dispuesto en el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

C/M TEXTO



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL DE

180



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

1. Contra todo derecho en la sentencia ahora recurrida se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo conceda la exención "prevista" en el artículo 115 Constitucional a favor del Consejo de la Judicatura Federal (no al Poder Judicial de la Federación). Sin embargo, la concesión del amparo constituye un desacierto, así como una equivocada interpretación y aplicación del artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo que enseguida precisaré.

a) Se afirmó erróneamente en la sentencia recurrida que el servicio de agua potable y alcantarillado lo presta el Municipio "por medio" de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, lo cual es incierto, en virtud de que el referido servicio lo presta la referida Institución Pública Descentralizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley que crea la referida institución, y no el municipio por medio de la misma.

Semejante afirmación solo podría ser cierta si el patrimonio de la referida institución se integrara por aportaciones municipales de Monterrey o de otras entidades similares, pero no fue ni es así, porque el patrimonio de la misma institución se integró con los bienes y derechos adquiridos por el Estado (no por el Municipio) a la Compañía de Servicios de Agua y Drenaje, entre otros, lo cual se desprende de lo establecido en el artículo 3º de la ley antes citada. El único titular de dicho patrimonio es en exclusiva la propia Institución, y no los que participan en su administración.

b) La erroneidad de la sentencia que destaqué en el inciso anterior, derivó en el también equivocado criterio establecido por el Tribunal "a quo" (a partir de la página 155 de la sentencia ahora recurrida) en el sentido de que las cuotas que pagan los particulares por la prestación del servicio de agua y drenaje forman parte de los recursos municipales, por disposición del artículo 115 Constitucional.

En vez de interpretar el precepto constitucional, el tribunal "a quo" se alejó de su teleología y de las razones que lo inspiraron, pues lo que verdaderamente dispone el artículo 115, fracción IV inciso "c" de la Constitución Federal es que la hacienda pública municipal se forma entre otros aspectos por "...Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo...", lo cual, interpretado armónicamente con lo establecido en la fracción III del propio numeral, se traduce en que la

SIN TEXTO

SUP
JUS
A



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL D



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

libertad hacendaria de los municipios aplica a los ingresos que reciban por los servicios que efectivamente presten, y no a que deba recibir (indiscriminadamente) los ingresos de la prestación del servicio de agua potable, aunque no sea el Municipio quien brinde tal servicio.

No es óbice lo señalado en la sentencia recurrida en el sentido de que atendiendo al principio de supremacía constitucional, es al Municipio al que corresponde originalmente prestar el servicio público de agua potable, y que por ello no importa que en los artículos 15 y 41 de la Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" establezcan que el patrimonio es propio de dicha institución, a lo cual agrega que no puede desconocerse la naturaleza originaria del servicio. Tales estimaciones no pueden tener su fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, ya que si bien es cierto que el servicio de agua potable corresponde en teoría prestarlo a los municipios, no menos cierto es que dicho servicio puede ser prestado por el Estado cuando así se estime necesario a solicitud de los municipios, y en el caso de Nuevo León, lo Municipios no prestan el servicio de agua, pues este se brinda en realidad por "Servicios Agua y Drenaje de Monterrey", sin que ello haya sido objetado por los Municipios, de manera que no por el sólo hecho de que se establezca dicha competencia teórica u originaria, los ingresos captados por el servicios de agua y alcantarillado prestado por "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" pertenecerán a la entidad municipal, a lo cual cabe agregar que la propia Constitución establece que los Municipios percibirán los ingresos derivados de los servicios públicos que presten, no por aquellos derivados de los servicios públicos prestados por otro organismo o dependencia gubernamental.

No pasa desapercibido para el suscrito lo aseverado en la sentencia ahora impugnada en cuanto a que los "inmuebles de que se trata" son del dominio público de la Federación, lo cual pone de relieve que no es verdad que al Consejo de la Judicatura Federal le pertenezcan dichos bienes, sino, como bien lo afirmó el tribunal "a quo", le pertenecen a la Federación, lo cual confirma que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo, pues en todo caso corresponde precisamente a la Federación, por conducto de quien la represente, promover lo conducente en defensa de lo que a esos inmuebles se refiere.

La erroneidad e ilegalidad de la sentencia recurrida se confirma con lo estimado por el propio tribunal "a quo", ya que manifestó

SIN TEXTO

SUP
JUST
EOT
BIC



SUPREMA C.
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

182



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

en el propio fallo que la exención prevista en el artículo 115 constitucional se actualiza cuando el servicio lo preste el Municipio, lo cual no acontece en la especie, pues, repitiendo, el servicio lo presta "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey".

c) Por lo expuesto en el inciso anterior resulta inexplicable que en la sentencia recurrida se haya establecido que el Acuerdo tildado de inconstitucional contravenga lo dispuesto en el artículo 115 fracción IV inciso "c" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello tiene como endeble premisa la suposición de que dicho numeral exenta a la Federación del pago del servicio de agua potable, lo cual es incierto, pues lo que verdaderamente dispone es que respecto de los ingresos que perciba el Municipio por los servicios que preste el mismo (no otra dependencia u organismo), los bienes de la Federación estarán exentos, sin que sea dable estimar contra todo derecho que los ingresos que reciban otras dependencias u organismos pertenezca a los Municipios, aunque éstos no presten el servicio, tal y como lo señalé en el inciso anterior.

Consecuentemente, el pago por servicios de agua y drenaje no constituye una contribución, pues no reúne las características de un derecho, puesto que la obligación de cubrir el pago deriva del contrato administrativo de adhesión que al efecto celebrara en su momento con la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y no así de una ley; la institución pública referida no forma parte de la administración activa del Estado; los ingresos que se obtienen para la prestación del servicio público de agua y drenaje pasan a formar parte del patrimonio de la precitada institución pública; las cuotas y tarifas no son determinadas o aprobadas por el Congreso del Estado. Y por tanto es inaplicable el artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, en razón que efectivamente, no se cumplen cabalmente los supuestos que establece dicho dispositivo legal, como son entre otros; que el servicio de agua potable y drenaje esté a cargo del municipio y que por dicho servicio el municipio cobre un ingreso que tenga el carácter de contribución; ello en virtud de que el servicio de agua y drenaje en este caso es prestado por la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el cual se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo entre el usuario y dicha institución, en el que se estipula las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, por otro lado, la obligación de pagar está sujeta a ese contrato y no así alguna ley, consecuentemente, el precio que se paga por el aprovechamiento de tal servicio, no puede considerarse como un derecho y por ende

SIN TEXTO

BUS
BUS



SUPREMA C
JUSTICIA DE I
SECRETARIA GENERAL

183



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

contribución. De ahí la inaplicación en el caso concreto de dicho dispositivo constitucional, cuando del mismo se advierte claramente que los bienes de dominio público de la federación estarán exentos sólo del pago de las contribuciones fijadas por el Congreso Local a favor del Municipio.

A mayor abundamiento, el pago de servicios de agua y drenaje, de conformidad con artículo 4º del Código Fiscal del Estado, es considerado como un aprovechamiento, pues así lo prevé dicho numeral, en su primer párrafo. De igual forma, la Ley de Ingresos para el Estado de Nuevo León, en su artículo Primero, vigente para el ejercicio fiscal 2002-dos mil dos, en su fracción IV, apartado 4, determina: "ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio fiscal del año 2002 la Hacienda Pública del Estado de Nuevo León, percibirá los ingresos que a continuación se enumeran; ... IV.- Aprovechamientos:.... 5. Aportaciones de entidades paraestatales..." Con base en tales disposiciones legales, es indiscutible que los ingresos obtenidos por el pago de servicios de agua y drenaje de Monterrey, no constituyen una contribución, pues se trata de aprovechamientos, los cuales no forman parte de la clasificación que hace el artículo 3º del citado Código Fiscal, respecto a las contribuciones, por lo tanto, no se le puede dar tal carácter.

2. La incorrecta y deficiente interpretación "constitucional" realizada en la sentencia recurrida en lo relativo al artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, colisiona gravemente con el sistema federal acogido en el artículo 40 de la propia Carta Magna, e incluso en el mismo 115, pues se traduce en identificar y confundir el interés de la Federación con el de los Estados federados y con las entidades municipales, desconociendo la autonomía jurídico-política de su existencia y la individualidad de sus prerrogativas y de su patrimonio.

Carece de sustento pretender que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey deba brindar gratuitamente sus servicios institucionales, a costa de sus recursos financieros. De prevalecer tan reprochable idea se constituiría un peligroso precedente que generaría desconfianza por sus alcances y anunciaría un irreversible deterioro en las finanzas institucionales, a la vez que condenaría a la Institución Pública Descentralizada prácticamente a su extinción, arriesgando innecesariamente a la comunidad del estado.

2141 TEXTO

NOF
EUS
AC
SEC



SUPREMA CC
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL I



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

OPINION MINISTERIAL

Esta Representación Social de la Federación, después de haber analizado las constancias de autos, así como los agravios formulados por la parte recurrente terceros perjudicados, estos se consideran inoperantes e infundados, lo que se justifica que se confirmen los motivos y fundamento legal invocados por el Tribunal A quo, que en la sentencia concedió el amparo a la parte quejosa.

Son inoperantes los agravios aducidos por SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, los marcados con los números romanos I, II, III y IV, en los que se duele esencialmente que "del estudio de la ejecutoria que se combate por medio del recurso se deducen las siguientes violaciones, que dejo de aplicar, en lugar de sobreseer el juicio, hechós visibles en la página 110 de la ejecutoria de mérito en su parte final dice lo siguiente:

"En otro aspecto, debe dejarse en claro que del análisis de las disposiciones transcritas en párrafos precedentes, particularmente del Artículo 81 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el Consejo de la Judicatura federal, es el órgano encargado de administrar los bienes del Poder Judicial Federal con excepción de los que les corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que evidentemente se encuentra facultado para acudir en defensa de dichos bienes y gestionar todo lo que se relacione con los mismos, lo que obviamente incluye la facultad de promover el Juicio de Garantías en contra de los actos de autoridad que los afectan, defensa que puede ejercer a través de su Dirección General de asuntos jurídicos, en términos de los acuerdos generales 5/2000, 25/2004 y 46/2004, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobados en sesiones en fecha 8 de febrero del 2000, 21 de abril del 2004, y 14 de julio del 2004, respectivamente".

Otra violación en la que incurrieron los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, es el hecho que se consigna en el considerando sexto particularmente en su párrafo segundo, es decir la variación de la acción por el Consejo de la Judicatura Federal y por consecuencia se encuentra como una ejecutoria incongruente por la introducción de situaciones particulares no consideradas en las demandas originalmente planteadas consistentes en aspectos de Inconstitucionalidad del artículo 9º del acuerdo de tarifa ya mencionada.

CIAI TEXTO

SUP
JUST
AC
BI



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENE

185



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Otra violación que le causa agravio a mi representada es la que se consigna en las páginas 175 a la 182 del Considerando Quinto de la Ejecutoria de mérito, dice lo siguiente:

"En las relatadas condiciones, es incuestionable que se demostró que los inmuebles descritos se encuentran destinados a los fines a que se refieren las fracciones I y II el artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales vigente en dos mil dos y dos mil tres, es decir, a la prestación del servicio público federal de impartición de justicia, por lo cual encuadran en el supuesto de exención, previsto en el artículo 115, fracción IV, inciso c), Constitucional.

Son inoperantes los agravios de análisis, en virtud que el recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueden analizarse las violaciones de garantías individuales, sino que dicho recurso tiende a asegurar su óptimo ejercicio de la función judicial, por lo que no pueden analizarse agravios en los que se hagan valer violación a las garantías individuales, al conocerse de un juicio de amparo, puesto que ello implicaría un control constitucional sobre otro control constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2/97, emitida por este Tribunal Pleno, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, foja 5, del Semanario Judicial de la Federación, la que a su letra dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES, LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.- Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces



CORTE SUPLENTE
DE LA NACION
EL JUEZ

COPIA
TEXTU



SUPREMA C
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

BUS
177

186



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA



RTE DE
NACIONAL
E ACUERDO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN

de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez de conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otra parte, por cuanto hace a los agravios formulados por el Tercero perjudicado Gobernados Constitucional del Estado de Nuevo León, los marcados con los numerales primero, segundo y tercero, en los que aduce "ahora, el hecho que el presente asunto verse sobre la pretensión del Consejo de Judicatura Federal en obtener una resolución favorable, en la que se determine que los bienes inmuebles destinados a la impartición de justicia federal en el Estado de Nuevo León, como el que ocupa éste órgano jurisdiccional, están exentos del

CUM TEXTO



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL



SUP
100

187



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

pago del servicio de agua potable y alcantarillado, no implica que el tribunal vea afectada la imparcialidad de su decisión, dado que aun si se llegara a estimar fundada dicha pretensión, ello ningún beneficio o derecho le generaría al propio órgano judicial, porque quien finalmente efectúa la erogación respectiva para el pago de tales servicios es el propio consejo mediante la partida correspondiente, sin que ello trascienda en la actividad jurisdiccional y administrativa interna de este tribunal, ni en su beneficio ni en su perjuicio, pues éste se limita a la realización de sus consabidas funciones netamente jurisdiccionales en el inmueble que se asigne para ello, y se mantiene al margen del manejo económico y de administración de recursos que efectúa el Consejo de la Judicatura Federal conforme a las atribuciones que le han sido encomendadas exclusivamente. De ahí que no queda jurídicamente el cuestionamiento en el sentido que, de resolverse el asunto por el tribunal colegiado, éste obtenga algún provecho para sí o en su caso, se produzca a sí mismo un perjuicio."

Los agravios de análisis, resultan inoperantes, toda vez que en el presente juicio de garantías, por constituir en la especie alegaciones de mera legalidad, de las que no corresponden a esta instancia su examen y valoración.

Es aplicable la jurisprudencia número 2ª/J.53/98, página 326, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES.- Conforme a los artículos 107, fracción IX, Constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales, por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes."

TE DE
ACION
LA
ADA

SIN TEXTO

SUP
JUST
A
SEG



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

154



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

Es inoperante el agravio marcado con el numeral cuarto en el que se aduce "independientemente de los agravios precedentes pero sin perjuicio de ellos, también hago valer los que a continuación procedo a expresar en torno a las cuestiones propiamente constitucionales, con apego a lo dispuesto en el artículo 83, fracción V, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

1. Contra todo derecho en la sentencia ahora recurrida se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo conceda la exención "prevista" en el artículo 115 Constitucional a favor del Consejo de la Judicatura Federal (no al Poder Judicial de la Federación). Sin embargo, la concesión del amparo constituye un desacierto, así como una equivocada interpretación y aplicación del artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo que enseguida precisaré.

a) Se afirmó erróneamente en la sentencia recurrida que el servicio de agua potable y alcantarillado lo presta el Municipio "por medio" de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, lo cual es incierto, en virtud de que el referido servicio lo presta la referida Institución Pública Descentralizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley que crea la referida institución, y no el municipio por medio de la misma.

Semejante afirmación sólo podría ser cierta si el patrimonio de la referida institución se integrara por aportaciones municipales de Monterrey o de otras entidades similares, pero no fue ni es así, porque el patrimonio de la misma institución se integró con los bienes y derechos adquiridos por el Estado (no por el Municipio) a la Compañía de Servicios de Agua y Drenaje, entre otros, lo cual se desprende de lo establecido en el artículo 3º de la ley antes citada. El único titular de dicho patrimonio es en exclusiva la propia Institución, y no los que participan en su administración.

b) La erroneidad de la sentencia que destaqué en el inciso anterior, derivó en el también equivocado criterio establecido por el Tribunal "a quo" (a partir de la página 155 de la sentencia ahora recurrida) en el sentido de que las cuotas que pagan los particulares por la prestación del servicio de agua y drenaje forman parte de los recursos municipales, por disposición del artículo 115 Constitucional.

SIN TEXAS

ESTADOS UNIDOS
PODER EJECUTIVO
SUPREMA
SECRETARIA

ESTADOS UNIDOS

SUP
JUST
A



SUPREMA CC
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL L

184



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

En vez de interpretar el precepto constitucional, el tribunal "a quo" se alejó de su teleología y de las razones que lo inspiraron, pues lo que verdaderamente dispone el artículo 115, fracción IV inciso "c" de la Constitución Federal es que la hacienda pública municipal se forma entre otros aspectos por "...Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo...", lo cual, interpretado armónicamente con lo establecido en la fracción III del propio numeral, se traduce en que la libertad hacendaria de los municipios aplica a los ingresos que reciban por los servicios que efectivamente presten, y no a que deba recibir (indiscriminadamente) los ingresos de la prestación del servicio de agua potable, aunque no sea el Municipio quien brinde tal servicio."

Resulta inoperante el agravio de análisis toda vez, que de conformidad con el artículo 115, IV constitucional, se debe interpretar en el sentido que dentro de la exención autorizada para bienes del dominio público de la Federación y los Estados, quedan comprendidos los organismos descentralizados como titulares de los inmuebles descritos en el artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, por los servicios que preste el Municipio en materia de agua potable, toda vez que el autor del precepto constitucional, al autorizar la exención, claramente la hace extensiva no sólo a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, sino también a los ingresos que obtenga el Municipio por los servicios públicos a su cargo, lo cual significa que se refirió a las contribuciones causadas por aquellos servicios que se presten en relación con los bienes de dominio público a favor de la Federación, Estados u organismos descentralizados, en razón de la importancia que atribuyó a la función desarrollada a través de la afectación y destino de tales bienes sometidos al régimen de protección de que se trata.

Por tanto resulta contrario a la constitución el artículo 9º del Acuerdo por el que se aprueba la Nueva Estructura de las Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, el acuerdo de la tafir 2003, por que el mismo establece que la Federación, el Estado, los Municipios ... están obligados a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario ...

El citado artículo, obliga al Consejo de la Judicatura Federal a pagar los consumos de acuerdo a las tarifas y cuotas que le sean aplicables, lo cual resulta inconstitucional, ya que conforme a los bienes al régimen de dominio de la Federación, como lo es el destinado por el poder Judicial de la Federación, que son para el servicio público de

SIN TEXTO

SUPREMA
JUSTICIA
SECRETARIA
SEGUNDA



SUPREMA
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

190



PROCURADURIA GENERAL
DE LA
REPUBLICA

impartición de justicia, los cuales se encuentran exentos de pago de la contribución que le es requerida, la cual es contraria al artículo 115, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los bienes del dominio público de la Federación están exentos de las contribuciones respecto al servicio de agua y drenaje.


Por lo antes expuesto y fundado, se formula pedimento en los siguientes términos.

PRIMERO.- Conformar en sus términos la sentencia recurrida, en la que en su único punto resolutive ampara al quejoso en el presente juicio de garantías.

SEGUNDO.- Tomar en consideración el presente pedimento, dentro del cuerpo de la resolución que se pronuncie, con apoyo en lo dispuesto por la fracción XV del artículo 107 Constitucional.

México, Distrito Federal a 03 de agosto del 2005.

ATENTAMENTE
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
DE LA FEDERACION


LIC. GABRIEL ESCUDERO SEVILLA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ASISTENTE
A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
MESA V

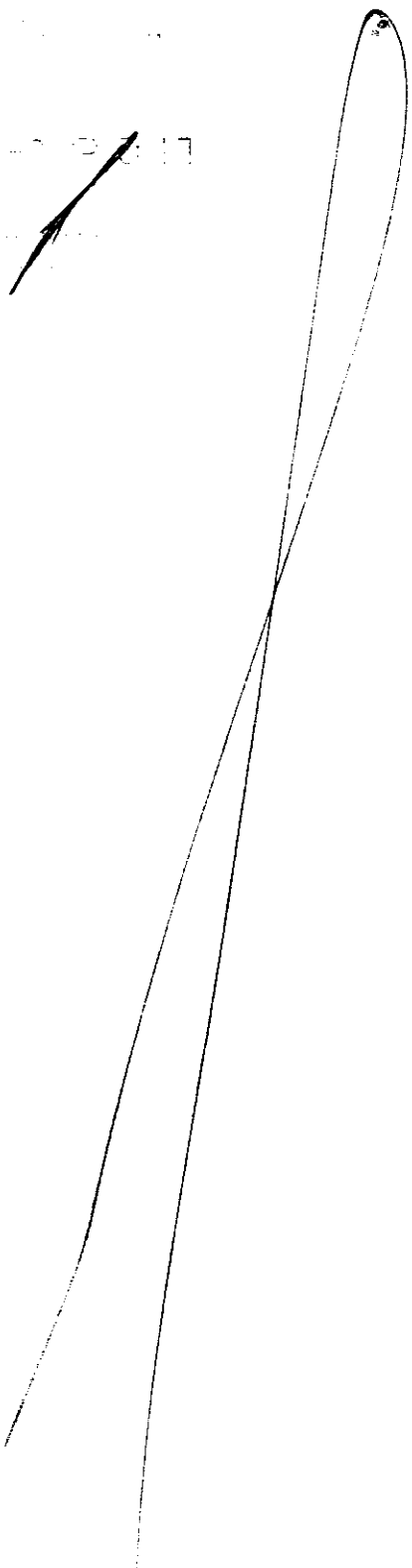


PROCURADURIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
SALA



GESTION

CORTE DE
NACIONES
DE ACUERDO



11-2-3-17



SUPREMA CC
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GEN. RAL

SUP
JUST
AC
SEC



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53

191

SEGUNDA SALA
MATERIA ADMINISTRATIVA

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

PEDIMENTO V/103/2005.

EN 08 AGO. 2005 DEVUELVE ESTOS AUTOS
EL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL PEDIMENTO
QUE SE AGREGA. CONSTE

[Firma manuscrita]

beaa

ORTE DE
NACION
ACUERDO

SIN TEXTO

SUPREMA
JUSTICIA
SEGUNDA
SECRETARIA



SUPREMA CORTE
JUSTICIA DE LA N.
SECRETARIA GENERAL DE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

Of. E-247/2005 ✓ C. SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE
ESTE ALTO TRIBUNAL.
P R E S E N T E.

Of. E-248/2005 C. PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Of. E-249/2005 C. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.
P R E S E N T E.

SEGUNDA SALA.

SRIA. DE ACIDOS

AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN
1070/2005.

ANTECEDENTE:
Oficio 77122.

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

“México, Distrito Federal, a veintiocho de junio del año dos mil cinco. -----

Visto el oficio de cuenta número 77122, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, al que acompaña copia certificada del proveído dictado por el Presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este asunto, el veintidós del mes en curso, en el que se declaró que el Tribunal Pleno no es legalmente competente para conocer del recurso de revisión interpuesto por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado general, parte tercero perjudicado en el juicio de amparo directo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en contra de la resolución dictada por dicho Órgano Colegiado el primero de abril último, en el citado juicio de amparo directo, en la cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y asimismo se decidió sobre la constitucionalidad del **“artículo 9º. del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de febrero de dos mil tres”**. Acúsese recibo. -----

Prevía copia certificada que al efecto se deje en el referido amparo directo, desglosese el recurso de revisión de mérito y su copia simple, la cual contiene el sello de presentación de dicho recurso y agréguese a este toca. -----

Ahora bien, como el señalado recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma legales, con fundamento en los artículos 29, fracción II, 83, fracción V, 84, fracción II, 86 y 90, de la Ley de Amparo, 21, fracción III, inciso a) y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto primero, fracción I, inciso a), punto segundo, fracciones I y II y primero transitorio del Acuerdo 5/1999, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, se admite el recurso de revisión de referencia, sin perjuicio, del análisis que posteriormente se haga para determinar si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del

artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la resolución que al efecto deba dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. -----

Dése a conocer el presente acuerdo al Procurador General de la República por el término de diez días con copia del oficio de agravios, para que si así lo considera, por conducto del Agente del Ministerio Público Federal adscrito emita el pedimento correspondiente. -----

Téngase como delegados en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el oficio de agravios. Notifíquese y cúmplase. -----

Lo acordó y firma el señor Ministro Juan Díaz Romero, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe".
FIRMADO.-----

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

México, Distrito Federal, 28 de junio del año 2005.



EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA SEGUNDA SALA.

LIC. MARIO ALBERTO ESPAÑZA ORTIZ.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SEGUNDA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

RCH/met
SECRET.



SUPREMA CC
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

193

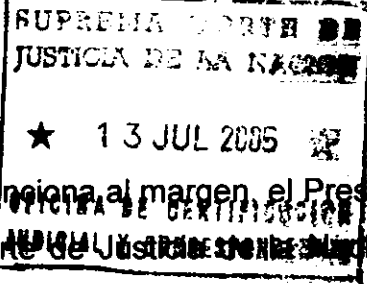


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

Of. E-247/2005 C. SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE
ESTE ALTO TRIBUNAL.
P R E S E N T E.

Of. E-248/2005 C. PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Of. E-249/2005 C. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.
P R E S E N T E.



SEGUNDA SALA.

SRIA. DE ACDOS.

AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN
1070/2005.

ANTECEDENTE:
Amparo directo
328/2004.

DOS

A C
E
N D
A C



RTE D
NACION
I ACUERDO

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

“México, Distrito Federal, a veintiocho de junio del año dos mil cinco. -----

Visto el oficio de cuenta número 77122, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, al que acompaña copia certificada del proveído dictado por el Presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este asunto, el veintidós del mes en curso, en el que se declaró que el Tribunal Pleno no es legalmente competente para conocer del recurso de revisión interpuesto por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado general, parte tercero perjudicado en el juicio de amparo directo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en contra de la resolución dictada por dicho Órgano Colegiado el primero de abril último, en el citado juicio de amparo directo, en la cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal y asimismo se decidió sobre la constitucionalidad del “artículo 9º. del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de febrero de dos mil tres”. Acúsesse recibo. -----

Prevía copia certificada que al efecto se deje en el referido amparo directo, desglóse el recurso de revisión de mérito y su copia simple, la cual contiene el sello de presentación de dicho recurso y agréguese a este toca. -----

Ahora bien, como el señalado recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y forma legales, con fundamento en los artículos 29, fracción II, 83, fracción V, 84, fracción II, 86 y 90, de la Ley de Amparo, 21, fracción III, inciso a) y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto primero, fracción I, inciso a), punto segundo, fracciones I y II y primero transitorio del Acuerdo 5/1999, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, se admite el recurso de revisión de referencia, sin perjuicio, del análisis que posteriormente se haga para determinar si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del

artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que la resolución que al efecto deba dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. -----

Dése a conocer el presente acuerdo al Procurador General de la República por el término de diez días con copia del oficio de agravios, para que si así lo considera, por conducto del Agente del Ministerio Público Federal adscrito emita el pedimento correspondiente. -----

Téngase como delegados en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el oficio de agravios. Notifíquese y cúmplase. -----

Lo acordó y firma el señor Ministro Juan Díaz Romero, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe".
FIRMADO.-----

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

México, Distrito Federal, 28 de junio del año 2005.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA SEGUNDA SALA.

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SEGUNDA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

RGH/meb

SECRET

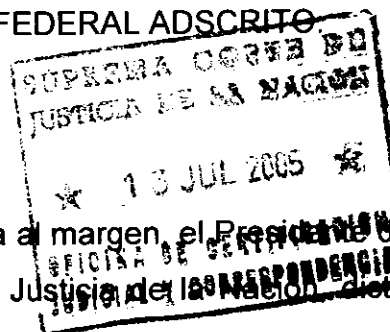
ESTADOS UNIDOS M
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA N
SECRETARIA GENERAL DE

194



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.

Of. E-259/2005 C. PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.
Of. E-260/2005 C. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO
P R E S E N T E.



En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el

SEGUNDA SALA

SRIA. DE ACIDOS

AMPARO DIRECTO

REVISIÓN

1070/2005.

ANTECEDENTE

Amparo directo
328/2004.

acuerdo siguiente:

"México, Distrito Federal, a seis de julio del año dos mil
cinco.

Agréguese para que obre como corresponda el oficio de
cuenta número 9179 y sus anexos, signado por el Actuario Judicial
adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Cuarto Circuito, mediante el cual remite el oficio número
259/2005, signado por el Gobernador Constitucional del Estado
Nuevo León, por el cual dicha autoridad interpone recurso de
revisión, en su carácter de tercero perjudicado en el juicio de
amparo directo 328/2004, promovido por el Consejo de la
Judicatura Federal, del índice del citado Tribunal Colegiado, en
contra de la resolución dictada por dicho Órgano Jurisdiccional el
primero de abril último, en el citado juicio de amparo directo, en la
cual se hizo la interpretación directa del artículo 115, fracción IV,
inciso c), de la Constitución Federal y asimismo se decidió sobre
la constitucionalidad del "artículo 9º. del Acuerdo por el que se
Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la
Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje
Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua
2003, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de
febrero de dos mil tres". Acúsese recibo.

Ahora bien, como el señalado recurso de revisión fue
interpuesto en tiempo y forma legales, con fundamento en los
artículos 29, fracción II, 83, fracción V, 84, fracción II, 86 y 90, de la
Ley de Amparo, 21, fracción III, inciso a) y 25, fracción I, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto primero,
fracción I, inciso a), punto segundo, fracciones I y II y primero
transitorio del Acuerdo 5/1999, del Tribunal Pleno de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de mil
novecientos noventa y nueve, que establece las bases generales
para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en
amparo directo, se admite el recurso de revisión de referencia, sin
perjuicio, del análisis que posteriormente se haga para determinar
si el caso se ajusta al requisito previsto en la fracción IX del
artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, consistente en que la resolución que al efecto deba
dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y
trascendencia.

Dése a conocer el presente acuerdo al Procurador General
de la República por el término de diez días con copia del oficio de
agravios, para que si así lo considera, por conducto del Agente del
Ministerio Público Federal adscrito emita el pedimento
correspondiente.

Téngase como delegados en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el oficio de agravios. Notifíquese y cúmplase.

Lo acordó y firma el señor Ministro Juan Díaz Romero, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe".
FIRMADO.-----

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

México, Distrito Federal, 6 de julio del año 2005.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA SEGUNDA SALA.

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SEGUNDA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS



SUPREMA C
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SEGUNDA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS
AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN NÚMERO 1070/2005.

FORMA A-54

195

En nueve de agosto del año dos mil cinco, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el estado que guardan los presentes autos. C o n s t e.

México, Distrito Federal, a nueve de agosto del año dos mil cinco.

Por encontrarse este asunto en estado de resolución, con fundamento en el artículo 25, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tórnese a la señora MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS para los efectos legales consiguientes.

Notifíquese.

Lo acordó y firmó el señor MINISTRO JUAN DÍAZ ROMERO, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.



EO/EMLO/brg

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS



11 AGO. 2005
EN SE FIJO LISTA PARA NOTIFICACIONES A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR. CONSTE
SUPLENTE DE
SECRETARIA GENERAL

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION
POR MEDIO DE LISTA. DOY FE. *ap*

SUPLENTE
JU



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

RTE DE
NACION
E ACUERDOS

See Gaita
11 ago 05
Forma B-3
Jr 11/196
RECLAMACIÓN.: 18/2005
RELACIONADO CON EL AMPARO
DIRECTO 328/2004.
OF. NUM. 1224

Monterrey, Nuevo León a 24 de agosto de 2005

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
PRESENTE.-

En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en la reclamación número 18/2005 remito a usted, en treinta y siete fojas útiles, el testimonio certificado de dicha resolución y el disquete que la contiene, en atención a ello solicito se acuse el recibo correspondiente.

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE

pcmm

027552

SUPREMA
JUSTICIA DE LA

2005 SEP 12 PM 2 35

OFICIO DE
JUDICIAL



SUPREMA CC
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

Form with handwritten notes and stamps:

- Top right: **DEL**
- Below that: **SI NO**
- Left side: **(1)**
- Right side: **(37)**
- Bottom center: **1 disquete.**

JUSTICIA
SECRETARIA

JUSTICIA
SECRET

197



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ORTE DE
NACION:
DE ACUERDO**RECLAMACION: 18/2005-III.****RECURRENTE:** GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN.**PONENTE:**LIC. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ
NAVARRO.**SECRETARIO:**

LIC. EDMUNDO ADAME PÉREZ.

Monterrey, Nuevo León, a veinticuatro de
agosto de dos mil cinco.**V I S T O**, para resolver el recurso de
reclamación 18/2005-III; y,PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.**R E S U L T A N D O:****PRIMERO:-** Por escrito presentado el
veintiocho de junio de dos mil cinco, ante la oficina
de correspondencia común, el gobernador
Constitucional del Estado de Nuevo León, promovió
reclamación en contra del auto de veintitrés de junio
de dos mil cinco, mediante el cual el magistrado
presidente de este órgano jurisdiccional, negó la
regularización del procedimiento en la forma
solicitada.**SEGUNDO.-** Por acuerdo de treinta de
junio de dos mil cinco, se admitió el recurso de
reclamación, y en fecha quince de julio del mismo

mes y año, se ordenó su turno al magistrado José Carlos Rodríguez Navarro, para que formulara el proyecto de sentencia; y,



CONSIDERANDO:

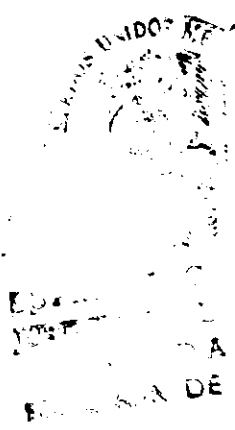
SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
Tribunal Federal

PRIMERO.- Este Segundo Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer del presente recurso, de conformidad con los artículos 82 y 103 de la Ley de Amparo, por impugnarse un acuerdo de trámite dictado por el presidente de este tribunal a través del cual negó la regularización del procedimiento en la forma solicitada por el recurrente gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO:- El acuerdo impugnado dice:

“Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de junio de dos mil cinco..”

“Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 2º y 3º de la Ley de Amparo y 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio 2393/2005, que remite el gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, en el que solicita que la regularización del procedimiento efectuada mediante auto de ocho de junio del año en curso, se haga extensiva en el sentido de dejar sin efectos todo lo actuado por la





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

COURTE DE
NACION
ACUERDO

autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, así como que se hagan retornar a este Tribunal los expedientes relativos a los juicios contenciosos administrativos generadores de los actos reclamados en el presente juicio de amparo."

"Al respecto, indíquesele que efectivamente en el presente juicio de amparo la autoridad responsable dio cumplimiento inmediato a la ejecutoria dictada por este Tribunal, y en acuerdo de veintitrés de mayo del presente año, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera; sin embargo, por el recurso de revisión interpuesto por el organismo público descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, la sentencia de la responsable no ha sido atendida por este tribunal conforme lo establece el artículo 105 de la Ley de Amparo, en el sentido de establecer si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo, ya que esa declaratoria queda supeditada a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del aludido recurso de revisión."

"Además, indíquesele al señor gobernador que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo no queda necesariamente sujeta al transcurso del plazo de impugnación si las partes consideran innecesario el uso de los recursos, pues cuando la autoridad

responsable acepta de inmediato lo resuelto por el Tribunal de amparo, no tendría impedimento para cumplir con el propósito de resarcir al quejoso en el goce del precepto constitucional que fue declarado como violado. No obstante, si durante el lapso que puede impugnarse dicha ejecutoria otra de las partes sí hace valer el recurso, necesariamente debe suspenderse la actividad de este tribunal que tenga como propósito declarar cumplido del fallo protector, conforme lo establece el artículo 105 de la Ley de Amparo, ya que, ante esa hipótesis, la declaratoria queda supeditada a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

“En relación con la remisión de los autos naturales a la autoridad responsable, hay que destacar que de ordinario se adjuntan al testimonio respectivo, ya que el Tribunal responsable queda constreñido al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el apartado relativo a legalidad, ya que en ese aspecto el fallo es irrecurrible; empero, si como en el caso, la ejecutoria contiene decisión de constitucionalidad o se interpreta un precepto de la constitución federal, el cumplimiento en ese diverso apartado debe esperar a que transcurra el plazo de impugnación. En esas circunstancias, como la sentencia protectora sí fue impugnada por el tercero perjudicado Servicios de Agua y



SUPREMA C
JUSTICIA DE L
SECRETARIA GENERAL

UNIDOS

REC 1000 D



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ORTE
A NACIÓN

Drenaje de Monterrey; y, además, si se formuló la interpretación directa de un precepto constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, si procede la solicitud del señor gobernador en el sentido de regularizar el procedimiento a efecto de que se solicite al magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la devolución del expediente 251/2003, su acumulado 51/2003, así como el relativo al recurso de revisión sin número, a efecto de remitirlos de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la substanciación del recurso.”



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

“Notifíquese...”

TERCERO:- Como agravios se expresa lo siguiente:

“A modo de antecedente es pertinente recordar que el día ocho del mes y año en curso el magistrado presidente de ese H. Tribunal Colegiado de Circuito emitió auto en el sentido que medularmente transcribo: (Se transcribe).”

“Es decir, la presidencia del órgano de justicia tuvo el tino de detectar que se omitió notificar la resolución constitucional del caso

a los terceros perjudicados allí mencionados, admitiendo la desatención al artículo 29 fracción I de la Ley de Amparo, y en consecuencia mandó subsanar la anomalía a fin de regularizar el procedimiento en ese



sólo aspecto, notificándoseme el fallo el 10 de junio del año actual, siendo hasta entonces que puede conocerlo en su integridad al haberseme entregado testimonio del mismo, juntamente con el oficio número 7678 en el que se insertó el propio auto tendiente a la regularización procedimental."

"Pero no captó el magistrado presidente que la irregularidad del procedimiento era de mayor magnitud, pues para entonces ya se había requerido a la autoridad responsable el cumplimiento de la resolución concesoria del amparo, siendo que precisamente con motivo de la notificación omitida no podía haber causado ejecutoria en términos de los artículos 354, 355 y 356 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de manera que aún no era susceptible de ejecución al no haberse surtido el supuesto necesario para la aplicabilidad del artículo 104 de la ley de la materia (máxime que a la postre tanto "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" como el suscrito gobernador interpusimos sendos recursos de revisión contravirtiendo la aludida sentencia constitucional)."

"Partiendo de la idea de que la regularización del procedimiento, aunque incompleta e

4
200

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TE DE
NACION

ACERCA

insuficiente, era un gesto de buena fe del magistrado presidente me sumé a su propósito de saneamiento, instándolo por escrito presentado el día 22 del mes y año en transcurso, a lo siguiente: (Se transcribe)."

"Como respuesta obtuve el auto ahora recurrido, el cual, si bien no puso obstáculo a la solicitud del suscrito, no la acogió en toda su extensión, sino sólo parcialmente, y por ende sostuvo una situación procesal contradictoria del artículo 104 de la Ley de Amparo, en relación con sus supletorios artículos 58, 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos civiles, al no implementar el grado óptimo de regularización procedimental, según lo esclarezco a continuación."

"a) En el auto impugnado manifestó el magistrado presidente de ese H. Tribunal Colegiado de Circuito que "... efectivamente en el presente juicio de amparo la autoridad responsable dio cumplimiento inmediato a la ejecutoria dictada por este Tribunal...". Nótese al respecto la referencia a "la ejecutoria", lo cual constituye una inexactitud, pues la sentencia constitucional del caso no había ni ha alcanzado tal categoría procesal (ejecutoria o cosa juzgada), dada su recurribilidad al tenor del artículo 83 fracción V de la Ley de Amparo, tan es así que a la postre la impugnamos en revisión la Institución Pública

FEDERACIÓN
PODER JUDICIAL
INSTITUTO

Descentralizada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" y el suscrito gobernador."

"Además, la aceptación de haberse dado cumplimiento inmediato a la ejecutoria implica el reconocimiento tácito de la situación procesal contradictoria del artículo 104 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 58, 354, 355 y 356 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por haberse procedido a implementar la ejecución del fallo de amparo sin importar el incumplimiento del requisito indispensable para ello previsto en el invocado artículo 104 de la ley de la materia ("*... luego que cause ejecutoria la sentencia...*")."

"b) También se afirmó categóricamente en el auto recurrido que *"... en acuerdo de veintitrés de mayo del presente año, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera..."* en referencia al cumplimiento de la mal llamada "ejecutoria", efectuado por el magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Sin embargo ello es incierto toda vez que en el referido acuerdo se ordenó dar vista solamente a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera e incluso en la lista de acuerdos de ese H. Tribunal publicada el 24 de mayo de 2005, se indicó como extracto del acuerdo de fecha 23



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



SUPREMA
JUSTICIA DE
SEGUNDA
SECRETARIA I



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CORTE DE
LA NACION
DE ACUERDOS

de mayo de 2005 lo siguiente: (Se transcribe)."

"c) De igual forma, en el auto ahora cuestionado argumentó el magistrado presidente de ese H. Tribunal Colegiado de Circuito que: (se transcribe); y agregó que: (se transcribe)."

"Sobre el particular son procedentes las siguientes objeciones:"

"Se reitera la impropiedad de llamar ... ejecutoria..." (dos veces más) a la sentencia constitucional del 1 de junio de 2005, a pesar de no surtirse alguno de los supuestos previstos en los supletorios artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tan es así que el fallo de referencia se encuentra "sub judice" en virtud de haber sido recurrido en revisión por la Institución Pública Descentralizada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" y por el suscrito gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, en calidad de terceros perjudicados en la contienda de amparo."

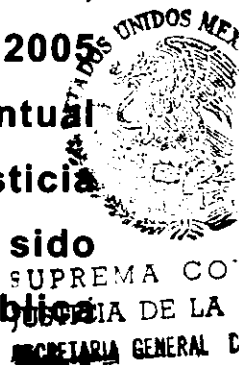
"Se aprecia la situación procesal del caso bajo la óptica del artículo 105 de la Ley de Amparo, lo cual es un notorio extravío, pues dicho precepto se sustenta en el supuesto de existir ya una ejecutoria de amparo en estricto sentido, lo que no ocurre en la especie, porque, repitiendo, no se ha surtido alguno de los supuestos previstos en los supletorios artículos 354, 355 y 356 del

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.CORTE DE
LA NACION
A SALA
DE ACUERDOS

Código Federal de Procedimientos Civiles, tan es así que el fallo del 1 de junio de 2005 se encuentra expuesto a su eventual revocación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud de haber sido cuestionado por la Institución Pública Descentralizada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" y por el suscrito gobernador mediante el recurso de revisión."

"Se trata de argumentaciones que no encuentran acomodo en la normatividad de la Ley de Amparo, pues no se ajustan a lo regulado hipotéticamente en los artículos 105 y 106 de ésta, ni a cualquiera de sus otros dispositivos. Asimismo se expresa que *"... el cumplimiento de la ejecutoria de amparo no queda necesariamente sujeta al transcurso del plazo de impugnación si las partes consideran innecesario el uso de los recursos..."*, pero en el párrafo siguiente se manifiesta contradictoriamente que *"... si como en el caso, la ejecutoria contiene una decisión de constitucionalidad o se interpreta un precepto de la Constitución Federal, el cumplimiento en ese diverso apartado debe esperar a que transcurra el plazo de impugnación ..."*.

"Se confunde el cumplimiento de una sentencia de amparo, con la calificación o determinación judicial acerca del acatamiento de la misma, y se soslaya que en la Ley de Amparo no existe una figura procesal





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



TE DE
NACION
E AMER

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES
SECRETARÍA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA

TE DE
NACION
SECRETARÍA
SECRETARÍA

suspensiva de los efectos de la sentencia por su impugnación en revisión, en virtud de que por principio jurídico (artículo 104 de la Ley de Amparo: "... luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo...") no debe implementarse la ejecución de una resolución constitucional protectora que no haya causado ejecutoria." "d) Finalizó el magistrado presidente diciendo que: (Se transcribe)."


"Adviértase al respecto la enésima referencia a la "ejecutoria" inexistente, circunstancia indicativa del origen de la irregular situación procesal que amerita ser regularizada."

"Obsérvese también la insinuación de que el error consistente en requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo sin haber adquirido firmeza procesal, se debió a que ordinariamente así se hace cuando en la resolución constitucional se incluyen pronunciamientos en torno a cuestiones de legalidad (lo cual no sucedió en el caso), por no proceder recurso en cuanto a (sic) en ese aspecto. Empero, si bien es entendible la explicación, no es comprensible la resistencia a hacer extensiva hasta su último reflejo la regularización del procedimiento, tal como lo insté a través del escrito de mi parte presentado el 22 de junio de 2005-06-28."

"En las condiciones antes expuestas, debe imperar lo afirmado por el presidente de ese H. Tribunal Colegiado de Circuito en el

sentido que la ejecutoria no puede ser cumplida hasta que transcurra el plazo para su impugnación sin que así lo hubieran hecho las partes o bien hasta que se reciba el testimonio con la ejecutoria respectiva, puesto que de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Amparo, sólo hasta que haya causado ejecutoria la sentencia respectiva procede comunicarla por oficio a las autoridades responsables para que procedan a cumplirla.”

“Insisto en que las sentencias causan ejecutoria cuando no proceda recurso alguno en contra de ellas, o bien cuando siendo procedente no se haya interpuesto, o cuando se hayan consentido expresamente por las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la ley de la materia. Por lo tanto, sólo cuando haya causado ejecutoria la sentencia de amparo es apropiado pedir su cumplimiento, por así indicarlo el artículo 104 de la ley de la materia, sin que sea óbice lo señalado por el magistrado presidente de ese H. Tribunal Colegiado de Circuito en el sentido de que el cumplimiento dado por la responsable (sin que hubiera causado ejecutoria) esté sujeto a que así lo declare colegiadamente ese órgano jurisdiccional, y que en todo caso tal determinación entraría en suspenso hasta en tanto se resolviera el





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CORTES
NACIONAL
DE ADMINISTRACIÓN

recurso de revisión hecho valer por las partes en contra de la sentencia (mal llamada "ejecutoria"), pues tal procedimiento carece de apoyo legal y no es útil como justificante de la solicitud o requerimiento para cumplir una sentencia de amparo que no ha causado ejecutoria. Dicho de otra manera, es verdad que el cumplimiento a una sentencia protectora que haya causado ejecutoria debe ser analizado y calificado por el tribunal correspondiente, pero no menos cierto es que el cumplimiento es inapropiado por indebida anticipación si, como ocurre en la especie, la sentencia respectiva no ha causado ejecutoria."

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

"En conclusión, con todo respeto insto a ese H. Tribunal Colegiado de Circuito a asumir el interés mostrado de inicio por el magistrado presidente en torno a la regularización procedimental, y, ante la fundamentación de las razones aquí vertidas, modifique el auto recurrido para conducirlo a reparar hasta su última expresión las irregularidades persistentes, de modo que quede sin efecto el requerimiento sobre el cumplimiento de la sentencia (no ejecutoria) constitucional del caso, así como absolutamente todo lo actuado en consecuencia por el magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, evitando así que éste a su vez haga eco del irregular procedimiento de ejecución en el

juicio de amparo y siga en aptitud de exigir la ejecución forzosa de lo resuelto en cumplimiento del fallo protector que procesalmente no ha adquirido la categoría de cosa juzgada (la simple devolución del expediente no lo inhabilita para ello, pues hasta este momento no existe algún mandamiento de la autoridad judicial federal que impida jurídicamente al magistrado responsable seguir actuado en ejecución coactiva de la sentencia emitida en respeto del amparo concedido y que aún no constituye verdad legal)."

"Estimo que se impone hacerlo así, para hacer patente la imparcialidad destacada en la resolución constitucional del 1 de junio del año en curso, favoreciendo el imperio de la justicia y el estado de derecho sobre cualquier subterfugio técnico."

"Por lo antes expuesto, solicito..."

CUARTO.- Los agravios que expresa el tercero perjudicado, resultan fundados, tal como se desprende de las siguientes consideraciones.

Aduce el gobernador del Estado de Nuevo León, que el acuerdo que recurre, de fecha veintitrés de junio del año en curso, le ocasiona agravios, porque a través del diverso auto dictado el ocho del mismo mes, el presidente de este tribunal colegiado ordenó la regularización del procedimiento, para que la sentencia emitida dentro del juicio de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

RTE
NACION
E ACUERDO

amparo directo fuera notificada a los terceros perjudicados, gobernador del Estado, Dirección General de la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que se procedió a notificarle la sentencia el diez de junio del presente año, fecha en que pudo conocerla en su integridad; sin embargo, no se captó que la irregularidad era mayor, pues para esa fecha ya se había requerido a la autoridad responsable el cumplimiento de la resolución que concedió el amparo, a pesar de que en términos de los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no era susceptible de ejecución, por no haberse surtido el supuesto necesario previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo.



Añade el impugnante, que en atención a lo anterior, por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil cinco, se solicitó que la regularización se hiciera extensiva en el sentido de dejar sin efectos todo lo actuado por el magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, en cumplimiento de la sentencia de amparo, a lo que recayó el acuerdo que ahora se recurre, en el que se señaló, que efectivamente la autoridad responsable dio cumplimiento inmediato a la "ejecutoria" de amparo, lo que constituye una inexactitud, ya que la sentencia relativa no ha alcanzado tal categoría, dado que podía ser recurrida conforme al artículo 83,

fracción V, de la ley de la materia, tan es así que a la postre fue impugnada por el propio gobernador del Estado y por el organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.



Se agrega, que la aceptación de haberse dado cumplimiento inmediato a la sentencia, implica el reconocimiento de una situación procesal contradictoria al artículo 104 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 58, 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por haberse procedido a implementar la ejecución de la sentencia sin importar que no había causado ejecutoria, conforme al primero de esos ordinales.

JURREMA COR
JUSTICIA DE LA I
SECRETARIA GENERAL DE

Señala el gobernador del Estado, que en el acuerdo recurrido también se afirmó que se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento dado por el magistrado responsable a la sentencia de amparo, lo cual es inexacto, toda vez que con el referido acuerdo únicamente se ordenó dar vista a la parte quejosa, por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su derecho convenga.

Refiere, que en el acuerdo recurrido se argumentó que el cumplimiento de la "ejecutoria" de amparo no queda necesariamente sujeto al transcurso del plazo de impugnación de la sentencia, si las partes consideran innecesario el uso de los recursos, pues cuando la autoridad responsable acepta de inmediato lo resuelto por el tribunal de amparo, no tendría impedimento para cumplirlo; que

9 205



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TE DE
IACTION

ACUERDO

no obstante, si durante el lapso en que se puede impugnar la resolución, otra de las partes sí hace valer el recurso, debe suspenderse la actividad del tribunal que tenga como propósito declarar cumplido el fallo protector, ya que en esa hipótesis la declaratoria queda supeditada a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señala el impugnante, que tales consideraciones son incorrectas, porque se incurre en el error de llamar ejecutoria a la sentencia constitucional, sin que se surta alguno de los supuestos previstos en los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tan es así que el fallo se encuentra sub judice, en virtud de haber sido recurrido por los terceros perjudicados.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

Argumenta, que el caso se apreció bajo la óptica del artículo 105 de la Ley de Amparo, lo ~~cuál es~~ erróneo pues dicho precepto se sustenta en el supuesto de existir ya una ejecutoria de amparo en estricto sentido, lo que en la especie no ocurre, porque no se ha surtido ninguno de los supuestos previstos en los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tanto que la sentencia se encuentra expuesta a una eventual revocación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber sido cuestionada.

Que en el caso se confunde el cumplimiento de una sentencia de amparo con la determinación judicial acerca del acatamiento de la misma, y se soslaya que en el juicio de amparo no

existe una figura procesal suspensiva de los efectos de la sentencia al ser impugnada en revisión, en virtud de que por principio jurídico no se debe implementar su ejecución si no ha causado ejecutoria.

SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

Se esgrime, que en el acuerdo que se impugna, se hizo la insinuación de que el error consistente en requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo, sin haber adquirido firmeza procesal, se debió a que ordinariamente así se hace cuando en la resolución constitucional se incluyen pronunciamientos en torno a cuestiones de legalidad, pero ello no sucedió en la especie, por lo que no se entiende la resistencia a hacer extensiva la regularización como fue solicitada; esto es, que debe imperar lo afirmado en el sentido de que la sentencia no puede ser cumplida hasta que transcurra el plazo para su impugnación, sin que lo hubieren hecho las partes, o bien hasta que se reciba testimonio de la ejecutoria respectiva, pues conforme al artículo 104 de la Ley de Amparo, solamente hasta que cause ejecutoria la sentencia correspondiente procede comunicarlo por oficio a las autoridades responsables para que procedan a cumplirla.

Que no es óbice lo que se señala en el acuerdo recurrido, en cuanto a que la resolución sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable, se encuentra en suspenso hasta que se resuelva el recurso de revisión hecho valer por las partes en contra de la sentencia, porque tal



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

10 206

procedimiento carece de apoyo legal y no justifica la solicitud o requerimiento hecho para cumplir una sentencia de amparo que no ha causado ejecutoria, y en todo caso se trata de un cumplimiento anticipado.

ORTE DE
NACION
DE AMERICA

Finaliza señalando la parte recurrente, que por las razones indicadas, se debe modificar el acuerdo recurrido para reparar en su totalidad las irregularidades existentes, de modo que quede sin efecto el requerimiento sobre el cumplimiento de la sentencia, así como todo lo actuado por el magistrado responsable, impidiendo que éste siga en aptitud de exigir la ejecución forzosa de lo que resolvió en acato a un fallo protector que no ha adquirido la categoría de cosa juzgada.



Pues bien, a efecto de resolver lo que en derecho corresponde, es menester tomar en consideración lo siguiente.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
RECLAMACION 18/2005-III
CIRCUITO

El artículo 2º de la Ley de Amparo, expresamente señala:

“Artículo 2o.- El juicio de amparo se substanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones específicas a que se refiere el libro segundo de esta ley.

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.



Por su parte, los artículos 3º, 58 y 267 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se desprende del precepto transcrito con anterioridad, prevén:

“Artículo 3º.- Las relaciones recíprocas de las partes, dentro del proceso, con sus respectivas facultades y obligaciones, así como los términos, recursos y toda clase de medios que este Código concede para hacer valer, los contendientes, sus pretensiones en el litigio, no pueden sufrir modificación, en ningún sentido, por virtud de leyes o estatutos relativos al modo de funcionar o de ser especial de una de las partes, sea actora o demandada. En todo caso, debe observarse la norma tutelar de la igualdad de las partes dentro del proceso, de manera tal que su curso fuera el mismo aunque se invirtieran los papeles de los litigantes.”

“Artículo 58.- Los jueces, magistrados y ministros podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento."



Artículo 267.- Los recursos no son irrenunciables."

NACIONAL

DE ACUERDO

Como se ve, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para la tramitación y resolución del juicio de amparo por los tribunales respectivos, éstos deben atender a las formas y procedimientos que se determinan en la propia ley, y en defecto de ésta a lo que prevenga el Código Federal de Procedimientos Civiles (principio de "obligatoriedad de las formas procesales" o de "debido procedimiento").

Tal principio, conocido como "obligatoriedad de las formas procesales", obedece a que la mayor parte de las disposiciones de la ley referida, por ser positivas y no meramente dispositivas, deben observarse, a pesar de la voluntad en contrario de las partes, las que no pueden renunciar a sus preceptos; es decir, como ese ordenamiento es de estricto orden público, el artículo no hace sino estatuir la naturaleza irrenunciable de sus disposiciones. El numeral está además relacionado con el artículo 14 constitucional, cuya garantía incluye el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO

Dicho de otra manera, de la interpretación sistemática de los ordinales indicados, deriva que las normas que rigen la tramitación del juicio de garantías son "irrenunciables"; esto es, ni por convenio de las partes, y mucho menos por disposición del propio juzgador, pueden alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento de amparo.

Por el contrario, se impone la obligación al juez de velar por la substanciación regular del procedimiento, lo que implica que queda estrictamente prohibido dictar otros trámites, que los que para cada caso determina la Ley de Amparo. Ello es entendible, pues la obligación de subsanar las irregularidades procesales, es de orden público, por el interés que tanto la sociedad como el Estado tienen, en que el juicio se desarrolle conforme a las normas que lo rigen y a los imperativos constitucionales. En ese sentido, la reposición del procedimiento a que se refiere el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, asegura la observancia de los textos legales y por lo mismo, garantiza el desarrollo normal del procedimiento, velando así por el orden público y el interés social.

A propósito del tema, el autor Hernando Devis Echandía, en su libro "Teoría General del Proceso", segunda edición, Editorial Universidad, página 377 (Buenos Aires, Argentina 1997); aborda



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

la importancia y trascendencia de las normas de orden procesal, y al respecto señala:

RTE DE
NACIONES
UNIDAS

“De lo dicho en el párrafo anterior se infiere que los actos procesales están regulados por la ley en cuanto a su forma, y que ni las partes ni el juez pueden escoger libremente el modo ni la oportunidad de lugar y tiempo, para realizarlos. Es lo que constituye el principio de la “obligatoriedad de las formas procesales”.

La ley fija el modo como el acto ha de cumplirse; escrito u oral, en papel común o en papel oficial, personalmente o por intermedio de apoderado, ante el juez o con él, etc; el tiempo en que debe ejecutarse: antes de iniciado el proceso o después, en la primera o en la segunda instancia, dentro de un término preciso, etc; el lugar donde debe celebrarse: en el recinto del juzgado o fuera de él, durante una diligencia o posteriormente por escrito presentado al juzgado, etc; el sujeto que debe ejecutar el acto y también a menudo, el orden en que debe sucederse, en relación con los otros actos del proceso, por ejemplo: la contestación de la demanda debe seguir a ésta, el traslado se surte a partir de la notificación, etc. (. . . .)



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

Los efectos del incumplimiento de esas formalidades legales de los actos procesales pueden ser dos: la nulidad de lo actuado o la pérdida de la oportunidad para ejecutarlos.



SUPREMA COR
JUSTICIA DE LA N
SECRETARIA GENERAL DE

No se crea que estas formalidades legales de los actos procesales obedecen a simples caprichos, o que conducen a entorpecer el procedimiento en perjuicio de las partes. En realidad se trata de una preciosa garantía de los derechos y de las libertades individuales, pues sin ellas no se podría ejercitar eficazmente el derecho de defensa."

En ese sentido, el principio de debido procedimiento garantiza el ejercicio eficaz del derecho de defensa que les asiste a las partes que intervienen en juicio, por ende, la observancia de las normas procesales no puede quedar sujeta a la voluntad de las propias partes, ni tampoco al capricho del juzgador.

También señala el nombrado jurista, que como no puede concebirse la existencia de una sociedad humana sin conflictos de intereses y de derechos, porque las normas jurídicas que la reglamentan son susceptibles de ser violadas, la existencia del derecho procesal, en cuanto a su origen o causa primaria, responde a una necesidad que es la de encausar la acción de los asociados en





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el deseo de proteger sus intereses contra terceros y contra el mismo grupo; y añade:

“El derecho procesal, por el hecho de referirse a una de las funciones esenciales del Estado, es un derecho público, con todas las consecuencias que esto acarrea; es decir, sus normas son de orden público, no pueden derogarse por acuerdo entre las partes interesadas; son generalmente de imperativo cumplimiento, sin embargo, existen excepciones, pues algunas normas procesales, expresamente consagradas en los códigos de procedimientos, tales como las que determinan a quién le corresponde pagar las costas o los derechos de remuneración de peritos o testigos, son claramente de derecho privado y de interés particular; por eso las partes pueden renunciar al pago de costas, y los peritos a sus honorarios; pero esas son excepciones, y las normas procesales, por regla general, son de imperativo cumplimiento, salvo autorización expresa de la ley.”

TE DE
ACCIÓN
ACUERDO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
DE RECURSOS DEL CUARTO CIRCUITO
MONTENREY, NL.

COPIA DE
LA DECISION
DE LA SALA
DE ACUERDOS

En otra parte de su obra, define al derecho procesal de la siguiente manera:

“El derecho procesal puede definirse como la rama del derecho que estudia el

conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y que por tanto fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo en los casos concretos y que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla."



En relación con los actos procesales, refiere que están sujetos a requisitos; unos se refieren al fondo y otros a su forma; unos son subjetivos y otros objetivos; que, entre los requisitos de fondo se tiene, en primer lugar, la capacidad jurídica de la persona que los ejecuta y su debida representación en caso de que no obre personalmente; aunado a que, es necesario que su autor tenga la especial legitimación para cada acto procesal que realice y que éste sea idóneo para el fin que con él persigue. Añade que, sin embargo, la ley señala no sólo quiénes pueden ejecutar actos procesales, sino también las formalidades que éstos deben reunir, es decir, cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse. Éstos son los requisitos de forma, dentro de los cuales se incluye el debido procedimiento y la oportunidad para su ocurrencia.

Ahora, en lo que corresponde al asunto particular que se plantea en este recurso, es conveniente en primer lugar, tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 107, fracción IX, de la

14 210



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente dispone:

RTE DE
NACIONAL
DE ACUERDO

“Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

(. . . .)

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;

(. . . .)”

Según se advierte de la redacción del precepto constitucional transcrito, en la fracción respectiva, las sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito en los juicios de amparo

directo, por regla general no admiten recurso alguno, sin embargo, cuando en las mismas se decida sobre la constitucionalidad de una ley, o se haga la interpretación directa de un precepto de la Constitución, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que el tema de constitucionalidad entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, procederá en su contra el recurso de revisión ante ese Alto Tribunal, el cual decidirá en última instancia las cuestiones propiamente constitucionales.

También la Ley de Amparo dispone al respecto, lo siguiente:

“Artículo 83.- Procede el recurso de revisión:

(. . . .)

V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



CORTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDO

La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste."



Por su parte, el artículo 84 del citado ordenamiento legal prevé:

Artículo 84.- Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

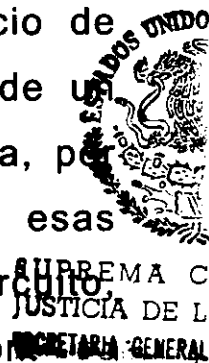
(. . . .)

II.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83.

(. . . .)"

De ello se deduce, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano terminal competente para resolver las cuestiones de

constitucionalidad que se planteen en el juicio de amparo directo, cuando entrañen la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, por lo que las sentencias que se emitan sobre esas materias por los tribunales colegiados de circuito, son impugnables a través del recurso de revisión.



Cabe señalar, que de acuerdo con las reformas estructurales del Poder Judicial de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, se impuso al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la obligación, de calificar la procedencia del recurso de revisión interpuesto en amparo directo o indirecto, con el propósito de garantizar que la administración de justicia federal se ajuste a las notas fundamentales previstas en el artículo 17 de la Constitución Federal, cuya tarea concluiría con su admisión o desechamiento.

La palabra "calificará" deriva del verbo calificar que significa apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de algo o de alguien, o analizar si una cosa reúne los requisitos necesarios, de conformidad con el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, Vigésima Segunda edición, Editorial Espasa Calpe 2001, página 402; en consecuencia, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a quien compete analizar si existen motivos que hagan procedente o improcedente la revisión, con base en las



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



constancias enviadas por el Tribunal Colegiado de Circuito o el Juez de Distrito, según corresponda.

Tales consideraciones, encuentran apoyo

ORTE en la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 64/2001, DE LA NACION, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, que puede ser consultada en la página 315, tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio



o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente.” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario



PREMA C
JUSTICIA DE I
SECRETARIA GENERA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, tesis 2a./J. 64/2001, página 315).

ORTE DE
A NACIÓN

357 del

Ahora bien, los artículos 354, 355, 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º; establecen lo siguiente:

SECCIÓN DE ACTUARIOS

“Artículo 354.- La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.”

“Artículo 355.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.”

“Artículo 356.- Causan ejecutoria las siguientes sentencias:

- I.- Las que no admitan ningún recurso;**
- II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y**
- III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante.”**

“Artículo 357.- En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por

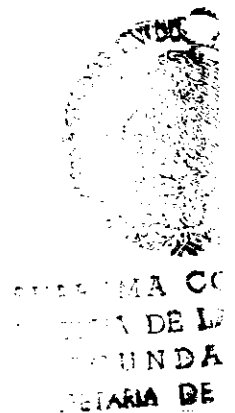
ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer.



La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso."

Por su parte, los artículos 104 y 106 de la Ley de Amparo, estatuyen:

"Artículo 104.- En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

responsables para su cumplimiento y la harán saber a las demás partes.

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior.

En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia."

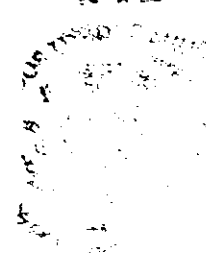
"Artículo 106.- En los casos de amparo directo, concedido el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la autoridad responsable para su cumplimiento. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el cumplimiento de la sentencia por la vía telegráfica, comunicándose también la ejecutoria por oficio.

En el propio despacho en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autoridad responsable haya recibido la ejecutoria, o en su caso, la orden telegráfica, no



ORTE DE
NACION
DE ACUERDO



JU
A
CR



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

DE DE
ACION
LA
ROD

quedare cumplida o no estuviere en vías de ejecución, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, se procederá conforme al artículo anterior."

Conforme a tales disposiciones legales, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de ley o por declaración judicial, en el primero de esos supuestos encajan las resoluciones que no admitan recurso alguno, y las que hayan sido consentidas expresamente por las partes, sus representantes legales o sus mandatarios con poder bastante; mientras que en el segundo se ubican aquellas sentencias que, no obstante admitir recurso, no hayan sido impugnadas, o habiéndolo sido se haya declarado desierto el medio de impugnación o el interesado haya desistido de él.

Sobre el término "ejecutoria", el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Editorial Porrúa), señala el siguiente concepto:

"I. (Del latín executorius, derivado del verbo exsequor, que significa "cumplir, ejecutar".) II. Es la cualidad que se atribuye a las sentencias que, por no ser susceptibles de ulteriores impugnaciones o discusiones, han adquirido la autoridad de la cosa juzgada. En ese sentido,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

19 215

sentencia ejecutoria es exactamente lo mismo que sentencia firme; ambos adjetivos significan la atribución de la autoridad de la cosa juzgada."

ORTE DE
NACION
107

Por tanto, si en términos de los artículos fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, las sentencias de amparo directo que aborden temas de constitucionalidad de leyes, o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, son impugnables a través del recurso de revisión, debe convenirse en que no causan ejecutoria hasta en tanto se resuelva el recurso de revisión que se haya interpuesto, o hasta que transcurra el término para hacerlo valer sin que se haya ejercido, se haya expresado la voluntad de desistir del recurso, el mismo haya sido declarado desierto o las partes hubieren expresado el consentimiento del fallo. Luego, si una resolución de esa índole no ha causado ejecutoria, por no darse ninguno de los presupuestos indicados, tampoco puede procederse a su ejecución y cumplimiento, puesto que no es inmutable.

Es por ello, que el artículo 104 de la ley de la materia, dispone que se procederá a requerir el acato de la sentencia que conceda el amparo, hasta que cause ejecutoria la resolución o hasta que se reciba testimonio de la determinación que se dicte en el recurso de revisión correspondiente, girando a las responsables el oficio relativo, y es entonces cuando se les prevendrá para que informen la forma en que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
MUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

DE DE
ACION
LA
ERD

den cumplimiento a ese fallo; lo cual es comprensible, porque mientras la sentencia no cause ejecutoria no existe cosa juzgada y no debe procederse a la ejecución, ya que de lo contrario se transgreden las normas del procedimiento de amparo y se soslaya el principio de obligatoriedad de las formas procesales a que se ha hecho alusión en párrafos precedentes.



En la hipótesis específica, según se desprende del acuerdo recurrido, y tal como lo aduce el impugnante, a la solicitud de éste en el sentido de que se regularizara el procedimiento, para dejar sin efectos el requerimiento que se hizo a la autoridad responsable a fin de que cumpliera la sentencia, se proveyó que si bien se hizo tal requerimiento a la autoridad y ésta procedió a acatar la determinación que otorgó el amparo, "la sentencia de la responsable no ha sido atendida por este Tribunal conforme lo establece el artículo 105 de la Ley de Amparo, en el sentido de establecer si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo, ya que esa declaratoria queda supeditada a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del recurso de revisión".

Sin embargo, con ello se pasó por alto que la autoridad responsable obró en acato al requerimiento que le fue hecho por el presidente de este órgano jurisdiccional, con la prevención a que se refieren los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, y que por tanto no se le dejó otra opción

SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE

0
216

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que cumplir con el fallo dictado por el tribunal en el juicio de amparo directo, so pena de sufrir las consecuencias que derivan del desacato o retardo de que hablan tales preceptos, a pesar de que la sentencia cuyo cumplimiento fue ordenado no ha causado ejecutoria y, por ende, no tiene la calidad de cosa juzgada, sino que se encuentra sujeta a juicio debido a la interposición del recurso de revisión que los terceros perjudicados hicieron valer en su contra, lo que eventualmente podría ocasionar su revocación o modificación, por tratarse de un asunto en el que se analizó una cuestión de constitucionalidad y se hizo la interpretación directa de un precepto de la Constitución.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

Es decir, en el acuerdo impugnado se sostuvo que, aunque se ordenó el cumplimiento de una sentencia que no está firme, el acto dictado en ejecución por parte de la responsable, no ha sido calificado para determinar si cumple o no con el fallo protector, *“ya que esa declaratoria queda supeditada a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la revisión”*; consideración que no resulta correcta, no solo porque desatiende la naturaleza y fines de la institución de “cosa juzgada”, sino además porque rompe con el principio fundamental de *“debido procedimiento”* u *“obligatoriedad de las formas procesales”*, que rige en el juicio de garantías, desde su inicio hasta que se declare completamente concluido; esta última afirmación se sustenta en que, conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 104, 105, 106, 107, 108, 112 y 113, de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución y cumplimiento de los fallos que otorgan la protección federal, es de orden público e interés social y, por ende, no puede ser suspendido; de ahí que este órgano colegiado no comparte la consideración sustentada en el auto de presidencia, donde se afirma que la declaración sobre el debido cumplimiento queda supeditada a los resultados del recurso de revisión, porque ello desatiende las normas que regulan la ejecución de las sentencias de amparo, las cuales no establecen la posibilidad de suspender el cumplimiento de tales resoluciones una vez ordenado, sino disponen el deber de velar porque la ejecución no se paralice ni se demore.

En efecto, los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 104, 105, 106, 107, 108, 112 y 113, de la Ley de Amparo, expresamente dicen:

“Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

(. . .)

XVI.- Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del

217



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CANON

TE DE
ACCIÓN
ACUERDO

MEXICANA

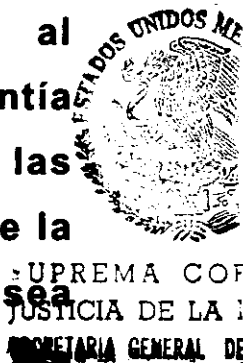
FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MEXICOPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO DE ABOGADOS
ESTRATÉGICORTI
NA
SAL
CUE

acto reclamado o tratarse de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.

Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

(. . .)"

“Artículo 80.- La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.”



“Artículo 104.- En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber a las demás partes.

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la

27 218



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TE DE
NACION
ACCIÓN

ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior.

En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia."

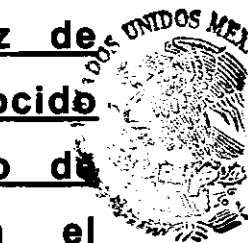
"Artículo 105.- Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que oblique a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

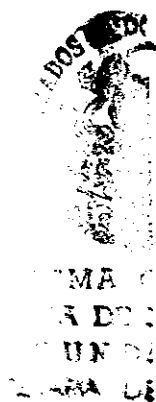
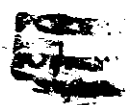
Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta Ley.

Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida.

Cuando la naturaleza del acto lo permita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o la repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACION
SECRETARIA GENERAL DE



23 219



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

económicos que pudiera obtener el quejoso.

Una vez que el Pleno determine el cumplimiento sustituto, remitirá los autos al juez de distrito o al tribunal de circuito que haya conocido del amparo, para que incidentalmente resuelvan el modo o cuantía de la restitución.

Siempre que la naturaleza del acto lo permita, el quejoso podrá solicitar ante el juez de distrito o tribunal de circuito que haya conocido del amparo, el cumplimiento sustituto de al ejecutoria, quien resolverá de manera incidental lo conducente y, en su caso, el modo o cuantía de la restitución."

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

Artículo 106.- En los casos de amparo directo, concedido el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la autoridad responsable para su cumplimiento. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el cumplimiento de la sentencia por la vía telegráfica, comunicándose también la ejecutoria por oficio.

En el propio despacho en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autoridad responsable haya recibido la ejecutoria, o en su caso, la orden telegráfica, no quedare cumplida o no estuviere en vías de ejecución, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, se procederá conforme al artículo anterior.”

“Artículo 107.- Lo dispuesto en los dos artículos precedentes se observará también cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.

Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo.”

“Artículo 108.- La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por parte interesada ante la autoridad que conoció del amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el término de cinco días, a las autoridades responsables, así como a los terceros, si los hubiere, para que expongan lo que a su derecho convenga.

24 220



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TE DE
IACION

La resolución se pronunciará dentro de un término de quince días. Si la misma fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, la autoridad remitirá de inmediato el expediente a la Suprema Corte de Justicia; de otro modo, sólo lo hará a petición de la parte que no estuviere conforme, la cual lo manifestará dentro del término de cinco días a partir del siguiente al de la notificación correspondiente. Transcurrido dicho término sin la presentación de la petición, se tendrá por consentida la resolución. La Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.

Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos de ejecución de sentencia de amparo a que se refieren los artículos anteriores, la Suprema Corte de Justicia determinará, si procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente."

"Artículo 111.- Lo dispuesto en el artículo 108 debe entenderse sin perjuicio de que el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, hagan cumplir la ejecutoria de que se trata



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMERO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

dictando las órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario de su dependencia para que dé cumplimiento a la propia ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de Distrito o el Magistrado designado por el Tribunal Colegiado de Circuito, se constituirán en el lugar en que deba dársele cumplimiento, para ejecutarla por sí mismo. Para los efectos de esta disposición, el juez de Distrito o Magistrado de Circuito respectivo, podrán salir del lugar de su residencia sin recabar autorización de la Suprema Corte, bastando que le dé aviso de su salida y objeto de ella, así como de su regreso. Si después de agotarse todos estos medios no se obtuviere el cumplimiento de la sentencia, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito solicitarán, por los conductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hacer cumplir la ejecutoria.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquéllos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el



25 221



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



ORTE DE
NACION
DE ASUERO


acto reclamado, mediante el procedimiento que establezca la ley; pero si se tratare de la libertad personal, en la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la ejecutoria y la autoridad responsable, se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda dentro de un término prudente, que no podrá exceder de tres días, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, mandarán ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones darán debido cumplimiento a las órdenes que les giren conforme a esta disposición, los jueces federales o la autoridad que haya conocido del juicio."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTREY, NL

"Artículo 112.- En los casos a que se refiere el artículo 106 de esta ley, si la Sala que concedió el amparo no obtuviere el cumplimiento de la ejecutoria respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al juez de Distrito que corresponda, quien se sujetará a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables."

“Artículo 113.- No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición.”



PREMA C
JUSTICIA DE L
SECRETARIA GENERAL

Tal como se aprecia de la lectura de esas disposiciones, el tribunal de amparo debe velar por el cumplimiento de las sentencias que concedan la protección federal a los particulares, lo cual es comprensible si se toma en consideración que la sociedad está interesada en que los fallos protectores se acaten, ya que constituyen el freno para los abusos de poder de la autoridad frente a los gobernados. De ello se obtiene la conclusión de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y, una vez dictado el mandamiento de ejecución, ésta no puede paralizarse.

Luego, tal estimación sustentada en el acuerdo impugnado, en cuanto a que la orden de cumplir un fallo carente de firmeza, se justifica por la supeditación de la declaratoria respectiva a las resultas del recurso de revisión, no es correcta, de acuerdo con las consideraciones precedentes; máxime que admitir la posibilidad de que el tribunal colegiado, una vez resuelto el recurso de revisión, proceda a calificar si la resolución dictada por la autoridad responsable, en atención al requerimiento

222



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que ya se le hizo, cumple o no la sentencia de amparo; desatiende las normas del procedimiento, y es tanto como aceptar que es innecesaria la existencia del recurso de revisión y el funcionamiento del tribunal de alzada, dado que, de cualquier forma, la autoridad responsable ya ha cumplido los pronunciamientos necesarios y ordenado las providencias correspondientes, encaminadas a lograr la restitución constitucional, no obstante la impugnación presentada en el plazo legal contra la sentencia que indebidamente se encuentra en vías de ejecución o plenamente ejecutada.

Además, es inexacto lo que se sostuvo en el auto recurrido, en el sentido de que el cumplimiento de la sentencia de amparo directo no queda sujeta necesariamente al transcurso del plazo de impugnación, cuando las partes consideran innecesario el uso de los recursos; porque no debe perderse de vista que en la especie no existió manifestación expresa de las partes en el sentido de consentir la sentencia, por el contrario, se hizo valer el recurso de revisión en su contra por los terceros perjudicados; por ello, si no había transcurrido aún el plazo previsto para la interposición del medio de impugnación, y no existió manifestación expresa de consentir la sentencia por las partes en el juicio, no debió requerirse el cumplimiento de la misma, sino esperar a que existiera sentencia firme, sin olvidar que si bien la autoridad procedió al cumplimiento, ello fue a raíz del requerimiento con prevención que se le hizo y no en forma espontánea.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

También le asiste la razón al impugnante, en cuanto a que es desacertado lo que se resolvió en ese auto, al expresarse que cuando la autoridad responsable acepta de inmediato lo resuelto en la sentencia de amparo, no tiene impedimento para cumplir con la resolución y resarcir a la parte quejosa en el goce de la garantía violada; con tal criterio se deja de tomar en cuenta que en el caso de una sentencia que no ha causado ejecutoria, como la que nos ocupa, la misma no debe ser cumplida, sobre todo porque siendo las cuestiones de constitucionalidad debatidas de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a ésta a quien le corresponde decidir en última instancia sobre el particular y, consecuentemente, a este tribunal colegiado no le queda sino esperar a que ese medio de impugnación sea resuelto, para saber si es procedente proveer sobre el cumplimiento y en qué medida. Amén de que, aun en el caso de que la autoridad se conformara con el sentido de la sentencia que otorgó el amparo, ello no impide a las partes en el juicio, como los terceros perjudicados, el derecho de agotar el recurso de revisión con el fin de que se revoque o se modifique la resolución, por lo que el fallo no debe ejecutarse cuando no ha transcurrido el plazo para la impugnación, ni se ha expresado el consentimiento por las partes.

De sustentarse lo contrario, se dejarían de lado las reglas del procedimiento relativas al

21 223



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

recurso de revisión en el juicio de amparo directo, y se pasaría por alto el principio de irrenunciabilidad de las formas procesales, acorde al cual la observancia de las disposiciones relativas al juicio de amparo y a los recursos que en el mismo se prevén, no queda al arbitrio de las partes ni del juzgador, y no pueden ser renunciadas, alteradas o modificadas.

Aunado a lo anterior, no debe pasar inadvertido que, como lo señala la parte recurrente, tratándose de una resolución de amparo que no ha causado ejecutoria, no resulta correcta la estimación de que la irregularidad se subsana al suspenderse la actividad dirigida a determinar si la sentencia de amparo ha sido cumplida, mediante el acto emitido por la autoridad responsable como respuesta al requerimiento que inoportunamente se le hizo; toda vez que, como ya se ha señalado, con esa pretensión se alteran las normas del procedimiento, pues no existe disposición que permita suspender la calificación de que se habla.

Por otro lado, como bien lo indica el recurrente, si la sentencia de amparo directo no ha causado ejecutoria, debe impedirse que la autoridad responsable continúe exigiendo el acato a su nueva determinación, para lo cual cuenta con los medios de apremio previstos en el Capítulo XVI, Título Segundo, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, que en sus artículos 94, 95, 96 y 97 estatuye:



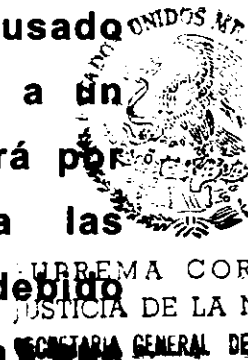
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

“Artículo 94.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable a un particular, el Tribunal lo comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades demandadas para su debido cumplimiento, previniéndolas para que informen sobre el cumplimiento que den a la sentencia respectiva.”

“Artículo 95.- Si dentro de los quince días siguientes al en que haya causado ejecutoria la sentencia, ésta no se cumpliera, el Tribunal de oficio o a petición de parte, aplicará los medios de apremio previstos por esta Ley.”

“Artículo 96.- En el supuesto de que la autoridad o el servidor público persistiera en no dar cumplimiento a la sentencia, el Tribunal ordenará su cumplimiento si la ejecución consiste en la realización de un acto material; promoverá la aplicación de la ley o del reglamento que corresponda y si el acto solo puede ser ejecutado por la autoridad demandada, solicitará al titular de la dependencia estatal o municipal, a quien se encuentre subordinada dicha autoridad, para que conmine a ésta a cumplir con la sentencia.

Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la



28
224

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TE DE
IACION
ACERDO

resolución, el Tribunal podrá decretar la destitución del servidor público que incumplió, excepto que se trate de una autoridad de elección, en cuyo caso se procederá en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nuevo León."

"Artículo 97.- Las sanciones mencionadas en este Capítulo también serán procedentes cuando no se cumpla en sus términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto cuya nulidad se demandó en el juicio."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
CON DE AMPAROS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

Así, si se conviene en que una sentencia de amparo carente de firmeza no debe ser ejecutada, el requerimiento para que la misma se cumpla no queda reparado con la aducida "suspensión" de la actividad dirigida a calificar si el fallo protector quedó o no acatado; pues, además de que la suspensión de la ejecución de las sentencias de amparo no está legalmente prevista, la irregularidad debe ser subsanada para que la responsable no siga agotando las medidas de apremio con que cuenta, a fin de lograr que el acto que emitió en atención al requerimiento del presidente de este tribunal produzca todas sus consecuencias, lo cual únicamente puede alcanzarse regularizando plenamente el procedimiento irregular.

Al caso sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio que este tribunal comparte, derivado de la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que puede ser consultado en la página 569, tomo XII, agosto de 1993, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que expresamente dice:

SUPREMA C
JUSTICIA DE I
SECRETARIA GENERAL

"SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE AMPARO DIRECTO, CASO EN QUE REQUIEREN DECLARATORIA JUDICIAL DE EJECUTORIEDAD. Si la sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado al resolver un juicio de amparo, decide sobre la constitucionalidad de una ley o establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución, es obvio que estamos en el caso de excepción de la procedibilidad del recurso de revisión previsto en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal; luego entonces, si no se recurre, para que se considere que la sentencia ha causado ejecutoria y por ende con el carácter de cosa juzgada, se requiere de una declaratoria judicial que así lo determine, en términos de los artículos 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 2o. de la ley de la materia, que dicen: "Art. 356. Causan ejecutoria las

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

29 225



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



ORTE DE
LA NACION
DE AGENCIAS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

siguientes sentencias: I. Las que no admitan ningún recurso; II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él; y III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante". "Art. 357. En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, **previa certificación de esta circunstancia por la secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer. La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso**". De esta forma, la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado causará ejecutoria por ministerio de ley, cuando no se ubique dentro del caso de excepción para la procedencia del recurso de revisión, de lo contrario, esto es, de admitir recurso, al interponerse éste, será

hasta que lo resuelva la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando cause ejecutoria por ministerio de ley (fracción I del artículo 356 ya transcrito), o bien, si no se interpone, habrá que hacerse la declaratoria judicial de ejecutoriedad para que dicha sentencia adquiera definitividad y además para precisar el momento en el cual puede exigirse su cumplimiento en el caso de que en última instancia se hubiere concedido la protección federal. Así las cosas, si la Sala Fiscal cumplimentó una sentencia dictada en amparo directo que admitía recurso (mismo que está subjudice) lo hizo en forma incorrecta, pues para ello debió, en su caso, esperar la comunicación de la declaratoria de ejecutoriedad, o bien la resolución (ahora sí ejecutoria) que al efecto pronuncie la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

También es aplicable, en la parte relativa, la tesis aislada número 1ª. LII/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193, tomo XVI, agosto de 2002, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente:

**“AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN.
PROCEDE TENER POR DESISTIDOS DEL
JUICIO DE GARANTÍAS A LOS QUEJOSOS,**

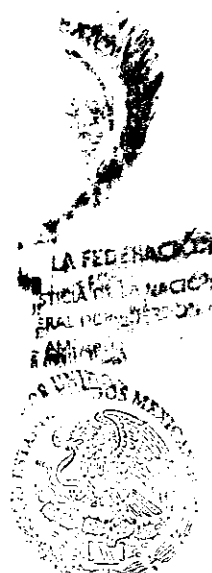
90 226



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



ORTE 356 y 357 del Código Federal de
NACION Procedimientos Civiles de aplicación



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

SI LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, POR HABERSE INTERPUESTO ESE RECURSO, NO HA CAUSADO EJECUTORIA, YA SEA POR MINISTERIO DE LEY O POR DECLARACIÓN JUDICIAL. De lo dispuesto en los artículos

ORTE 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, se desprende que la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito causará ejecutoria por ministerio de ley, cuando no admita el recurso de revisión a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal; en cambio, si admite el citado recurso y éste se interpone, será hasta que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando aquélla

cause ejecutoria, o bien, si no se interpone, habrá que hacerse la declaratoria judicial de ejecutoriedad para que dicha sentencia adquiera definitividad. En este sentido, si la parte quejosa presenta su desistimiento del juicio de garantías, cuando se encuentra en trámite el recurso de revisión promovido en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en amparo directo, es indudable que no existe razón para no poder tenerla por desistida, pues las sentencias del Tribunal Colegiado dictadas en amparo

directo, en las que se hizo algún pronunciamiento sobre constitucionalidad, o bien, se omitió hacerlo, admiten el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por ende, no causan ejecutoria, sino hasta que este Alto Tribunal haga el pronunciamiento respectivo. No es óbice a lo anterior, el hecho de que las cuestiones de legalidad respecto de las que se ha pronunciado aquel órgano colegiado sean irrecurribles, puesto que en el caso de que se declarara inconstitucional el precepto que fue fundamento del acto reclamado, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación las cuestiones de legalidad analizadas por el Tribunal Colegiado, quedan sin efecto al no subsistir a la declaratoria de inconstitucionalidad. Además, afirmar que no es procedente tener por desistido del juicio, a quien lo inició con la presentación de su demanda, sería ir en contra de uno de los principios rectores del juicio de garantías, porque se llegaría al absurdo de que se le exigiera continuar con el litigio hasta su conclusión, aun cuando no deseara hacerlo, lo que significaría ir en contra de los intereses del particular, que son precisamente los que se protegen a través del juicio constitucional, a pesar de que expresamente manifestó su voluntad de



31 227



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

desistir del juicio y, por tanto, de darlo por terminado."



ORTE DE

NACIONAL

DE ACUERDO

Cabe añadir, que este tribunal en pleno no se encuentra impedido para dejar insubsistente el requerimiento de presidencia en que se ordenó a la responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo, porque si bien a ésta le compete el trámite de los asuntos, acorde a lo ordenado por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como solicitar que se cumplan las ejecutorias dictadas por el tribunal colegiado, sus determinaciones contenidas en tales autos constituyen un examen preliminar del asunto, por lo que son resoluciones de mero trámite y, por ende, no causan estado; por lo que el tribunal colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva si es procedente la ejecución de la sentencia, y si ello aún no es oportuno puede resolver lo que corresponda conforme a derecho, en plenitud de jurisdicción y previo el análisis del asunto, sobre todo porque el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, que por lo tanto debe ser vigilada por el órgano colegiado, conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 104, 105, 106, 107, 108, 112 y 113 de la Ley de Amparo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

Al respecto sirve de apoyo, por compartirse el criterio que en la misma se contiene y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número

VIII.2o. J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que puede ser consultada en la página 69, tomo 54, junio de 1982, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto que transcribe a continuación:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA C
JUSTICIA DE L
SECRETARIA GENERAL

“AUTOS DE PRESIDENCIA NO CAUSAN ESTADO EN RELACION CON EL TRIBUNAL COLEGIADO. De conformidad con los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados se integran con tres magistrados y sus resoluciones deben tomarse por unanimidad o mayoría de votos. Por ende, los autos de presidencia, de dichos tribunales, respecto a la admisión del asunto, sólo corresponden a un examen preliminar del negocio, pues el estudio definitivo corresponde al órgano colegiado; de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal.”

Más aun, se debe tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 366/2004-PL, en sesión del cinco de febrero de dos mil cinco, sostuvo el criterio de que el recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo directo, es improcedente si el tribunal colegiado de Circuito ya ha dictado el acuerdo en que resuelve que la misma ha causado



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ejecutoria, ya que mientras subsista esa declaración el fallo reviste la calidad de cosa juzgada, aun en el supuesto de que la revisión se hubiese interpuesto dentro del plazo, pues el agraviado, en todo caso, en aras de estar en aptitud de combatir dicha sentencia, debe agotar el recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, contra el auto que declaró firme tal resolución.

Tal postura de la Corte, se desprende de la tesis aislada de su Segunda Sala, que tuvo como precedente el recurso de reclamación indicado, y que con el número 2ª. XXIX/2005 aparece publicada en la página 360, tomo XXI, marzo de 2005, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el encabezado y contenido siguientes:

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI SE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme a los artículos 354 y 355 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, el recurso de revisión es improcedente si el Tribunal Colegiado, después de examinar el aspecto de constitucionalidad en la sentencia, declara que ésta ha causado ejecutoria, ya que mientras subsista esa declaración el fallo reviste la calidad de cosa juzgada y en su contra no procede medio de defensa alguno, en virtud de que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
 ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
 CACEN, VERACRUZ, NL

es la verdad legal, aun en el supuesto de que la revisión se hubiese interpuesto dentro del plazo de diez días. De ahí que el recurrente, en aras de estar en aptitud de combatir dicha sentencia, deberá agotar el recurso de reclamación previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo contra el auto que la declaró ejecutoriada, si los vicios derivan del cómputo en el plazo para interponer el recurso o, en su caso, el incidente de nulidad de actuaciones, si la irregularidad se realizó al notificarse el fallo del Tribunal Colegiado."

En ese orden de cosas, de no decretarse la regularización del procedimiento para subsanar la irregularidad cometida, consistente en requerir el cumplimiento de una sentencia que aún no ha causado ejecutoria, se colocaría al recurrente (tercero perjudicado) en franco estado de indefensión.

Así, aún cuando en el caso específico no existe acuerdo que expresamente declare ejecutoriada la sentencia dictada por este tribunal, se estima necesario comunicar esta circunstancia a la superioridad que conoce del recurso de revisión, por la incidencia que pudiera tener con relación a la procedencia del mencionado recurso.



PREMA C
JUSTICIA DE L.
SECRETARIA GENERAL



PREMA
IA DE
GUNI
RETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La anterior estimación no implica que este tribunal actúe en suplencia de los agravios expresados por el recurrente, sino en cumplimiento de la obligación a su cargo de resolver de manera íntegra, eficaz y coherente la litis efectivamente planteada en el recurso de reclamación, dilucidando todas las cuestiones necesarias para emitir la decisión que se estima procedente, acorde al deber que le impone el artículo 17 constitucional, que establece la obligación de administrar justicia de manera completa, y en acato al principio establecido

diverso numeral 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé que los jueces resolverán íntegramente las cuestiones que se les plantean, disposición que lejos de ser contraria al espíritu de la Ley de Amparo, está en armonía con ella y debe aplicarse supletoriamente.

Tampoco se puede considerar, que con tal proceder se suplan los agravios del recurrente, en términos de lo previsto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ya que la institución de la suplencia tiene lugar cuando en el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten, o no se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación; es decir, la suplencia de los agravios se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el recurrente, o bien, en abordar el estudio de aquellas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar el o los motivos que sustentan su afirmación; sin embargo, en la hipótesis

particular no se presenta esa situación, pues de la lectura de los agravios expresados, se advierte que el recurrente precisó con claridad cuál es la lesión que le provocan las respectivas consideraciones del acuerdo recurrido, así como las circunstancias que generan esa afectación. Así, expresada con claridad la causa de pedir, este órgano se encuentra en aptitud de abordar el análisis de todas las cuestiones relacionadas con la litis efectivamente planteada, a efecto de emitir de manera eficaz y coherente su decisión.

Al respecto es de citarse como apoyo, en la parte relativa, la tesis aislada número 2ª. XXVIII/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, tomo XI, abril de 2000, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:

"SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO RESULTE INNECESARIO. El artículo 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece la obligación de los Jueces de resolver todas las cuestiones que hayan sido debatidas en juicio, la cual resulta aplicable supletoriamente a los



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE

SECRETARÍA
JURISDICCIONAL
SECRETARÍA

34
230

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CORTES DE
NACIONAL
JUDICIALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMERA CORTES DE NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE AMPAROSPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.CORTES DE
NACIONAL
JUDICIAL

tribunales de amparo. Lo anterior, en virtud de que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales regula, en su capítulo X, la forma de dictar las sentencias en los juicios de garantías, conforme a los siguientes principios básicos: a) relatividad de los efectos de dichos fallos; b) suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda y de los agravios en los recursos que establece la ley; c) fijación clara y precisa del acto reclamado, de las pruebas conducentes a demostrarlo, de los fundamentos legales y de los puntos resolutivos en los que se concrete el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo; d) apreciación del acto reclamado tal como haya sido probado ante la autoridad responsable; e) corrección de los errores que se adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados; y f) el de sancionar con multa la promoción frívola de los juicios de amparo y la omisión de rendir informes por parte de las autoridades responsables. Las reglas y principios descritos tienen el objetivo de asegurar a los gobernados una tutela de sus garantías individuales congruente, completa y eficaz. En tal virtud, la obligación establecida en el artículo 351 invocado para que los Jueces

resuelvan íntegramente las cuestiones que se les plantean, lejos de ser contraria al espíritu de la Ley de Amparo, está en armonía con ella y debe aplicarse supletoriamente a los juicios de garantías, debiéndose en éstos emitir las sentencias respectivas examinando y solucionando todas las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión, de lo que se sigue que en los casos de inoperancia de los conceptos de violación o agravios, en los que no proceda suplir su deficiencia o de causas de improcedencia fundadas, con su estudio y resolución se agota la necesidad señalada y, por lo mismo, no deben hacerse pronunciamientos de fondo.”

Así como la tesis número 2ª. XXII/2002, sustentada por la misma Segunda Sala, visible en la página 419, tomo XV, marzo de 2002, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe enseguida:

“AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE LA MATERIA. La circunstancia de



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARÍA GENERAL

PRE
STIC
76
76



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CORTES DE
NACIÓN
EPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

que al conocer de un recurso dentro de un juicio de amparo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación o un Tribunal Colegiado de Circuito atiendan a la causa de pedir expresada, conforme lo dispone la tesis de jurisprudencia P./J. 69/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, de rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", no equivale a suplir su deficiencia en términos de lo previsto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ya que para abordar los agravios con base en la causa de pedir expresada en el libelo respectivo resulta necesario que el recurrente haya precisado con claridad cuál es la lesión o el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así como los motivos que generan esa afectación, a diferencia de lo que sucede cuando se suple la deficiencia de los agravios, pues esta prerrogativa procesal tiene aplicación cuando en el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten, o bien, realizado esto

último, no se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación. Además, la institución de la suplencia de los agravios, según el grado en que ésta se autorice por la Ley de Amparo y su interpretación jurisprudencial, se traduce en examinar consideraciones controvertidas por el recurrente, o bien, en abordar el estudio de aquellas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar el o los motivos que sustentan su afirmación."



PREMA COR
JUSTICIA DE LA I
SECRETARIA GENERAL DE

Amén de ello, si del acuerdo recurrido, que ordenó la ejecución de una sentencia de amparo directo que no ha causado ejecutoria, se advierte tal incongruencia, el tribunal colegiado en pleno debe abocarse a corregir la inconsistencia advertida, por tratarse de una materia de orden público y de interés general, sin constreñirse al estudio de los agravios que al respecto se le formulen.

Luego, si en el caso se requirió a la autoridad responsable para que procediera al cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo en la vía directa, en el momento mismo en el que se le giró el oficio de notificación de ese fallo, sin esperar a que transcurriera el plazo previsto por la ley para la interposición del recurso de revisión, y sin tomar en cuenta que el fallo protector podía ser



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

70
232TE DE
IACION
ACEDON

impugnado, como lo fue; debe convenirse en que le asiste la razón al recurrente, en cuanto a que se está procediendo a la ejecución de una resolución que aún no se encuentra firme ni cuenta con la calidad de cosa juzgada, por lo que procede ordenar la reposición del procedimiento en los términos solicitados por el impugnante, a fin de dejar sin efectos el requerimiento dirigido a la ejecución de la sentencia, así como la sentencia misma dictada en cumplimiento al requerimiento referido.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY

Así las cosas, al resultar fundados los agravios del recurrente, lo que procede en el caso es dejar insubsistente el acuerdo impugnado, exclusivamente en la parte materia del recurso, ordenando la regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para lo cual se deja sin efecto el requerimiento hecho a la autoridad responsable para que procediera al cumplimiento de la sentencia dictada en el amparo directo por este tribunal, así como lo actuado en acato a tal requerimiento.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- ES FUNDADO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, interpuesto por el gobernador del Estado de Nuevo León, en contra del acuerdo dictado el veintitrés de junio de dos mil cinco, dentro del juicio de amparo directo número 328/2004.

SEGUNDO.- Para los efectos indicados en la parte relativa de esta ejecutoria, dentro del amparo directo en revisión número 1070/2005, radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remítase a ese Alto Tribunal copia certificada de la presente ejecutoria y disquisito que la contenga.



Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

SUPREMA CO
DE LA
SECRETARIA GENERAL DE

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, licenciados Sergio Eduardo Alvarado Puente, José Carlos Rodríguez Navarro y José Elías Gallegos Benítez, siendo ponente el segundo de los mencionados, quien firma para los efectos legales, juntamente con el presidente y la secretaria de acuerdos. Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE:

**LIC. SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE.
(FIRMA)**

233



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAGISTRADO PONENTE:

LIC. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO.
(FIRMA)



TE DE
NACIONAL
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE ACUERDOS:

LIC. ELSA PATRICIA ESPINOZA SALAS.
(FIRMA)



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, N.L.

ESTA HOJA Y ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN LA RECLAMACIÓN NÚMERO 18/2005-III, FALLADA EN SESIÓN DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL CINCO, EN LA QUE SE DECLARÓ FUNDADO DICHO RECURSO. CONSTE.-

EAP/mmlg.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL Y CORRECTA SACADA DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN Reclamación 18/2005 VA EN -37- FOJAS ÚTILES. SE EXPIDE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR DOY FE, MONTERREY NUEVO LEÓN, A 24 de agosto de 2005.
A C SECRETARIA DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE CUARTO CIRCUITO

Lic Elsa Patricia Espinoza Salas



SUPREMA CA
JUSTICIA DE L
SECRETARIA GENERAL

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IMPEDIMENTO 2/2005-SS

PROMOVENTE: MINISTRA MARGARITA
BEATRIZ LUNA RAMOS.

MINISTRO: PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA
PIMENTEL.
SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
trece de septiembre de dos mil cinco.

Vo. Bo.

Sr. Ministro:

VISTOS; Y
RESULTANDO:

Cotejó:

PRIMERO.- Por escrito presentado el tres de febrero de dos
mil tres ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Monterrey, Nuevo León, Víctor M. Mendecuti Gómez,
en su carácter de Encargado de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal y representante de
este último, promovió juicio de nulidad ante la Sala Ordinaria en
turno en contra de: 1) la resolución de fecha cinco de diciembre
de dos mil dos contenida en el oficio 179-R-10-1/2003, por medio
del cual el Director General de Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, niega la exención de pago por concepto del servicio
público de agua potable y drenaje solicitada al Gobernador del
Estado, 2) el cobro contenido en las facturas T00114085 y
T00121863, 3) la negativa de corte o suspensión del servicio de
agua potable y drenaje contenida en las mencionadas facturas, y
4) la omisión de resolver la solicitud de exención en la cual

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS

incurrió el Gobernador del Estado de Nuevo León, que se registró con el número de expediente 051/03.

SEGUNDO.- En diverso escrito presentado el treinta de mayo de dos mil tres ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Monterrey, Nuevo León, Alejandro Romero Gudiño, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, y representante de este último, promovió juicio de nulidad ante la Sala Ordinaria en turno en contra de: 1) la resolución negativa ficta respecto de la solicitud de exención de pago por concepto de derechos de agua potable y alcantarillado contenida en el oficio DGAJ/273/2003 de fecha veintinueve enero de dos mil tres, en que incurrió el Gobernador del Estado de Nuevo León, 2) el cobro contenido en las facturas T00131509 y T00134126, y 3) la amenaza de corte o suspensión del servicio de agua potable y drenaje contenido en las referidas facturas, asunto al que le recayó el número de expediente 251/03.

TERCERO.- Admitidas que fueron las demandas e instaurado el procedimiento contencioso administrativo local, por acuerdo de ocho de enero de dos mil cuatro, la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado ordenó la acumulación de los autos del expediente 251/03 al 051/03. Seguidos los trámites correspondientes, dictó sentencia el treinta de marzo de dos mil cuatro, que culminó con los siguientes puntos resolutivos:

IMPEDIMENTO 2/2005-SS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"PRIMERO.- Se sobresee el juicio 051/2003, en lo que respecta al C. Gobernador del Estado, en atención a los fundamentos y motivos expresados en el considerando cuarto de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio 251/2003, en lo que respecta al acto impugnado consistente en "la amenaza de corte o suspensión" (...).

TERCERO.- Resulta fundado parcialmente el juicio contencioso administrativo número 051/2003 (...).

CUARTO.- Se declara la nulidad de las facturas T00114085 y T00121863 (...).

QUINTO.- Se declara la validez de la resolución contenida en el oficio 179-R10-1/2003 (...).

SEXTO.- Resulta fundado parcialmente el juicio contencioso administrativo número 251/2003 (...).

SÉPTIMO.- Se declara la nulidad de las facturas T00131509 y T00134126 (...).

CUARTO.- Inconforme, la Directora de Registro Patrimonial, encargada del Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Consejo de la Judicatura Federal, interpuso recurso de revisión, y con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil

cuatro, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado dictó sentencia declarando improcedente el medio de defensa y confirmando la resolución impugnada.

QUINTO.- En contra de dicha resolución, la Directora General de Asuntos Jurídicos, del Consejo de la Judicatura Federal, promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el número de expediente 328/2004. Seguido el procedimiento que marca la ley, el cuerpo colegiado dictó sentencia el primero de abril de dos mil cinco, otorgando el amparo y protección de la Justicia de la Unión al Consejo de la Judicatura Federal.

SEXTO.- En cumplimiento al mandato federal, la sala superior responsable dictó nueva resolución con fecha dieciséis de mayo de dos mil cinco, declarando procedente el recurso de revisión hecho valer, revocando la sentencia de primer grado, declarando procedente los juicios contenciosos administrativos 051/2003 y 251/2003, y finalmente, declarando la nulidad para efectos de los actos impugnados.

SÉPTIMO.- El tercero perjudicado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado, interpuso de revisión en contra de la sentencia de primero de abril de dos mil cinco, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el juicio de amparo directo 328/2004.

IMPEDIMENTO 2/2005-SS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OCTAVO.- Recibidos los autos en este Alto Tribunal, su Presidente en funciones, mediante auto de veintidós de junio del año en curso proveyó que el Tribunal Pleno no es legalmente competente para conocer del recurso de revisión y ordenó remitir a la Segunda Sala el toca de revisión 1070/2005.

ORTE DE
En ~~diversa~~ acuerdo de veintiocho de junio siguiente, el Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el asunto.

Mediante providencia de seis de julio anterior, el Presidente de la Sala indicada admitió el recurso de revisión interpuesto por el Gobernador del Estado de Nuevo León.

El agente del Ministerio Público de la Federación formuló impedimento número V/103/2005, en el sentido de que se confirme la sentencia recurrida.

Al encontrarse en estado de resolución, por acuerdo de nueve de agosto del presente año, el Presidente de la Sala ordenó se turnara el asunto a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para los efectos legales consiguientes.

NOVENO.- Mediante dictamen fechado el diecisiete de agosto anterior, la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, planteó su impedimento para conocer de los citados recursos de revisión, en los siguientes términos:

**"SOLICITUD DE IMPEDIMENTO PARA CONOCER
DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.**

**SEÑOR MINISTRO JUAN DÍAZ ROMERO
PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E**

Me permito hacer de su conocimiento que se recibió en la ponencia de la suscrita el proyecto de resolución correspondiente al amparo directo en revisión 1070/2005, en el cual interpusieron recursos de revisión, por una parte, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas, por otra, el Gobernador Constitucional del Estado de nuevo León, ambos en su carácter de terceros perjudicados en el juicio de amparo directo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura federal, del índice del Segundo tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en contra de la ejecutoria de primero de abril de dos mil cinco dictada por el referido Tribunal Colegiado de Circuito.

Estimo que me encuentro impedida para conocer de los citados recursos de revisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 66, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el citado numeral, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no son

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA
SECRETARÍA GENERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

recusables, pero sí deberán manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, entre otros supuestos, cuando hubiesen sido apoderados de alguna de las partes, de manera que, por mayoría de razón, debe entenderse que se da tal impedimento cuando se ha sido parte en el mismo asunto o en el juicio de amparo.

En efecto, en el presente caso, la ejecutoria recurrida derivó el juicio de amparo promovido por el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Monterrey, dentro del expediente 251/2003 acumulado al 051/2003, siendo que, en el primer expediente, el Consejo de la Judicatura fue parte actora en el juicio de nulidad correspondiente, de manera que al haber sido parte integrante del Pleno del citado Consejo, considero que se actualiza la causa de improcedencia de impedimento antes precisada.

Si bien es verdad que la fracción III, del artículo 66, de la ley de Amparo, se refiere al impedimento de los apoderados de alguna de las partes, en el asunto o en el juicio de amparo, por mayoría de razón ha de entenderse que se encuentra impedido para conocer de los juicios en que

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

intervenga quien fue parte actora en el juicio natural y actuó como poderdante del apoderado de una de las partes.

Por tanto, si al treinta de mayo de dos mil tres, fecha en que fue recibida la demanda de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, fui parte integrante del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el cual promovió el juicio de nulidad tramitado en el expediente 251/2003, e incluso, de los autos del citado expediente se advierte que en sesión ordinaria de treinta de abril anterior del Pleno del referido Consejo del que formé parte, fue designada la persona que ocuparía el puesto de Director General de Asuntos Jurídicos a partir del primero de mayo de dos mil tres, autorizado en los términos del artículo 5º, fracción IX, del Acuerdo General 5/2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil dos para que interviniera en nombre y representación del propio Consejo, persona signataria del escrito de la demanda en el referido juicio de nulidad, constituyen motivos por los que me permito solicitarle de la manera más atenta se sirva someter

la consideración de los demás Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presente



IMPEDIMENTO 2/2005-SS

**impedimento para conocer de los recursos de**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

revisión."

DÉCIMO.- En relación con el dictamen citado en el punto que antecede, el Presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de dos de septiembre de dos mil cinco, ordenó formar y registrar el impedimento correspondiente y que se turnara al Ministro Genaro David Góngora Pimentel para formular el proyecto de resolución respectivo.

DE LA FEDERACIÓN

JUSTICIA DE LA NACIÓN

SEGUNDA SALA

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66, fracción IV, 67, primer párrafo, y 68, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se trata de un impedimento planteado por una Ministra adscrita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de unos recursos de revisión en amparo directo.

SEGUNDO.- Debe calificarse de legal el impedimento que, con fundamento en el artículo 66, fracción III, de la Ley de Amparo, plantea la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

El artículo invocado establece:

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA
ACUSADO

“Artículo 66. No son recusables los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los jueces de Distrito, ni las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37; pero deberán manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes:

(...) III.- Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, en el mismo asunto o en el juicio de amparo;..”.

En efecto, del dictamen suscrito por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, se advierte que como ella misma lo hizo saber, al presentarse la demanda que dio origen al juicio de nulidad tramitado con el expediente 251/2003, estos, el treinta de mayo de dos mil tres, formaba parte del Consejo de la Judicatura Federal, lo que también se desprende de la sesión ordinaria de treinta de abril del citado año, en la que se designó al funcionario que ocuparía el puesto de Director General de Asuntos Jurídicos a partir del primero de mayo de dos mil tres, que fue la persona que suscribió el escrito de demanda en el referido juicio de nulidad.

En este orden de ideas, siendo que el Consejo de la Judicatura Federal fue parte actora en el mencionado juicio de nulidad, que se acumuló al expediente 051/2003, es claro que se surte en la especie, por mayoría de razón, la hipótesis prevista en

la fracción III del artículo 66 antes reproducido, sin que obste para ello que el supuesto legal aluda a los "apoderados de algunas de las partes", pues como antes se explicó, el Consejo de la Judicatura Federal fue parte actora en el juicio de nulidad de que se trata, en el que, además, designó al funcionario que suscribió la demanda respectiva, conducta que analógicamente considerada, es semejante a la actuación del poderdante del apoderado de alguna de las partes.

Luego, habida cuenta que la citada Ministra, en la época en que sucedieron los hechos aludidos, integró el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su calidad de Consejera, que aprobó la designación del entonces Director General de Asuntos Jurídicos, funcionario que suscribió la demanda del juicio de nulidad indicado, resulta que debe calificarse de legal el impedimento que se propone, con fundamento en la fracción III del artículo 66 de la Ley de Amparo y devolver los autos a la Presidencia de esta Segunda Sala para los efectos del retorno correspondiente.

Al caso son de citarse las tesis de la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, que son del tenor siguiente:

"IMPEDIMENTO. LAS CAUSAS DE IMPEDIMENTO SEÑALADAS POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE AMPARO QUE TIENEN CARACTERISTICAS OBJETIVAS Y LIMITADAS, SON DE APLICACION Estricta; Y SOLO PUEDEN SER APLICADAS ANALOGICAMENTE LAS QUE ATIENDEN A

CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS. De las causas de impedimento previstas por el artículo 66 de la Ley de Amparo para que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito conozcan de los juicios de amparo correspondientes, algunas tienen características objetivas y limitadas, por lo que son de aplicación estricta; por el contrario, las causas de impedimento que se basan en criterios subjetivos, son susceptibles de aplicación analógica.”

(Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, Tesis: 3a. LXI/91, Página: 21)

“IMPEDIMENTO, LA CAUSA QUE SE INVOQUE DEBE TENER RELACIÓN DIRECTA CON LA PERSONA DEL JUZGADOR. Si por impedimento se entiende la circunstancia que obsta al conocimiento de un asunto porque puede afectar la imparcialidad de un Ministro, Magistrado o Juez, dicha circunstancia debe examinarse precisamente respecto de la persona física del juzgador y no en relación con otro funcionario judicial o con el órgano jurisdiccional, por lo que es necesario el señalamiento y la demostración de que la causa aducida por el promovente afecta la imparcialidad del juzgador para conocer del asunto.”

(Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Volumen 205-216, página 190)

IMPEDIMENTO 2/2005-SS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En consecuencia, se resuelve:

ÚNICO.- Se califica de legal el impedimento planteado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para conocer del amparo directo en revisión 1070/2005.

Notifíquese; agréguese testimonio de esta resolución al toca respectivo y remítase el expediente al Presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte, para que determine el retorno procedente.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Señores Ministros Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el primero de los señores Ministros antes mencionados.

P R E S I D E N T E .

MINISTRO JUAN DÍAZ ROMERO.

P O N E N T E .

MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.



SECRETARÍA
JURÍDICA
SECRETARÍA

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.

SECRETARIA GENERAL

Esta hoja forma parte del impedimento 2/2005-SS. Promovente: Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Fallado el trece de septiembre de dos mil cinco por unanimidad de cuatro votos en el sentido siguiente: ÚNICO.- Se califica de legal el impedimento planteado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para conocer del amparo directo en revisión 1070/2005.- Conste."

RJGM/gss/arca

El Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace constar que, en cumplimiento al artículo 191 de la Ley de Amparo, al terminar las labores de este día se fijó, en el lugar destinado para las notificaciones, una lista de los asuntos tratados en la audiencia de esta Sala celebrada el día de hoy, en la que se incluye este expediente (o 1070/2005-SS).

México, D.F., Trece de Septiembre de Dos Mil Cinco
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA

En 26 SET. 2005 y Por medio de lista se notificó la resolución anterior a las partes. Conste.

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A LAS NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.

SUP

JU

SI

SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ---

----- RTE DE -----
----- NACIÓN -----
----- CERTIFICA -----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE DE
SIETE FOJAS ÚTILES CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE
CON SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA Y QUE OBRA
EN EL EXPEDIENTE DEL IMPEDIMENTO NÚMERO 2/2005-
SS, PLANTEADO POR LA SEÑORA MINISTRA MARGARITA
BEATRIZ LUNA RAMOS Y SE EXPIDE PARA SER
AGREGADA AL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
1070/2005, VA DEBIDAMENTE SELLADA, COTEJADA Y
RUBRICADA.-DOY FE.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL CINCO.

SECRETARÍA DE
ACUERDOS

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.



W/B/cgb

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS



SUPREMA C
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

SIA 11110

SECRET



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SEGUNDA SALA
AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN FORMA A-54
1070/2005.

243

En veintiocho de septiembre del año dos mil cinco, el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala da cuenta a su Presidente con el estado que guarda el presente asunto. Conste



México, Distrito Federal, a veintiocho de septiembre del año dos mil cinco.

Visto el estado que guarda el presente asunto y

DRTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDOS

toda vez que el trece del presente mes y año, se resolvió

el impedimento 2/2005-SS, relativo a este asunto, en el

que en su resolutivo único dice: "...Se califica de legal el

impedimento planteado por la señora Ministra Margarita

Beatriz Luna Ramos, para conocer del amparo directo en

revisión 1070/2005.", en consecuencia, con fundamento en el

artículo 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación, retúrnese el presente asunto al

señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para los

efectos legales consiguientes. Háganse los ajustes

correspondientes en la estadística de esta Sala. Notifíquese

y cúmplase.

Lo acordó y firma el señor Ministro Juan Díaz Romero,

Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que

autoriza y da fe.

RGH/met.

EN 30 SET. 2005 SE FUE LISTA PARA NOTIFICAR
A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR. CONSTE *g*

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA
Y EN VIRTUD DE NO HABER HABIDO DESINTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR ASCHA ESEA NOTIFICACION
POR MEDIO DE LISTA. DOY FE. *g*



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL DE

25497

RECLAMACIÓN 18/2005

OF. 12224

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PINO SUAREZ, NÚMERO 2, COL. CENTRO, PRIMER PISO,
PUERTA 2009, MEXICO, D.F. C.P. 06065



1
SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
DIAGONAL SANTA INGRACIA 221
FRACC. LOMAS DE SAN FRANCISCO
MONTERREY, N. L., C. P. 64710

25497

FRANQUICIA POSTAL No. FP-SCJN-NL-20-2005
CONCEDIDA AL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION PARA EL ENVIO DE CARTAS
DE CARACTER OFICIAL

112323



SUPREMA CO
JUSTICIA DE
SEGUNDA
SECRETARIA I



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SEGUNDO TRIBUNAL Colegiado en materia
ADMINISTRATIVA DEL CUERPO CIRCULAR
DIAGONAL SANTA ENGRACIA
PRACC. LOMAS DE SAN FRANCISCO
MONTERREY, N.L., C.P. 647



CORTE DE
REVISION
DE AMPLIACION



SERVICIO POSTAL MEXICANO
OFICINA DE SERVICIOS DIRECTOS
SET 24 2005
J-17
MEXICANA CORTE DE JUSTICIA
MEXICO, D.F.

SERVICIO POSTAL MEXICANO
OFICINA DE SERVICIOS DIRECTOS
SET 12 2005
J-17
MEXICANA CORTE DE JUSTICIA
MEXICO, D.F.



CORTE DE
REVISION
DE AMPLIACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO DIRECTO 328/2004

EXPEDIENTE 251/2003 ACUMULADO AL 51/2003.

14738.- SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EN EL ESTADO.

14739.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

14740.- SUBPROCURADOR JURÍDICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

14741.- DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DENOMINADA AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY.

14742.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

~~SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.~~

EN EL AMPARO DIRECTO ANOTADO AL RUBRO, SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

Monterrey, Nuevo León, a diecinueve de octubre de dos mil cinco.

Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el testimonio de la ejecutoria dictada por este tribunal en fecha veinticuatro de agosto del presente año, de la que se advierte que en la fecha indicada, este órgano jurisdiccional resolvió el recurso de reclamación 18/2005-III, interpuesto por el gobernador del Estado de Nuevo León, en contra del acuerdo de presidencia emitido el veintitrés de junio del año en curso, a través del cual se negó regularizar el procedimiento para dejar insubsistentes los actos encaminados a la ejecución de la sentencia de amparo.

Se desprende de dicha resolución, que se declaró fundado el recurso de reclamación, se ordenó dejar insubsistente el acuerdo impugnado en la parte materia del recurso, el requerimiento hecho a la autoridad responsable para que procediera al cumplimiento del fallo protector y todo lo actuado en acato a tal requerimiento, con base en la consideración de que la sentencia que otorgó la protección federal no había causado ejecutoria.

También se advierte del fallo emitido en el recurso de reclamación, que en su segundo punto resolutivo se ordenó remitir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de la ejecutoria mencionada y disquete que la contuviera, para los efectos a que hubiese lugar dentro del amparo directo en revisión número 1070/2005, radicado ante dicha sala; ello en virtud de que, al encontrarse subjudice la concesión del amparo otorgado por este órgano jurisdiccional, en atención a ese recurso de revisión, existe la factibilidad de que la determinación tomada, en el sentido de dejar insubsistentes los actos encaminados a la ejecución de la sentencia de amparo, trascienda en la resolución que se adopte en ese medio de impugnación, en la medida que ha sido criterio de la superioridad, que el recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo directo, es improcedente si el tribunal colegiado ha dictado acuerdo declarando que el fallo protector ha causado ejecutoria.

No obstante, del estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se obtiene que la instrucción de este tribunal en pleno, no fue atendida en su integridad, pues no existe acuerdo de presidencia en el que acatando la ejecutoria dictada en el recurso de reclamación, se haya dejado insubsistente la parte relativa del auto de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, en el que se negó regularizar el procedimiento. Tampoco se emitió, en observancia a lo

ordenado en la sentencia que recayó al recurso de reclamación que se menciona, el proveído en el que la presidencia ordenara la regularización indicada y dejara insubsistente el requerimiento y todo lo actuado por la autoridad para cumplir el fallo protector.

En efecto, del análisis de las constancias que integran el presente sumario, de pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se aprecia que, después del acuerdo impugnado en el recurso de reclamación, de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco (fojas 343 y 344), obran las siguientes actuaciones:

a).- Constancias de notificación de ese auto a las partes (fojas de la 345 a la 351);

b).- Copia del escrito en el que el gobernador del Estado de Nuevo León, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo (fojas de la 352 a la 476);

c).- Oficio en el que el magistrado de la Sala Superior presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, devolvió los autos del juicio natural a este órgano, para ser remitidos a la superioridad en atención al recurso de revisión (foja 477);

d).- Acuerdo dictado el veintiseis de junio del presente año, en el que se tuvo por interpuesto el recurso y se ordenó remitir los autos, así como el escrito correspondiente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (fojas 478 y 479);

e).- Constancias de notificación de dicho acuerdo (fojas de la 480 a la 486);

f).- Solicitud de copias certificadas de todo lo actuado, por parte de la autorizada de la quejosa, y acuerdo que recayó a esa petición (fojas 487 y 488);

g).- Oficios remitidos a este tribunal por el secretario de acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó la admisión de los recursos de revisión interpuestos por el gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo; así como los sobres en que se remitieron tales oficios (fojas de la 489 a la 492);

h).- Acuerdo en el que se tuvieron por recibidos los oficios indicados en el inciso anterior (foja 493).

SECRETARÍA GENERAL

Como se ve, no se dictó ningún acuerdo de presidencia tendente a cumplir con la ejecutoria dictada dentro del recurso de reclamación número 18/2005-III, lo que constituye una irregularidad dentro del procedimiento de amparo, dado que si la instrucción del pleno emitida en los autos del expediente de reclamación, en el sentido de dejar insubsistente la parte respectiva del acuerdo impugnado y regularizar el procedimiento, dejando sin efectos el requerimiento y todo lo actuado por la autoridad para cumplir el fallo protector, no fue materializada en este sumario correspondiente al amparo directo; es incuestionable que la decisión adoptada por el tribunal en pleno, no ha surtido toda su eficacia en cuanto a seguir el curso regular del procedimiento de amparo.

Así es, en la parte final de la sentencia pronunciada en el recurso de reclamación, se resolvió:

"Así las cosas, al resultar fundados los agravios del recurrente, lo que procede en el caso es dejar insubsistente el acuerdo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

impugnado, exclusivamente en la parte materia del recurso, ordenando la regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para lo cual se deja sin efecto el requerimiento hecho a la autoridad responsable para que procediera al cumplimiento de la sentencia dictada en el amparo directo por este tribunal, así como lo actuado en acato a tal requerimiento."

Según se puede advertir, en esa determinación del tribunal colegiado, se ordenó dejar insubsistente el acuerdo impugnado, de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, en la porción que fue materia del recurso de reclamación; y también se ordenó la regularización del procedimiento dentro del juicio de amparo directo, en los términos ahí indicados, esto es, para que se dejara sin efectos el requerimiento hecho a la autoridad responsable a fin de que cumpliera la sentencia de amparo, así como todo lo actuado en cumplimiento a tal requerimiento de presidencia.

Por tanto, si en términos del artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es a la presidencia del tribunal colegiado a quien corresponde llevar el trámite de los asuntos, ésta debió dictar el acuerdo encaminado a materializar en el juicio de amparo directo, los efectos de la ejecutoria pronunciada por el tribunal pleno en el cuaderno relativo al recurso de reclamación, a efecto de que la sentencia produjera todas sus consecuencias, pues de lo contrario, la regularización del procedimiento pretendida se torna ilusoria.

Así las cosas, a fin de subsanar la omisión en que se incurrió y lograr la efectividad de la sentencia emitida en el recurso de reclamación, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, este tribunal colegiado, con plenitud de jurisdicción, deja sin efectos el acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, exclusivamente en la parte en que se negó regularizar el procedimiento para dejar insubsistente todo lo actuado por la autoridad responsable en cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo, y en su lugar se declara insubsistente el requerimiento formulado a la sala responsable, mediante oficio de fecha primero de abril de dos mil cinco, en el que además de remitírsele testimonio de la ejecutoria que otorgó el amparo a la quejosa, y los autos del juicio natural, se le requirió para que, dentro del término de veinticuatro horas, comunicara al tribunal colegiado la forma en que hubiera cumplido esa resolución; por consecuencia, también se anula todo lo actuado por la responsable en acato a ese requerimiento, como la resolución en que dejó insubsistente la sentencia reclamada, la nueva sentencia que emitió conforme a los lineamientos dados en la que concedió la protección federal, así como los actos que ha encaminado a lograr el cumplimiento de su resolución; todo ello en atención a que, como se resolvió en el recurso de reclamación, la sentencia que otorgó el amparo no ha adquirido firmeza.

Asimismo, agréguese a los autos de este juicio de amparo directo el testimonio con que se da cuenta, referente a la ejecutoria dictada dentro del recurso de reclamación señalado, para los efectos legales a que haya lugar, y hágase del conocimiento de las partes la resolución adoptada en el presente acuerdo plenario.

Por otra parte, tomando en consideración que la irregularidad aludida, también implica responsabilidad de la licenciada Elsa Patricia Espinoza Salas, quien en la época en que se dictó la ejecutoria dentro del recurso de reclamación, desempeñaba el cargo de secretaria de acuerdos de este tribunal colegiado, y que en términos de los artículos 61 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de garantías, estaba obligada a asentar constancia de la mencionada sentencia en este cuaderno, y a dar cuenta con la misma al presidente para que dictara las medidas encaminadas a cumplir con dicha resolución del pleno, no obstante, omitió cumplir con esa obligación, sin embargo, no es necesario levantar un severo extrañamiento a la nombrada Espinoza Salas, toda vez que ya no se encuentra laborando en este Tribunal; finalmente, se ordena agregar copia certificada de este auto a su expediente personal, para los efectos legales conducentes.

Además, como dicha irregularidad también deriva de la falta de atención de la oficial judicial Bárbara Evangelina Hernández Contreras, quien ha tenido el expediente bajo su manejo y custodia, sin informar a la Secretaría de Acuerdos con el estado del mismo, con fundamento en el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase a la oficial judicial nombrada un severo extrañamiento, y prevengasele para que en lo sucesivo desempeñe las tareas que le son encomendadas con mayor diligencia, también recuérdesele que en términos de lo dispuesto por el artículo 44, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado A), del artículo 123 constitucional, es su obligación desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus superiores y a las leyes y reglamentos respectivos.

Notifiquese y cúmplase.

A S I, por unanimidad de votos, se acordaron magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, José Carlos Rodríguez Navarro, José Elías Gallegos Benítez y Martín Ubaldo Marrasal Rojas, secretario en funciones de magistrado, quienes firman, con el secretario de acuerdos que da fe.- FIRMAS.- LO QUE ME PERMITE COMUNICARLE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE SE CONTRA EL PROVEIDO INSERTO.

Monterrey, Nuevo León a 19 de octubre de 2005.

LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

LIC. GRISELDA TEJADA VIELMA.

PODER JUDICIAL FEDERAL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN

Recibido por ENCZ Egas

JOVT

Estafeta 0015107070-556500628841

037181

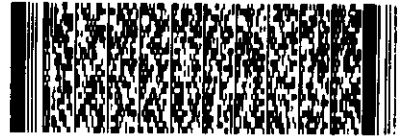
SECRETARIA COLEGIO
JEFES DE LA NACION

2005 NOV -7 P 2:33
2005 NOV 7 PM 12:34

116

estafeta

Hamburg 213 piso 14 Col. Juárez C.P. 06600 México, D.F.
Tel. 5-270-6300 R.F.C. EME860309K6 Tipo 0008



CONFIRMACION 00151QT070-556500628841



CONFIRMACION 00151QT070-556500628841

CONDICIONES DEL CONTRATO DEL ENVÍO ESPECIFICADAS EN LA FACTURA

CARTA PORTE

Remision 556005846

01 KG

R MGDO. JOSE CARLOS RODRIGUEZ NAVARRA
M PRESIDENTE INTERINO DEL SEGUNDO TRIBUNAL
T COLEGIADO EN MATERIA ADMVA.
E DEL CUARTO CIRCUITO.
DIAGONAL SANTA ENGRACIA 221
FRACC. LOMAS DE SAN FRANCISCO
MONTERREY, N. L. C.P. 64710

D SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
S LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
T NACIÓN.
PINO SUÁREZ NÚM. 2 PRIMER PISO
PTA 2007 COLONIA CENTRO, DELEG. CUAUHTÉMOC,
CUAUHTÉMOC, MEXICO, D.F.
C.P. 06065.

OF. 14743
TOCA 328/2004- EXP251
ACUMULADO AL 51/2004

SEAL DE LA SUPREMACIA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS

SECRETARÍA DE JUSTICIA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECCIÓN DE AMPAROS

SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
★ **E-7N**
OFICINA DE
RECEPCIÓN Y CORRESPONDENCIA



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

PM
0004





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 1070/2005
QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

RECURRENTES: SERVICIOS DE AGUA Y
DRENAJE DE MONTERREY, Y
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN (TERCEROS
PERJUDICADOS).

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTÍZ MAYAGOITIA
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el uno de noviembre de
dos mil cuatro, ante la Sala Superior del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, con
residencia en la ciudad de Monterrey, Rebeca López Hernández,
en su carácter de representante legal del Consejo de la Judicatura
Federal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal
en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se
especifican:

**"5.- Autoridad ordenadora: Sala Superior del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo
León.**

6.- Autoridades ejecutoras:

a).- **Secretaría de Finanzas del Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle de 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua, Zona Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.**

b).- **Tesorería General de Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle de 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua, Zona Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.**

c).- **Tesorería Municipal de Monterrey (Palacio Municipal), con domicilio en la calle de Coahuila y Zaragoza, Zona Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.**

d).- **Tesorería Municipal de San Pedro Garza García (Palacio Municipal), con domicilio en la calle de Juárez y Libertad s/n, Zona Centro, C.P. 66200, en San Pedro Garza García, Nuevo León."**

"7.- Actos reclamados:

a).- **De la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, se reclama la ilegal sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, en los autos del recurso de revisión interpuesto por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de su representante legal, parte actora dentro del Juicio Contencioso Administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003, en el cual se resolvió:**

"PRIMERO: No ha procedido el Recurso de Revisión recibido en fecha 22-veintidós de abril de 2004-dos mil cuatro, interpuesto por el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, a través de su Representante Legal, la C. REBECA LÓPEZ HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE REGISTRO PATRIMONIAL, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

**ASUNTOS JURÍDICOS DEL CITADO CONSEJO, parte
actora dentro del Juicio Contencioso Administrativo**

**Número 251/2003 acumulado al 051/2003, en contra de
la sentencia definitiva de fecha 30-treinta de marzo del
año en curso, dictada por la Magistrada de la Primera
Sala Ordinaria de este H. Tribunal, en la cual se declaró
el sobreseimiento del juicio respecto al Gobernador del
Estado y del acto impugnado consistente en la
amenaza de corte o suspensión del servicio de agua
potable que supuestamente se contenían en las
facturas T00131509 y T00134126, emitida por la
Institución Pública Descentralizada denominada Agua
y Drenaje de Monterrey; la nulidad de las facturas
T00114085, T00121863, T00131509 y T00134126, así
como de la amenaza de corte o suspensión del servicio
de agua potable y drenaje contenida en la factura
T00114085, emitidas por la ya citada Institución Pública
Descentralizada y la validez de la resolución contenida
en el oficio 179-R10-1/2003, emitida por el Director
General de la mencionada paraestatal, en fecha 05-
cinco de diciembre de 2002-dos mil dos y de la
negativa ficta configurada en torno a la solicitud de
fecha 29-veintinueve de enero de 2003 (dos mil tres),
que se elevara al Gobernador del Estado donde se
negara la exención del pago del servicio de agua
potable.**

**SEGUNDO: Se confirma la resolución señalada en el
punto resolutivo anterior, por los motivos y
fundamentos expuestos en el Considerando Tercero de
la presente resolución".**

**b).- De las autoridades ejecutoras se reclama el
cumplimiento que pretendan dar a la sentencia**

reclamada para realizar el indebido cobro del crédito fiscal por el servicio de agua potable y alcantarillado, así como la amenaza que conlleva su cobro para que se suspenda dicho servicio, derivado de las facturas T00131509, T00134126, T00121863, T00114085 y T00137699 que fueron ordenadas por la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., respecto del servicio que se proporciona en los inmuebles ubicados en calle Diagonal Santa Engracia número 221 de la Colonia Lomas de San Francisco del Municipio de San Pedro Garza García, y el de la avenida Constitución Poniente número 241, en la ciudad de Monterrey, ambos en el Estado de Nuevo León, en los cuales se encuentran funcionando órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.” (SIC)

SEGUNDO. La parte quejosa estimó violadas en su perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como terceros perjudicados al Gobernador del Estado de Nuevo León y a la Dirección General de la Institución Pública Descentralizada denominada “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”; expresó conceptos de violación, tendientes a controvertir por una parte, aspectos de legalidad de la sentencia emitida por la autoridad responsable ordenadora y, por la otra, la inconstitucionalidad del artículo 9° del Acuerdo Tarifa 2003, expedido por el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, por considerar que contravenía lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Política.



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

TERCERO. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil cuatro, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, órgano jurisdiccional al que por razón de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo directo, admitió la demanda de garantías, formando el expediente número 328/2004. Previos los trámites legales correspondientes, en sesión celebrada el día primero de abril de dos mil cinco, el mencionado órgano colegiado por mayoría de votos de los magistrados integrantes, dictó sentencia cuyo punto resolutivo dice:

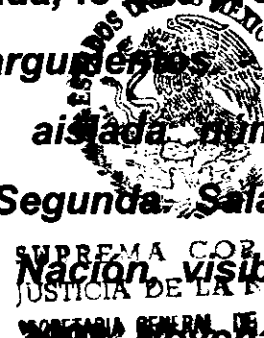
“ÚNICO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, en contra del acto y por la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y para los efectos indicados en el último considerando de la misma.”

Las consideraciones que sustentan el fallo recurrido, son del tenor siguiente:

“SEXTO.- Los conceptos de violación tercero y octavo, que se encuentran estrechamente relacionados entre sí, resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional que se demanda, tal como se desprende de las posteriores consideraciones. - - - Cabe hacer la aclaración de que, aunque en la demanda de amparo se expresan otros conceptos de violación

vinculados con cuestiones de legalidad, algunos por vicios de forma y otros por vicios de fondo que se dicen cometidos al dictarse la sentencia que se reclama, lo cierto es que los aspectos de inconstitucionalidad de las normas en que se funda el acto reclamado, que se plantean en el amparo directo, merecen estudio preferente, ya que de resultar fundados tales argumentos producirían mayores beneficios para la parte quejosa, de ahí que se deben reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros (cuestiones de legalidad), en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- - - Por lo tanto, como en el caso específico se hacen valer cuestiones que aluden a la inconstitucionalidad de un ordenamiento general en el que se fundan tanto el acto impugnado en el procedimiento contencioso de origen, como la sentencia reclamada, lo que procede es analizar en primer término esos argumentos. - - - Sirve de apoyo al respecto, la tesis aislada número 2ª. CXIX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: - - - "AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

En amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." - - - **Pues bien, con el propósito de resolver lo que en derecho corresponde, se estima oportuno reseñar brevemente los antecedentes del caso, en lo que interesa para la solución del asunto. - - - Del estudio de las constancias que integran los expedientes de origen, de pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º; se advierte que la sentencia reclamada se emitió en relación con dos juicios contenciosos administrativos**

que fueron acumulados, que se integran elementalmente con las actuaciones que enseguida se relatan: - - - Expediente número 051/2003: - - - a).- Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil tres, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Ordinaria de ese órgano jurisdiccional, Víctor Manuel Mendicuti Gómez, en su carácter de encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, promovió la nulidad de la omisión atribuida al gobernador del Estado, de resolver sobre la solicitud de exención de pago del servicio de agua potable que le formuló el citado consejo; la nulidad de la resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil dos, en la que el director general de la Institución Pública Descentralizada que se denomina "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", negó la exención de pago por concepto del servicio público de agua potable y drenaje solicitada por el Consejo de la Judicatura Federal; así como la nulidad de los actos de cobro, amenaza de corte y suspensión de servicio, contenidos en las facturas números T00114085 y T00121863, con fechas de vencimiento veintinueve de noviembre de dos mil dos y veintinueve de enero de dos mil tres, respectivamente. - - - b).- Por acuerdo recaído el día seis de febrero de dos mil tres, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado y emplazar a las autoridades



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

demandadas, así como al subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, por tener la calidad de parte en ese juicio, conforme al artículo 33, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. También concedió a la actora la suspensión de los actos impugnados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, hasta en tanto se dictara la sentencia respectiva, esto es, para que no se efectuara el corte o suspensión del servicio de agua potable, y para que no se realizara el cobro del crédito fiscal derivado de las facturas impugnadas. - - - c).- Por escrito presentado ante la sala ordinaria, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil tres, el director general del organismo denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, dio contestación a la demanda; el gobernador del Estado hizo lo propio, mediante promoción presentada el veinticinco de marzo del mismo año; y el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, contestó el escrito de demanda en la misma fecha que el gobernador de esa Entidad Federativa. - - - Expediente número 251/2003: - - - a).- Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil tres, Alejandro Romero Gudiño, en su calidad de director general de Asuntos Jurídicos y representante legal del Consejo de la Judicatura Federal, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución negativa ficta atribuida al gobernador del Estado de Nuevo León, respecto de la solicitud de

exención que dicho consejo le planteó, en relación con los derechos de agua potable y alcantarillado, presentada el día veintinueve de enero de ese año; así como la nulidad de los actos de cobro, amenaza de corte y suspensión del servicio, realizados por la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, derivados de las facturas números T00131509 y T00134126, con fechas de vencimiento de veintiocho de abril y veintinueve de mayo del mismo año. - - - b).- La demanda de nulidad se admitió en los términos planteados el dieciséis de junio de dos mil tres, por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien ordenó emplazar a las autoridades demandadas y otorgó la suspensión de los actos impugnados, para el efecto de que no se efectuara el corte o suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado, y para que no se realizara el cobro del crédito fiscal derivado de las facturas impugnadas. - - - c).- El treinta de julio de dos mil tres, dio contestación a la demanda el apoderado general para pleitos y cobranzas y representante legal del organismo denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; lo propio hizo el gobernador del Estado, por conducto del secretario General de Gobierno, mediante promoción presentada el ocho de agosto de dos mil tres. - - - d).- El día diez de septiembre de dos mil tres, la parte actora amplió su demanda de nulidad, misma que fue admitida el once del mismo mes y año. - - - e).- El apoderado general para pleitos y cobranzas de

SUPREMA CC
SECRETARÍA GENERAL



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, acudió a contestar la ampliación de demanda el día uno de octubre de dos mil tres; mientras que el gobernador del

Estado y el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo hicieron el veinticinco de noviembre de esa anualidad. - - - Ambos expedientes:

- - - a).- Por acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil cuatro, antes de que en ambos juicios se llevara a cabo la audiencia de pruebas y alegatos respectiva, a que se refiere el artículo 82 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, se ordenó la acumulación del diverso juicio contencioso número 251/2003, del índice de la misma sala ordinaria, al juicio contencioso número 051/2003, por ser éste el más antiguo. - - - b).- En fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro, la Primera Sala Ordinaria procedió a calificar las pruebas ofrecidas por las partes, y señaló hora y fecha para que se llevaran a cabo las audiencias de pruebas y alegatos en los juicios contenciosos acumulados. - - -

c).- Sin mayores actuaciones relevantes, para la reseña que se realiza, la parte actora presentó sus alegatos el día dieciocho de febrero de dos mil cuatro. - - - d).- El veinte de febrero del mismo año, a las diez horas, se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente al juicio contencioso número 051/2003; y en la misma fecha, pero a las once horas del día, se practicó la relativa al diverso juicio acumulado 251/2003. - - - e).- El treinta de marzo de la misma anualidad se dictó la sentencia de primera instancia por parte de la

Primera Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León. - - - d).- En contra de esa determinación, la parte actora interpuso recurso de revisión, mismo que admitido y tramitado, fue resuelto por magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León. - - - e) Dicha resolución constituye el acto que en esta vía se reclama, y se basó en las siguientes consideraciones elementales: - - - 1.- Sostuvo la sala, que por técnica procesal analizaría los agravios hechos valer en el recurso de revisión, en el siguiente orden: primero, cuarto, segundo, tercero y quinto. - - - 2.- Que el primero de los agravios planteados en el recurso de revisión era fundado pero inoperante, pues si bien del análisis integral efectuado al agravio segundo de la demanda de nulidad, se advertía que la actora no hizo referencia a la inconstitucionalidad del acto impugnado, sino que señaló que el artículo 9° del acuerdo expedido por el Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho no se encontraba en armonía con lo previsto en el artículo 115, fracción IV (inciso c), de la Constitución Federal, de lo que se infiere la existencia de una violación al principio de supremacía constitucional; sin embargo, la inconstitucionalidad reclamada por el consejo de la Judicatura Federal, no podía ser objeto de estudio por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues carece de



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

competencia para ello, en razón de que su propósito fundamental es salvaguardar y controlar la legalidad. - -

3).- Que el cuarto de los agravios planteados en el recurso de revisión por la ahora quejosa, era infundado, pues el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo número 051/2003, consistente en la resolución contenida en el oficio número 179-R-10-1/2002, de fecha 05-cinco de diciembre de dos mil dos, emitida por el director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, institución pública descentralizada, en la que se determinó negar la exención solicitada; resulta legal, si se toma en cuenta que las cuotas por el servicio de agua potable y alcantarillado no son contribuciones, pues una de las características principales de la contribución es la existencia de una relación tributaria, que consiste en un vínculo jurídico que se establece entre un sujeto llamado activo (Estado), y otro sujeto llamado pasivo (el contribuyente), cuya única fuente es la ley y nace en virtud de la ley, por cuya realización el contribuyente se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con ciertas obligaciones formales y entregar al Estado cierta cantidad de bienes, generalmente dinero que éste debe destinar a la satisfacción del gasto público, supuestos que en el caso no se reúnen; aunado a que la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, establece el pago de derechos por servicios prestados por diversas secretarías del Gobierno Local, por lo que para que a un particular se le exija el pago de una cantidad por

concepto de derechos, es preciso que haya recibido un servicio a través de una secretaría de Estado y no por conducto de un Organismo descentralizado (Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey); que la obligación del usuario para el pago del servicio de agua y drenaje no deriva de una ley tributaria, pues la misma proviene de un contrato administrativo de adhesión, que al efecto celebra la institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey con los usuarios, por lo que en este caso, no existe una relación tributaria entre el Estado y el contribuyente, la cual es característica propia de las contribuciones; que los ingresos que se obtienen por el pago del servicio de agua y drenaje, pasan a formar parte del patrimonio del organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues así se establece en el artículo 3° inciso c) de la ley que crea la institución pública descentralizada, por lo que los ingresos que se obtienen por los servicios de agua y drenaje no van encaminados a satisfacer el presupuesto de egresos de la Administración Pública Estatal, sino que éstos son destinados para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema; que, de conformidad al artículo 63 fracciones IX y X de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es facultad exclusiva del Congreso del Estado, establecer contribuciones y demás ingresos que deberán formar la Hacienda Pública Estatal y Municipal, y en el presente



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

Caso, las cuotas y tarifas que apliquen los distintos organismos operadores de los servicios públicos de agua potable, no son establecidas por dicho Congreso, pues de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado, estas son aprobadas por las siguientes instancias: a) En las zonas conurbadas cuyos servicios se presten por los organismos públicos descentralizados o concesionarios, su aprobación será por el Estado, a través del Ejecutivo a propuesta del Consejo de Administración, en los términos de lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera del Estado; b) En los Municipios cuyos servicios se presten por organismos públicos descentralizados Municipales, a propuesta de la Junta de Gobierno de éstos mismos, su aprobación corresponderá al Ayuntamiento; c) En el caso de los municipios, si el servicio es prestado por concesionarios, las cuotas o tarifas serán aprobadas por el Ayuntamiento; d) En el caso de los organismos intermunicipales, se estará a los convenios que celebren los municipios correspondientes; que la fijación de las tarifas y cuotas por la prestación del servicio, no depende de la voluntad o de la capacidad económica de los consumidores, sino de los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el Estado; que la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de

Monterrey, que presta el servicio no dispone de medios auxiliares y coactivos para el cobro de las tarifas, en forma directa. - - - Con base en todo ello, la autoridad responsable concluyó que, contrario a lo manifestado por la recurrente en su recurso de revisión, el pago por servicios de agua y drenaje no constituye una contribución, por lo que se demuestra que en el presente caso es inaplicable el artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución Federal, y de la tesis de jurisprudencia que invocó la recurrente en su escrito de recurso, cuyo rubro es: "BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DETENTAN ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO C)." - - - 4.-

Que el pago de servicios de agua y drenaje de conformidad al artículo 4° del Código Fiscal del Estado, es considerado como un aprovechamiento, pues así lo prevé dicho numeral, en su primer párrafo. - - - 5.- Que no existe norma constitucional ni ley secundaria que establezca que la exención prevista en el artículo 115, apartado IV inciso c), deba hacerse extensiva a los servicios prestados por las instituciones públicas descentralizadas del sector estatal; ni la parte actora establece cuál es el dispositivo legal que obligue al Estado, y/o a la mencionada institución pública descentralizada, a respetar las cargas motivadas al haberse arrogado la prestación de los servicios de agua potable que originariamente le correspondía a los municipios, por lo que, al no estar establecido en forma



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

expresa en un dispositivo legal la exención pretendida por la demandante, lo procedente era confirmar la determinación de la sala de origen en el sentido de que,

en el Estado de Nuevo León los bienes inmuebles del dominio público sí están obligados a pagar los servicios de agua potable y drenaje, cuando éstos sean prestados por organismos diversos a los municipios y que no pertenezcan a la administración pública municipal. - - -

6.- En cuanto a los agravios segundo y tercero, sostuvo que eran infundados, ya que al respecto se debía tomar en considerarse lo resuelto, en cuanto a que el pago por la prestación del servicio de agua y drenaje, no constituye un derecho, sino un aprovechamiento, de ahí que con base en esas ideas, no puede sostenerse válidamente que el gobernador del Estado sea la autoridad competente para resolver la solicitud de exención por concepto de pago de servicios de agua y alcantarillado planteada ante él, por la parte actora, puesto que si bien es verdad que, el artículo 41 fracción I del Código Fiscal para el Estado, faculta al Ejecutivo Estatal, para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazos y diferido o en parcialidades; no menos cierto resulta que, el pago por servicios de agua y drenaje no constituye una contribución, pues a éste no le es atribuido el carácter de derecho, como erróneamente lo manifestó la recurrente en su escrito de agravios. - - - 7.- Que, contrario a lo aducido por la accionante en el juicio, el director General de Servicios

de Agua y Drenaje de Monterrey, sí tiene competencia para dar contestación al escrito elevado al gobernador del Estado, la cual deriva de los artículos 15 y 41 de la Ley de Agua potable y saneamiento del Estado, así como de los diversos artículos 9 y 10 de la ley que crea la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues del contenido de dichos preceptos legales se puede advertir que la referida institución es la encargada de prestar, operar, dar el debido mantenimiento y administrar el servicio público de agua y drenaje. - - - 8.- Que por lo tanto, resultaba legal el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo número 051/2003, tocante al acto atribuido al gobernador del Estado, consistente en la omisión de contestar la solicitud de exención presentada por la parte actora, pues del contenido del diverso acto impugnado, consistente en la resolución de fecha cinco de diciembre del año dos mil dos, emitida por el director General de Agua y Drenaje de Monterrey, se advierte que dicha solicitud fue contestada, y por ende el gobernador del Estado, quien es el presidente del Consejo de Administración de la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, respetó el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal pues una autoridad subordinada suya, como lo es el director General de la referida institución, emitió la respuesta a la precitada solicitud de exención. - - - 9.- Que por otra parte, carecía de fundamento jurídico la aseveración



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

hecha por la recurrente en el sentido de que, el gobernador del Estado, debió comunicarle que no era competente, una vez que remitiera su escrito al director General de Agua y Drenaje de Monterrey, pues la demandante no establece qué dispositivo legal fue violentado por el gobernador del Estado, al remitir su solicitud al director General de Agua y Drenaje de Monterrey para que éste le diera respuesta, y aunque el gobernador del Estado no dio respuesta directamente, una autoridad de la misma dependencia, en este caso, de la institución pública descentralizada, Agua y Drenaje de Monterrey, de la cual aquél es el presidente de su Consejo de Administración, fue la que dio contestación a la solicitud de exención del pago de servicios de agua y alcantarillado. - - - 10.- En cuanto al quinto agravio, en

R. JUDICIAL
1ª CORTE
SECRETARÍA
SECCIÓN

el cual se adujo substancialmente, que la sentencia recurrida violaba el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haberse aplicado el artículo 115, fracción IV inciso c), constitucional, la responsable consideró que la sentencia recurrida no violenta el principio de supremacía constitucional, puesto que dicho dispositivo no establece que los jueces de cada Estado, (en el presente caso sería la magistrada de la Primera Sala Ordinaria de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Nuevo León) en sus resoluciones tengan el deber de aplicar la Constitución, las leyes federales que de ella emanen y los tratados suscritos por el presidente de la República y aprobados

por el Senado del Congreso de la Unión, en lugar de las leyes ordinarias; además de que el tribunal contencioso administrativo carece de competencia para dilucidar tal cuestión - - - En relación con tales estimaciones de la sala responsable, la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, en sus conceptos de violación tercero y octavo, que se vinculan entre sí, plantea en esencia, que la sentencia que se impugna transgrede en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la autoridad responsable no analizó debidamente el contenido del artículo 115 fracción IV, incisos a) y c), de la Carta Magna, disposición en la que fue sustentada la solicitud de exención del pago de derechos por la prestación del servicio de agua y alcantarillado, en relación con los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, que se destinan al servicio público de impartición de justicia, ya que de haber hecho una interpretación correcta de esa norma cimera, habría arribado a la conclusión de que dichos bienes corresponden al dominio público de la Federación y que, por ende, la aplicación del precepto constitucional indicado, debe prevalecer sobre una norma sustantiva de carácter estatal, en términos del numeral 133 de la propia Constitución Federal, porque este último ordenamiento es norma de normas, que por su naturaleza de suprema niega la posibilidad de estar sometida a otro cuerpo normativo inferior, y en cambio requiere que toda ley o acto de autoridad esté sometido



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CO
SECRETARÍA GENERAL



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

ella; de ahí que, si la responsable desestimó los argumentos que al respecto se hicieron valer ante su potestad, con base en normas locales, pasó por alto las cuestiones apuntadas, y no ponderó que la figura jurídica de la exención de pago de derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado, a favor de los inmuebles que albergan órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se encuentra prevista y regulada en la propia Carta Fundamental del País, como se señala en las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevan por rubro: "BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DETENTAN, ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO C)" y "DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL". - - - Añade la accionante de amparo, que por lo tanto, también reclama en esta vía de amparo la inconstitucionalidad del artículo 9º del Acuerdo Tarifa 2003, expedido por el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y que se publicó en el Periódico Oficial de esa Entidad el día veintiséis de febrero de dos mil tres, así como su fe de erratas publicada el día veintisiete del mismo mes, conforme al cual la Federación, y cualquier otra institución o entidad pública, están obligadas a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario, de acuerdo

con las tarifas y cuotas que les sean aplicables, en términos de los artículos 27, 29, 40, inciso a), y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León; debido a que tal acuerdo del ejecutivo local, contraviene lo que al respecto establecen los artículos 115 fracción IV, incisos a) y c) de la Constitución Federal, porque en el primer de esos ordinales de la Ley Suprema, se plasma la voluntad del legislador federal de considerar ~~exentos~~ ^{exentos} del pago señalado, a los bienes del dominio público de la Federación, con independencia de que sea el municipio en forma exclusiva, o en coordinación con otros niveles de gobierno, quien preste el servicio de agua potable y alcantarillado. - - - Como se puede advertir, el argumento que se propone en los apartados descritos, se encuentra estrechamente relacionado con la inconstitucionalidad de un acuerdo expedido por el gobernador del Estado de Nuevo León, que tanto la parte demandada en el juicio contencioso de origen, como la sala responsable, utilizaron como fundamento para determinar que en el caso particular los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal a que se refiere la litis, que se encuentran destinados a la impartición de justicia, no encajan en el supuesto de exención de pago de derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado. - - - Ahora bien, a fin de resolver lo que corresponde, sobre el alcance de la exención autorizada por el artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución General de la República, en relación con



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

Las contribuciones que por servicio de agua y drenaje se determinan a favor de las instituciones titulares de bienes inmuebles de dominio público, es menester tomar en cuenta lo que dicho precepto prevé sobre el particular, en los siguientes términos: - - - "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: - - - "...." - - - III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: - - - a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; - - - "...." - - - Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; - - - "...." - - - IV. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor,

y en todo caso: - - - a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. - - - Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. - - - b) Las participaciones federales, que se reparten por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. - - - c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. - - - Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. - - - **Esta norma de máxima jerarquía, encuentra su origen en el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del día tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, por cuya virtud se establecieron en la Constitución un conjunto de reglas básicas tendientes a fortalecer y**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

reservar al municipio libre y, específicamente, a la Hacienda Municipal, a modo de garantizarle un mínimo de ingresos por diversos conceptos, según se explica en la iniciativa presidencial de la cual derivó el decreto de reformas referido, cuando en la parte conducente dice: - - "Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los Municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica. Por ende, en este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en primer término, como concepto originario del artículo 115 la libre administración de su Hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones que los Municipios podrán celebrar convenios con los Estados para que éstos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración contributiva. Se atribuyen igualmente a los

Municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y fundamentalmente también los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Por último, en esta área hacendaria, se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas participaciones. Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consustanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios. Además, como consecuencia lógica del principio de la libre administración de la Hacienda Municipal, se propone que los presupuestos de egresos de los Municipios deban ser aprobados sólo por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos que se les hubiesen autorizado." - - - **La decisión de preservar la Hacienda Municipal frente a las**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

**Decisiones de política fiscal de las Legislaturas
Estatales, a fin de evitar que aquélla fuera gravemente**

afectada por cualquier género de exenciones en favor

de sujetos determinados, provocó que en la iniciativa

presidencial de que se trata y en los dictámenes

elaborados por las comisiones respectivas de los

órganos parlamentarios, se sentara con toda claridad

que el propósito del órgano reformador fue disponer,

como regla general, que no se autorizaban las

exenciones de pago de las contribuciones reservadas a

la Hacienda Municipal y que sólo por excepción

procedían aquellas referentes a los bienes de dominio

público de la Federación, los Estados y los propios

Municipios, como se corrobora con la lectura de los

dictámenes formulados sobre la iniciativa de reformas,

de los cuales se transcriben las partes de interés: - - -

"En forma particularmente acuciosa fueron estudiados por las comisiones dictaminadoras, los términos en que la iniciativa redactó la fracción IV del artículo 115, sobre la que fue notable el número de aportaciones y comentarios de los ciudadanos senadores. Por principio, en esta fracción se orienta lo que por origen ha correspondido siempre a los Municipios, o sea, su facultad de administrar libremente la Hacienda Municipal, la que en los términos del proyecto se enriquece notablemente al conformarla con contribuciones y participaciones que el propio texto enumera, mereciendo particular relevancia las participaciones por contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y su tasa adicional por todos los conceptos. Se establece así un sentido de territorialidad

en materia fiscal, que hace que los ingresos por impuestos prediales se reviertan en favor de la localidad en la que los predios y toda propiedad inmobiliaria adquieran valor económico por su uso y circulación, lo cual ya no estará sujeto, una vez establecida la vigencia de esta fracción, a reversión de ningún tipo. Como un principio de congruencia y también de justicia, formarán parte de la Hacienda Municipal los ingresos que provengan por la prestación de los servicios públicos a cargo de los Municipios. Cabe destacar que, según el texto de la ^{Suprema} ~~Justicia~~ ^{Secretaría General} ~~Justicia~~, de su exposición de motivos y de las explicaciones escuchadas durante la comparecencia del ciudadano secretario de Gobernación, los ingresos municipales no quedan limitados a lo que expresamente consigna la fracción IV, sino que las Legislaturas Locales podrán agregar otros renglones importantes como aprovechamientos, ~~productos~~, financiamientos, cooperaciones diversas, y otros rubros cuya terminología varía con la dinámica del propio desarrollo y no es por ello susceptible de quedar consignado en un precepto de rango constitucional. Quedó entendido asimismo que la distribución de las participaciones que la Federación entrega a los Municipios habrá de realizarse a través de las normas que expidan los Congresos Locales, los cuales adecuarán en forma equitativa lo que corresponda a cada uno de ellos, con lo que se eliminan arbitrariedades, caprichos y desórdenes. Novedad que fortalece al Municipio es la autorización para que con el gobierno de su Estado concerte convenios de coordinación y éste ejecute alguna de las funciones relacionadas con la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

administración impositiva, necesidad de organización

compartida que no deba gravitar sobre los recursos

municipales ni entenderse como forma obligatoriamente

perpetua, sino susceptible de eliminarse en la medida en

que la autosuficiencia municipal acceda al campo de su

capacidad administrativa. - - - La determinación de los

impuestos cuya recaudación beneficiará al Municipio así

como de ciertos derechos, no hace limitativos los renglones

de ingresos y sí permite, inicialmente, conocer con certeza

las fuentes primarias propias e intocables del haber

municipal, estableciendo la posibilidad de convenir con el

Estado que éste se haga cargo de algunas de las funciones

relacionadas con la recaudación de esas contribuciones.

Rasgo importante de su autonomía es que sus presupuestos

de egresos serán aprobados internamente por los

Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles." - - -

Siendo pues clara la intención del órgano reformador de

la Constitución de garantizar, por un lado, la

subsistencia de la Hacienda Municipal, delimitando con

toda claridad las fuentes de ingreso reservadas al

Municipio y, por otro, restringir las exenciones de pago

de los ingresos provenientes de dichas fuentes,

permitiendo sólo las relativas a los bienes de dominio

público, importa identificar con precisión tales fuentes

de ingreso reservadas al Municipio, que se enumeran en

los incisos a) al c), de la fracción IV, del numeral 115 en

análisis, y que son las siguientes: - - - a).-

contribuciones sobre propiedad inmobiliaria - - - b).-

participaciones federales - - - c).- **ingresos por la**

prestación de servicios públicos - - - De estas tres categorías, interesan para la resolución del presente asunto las descritas en los incisos a) y c), que son las vinculadas a las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria y a las contribuciones causadas con motivo de los servicios públicos prestados por la administración municipal. - - - Sobre esos ingresos de la Hacienda Municipal, la fracción IV, del artículo 115 constitucional, dispone expresamente: "Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. . . Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público." - - - De ello se infiere que el autor de la norma, al disponer que los bienes de dominio público de la Federación se encontrarán exentos del pago de las contribuciones previstas para los municipios, se refirió tanto a las derivadas de la propiedad inmobiliaria, como a las que surgen de ingresos captados por la hacienda municipal por la prestación de servicios públicos. - - - Luego, si a estas dos categorías de ingresos tributarios se refiere claramente el autor de la norma, cuando prescribe que sólo se autorizarán las exenciones por los bienes de dominio público, resulta por tanto claro para este

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CC
JUSTICIA DE LA PAZ
SECRETARÍA GENERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

tribunal colegiado, que el caso de las contribuciones (derechos) por el servicio de agua que presta el Municipio, se halla efectivamente incluido en el supuesto de exención de mérito, con independencia de que el servicio público de agua potable y alcantarillado lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, como en el caso lo es "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", pues la propia norma fundamental que contempla la exención, dispone en su fracción III, que una de las bases de la organización política y administrativa municipal, que tienden a asegurar su libertad hacendaria, consiste en que los municipios tengan a su cargo, entre otras funciones, la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y que únicamente cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; de ahí que tal disposición no implica que los ingresos que por tales rubros se obtienen, dejen de formar parte de los recursos municipales y pasen a pertenecer al Estado, sino que solamente se trató de apoyar a dichas haciendas para darles oportunidad de que adquirieran autosuficiencia en la administración de tales haberes, como se aprecia de la lectura de los dictámenes de las

comisiones legislativas a que se ha hecho alusión en párrafos precedentes, y que en la porción relativa indican: - - - ". . . Novedad que fortalece al Municipio es la autorización para que con el gobierno de su Estado concerte convenios de coordinación y éste ejecute alguna de las funciones relacionadas con la administración impositiva, necesidad de organización compartida que no deba gravitar sobre los recursos municipales ni entenderse como forma obligatoriamente perpetua, sino susceptible de eliminarse en la medida en que la autosuficiencia municipal acceda al campo de su capacidad administrativa. - La determinación de los impuestos cuya recaudación beneficiará al Municipio así como de ciertos derechos, no hace limitativos los renglones de ingresos y sí permite, inicialmente, conocer con certeza las fuentes primarias propias e intocables del haber municipal, estableciendo la posibilidad de convenir con el Estado que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones. . ." - - - Por lo tanto, no es óbice lo que argumenta la autoridad responsable en la sentencia reclamada, en el sentido de que el supuesto de exención establecido en el artículo 115, fracción IV inciso c), no se surte en el caso, porque no es el municipio quien presta el servicio público de agua potable y drenaje, sino que el mismo es prestado por un organismo público descentralizado del Estado, denominado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey"; pues tal como ya se ha señalado, las cuotas que pagan los particulares por la prestación del servicio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

FORMA A-53

público de agua y drenaje forman parte de los recursos municipales por propia disposición constitucional, y participan de las características de los derechos, con independencia de que el servicio lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, porque la coordinación celebrada con el Estado para que éste preste el servicio por medio de un organismo como el señalado, que fue creado exclusivamente para ese fin, no es perpetua sino temporal por mandato de la norma suprema, y no debe afectar la calidad de "recursos municipales" que corresponde a esas cuotas, sino que es factible revertirla cuando los municipios tengan la capacidad de hacerse cargo directamente de la prestación del servicio público. Dicho de otro modo, no se debe atender a una interpretación estrictamente literal (que se queda en la superficie) del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal para desentrañar de qué naturaleza son, y a quién corresponden en realidad, los recursos de que se habla, sino que es necesario efectuar una interpretación sistemática y hermenéutica de esa disposición para entender su verdadera naturaleza y justificación. - - - Reflejo de lo anterior, es el hecho de que en la Constitución Política del Estado de Nuevo León, también se dispuso la libertad hacendaria de los municipios de la Entidad, y que la prestación del servicio público de que se trata queda a cargo de los mismos, de manera exclusiva y temporal, con la posibilidad de revertir el acuerdo de coordinación con el

* 2
✓

* 2
✓

* 2
✓

Estado, cuando la necesidad que lo justifica desaparezca. Así se deduce de los artículos 119, 130 y 132 de ese ordenamiento local, que en lo relativo dicen:

- - - "ARTICULO 119.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la que se integrará por las contribuciones, aprovechamientos, productos, financiamientos y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor, así como con las aportaciones y aportaciones federales que les correspondan o reciban de acuerdo a la ley. - - - El Congreso del Estado no expedirá leyes que establezcan exenciones o ~~exenciones~~ favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y los de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. - - - (. . . .)" - - - "ARTICULO. 130.- Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal deberá expedir el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivos territorios, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. - - - El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: - - - (. . . .) - - - c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

refieren tanto las fracciones III y IV del artículo 115, como el

segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - -

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno
estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no
existir el convenio correspondiente la Legislatura estatal
concedere que el municipio de que se trate esté
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso,
será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo,
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus

integrantes; y - - - (. . . .)" - - - "ARTICULO. 132.- Los
municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes: - - - a) Agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales; - - - (. . . .) - - - i) Las demás que el Congreso del
Estado determine según las condiciones territoriales,
socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera de
los municipios, los que previo acuerdo entre sus
ayuntamientos y sujeción a la Ley, podrán coordinarse para
la más eficaz prestación de los servicios públicos que les
corresponde. Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo
sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado
para que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de
alguno de ellos, o bien se presten o ejerzan
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. - - -
Las funciones y servicios públicos enumerados, que sean
prestados por el Estado, por sí o de manera coordinada con
los municipios, podrán ser asumidos por el municipio que

corresponda. La autoridad municipal, previa autorización del ayuntamiento, deberá remitir al gobierno del Estado la solicitud respectiva a fin de que éste disponga lo necesario para que la transferencia se realice de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la solicitud. - (. . .)” - -

- No escapa al juicio de los que resultaba que los artículos 15 y 41 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, así como los artículos 2º y 3º de la Ley que ~~crea una~~ ^{JUSTICIA DE LA} ~~crea una~~ ^{crea una} Institución Pública Descentralizada con Personalidad Jurídica Propia y con Domicilio en la Ciudad de Monterrey, que se denomina “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”; prevén que en la zona conurbada del área metropolitana, que comprende los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y el parque Ciudad Industrial Mitras, en García, Nuevo León; los servicios de agua potable y saneamiento, se prestarán por el organismo público estatal descentralizado a que se hace alusión, quien se encargará de la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial que se aprovechan para el suministro del área metropolitana; que las cuotas y tarifas que se fijen por tales servicios se destinarán a cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

reserva para rehabilitación y mantenimiento del sistema;

y, que el patrimonio de tal organismo se integrará con

los bienes y derechos afectos al servicio público de que

se habla; sin embargo, no es dable sostener que tal

institución pública descentralizada es absolutamente

independiente del Estado y de los municipios que

contingnan el área metropolitana, dado que no se debe

perder de vista que es un organismo estatal y que, por

disposición de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, a la que se debe atender en todo

caso en atención al principio de supremacía, la

prestación del servicio corresponde originariamente a

los municipios, quienes se pueden coordinar con el

Estado para que éste se encargue de prestarlo por sí o

por conducto del organismo que se cree al efecto, como

también se preconiza en la propia Constitución Local y

en el artículo 15 de la Ley de Agua Potable y

Saneamiento para el Estado de Nuevo León; además de

que en términos del numeral 4º de la ley que creó tal

ente público, los consabidos bienes y derechos están

afectos exclusivamente a la consecución de su objeto,

que es la prestación de un servicio que originalmente

está a cargo de los municipios y, por ende, será nulo

cualquier acto o contrato que los distraiga de ese fin. - -

- La naturaleza originaria de un servicio público a cargo

de los municipios, que le corresponde al servicio de

agua potable y alcantarillado, no puede desconocerse si

se toma en cuenta que de acuerdo al artículo 16 de la

Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de

Nuevo León, su órgano de gobierno estará integrado por los presidentes de los municipios que integran la zona conurbada, entre otros miembros. - - - Consecuentemente, sería inexacto pensar que los bienes y derechos que conforman el patrimonio de la paraestatal, y que se le han otorgado con el exclusivo fin de que cumpla con la prestación del servicio público de la mejor manera, para descargar a los municipios que conforman el área metropolitana de esta área; se encuentran destinados a fines particulares de tal institución, o que las cuotas que se reciben a cambio puedan destinarse a otros propósitos que no sean los propios del servicio que, se insiste, originalmente está a cargo de los municipios y se prestan por un organismo creado por el Estado para la consecución de esos fines específicos. - - - Además, conforme al artículo 3º del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, las contribuciones locales se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, y por los segundos se entienden las contribuciones que establece la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, dentro de los cuales encaja el servicio de agua y alcantarillado; sin que se pueda considerar a dichas cuotas como un aprovechamiento, como incorrectamente lo pretende la responsable, dado que los aprovechamientos son otro tipo de ingresos que percibe el Estado, también por funciones de derecho



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

público, pero que no tienen el carácter de contribuciones, según lo señala el artículo 4º de la citado código, que expresamente dice: - - - "Artículo 4.- Son aprovechamientos los ingresos distintos de las contribuciones que percibe el Estado por funciones de derecho público, los ingresos derivados de financiamientos y los que obtengan los organismos descentralizados que no tengan la naturaleza de derechos." - - - Es decir, mientras que los derechos siempre son ingresos que consisten en sumas de dinero, que el Estado cobra a las personas que se benefician por la prestación de un servicio en funciones de derecho público, como lo es servicio de agua y alcantarillado, o bien por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, esto es, una remuneración legal, por un servicio, uso o aprovechamiento de bienes proporcionados por el Estado; los aprovechamientos son ingresos que derivan de otro tipo de funciones de derecho público, como las multas y los recargos, pero no constituyen una cantidad que se entrega a cambio de un beneficio prestado por el Estado. - - - La calidad de contribuciones que les corresponde a las cuotas indicadas, se corrobora con la circunstancia consistente en que el artículo 16 de la Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada que se denomina "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", clasifica como créditos fiscales los adeudos relacionados con las mismas, y permite que tal organismo las haga efectivas a través de la vía económica coactiva, con apoyo de la Tesorería General

del Estado; dicho precepto dispone: - - - “Artículo 16.- Los adeudos procedentes de la prestación de los servicios de agua y drenaje tendrán el carácter de créditos fiscales; para hacerlos efectivos la Tesorería General del Estado auxiliará a la Institución aplicando la facultad económico-coactiva. - - - (. . . .)” - - - Amén de lo expresado, existen diversas tesis del Máximo Tribunal de la República, en las que se ha dado el tratamiento de derechos a las cuotas que nacen del servicio de agua potable, como la que se identifica con el número 2ª. CLXV/2000, sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 423, tomo XII, diciembre de 2000, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce enseguida: - - - “AGUA POTABLE. EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO NÚMERO 8 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 20 DE DICIEMBRE DE 1996, QUE ESTABLECE DIVERSAS TARIFAS PARA CALCULAR EL MONTO DE LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AQUÉLLA, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Conforme a lo dispuesto en las cuatro fracciones que integran el referido precepto legal, para calcular el monto de los derechos por el servicio de suministro de agua potable son aplicables diversas tarifas con diferentes estructuras de rangos y tasas, dependiendo de que el vital líquido se obtenga de tomas para uso doméstico popular, doméstico residencial, comercial o industrial, o de inmuebles del sector público. Ante ello,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

atendiendo al criterio contenido en la tesis jurisprudencial *P/114/98*, visible en la página 5 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1998, cuyo rubro dispone: "DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD.", debe concluirse que las tarifas establecidas en el referido precepto, no son violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que, por una parte, respecto de los contribuyentes que reciben el servicio de una toma del mismo tipo, la aplicación de una cuota diferente atendiendo al volumen consumido de agua se justifica por la circunstancia de que mientras mayor sea el consumo del vital líquido, el costo por metro cúbico también se incrementará, pues ante la escasez de ese recurso, su mayor consumo provoca renovar los gastos para su captación y suministro, por lo que la actividad de la administración encaminada a la prestación de ese servicio no implica un esfuerzo uniforme; y, por otra parte, la aplicación de una tarifa diferente atendiendo al tipo de toma de agua se justifica por el hecho de que en razón del destino que se dé a ésta el costo de su suministro tampoco será el mismo, pues al existir entre los diversos grupos de usuarios

del servicio una propensión a utilizar en promedio diferentes volúmenes de agua, dependiendo del tipo de toma, serán mayores o menores los recursos que el Estado debe destinar para procurar la continuidad del servicio de que se trata.” - - - **La tesis número 2ª. CXXVIII/2000, de la citada sala, publicada en la página 349, tomo XII, octubre de 2000, Novena Epoca, del indicado semanario, que a continuación se transcribe: - - - “AGUAS NACIONALES. PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DERECHOS QUE GRAVAN SU APROVECHAMIENTO, DEBE DISTINGUIRSE RESPECTO DE LAS DIVERSAS CONTRIBUCIONES QUE RETRIBUYEN EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.** Para abordar el estudio de constitucionalidad de las disposiciones que regulan los derechos por aprovechamiento de aguas nacionales, es necesario distinguir entre éstos y los diversos que se causan en virtud de recibir el servicio público de suministro de agua potable, los que se diferencian, entre otros factores, por su hecho imponible o tasable, por los principios que rigen el análisis de su proporcionalidad y equidad, así como por el órgano legislativo que en ejercicio de su potestad tributaria los establece. En cuanto a las aguas nacionales a que se refiere el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución General de la República, el legislador ha determinado gravar su aprovechamiento mediante un derecho de los previstos en la ley federal relativa, cuyo hecho tasable se traduce en la explotación, uso o aprovechamiento del agua con motivo del acto permisionario del Estado, para obtener un beneficio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

individual y determinado; y atendiendo a la naturaleza de este hecho, en la tesis jurisprudencial P./J. 81/97, visible en la página 171 del Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las contribuciones de esta naturaleza cumplen con el principio tributario de proporcionalidad cuando el monto a pagar guarda una relación directa con el grado de aprovechamiento del bien, con el beneficio obtenido por el gobernado y con la zona de disponibilidad de la que se deduce el valor de dicho bien, tomando en cuenta su abundancia o escasez, el demérito que sufre con su uso y la importancia que el mismo representa para el desarrollo de la nación; además, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, punto 2o., de la propia Norma Fundamental, el establecimiento de contribuciones que graven el aprovechamiento de aguas nacionales corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión. Ahora bien, a diferencia de lo anterior, existen diversos derechos establecidos generalmente por las Legislaturas Locales, cuyo hecho tasable es el servicio municipal de suministro de agua potable, prestado en términos de lo previsto en el artículo 115, fracción III, constitucional, tributos que al tenor de la tesis jurisprudencial P./J. 4/98, consultable en la página 5 del Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cumplen con los referidos principios constitucionales cuando al establecerlos se atiende al objeto real del servicio prestado por la administración pública considerando su costo y otros

elementos que inciden en su continuidad, en razón de que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución. Por tanto, al analizar la constitucionalidad de las disposiciones que regulan los derechos por aprovechamiento de aguas nacionales, el juzgador de garantías debe tener en cuenta las distinciones antes citadas.” - - - tesis de jurisprudencia número P./J. 4/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 5, tomo VII, enero de 1998, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y texto siguiente: - - -

“DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD. La Suprema Corte ha sustentado en diversas tesis jurisprudenciales que las leyes que establecen contribuciones, en su especie derechos por servicios, fijando una tarifa o una cuota aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos ajenos al costo del servicio público prestado, violan los principios de proporcionalidad y equidad, ya que ello da lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso. Por otro lado, tratándose de los derechos por el servicio de agua potable, ha tomado en consideración, para juzgar sobre los citados principios



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

constitucionales, no la simple correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y otras razones de tipo extrafiscal. Del examen de ambos criterios, se concluye que este Alto Tribunal ha sentido criterios distintos para derechos por servicios de naturaleza diversa, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público, que trasciende tanto a su costo como a otros elementos que inciden en la continuidad y permanencia de su prestación. Ello porque tratándose de derechos causados por servicios el objeto real de la actividad pública se traduce, generalmente, en la realización de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del diverso de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable de los usuarios, repercuten en la prestación del servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas." - - - **Ahora bien, en el caso específico, la solicitud de exención presentada por el Consejo de la**

Judicatura Federal al gobernador del Estado de Nuevo León, se fundó, entre otras disposiciones, en el artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales vigente en los años dos mil dos y dos mil tres. Es el caso que dicho ordinal, así como los numerales 1º y 2º de ese mismo cuerpo de normas, que no habían sufrido reformas desde el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, señalaban: - - - "Artículo 1o.- El patrimonio nacional se compone de: - - - I. Bienes de dominio público de la Federación, y - - - II. Bienes de dominio privado de la Federación." - - - "Artículo 2o.- Son bienes de dominio público: - - - (. . . .) - - - V. Los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos, conforme a la ley; - - - (. . . .)" - - - "Artículo 34.- Están destinados a un servicio público, y por tanto, se hayan comprendidos en la fracción V del artículo 2o: - - - I. Los inmuebles utilizados por los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como por el Poder Ejecutivo y sus dependencias; - - - II. Los inmuebles destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial; - - - (. . . .)" - - - A la luz de los preceptos transcritos, se aprecia que se daba la característica de ser del dominio público, a los bienes señalados en el artículo 2º de la Ley General de Bienes Nacionales vigente en esas anualidades, como lo son, entre otros, aquellos afectos o destinados por la Federación a la realización de fines o servicios públicos, y dentro de estos últimos se encuentran los que se utilizan por el Poder Judicial de la Federación, o los que ese poder



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

destina a sus servicios. - - - Conviene hacer la aclaración, de que la ley de que se trata fue abrogada por el decreto que creó la nueva Ley General de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil cuatro, en el que también se consideran como bienes sujetos al régimen de dominio público de la Nación, a los inmuebles propiedad de las instituciones federales destinados a la prestación de un servicio público, como se desprende de los artículos 1º, fracciones I y II, 2º, fracción IV, 3º, fracción III, y 6º, fracción VI, de ese cuerpo normativo, que expresamente señalan: - - -

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer: - - - I.- Los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación; - - - II.- El régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los inmuebles de los organismos descentralizados de carácter federal; - - - (. . . .)” - - - “Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: - - - (. . . .) - - - IV.- Federación: el orden de gobierno que en los términos de esta Ley ejerce sus facultades en materia de bienes nacionales, a través de los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; - - - (. . . .)” - - -

“Artículo 3.- Son bienes nacionales: - - - (. . . .) - - - III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación; - - - (. . . .)” - - -

- “Artículo 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación: - - - (. . . .) - - - VI.- Los inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a éstos conforme a esta Ley; - - - (. . . .)” - - - Por otro lado,

es necesario precisar que la pertenencia de los bienes al dominio público de la Federación en el evento particular, debe acreditarse con la demostración de dos extremos: a) Que forman parte del patrimonio de la quejosa, y b) Que se destinan a la realización de un servicio público. - - - En el caso, en los antecedentes de las demandas de nulidad presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado así como en los relativos a la demanda de amparo, la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, adujo ser propietaria de los inmuebles ubicados en Calle Diagonal Santa Engracia, número 221, Fraccionamiento Lomas de San Francisco, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y del situado en Avenida Constitución poniente, número 241, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; y manifestó, que tales inmuebles se adquirieron para la prestación de un servicio público federal, ya que en los mismos se encuentran instalados diversos órganos jurisdiccionales que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, de ahí que se trate de bienes sujetos al dominio público. - - - Se sostuvo además, que respecto de dichos inmuebles se solicitó la exención de pago por el servicio de agua potable y drenaje, petición que fue planteada al gobernador del Estado de Nuevo León, por ser ésta la autoridad competente para ello en términos del artículo 41, fracción I, del Código Fiscal del Estado, solicitudes que fueron elevadas a esa autoridad en fechas once de noviembre de dos mil dos y veintinueve



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

de enero de dos mil tres, respectivamente; que, sin embargo, los días once de diciembre de dos mil dos, veintitrés de enero, treinta de abril y diecinueve de mayo de dos mil tres, la accionante tuvo conocimiento de los requerimientos de pago que le hizo la institución pública descentralizada que se denomina Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, organismo que pretende hacer efectivo el pago del servicio de que se trata, no obstante que, de conformidad con el artículo 115, fracción IV inciso b) de la Constitución Federal, los bienes del dominio público de la Federación se encuentran exentos del pago de ese tipo de contribuciones municipales. - - - La prómovente de la instancia constitucional demostró en autos que los inmuebles de que se trata, se encuentran ubicados en alguno de los supuestos que la Ley General de Bienes Nacionales antes citada, considera como bienes del dominio público de la Federación. - - - En efecto, entre las constancias exhibidas en el juicio contencioso administrativo de origen, se encuentran las siguientes pruebas: - - - a) Testimonio de la escritura pública número uno, libro uno, pasada ante la fe del notario público número ciento setenta y cuatro del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal, en la que consta el contrato de compraventa celebrado el trece de diciembre de dos mil uno, a través del cual el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, adquirió el inmueble ubicado en Diagonal Santa Engracia, número 221, Fraccionamiento Lomas de San

Francisco, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. - - - b) Testimonio del contrato de compraventa número CV/002/95, de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, representada por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, con la intervención del secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, adquirió el inmueble ubicado en Avenida Constitución poniente número 241, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. - - - Ahora bien, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se estima que las pruebas ya mencionadas, correlacionadas con la circunstancia de que es un hecho notorio para este tribunal colegiado, que dichos inmuebles se encuentran ocupados por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, demuestran que los citados bienes son del dominio público de la Federación, pues de ello se deduce que se encuentran destinados directamente a la prestación del servicio público federal de impartición de justicia, en términos de los artículos 17, 94, 103, 104, 106 y 107 constitucionales, 1º, 29, 37, 48, 50, 50 bis, 50 ter, 51, 52, 53, 54, 55 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. - - - En las relatadas condiciones, es incuestionable que se demostró que los

B'sau
dom paco



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

inmuebles descritos se encuentran destinados a los

finos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 34

de la Ley General de Bienes Nacionales, vigente en dos

mil dos y dos mil tres, es decir, a la prestación del

servicio público federal de impartición de justicia, por lo

cual encuadran en el supuesto de exención, previsto en

el artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional. - - -

Así, ^{ITE DE} el servicio público de agua potable y

alcantarillado es prestado por el Municipio en favor de

un organismo del Poder Judicial de la Federación, titular

de un inmueble sujeto al régimen de dominio público,

como en el caso resulta ser el Consejo de la Judicatura

Federal, debe entenderse que se actualiza la exención

prevista en la norma constitucional objeto de análisis,

considerando que fue el propio legislador quien, al

remitir la exención a los incisos a) y c) de la fracción

relativa, señaló con toda precisión que la exención no

sólo regiría para contribuciones sobre la propiedad

inmobiliaria, sino también para los servicios prestados

por el Municipio. Tal precisión carecería de todo

significado y no surtiría por tanto algún efecto, si se

estimara que la exención se refiere exclusivamente a los

gravámenes que se causan por la propiedad raíz, pues

tal criterio no sería aplicable, desde luego, a ninguna

contribución generada por la prestación de servicios

públicos, en la medida en que su hecho generador no se

localiza en el bien raíz sino en la actividad desplegada

por la administración. - - - Siendo clara la remisión de la

norma a las contribuciones derivadas de la prestación

A FEDERACIÓN
CIA DE
IL DE ACUERDOS
UPANOS

de servicios públicos, no es dable al intérprete acudir a algún criterio que prácticamente deje sin efectos dicha remisión, sobre todo si se considera que cuando el órgano creador vincula los conceptos de contribuciones derivados de los servicios públicos y bienes de dominio público, permite comprender que se refieren aquellos servicios que se prestan con motivo, precisamente, de la titularidad de un bien de dominio público, es decir, que se causan por la Federación, los Estados, o los Municipios, en tanto tales servicios ~~los reciben~~ por su calidad de titulares de dichos bienes. - - - No se trata, como podría estimarse, de una exención que beneficie a las personas públicas por su sola condición de tales, esto es, por el elemento subjetivo de la relación tributaria, sino que opera cuando esas personas públicas utilizan ciertos bienes que por su destino o naturaleza se hallan incorporados al régimen excepcional de dominio público, lo cual explica que para tales personas, en lo que se refiere a los tributos que causen en relación con esos bienes, sea por su propiedad, fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o cambio de valor, sea por los servicios públicos que reciban en relación con esos bienes, estén liberados del pago de los tributos destinados a las arcas municipales, por la trascendencia de la función que desempeñan mediante el empleo de esos bienes y su afectación a un fin determinado. - - - Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2ª./J. 22/97, de la Segunda



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en la página 247, tomo V, mayo de 1997,
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, que a la letra dice: - - - "DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. El penúltimo párrafo de la base IV del artículo 115 constitucional, al cual remite el texto vigente del artículo 122, base primera, fracción V, inciso b), del mismo Ordenamiento Fundamental, se debe interpretar en el sentido de que dentro de la exención autorizada para bienes del dominio público de la Federación y los Estados, quedan comprendidos los organismos descentralizados como titulares de los inmuebles descritos en el artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, por los servicios que preste el Municipio en materia de agua potable, toda vez que el autor del precepto constitucional, al autorizar la exención, claramente la hace extensiva no sólo a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, sino también a los ingresos que obtenga el Municipio por los servicios públicos a su cargo, lo cual significa que se refirió a las contribuciones causadas por aquellos servicios que se presten en relación con los bienes de dominio público en favor de la Federación, Estados u organismos descentralizados, en razón de la importancia que atribuyó a la función desarrollada a través de la afectación y destino de tales bienes sometidos al régimen de protección de que se trata." - - - Sin embargo, el artículo 9º


del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de febrero de dos mil tres, que sirvió de fundamento al director de la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para sustentar los actos impugnados, en los juicios contenciosos administrativos de origen, y a la sala responsable para apoyar la resolución que se reclama, desatendiendo esa norma suprema dispone: - -

- "Artículo 9º.- La Federación, el Estado, los Municipios, las empresas de participación estatal, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública o Privada, Universidades, Colegios, Escuelas y demás Centros de Enseñanza, oficiales o privados y cualquier otra Institución o Entidad Pública, están obligados a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario de acuerdo a las tarifas y cuotas que les sean aplicables de acuerdo a lo establecido en los artículos 27, 29, 40 inciso "a" y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León." - - - De ello se desprende que, conforme al citado acuerdo del gobierno del Estado, la Federación se encuentra obligada a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario, sin excepción alguna, según las cuotas y tarifas que le sean aplicables; disposición que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

contraviene abiertamente el mandato constitucional consagrado en el artículo 115, fracción IV inciso c), acorde al cual los bienes afectos al régimen de dominio público de la Federación, como los destinados por el Poder Judicial de la Federación al servicio público de impartición de justicia, se encuentran exentos del pago de esas contribuciones. - - - Así, debe estimarse que le corresponde la razón a la parte quejosa, cuando argumenta que el mencionado acuerdo del gobierno local resulta inconstitucional, porque al pretenderse que una dependencia federal que opera con bienes inmuebles del dominio público de la Federación, pague los derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado, no obstante que la Carta Magna dispone que estarán exentos de esa obligación, significa que la autoridad estatal fue más allá de sus atribuciones en quebranto del régimen fiscal federal especial de exención o, más propiamente, de no causación de contribuciones, que rige a los bienes del dominio público de la Federación. - - - Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación en estudio resultan fundados y suficientes, para acreditar infracción a los dispositivos constitucionales que invoca la quejosa, particularmente al artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución General de la República, que previene, en la parte que interesa en este asunto, que los bienes del dominio público de la Federación están exentos de las contribuciones que se refieran a los ingresos derivados de los servicios que

presten los municipios, como lo son los relacionados con el servicio de que agua y drenaje. - - - Por lo tanto, la autoridad responsable debió en todo caso atender el principio de supremacía constitucional que consagra el artículo 133 de la Carta Magna, acorde al cual, la Constitución Federal constituye la ley suprema de toda la Unión, por lo que las autoridades locales de orden jurisdiccional, se arreglarán a la misma  de las disposiciones en contrario que pueda haber en las normas locales, como en el caso lo es el acuerdo del Ejecutivo del Estado. - - - Como corolario, se impone conceder el amparo demandado, para que la sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, y en su lugar emita otra en la que declare fundados los agravios primero, tercero y cuarto, expresados por la quejosa en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, que se encuentran estrechamente vinculados entre sí y, con base en ello, decrete la nulidad de la resolución expresa que negó la exención solicitada por la demandante, para el efecto de que se emita una nueva resolución en la que se reconozca que sí procede dicha exención. - - - Al resultar fundados los conceptos de violación que han sido materia de estudio en este fallo, y suficientes para otorgar la protección federal demandada por aspectos de constitucionalidad, es innecesario ocuparse del estudio de los restantes, relacionados con cuestiones que son propiamente de legalidad, pues la quejosa no



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

podría obtener mayor beneficio que el alcanzado. - - -

Sobre el particular sirve de apoyo, el criterio que se comparte, derivado de la tesis de jurisprudencia número V.2º. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser consultada en la página 86, tomo VII, abril de 1991, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: - - -

"CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia." - - - Así como la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 72, volúmenes 175 al 180, Cuarta Parte, Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente:
- - - "CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." (SIC)

CUARTO. Inconformes con la resolución anterior, los terceros perjudicados Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, interpusieron recurso de revisión en su contra, mediante los

escritos presentados el catorce y veintisiete de junio de dos mil cinco, respectivamente; los cuales, mediante acuerdos emitidos por el Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento, de fechas quince y veintisiete de junio del referido año, se ordenó remitirlos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

QUINTO. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil cinco, recibió el recurso de revisión interpuesto por el tercero perjudicado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ordenando formar el toca respectivo, correspondiéndole el número 1070/2005; asimismo, ordenó se enviara a la Segunda Sala, por no ser competente el Pleno de este Alto Tribunal para conocer del citado recurso. Por proveído de veintiocho de junio del año en curso, el Ministro Presidente de la Segunda Sala, admitió el referido recurso; y, por diverso acuerdo de seis de julio siguiente, se admitió a trámite el diverso recurso de revisión interpuesto por el tercero perjudicado Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, ordenándose en ambos proveídos notificar al Procurador General de la República, para que si así lo considerara, emitiera pedimento por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quién sí lo formuló en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.

SEXTO. Por acuerdo presidencial de nueve de agosto de dos mil cinco, se ordenó turnar el presente asunto a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien planteó su impedimento para conocer de los citados recursos, por haber formado parte integrante del Pleno del Consejo de la Judicatura



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

Federal, institución que fue parte actora en el juicio de nulidad y que es parte quejosa en el juicio de amparo directo del cual deriva el presente recurso de revisión.

Mediante resolución de trece de septiembre de dos mil cinco, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el impedimento 2/2005-SS, el cual se calificó de legal; por tal motivo, mediante acuerdo de presidencia de veintiocho de septiembre del año en curso, se ordenó retornar el presente asunto al señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, 84, fracción II, de la Ley de Amparo, 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme a los puntos Primero, Segundo y Tercero, fracción II, en relación con el punto Cuarto, del Acuerdo Plenario número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en la cual se declararon fundados los conceptos de violación, en los que se planteó una interpretación

directa al artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo innecesaria la intervención el Tribunal Pleno, en virtud de que las características del asunto no revisten un interés excepcional.

SEGUNDO. El presente recurso de revisión ~~se interpuso~~ dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 23 de la Ley de Amparo, pues de las constancias que obran en autos se advierte que la sentencia recurrida se notificó a los terceros perjudicados Servicios de Agua y Drenaje del Ayuntamiento, y Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, el viernes diez de junio de dos mil cinco, por lo que la notificación surtió efectos el lunes trece siguiente, y el referido plazo transcurrió del catorce al veintisiete del mismo mes y año, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Amparo; por tanto, si los referidos recursos se presentaron el catorce y veintisiete de junio del año en curso, ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, es claro que fueron interpuestos oportunamente.

TERCERO. Las autoridades recurrentes están legitimadas para interponer recurso de revisión con el carácter de terceros perjudicados que les fue reconocido en el juicio de garantías, en términos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fueron parte contraria al quejoso en el juicio natural del que proviene la sentencia reclamada.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio sostenido por esta Segunda Sala en la tesis 2ª. CLXXXIX/2002, visible en la página 287, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO PERJUDICADO SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO SUBSISTA EL ESTUDIO DE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL QUE AFECTE SU ESFERA JURÍDICA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la tramitación del recurso de revisión contra sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver amparos directos, disponen que tal recurso será procedente siempre que exista un tema propiamente constitucional y, además, se colmen los requisitos de fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales que al efecto expida; sin que de su texto se desprenda restricción alguna para que legítimamente cualquiera de las partes del juicio de garantías, entre ellas, el tercero perjudicado, pueda hacerlo valer. En estas condiciones, y tomando en consideración lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXXIV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 42, en el

sentido de que el tercero perjudicado puede interponer recurso de revisión en amparo indirecto donde se cuestione la inconstitucionalidad de una ley, se concluye que como tal aspecto de legitimación no es un problema exclusivo del amparo indirecto, aquellas reglas deben hacerse extensivas al amparo directo y, por ende, el tercero perjudicado, en su calidad de parte en el juicio de garantías, se encuentra legitimado para recurrir la sentencia dictada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito que, con su intervención a su esfera jurídica, resuelva un tema constitucionalmente constitucional."

CUARTO. En el caso se satisfacen los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, al tenor de la siguiente jurisprudencia:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya



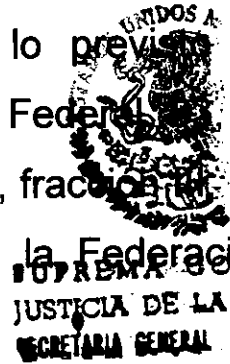
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

FORMA A/53

planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, tesis: 2a./J. 64/2001, página 315).

De la sentencia recurrida se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento analizó y estimó fundados los conceptos de violación tercero y octavo, en los que se planteó la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen:



“Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

(...)

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;

“Artículo 83.- Procede el recurso de revisión:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. - - La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

(...)

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;"

Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

(...)

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; y"

De los preceptos transcritos se desprende que procede el recurso de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, sólo cuando en dichas sentencias se haya decidido sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o bien, se haya establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, así como cuando el Tribunal colegiado haya omitido el estudio y decisión de esas cuestiones a pesar de haberse planteado en la demanda de amparo, debiendo limitarse la materia del recurso a las cuestiones propiamente constitucionales.

Lo anterior conduce a estimar procedente este recurso de revisión, en virtud de que el Tribunal Colegiado de Circuito analizó y estimó fundado el planteamiento de interpretación directa del



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA FEDERACIÓN

artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, y en el proceso de revisión subsiste el problema jurídico a resolver, dado que la sentencia recurrida es adversa a los intereses de la parte tercero perjudicada.

En cuanto a la interpretación directa del citado precepto constitucional, se advierte que la parte quejosa, en sus conceptos de violación planteó, en esencia, que la sentencia que se impugna transgrede en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la autoridad responsable no analizó debidamente el contenido del artículo 115 fracción IV, incisos a) y c), de la Carta Magna, disposición en la que fue sustentada la solicitud de exención del pago de derechos por la prestación del servicio de agua y alcantarillado, en relación con los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, que se destinan al servicio público de impartición de justicia, ya que de haber hecho una interpretación correcta de esa norma cimera, habría arribado a la conclusión de que dichos bienes corresponden al dominio público de la Federación y que, por ende, la aplicación del precepto constitucional indicado, debe prevalecer sobre una norma sustantiva de carácter estatal, en términos del numeral 133 de la propia Constitución Federal.

A ese respecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó una interpretación gramatical e histórica del artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, sustentada en la exposición de motivos del decreto de reformas a la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, así como en los dictámenes de las

comisiones legislativas del Congreso de la Unión, concluyendo lo siguiente:

“De ello se infiere que el autor de la norma, al disponer que los bienes de dominio público de la Federación se encontrarán exentos del pago de las contribuciones previstas para los municipios, se refirió tanto a las derivadas de la propiedad inmobiliaria, como a las que surgen de ingresos captados por la hacienda municipal por la prestación de servicios públicos. - - - Luego, si a estas dos categorías de ingresos tributarios se refiere claramente el autor de la norma, cuando prescribe que sólo se autorizarán las exenciones por los bienes de dominio público, resulta por tanto claro para este tribunal colegiado, que el caso de las contribuciones (derechos) por el servicio de agua que presta el Municipio, se halla efectivamente incluido en el supuesto de exención de mérito, con independencia de que el servicio público de agua potable y alcantarillado lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, como en el caso lo es “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”, pues la propia norma fundamental que contempla la exención, dispone en su fracción III, que una de las bases de la organización política y administrativa municipal, que tienden a asegurar su libertad hacendaria, consiste en que los municipios tengan a su cargo, entre otras funciones, la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y que únicamente cuando a juicio del ayuntamiento



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; de ahí que tal disposición no implica que los ingresos que por tales rubros se obtienen, dejan de formar parte de los recursos municipales y pasen a pertenecer al Estado, sino que solamente se trata de apoyar a dichas haciendas para darles oportunidad de que adquirieran autosuficiencia en la administración de tales haberes, como se aprecia de la lectura de los dictámenes de las comisiones legislativas a que se ha hecho alusión en párrafos precedentes. . . ”

La anterior interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, conduce a estimar procedente el recurso de revisión en amparo directo, pues sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Acuerdo General 5/1999 que “establece la bases para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo”. El texto del punto primero del acuerdo es el siguiente:

“PRIMERO. Procedencia

I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:

a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo;

b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. Se entenderá que es importante cuando de los conceptos de violación (ó del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

- a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;
- b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;
- c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

En el caso particular, se justifican los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, en virtud de que no existe jurisprudencia respecto del tema que planteó el quejoso y subsiste en la revisión de los terceros perjudicados, el problema de interpretación directa de la referida norma constitucional, de modo que es necesario el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar opera o no la exención a que se refiere el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, respecto de bienes del dominio público de la Federación, como los son en el presente caso, los inmuebles que pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, cuando es un organismo público descentralizado el que presta el servicio de agua y drenaje.

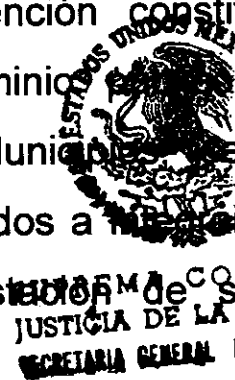
QUINTO. En esencia, el organismo público descentralizado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en sus agravios aduce:

a) Del análisis del artículo 115 de la Constitución Federal, se observa que los municipios tienen la facultad de administrar libremente su hacienda, que se conforma de los rendimientos que produzcan sus bienes y de las contribuciones y otros ingresos, entre estos, los derivados de los servicios públicos que los municipios tengan a su cargo.

b) De la interpretación literal, armónica y hermenéutica del artículo 115, fracción IV, constitucional, se desprende que la exención que se contempla respecto de los bienes de dominio

público, sólo es aplicable por cuanto hace a los ingresos contemplados por las legislaturas estatales para ingresar a la hacienda municipal, no así respecto de las contribuciones o ingresos estatales.

c) En este orden de ideas, la exención constitucional prevista respecto de los bienes de dominio de la Federación, de los Estados o de los Municipios, prevé solamente respecto de los ingresos destinados a atenderse a la hacienda municipal derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.



d) Con el objeto de que sean prestados los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenaje sanitario y pluvial, la legislatura estatal creó a la institución pública descentralizada denominada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente a la del Estado o de los municipios y su patrimonio comprende, entre otros bienes, las cuotas y tarifas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje, además de lo anterior, los bienes que integran su patrimonio están afectos a los fines de la misma; por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Federal esta obligado al pago de las cuotas y tarifas, ya que el servicio público no lo presta el Municipio, sino un organismo público descentralizado estatal, por lo que no se dan los supuestos expresamente señalados en el artículo 115 constitucional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, en sus agravios precisó que:

a) En la sentencia se afirmó erróneamente que el servicio de agua potable y alcantarillado lo prestaba el Municipio por medio de "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", en virtud de que el referido servicio lo presta dicha institución pública descentralizada; pero no presta el servicio el Municipio a través de ésta, ya que el patrimonio de la institución se integró con bienes y derechos adquiridos por el Estado, y no por el Municipio, por lo que el único titular de dicho patrimonio es en exclusiva la propia institución y no los que participan en su administración.

b) Es equivocado el criterio establecido por el Tribunal A quo, en el sentido de que las cuotas que pagan los particulares por el servicio de agua y drenaje, forman parte de los recursos municipales, por disposición del artículo 115 constitucional. Lo que verdaderamente dispone el referido dispositivo constitucional en su fracción IV, inciso c), es que la hacienda pública municipal se forma entre otros aspectos por los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, lo cual interpretado armónicamente con lo que establece la fracción III del propio numeral, se traduce en que la libertad hacendaria de los municipios es aplicada a los ingresos que reciban por los servicios que efectivamente presten, y no a que deba recibir (indiscriminadamente) los ingresos por la prestación del servicio de agua potable, aunque no sea el Municipio quien brinde tal servicio.

Así, el artículo constitucional objeto de interpretación refiere únicamente que los municipios percibirán los ingresos por los servicios que presten, ya que de la exposición de motivos se desprende que la misma tuvo como origen la necesidad de dar autonomía financiera a los municipios, y en razón de ello se enunció cuáles eran los ingresos con los que se formaría su hacienda.

Si bien es cierto, que el servicio de agua potable corresponde en teoría prestarlo a los municipios, no menos cierto es que dicho servicio puede ser prestado por el Estado cuando así se estime necesario a solicitud de los municipios, y en el caso de Nuevo León, los municipios no prestan el servicio de agua potable, pues éste se brinda en realidad por "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey".

c) Los ingresos por los servicios públicos que no son prestados directamente por el Municipio, no corresponden a éste, pues en todo caso corresponden al ente que en realidad preste el servicio y en el caso del Estado de Nuevo León, el servicio lo presta la institución "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" por ende, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado, no le corresponden a los municipios. Así, lo que verdaderamente dispone la Constitución es que los ingresos derivados del servicio de agua corresponderán al Municipio cuando éste lo preste efectivamente; por tanto, en el caso, los bienes del dominio público de la Federación no están exentos del pago por los servicios recibidos, cuando no sea el Municipio quien preste efectivamente el servicio público.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA FEDERACIÓN

En esencia, los mencionados recurrentes aducen que si el servicio de agua potable y alcantarillado es prestado por un organismo público descentralizado y no por el Municipio, no opera la exención a que hace referencia el artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO. Los agravios que se hacen valer son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida y, para corroborarlo, es necesario iniciar el estudio con el análisis del artículo 115, fracciones III y IV, de la Constitución Federal, que dicen:

“Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

(...)

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

...

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a instancia del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;"

Del anterior precepto constitucional se desprende, en lo que interesa al estudio de este asunto, que los Estados tendrán como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, al Municipio Libre.



En este sentido, la fracción III establece que los municipios tendrán a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; que los municipios previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan; que cuando sea necesario, a juicio del ayuntamiento respectivo, podrá celebrar convenio con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

Por su parte, la fracción IV del mencionado precepto constitucional, establece:

a) Que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, de los



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Indicados derivados de la prestación de servicios públicos a su

cargo

b) Que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con dichos incisos.

c) **Que las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones, y que solamente estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.**

El precepto constitucional en estudio tiene su origen en el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en el que se establecieron un conjunto de reglas tendientes a fortalecer y preservar el Municipio libre y en especial, a la Hacienda Municipal, a fin de garantizarle un mínimo de ingresos por diversos conceptos. La exposición de motivos de ese decreto, en lo conducente dice:

"Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los

Constituyentes de Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los Municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica. Por ende, en este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en primer término, como concepto originario del artículo 115 de la Constitución, la libre administración de su Hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, consignamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones que los Municipios podrán celebrar convenios con los Estados para que éstos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración contributiva. Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y fundamentalmente también los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Por último, en esta área hacendaria, se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas participaciones. Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consustanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios. Además, como consecuencia lógica del principio de la libre administración de la Hacienda Municipal, se propone que los presupuestos de egresos de los Municipios deban ser aprobados sólo por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos que se les hubiesen autorizado."

508

1 DE
JUST.
ENER.
1967

...

En forma particularmente acuciosa fueron estudiados por las comisiones dictaminadoras, los términos en que la iniciativa redactó la fracción IV del artículo 115, sobre la que fue notable el número de aportaciones y comentarios de los ciudadanos senadores. Por principio, en esta fracción se orienta lo que por origen ha correspondido siempre a los Municipios, o sea, su facultad de administrar libremente la Hacienda Municipal, la que en los términos del proyecto se

enriquece notablemente al conformarla con contribuciones y participaciones que el propio texto enumera, mereciendo particular relevancia las participaciones por contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y su tasa adicional por todos los conceptos. Se establece así un sentido de territorialidad en materia fiscal, que hace que los ingresos por impuestos prediales se reviertan a favor de la localidad en la que los predios y toda propiedad inmobiliaria adquieran valor económico por su uso y circulación, lo cual ya no estará sujeto una vez establecida la vigencia de esta fracción, a reversión de ningún tipo. Como un principio de congruencia y también de justicia, formarán parte de la Hacienda Municipal los ingresos que provengan por la prestación de los servicios públicos a cargo de los Municipios. Cabe destacar que, según el texto de la iniciativa, de su exposición de motivos y de las explicaciones escuchadas durante la comparecencia del ciudadano secretario de Gobernación, los ingresos municipales no quedan limitados a lo que expresamente consigna la fracción IV, sino que las Legislaturas Locales podrán agregar otros renglones importantes como aprovechamientos, productos, financiamientos, cooperaciones diversas, y otros rubros cuya terminología varía con la dinámica del propio desarrollo y no es por ello susceptible de quedar consignado en un precepto de rango constitucional. Quedó entendido asimismo que la distribución de las participaciones que la Federación entrega a los Municipios habrá de realizarse a través de las normas que expidan los Congresos Locales, los



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

cuales adecuarán en forma equitativa lo que corresponda a cada uno de ellos, con lo que se eliminan arbitrariedades, caprichos y desórdenes.

Novedad que fortalece al Municipio es la autorización para que con el gobierno de su Estado concerte convenios de coordinación y éste ejecute alguna de las funciones relacionadas con la administración impositiva, necesidad de organización compartida que no deba gravitar sobre los recursos municipales ni entenderse como forma obligatoriamente perpetua, sino susceptible de eliminarse en la medida en que la autosuficiencia municipal acceda al campo de su capacidad administrativa.

La determinación de los impuestos cuya recaudación beneficiará al Municipio así como de ciertos derechos, no hace limitativos los renglones de ingresos y sí permite, inicialmente, conocer con certeza las fuentes primarias propias e intocables del haber municipal, estableciendo la posibilidad de convenir con el Estado que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones. Rasgo importante de su autonomía es que sus presupuestos de egresos serán aprobados internamente por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles."

De lo anterior se advierte que el Poder Reformador de la Constitución, con el fin de asegurar la autosuficiencia económica de los municipios, por seguridad de sus ingresos estableció una regla general, en el sentido de que las leyes federales no concederán exenciones de pago de las contribuciones

municipales, entre las que se encuentran "los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo", inclusive prohibió que las leyes estatales establecieran exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna.

Como excepción a esa regla general, se estableció en la fracción IV, inciso c), segundo párrafo, del precepto constitucional aludido, una exención de pago tratándose de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los propios Municipios.

SUPREMA COR
JUSTICIA DE LA F
SECRETARÍA DE JUSTICIA

Esa exención de pago, respecto de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios, como lo es el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, opera tratándose de bienes de dominio público de la Federación, siempre que sea el propio Municipio el que preste dicho servicio, pues de otro modo no estaría en condiciones de dispensar una contribución que no integra la Hacienda Municipal.

En otras palabras, la exención prevista en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Carta Magna, no es aplicable a favor de los bienes del dominio público de la Federación, Estados o Municipios, cuando los servicios públicos son prestados por organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pues en el caso particular las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje no integran la Hacienda Pública Municipal, dado que la prestación de ese servicio público no está directamente a cargo del municipio,



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

del organismo descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, al cual se destinan los ingresos respectivos en términos de la ley que lo crea.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

Por tanto, asiste razón a las autoridades recurrentes, en cuanto a que la exención constitucional a favor de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, opera respecto de los ingresos destinados a integrarse a la hacienda municipal, derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, mas no opera si el servicio de agua potable y alcantarillado es prestado por un organismo público descentralizado.

Lo anterior es así, porque "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" constituye un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Nuevo León, con personalidad y patrimonio propio, el cual tiene por objeto la prestación de los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial a los habitantes del Estado de nuevo León, conforme a las disposiciones de la Ley que lo crea, de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de nuevo León, la Ley de Hacienda para los Municipios de nuevo León, la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

En relación con lo anterior, el artículo 15 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, dice:

"Artículo 15.- En cada zona de conurbación los servicios públicos de agua potable y saneamiento se prestarán por los Municipios, bajo los esquemas organizacionales previstos en esta Ley, y podrán éstos acordar con el Estado que la prestación de estos servicios se lleve a cabo por los organismos públicos descentralizados del Estado que serán creados para tal efecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 131 fracción II, inciso a) de la Constitución del Estado de Nuevo León; artículo 26 de la Ley General de Asentamientos Humanos; las disposiciones aplicables en materia de Desarrollo Urbano en el Estado de Nuevo León, y Título Cuarto de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León. En la zona conurbada del Area Metropolitana que comprende los Municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y el parque Ciudad Industrial Mitras, en García, N.L. los servicios se prestarán por el organismo público estatal descentralizado denominado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" I.P.D. No obstante, y por circunstancias más favorables de carácter financiero, de eficiencia en la prestación de los servicios y de beneficio comunitario, los servicios que actualmente presta "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", I.P.D. podrán ser concesionados a los particulares, conforme a las prescripciones establecidas en el Artículo 7 fracción V y en el Capítulo V de esta ley. El Organismo Público denominado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", I.P.D., efectuará la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

abasto de agua subterránea y superficial que se aprovechan para el suministro del área metropolitana de Monterrey, con sus respectivos acueductos, y podrá en su caso, celebrar convenios con los Municipios donde se originan las fuentes de abasto o los que estén aledaños a los acueductos que conducen el agua al área metropolitana, para entregarles agua en bloque, de acuerdo a la dotación que establezca la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y conforme a las tarifas que tenga establecidas para tal efecto "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", I.P.D."

De lo anterior se desprende, que al referido organismo le fue encomendada la prestación de los servicios de agua potable y drenaje en los Municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, entre otros (municipios en los que se encuentran asentados inmuebles adquiridos por el Consejo de la Judicatura Federal).

Por su parte, los artículos 3, 4 y 16 de la de la Ley que creó al organismo público descentralizado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", en lo conducente dicen:

"Artículo 3º.- El patrimonio de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey se integrará en la siguiente forma:

a).- Con la red de agua y drenaje y demás bienes y derechos adquiridos por el Estado de Nuevo León de la Compañía de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, con fecha 25 de julio de 1945, cuya propiedad el Estado le transfiere por esta Ley. Los

bienes que dejen de estar afectos directamente a la prestación de los servicios de agua y drenaje, revertirán al patrimonio del Estado.

b).- Con las ampliaciones y mejoras hechas al sistema con posterioridad al 25 de Julio de 1945.

c).- Con las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje.

d).- Con el producto del impuesto de plusvalía con el derecho de cooperación establecidos por el Decreto número 55 de fecha 31 de enero de 1946, expedido por la H. Legislatura del Estado y en los términos de las leyes de ingresos relativas.

e).- Con los bienes y derechos que en el futuro aporten o afecten a la prestación de los servicios: La Federación, el Estado, los Municipios u otras instituciones públicas o privadas, y

f).- Con los demás bienes y derechos que adquieran por cualquier título jurídico

Los bienes y derechos a que se refiere este artículo pasarán a formar el patrimonio de la institución con los gravámenes que las inversiones en el sistema ocasionaron. Deberá procederse desde luego a formular un balance para determinar el activo de la institución."

Artículo 4º.- Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la institución estarán afectos a los fines de la misma, entre los cuales, se considera también la posibilidad de afectarlos como garantía y fuente de pago para créditos obtenidos con destino a ampliar o mejorar los sistemas de agua y drenaje. En



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

consecuencia, será nulo cualquier acto o contrato que los distraiga de su objeto."

Artículo 16.- Los adeudos procedentes de la prestación de los servicios de agua y drenaje tendrán el carácter de créditos fiscales; para hacerlos efectivos la Tesorería General del Estado auxiliará a la Institución aplicando la facultad económico-coactiva."

ESTE ES
NACIONAL.

De los anteriores preceptos se deduce, que las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje integran el patrimonio del referido organismo público descentralizado; que los bienes y derechos que integran ese patrimonio se destinarán a cubrir los fines de esa institución; que los adeudos procedentes de la prestación del servicio de agua y drenaje, se les da el carácter de créditos fiscales; y que la Tesorería General del Estado auxiliará al referido organismo descentralizado, para hacerlos efectivos a través de la facultad económica-coactiva.

Bajo ese contexto, se advierte que el servicio de agua potable y drenaje en los Municipios de Monterrey y San Pedro Garza García no está a cargo de tales municipios y, por ende, tampoco reciben los ingresos derivados de la prestación de ese servicio público, ya que lo presta el Organismo Público Descentralizado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", con personalidad y patrimonio propios, siendo éste el que recibe los ingresos derivados de las cuotas y tarifas correspondientes, para cumplir con los fines propios de su objeto.

* 2

Por tanto, no puede considerarse que los ingresos correspondientes a los servicios de agua potable y drenaje proporcionados por el organismo descentralizado, formen parte de la hacienda municipal, dado que la prestación de ese servicio no está a cargo del municipio y las cuotas correspondientes no ingresan al municipio, sino que integran el patrimonio del propio organismo descentralizado.

No obsta la circunstancia de que el referido organismo descentralizado preste un servicio público que originalmente corresponde al municipio y que la omisión en el pago de las cuotas se considere crédito fiscal para efectos hacendarios efectivos en la vía económico coactiva, con el auxilio de la Tesorería del Estado, en virtud de que la norma constitucional de que se trata, por un lado prohíbe las exenciones que puedan afectar la hacienda municipal y, por otro, autoriza la exención sólo para los bienes de dominio público de la Federación, Estados o los Municipios, cuando son los propios municipios los que tienen a su cargo el servicio público correspondiente, pues es cuando surge la posibilidad de asegurar sus ingresos y, en su caso, permitir la exención respecto de los que reciba su hacienda pública.

De ese modo, mientras el servicio de agua potable y drenaje se siga prestando por el organismo descentralizado de mérito y no directamente por la administración Municipal, la afectación de los ingresos no lesiona los principios de libre administración municipal o la autonomía del Municipio, por lo que la exención a que se refiere el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

Constitución Federal, no aplica cuando el Municipio no sea el que preste efectivamente el servicio público en cuestión.

En consecuencia, la exención constitucional no es aplicable al caso y no se contraviene el principio de supremacía constitucional que deriva del artículo 133 de la Constitución Federal, ~~el~~ acuerdo en el que se sustenta el acto impugnado en el juicio de origen contempla el pago para toda institución pública, sin excepción alguna.

Por tanto, procede revocar la sentencia recurrida y reservar jurisdicción al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, para que resuelva sobre las cuestiones de legalidad planteadas por la parte quejosa.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia del presente recurso de revisión, se REVOCA la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se reserva jurisdicción al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, para que resuelva lo que a su competencia corresponde.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.



SUPREMA GC
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL

RETA
12



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

México, Distrito Federal, a diez de noviembre del año dos mil cinco.

Con fundamento en el artículo 185 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se señala para la audiencia respectiva en este asunto el día once de noviembre del año dos mil cinco.

Doy fe.

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA.

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.

México, Distrito Federal, a once de noviembre del año dos mil cinco.

Se hace constar, con fundamento en el artículo 186 de la Ley de Amparo, que en sesión de once de noviembre del año en curso, celebrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio cuenta con este asunto y por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente en funciones Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Estuvo ausente el señor Ministro Juan Díaz Romero, por atender Comisión Oficial, se acordó remitir al Pleno de este Alto Tribunal el presente asunto.

PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA SEGUNDA SALA:

MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.

IVB/vlq.



SUPREMA G
JUSTITIAE S
QUAE ILLA SEEM



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

En catorce de noviembre del año dos mil cinco, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Presidente en funciones de esta Sala, con el acuerdo que tuvieron los Ministros integrantes de la Segunda Sala, en la sesión de fecha once de noviembre del año en curso. Conste.

México, Distrito Federal, catorce de noviembre del año dos mil cinco.

SEGUNDA SALA

A.D.R. 1070/2005.

ORTS 2005

En acatamiento a lo acordado por los señores Ministros integrantes de esta Segunda Sala, en sesión pública del once de noviembre del año en curso, en el Amparo Directo en Revisión 1070/2005 promovido por el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, remítase este asunto al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciéndose saber lo anterior a la Titular de la Red de Informática Jurídica de esta Suprema Corte, para los efectos legales respectivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la estadística de esta Sala. Notifíquese y cúmplase.

Le acordó y firma el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel Presidente en funciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

VB/vlq

EN 17 NOV. 2005 SE FIJO LISTA PARA NOTIFICAR
A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR. CONSTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPLENTE
JEFES DE LA
SECRETARIA DE JUSTICIA

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION
POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
EDIFICIO.**

**SEGUNDA SALA
SECRETARÍA DE
ACUERDOS**

A.D.R. 1070/2005.

OF.No. T- 3936/2005

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente
en funciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

**"México, Distrito Federal, catorce de noviembre del año
NACIONAL mil cinco.-....."**

**En acatamiento a lo acordado por los señores Ministros
integrantes de esta Segunda Sala, en sesión pública del once
de noviembre del año en curso, en el Amparo Directo en
Revisión 1070/2005 promovido por el CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, remítase este asunto al Pleno de
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciéndose
saber lo anterior a la Titular de la Red de Informática Jurídica
de esta Suprema Corte, para los efectos legales respectivos.
Háganse las anotaciones correspondientes en la estadística
de esta Sala. Notifíquese y cúmplase.-....."**

**Lo acordó y firma el señor Ministro Genaro David
Góngora Pimentel Presidente en funciones de la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe." FIRMADO.-.....**

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales
procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

México, Distrito Federal, a 14 de noviembre del año 2005.

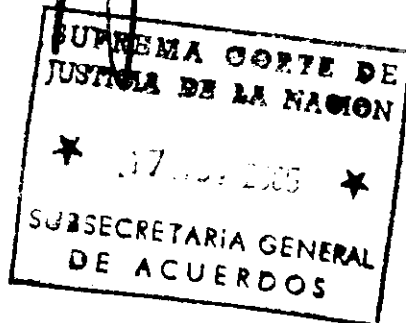
**EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

IVB*vlq





SUPREMACIA DE LA
JUSTICIA DE LA
FEDERACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**C. TITULAR DE LA RED DE INFORMÁTICA
JURÍDICA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.
EDIFICIO.**

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente en funciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

**SEGUNDA SALA
SECRETARÍA DE
ACUERDOS**

A.D.R. 1070/2005.

OF. No. T-3937/2005

"México, Distrito Federal, catorce de noviembre del año dos mil cinco.-"

En acatamiento a lo acordado por los señores Ministros integrantes de esta Segunda Sala, en sesión pública del once de noviembre del año en curso, en el Amparo Directo en Revisión 1070/2005 promovido por el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, remítase este asunto al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciéndose saber lo anterior a la Titular de la Red de Informática Jurídica de esta Suprema Corte, para los efectos legales respectivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la estadística de esta Sala. Notifíquese y complase.-"

Lo acordó y firma el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel Presidente en funciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe." FIRMADO.-"

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

México, Distrito Federal, a 14 de noviembre del año 2005.

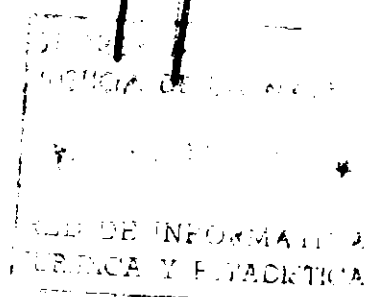
**EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

NB*vlq

LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ.





SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
NACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

**SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
EDIFICIO.**

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente
en funciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

**SEGUNDA SALA
SECRETARÍA DE
ACUERDOS**

A.D.R. 1070/2005

OF.No. T- 3936/2005

**"México, Distrito Federal, catorce de noviembre del año
dos mil cinco.-----**

**En acatamiento a lo acordado por los señores Ministros
Integrantes de esta Segunda Sala, en sesión pública del once
de noviembre del año en curso, en el Amparo Directo en
Revisión 1070/2005 promovido por el CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, remítase este asunto al Pleno de
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciéndose
saber lo anterior a la Titular de la Red de Informática Jurídica
de esta Suprema Corte, para los efectos legales respectivos.
Háganse las anotaciones correspondientes en la estadística
de esta Sala. Notifíquese y cumplase.-----**

**Lo acordó y firma el señor Ministro Genaro David
Góngora Pimentel Presidente en funciones de la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe." FIRMADO.-----**

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales
procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

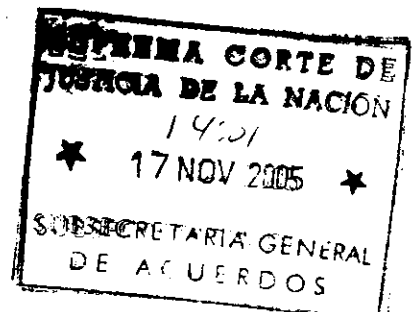
México, Distrito Federal, a 14 de noviembre del año 2005.

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS

LIC. MARIO ALBERTO ESCHARZA ORTIZ.





SUPREMACIA DE LA
JUSTICIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO:
1070/2005

SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y ASUNTOS
VARIOS

En México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de dos mil cinco, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el proveído de catorce del propio mes y año, dictado por el Ministro Genaro David Cóngora Pimentel, Presidente en funciones de la Segunda Sala de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se ordena la remisión de este asunto al Tribunal Pleno. Se informa que este expediente se recibió de la aludida Sala el día diecisiete de noviembre pasado. Conste.

[Firma]

México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de dos mil cinco.

Vista la cuenta que antecede y en virtud de que en el presente asunto se estima que no se está en el caso de someterlo a la consideración de la Segunda Sala, a la que actualmente se encuentra adscrito el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, designado ponente; con fundamento en el punto Noveno del Acuerdo Plenario 5/2001, devuélvanse los autos a dicho Ministro para que formule el proyecto respectivo y dé cuenta con él al Pleno de este Alto Tribunal. Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Mariano Azuela Güitrón, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Fco. Javier Barreiro Perera.

[Firma] *[Firma]*

EN 18 NOV. 2005

POR LISTA DE LA MISMA FECHA SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO DOY FE

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO DOY FE.



SUPREMA CORT.
JUSTICIA DE LA PAZ
SECRETARÍA GENERAL

18/noviembre/2005



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 1070/2005
QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

RECURRENTES: SERVICIOS DE AGUA Y
DRENAJE DE MONTERREY, Y
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN (TERCEROS
PERJUDICADOS).

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTÍZ MAYAGOITIA
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.

Vo. Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

Cotejó:

PRIMERO. Por escrito presentado el uno de noviembre de
dos mil cuatro, ante la Sala Superior del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, con
residencia en la ciudad de Monterrey, Rebeca López Hernández,
en su carácter de representante legal del Consejo de la Judicatura
Federal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal
en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se
especifican:

**"5.- Autoridad ordenadora: Sala Superior del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo
León.**

6.- Autoridades ejecutoras:

a).- **Secretaría de Finanzas del Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle de 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua, Zona Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.**

b).- **Tesorería General de Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle de 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua, Zona Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.**

c).- **Tesorería Municipal de Monterrey (Palacio Municipal), con domicilio en la calle de Ocampo y Zaragoza, Zona Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.**

d).- **Tesorería Municipal de San Pedro Garza García (Palacio Municipal), con domicilio en la calle de Juárez y Libertad s/n, Zona Centro, C.P. 66200, en San Pedro Garza García, Nuevo León."**

"7.- Actos reclamados:

a).- **De la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, se reclama la ilegal sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, en los autos del recurso de revisión interpuesto por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de su representante legal, parte actora dentro del Juicio Contencioso Administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003, en el cual se resolvió:**

"PRIMERO: No ha procedido el Recurso de Revisión recibido en fecha 22-veintidós de abril de 2004-dos mil cuatro, interpuesto por el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, a través de su Representante Legal, la C. REBECA LÓPEZ HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE REGISTRO PATRIMONIAL, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 1070/2005
QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

RECURRENTES: SERVICIOS DE AGUA Y
DRENAJE DE MONTERREY, Y
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN (TERCEROS
PERJUDICADOS).

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTÍZ MAYAGOITIA
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.

ORTE DR
I RECDN
DE

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al

AL DE LA FEDERAC
E DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
NIA GENERAL DE
CIÓN DE AM

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el uno de noviembre de dos mil cuatro, ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, Rebeca López Hernández, en su carácter de representante legal del Consejo de la Judicatura Federal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se especifican:

"5.- Autoridad ordenadora: Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.

6.- Autoridades ejecutoras:

a).- **Secretaría de Finanzas del Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle de 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua, Zona Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.**

b).- **Tesorería General de Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle de 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua, Zona Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.**

c).- **Tesorería Municipal de Monterrey (Palacio Municipal), con domicilio en la calle de Zaragoza, Zona Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.**

d).- **Tesorería Municipal de San Pedro Garza García (Palacio Municipal), con domicilio en la calle de Juárez y Libertad s/n, Zona Centro, C.P. 66200, en San Pedro Garza García, Nuevo León."**

"7.- Actos reclamados:

a).- **De la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, se reclama la ilegal sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, en los autos del recurso de revisión interpuesto por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de su representante legal, parte actora dentro del Juicio Contencioso Administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003, en el cual se resolvió:**

"PRIMERO: No ha procedido el Recurso de Revisión recibido en fecha 22-veintidós de abril de 2004-dos mil cuatro, interpuesto por el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, a través de su Representante Legal, la C. REBECA LÓPEZ HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE REGISTRO PATRIMONIAL, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ASUNTOS JURÍDICOS DEL CITADO CONSEJO, parte

actora, dentro del Juicio Contencioso Administrativo

número 251/2003 acumulado al 051/2003, en contra de

la sentencia definitiva de fecha 30-treinta de marzo del

año en curso, dictada por la Magistrada de la Primera

Sala Ordinaria de este H. Tribunal, en la cual se declaró

el sobreseimiento del juicio respecto al Gobernador del

Estado y del acto impugnado consistente en la

amenaza de corte o suspensión del servicio de agua

potable que supuestamente se contenían en las

facturas T00131509 y T00134126, emitida por la

Institución Pública Descentralizada denominada Agua

y Drenaje de Monterrey; la nulidad de las facturas

T00114085, T00121863, T00131509 y T00134126, así

cómo de la amenaza de corte o suspensión del servicio

de agua potable y drenaje contenida en la factura

T00114085, emitidas por la ya citada Institución Pública

Descentralizada y la validez de la resolución contenida

en el oficio 179-R10-1/2003, emitida por el Director

General de la mencionada paraestatal, en fecha 05-

cinco de diciembre de 2002-dos mil dos y de la

negativa ficta configurada en torno a la solicitud de

fecha 29-veintinueve de enero de 2003 (dos mil tres),

que se elevara al Gobernador del Estado donde se

negara la exención del pago del servicio de agua

potable.

SEGUNDO: Se confirma la resolución señalada en el

punto resolutivo anterior, por los motivos y

fundamentos expuestos en el Considerando Tercero de

la presente resolución".

b).- De las autoridades ejecutoras se reclama el

cumplimiento que pretendan dar a la sentencia

reclamada para realizar el indebido cobro del crédito fiscal por el servicio de agua potable y alcantarillado, así como la amenaza que conlleva su cobro para que se suspenda dicho servicio, derivado de las facturas T00131509, T00134126, T00121863, T00114068 y T00137699 que fueron ordenadas por la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., respecto del servicio que se proporciona en los inmuebles ubicados en calle Diagonal Santa Engracia número 221 de la Colonia Lomas de San Francisco del Municipio de San Pedro Garza García, y el de la avenida Constitución Poniente número 241, en la ciudad de Monterrey, ambos en el Estado de Nuevo León, en los cuales se encuentran funcionando órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.” (SIC)

SEGUNDO. La parte quejosa estimó violadas en su perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como terceros perjudicados al Gobernador del Estado de Nuevo León y a la Dirección General de la Institución Pública Descentralizada denominada “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”; expresó conceptos de violación, tendientes a controvertir por una parte, aspectos de legalidad de la sentencia emitida por la autoridad responsable ordenadora y, por la otra, la inconstitucionalidad del artículo 9° del Acuerdo Tarifa 2003, expedido por el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, por considerar que contravenía lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Política.



TERCERO. Por acuerdo de uno de diciembre de dos mil cuatro, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, órgano jurisdiccional al que por razón de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo directo, admitió la demanda de garantías, formando el expediente número 328/2004. **PREVIOS** los trámites legales correspondientes, en sesión celebrada el día primero de abril de dos mil cinco, el mencionado órgano colegiado por mayoría de votos de los magistrados integrantes, dictó sentencia cuyo punto resolutive dice:

"ÚNICO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, en contra del acto y por la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y para los efectos indicados en el último considerando de la misma."

Las consideraciones que sustentan el fallo recurrido, son del tenor siguiente:

"SEXTO.- Los conceptos de violación tercero y octavo, que se encuentran estrechamente relacionados entre sí, resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional que se demanda, tal como se desprende de las posteriores consideraciones. - - - Cabe hacer la aclaración de que, aunque en la demanda de amparo se expresan otros conceptos de violación

vinculados con cuestiones de legalidad, algunos por vicios de forma y otros por vicios de fondo que se dicen cometidos al dictarse la sentencia que se reclama, lo cierto es que los aspectos de inconstitucionalidad de las normas en que se funda el acto reclamado que se plantean en el amparo directo, merecen estudio preferente, ya que de resultar fundados tales argumentos producirían mayores beneficios para la parte quejosa, de ahí que se deben reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros (cuestiones de legalidad), en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- - - Por lo tanto, como en el caso específico se hacen valer cuestiones que aluden a la inconstitucionalidad de un ordenamiento general en el que se fundan tanto el acto impugnado en el procedimiento contencioso de origen, como la sentencia reclamada, lo que procede es analizar en primer término esos argumentos. - - - Sirve de apoyo al respecto, la tesis aislada número 2ª. CXIX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: - - - "AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que cuando



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

En amparo indirecto se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el Juez de Distrito, al pronunciarse respecto al fondo, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el criterio aludido no es de aplicación exclusiva al juicio de amparo indirecto, sino que, por identidad de razón, debe hacerse extensivo al juicio de garantías en la vía directa, a fin de que los Tribunales Colegiados de Circuito ajusten sus sentencias a este orden de análisis de los conceptos de violación propuestos, en términos del artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." - - - **Pues bien, con el propósito de resolver lo que en derecho corresponde, se estima oportuno reseñar brevemente los antecedentes del caso, en lo que interesa para la solución del asunto. - - - Del estudio de las constancias que integran los expedientes de origen, de pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º; se advierte que la sentencia reclamada se emitió en relación con dos juicios contenciosos administrativos**

que fueron acumulados, que se integran elementalmente con las actuaciones que enseguida se relatan: - - - Expediente número 051/2003: - - - a).- Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil tres, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Ordinaria de ese órgano jurisdiccional, Víctor Manuel Mendicuti Gómez, en su carácter de encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, promovió la nulidad de la omisión atribuida al gobernador del Estado, de resolver sobre la solicitud de exención de pago del servicio de agua potable que le formuló el citado consejo; la nulidad de la resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil dos, en la que el director general de la Institución Pública Descentralizada que se denomina "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", negó la exención de pago por concepto del servicio público de agua potable y drenaje solicitada por el Consejo de la Judicatura Federal; así como la nulidad de los actos de cobro, amenaza de corte y suspensión de servicio, contenidos en las facturas números T00114085 y T00121863, con fechas de vencimiento veintinueve de noviembre de dos mil dos y veintinueve de enero de dos mil tres, respectivamente. - - - b).- Por acuerdo recaído el día seis de febrero de dos mil tres, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado y emplazar a las autoridades



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

demandadas, así como al subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, por tener la calidad de parte en ese juicio,

conforme al artículo 33, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado. También concedió a la actora la suspensión de los actos impugnados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, hasta en tanto se dictara la sentencia respectiva, esto es, para que no se efectuara el corte o suspensión del servicio de agua potable, y para que no se realizara el cobro del crédito fiscal derivado de las facturas impugnadas. - - - c).- Por escrito presentado ante la sala ordinaria, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil tres, el director general del organismo denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, dio contestación a la demanda; el gobernador del Estado hizo lo propio, mediante promoción presentada el veinticinco de marzo del mismo año; y el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, contestó el escrito de demanda en la misma fecha que el gobernador de esa Entidad Federativa. - - - Expediente número 251/2003: - - - a).- Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil tres, Alejandro Romero Gudiño, en su calidad de director general de Asuntos Jurídicos y representante legal del Consejo de la Judicatura Federal, promovió juicio de nulidad en contra de la resolución negativa ficta atribuida al gobernador del Estado de Nuevo León, respecto de la solicitud de

exención que dicho consejo le planteó, en relación con los derechos de agua potable y alcantarillado, presentada el día veintinueve de enero de ese año; así como la nulidad de los actos de cobro, amenaza de corte y suspensión del servicio, realizados por la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, derivados de las facturas números T00131509 y T00134126, por las fechas de vencimiento de veintiocho de abril y veintinueve de mayo del mismo año. - - - b).- La demanda de nulidad se admitió en los términos planteados el dieciséis de junio de dos mil tres, por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien ordenó emplazar a las autoridades demandadas y otorgó la suspensión de los actos impugnados, para el efecto de que no se efectuara el corte o suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado, y para que no se realizara el cobro del crédito fiscal derivado de las facturas impugnadas. - - - c).- El treinta de julio de dos mil tres, dio contestación a la demanda el apoderado general para pleitos y cobranzas y representante legal del organismo denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; lo propio hizo el gobernador del Estado, por conducto del secretario General de Gobierno, mediante promoción presentada el ocho de agosto de dos mil tres. - - - d).- El día diez de septiembre de dos mil tres, la parte actora amplió su demanda de nulidad, misma que fue admitida el once del mismo mes y año. - - - e).- El apoderado general para pleitos y cobranzas de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, acudió a contestar la ampliación de demanda el día uno de octubre de dos mil tres; mientras que el gobernador del Estado y el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo hicieron el veinticinco de noviembre de esa anualidad. - - - Ambos expedientes:

- - - a).- Por acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil cuatro, antes de que en ambos juicios se llevara a cabo la audiencia de pruebas y alegatos respectiva, a que se refiere el artículo 82 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, se ordenó la acumulación del diverso juicio contencioso número 251/2003, del índice de la misma sala ordinaria, al juicio contencioso número 051/2003, por ser éste el más antiguo. - - - b).- En fecha veintitrés de enero de dos mil cuatro, la Primera Sala Ordinaria procedió a calificar las pruebas ofrecidas por las partes, y señaló hora y fecha para que se llevaran a cabo las audiencias de pruebas y alegatos en los juicios contenciosos acumulados. - - - c).- Sin mayores actuaciones relevantes, para la reseña que se realiza, la parte actora presentó sus alegatos el día dieciocho de febrero de dos mil cuatro. - - - d).- El veinte de febrero del mismo año, a las diez horas, se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente al juicio contencioso número 051/2003; y en la misma fecha, pero a las once horas del día, se practicó la relativa al diverso juicio acumulado 251/2003. - - - e).- El treinta de marzo de la misma anualidad se dictó la sentencia de primera instancia por parte de la

Primera Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León. - - - d).- En contra de esa determinación, la parte actora interpuso recurso de revisión, mismo que admitido y tramitado, fue resuelto por magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León. Dicha resolución constituye el acto que en esta vía se reclama, y se basó en las siguientes consideraciones elementales: - - - 1.- Sostuvo la sala, que por técnica procesal analizaría los agravios hechos valer en el recurso de revisión, en el siguiente orden: primero, cuarto, segundo, tercero y quinto. - - - 2.- Que el primero de los agravios planteados en el recurso de revisión era fundado pero inoperante, pues si bien del análisis integral efectuado al agravio segundo de la demanda de nulidad, se advertía que la actora no hizo referencia a la inconstitucionalidad del acto impugnado, sino que señaló que el artículo 9° del acuerdo expedido por el Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho no se encontraba en armonía con lo previsto en el artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución Federal, de lo que se infiere la existencia de una violación al principio de supremacía constitucional; sin embargo, la inconstitucionalidad reclamada por el consejo de la Judicatura Federal, no podía ser objeto de estudio por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues carece de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

competencia para ello, en razón de que su propósito fundamental es salvaguardar y controlar la legalidad. - -

- 3).- Que el cuarto de los agravios planteados en el recurso de revisión por la ahora quejosa, era infundado, pues el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo número 051/2003, consistente en la resolución contenida en el oficio número 179-R-10-1/2002, de fecha 05-cinco de diciembre de dos mil dos, emitida por el director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, institución pública descentralizada, en la que se determinó negar la exención solicitada; resulta legal, si se toma en cuenta que las cuotas por el servicio de agua potable y alcantarillado no son contribuciones, pues una de las características principales de la contribución es la existencia de una relación tributaria, que consiste en un vínculo jurídico que se establece entre un sujeto llamado activo (Estado), y otro sujeto llamado pasivo (el contribuyente), cuya única fuente es la ley y nace en virtud de la ley, por cuya realización el contribuyente se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con ciertas obligaciones formales y entregar al Estado cierta cantidad de bienes, generalmente dinero que éste debe destinar a la satisfacción del gasto público, supuestos que en el caso no se reúnen; aunado a que la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, establece el pago de derechos por servicios prestados por diversas secretarías del Gobierno Local, por lo que para que a un particular se le exija el pago de una cantidad por

concepto de derechos, es preciso que haya recibido un servicio a través de una secretaría de Estado y no por conducto de un Organismo descentralizado (Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey); que la obligación del usuario para el pago del servicio de agua y drenaje no deriva de una ley tributaria, pues la misma proviene de un contrato administrativo de adhesión, que al efecto celebra la institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey con los usuarios, por lo que en este caso, no existe una relación tributaria entre el Estado y el contribuyente, la cual es característica propia de las contribuciones; que los ingresos que se obtienen por el pago del servicio de agua y drenaje, pasan a formar parte del patrimonio del organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues así se establece en el artículo 3° inciso c) de la ley que crea la institución pública descentralizada, por lo que los ingresos que se obtienen por los servicios de agua y drenaje no van encaminados a satisfacer el presupuesto de egresos de la Administración Pública Estatal, sino que éstos son destinados para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema; que, de conformidad al artículo 63 fracciones IX y X de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es facultad exclusiva del Congreso del Estado, establecer contribuciones y demás ingresos que deberán formar la Hacienda Pública Estatal y Municipal, y en el presente



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

caso, las cuotas y tarifas que apliquen los distintos organismos operadores de los servicios públicos de agua potable, no son establecidas por dicho Congreso, pues de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado, estas son aprobadas por las siguientes instancias: a) En las zonas conurbadas cuyos servicios se presten por los organismos públicos descentralizados o concesionarios, su aprobación será por el Estado, a través del Ejecutivo a propuesta del Consejo de Administración, en los términos de lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera del Estado; b) En los Municipios cuyos servicios se presten por organismos públicos descentralizados Municipales, a propuesta de la Junta de Gobierno de éstos mismos, su aprobación corresponderá al Ayuntamiento; c) En el caso de los municipios, si el servicio es prestado por concesionarios, las cuotas o tarifas serán aprobadas por el Ayuntamiento; d) En el caso de los organismos intermunicipales, se estará a los convenios que celebren los municipios correspondientes; que la fijación de las tarifas y cuotas por la prestación del servicio, no depende de la voluntad o de la capacidad económica de los consumidores, sino de los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en el Estado; que la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de

Monterrey, que presta el servicio no dispone de medios auxiliares y coactivos para el cobro de las tarifas, en forma directa. - - - Con base en todo ello, la autoridad responsable concluyó que, contrario a lo manifestado por la recurrente en su recurso de revisión, el pago por servicios de agua y drenaje no constituye una contribución, por lo que se demuestra que, en el presente caso es inaplicable el artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución Federal, y de la tesis de jurisprudencia que invocó la recurrente en su escrito de recurso, cuyo rubro es: "BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DETENTAN ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO C)." - - - 4.- Que el pago de servicios de agua y drenaje de conformidad al artículo 4° del Código Fiscal del Estado, es considerado como un aprovechamiento, pues así lo prevé dicho numeral, en su primer párrafo. - - - 5.- Que no existe norma constitucional ni ley secundaria que establezca que la exención prevista en el artículo 115, apartado IV inciso c), deba hacerse extensiva a los servicios prestados por las instituciones públicas descentralizadas del sector estatal; ni la parte actora establece cuál es el dispositivo legal que obligue al Estado, y/o a la mencionada institución pública descentralizada, a respetar las cargas motivadas al haberse arrogado la prestación de los servicios de agua potable que originariamente le correspondía a los municipios, por lo que, al no estar establecido en forma



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

expresa en un dispositivo legal la exención pretendida por la demandante, lo procedente era confirma la determinación de la sala de origen en el sentido de que, en el Estado de Nuevo León los bienes inmuebles del dominio público sí están obligados a pagar los servicios de agua potable y drenaje, cuando éstos sean prestados por organismos diversos a los municipios y que no pertenecen a la administración pública municipal. - - -

6.- En cuanto a los agravios segundo y tercero, sostuvo que eran infundados, ya que al respecto se debía tomar en considerarse lo resuelto, en cuanto a que el pago por la prestación del servicio de agua y drenaje, no constituye un derecho, sino un aprovechamiento, de ahí que con base en esas ideas, no puede sostenerse válidamente que el gobernador del Estado sea la autoridad competente para resolver la solicitud de exención por concepto de pago de servicios de agua y alcantarillado planteada ante él, por la parte actora, puesto que si bien es verdad que, el artículo 41 fracción I del Código Fiscal para el Estado, faculta al Ejecutivo Estatal, para condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazos y diferido o en parcialidades; no menos cierto resulta que, el pago por servicios de agua y drenaje no constituye una contribución, pues a éste no le es atribuido el carácter de derecho, como erróneamente lo manifestó la recurrente en su escrito de agravios. - - - 7.- Que, contrario a lo aducido por la accionante en el juicio, el director General de Servicios

de Agua y Drenaje de Monterrey, sí tiene competencia para dar contestación al escrito elevado al gobernador del Estado, la cual deriva de los artículos 15 y 41 de la Ley de Agua potable y saneamiento del Estado, así como de los diversos artículos 9 y 10 de la Ley que crea la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues del contenido de dichos preceptos legales se puede advertir que la referida institución es la encargada de prestar, operar, dar el debido mantenimiento y administrar el servicio público de agua y drenaje. - - - 8.- Que por lo tanto, resultaba legal el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo número 051/2003, tocante al acto atribuido al gobernador del Estado, consistente en la omisión de contestar la solicitud de exención presentada por la parte actora, pues del contenido del diverso acto impugnado, consistente en la resolución de fecha cinco de diciembre del año dos mil dos, emitida por el director General de Agua y Drenaje de Monterrey, se advierte que dicha solicitud fue contestada, y por ende el gobernador del Estado, quien es el presidente del Consejo de Administración de la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, respetó el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal pues una autoridad subordinada suya, como lo es el director General de la referida institución, emitió la respuesta a la precitada solicitud de exención. - - - 9.- Que por otra parte, carecía de fundamento jurídico la aseveración



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

fecha por la recurrente en el sentido de que, el gobernador del Estado, debió comunicarle que no era competente, una vez que remitiera su escrito al director General de Agua y Drenaje de Monterrey, pues la demandante no establece qué dispositivo legal fue violado por el gobernador del Estado, al remitir su solicitud al director General de Agua y Drenaje de Monterrey para que éste le diera respuesta, y aunque el gobernador del Estado no dio respuesta directamente, una autoridad de la misma dependencia, en este caso, de la institución pública descentralizada, Agua y Drenaje de Monterrey, de la cual aquél es el presidente de su Consejo de Administración, fue la que dio contestación a la solicitud de exención del pago de servicios de agua y alcantarillado. - - - 10.- En cuanto al quinto agravio, en el cual se adujo substancialmente, que la sentencia recurrida violaba el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no haberse aplicado el artículo 115, fracción IV inciso c), constitucional, la responsable consideró que la sentencia recurrida no violenta el principio de supremacía constitucional, puesto que dicho dispositivo no establece que los jueces de cada Estado, (en el presente caso sería la magistrada de la Primera Sala Ordinaria de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Nuevo León) en sus resoluciones tengan el deber de aplicar la Constitución, las leyes federales que de ella emanen y los tratados suscritos por el presidente de la República y aprobados

por el Senado del Congreso de la Unión, en lugar de las leyes ordinarias; además de que el tribunal contencioso administrativo carece de competencia para dilucidar tal cuestión - - - En relación con tales estimaciones de la sala responsable, la parte quejosa, Consejo de la Judicatura Federal, en sus conceptos de violación tercero y octavo, que se vinculan entre sí, plantea en esencia, que la sentencia que se impugna transgrede en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la autoridad responsable no analizó debidamente el contenido del artículo 115 fracción IV, incisos a) y c), de la Carta Magna, disposición en la que fue sustentada la solicitud de exención del pago de derechos por la prestación del servicio de agua y alcantarillado, en relación con los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, que se destinan al servicio público de impartición de justicia, ya que de haber hecho una interpretación correcta de esa norma cimera, habría arribado a la conclusión de que dichos bienes corresponden al dominio público de la Federación y que, por ende, la aplicación del precepto constitucional indicado, debe prevalecer sobre una norma sustantiva de carácter estatal, en términos del numeral 133 de la propia Constitución Federal, porque este último ordenamiento es norma de normas, que por su naturaleza de suprema niega la posibilidad de estar sometida a otro cuerpo normativo inferior, y en cambio requiere que toda ley o acto de autoridad esté sometido



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

a ella; de ahí que, si la responsable desestimó los argumentos que al respecto se hicieron valer ante su potestad, con base en normas locales, pasó por alto las cuestiones apuntadas, y no ponderó que la figura jurídica de la exención de pago de derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado, a favor de los inmuebles que albergan órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se encuentra prevista y regulada en la propia Carta Fundamental del País, como se señala en las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevan por rubro: BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EXENCIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DETENTAN, ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO C) y "DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL". - - - Añade la accionante de amparo, que por lo tanto, también reclama en esta vía de amparo la inconstitucionalidad del artículo 9º del Acuerdo Tarifa 2003, expedido por el Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y que se publicó en el Periódico Oficial de esa Entidad el día veintiséis de febrero de dos mil tres, así como su fe de erratas publicada el día veintisiete del mismo mes, conforme al cual la Federación, y cualquier otra institución o entidad pública, están obligadas a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario, de acuerdo

con las tarifas y cuotas que les sean aplicables, en términos de los artículos 27, 29, 40, inciso a), y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León; debido a que tal acuerdo del ejecutivo local, contraviene lo que al respecto establecen los artículos 115 fracción IV, incisos a) y b) y 43 de la Constitución Federal, porque en el primer de esos ordinales de la Ley Suprema, se plasma la voluntad del legislador federal de considerar exentos del pago señalado, a los bienes del dominio público de la Federación, con independencia de que sea el municipio en forma exclusiva, o en coordinación con otros niveles de gobierno, quien preste el servicio de agua potable y alcantarillado. - - - Como se puede advertir, el argumento que se propone en los apartados descritos, se encuentra estrechamente relacionado con la inconstitucionalidad de un acuerdo expedido por el gobernador del Estado de Nuevo León, que tanto la parte demandada en el juicio contencioso de origen, como la sala responsable, utilizaron como fundamento para determinar que en el caso particular los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal a que se refiere la litis, que se encuentran destinados a la impartición de justicia, no encajan en el supuesto de exención de pago de derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado. - - - Ahora bien, a fin de resolver lo que corresponde, sobre el alcance de la exención autorizada por el artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución General de la República, en relación con



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Las contribuciones que por servicio de agua y drenaje se determinan a favor de las instituciones titulares de bienes inmuebles de dominio público, es menester

tomar en cuenta lo que dicho precepto prevé sobre el particular, en los siguientes términos: - - - "Artículo 115.

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: - - - "...." - - - III.- Los Municipios tendrán a

su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: - - - a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; - - - "...." - - - Los

Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; - - -

"...." - - - IV. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor,

y en todo caso: - - - a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. - - - Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. - - - b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. - - - c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. - - - Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. - - - **Esta norma de máxima jerarquía, encuentra su origen en el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del día tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, por cuya virtud se establecieron en la Constitución un conjunto de reglas básicas tendientes a fortalecer y**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

preservar al municipio libre y, específicamente, a la Hacienda Municipal, a modo de garantizarle un mínimo de ingresos por diversos conceptos, según se explica en la iniciativa presidencial de la cual derivó el decreto de reformas referido, cuando en la parte conducente dice: - - - "Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los Municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica. Por ende, en este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en primer término, como concepto originario del artículo 115 la libre administración de su Hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones que los Municipios podrán celebrar convenios con los Estados para que éstos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración contributiva. Se atribuyen igualmente a los

Municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y fundamentalmente también los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Por último, en esta área hacendaria, se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas participaciones. Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales y privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consustanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios. Además, como consecuencia lógica del principio de la libre administración de la Hacienda Municipal, se propone que los presupuestos de egresos de los Municipios deban ser aprobados sólo por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos que se les hubiesen autorizado." - - - **La decisión de preservar la Hacienda Municipal frente a las**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

decisiones de política fiscal de las Legislaturas Estatales, a fin de evitar que aquélla fuera gravemente afectada por cualquier género de exenciones en favor de sujetos determinados, provocó que en la iniciativa presidencial de que se trata y en los dictámenes elaborados por las comisiones respectivas de los órganos parlamentarios, se sentara con toda claridad que el propósito del órgano reformador fue disponer, como regla general, que no se autorizaban las exenciones de pago de las contribuciones reservadas a la Hacienda Municipal y que sólo por excepción procedían aquellas referentes a los bienes de dominio público de la Federación, los Estados y los propios Municipios, como se corrobora con la lectura de los dictámenes formulados sobre la iniciativa de reformas, de los cuales se transcriben las partes de interés: - - -

"En forma particularmente acuciosa fueron estudiados por las comisiones dictaminadoras, los términos en que la iniciativa redactó la fracción IV del artículo 115, sobre la que fue notable el número de aportaciones y comentarios de los ciudadanos senadores. Por principio, en esta fracción se orienta lo que por origen ha correspondido siempre a los Municipios, o sea, su facultad de administrar libremente la Hacienda Municipal, la que en los términos del proyecto se enriquece notablemente al conformarla con contribuciones y participaciones que el propio texto enumera, mereciendo particular relevancia las participaciones por contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y su tasa adicional por todos los conceptos. Se establece así un sentido de territorialidad

en materia fiscal, que hace que los ingresos por impuestos prediales se reviertan en favor de la localidad en la que los predios y toda propiedad inmobiliaria adquieran valor económico por su uso y circulación, lo cual no estará sujeto, una vez establecida la vigencia de esta fracción, a reversión de ningún tipo. Como un principio de congruencia y también de justicia, formarán parte de la Hacienda Municipal los ingresos que provengan por la prestación de los servicios públicos a cargo de los Municipios. Cabe destacar que, según el texto de la iniciativa, de su exposición de motivos y de las explicaciones escuchadas durante la comparecencia del ciudadano secretario de Gobernación, los ingresos municipales no quedan limitados a lo que expresamente consigna la fracción IV, sino que las Legislaturas Locales podrán agregar otros renglones importantes como aprovechamientos, productos, financiamientos, cooperaciones diversas, y otros rubros cuya terminología varía con la dinámica del propio desarrollo y no es por ello susceptible de quedar consignado en un precepto de rango constitucional. Quedó entendido asimismo que la distribución de las participaciones que la Federación entrega a los Municipios habrá de realizarse a través de las normas que expidan los Congresos Locales, los cuales adecuarán en forma equitativa lo que corresponda a cada uno de ellos, con lo que se eliminan arbitrariedades, caprichos y desórdenes. Novedad que fortalece al Municipio es la autorización para que con el gobierno de su Estado concerte convenios de coordinación y éste ejecute alguna de las funciones relacionadas con la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

administración impositiva, necesidad de organización compartida que no deba gravitar sobre los recursos municipales ni entenderse como forma obligatoriamente perpetua, sino susceptible de eliminarse en la medida en que la autosuficiencia municipal acceda al campo de su capacidad administrativa. - - - La determinación de los impuestos cuya recaudación beneficiará al Municipio así como ~~los~~ ^{TE DE} ~~los~~ derechos, no hace limitativos los renglones de ingresos y sí permite, inicialmente, conocer con certeza las fuentes primarias propias e intocables del haber municipal, estableciendo la posibilidad de convenir con el Estado que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones. Rango importante de su autonomía es que sus presupuestos de egresos serán aprobados internamente por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles." - - - Siendo pues clara la intención del órgano reformador de la Constitución de garantizar, por un lado, la subsistencia de la Hacienda Municipal, delimitando con toda claridad las fuentes de ingreso reservadas al Municipio y, por otro, restringir las exenciones de pago de los ingresos provenientes de dichas fuentes, permitiendo sólo las relativas a los bienes de dominio público, importa identificar con precisión tales fuentes de ingreso reservadas al Municipio, que se enumeran en los incisos a) al c), de la fracción IV, del numeral 115 en análisis, y que son las siguientes: - - - a).- contribuciones sobre propiedad inmobiliaria - - - b).- participaciones federales - - - c).- ingresos por la

prestación de servicios públicos - - - De estas tres categorías, interesan para la resolución del presente asunto las descritas en los incisos a) y c), que son las vinculadas a las contribuciones sobre ^{esos} propiedad inmobiliaria y a las contribuciones causadas ^{por} motivo de los servicios públicos prestados por la administración municipal. - - - Sobre esos ingresos de la Hacienda Municipal, la fracción IV, ^{del artículo} 115 constitucional, dispone expresamente: "Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. . . Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público." - - - De ello se infiere que el autor de la norma, al disponer que los bienes de dominio público de la Federación se encontrarán exentos del pago de las contribuciones previstas para los municipios, se refirió tanto a las derivadas de la propiedad inmobiliaria, como a las que surgen de ingresos captados por la hacienda municipal por la prestación de servicios públicos. - - - Luego, si a estas dos categorías de ingresos tributarios se refiere claramente el autor de la norma, cuando prescribe que sólo se autorizarán las exenciones por los bienes de dominio público, resulta por tanto claro para este



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Tribunal colegiado, que el caso de las contribuciones (derechos) por el servicio de agua que presta el Municipio, se halla efectivamente incluido en el supuesto de exención de mérito, con independencia de que el servicio público de agua potable y alcantarillado lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, como en el caso de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”, pues la propia norma fundamental que contempla la exención, dispone en su fracción III, que una de las bases de la organización política y administrativa municipal, que tienden a asegurar su libertad hacendaria, consiste en que los municipios tengan a su cargo, entre otras funciones, la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y que únicamente cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; de ahí que tal disposición no implica que los ingresos que por tales rubros se obtienen, dejen de formar parte de los recursos municipales y pasen a pertenecer al Estado, sino que solamente se trató de apoyar a dichas haciendas para darles oportunidad de que adquirieran autosuficiencia en la administración de tales haberes, como se aprecia de la lectura de los dictámenes de las

comisiones legislativas a que se ha hecho alusión en párrafos precedentes, y que en la porción relativa indican: - - - " . . . Novedad que fortalece al Municipio es la autorización para que con el gobierno de su Estado concerte convenios de coordinación y éste ejecute funciones relacionadas con la administración impositiva, necesidad de organización compartida que no debe gravitar sobre los recursos municipales ni entenderse como forma obligatoriamente perpetua, sino susceptible de eliminarse en la medida en que la autosuficiencia municipal acceda al campo de su capacidad administrativa. - - - La determinación de los impuestos cuya recaudación beneficiará al Municipio así como de ciertos derechos, no hace limitativos los renglones de ingresos y sí permite, inicialmente, conocer con certeza las fuentes primarias propias e intocables del haber municipal, estableciendo la posibilidad de convenir con el Estado que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones. . ." - - - Por lo tanto, no es óbice lo que argumenta la autoridad responsable en la sentencia reclamada, en el sentido de que el supuesto de exención establecido en el artículo 115, fracción IV inciso c), no se surte en el caso, porque no es el municipio quien presta el servicio público de agua potable y drenaje, sino que el mismo es prestado por un organismo público descentralizado del Estado, denominado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey"; pues tal como ya se ha señalado, las cuotas que pagan los particulares por la prestación del servicio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El servicio público de agua y drenaje forman parte de los recursos municipales por propia disposición constitucional, y participan de las características de los derechos, con independencia de que el servicio lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado, estatal, porque la coordinación celebrada con el Estado para que éste preste el servicio por medio de un organismo como el señalado, que fue creado exclusivamente para ese fin, no es perpetua sino temporal por mandato de la norma suprema, y no debe afectar la calidad de "recursos municipales" que corresponde a esas cuotas, sino que es factible revertirla cuando los municipios tengan la capacidad de hacerse cargo directamente de la prestación del servicio público. Dicho de otro modo, no se debe atender a una interpretación estrictamente literal (que se queda en la superficie) del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal para desentrañar de qué naturaleza son, y a quién corresponden en realidad, los recursos de que se habla, sino que es necesario efectuar una interpretación sistemática y hermenéutica de esa disposición para entender su verdadera naturaleza y justificación. - - - Reflejo de lo anterior, es el hecho de que en la Constitución Política del Estado de Nuevo León, también se dispuso la libertad hacendaria de los municipios de la Entidad, y que la prestación del servicio público de que se trata queda a cargo de los mismos, de manera exclusiva y temporal, con la posibilidad de revertir el acuerdo de coordinación con el

Estado, cuando la necesidad que lo justifica desaparezca. Así se deduce de los artículos 119, 130 y 132 de ese ordenamiento local, que en lo relativo dicen:

- - - "ARTICULO 119.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la que se integra por las contribuciones, aprovechamientos, productos, financiamientos y otros ingresos que la Legislatura establezca a su favor, así como con las participaciones y aportaciones federales que les correspondan o reciban de acuerdo a la ley. - - - El Congreso del Estado no expedirá leyes que establezcan exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado y los de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. - - - (. . . .)" - - - "ARTICULO. 130.- Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal deberá expedir el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivos territorios, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. - - - El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: - - - (. . . .) - - - c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

efectúen tanto las fracciones III y IV del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - - -

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente la Legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y - - - (. . . .) - - - "ARTICULO. 132.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: - - - a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; - - - (. . . .) - - - i) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera de los municipios, los que previo acuerdo entre sus ayuntamientos y sujeción a la Ley, podrán coordinarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponde. Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. - - - Las funciones y servicios públicos enumerados, que sean prestados por el Estado, por sí o de manera coordinada con los municipios, podrán ser asumidos por el municipio que

corresponda. La autoridad municipal, previa autorización del ayuntamiento, deberá remitir al gobierno del Estado la solicitud respectiva a fin de que éste disponga lo necesario para que la transferencia se realice de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la solicitud. (. . .)” - -

- No escapa al juicio de los que resuelven que los artículos 15 y 41 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, así como los artículos 2º y 3º de la Ley que Crea una Institución Pública Descentralizada con Personalidad Jurídica Propia y con Domicilio en la Ciudad de Monterrey, que se denomina “Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey”; prevén que en la zona conurbada del área metropolitana, que comprende los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y el parque Ciudad Industrial Mitras, en García, Nuevo León; los servicios de agua potable y saneamiento, se prestarán por el organismo público estatal descentralizado a que se hace alusión, quien se encargará de la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial que se aprovechan para el suministro del área metropolitana; que las cuotas y tarifas que se fijan por tales servicios se destinarán a cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

reserva para rehabilitación y mantenimiento del sistema;

y que el patrimonio de tal organismo se integrará con los bienes y derechos afectos al servicio público de que

se habla; sin embargo, no es dable sostener que tal institución pública descentralizada es absolutamente independiente del Estado y de los municipios que conforman el área metropolitana, dado que no se debe perder de vista que es un organismo estatal y que, por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que se debe atender en todo caso en atención al principio de supremacía, la prestación del servicio corresponde originariamente a los municipios, quienes se pueden coordinar con el Estado para que éste se encargue de prestarlo por sí o por conducto del organismo que se cree al efecto, como también se preconiza en la propia Constitución Local y en el artículo 15 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León; además de que en términos del numeral 4º de la ley que creó tal ente público, los consabidos bienes y derechos están afectos exclusivamente a la consecución de su objeto, que es la prestación de un servicio que originalmente está a cargo de los municipios y, por ende, será nulo cualquier acto o contrato que los distraiga de ese fin. - -

- La naturaleza originaria de un servicio público a cargo de los municipios, que le corresponde al servicio de agua potable y alcantarillado, no puede desconocerse si se toma en cuenta que de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de

Nuevo León, su órgano de gobierno estará integrado por los presidentes de los municipios que integran la zona conurbada, entre otros miembros. - - - Consecuentemente, sería inexacto pensar que los bienes y derechos que conforman el patrimonio de la paraestatal, y que se le han otorgado con el exclusivo fin de que cumpla con la prestación del servicio público de la mejor manera, para descargar a los municipios que conforman el área metropolitana de esa tarea; se encuentran destinados a fines particulares de tal institución, o que las cuotas que recibe a cambio puedan destinarse a otros propósitos que no sean los propios del servicio que, se insiste, originalmente está a cargo de los municipios y se prestan por un organismo creado por el Estado para la consecución de esos fines específicos. - - - Además, conforme al artículo 3º del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, las contribuciones locales se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, y por los segundos se entienden las contribuciones que establece la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, dentro de los cuales encaja el servicio de agua y alcantarillado; sin que se pueda considerar a dichas cuotas como un aprovechamiento, como incorrectamente lo pretende la responsable, dado que los aprovechamientos son otro tipo de ingresos que percibe el Estado, también por funciones de derecho

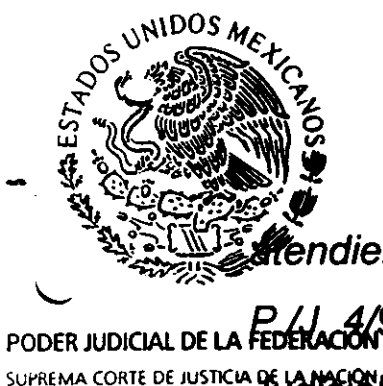


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

público, pero que no tienen el carácter de contribuciones, según lo señala el artículo 4º de la citado código, que expresamente dice: - - - "Artículo 4.-

Son aprovechamientos los ingresos distintos de las contribuciones que percibe el Estado por funciones de derecho público, los ingresos derivados de financiamientos y los que obtengan los organismos descentralizados que no tengan la naturaleza de derechos." - - - Es decir, mientras que los derechos siempre son ingresos que consisten en sumas de dinero, que el Estado cobra a las personas que se benefician por la prestación de un servicio en funciones de derecho público, como lo es servicio de agua y alcantarillado, o bien por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, esto es, una remuneración legal, por un servicio, uso o aprovechamiento de bienes proporcionados por el Estado; los aprovechamientos son ingresos que derivan de otro tipo de funciones de derecho público, como las multas y los recargos, pero no constituyen una cantidad que se entrega a cambio de un beneficio prestado por el Estado. - - - La calidad de contribuciones que les corresponde a las cuotas indicadas, se corrobora con la circunstancia consistente en que el artículo 16 de la Ley que Crea la Institución Pública Descentralizada que se denomina "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", clasifica como créditos fiscales los adeudos relacionados con las mismas, y permite que tal organismo las haga efectivas a través de la vía económica coactiva, con apoyo de la Tesorería General

del Estado; dicho precepto dispone: - - - "Artículo 16.- Los adeudos procedentes de la prestación de los servicios de agua y drenaje tendrán el carácter de créditos fiscales; para hacerlos efectivos la Tesorería General del Estado, auxiliará a la Institución aplicando la facultad económica efectiva. - - - (. . . .)" - - - Amén de lo expresado, existen otras tesis del Máximo Tribunal de la República, en las que se ha dado el tratamiento de derechos a las cuotas que nacen del servicio de agua potable, como la que se identifica con el número 2ª. CLXV/2000, sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 423, tomo XII, diciembre de 2000, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce enseguida: - - - "AGUA POTABLE. EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO NÚMERO 8 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 20 DE DICIEMBRE DE 1996, QUE ESTABLECE DIVERSAS TARIFAS PARA CALCULAR EL MONTO DE LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AQUÉLLA, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Conforme a lo dispuesto en las cuatro fracciones que integran el referido precepto legal, para calcular el monto de los derechos por el servicio de suministro de agua potable son aplicables diversas tarifas con diferentes estructuras de rangos y tasas, dependiendo de que el vital líquido se obtenga de tomas para uso doméstico popular, doméstico residencial, comercial o industrial, o de inmuebles del sector público. Ante ello,



atendiendo al criterio contenido en la tesis jurisprudencial P/JJ 4/98, visible en la página 5 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1998, cuyo rubro dispone: "DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD.", debe concluirse que las tarifas establecidas en el referido precepto, no son violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que, por una parte, respecto de los contribuyentes que reciben el servicio de una toma del mismo tipo, la aplicación de una cuota diferente atendiendo al volumen consumido de agua se justifica por la circunstancia de que mientras mayor sea el consumo del vital líquido, el costo por metro cúbico también se incrementará, pues ante la escasez de ese recurso, su mayor consumo provoca renovar los gastos para su captación y suministro, por lo que la actividad de la administración encaminada a la prestación de ese servicio no implica un esfuerzo uniforme; y, por otra parte, la aplicación de una tarifa diferente atendiendo al tipo de toma de agua se justifica por el hecho de que en razón del destino que se dé a ésta el costo de su suministro tampoco será el mismo, pues al existir entre los diversos grupos de usuarios

del servicio una propensión a utilizar en promedio diferentes volúmenes de agua, dependiendo del tipo de toma, serán mayores o menores los recursos que el Estado debe destinar para procurar la continuidad del servicio de que se trata." - - - La tesis número 2ª. CXXVIII/2000, de la citada sala, publicada en la página 349, tomo XI, octubre de 2000, Novena Epoca, del indicado semanario, que a continuación se transcribe: - - - "AGUAS NACIONALES. PARA ABORDAR EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DERECHOS QUE GRAVAN SU APROVECHAMIENTO, DEBE DISTINGUIRSE RESPECTO DE LAS DIVERSAS CONTRIBUCIONES QUE RETRIBUYEN EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Para abordar el estudio de constitucionalidad de las disposiciones que regulan los derechos por aprovechamiento de aguas nacionales, es necesario distinguir entre éstos y los diversos que se causan en virtud de recibir el servicio público de suministro de agua potable, los que se diferencian, entre otros factores, por su hecho imponible o tasable, por los principios que rigen el análisis de su proporcionalidad y equidad, así como por el órgano legislativo que en ejercicio de su potestad tributaria los establece. En cuanto a las aguas nacionales a que se refiere el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución General de la República, el legislador ha determinado gravar su aprovechamiento mediante un derecho de los previstos en la ley federal relativa, cuyo hecho tasable se traduce en la explotación, uso o aprovechamiento del agua con motivo del acto permisionario del Estado, para obtener un beneficio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

individual y determinado; y atendiendo a la naturaleza de este hecho, en la tesis jurisprudencial P./J. 81/97, visible en la página 171 del Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las contribuciones de esa naturaleza cumplen con el principio tributario de proporcionalidad cuando el monto a pagar guarda una relación directa con el grado de aprovechamiento del bien, con el beneficio obtenido por el gobernado y con la zona de disponibilidad de la que se deduce el valor de dicho bien, tomando en cuenta su abundancia o escasez, el demérito que sufre con su uso y la importancia que el mismo representa para el desarrollo de la nación; además, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, punto 2o., de la propia Norma Fundamental, el establecimiento de contribuciones que graven el aprovechamiento de aguas nacionales corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión. Ahora bien, a diferencia de lo anterior, existen diversos derechos establecidos generalmente por las Legislaturas Locales, cuyo hecho tasable es el servicio municipal de suministro de agua potable, prestado en términos de lo previsto en el artículo 115, fracción III, constitucional, tributos que al tenor de la tesis jurisprudencial P./J. 4/98, consultable en la página 5 del Tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cumplen con los referidos principios constitucionales cuando al establecerlos se atiende al objeto real del servicio prestado por la administración pública considerando su costo y otros

elementos que inciden en su continuidad, en razón de que el suministro del vital líquido requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr su captación, conducción, saneamiento y distribución. Por tanto, al analizar la constitucionalidad de las disposiciones que regulan los derechos por aprovechamiento de aguas nacionales, el juzgador de garantías debe tomar en cuenta las distinciones antes citadas." - **tesis de jurisprudencia número P./J. 4/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 5, tomo VII, enero de 1998, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y texto siguiente:**

"DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD. La Suprema Corte ha sustentado en diversas tesis jurisprudenciales que las leyes que establecen contribuciones, en su especie derechos por servicios, fijando una tarifa o una cuota aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos ajenos al costo del servicio público prestado, violan los principios de proporcionalidad y equidad, ya que ello da lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso. Por otro lado, tratándose de los derechos por el servicio de agua potable, ha tomado en consideración, para juzgar sobre los citados principios



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constitucionales, no la simple correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y las razones de tipo extrafiscal. Del examen de ambos supuestos, se concluye que este Alto Tribunal ha sentado criterios distintos para derechos por servicios de naturaleza diversa, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público, que trasciende tanto a su costo como a otros elementos que inciden en la continuidad y permanencia de su prestación. Ello porque tratándose de derechos causados por servicios el objeto real de la actividad pública se traduce, generalmente, en la realización de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del diverso de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable de los usuarios, repercuten en la prestación del servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas." - - - **Ahora bien, en el caso específico, la solicitud de exención presentada por el Consejo de la**

Judicatura Federal al gobernador del Estado de Nuevo León, se fundó, entre otras disposiciones, en el artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales vigente en los años dos mil dos y dos mil tres. Es el caso que dicho ordinal, así como los numerales 1º y 2º de ese mismo cuerpo de normas, que no habían sufrido reformas desde el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, señalaban: - - - “Artículo 1o.- El patrimonio nacional se compone de: - - - I. Bienes de dominio público de la Federación, y - - - II. Bienes de dominio privado de la Federación.” - - - “Artículo 2o.- Son bienes de dominio público: - - - (. . . .) - - - V. Los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos, conforme a la ley; - - - (. . . .)” - - - “Artículo 34.- Están destinados a un servicio público, y por tanto, se hayan comprendidos en la fracción V del artículo 2o: - - - I. Los inmuebles utilizados por los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como por el Poder Ejecutivo y sus dependencias; - - - II. Los inmuebles destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial; - - - (. . . .)” - - - A la luz de los preceptos transcritos, se aprecia que se daba la característica de ser del dominio público, a los bienes señalados en el artículo 2º de la Ley General de Bienes Nacionales vigente en esas anualidades, como lo son, entre otros, aquellos afectos o destinados por la Federación a la realización de fines o servicios públicos, y dentro de estos últimos se encuentran los que se utilizan por el Poder Judicial de la Federación, o los que ese poder



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

destina a sus servicios. - - - Conviene hacer la
aclaración, de que la ley de que se trata fue abrogada
por el decreto que creó la nueva Ley General de Bienes
Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veinte de mayo de dos mil cuatro, en el
que también se consideran como bienes sujetos al
régimen de dominio público de la Nación, a los
inmuebles propiedad de las instituciones federales
destinados a la prestación de un servicio público, como
se desprende de los artículos 1º, fracciones I y II, 2º,
fracción IV, 3º, fracción III, y 6º, fracción VI, de ese
cuerpo normativo, que expresamente señalan: - - -
"Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés
general y tiene por objeto establecer: - - - I.- Los bienes que
constituyen el patrimonio de la Nación; - - - II.- El régimen de
dominio público de los bienes de la Federación y de los
inmuebles de los organismos descentralizados de carácter
federal; - - - (. . .)" - - - "Artículo 2.- Para los efectos de esta
Ley, se entiende por: - - - (. . .)" - - - IV.- Federación: el
orden de gobierno que en los términos de esta Ley ejerce
sus facultades en materia de bienes nacionales, a través de
los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; - - - (. . .)" - - -
"Artículo 3.- Son bienes nacionales: - - - (. . .)" - - - III.- Los
bienes muebles e inmuebles de la Federación; - - - (. . .)" - - -
- "Artículo 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de
la Federación: - - - (. . .)" - - - VI.- Los inmuebles federales
que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento
jurídico a un servicio público y los inmuebles equiparados a
éstos conforme a esta Ley; - - - (. . .)" - - - Por otro lado,

es necesario precisar que la pertenencia de los bienes al dominio público de la Federación en el evento particular, debe acreditarse con la demostración de dos extremos: a) Que forman parte del patrimonio de la quejosa, y b) Que se destinan a la realización de un servicio público. - - - En el caso, en los antecedentes de las demandas de nulidad presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, así como en los relativos a la demanda de amparo, la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, adujo ser propietaria de los inmuebles ubicados en Calle Diagonal Santa Engracia, número 221, Fraccionamiento Lomas de San Francisco, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y del situado en Avenida Constitución poniente, número 241, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; y manifestó, que tales inmuebles se adquirieron para la prestación de un servicio público federal, ya que en los mismos se encuentran instalados diversos órganos jurisdiccionales que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, de ahí que se trate de bienes sujetos al dominio público. - - - Se sostuvo además, que respecto de dichos inmuebles se solicitó la exención de pago por el servicio de agua potable y drenaje, petición que fue planteada al gobernador del Estado de Nuevo León, por ser ésta la autoridad competente para ello en términos del artículo 41, fracción I, del Código Fiscal del Estado, solicitudes que fueron elevadas a esa autoridad en fechas once de noviembre de dos mil dos y veintinueve



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de enero de dos mil tres, respectivamente; que, sin embargo, los días once de diciembre de dos mil dos, veintitrés de enero, treinta de abril y diecinueve de mayo de dos mil tres, la accionante tuvo conocimiento de los requerimientos de pago que le hizo la institución pública descentralizada que se denomina Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, organismo que pretende hacer efectivo el pago del servicio de que se trata, no obstante que, de conformidad con el artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución Federal, los bienes del dominio público de la Federación se encuentran exentos del pago de ese tipo de contribuciones municipales. - - - La promovente de la instancia constitucional demostró en autos que los inmuebles de que se trata, se encuentran ubicados en alguno de los supuestos que la Ley General de Bienes Nacionales antes citada, considera como bienes del dominio público de la Federación. - - - En efecto, entre las constancias exhibidas en el juicio contencioso administrativo de origen, se encuentran las siguientes pruebas: - - - a) Testimonio de la escritura pública número uno, libro uno, pasada ante la fe del notario público número ciento setenta y cuatro del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal, en la que consta el contrato de compraventa celebrado el trece de diciembre de dos mil uno, a través del cual el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, adquirió el inmueble ubicado en Diagonal Santa Engracia, número 221, Fraccionamiento Lomas de San

Francisco, en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. - - - b) Testimonio del contrato de compraventa número CV/002/95, de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, representada por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, con la intervención del Secretario Ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, adquirió el inmueble ubicado en Avenida Constitución poniente número 241, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. - - - Ahora bien, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se estima que las pruebas ya mencionadas, correlacionadas con la circunstancia de que es un hecho notorio para este tribunal colegiado, que dichos inmuebles se encuentran ocupados por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, demuestran que los citados bienes son del dominio público de la Federación, pues de ello se deduce que se encuentran destinados directamente a la prestación del servicio público federal de impartición de justicia, en términos de los artículos 17, 94, 103, 104, 106 y 107 constitucionales, 1º, 29, 37, 48, 50, 50 bis, 50 ter, 51, 52, 53, 54, 55 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. - - - En las relatadas condiciones, es incuestionable que se demostró que los



51

de servicios públicos, no es dable al intérprete acudir a algún criterio que prácticamente deje sin efectos dicha remisión, sobre todo si se considera que cuando el órgano creador vincula los conceptos de contribuciones derivados de los servicios públicos y bienes de dominio público, permite comprender que se refiere a aquellos servicios que se prestan con motivo, precisamente, de la titularidad de un bien de dominio público, es decir, que se causan por la Federación, los Estados o los Municipios, en tanto tales servicios los reciben por su calidad de titulares de dichos bienes. - - - No se trata, como podría estimarse, de una exención que beneficie a las personas públicas por su sola condición de tales, esto es, por el elemento subjetivo de la relación tributaria, sino que opera cuando esas personas públicas utilizan ciertos bienes que por su destino o naturaleza se hallan incorporados al régimen excepcional de dominio público, lo cual explica que para tales personas, en lo que se refiere a los tributos que causen en relación con esos bienes, sea por su propiedad, fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora o cambio de valor, sea por los servicios públicos que reciban en relación con esos bienes, estén liberados del pago de los tributos destinados a las arcas municipales, por la trascendencia de la función que desempeñan mediante el empleo de esos bienes y su afectación a un fin determinado. - - - Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2ª./J. 22/97, de la Segunda



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en la página 247, tomo V, mayo de 1997,
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, que a la letra dice: - - - "DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. El penúltimo párrafo de la base IV del artículo 115 constitucional, al cual remite el texto vigente del artículo 122, base primera, fracción V, inciso b), del mismo Ordenamiento Fundamental, se debe interpretar en el sentido de que dentro de la exención autorizada para bienes del dominio público de la Federación y los Estados, quedan comprendidos los organismos descentralizados como titulares de los inmuebles descritos en el artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, por los servicios que preste el Municipio en materia de agua potable, toda vez que el autor del precepto constitucional, al autorizar la exención, claramente la hace extensiva no sólo a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, sino también a los ingresos que obtenga el Municipio por los servicios públicos a su cargo, lo cual significa que se refirió a las contribuciones causadas por aquellos servicios que se presten en relación con los bienes de dominio público en favor de la Federación, Estados u organismos descentralizados, en razón de la importancia que atribuyó a la función desarrollada a través de la afectación y destino de tales bienes sometidos al régimen de protección de que se trata." - - - Sin embargo, el artículo 9º

del Acuerdo por el que se Aprueba la Nueva Estructura de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintiocho de febrero de dos mil tres, que sirvió de fundamento al director de la institución pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para sustentar los actos impugnados en los juicios contenciosos administrativos de origen, y a la sala responsable para apoyar la resolución que se reclama, desatendiendo esa norma suprema dispone: - -

- "Artículo 9º.- La Federación, el Estado, los Municipios, las empresas de participación estatal, los Organismos Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública o Privada, Universidades, Colegios, Escuelas y demás Centros de Enseñanza, oficiales o privados y cualquier otra Institución o Entidad Pública, están obligados a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario de acuerdo a las tarifas y cuotas que les sean aplicables de acuerdo a lo establecido en los artículos 27, 29, 40 inciso "a" y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León." - - - De ello se desprende que, conforme al citado acuerdo del gobierno del Estado, la Federación se encuentra obligada a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario, sin excepción alguna, según las cuotas y tarifas que le sean aplicables; disposición que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Contraviene abiertamente el mandato constitucional consagrado en el artículo 115, fracción IV inciso c), acorde al cual los bienes afectos al régimen de dominio público de la Federación, como los destinados por el Poder Judicial de la Federación al servicio público de impartición de justicia, se encuentran exentos del pago de esas contribuciones. - - - Así, debe estimarse que le corresponde la razón a la parte quejosa, cuando argumenta que el mencionado acuerdo del gobierno local resulta inconstitucional, porque al pretenderse que una dependencia federal que opera con bienes inmuebles del dominio público de la Federación, pague los derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado, no obstante que la Carta Magna dispone que estarán exentos de esa obligación, significa que la autoridad estatal fue más allá de sus atribuciones en quebranto del régimen fiscal federal especial de exención o, más propiamente, de no causación de contribuciones, que rige a los bienes del dominio público de la Federación. - - - Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación en estudio resultan fundados y suficientes, para acreditar infracción a los dispositivos constitucionales que invoca la quejosa, particularmente al artículo 115, fracción IV inciso c), de la Constitución General de la República, que previene, en la parte que interesa en este asunto, que los bienes del dominio público de la Federación están exentos de las contribuciones que se refieran a los ingresos derivados de los servicios que

presten los municipios, como lo son los relacionados con el servicio de que agua y drenaje. - - - Por lo tanto, la autoridad responsable debió en todo caso atender el principio de supremacía constitucional que consagra el artículo 133 de la Carta Magna, acorde al cual, la Constitución Federal constituye la ley suprema de toda la Unión, por lo que las autoridades locales de orden jurisdiccional, se arreglarán a la misma a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las normas locales, como en el caso lo es el citado acuerdo del Ejecutivo del Estado. - - - Como corolario, se impone conceder el amparo demandado, para que la sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, y en su lugar emita otra en la que declare fundados los agravios primero, tercero y cuarto, expresados por la quejosa en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, que se encuentran estrechamente vinculados entre sí y, con base en ello, decrete la nulidad de la resolución expresa que negó la exención solicitada por la demandante, para el efecto de que se emita una nueva resolución en la que se reconozca que sí procede dicha exención. - - - Al resultar fundados los conceptos de violación que han sido materia de estudio en este fallo, y suficientes para otorgar la protección federal demandada por aspectos de constitucionalidad, es innecesario ocuparse del estudio de los restantes, relacionados con cuestiones que son propiamente de legalidad, pues la quejosa no



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

podría obtener mayor beneficio que el alcanzado. - - -

Sobre el particular sirve de apoyo, el criterio que se comparte, derivado de la tesis de jurisprudencia número

V.2º. J/7 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que puede ser consultada en la página 86, tomo VII, abril de 1991, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: - - -

"CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia." - - - Así como la tesis

aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 72, volúmenes 175 al 180, Cuarta Parte, Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente:

- - - "CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." (SIC)

CUARTO. Inconformes con la resolución anterior, los terceros perjudicados Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, interpusieron recurso de revisión en su contra, mediante los

escritos presentados el catorce y veintisiete de junio de dos mil cinco, respectivamente; los cuales, mediante acuerdos emitidos por el Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento, de fechas quince y veintisiete de junio del referido año, se ordenó remitirlos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

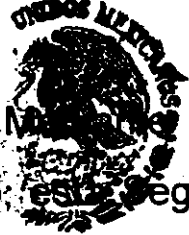
QUINTO. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil cinco, recibió el recurso de revisión interpuesto por el tercero perjudicado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ordenando formar el toca respectivo, correspondiéndole el número 1070/2005; asimismo, ordenó se enviara a la Segunda Sala, por no ser competente el Pleno de este Alto Tribunal para conocer del citado recurso. Por proveído de veintiocho de junio del año en curso, el Ministro Presidente de la Segunda Sala, admitió el referido recurso; y, por diverso acuerdo de seis de julio siguiente, se admitió a trámite el diverso recurso de revisión interpuesto por el tercero perjudicado Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, ordenándose en ambos proveídos notificar al Procurador General de la República, para que si así lo considerara, emitiera pedimento por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quién sí lo formuló en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.

SEXTO. Por acuerdo presidencial de nueve de agosto de dos mil cinco, se ordenó turnar el presente asunto a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien planteó su impedimento para conocer de los citados recursos, por haber formado parte integrante del Pleno del Consejo de la Judicatura



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Federal, institución que fue parte actora en el juicio de nulidad y que es parte quejosa en el juicio de amparo directo del cual deriva el presente recurso de revisión.



Mediante resolución de trece de septiembre de dos mil cinco, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el impedimento 2/2005-SS, el cual se calificó de legal; por tal motivo, mediante acuerdo de presidencia de veintiocho de septiembre del año en curso, se ordenó returnar el presente asunto al señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Punto Tercero, fracción II, en relación con el Punto cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en la cual se declararon fundados los conceptos de violación, en los que se planteó una interpretación directa al artículo 115, fracción IV,

inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias que obran en autos se advierte que la sentencia recurrida se notificó a los terceros perjudicados Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, el viernes diez de junio de dos mil cinco, por lo que la notificación surtió efectos el lunes trece siguiente, y el referido plazo transcurrió del catorce al veintisiete del mismo mes y año, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Amparo; por tanto, si los referidos recursos se presentaron el catorce y veintisiete de junio del año en curso, ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, es claro que fueron interpuestos oportunamente.

TERCERO. Las autoridades recurrentes están legitimadas para interponer recurso de revisión con el carácter de terceros perjudicados que les fue reconocido en el juicio de garantías, en términos del artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fueron parte contraria al quejoso en el juicio natural del que proviene la sentencia reclamada.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio sostenido por esta Segunda Sala en la tesis 2ª. CLXXXIX/2002, visible en la página 287, tomo XVI, diciembre de dos mil dos,



Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO PERJUDICADO SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO SUBSISTA EL ESTUDIO DE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL QUE AFECTE SU ESFERA JURÍDICA."

Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la tramitación del recurso de revisión contra sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver amparos directos, disponen que tal recurso será procedente siempre que exista un tema propiamente constitucional y, además, se colmen los requisitos de fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales que al efecto expida; sin que de su texto se desprenda restricción alguna para que legítimamente cualquiera de las partes del juicio de garantías, entre ellas, el tercero perjudicado, pueda hacerlo valer. En estas condiciones, y tomando en consideración lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXXIV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 42, en el sentido de que el tercero perjudicado puede interponer recurso de revisión en amparo indirecto donde se cuestione la inconstitucionalidad de una ley, se concluye que como tal aspecto de legitimación no es

un problema exclusivo del amparo indirecto, aquellas reglas deben hacerse extensivas al amparo directo y, por ende, el tercero perjudicado, en su calidad de parte en el juicio de garantías, se encuentra legitimado para recurrir la sentencia dictada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito que, con afectación a su esfera jurídica, resuelva un tema propiamente constitucional.”

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SUPREMA
COURT OF JUSTICE
SECRETARIA GENERAL

CUARTO. En el caso se satisfacen los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, al tenor de la siguiente jurisprudencia:

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SUPREMA
COURT OF JUSTICE
SECRETARIA GENERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, tesis: 2a./J. 64/2001, página 315).

De la sentencia recurrida se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento analizó y estimó fundados los conceptos de violación tercero y octavo, en los que se planteó la interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen:

SUPREM
CORT
DE JUSTICIA
SECRETARÍA

“Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

(...)

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;

“Artículo 83.- Procede el recurso de revisión:

(...)

V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. - - - La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones, propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

AL DE
DE JUSTICIA
A GENES
ON III.

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;

Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

(. . .)

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) ***Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido, o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; y***

De los preceptos transcritos se desprende que procede el recurso de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, sólo cuando en dichas sentencias se haya decidido sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o bien, se haya establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, así como cuando el Tribunal colegiado haya omitido el estudio y decisión de esas cuestiones a pesar de haberse planteado en la demanda de amparo, debiendo limitarse la materia del recurso a las cuestiones propiamente constitucionales.

Lo anterior conduce a estimar procedente este recurso de revisión, en virtud de que el Tribunal Colegiado de Circuito analizó y estimó fundado el planteamiento de interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, y en el recurso de revisión subsiste el problema jurídico a resolver, dado que la sentencia recurrida es adversa a los intereses de la parte tercero perjudicada.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En cuanto a la interpretación directa del citado precepto constitucional, se advierte que la parte quejosa, en sus conceptos de violación planteó, en esencia, que la sentencia que se impugna transgredió su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 115 y 116 constitucionales, en virtud de que la autoridad responsable no analizó debidamente el contenido del artículo 115 fracción IV, incisos a) y c), de la Carta Magna, disposición en la que fue sustentada la solicitud de exención del pago de derechos por la prestación del servicio de agua y alcantarillado, en relación con los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, que se destinan al servicio público de impartición de justicia, ya que de haber hecho una interpretación correcta de esa norma cimera, habría arribado a la conclusión de que dichos bienes corresponden al dominio público de la Federación y que, por ende, la aplicación del precepto constitucional indicado, debe prevalecer sobre una norma sustantiva de carácter estatal, en términos del numeral 133 de la propia Constitución Federal.

A ese respecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó una interpretación gramatical y causal del artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, sustentada en la exposición de motivos del decreto de reformas a la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, así como en los dictámenes de las comisiones legislativas del Congreso de la Unión, concluyendo lo siguiente:

“De ello se infiere que el autor de la norma, al disponer que los bienes de dominio público de la Federación se

encontrarán exentos del pago de las contribuciones previstas para los municipios, se refirió tanto a las derivadas de la propiedad inmobiliaria, como a las que surgen de ingresos captados por la hacienda municipal por la prestación de servicios públicos. - - - Luego, sobre estas dos categorías de ingresos tributarios se refiere claramente el autor de la norma, cuando prescribe que sólo se autorizarán las exenciones por los bienes de dominio público, resulta por tanto claro para este tribunal colegiado, que el caso de las contribuciones (derechos) por el servicio de agua que presta el Municipio, se halla efectivamente incluido en el supuesto de exención de mérito, con independencia de que el servicio público de agua potable y alcantarillado lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, como en el caso lo es "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", pues la propia norma fundamental que contempla la exención, dispone en su fracción III, que una de las bases de la organización política y administrativa municipal, que tienden a asegurar su libertad hacendaria, consiste en que los municipios tengan a su cargo, entre otras funciones, la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y que únicamente cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; de ahí que tal disposición no implica



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

que los ingresos que por tales rubros se obtienen, dejen de formar parte de los recursos municipales y pasen a pertenecer al Estado, sino que solamente se trate de apoyar a dichas haciendas para darles oportunidad de que adquirieran autosuficiencia en la administración de tales haberes, como se aprecia de la lectura de los dictámenes de las comisiones legislativas que se ha hecho alusión en párrafos precedentes.

La anterior interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, conduce a estimar procedente el recurso de revisión en amparo directo, pues sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Acuerdo General 5/1999 que "establece la bases para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo". El texto del punto primero del acuerdo es el siguiente:

"PRIMERO. Procedencia

I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:

a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las

cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia por queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

- a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;*
- b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;*
- c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente."*

En el caso particular, se justifican los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, en virtud de que no existe jurisprudencia respecto del tema que planteó el quejoso y subsiste en la revisión de los terceros perjudicados, el problema



de interpretación directa de la referida norma constitucional, de modo que es necesario el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si opera o no la exención que se refiere el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, respecto de bienes del dominio público de la Federación, como lo son en el presente caso, los inmuebles que pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, cuando es un organismo público descentralizado el que presta el servicio de agua y drenaje.

QUINTO. En esencia, el organismo público descentralizado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en sus agravios aduce:

FEDERACIÓN
LA PRESENTE NACIÓN
DE AGUAS

Del análisis del artículo 115 de la Constitución Federal, se observa que los municipios tienen la facultad de administrar libremente su hacienda, que se conforma de los rendimientos que produzcan sus bienes y de las contribuciones y otros ingresos, entre estos, los derivados de los servicios públicos que los municipios tengan a su cargo.

b) De la interpretación literal, armónica y hermenéutica del artículo 115, fracción IV, constitucional, se desprende que la exención que se contempla respecto de los bienes de dominio público, sólo es aplicable por cuanto hace a los ingresos contemplados por las legislaturas estatales para ingresar a la hacienda municipal, no así respecto de las contribuciones o ingresos estatales.

c) En este orden de ideas, la exención constitucional prevista respecto de los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, se prevé solamente respecto de los ingresos destinados a integrarse a la hacienda municipal derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

d) Con el objeto de que sean prestados los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenaje sanitario y pluvial, la legislatura estatal creó a la institución pública descentralizada denominada "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente a la del Estado o de los municipios y su patrimonio comprende, entre otros bienes, las cuotas y tarifas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje, además de lo anterior, los bienes que integran su patrimonio están afectos a los fines de la misma; por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Federal esta obligado al pago de las cuotas y tarifas, ya que el servicio público no lo presta el Municipio, sino un organismo público descentralizado estatal, por lo que no se dan los supuestos expresamente señalados en el artículo 115 constitucional.

Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, en sus agravios precisó que:

a) En la sentencia se afirmó erróneamente que el servicio de agua potable y alcantarillado lo prestaba el Municipio por medio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", en virtud de que el referido servicio lo presta dicha institución pública descentralizada; pero no presta el servicio el Municipio a través de ésta, ya que el patrimonio de la institución se integró con bienes y derechos adquiridos por el Estado, y no por el Municipio, por lo que el único titular de dicho patrimonio es en exclusiva la propia institución y no los que participan en su administración.



CORTE DE

LA NACIÓN
RAL DE ACUERDO

b) Es equivocado el criterio establecido por el Tribunal A quo, en el sentido de que las cuotas que pagan los particulares por el servicio de agua y drenaje, forman parte de los recursos municipales, por disposición del artículo 115 constitucional. Lo que verdaderamente dispone el referido dispositivo constitucional en su fracción IV, inciso c), es que la hacienda pública municipal se forma entre otros aspectos por los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, lo cual interpretado armónicamente con lo que establece la fracción III del propio numeral, se traduce en que la libertad hacendaria de los municipios es aplicada a los ingresos que reciban por los servicios que efectivamente presten, y no a que deba recibir (indiscriminadamente) los ingresos por la prestación del servicio de agua potable, aunque no sea el Municipio quien brinde tal servicio.

Así, el artículo constitucional objeto de interpretación refiere únicamente que los municipios percibirán los ingresos por los servicios que presten, ya que de la exposición de motivos se desprende que la misma tuvo como origen la necesidad de dar autonomía financiera a los municipios, y en razón de ello se

enunció cuáles eran los ingresos con los que se formaría su hacienda.

Si bien es cierto, que el servicio de agua potable corresponde en teoría prestarlo a los municipios, no menos cierto es que dicho servicio puede ser prestado por el Estado cuando así se estime necesario a solicitud de los municipios, y en el caso de Nuevo León, los municipios no prestan el servicio de agua potable, pues éste se brinda en realidad por "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey".

c) Los ingresos por los servicios públicos que no son prestados directamente por el Municipio, no corresponden a éste, pues en todo caso corresponden al ente que en realidad preste el servicio y en el caso del Estado de Nuevo León, el servicio lo presta la institución "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" por ende, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos de agua y alcantarillado, no le corresponden a los municipios. Así, lo que verdaderamente dispone la Constitución es que los ingresos derivados del servicio de agua corresponderán al Municipio cuando éste lo preste efectivamente; por tanto, en el caso, los bienes del dominio público de la Federación no están exentos del pago por los servicios recibidos, cuando no sea el Municipio quien preste efectivamente el servicio público.

En esencia, los mencionados recurrentes aducen que si el servicio de agua potable y alcantarillado es prestado por un organismo público descentralizado y no por el Municipio, no opera



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la exención a que hace referencia el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO. Los agravios que se hacen valer son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida y, para corroborarlo, es necesario iniciar el estudio con el análisis del artículo 115, fracciones III y IV, de la Constitución Federal, que en lo conducente, dicen:

“Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

(...)

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

...

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.

En este caso y tratándose de la asociación de

municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;"

Del anterior precepto constitucional se desprende, en lo que interesa al estudio de este asunto, que los Estados tendrán como

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, al Municipio Libre.

En ese sentido, la fracción III establece: que los municipios tendrán a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; que los municipios previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan; que cuando sea necesario, a juicio del ayuntamiento respectivo, podrá celebrar convenio con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

Por su parte, la fracción IV del mencionado precepto constitucional, establece:

a) Que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

b) Que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los



incisos
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

los a) y c), ni concederán exenciones en relación con dichos

c) Que las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones y que **solamente estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios**, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades para estatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

El precepto constitucional en estudio tiene deriva del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en el que se establecieron un conjunto de reglas tendientes a fortalecer y preservar el Municipio libre y en especial, a la Hacienda Municipal, a fin de garantizarle un mínimo de ingresos por diversos conceptos. La exposición de motivos de ese decreto, en lo conducente dice:

"Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los Municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica. Por ende, en este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la

fracción IV de la iniciativa, en primer término, como concepto originario del artículo 115 la libre administración de su Hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones que los Municipios podrán celebrar convenios con los Estados para que éstos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración contributiva. Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y fundamentalmente también los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Por último, en esta área hacendaria, se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas participaciones. Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consustanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios. Además, como consecuencia lógica del principio de la libre administración de la Hacienda Municipal, se propone que los presupuestos de egresos de los Municipios deban ser aprobados sólo por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos que se les hubiesen autorizado."

...

En forma particularmente acuciosa fueron estudiados por las comisiones dictaminadoras, los términos en que la iniciativa redactó la fracción IV del artículo 115, sobre la que fue notable el número de aportaciones y comentarios de los ciudadanos senadores. Por principio, en esta fracción se orienta lo que por origen ha correspondido siempre a los Municipios, o sea, su facultad de administrar libremente la Hacienda Municipal, la que en los términos del proyecto se enriquece notablemente al conformarla con contribuciones y participaciones que el propio texto enumera, mereciendo particular relevancia las participaciones por contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y su tasa adicional por todos los

conceptos. Se establece así un sentido de territorialidad en materia fiscal, que hace que los ingresos por impuestos prediales se reviertan en favor de la localidad en la que los predios y toda propiedad inmobiliaria adquieran valor económico por su uso y circulación, lo cual ya no estará sujeto, una vez establecida la vigencia de esta fracción, a reversión de ningún tipo. Como un principio de congruencia y también de justicia, formarán parte de la Hacienda Municipal los ingresos que provengan por la prestación de los servicios públicos a cargo de los Municipios. Cabe destacar que, según el texto de la iniciativa, de su exposición de motivos y de las explicaciones escuchadas durante la comparecencia del ciudadano secretario de Gobernación, los ingresos municipales no quedan limitados a lo que expresamente consigna la fracción IV, sino que las Legislaturas Locales podrán agregar otros renglones importantes como aprovechamientos, productos, financiamientos, cooperaciones diversas, y otros rubros cuya terminología varía con la dinámica del propio desarrollo y no es por ello susceptible de quedar consignado en un precepto de rango constitucional. Quedó entendido asimismo que la distribución de las participaciones que la Federación entrega a los Municipios habrá de realizarse a través de las normas que expidan los Congresos Locales, los cuales adecuarán en forma equitativa lo que corresponda a cada uno de ellos, con lo que se eliminan arbitrariedades, caprichos y desórdenes. Novedad que fortalece al Municipio es la autorización para que con el gobierno de su Estado concerte



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

convenios de coordinación y éste ejecute alguna de las funciones relacionadas con la administración impositiva, necesidad de organización compartida que no deba gravitar sobre los recursos municipales ni entenderse como forma obligatoriamente perpetua, sino susceptible de eliminarse en la medida en que la autonomía municipal acceda al campo de su capacidad administrativa.

La determinación de los impuestos cuya recaudación beneficiará al Municipio así como de ciertos derechos, no hace limitativos los renglones de ingresos y sí permite, inicialmente, conocer con certeza las fuentes primarias propias e intocables del haber municipal, estableciendo la posibilidad de convenir con el Estado que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones. Rasgo importante de su autonomía es que sus presupuestos de egresos serán aprobados internamente por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles."

De lo anterior se advierte que el Poder Reformador de la Constitución, con el fin de asegurar la autosuficiencia económica de los municipios, por seguridad de sus ingresos estableció una regla general, en el sentido de que las leyes federales no concederán exenciones de pago de las contribuciones municipales, entre las que se encuentran "los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo", inclusive prohibió que las leyes estatales establecieran exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna.

Como excepción a esa regla general, se estableció en la fracción IV, inciso c), segundo párrafo, del precepto constitucional aludido, una exención de pago tratándose de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los propios Municipios.

Esa exención de pago, respecto de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios, como lo es el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, opera tratándose de bienes de dominio público de la Federación, siempre que sea el propio Municipio el que preste dicho servicio, pues de otro modo no estaría en condiciones de dispensar una contribución que no integra la Hacienda Municipal.

En otras palabras, la exención prevista en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Carta Magna, no es aplicable a favor de los bienes del dominio público de la Federación, Estados o Municipios, cuando los servicios públicos son prestados por organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pues en el caso particular las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje no integran la Hacienda Pública Municipal, dado que la prestación de ese servicio público no está directamente a cargo del municipio, sino del organismo descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, al cual se destinan los ingresos respectivos en términos de la ley que lo crea.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por tanto, asiste razón a las autoridades recurrentes, en cuanto aducen que la exención constitucional a favor de bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, opera respecto de los ingresos destinados a integrar la hacienda municipal, derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, mas no opera si el servicio de agua potable y alcantarillado es prestado por un organismo público descentralizado.

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

Lo anterior es así, porque "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" constituye un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Nuevo León, con personalidad y patrimonio propio, el cual tiene por objeto la prestación de los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial a los habitantes del Estado de Nuevo León, conforme a las disposiciones de la Ley que lo crea, de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

En relación con lo anterior, el artículo 15 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, dice:

"Artículo 15.- En cada zona de conurbación los servicios públicos de agua potable y saneamiento se prestarán por los Municipios, bajo los esquemas organizacionales previstos en esta Ley, y podrán éstos acordar con el Estado que la prestación de estos

servicios se lleve a cabo por los organismos públicos descentralizados del Estado que serán creados para tal efecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 131 fracción II, inciso a) de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; artículo 26 de la Ley General de Asentamientos Humanos; las disposiciones aplicables en materia de Desarrollo Urbano en el Estado de Nuevo León, y Título Cuarto de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.

En la zona conurbada del Area Metropolitana que comprende los Municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y el parque Ciudad Industrial Mitras, en García, N.L. los

servicios se prestarán por el organismo público estatal descentralizado denominado "Servicios de Agua y

Drenaje de Monterrey" I.P.D. No obstante, y por circunstancias más favorables de carácter financiero, de eficiencia en la prestación de los servicios y de beneficio comunitario, los servicios que actualmente presta "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", I.P.D. podrán ser concesionados a los particulares, conforme a las prescripciones establecidas en el Artículo 7 fracción V y en el Capítulo V de esta ley.

El Organismo Público denominado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", I.P.D., efectuará la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial que se aprovechan para el suministro del área metropolitana de Monterrey, con sus respectivos acueductos, y podrá en su caso, celebrar convenios con los Municipios donde se originan las fuentes de abasto o los que



339

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

estén aledaños a los acueductos que conducen el agua al área metropolitana, para entregarles agua en bloque, de acuerdo a la dotación que establezca la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y conforme a las tarifas que se establecidas para tal efecto "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", I.P.D."



De lo anterior se desprende, que al referido organismo le fue encomendada la prestación de los servicios de agua potable y drenaje en los Municipios de Monterrey y San Pedro Garza García, (municipios en los que se encuentran asentados inmuebles adquiridos por el Consejo de la Judicatura Federal), entre otros.

Por su parte, los artículos 3, 4 y 16 de la de la Ley que creó al organismo público descentralizado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", en lo conducente dicen:

"Artículo 3º.- El patrimonio de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey se integrará en la siguiente forma:

a).- Con la red de agua y drenaje y demás bienes y derechos adquiridos por el Estado de Nuevo León de la Compañía de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, con fecha 25 de julio de 1945, cuya propiedad el Estado le transfiere por esta Ley. Los bienes que dejen de estar afectos directamente a la prestación de los servicios de agua y drenaje, revertirán al patrimonio del Estado.

b).- Con las ampliaciones y mejoras hechas al sistema con posterioridad al 25 de Julio de 1945.

c).- Con las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje.

d).- Con el producto del impuesto de plusvalía y con el derecho de cooperación establecidos por el Decreto número 55 de fecha 31 de enero de 1946, expedido por la H. Legislatura del Estado y en los términos de las leyes de ingresos relativas.

e).- Con los bienes y derechos que en el futuro aporten o afecten a la prestación de los servicios: La Federación, el Estado, los Municipios u otras instituciones públicas o privadas, y

f).- Con los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título jurídico

Los bienes y derechos a que se refiere este artículo pasarán a formar el patrimonio de la institución con los gravámenes que las inversiones en el sistema ocasionaron. Deberá procederse desde luego a formular un balance para determinar el activo de la institución."

Artículo 4º.- Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la institución estarán afectos a los fines de la misma, entre los cuales, se considera también la posibilidad de afectarlos como garantía y fuente de pago para créditos obtenidos con destino a ampliar o mejorar los sistemas de agua y drenaje. En consecuencia, será nulo cualquier acto o contrato que los distraiga de su objeto."

Artículo 16.- Los adeudos procedentes de la prestación de los servicios de agua y drenaje tendrán el carácter de créditos fiscales; para hacerlos efectivos la



**Tesorería General del Estado auxiliará a la Institución
aplicando la facultad económico-coactiva."**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

De los anteriores preceptos se deduce, que las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje integran el patrimonio del referido organismo público descentralizado, que los bienes y derechos que integran ese patrimonio se destinarán a cubrir los fines de esa institución; que los adeudos procedentes de la prestación del servicio de agua y drenaje, se les da el carácter de créditos fiscales; y que la Tesorería General del Estado auxiliará al referido organismo descentralizado, para hacerlos efectivos a través de la facultad económica-coactiva.

Bajo ese contexto, se advierte que el servicio de agua potable y drenaje en los Municipios de Monterrey y San Pedro Garza García no está a cargo de tales municipios y, por ende, tampoco reciben los ingresos derivados de la prestación de ese servicio público, ya que lo presta el Organismo Público Descentralizado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", con personalidad y patrimonio propios, siendo éste el que recibe los ingresos derivados de las cuotas y tarifas correspondientes, para cumplir con los fines propios de su objeto.

Por tanto, no puede considerarse que los ingresos correspondientes a los servicios de agua potable y drenaje proporcionados por el organismo descentralizado, formen parte de la hacienda municipal, dado que la prestación de ese servicio no está a cargo del municipio y las cuotas correspondientes no

ingresan al municipio, sino que integran el patrimonio del propio organismo descentralizado.

No obsta la circunstancia de que el referido organismo descentralizado preste un servicio público que originalmente corresponde al municipio y que la omisión en el pago de las cuotas se considere crédito fiscal para efectos de hacerlas efectivas en la vía económico coactiva, con el auxilio de la Tesorería del Estado, en virtud de que la norma constitucional de que se trata, por un lado prohíbe las exenciones que puedan afectar la hacienda municipal y, por otro, autoriza la exención sólo para los bienes de dominio público de la Federación, Estados o los Municipios, cuando son los propios municipios los que tienen a su cargo el servicio público correspondiente, pues es cuando surge la posibilidad de asegurar sus ingresos y, en su caso, permitir la exención respecto de los que reciba su hacienda pública.

De ese modo, mientras el servicio de agua potable y drenaje se siga prestando por el organismo descentralizado de mérito y no directamente por la administración Municipal, la afectación de los ingresos no lesiona los principios de libre administración municipal o la autonomía del Municipio, por lo que la exención a que se refiere el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, no aplica cuando el Municipio no sea el que preste efectivamente el servicio público en cuestión.

En consecuencia, la exención constitucional no es aplicable al caso y no se contraviene el principio de supremacía constitucional que deriva del artículo 133 de la Constitución



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Federal, si el acuerdo en el que se sustenta el acto impugnado en el juicio de origen contempla el pago para toda institución pública, sin excepción alguna.

Por tanto, con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo, se reserva jurisdicción al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, para que resuelva sobre las cuestiones de legalidad planteadas por la parte quejosa.

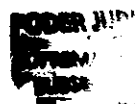
LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia del presente recurso de revisión, se **REVOCA** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se reserva jurisdicción al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, para que resuelva lo que a su competencia corresponde.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO DIRECTO 328/2004
REF. AL EXP. 251/2003

FORMA B-1

15363. SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN MÉXICO DISTRITO FEDERAL.

~~EL AMPARO DIRECTO 328/2004 SE DICTÓ UN AUTO QUE LETRA DICE:~~

Monterrey Nuevo León, a diecinueve de octubre de dos mil cinco.

Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el testimonio de la ejecutoria dictada por este tribunal en fecha veinticuatro de agosto del presente año, de la que se advierte que en la fecha en que este órgano jurisdiccional resolvió el recurso de reclamación 18/2005-III, interpuesto por el gobernador del estado en contra del acuerdo de presidencia emitido el veintitrés de junio del año en curso. A través del cual se negó a regularizar el procedimiento para dejar insubsistente los actos encaminados a la ejecución de la sentencia de amparo.

Se desprende de dicha resolución, que se declaró fundado el recurso de reclamación, se ordenó dejar insubsistente el acuerdo impugnado en la parte materia del recurso. El requerimiento hecho a la autoridad responsable para que procediera al cumplimiento del fallo protector y todo lo actuado en acato a tal requerimiento, con base en la consideración de que la sentencia que otorgó la protección federal no había causado ejecutoria.

También se advierte del fallo emitido en el recuso de reclamación, que en su segundo punto resolutivo se ordenó remitir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de la ejecutoria mencionada y disquete que la contuviera, para los efectos a que tuviese lugar dentro del amparo directo en revisión número 1070/2005, radicado ante dicha sala; ello en virtud de que al encontrarse subjudice la concesión del amparo otorgado por este órgano jurisdiccional, en atención a ese recurso de revisión, existe la factibilidad de que la determinación tomada, en el sentido de dejar insubsistentes los actos encaminados a la ejecución de la sentencia de amparo, trascienda en la resolución que se adopte en ese medio de impugnación, en la medida que ha sido criterio de la superioridad, que el recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo directo, es improcedente si el tribunal colegiado ha dictado acuerdo declarado que el fallo protector ha causado ejecutoria.

No obstante, del estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se obtiene que la instrucción de este tribunal en pleno, no fue atendida en su integridad, pues no existe acuerdo de presidencia en el que acatando la ejecutoria dictada en el recurso de reclamación, se haya dejado insubsistente la parte relativa del auto de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, en el que se negó regularizar el procedimiento. Tampoco se emitió, en observancia a lo ordenado en la sentencia que recayó al recurso de reclamación que se menciona, el proveído en el que la presidencia ordenara la regularización indicada y dejara insubsistente el requerimiento y todo lo actuado por la autoridad para cumplir el fallo protector.

En efecto, del análisis de las constancias que integran el presente sumario, de pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se aprecia que, después del acuerdo impugnado en el recurso de reclamación, de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco (fojas 343 y 344), obran las siguientes actuaciones:

a).- Constancias de notificación de ese auto a las partes (fojas de la 345 a la 351);

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERACIÓN
DE LA NACIÓN
DE ACUERDOS
AMPAROS

EXPEDIENTE
AL JUDICIAL

SECRETARÍA DE JUSTICIA FEDERAL 0006/2005

b).- Copia del escrito en el que el gobernador del Estado de Nuevo León, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo (fojas de la 352 a la 476);

c).- Oficio en el que el magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, devolvió los autos del juicio natural a este órgano, para ser remitidos a la superioridad en atención al recurso de revisión (foja 477);

d).- Acuerdo dictado el veintisiete de junio del presente año, en el que se tuvo por interpuesto el recurso y se ordenó remitir los autos, así como el escrito correspondiente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (fojas 478 y 479);

e).- Constancias de notificación de dicho acuerdo (fojas de la 480 a la 486);

f).- Solicitud de copias certificadas de todo lo actuado, por parte de la autorizada de la quejosa, y acuerdo que recayó a esa petición (fojas 487 y 488);

g).- Oficios remitidos a este tribunal por el secretario de ~~acuerdos~~ de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó la admisión de los recursos de revisión interpuestos por el gobernador del Estado y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo; así como los sobres en que se remitieron tales oficios (fojas de la 489 a la 492);

h).- Acuerdo en el que se tuvieron por recibidos los oficios indicados en el inciso anterior (foja 493).

Como se ve, no se dictó ningún acuerdo de presidencia tendiente a cumplir con la ejecutoria dictada dentro del recurso de reclamación número 18/2005-III, lo que constituye una irregularidad dentro del procedimiento de amparo, dado que si la instrucción del pleno emitida en los autos del expediente de reclamación, en el sentido de dejar insubsistente la parte respectiva del acuerdo impugnado y regularizar el procedimiento, dejando sin efectos el requerimiento y todo lo actuado por la autoridad para cumplir el fallo protector, no fue materializada en este sumario correspondiente al amparo directo; es incuestionable que la decisión adoptada por el tribunal en pleno, no ha surtido toda su eficacia en cuanto a seguir el curso regular del procedimiento de amparo.

Así es, en la parte final de la sentencia pronunciada en el recurso de reclamación, se resolvió:

Así las cosas, al resultar fundados los agravios del recurrente, lo que procede en el caso es dejar insubsistente el acuerdo impugnado, exclusivamente en la parte materia del recurso, ordenando la regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para lo cual se deja sin efecto el requerimiento hecho a la autoridad responsable para que procediera al cumplimiento de la sentencia dictada en el amparo directo por este tribunal, así como lo actuado en acato a tal requerimiento.

Según se puede advertir, en esa determinación del tribunal colegiado, se ordenó dejar insubsistente el acuerdo impugnado, de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, en la porción que fue materia del recurso de reclamación; y también se ordenó la regularización del procedimiento dentro del juicio de amparo directo, en los términos ahí indicados, esto es, para que se dejara sin efectos el requerimiento hecho a la autoridad responsable a fin de que cumpliera la sentencia de amparo, así como todo lo actuado en cumplimiento a tal requerimiento de presidencia.

Por tanto, si en términos del artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es a la presidencia del tribunal colegiado a quien corresponde llevar el trámite de los asuntos, ésta debió dictar el acuerdo encaminado a materializar en el juicio de amparo directo, los efectos de la ejecutoria pronunciada por el tribunal pleno en el cuaderno relativo al recurso de reclamación, a efecto de que la sentencia produjera todas sus consecuencias, pues de lo contrario, la regularización del procedimiento pretendida se torna ilusoria.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

Así las cosas, a fin de subsanar la omisión en que se incurrió y lograr la efectividad de la sentencia emitida en el recurso de reclamación; con fundamento en el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición su artículo 2º; este tribunal colegiado, con plenitud jurisdicción, deja sin efectos el acuerdo de fecha veintitrés junio de dos mil cinco, exclusivamente en la parte en que negó regularizar el procedimiento para dejar insubsiste todo lo actuado por la autoridad responsable en cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo, y en su lugar declara insubsistente el requerimiento formulado a la sala responsable, mediante oficio de fecha primero de abril de dos mil cinco, en el que además de remitirsele el auto de ejecución que otorgó el amparo a la quejosa, y los autos del juicio natural, se le requirió para que, dentro del término veinticuatro días, comunicara al tribunal colegiado la forma en que hubiera cumplido esa resolución; por consecuencia también se anula todo lo actuado por la sala responsable en acato a ese requerimiento, como la resolución en que se declaró insubsistente la sentencia reclamada, la nueva sentencia que emitió conforme a los lineamientos dados en la que concedió la protección federal, así como los actos que ha encaminado a lograr el cumplimiento de su resolución; todo ello en atención a que, como se resolvió en el recurso de reclamación, la sentencia que otorgó el amparo no ha adquirido firmeza.

Asimismo, agréguese a los autos de este juicio de amparo directo el testimonio con que se da cuenta referente a la ejecutoria dictada dentro del recurso de reclamación señalado, para los efectos legales a que haya lugar, y hágase del conocimiento de las partes la resolución adoptada en el presente acuerdo plenario.

Por otra parte, tomando en consideración que la irregularidad aludida, también implica responsabilidad de la licenciada Elsa Patricia Espinoza Salas, quien en la época en que se dictó la ejecutoria dentro del recurso de reclamación, desempeñaba el cargo de secretaria de acuerdos de este tribunal colegiado, y que en términos de los artículos 61 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de garantías, estaba obligada a asentar constancia de la mencionada sentencia en este cuaderno, y a dar cuenta con la misma al presidente para que dictara las medidas encaminadas a cumplir con dicha resolución del pleno, no obstante, omitió cumplir con esa obligación, sin embargo, no es necesario levantar un severo extrañamiento a la nombrada Espinoza Salas, toda vez que ya no se encuentra laborando en este Tribunal; finalmente, se ordena agregar copia certificada de este auto a su expediente personal, para los efectos legales conducentes.

Además, como dicha irregularidad también deriva de la falta de atención de la oficial judicial Bárbara Evangelina Hernández Contreras, quien ha tenido el expediente bajo su manejo y custodia, sin informar a la Secretaría de Acuerdos con el estado del mismo, con fundamento en el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase a la oficial judicial nombrada un severo extrañamiento, y prevengasele para que en lo sucesivo desempeñe las tareas que le son encomendadas con mayor diligencia, también recuérdesele que en términos de lo dispuesto por el artículo 44, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado A), del artículo 123 constitucional, es su obligación desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus superiores y a las leyes y reglamentos respectivos.

Notifíquese y cúmplase.

A S I, por unanimidad de votos lo acordaron los magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, José Carlos Rodríguez Navarro, José Elías Gallegos Benítez y Martín Ubaldo Mariscal Rojas, secretario en funciones de magistrado, quienes firman, con el secretario de acuerdos: que da fe.

FIRMAS.-LO QUE ME PERMITO COMUNICARLE PARA
SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE SE
CONTRAE EL PROVEÍDO INSERTO.- PROTESTO A USTED MI
ATENTA CONSIDERACIÓN.

Monterrey, Nuevo León, a 21 de noviembre de 2005.

EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO


LIC. MARTÍN RODOLFO LÓPEZ SOLANO.



PODER JUDICIAL FEDERAL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN

040308

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2005 NOV 22 PM 12 40

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Recibido por correo ☐ 01/50

por mensajería ☒ 01/50

y ☐ por correo electrónico

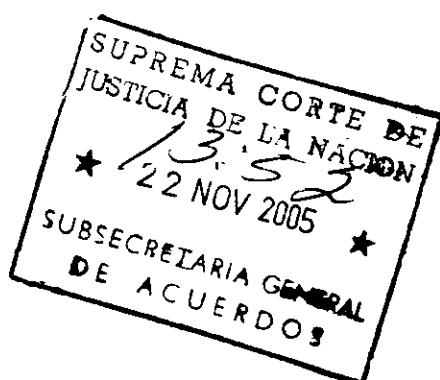
Se adjunta ☒ 01/50

Dispositivo ☒ 01/50

gula, 10/5197020

00628553

SECRETARII



la clarificación de los acuerdos para
el proyecto de
23 NOV. 2005 a las 10:15

RTA PORTE

Condiciones del contrato del envío especificadas en la factura

MGDO. JOSE CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO.
PRESIDENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMVA. DEL CUARTO
CIRCUITO.
DIAGONAL SANTA ENGRACIA 221
FRACC. LOMAS DE SAN FRANCISCO
MONTERREY N. L. C.P. 64710

Envío No. 507 Y 55P



DE LA
E JUSTICIA
GENERAL

DE AM...

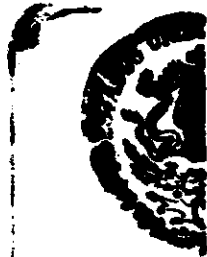
Estadística

22 NOV 2008

SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL DE DEFENSA
FEDERAL DE PROSECUCION



MA CORTE DE
DE LA NACION
GENERAL DE ACUERDOS



Suprema
Justicia de
Secretaria General

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACION EN MEXICO, D.F.
PINO SUAREZ No. 2, COL. CENTRO, DELEGACION
CUAUHTEMOC, MEXICO D.F., C.P. 06065700
SECRETARIA DE ACUERDOS
DIRECTO 328/2004
OF. 15363

SECRETARIA DE ACUERDOS

SECRETARIA DE ACUERDOS
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE ACUERDOS





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



CORTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDOS

QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO:
1070/2005
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y ASUNTOS
VARIOS

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio 15363, de diecinueve del mes y año citados, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, recibido en la Subsecretaría General de Acuerdos el día de ayer. Conste.

México, Distrito Federal, a veinticuatro de noviembre de dos mil cinco.

Agréguese para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, informa el cumplimiento de la resolución emitida en el recurso de reclamación 18/2005-III, de su índice, de veinticuatro de agosto del presente año. Notifíquese por lista y mediante oficio al Tribunal Colegiado del conocimiento.

Lo proveyó y firma el Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan Díaz Romero, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Fco/Javier Barreiro Perera.

FJBP/VPMM

25 NOV. 2005

EN

ANT

PRE

POR LISTA DE LA MISMA FECHA, SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN
DE CONFORTATO CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 23 FRACCIÓN IV Y 29 FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO, DOY FE.

AGENCIADO... EN VISTA DE NO HABER
SUSPENDIDO LA EJECUCIÓN DE LA FECHA DICHA
CIÓN POR MEDIO DE LA... ESTABLECIDO EN LOS
IS 23 FRACCIÓN IV Y 29 FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO, DOY FE.

BUPREM

JUN 7

SECRETARÍA G

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODEREJ
SUPLENIA CO
CURSORETAL
SECCION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES
DE TESIS Y ASUNTOS VARIOS.
FAX: 55 22 80 31

PARA FACILITAR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA
A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
DIRÍJALA A LA OFICINA DE SERVICIOS DIRECTOS J-
17, DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, LOCALIZADA
EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO SEDE DE ESTE ALTO
TRIBUNAL, UBICADO EN PINO SUÁREZ # 2. PLANTA
BAJA, COL. CENTRO, MÉXICO, D.F. C.P. 06065

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO: **1070/2005**
JUICIO DE AMPARO DIRECTO: 328/2004-III
OFICIO NÚMERO: 85216

CORTE DE
DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS

PRESIDENTE DEL SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

En el toca de revisión relativo al juicio de amparo directo
promovido por el **CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL**, se
proveyó un acuerdo cuya copia certificada me permito remitirle, para los
efectos legales consiguientes.

Le reitero mi atenta consideración.

México, Distrito Federal, a veinticuatro de noviembre de
dos mil cinco

LICENCIADO FCO. JAVIER BARREIRO PERERA
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FJBP/PM





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
AMPARO DIRECTO EN REVISION 1070/2005

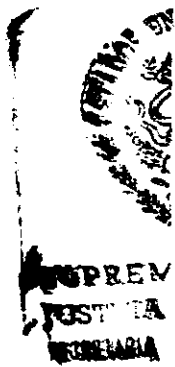
El catorce de julio de dos mil seis, se listó el
amparo directo en revisión número 1070/2005,
promovido por el Consejo de la Judicatura Federal para
la sesión pública del tres de agosto de dos mil seis, y en
esta fecha quedó en lista. El secretario general de
Acuerdos, José Javier Aguilar Domínguez, que da fe.



CORTE DE
E LA NACIÓN
ERAL DE ACUERDOS



LA FEDERACIÓN
TICA DE LA SUPLEN
RAL DE ACUERDOS
AMPA: 106





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

153

QUEJOSO: CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO: 1070/2005
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
ASUNTOS VARIOS



CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONSEJO GENERAL DE ACUERDOS

En México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil siete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el estado que guardan los autos.

24



México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil siete.

Visto el estado del asunto en el que el suscrito fungía como relator y toda vez que el dos de enero de dos mil siete, fui designado Presidente de este Máximo Tribunal, con fundamento en los artículos 14, fracción II, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 34, fracción XXII y 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre del año próximo pasado, retúrnese el presente expediente al Ministro Mariano Azuela Güitrón, quien continuará actuando como ponente en dicho sumario. Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Fco. Javier Barreiro Perera.

FJBP/GZC

24

24

EN 04 ENE 2007

POR LISTA DE LA MISMA FECHA SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.

SE CUMPLÓ LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER APARECIDO LOS INTERESADOS A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚM. 1070/2005

El martes diez de abril de dos mil siete el señor Ministro Azuela Güitrón manifestó que los proyectos de los amparos directos en revisión números 1070/2005 y 1678/2005, que aparecen listados bajo su ponencia en la Lista Ordinaria Diez de dos mil siete, fueron elaborados en dos mil cinco y en dos mil seis, respectivamente, por el señor Ministro, ahora Presidente Ortiz Mayagoitia; que el Consejo de la Judicatura Federal es el quejoso en el primero, con él está íntimamente relacionado el segundo; y por considerar que está en causa de impedimento tanto para conocer de los mismos como para ser ponente, solicitó autorización para retirarlos, a fin de tramitar lo conducente.

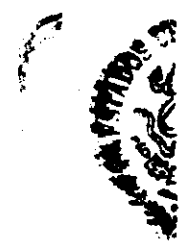
El Tribunal Pleno concedió la autorización correspondiente.

No asistió el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, por estar haciendo uso de vacaciones en virtud de haber integrado Comisiones de Receso.- Doy fe.

LEPG'gvd.

1911

1911
1911
1911



SUPREM
JUSTICIA
ARGENTINA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IMPEDIMENTO 4/2007-PL.

PROMOVENTE: MINISTRO MARIANO
AZUELA GÜITRÓN.

NENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
CRETARIO ADJUNTO: JONATHAN BASS HERRERA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día

VISTOS; y
RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el primero de
noviembre de dos mil cuatro ante la Oficialía de Partes de la Sala
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Nuevo León, Rebeca López Hernández, en su carácter de
representante legal del Consejo de la Judicatura Federal,
promovió juicio de amparo en contra de la sentencia de
veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, dictada en los autos
del recurso de revisión interpuesto en el juicio contencioso
administrativo 251/2003 y acumulado 51/2003.

SEGUNDO. Por cuestión de turno, la demanda de mérito fue
remitida al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Cuarto Circuito, cuyos integrantes emitieron resolución el
primero de abril de dos mil cinco, al tenor del siguiente punto
resolutivo:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE AMPAROS

“ÚNICO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, en contra del acto y por la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y para los efectos indicados en el último considerando de la misma”.

TERCERO. Inconforme con dicha resolución, Alfredo de Guadalupe Martínez Garza, en su carácter de apoderado del tercero perjudicado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (organismo descentralizado), interpuso recurso de revisión, respecto del cual, en proveído de veintidós de junio de dos mil cinco, el Presidente de este Alto Tribunal declaró la incompetencia del Pleno, por lo que ordenó el envío de los autos a la Segunda Sala.

En proveído de veintiocho de junio de dos mil cinco, el Presidente de la Segunda Sala admitió a trámite el recurso de revisión antes señalado; por otra parte, en diverso acuerdo de seis de julio del citado año tuvo por recibido el recurso de revisión interpuesto por el Gobernador del Estado de Nuevo León, en su carácter de tercero perjudicado.

Mediante acuerdo de nueve de agosto de dos mil cinco se turnaron los autos a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para la elaboración del proyecto respectivo, quien fue declarada legalmente impedida para conocer del asunto, según se desprende de la resolución emitida el trece de septiembre

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

siguiente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos del expediente 2/2005-SS.

Derivado de la resolución anterior, en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil cinco se returnaron los autos al Ministro Plutarco I. Ortiz Mayagoitia para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; sin embargo, en virtud de que fue electo el ~~Presidente de este Alto Tribunal~~ en enero de dos mil siete como Presidente de este Alto Tribunal, en diverso acuerdo de tres de enero de dos mil siete se remitió el expediente al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que continuara actuando como ponente.

C. O. Mediante dictamen de diez de abril de dos mil siete, el Ministro Mariano Azuela Güitrón planteó su impedimento para conocer del referido recurso de revisión en los siguientes términos:

“...Del análisis de las constancias que integran el presente asunto se advierte que: a) El Consejo de la Judicatura Federal, a través de Rebeca López Hernández, en su carácter de titular de aquél, el uno de noviembre de dos mil cuatro promovió amparo directo contra actos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León y otras autoridades, el cual fue radicado por el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito bajo el número 328/2004; b) En sesión de uno de abril de dos mil cinco el citado

órgano colegiado resolvió dicho juicio de garantías; y, c) Inconforme con la anterior determinación la empresa tercera perjudicada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado legal, interpuso el presente recurso de revisión.

Con base en los antecedentes que han quedado precisados, considero que se actualiza el motivo de impedimento contemplado en el artículo 66 fracción III, de la Ley de Amparo, por haber gestionado anteriormente el asunto, en la fecha precisada en el inciso a), en mi carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal a través de la servidora publica mencionada en el propio inciso...".

QUINTO. Por acuerdo de once de abril de dos mil siete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo al impedimento antes referido bajo el número 4/2007-PL, así como turnarlo al Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, fracción III, de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ley de Amparo; 10, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 7, fracción III, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se trata de un impedimento planteado para conocer un amparo directo en revisión que se encuentra radicado en el Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Antes de abordar el estudio del impedimento que se plantea, es necesario tener presente que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

CORTE DE
LA NACIÓN
A N N

ARTÍCULO 17. [...]

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..."

El precepto constitucional transcrito, en la porción normativa indicada, alberga el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen en su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones, y el correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas.

De igual forma, dicho precepto hace referencia a cuatro subgarantías que deberán observar los órganos respectivos al

momento de resolver las controversias planteadas, a saber: 1) justicia pronta, 2) justicia completa, 3) justicia imparcial y 4) justicia gratuita.

De manera específica, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.

Sobre este tema, el Poder Reformador señaló en la iniciativa de reforma del artículo 17 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, lo siguiente:

"...La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten..."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

Como puede advertirse, la eficacia del acceso a la justicia no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, porque también debe comprender ciertos matices que permitan suponer que el fallo no está afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva.

Se asevera lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su cumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación y, por otra parte, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de repugnancia o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proponen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitir las.

CORTE
DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS

Bajo esa óptica jurídica, las leyes establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de garantizar que sea imparcial el fallo que dirima la contienda, pero igualmente la misma legislación permite que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con la máxima constitucional de mérito.

Expuesto lo anterior, conviene precisar que el Ministro Mariano Azuela Güitrón formula impedimento, argumentando que se surte la causa establecida en el artículo 66, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone:

“ARTICULO 66.- No son recusables los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los jueces de Distrito, ni las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37; pero deberán manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes:

[...]

III.- Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, en el mismo asunto o en el juicio de amparo;...”.

De conformidad con el precepto trasunto, un funcionario judicial se encuentra impedido para conocer de un asunto cuando hubiere sido apoderado de alguna de las partes en el mismo asunto o en el juicio de amparo.

Ahora bien, de las constancias del amparo directo en revisión 1070/2005 se desprende que en la época en que el Consejo de la Judicatura Federal presentó la demanda de amparo (primero de noviembre de dos mil cuatro), el Ministro Mariano Azuela Güitrón fungía como su Presidente, para lo cual debe tomarse en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

consideración lo dispuesto en los artículos 71 y 85, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señalan:

“ARTÍCULO 71. El Consejo de la Judicatura Federal estará presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien ejercerá las atribuciones que le confiere el artículo 85 de esta ley.

ARTÍCULO 85. Son atribuciones del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, las siguientes:

I. Representar al Consejo de la Judicatura Federal;...”

En este sentido, toda vez que en la fecha en que se promovió el juicio de amparo, el Ministro Mariano Azuela Güitrón fungió como representante del quejoso Consejo de la Judicatura Federal, debe considerarse que se actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 66, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que debe calificarse de legal.

CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN.
SEAL DE ACUERDO

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se califica de legal el impedimento planteado por el Ministro Mariano Azuela Güitrón para conocer del amparo directo en revisión 1070/2005, deducido del juicio de amparo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Notifíquese; agréguese testimonio de esta resolución al amparo directo en revisión 1070/2005, y remítase el expediente a la Presidencia de este Alto Tribunal, para que determine el retorno procedente.

DO
NOTA
SE

EXPEDIENTE
NÚMERO
FECHA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA
JUSTICIA D
GOBIERNO FEDERAL

PODER
SUPREMA
SUBSIST
LA FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ACUERDOS
2005



9
FORMA 13
7

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS IMPEDIMENTO NÚM. 4/2007

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El lunes veintitrés de abril de dos mil siete el Secretario General de Acuerdos dio cuenta de este asunto al Tribunal Pleno. Impedimento número 4/2007, planteado por el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón respecto del conocimiento del amparo directo en revisión número 1070/2005, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas se propuso: "ÚNICO.- Se califica de legal el impedimento planteado por el Ministro Mariano Azuela Güitrón para conocer del juicio amparo directo en revisión 1070/2005, deducido del juicio de amparo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal."

CORTE DE
LA NACIÓN
EL NÚMERO



Puesto a votación el proyecto, se aprobó por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Valls Hernández, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas llegó durante la sesión. No asistió el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, por estar haciendo uso de vacaciones en virtud de haber integrado Comisiones de Receso.- Doy fe.

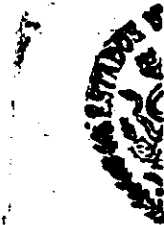
LEPG'gvd.
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRE
SECC



PREMA
VICIA
CE



SUPREM
JUSTICIA
SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Impedimento número 4/2007, planteado por el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón respecto del conocimiento del amparo directo en revisión número 1070/2005, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal.

SESION PÚBLICA DEL TRIBUNAL PLENO del lunes veintitrés de abril de dos mil siete.

AFIRMACIÓN
DE LA VERACIDAD
DE LOS HECHOS

NO

AGUIRRE ANGUIANO

COSSÍO DÍAZ

LUNA RAMOS

FRANCO GONZALEZ

SALAS

GÓNGORA PIMENTEL

GUDIÑO PELAYO

No asistió, por estar haciendo uso de vacaciones en virtud de haber integrado Comisiones de Receso.

AZUELA GÜITRÓN

En causa de impedimento.

VALLS HERNÁNDEZ

SÁNCHEZ CORDERO

Llegó durante la sesión.

SILVA MEZA

ORTIZ MAYAGOITIA

Puesto a votación el proyecto, se aprobó por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Valls Hernández, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia.

ESTADO

PODER
PREM
EUSE

PREMIA
JUSTICIA DI
SECRETARIA

ESTADO

SUPREM
JUSTICIA
SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IMPEDIMENTO 4/2007-PL.

PROMOVENTE: MINISTRO MARIANO
AZUELA GÜITRÓN.

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO ADJUNTO: JONATHAN BASS HERRERA.

VISTO BUENO
MINISTRO

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
veintitrés de abril de dos mil siete.

VISTOS; y
RESULTANDO:

SECRETARIA GENERAL
DE ACUERDOS

2007 ABR 27 P 12: 25

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

PRIMERO. Mediante escrito presentado el primero de
noviembre de dos mil cuatro ante la Oficialía de Partes de la Sala
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Nuevo León, Rebeca López Hernández, en su carácter de
representante legal del Consejo de la Judicatura Federal,
promovió juicio de amparo en contra de la sentencia de
veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, dictada en los autos
del recurso de revisión interpuesto en el juicio contencioso
administrativo 251/2003 y acumulado 51/2003.

SEGUNDO. Por cuestión de turno, la demanda de mérito fue
remitida al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Cuarto Circuito, cuyos integrantes emitieron resolución el
primero de abril de dos mil cinco, al tenor del siguiente punto
resolutivo:

"ÚNICO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, en contra del acto y por la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y para los efectos indicados en el último considerando de la misma".

TERCERO. Inconforme con dicha resolución, Alfredo de Guadalupe Martínez Garza, en su carácter de apoderado del tercero perjudicado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (organismo descentralizado), interpuso recurso de revisión respecto del cual, en proveído de veintidós de junio de dos mil cinco, el Presidente de este Alto Tribunal declaró la incompetencia del Pleno, por lo que ordenó el envío de los autos a la Segunda Sala.

En proveído de veintiocho de junio de dos mil cinco, el Presidente de la Segunda Sala admitió a trámite el recurso de revisión antes señalado; por otra parte, en diverso acuerdo de seis de julio del citado año tuvo por recibido el recurso de revisión interpuesto por el Gobernador del Estado de Nuevo León en su carácter de tercero perjudicado.

Mediante acuerdo de nueve de agosto de dos mil cinco se turnaron los autos a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para la elaboración del proyecto respectivo, quien fue declarada legalmente impedida para conocer del asunto, según se desprende de la resolución emitida el trece de septiembre



siguiente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los autos del expediente 2/2005-SS.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Derivado de la resolución anterior, en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil cinco se returnaron los autos al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; sin embargo, en virtud de que fue electo el dos de enero de dos mil siete como Presidente de este Alto Tribunal, en diverso acuerdo de tres de enero de dos mil siete se remitió el expediente al Ministro Mariano Azuela Guitrón para que continuara actuando como ponente.

CORTE CUARTO. Mediante dictamen de diez de abril de dos mil siete el Ministro Mariano Azuela Guitrón planteó su impedimento para conocer del referido recurso de revisión en los siguientes términos:

"Del análisis de las constancias que integran el presente asunto se advierte que: a) El Consejo de la Judicatura Federal, a través de Rebeca López Hernández, en su carácter de titular de aquél, el uno de noviembre de dos mil cuatro promovió amparo directo contra actos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León y otras autoridades, el cual fue radicado por el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito bajo el número 328/2004; b) En sesión de uno de abril de dos mil cinco el citado

órgano colegiado resolvió dicho juicio de garantías; y, c) Inconforme con la anterior determinación la empresa tercera perjudicada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, por conducto de su apoderado legal, interpuso el presente recurso de revisión.

Con base en los antecedentes que han quedado precisados, considero que se actualiza el motivo de impedimento contemplado en el artículo 66, fracción III, de la Ley de Amparo, por haber gestionado anteriormente el asunto, en la fecha precisada en el inciso a), en mi carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la servidora pública mencionada en el propio inciso...”.

QUINTO. Por acuerdo de once de abril de dos mil siete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo al impedimento antes referido bajo el número 4/2007-PL, así como turnarlo al Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, fracción III, de la



Ley de Amparo; 10, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 7, fracción III, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se trata de un impedimento planteado para conocer un amparo directo en revisión que se encuentra radicado en el Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Antes de abordar el estudio del impedimento que se plantea, es necesario tener presente que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 17. [...]

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..."

El precepto constitucional transcrito, en la porción normativa indicada, alberga el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen en su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones, y el correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas.

De igual forma, dicho precepto hace referencia a cuatro subgarantías que deberán observar los órganos respectivos al

momento de resolver las controversias planteadas, a saber: 1) justicia pronta, 2) justicia completa, 3) justicia imparcial y 4) justicia gratuita.

De manera específica, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.

Sobre este tema, el Poder Reformador señaló en la iniciativa de reforma del artículo 17 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, lo siguiente:

"...La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten..."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Como puede advertirse, la eficacia del acceso a la justicia no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, porque también debe comprender ciertos matices que permitan suponer que el fallo no está afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva.

Se asevera lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho se traduce, por una parte, en la clara observancia de totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su cumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación y, por otra parte, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de repugnancia o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitir las.

CORTE DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS

Bajo esa óptica jurídica, las leyes establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de garantizar que sea imparcial el fallo que dirima la contienda, pero igualmente la misma legislación permite que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con la máxima constitucional de mérito.

Expuesto lo anterior, conviene precisar que el Ministro Mariano Azuela Güitrón formula impedimento, argumentando que se surte la causa establecida en el artículo 66, fracción II, de la Ley de Amparo, que dispone:

"ARTICULO 66.- No son recusables los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los jueces de Distrito, ni las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37; pero deberán manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes:

[...]

III.- Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, en el mismo asunto o en el juicio de amparo;...".

De conformidad con el precepto trasunto, un funcionario judicial se encuentra impedido para conocer de un asunto, cuando hubiere sido apoderado de alguna de las partes en el mismo asunto o en el juicio de amparo.

Ahora bien, de las constancias del amparo directo en revisión 1070/2005 se desprende que en la época en que el Consejo de la Judicatura Federal presentó la demanda de amparo (primero de noviembre de dos mil cuatro), el Ministro Mariano Azuela Güitrón fungía como su Presidente, para lo cual debe tomarse en



consideración lo dispuesto en los artículos 71 y 85, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señalan:

“ARTÍCULO 71. El Consejo de la Judicatura Federal estará presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien ejercerá las atribuciones que le confiere el artículo 85 de esta ley.

ARTÍCULO 85. Son atribuciones del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, las siguientes:

I. Representar al Consejo de la Judicatura Federal;...”

En este sentido, toda vez que en la fecha en que se promovió el juicio de amparo, el Ministro Mariano Azuela Güitrón fungió como representante del quejoso Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que se actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 86, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que debe calificarse de legal.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se califica de legal el impedimento planteado por el Ministro Mariano Azuela Güitrón para conocer del amparo directo en revisión 1070/2005, deducido del juicio de amparo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Notifíquese; agréguese testimonio de esta resolución al amparo directo en revisión 1070/2005, y remítase el expediente a la Presidencia de este Alto Tribunal, para que determine el retorno procedente.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Valls Hernández, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia. El señor Ministro Gudiño Pelayo no asistió, por estar haciendo uso de vacaciones en virtud de haber integrado Comisiones de Receso. El señor Ministro Azuela Güitrón en causa de impedimento. Ausente la señora Ministra Sánchez Cordero durante la vista del asunto.

Fue ponente el señor Ministro José Fernando Franco González Salas.

Firman el Ministro Presidente y el Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

**PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

PONENTE

MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS





IMPEDIMENTO 4/2007-PL.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. J. JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ



AL DE L
DE JUSTI
GENERAL
IN DE AMPAROS

Esta hoja pertenece a la parte final de la sentencia pronunciada en el impedimento 4/2007-PL, promovido por el Ministro Mariano Azuela Güitrón, fallado el día veintitrés de abril de dos mil siete, en el sentido siguiente: **ÚNICO.** Se declara de legal el impedimento planteado por el Ministro Mariano Azuela Güitrón para conocer del amparo directo en revisión 1078/2005, deducido del juicio de amparo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal. **Conste.**



CORTE DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PARA NOTIFICACIÓN EL 03 MAYO 2007

EN 04 MAYO 2007	POR LISTA DE LA MISMA FECHA SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.
SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.	

ESTADOS

PODER J.
SUPREMA
SUBSECO



SUPREMA
JUSTITIA DI
ETARIA GEN



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IMPEDIMENTO: 4/2007-PL
PROMOVENTE: MINISTRO
MARIANO AZUELA GÜITRÓN

Certifico que la presente es copia fiel
compulsada de su original que obra en el impedimento
4/2007-PL, promovido por el MINISTRO MARIANO
AZUELA GÜITRÓN; va constante de siete fojas útiles
debidamente selladas, cotejadas y rubricadas y se
expiden para agregarse como testimonio al amparo
directo en revisión 1070/2005, del índice de este Alto
Tribunal.- Doy fe.

ALTO TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDOS
DE AMPAROS



México, Distrito Federal a siete de mayo de
dos mil siete.

CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE AMPAROS



PODER JUDICIAL DE LA
PRIMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
SECCION DE ADMINISTRACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-34



CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS

QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO:
1070/2005
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En México, Distrito Federal, a diez de mayo de dos mil siete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el estado que guardan los presentes autos y con la copia certificada de la resolución de veintitrés de abril del año en curso, emitida por el Tribunal Pleno de este órgano jurisdiccional en el impedimento 4/2007-PL. Conste.

México, Distrito Federal, a diez de mayo de dos mil siete.

Visto el estado de este asunto, y toda vez que en la resolución emitida por el Pleno de este Alto Tribunal el veintitrés de abril de dos mil siete, en el impedimento 4/2007-PL, se concluyó con el siguiente punto resolutivo: **"ÚNICO. Se califica de legal el impedimento planteado por el Ministro Mariano Azuela Güitrón, para conocer del amparo directo en revisión 1070/2005.- Notifíquese;..."**, con fundamento en los artículos 14, fracción II, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 34, fracción XXII y 81, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil seis, para regular el turno de expedientes, retúrnese el presente expediente al Ministro José Fernando Franco González Salas, quien continuará actuando como ponente en este sumario. Notifíquese por lista.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.

MAEO/VPMM

EN 11 MAYO 2007	POSIÓN DE LA RESOLUCIÓN SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESTADOS CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 28 FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO DOY FE
SIENDO LAS CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES EN VIRTUD DE NO HABER COMPLETADO LA NOTIFICACIÓN SE PONE POR HECHA DICHA NOTIFICACIÓN POR EL SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 28 FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO DOY FE	

DER JU
EMA CO
SECRET
SECC

ESTADO
SUPREM
JUSTICIA
SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

367
OFICIO DGAJ/2405 /2007
México, D.F., 15 de mayo de 2007

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AMPARO

Asunto.- Amparo directo en revisión
1070/2005, derivado del juicio de amparo
directo 329/2004.

H. Suprema Corte de Justicia de la Nación
Presente.

Marino Castillo Vallejo, Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal y representante de este Órgano Colegiado, personalidad que se acredita en términos del nombramiento que se acompaña en copia certificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, en los autos del amparo directo en revisión cuyos datos al rubro se precisan, con el debido respeto comparezco y expongo:

El Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el nueve de abril del presente año, aprobó la propuesta de modificar el punto XII del acta relativa a la sesión privada número Quince, Ordinaria, de fecha veintiséis de marzo de este año, para quedar como sigue:

"XII.- ACUERDO PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO
EN EL EXPEDIENTE VARIOS NÚMERO 670/2006-PL, Y VISTA
DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN RELATIVOS".

En el citado acuerdo se dispuso, entre otras cuestiones, resolver en la misma sesión pública los asuntos relativos a los amparos en revisión números 1070/2005 y 1678/2005.

El asunto 1070/2005, tiene como antecedentes la demanda de amparo directo promovida por esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en representación del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en la cual se señaló como acto reclamado, la resolución que emitió el citado Tribunal Administrativo con fecha 24 de septiembre de 2004, en la cual, en síntesis, se confirma la negativa de exención del pago del servicio de agua potable de los inmuebles ubicados en el número 241, de la avenida Constitución Poniente en el Municipio de Monterrey, y el número 221 de la calle Diagonal de Santa Engracia, fraccionamiento Lomas de San Francisco, en el Municipio de San Pedro Garza García, en esa entidad federativa.



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA DE
SECCION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

366
OFICIO DGAJ/ 2405 /2007

De la demanda antes citada tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, registrándola con el número D.A.-329/2004, y mediante sesión celebrada el uno de abril de dos mil cinco, por mayoría de votos, dicho tribunal resolvió que la Justicia de la Unión ampara y protege al Consejo de la Judicatura Federal.

Incumplidos con la mencionada resolución, el Gobernador del Estado de Nuevo León y el Instituto Público Descentralizado denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en su carácter de terceros perjudicados en el juicio interpusieron recurso de revisión, solicitando que las actuaciones se remitiesen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, se admitieron y registraron bajo el número Amp. Dir. Rev.- 1070/2005.

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El día 12 de abril del año en curso, aún cuando se listó el asunto, se retiró debido al impedimento que planteó para conocer de este recurso el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por lo que se turnó el 12 de abril del citado año a la ponencia del señor Ministro José Fernando Franco González Salas, para que formule la resolución con motivo de la procedencia o improcedencia de dicho impedimento, registrándolo bajo el número 4/2007.

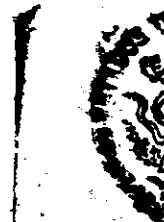


SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA

Por otra parte, en distinto asunto, esta Dirección General promovió el veinticinco de agosto de dos mil seis, demanda de amparo directo en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, respecto de la negativa de exención del pago de derechos por consumo de agua potable, alcantarillado y saneamiento del inmueble ubicado en Avenida Aguascalientes Sur número 603, fraccionamiento Jardines de Aguascalientes, C.P. 20270, en esa ciudad.

Previos los trámites de ley, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, resolvió el once de enero de dos mil siete en el amparo directo A.D.A.- 631/2006, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejercitara su facultad de atracción para conocer de este juicio.

En sesión celebrada el once de abril del año que transcurre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ejercer la facultad de atracción 3/2007-PL, para resolver el juicio de amparo directo A.D.A.- 631/2006.



SUPREMA
CORTA
JUSTICIA



PODER JUDICIAL DE
PRIMA CORTA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
SECCIÓN DE



Por tanto, se advierte que los asuntos antes descritos se encuentran relacionados con motivo de la interpretación del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que están exentos los bienes de dominio público de la Federación, en particular relativo al pago de los derechos por el servicio de suministro de agua

Por consiguiente, con fundamento en lo previsto en el artículo 65 de la Ley de Amparo, se solicita se someta a consideración del Pleno o de las Salas del Alto Tribunal, que cuando se resuelva el amparo directo en revisión E-1076/2006, también se analice el amparo directo A.D.A.- 631/2006, relativo de la facultad de atracción 3/2007-PL, ya que en ambos juicios existe la similitud del tema a tratarse, relativo a la exención del pago por concepto del servicio de agua potable en los inmuebles del dominio público de la Federación.

Por lo expuesto:

A esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente solicito se sirva:

Primero.- Tenerme por reconocida la personalidad con la que comparezco.

Segundo.- En su oportunidad, acordar de conformidad lo solicitado.

Protesto lo necesario

Lic. Marino Castillo Vallejo
Director General

MCV/ESC/ACC/L-70
Volantes 136436 y 136516

026388

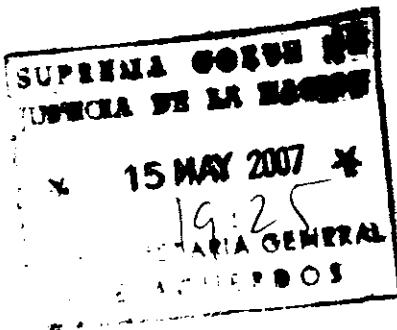
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2007 MAY 15 PM 6 42

OFICINA DE REGISTRO
JUDICIAL Y CANCELACION

Recibido de un enviado en (3) Fogos con:
Un anexo en copia certificada, en (2) Fogos -
2007

SUPRE
JUSTI
SECRETARIA



SECRETARIA
SECCION



PJF 000001
C.I.F.

RAMO I I I

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Núm. 1981

Exp. 73382

C.C. A111030

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

se le confiere facultad que le confiere el artículo 81, fracción XV aplicada por analogía, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de conformidad con los artículos 22 y 26 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en sesión ordinaria celebrada el diez de enero de dos mil siete ha tenido a bien nombrar a usted en el cargo de **Director General**, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con efectos a partir del dieciséis de enero al treinta de junio de dos mil siete, con las atribuciones que marca la Ley y con el sueldo que asigna a ese empleo la partida respectiva del Presupuesto de Egresos.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

México, D.F., a 16 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL



SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

A LICENCIADO MARINO CASTILLO VALLEJO

PRESENTE

A JUDICATURA
UNIDAD DE
IONES LABORALES

1 ABR 2007

P.J.F.

AL C. RECURSOS HUMANOS

Comisión de la
Judicatura Federal

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad de México, D.F., a 16 de enero de 2007, al aceptar el puesto a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, declaro HABER PROTESTADO conforme a lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos guardar ésta y las leyes que de ella emanen; que no desempeño otro empleo y tengo 51 años (cumplidos) de edad.

Con esta fecha y previa la protesta de ley, toma posesión del puesto a que se refiere este nombramiento, la persona a cuyo favor fue expedido

México, D.F., a 16 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

[Handwritten signature]

MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

EN EL CASO DE QUE EL EMPLEADO HAYA SIDO PROMOVIDO DE OTRO PUESTO, se darán los siguientes datos: de lo contrario crucense los casilleros.

RAMO	OFICINA	EMPLEO
XXX	XXX	XXX

Empleos que desempeño:

____ S _____
____ S _____
____ S _____

Edad declarada con anterioridad, para los efectos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

____ años

Nombre del padre:

MARINO CASTILLO MENA (F)

Nombre de la madre:

HORTENSIA VALLEJO SUÁREZ

EL OTORGANTE:

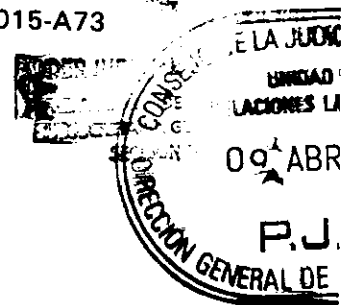
~~LICENCIADO MARINO CASTILLO VALLEJO~~

CLAVE: AA.04.100.1103. CF10106-001

SUELDO MENSUAL COMPACTADO: \$21,208.02

DOMICILIO:
SEGUNDA CERRADA DE LOS CORCELES NÚMERO 33
COLINAS DEL SUR
ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL
01430

FILIACIÓN: CAVM-551015-A73



Recibí Original
Marino Castillo Vallejo

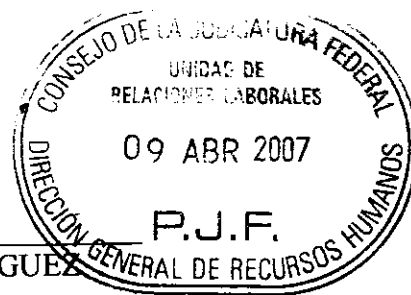
19/01/07

301

MÉXICO, D.F., A NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, EN
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 102, FRACCIÓN XX, DEL
ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
PROPIO CONSEJO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, ADICIONADO MEDIANTE EL SIMILAR
PUBLICADO EN EL REFERIDO DIARIO OFICIAL, EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE
DE DOS MIL SEIS; EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,
CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE DE UNA
FOJA, ES FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE
PERSONAL NÚMERO 73382, CORRESPONDIENTE AL LICENCIADO MARINO
CASTILLO VALLEJO.- CONSTE.-----



Néstor Rolando Aguilar Domínguez
LIC. NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ



1971
SUPREMA
JUSTICIA
SECRETARIA

1971
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARIA
SECCION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

370
FORMA-54

QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO:
1070/2005
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS



A CORTE DE
DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
DE AMPAROS

En México, Distrito Federal, a dieciocho de mayo de dos mil siete, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el oficio DGAJ/2405/2007, de quince de mayo del referido año, del titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, recibido con un anexo en copia certificada en la Subsecretaría General de Acuerdos en la misma fecha. Conste.

RECEBIDO

México, Distrito Federal, a dieciocho de mayo de dos mil siete.

Agréguese para que surtan sus efectos legales consiguientes el oficio y anexo de cuenta. Ahora bien, atento a su contenido dígame al Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, que sus manifestaciones se tomarán en cuenta al momento de dictar resolución en el sumario en que se actúa, por tanto, devuélvase el presente expediente a la atención del Ministro José Fernando Franco González Salas, designado como ponente mediante auto de Presidencia de diez de mayo de dos mil siete, lo anterior, con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.

MAEO/VPMM

Imp

EN 21 MAYO 2007	POR LO QUE DE LA MISMA FECHA SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS, DONDE SE ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 28 FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO DOY FE
SIENDO LAS CIRCUNSTANCIAS EN LA PERSONA ANTES CITADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A QUE NOTIFICACIÓN SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 28 FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO DOY FE	

SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL

CONTROL DE SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES

24 MAY 2007

10:50

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN MESA DE (INFORMES)

11:00

FECHA Y HORA EN QUE PASA A SECRETARIO AUXILIAR
(FIRMA SECRETARIO AUXILIAR)

FECHA Y HORA QUE PASA A REVISOR (DDV ENS)

(FIRMA REVISOR)

FECHA Y HORA QUE PASA A FIRMA AL LIC. ESPARZA O.





AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

C. SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E .

En el reconocimiento de inocencia que se menciona al margen, el
Presidente en funciones de esta Primera Sala dictó el acuerdo siguiente:

"México, Distrito Federal, a diecisiete de mayo de dos mil siete. -----

Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio
DGAJ/2406/2007, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del
Consejo de la Judicatura Federal; visto su contenido del que se desprende
solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le reconozca la
personalidad con la que comparece, así como se someta a consideración del
Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, que cuando se resuelva el amparo
directo en revisión 1070/2005, también se analice el amparo directo A.D.A.-
631/2006, relacionado con la facultad de atracción en que se actúa, ya que en
ambos juicios existe similitud en el tema a tratarse, relativo a la exención del
pago por concepto del servicio de agua potable en los inmuebles del dominio
público de la Federación. Acúsele recibo. -----

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE
ACUERDOS

SOLICITUD DE
EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE
ATRACCIÓN 3/2007-PL

OF. No.
XXX-219-P

CON ANEXO:
COPIA CERTIFICADA
DEL OFICIO
DGAJ/2406/2007 Y SUS
ANEXOS EN UN TOTAL
DE 4 FOJAS ÚTILES.

Ahora bien, en atención al oficio de cuenta, con fundamento en el artículo
25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, infórmesele
que se le reconoce la personalidad con la que comparece de Director General de
Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, la cual acredita con la
copia certificada que acompaña del nombramiento correspondiente, expedido por
el Director General de Recursos Humanos del citado órgano; asimismo,
infórmesele al Director General oficiante, que el amparo directo en revisión
1070/2005, se encuentra radicado en el Tribunal Pleno, en la Ponencia del
Ministro José Fernando Franco González Salas y el amparo directo 631/2006, del
Índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con fecha
once de abril de dos mil siete, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, determinó ejercer la facultad de atracción, para resolver el referido
juicio de amparo, el cual se registró como amparo directo 1/2007, y se turnó a la
Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. -----

Por último, remítase copia certificada del oficio que se acuerda y su anexo
a la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a fin de que determine lo procedente en relación al amparo directo en
revisión 1070/2005. -----

Notifíquese. -----

Así lo proveyó y firma el **MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA**, Presidente
en funciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ante el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, licenciado Francisco Octavio
Escudero Contreras." -----

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.



México, D.F., a 17 de mayo de 2007.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA
PRIMERA SALA

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS
PRIMERA SALA

SNP*rem

ESTADOS A
SUPREMA
JUSTITIA
SECRETARIA



SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 3/2007-PL

COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO DGAJ/2406/2007, DE
FECHA QUINCE DE MAYO DE DOS MIL SIETE, EN CUATRO
FOJAS ÚTILES, DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO
EN ACUERDO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL
SIETE. -----



CORTE DE
LA NACION.
RAL DE ACUERDO

ATG

RECEIVED



UPRE
JUSTICIA
SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

16 / MAY / 07

11:13 am

OFICIO DGAJ/ 2406 /2007
México, D.F., 15 de mayo de 2007

47373

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y AMPARO

Asunto.- Facultad de atracción 3/2007-PI
planteada por el Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Tercer Circuito, derivado del
juicio de amparo directo D.A.- 631/2006.

H. Suprema Corte de Justicia de la Nación
Presente.

Castillo Vallejo, Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Consejo de la Judicatura Federal y representante de este Órgano
de gobierno, personalidad que se acredita en términos del nombramiento que se
acompaña en copia certificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
404, fracción X del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio
Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de
dos mil seis, en los autos de la facultad de atracción cuyos datos al rubro se
precisan, con el debido respeto comparezco y expongo:

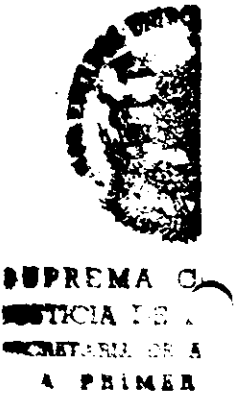
El Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el nueve de abril del presente
año, aprobó la propuesta de modificar el punto XII del acta relativa a la sesión
privada número Quince, Ordinaria, de fecha veintiséis de marzo de este año,
para quedar como sigue:

"XII.- ACUERDO PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO
EN EL EXPEDIENTE VARIOS NÚMERO 670/2006-PL, Y VISTA
DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN RELATIVOS".

En el citado acuerdo se dispuso, entre otras cuestiones, resolver en la misma
sesión pública los asuntos relativos a los amparos en revisión números
1070/2005 y 1678/2005.

En distinto asunto, esta Dirección General promovió el veinticinco de agosto de
dos mil seis, demanda de amparo directo en contra del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes, respecto de la
negativa de exención del pago de derechos por consumo de agua potable,
alcantarillado y saneamiento del inmueble ubicado en Avenida Aguascalientes
Sur número 603, fraccionamiento Jardines de Aguascalientes, C.P. 20270, en
esa ciudad.

SIN TEXTO





PODERA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

48 2
374
OFICIO DGAJ/ 2406 /2007

Previos los trámites de ley, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, resolvió el once de enero de dos mil siete en el amparo directo A.D.A.- 631/2006, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejercitara su facultad de atracción para conocer de este juicio.

En sesión celebrada el once de abril del año que transcurre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ejercer la facultad de atracción 3/2007-PL, para resolver el juicio de amparo directo A.D.A.- 631/2006.

Por tanto, se advierte que en el asunto antes descrito se encuentra relacionado con motivo de la interpretación del artículo 115, fracción IV, inciso I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que están exentos los bienes de dominio público de la Federación, en particular relativo al pago de los derechos por el servicio de suministro de agua potable.

Por consiguiente, con fundamento en lo previsto en el artículo 65 de la Ley de Amparo, se solicita se someta a consideración del Pleno o de las Salas del Alto Tribunal, que cuando se resuelva el amparo directo en revisión 1070/2005, también se analice el amparo directo A.D.A.- 631/2006, relativo de la facultad de atracción en que se actúa, ya que en ambos juicios existe similitud en el tema a tratarse, relativo a la exención del pago por concepto del servicio de agua potable en los inmuebles del dominio público de la Federación.

Por lo expuesto:

A esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente solicito se sirva:

Primero.- Tenerme por reconocida la personalidad con la que comparezco.

Segundo.- En su oportunidad, acordar de conformidad lo solicitado.

Protesto lo necesario

Lic. Marino Castillo Vallejo
Director General

MCV/ESC/ACC/H/0
Volantes 136436 y 136516

026389

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2007 MAY 15 PM 6 43

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recabido de un enviado en (2) Folios con
Un anexo en copia certificada en (2) Folios

2011 MAY 16 A 9:28

SUPREM
JUSTICIA
SECRETARIA

SUPREM
JUSTICIA
SECRETARIA
NA PL

DI
SECRETARIA
PRIM



49 3
PJF 000001
C-IF

375

RAMO III



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Núm. 1981

Exd. 73382

C.C. A111030

CORTE DE
LA NACIÓN

emisor de la facultad que le confiere el artículo 81, fracción XV aplicada por analogía, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de conformidad con los artículos 22 y 26 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, en sesión ordinaria celebrada el diez de enero de dos mil siete ha tenido a bien nombrar a usted en el cargo de **Director General**, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con efectos a partir del dieciséis de enero al treinta de junio de dos mil siete, con las atribuciones que marca la Ley y con el sueldo que asigna a ese empleo la partida respectiva del Presupuesto de Egresos.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

México, D.F., a 16 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL



SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

A LICENCIADO MARINO CASTILLO VALLEJO

PRESENTE

Consybio de la
Judicatura Federal

En la Ciudad de México, D.F., a 16 de enero de 2007, al aceptar el puesto a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, declaro HABER PROTESTADO conforme a lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: guardar ésta y las leyes que de ella emanen; que no desempeño otro empleo y tengo 51 años (cumplidos) de edad.

Con esta fecha y previa la protesta de ley, toma posesión del puesto a que se refiere este nombramiento, la persona a cuyo favor fue expedido

México, D.F., a 16 de enero de 2007.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL

[Signature]

MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

EN EL CASO DE QUE EL EMPLEADO HAYA SIDO PROMOVIDO DE OTRO PUESTO, se darán los siguientes datos: de lo contrario crúcese los casilleros.

RAMO	OFICINA	EMPLEO
XXX	XXX	XXX

Empleos que desempeñó:

____ S _____
____ S _____
____ S _____

Edad declarada con anterioridad, para los efectos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

____ años

Nombre del padre:

MARINO CASTILLO MENA (F)

Nombre de la madre:

HORTENSIA VALLEJO SUÁREZ

EL OTORGANTE:

~~LICENCIADO MARINO CASTILLO VALLEJO~~

CLAVE: AA.04.100.1103. CF10106-001

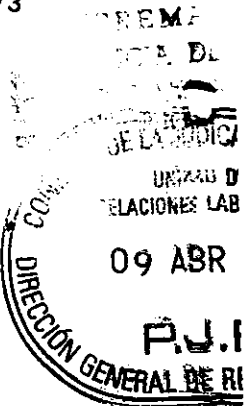
FILIACIÓN: CAVM-551015-A73

SUELDO MENSUAL COMPACTADO: \$21,208.02

DOMICILIO:
SEGUNDA CERRADA DE LOS CORCELES NÚMERO 33
COLINAS DEL SUR
ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL
01430

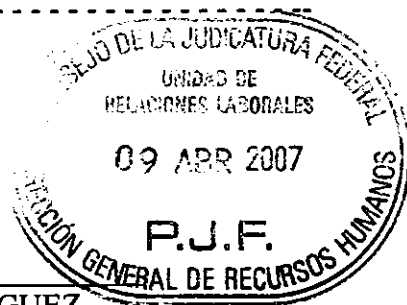
*Recibí Original
Marino Castillo Vallejo*

19/01/07



MÉXICO, D.F., TRIBUNAL FEDERAL, A NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, EN
TÉRMINOS DEL DISPOSITIVO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 102, FRACCIÓN XX, DEL
ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
PROPIO CONSEJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, ADICIONADO MEDIANTE EL SIMILAR
PUBLICADO EN EL REFERIDO DIARIO OFICIAL, EL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE
DE DOS MIL SEIS; EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,
CERTIFICA QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE DE UNA
FOJA, ES FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE
PERSONAL NÚMERO 73382, CORRESPONDIENTE AL LICENCIADO MARINO
CASTILLO VALLEJO.- CONSTE.-

LIC. NÉSTOR ROLANDO AGUILAR DOMÍNGUEZ



LA PRESENTE COPIA ES FIEL, QUE SE OBTUVO DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y SE CERTIFICA EN CUATRO FOJAS ÚTILES, DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE ESTA FECHA, PARA SER REMITIDA A LA SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL SIETE.



EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA.

LIC. FRANCISCO OCTAVIO ESCUDERO CONTRERAS.
SUPREMA JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE ACUERDOS Y
LA PRIMERA SALA

COTEJÓ:
LIC. MA. SOLEDAD NÁJERA PAREDES.



SNP*rem



CORTE DE
LA NACION:
AL DE ACUERDO

SIN TEXTO

612
TEXT

1900
SUPREM
JUSTITIA
SECRETARIA 6

7/enero/2008



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005
QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL**

**PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
SECRETARIOS: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS, ANTONIO
ESPINOZA RANGEL, BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ E ISRAEL
FLORES RODRÍGUEZ**

Vo.Bo.
MINISTRO:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día

COTEJ
COMISIÓN

1 CORTE DE
DE LA NACIÓN
REMI DE ACUERDO

**VISTOS; Y,
RESULTANDO:**

PRIMERO. Por escrito presentado el uno de noviembre de
dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo
León, el **CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL**, a través de
su representante Rebeca López Hernández, solicitó el amparo y
protección de la Justicia Federal contra las siguientes autoridades
y actos reclamados:

**"5. Autoridad ordenadora: Sala Superior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Nuevo León. --- 6. Autoridades**

ejecutoras: --- a) Secretaría de Finanzas del Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.--- b) Tesorería General de Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León. --- c) Tesorería Municipal de Monterrey (Palacio Municipal) con domicilio en la calle de Ocampo y Zaragoza, Zona Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León.--- d) Tesorería Municipal de San Pedro Garza García (Palacio Municipal), con domicilio en la calle de Juárez y Libertad s/n, Zona Centro, C.P. 66200, en San Pedro Garza García, Nuevo León.---7.

Actos reclamados: --- a) De la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, se reclama la ilegal sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, en los autos del recurso de revisión interpuesto por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de su representante legal, parte actora dentro del Juicio Contencioso Administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003, en la cual se resolvió:--- PRIMERO: No ha procedido el recurso de revisión recibido en fecha 22-veintidós de abril del 2004-dos mil cuatro, interpuesto por el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, a través de su representante legal, la C. REBECA LÓPEZ



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE REGISTRO PATRIMONIAL, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CITADO CONSEJO, parte actora dentro del juicio contencioso administrativo número 251/2003 acumulado al 051/2003, en contra de la sentencia definitiva de fecha 30-treinta- de marzo del año en curso, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria de este H. Tribunal, en la cual se declaró el sobreseimiento del juicio respecto al gobernador del Estado y del acto impugnado consistente en la amenaza de corte o suspensión del servicio de agua potable que supuestamente se contenían en las facturas T00131509 y T00134126, emitidas por la Institución Pública Descentralizada denominada Agua y Drenaje de Monterrey; la nulidad de las facturas T00114085, T00121863, T00131509 y T00134126, así como de la amenaza de corte o suspensión del servicio de agua potable y drenaje contenida en la factura T00114085, emitidas por la ya citada institución pública descentralizada y la validez de la resolución contenida en el oficio 179-R10-1/2003, emitida por el Director General de la mencionada paraestatal, en fecha 05- cinco de diciembre de 2002-dos mil dos y de la negativa ficta configurada en torno a la solicitud de fecha 29- veintinueve de enero de 2003 (dos mil tres), que se elevara al

gobernador del Estado donde se negara la exención del pago del servicio de agua potable.---

SEGUNDO: *Se confirma la resolución señalada en el punto resolutivo anterior, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución.---* b) *De las autoridades*

ejecutoras se reclama el cumplimiento que pretendan dar a la sentencia reclamada para realizar el indebido cobro del crédito fiscal por el servicio de agua potable y alcantarillado, así como

la amenaza que conlleva su cobro para que se suspenda dicho servicio, derivado de las facturas

T00131509, T00134126, T00121863, T00114085,

T00137699 que fueron ordenadas por la Institución

Pública Descentralizada Servicios de ~~Agua~~ Drenaje de Monterrey, I.P.D., respecto del ~~servicio~~

que se proporciona en los inmuebles ubicados en

calle Diagonal Santa Engracia número 221 de la Colonia Lomas de San Francisco del Municipio de

San Pedro Garza García, y el de la avenida

Constitución Poniente número 241, en la ciudad de Monterrey, ambos en el Estado de Nuevo León, en

los cuales se encuentran funcionando órganos

jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación."

SEGUNDO. La quejosa estimó violados en su perjuicio, los derechos constitucionales que se encuentran consagrados en los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, expresó los antecedentes de los actos reclamados y, señaló como conceptos de violación, los siguientes:

1) En su **primer** concepto de violación, manifiesta que la sentencia reclamada, viola en su perjuicio los derechos constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, toda vez que incurre en contradicción al, **por una parte**, reconocer la validez de la solicitud de exención del pago del servicio de agua potable y alcantarillado de los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal y declararse incompetente para estudiar la constitucionalidad del artículo 9° del Acuerdo que expidió el Gobierno del Estado de Nuevo León, y **por otra**, determinar en su ejemplar, que no se había reclamado en el escrito de demanda la inconstitucionalidad planteada.

LA NACIÓN.
RAL DE ACUERDO

2) Asimismo, señala que la sentencia recurrida, viola en su perjuicio los derechos constitucionales anteriormente citados, en virtud de que se omitió que las solicitudes de exención del servicio de agua potable y alcantarillado, fueron fundadas en el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Federal, así como en la jurisprudencia 22/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: **"DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL"**, por lo que, conforme a lo dispuesto por

el artículo 192 de la Ley de Amparo, debió resolverse con apoyo al criterio jurisprudencial referido.

3) Aduce, en su **segundo** concepto de violación, que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, empleó razonamientos falsos al declarar infundado su cuarto concepto de invalidez, toda vez que consideró que el pago de servicios de agua y drenaje no constituye una contribución y sí un aprovechamiento, al derivar esta obligación de un contrato administrativo de adhesión y no de un derecho.

4) Precisa además, que los gravámenes con los que se cubre el pago de los servicios aludidos, al contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, tal como lo dispone el artículo 31, fracción IV, constitucional, reciben el nombre de "derechos".

5) Por otra parte, en su **cuarto** concepto de violación, estimó que el Tribunal responsable, debió haber revocado la sentencia del *A quo*, toda vez que, **por una parte**, no valoró que los inmuebles que albergan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, son bienes de dominio público según su destino y, por lo tanto, que están exentos del pago de los derechos por los servicios de agua potable y alcantarillado, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, constitucional, y **por otra**, no consideró que la aplicación de una norma de carácter constitucional prevalece por encima de una norma sustantiva



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN

estatal, conforme al artículo 133 de la Constitución Federal, que dispone sobre la supremacía del propio ordenamiento legal.

6) Sigue aduciendo, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, al no haber considerado que el Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, carecía de competencia legal para resolver las peticiones de exención del pago de servicios de agua potable y alcantarillado, facultad que, en virtud de la naturaleza de las cuotas por el citado servicio, corresponde al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León por tener el carácter de autoridad fiscal en términos de lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, y 41, fracción I, ambos del Código Fiscal del mismo Estado.

CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

7) Señala, en su quinto concepto de violación, que es ilegal el sobreseimiento que declaró la Sala Superior responsable, al considerar que se respetó el derecho constitucional de audiencia al Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que su solicitud de exención ya referida, fue remitida a la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues no basta que la exención sea decretada por un organismo público perteneciente a una institución pública descentralizada del Estado, del cual el Gobernador es el Presidente del Consejo de Administración, ya que los actos de molestia y privación deben ser emitidos por autoridad competente.

8) En el **sexto** concepto de violación, aduce que es ilegal la sentencia reclamada, al confirmar la validez de la negativa ficta que se demandó en el juicio de amparo, toda vez que no tomó en cuenta, que el único facultado para decretar la exención del pago de la cuota de servicios de agua potable y alcantarillado, es el Gobernador Constitucional del Estado, y que al no haber dado respuesta conforme al plazo que establece el artículo 39 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, se configuró la negativa ficta, misma que debió declararse nula con apoyo en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

9) En el **séptimo** concepto de violación, manifiesta que el indebido cumplimiento que se pretenda dar a la sentencia reclamada o la probable suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado, viola en su perjuicio los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, porque desde un inicio las facturas de las que requirió el pago Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, se encontraban viciadas, imposibilitándose su ejecución jurídica de forma legal.

10) Finalmente, en el **octavo** concepto de violación, señala que el artículo 9° del Acuerdo Tarifa 2003, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de febrero de dos mil tres y su fe de erratas del veintisiete de ese mes y año, es inconstitucional porque contraviene el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Federal que dispone la exención



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

FORMA A-53

853

a los bienes del dominio público de la Federación, de la obligación de pagar las contribuciones ya referidas.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, por auto del uno de diciembre de dos mil cuatro, admitió a trámite la demanda de amparo directo, misma que registró con el número **328/2004**.

Seguido el juicio en todos sus trámites legales, el Tribunal Colegiado de Circuito, en sesión de uno de abril de dos mil cinco, resolvió el asunto en el sentido siguiente:



CORTE DE
DE LA NACIÓN
JERAR DE ACUERDO

NICO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, en contra del acto y por la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y para los efectos indicados en el último considerando de la misma."

Las consideraciones en que se basó el Tribunal Colegiado de Circuito, fueron, en la parte que interesa, las siguientes:

- Estimó que la existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido por la responsable y las actuaciones que remitió para justificarlo, y que como una cuestión previa al estudio de los conceptos de violación, se debía aludir a la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal, parte quejosa en el juicio de amparo, a fin de determinar que este

órgano está legitimado en el juicio y que, además, no existe relación de dependencia entre el Tribunal Colegiado del conocimiento y ese órgano técnico-administrativo.

- Consideró que el Consejo de la Judicatura Federal, no es un órgano de naturaleza jurisdiccional, sino meramente administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales federales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Además, los Magistrados de Circuito, así como los Jueces de Distrito, cuentan con autonomía e independencia respecto al dicho organismo, conservando íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos.

- Tal es la independencia que se suscita entre los órganos referidos, que el artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Federal dispone que las decisiones que tome el Consejo de la Judicatura Federal sobre designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de verificar su adecuación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que consagra el principio de independencia e imparcialidad de los juzgadores federales con el fin mantener una aplicación adecuada del derecho.

- En el mismo sentido, manifestó que el hecho de que la parte quejosa pretenda obtener una decisión favorable en cuanto



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

a la exención del pago de servicios de agua potable y alcantarillado, no implica que el Tribunal Colegiado del conocimiento vea afectada la imparcialidad de su dicho, dado que aun si se llegara a estimar fundada la pretensión, ningún beneficio se generaría al propio órgano jurisdiccional; menos aún, podría formularse consulta al Consejo de la Judicatura Federal, para que brinde asistencia técnica-jurídica para la resolución del asunto, toda vez que éste, constituye una de las partes que intervienen en el juicio de amparo.



Indicó, que no se puede perder de vista, que en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, cuando el promovente del juicio de amparo tenga reconocida su personería ante la autoridad responsable, la misma será admitida en el juicio citado para todos los efectos legales, siempre que se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas, lo que en el caso sucede, por lo que este tema no puede introducirse oficiosamente a la *litis* constitucional.

- Por lo tanto, concluyó que el presente juicio de amparo resulta procedente, al ser promovido por el órgano facultado para acudir en defensa de los bienes que forman parte del Poder Judicial de la Federación, y que se destinan al servicio público federal de impartición de justicia.

- Por otra parte, en cuanto al tema de la exención del pago de servicios públicos de agua potable y alcantarillado y, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, inciso c) constitucional,

estimó que la consideración de preservar la Hacienda Municipal frente a las decisiones de política fiscal de las Legislaturas Estatales, originó que no se autorizara la exención de las contribuciones reservadas a la Hacienda Municipal y que sólo por excepción, procedían aquellas referentes a los bienes de dominio público de la Federación, los Estados y los propios Municipios.

- Consideró necesario identificar la naturaleza de las fuentes de ingreso reservadas al municipio, que se enumeran en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal. Al respecto mencionó que son las:

“a).- contribuciones sobre propiedad inmobiliaria---

b).- participaciones federales ---c).- ingresos por la

prestación de servicios públicos ---De estas tres

categorías, interesan para la resolución del presente asunto las descritas en los incisos a) y c),

que son las vinculadas a las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria y a las contribuciones

causadas con motivo de los servicios públicos

prestados por la administración municipal. ---Sobre

esos ingresos de la Hacienda Municipal, la fracción

IV del artículo 115 constitucional, dispone

expresamente: ‘Las leyes federales no limitarán la

facultad de los Estados para establecer las

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni

concederán exenciones en relación con las mismas. . .

Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.' ---De ello se infiere que el autor de la norma, al disponer que los bienes de dominio público de la Federación se encontrarán exentos del pago de las contribuciones previstas para los municipios, se refirió tanto a las derivadas de la propiedad inmobiliaria, como a las que surgen de ingresos captados por la hacienda municipal por la prestación de servicios públicos. ---Luego, si a estas dos categorías de ingresos tributarios se refiere claramente el autor de la norma, cuando prescribe que sólo se autorizarán las exenciones por los bienes de dominio público, resulta por tanto claro para este tribunal colegiado, que el caso de las contribuciones (derechos) por el servicio de agua que presta el Municipio, se halla efectivamente incluido en el supuesto de exención de mérito, con independencia de que el servicio público de agua potable y alcantarillado lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, como en el caso lo es 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey'..."

- De esta manera, manifestó que las bases de organización política y administrativa municipal, que tienden a asegurar la libertad hacendaria, consisten en que los municipios tengan a su cargo, entre otras funciones, la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, y que únicamente cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que de forma directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo temporalmente de algunos de ellos. Así, en este aspecto, resolvió que:

“ ... Por lo tanto, no es óbice lo que argumenta la autoridad responsable en la sentencia reclamada en el sentido de que el supuesto de exención establecido en el artículo 115, fracción IV, inciso C), no se surte en el caso, porque no es el municipio quien presta el servicio público de agua potable y drenaje, sino que el mismo es prestado por un organismo público descentralizado del Estado, denominado ‘Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey’; pues tal como ya se ha señalado, las cuotas que pagan los particulares por la prestación del servicio público de agua y drenaje forman parte de los recursos municipales por propia disposición constitucional, y participan de las características de los derechos, con independencia de que el servicio lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, porque la coordinación celebrada con el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Estado para que éste preste el servicio por medio de un organismo como el señalado, que fue creado exclusivamente para ese fin, no es perpetua sino temporal por mandato de la norma suprema, y no debe afectar la calidad de 'recursos municipales' que corresponde a esas cuotas, sino que es factible revertirla cuando los municipios tengan la capacidad de hacerse cargo directamente de la prestación del servicio público."



En el mismo sentido, mencionó que en los artículos 119, 130 y 132, todos ellos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, también se dispuso la libertad hacendaria de los municipios de la Entidad, y que la prestación del servicio público de agua se trata queda a cargo de los mismos, de manera exclusiva y temporal. Así, no es posible sostener que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, sea una institución pública descentralizada totalmente independiente del Estado y de los municipios que conforman el área metropolitana, dado que no se debe perder de vista, que es un organismo estatal, y que por disposición de la Constitución Federal, la prestación del servicio corresponde originariamente a los Municipios, quienes se pueden coordinar con el Estado para que éste se encargue de prestarlo por sí mismo o por conducto del organismo creado para tal función.

- Además, estimó que conforme al artículo 3° del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, las contribuciones locales se

clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, donde los derechos son contribuciones que establece la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por percibir servicios que presta el Estado en sus funciones, dentro de las cuales se halla el servicio de agua y alcantarillado, por lo que sus cuotas no pueden ser consideradas como un aprovechamiento sino como un derecho. Señaló que:

“Mientras que los derechos siempre son ingresos que consisten en sumas de dinero, que el Estado cobra a las personas que se benefician por la prestación de un servicio en funciones de derecho público, como lo es servicio de agua y alcantarillado, o bien por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, esto es, una remuneración legal, por un servicio, uso o aprovechamiento de bienes proporcionados por el Estado; los aprovechamientos son ingresos que derivan de otro tipo de funciones de derecho público, como las multas y los recargos, pero no constituyen una cantidad que se entrega a cambio de un beneficio prestado por el Estado.”

- Adujo, que es necesario precisar, que la pertenencia de los bienes al dominio público de la Federación en el presente caso, se acreditó, a través de las constancias correctamente exhibidas en el juicio contencioso administrativo, con la demostración de que éstos forman parte del patrimonio de la quejosa y que se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

FORMA A-53

386

destinan a la realización de un servicio público como lo es la impartición de justicia, por lo que encuadran en el supuesto de exención ya aludido, previsto en el artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional.

- Indicó que al resultar fundados los conceptos de violación en materia de constitucionalidad, era innecesario estudiar los referentes a cuestiones de legalidad, pues la parte quejosa no podría obtener mayor beneficio que el alcanzado. Lo anterior, porque consideró que le asistía la razón a la parte quejosa, ya que el acuerdo de Tarifa 2003 reclamado viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 115 tantas veces citado, al pretender que una dependencia federal que opera con bienes inmuebles del dominio público de la Federación, pague los derechos por el servicio de agua y alcantarillado.

CUARTO. Inconforme con dicha sentencia, **Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey**, a través de su representante Alfredo de Guadalupe Martínez Garza, quien tiene el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio de amparo, interpuso el catorce de junio de dos mil cinco recurso de revisión, mismo que por acuerdo de presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintidós de junio de dos mil cinco, se remitió su conocimiento a la Segunda Sala de este órgano jurisdiccional, por declararse el Tribunal Pleno, legalmente incompetente para ello.

Por proveído de veintiocho de junio de dos mil cinco, el entonces presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal,

admitió el recurso de revisión de referencia en el que además, se ordenó la notificación a la autoridad responsable, al tercero perjudicado y al Procurador General de la República para la formulación del pedimento respectivo.

Asimismo, el **Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León**, José Natividad González Parás, autoridad que también tiene el carácter de tercero perjudicado, interpuso recurso de revisión el veintisiete de junio de dos mil cinco.

Recurso, que por acuerdo de seis de julio de dos mil cinco, el entonces Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo admitió.

El Agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.

Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil cinco y, en acatamiento a lo acordado por los señores Ministros integrantes de la Segunda Sala, en sesión pública de once de noviembre de dos mil cinco, se remitió el asunto al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por diverso acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil cinco, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó devolver los autos al señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia para que formulara el proyecto respectivo y diera cuenta con él al Pleno del Alto Tribunal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

FORMA A-53

387

Por proveído de tres de enero de dos mil siete y, en virtud de **que el señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia fue designado** Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se retornó el expediente al señor Ministro Mariano Azuela Güitrón para que actuara como ponente en el mismo.

En sesión de veintitrés de abril de dos mil siete, el Tribunal Pleno resolvió por unanimidad de ocho votos, el impedimento número de expediente 4/2007-PL, en el sentido de:



UNICO. Se califica de legal el impedimento
teado por el señor Ministro Mariano Azuela
Güitrón para actuar como ponente para conocer del
amparo directo en revisión 1070/2005, deducido del
juicio de amparo 328/2004, promovido por el
Consejo de la Judicatura Federal."

CONSIDERANDO

PRIMERO. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Tercero, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno,

toda vez que se promueve en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en la cual se declararon fundados los conceptos de violación, en los que se interpreta directamente el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Los recursos de revisión fueron interpuestos en tiempo, toda vez que la sentencia recurrida se notificó a las partes el diez de junio de dos mil cinco (fojas 287 y 288 del expediente del juicio de amparo) y los recursos de revisión del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey y del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, se interpusieron, respectivamente, el catorce y veintisiete de junio de dos mil cinco, esto es, dentro del plazo concedido en la Ley de Amparo para ello.

En efecto, el plazo de diez días hábiles con que cuentan los recurrentes para interponer el recurso de revisión, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo, comenzó a correr el catorce de junio de dos mil cinco, y concluyó el veintisiete del mismo mes y año, debiéndose descontar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las autoridades recurrentes están legitimadas para interponer recurso de revisión en su carácter de terceros perjudicados que les fue reconocido en el juicio de amparo, en



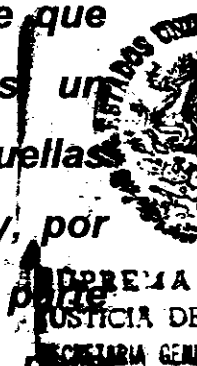
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

terminos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fueron parte contraria del quejoso en el juicio natural del que proviene la sentencia reclamada.

Sirve de apoyo a la consideración anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO PERJUDICADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO EXISTA EL ESTUDIO DE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL QUE AFECTE SU ESFERA JURÍDICA. Los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la tramitación del recurso de revisión contra sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver amparos directos, disponen que tal recurso procede siempre que exista un tema propiamente constitucional y se colmen los requisitos de fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales que al efecto expida, sin que de su texto se advierta restricción alguna para que legítimamente cualquiera de las partes del juicio de

garantías, entre ellas, el tercero perjudicado, pueda hacerlo valer. En estas condiciones, tomando en consideración lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXXIV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 42, en el sentido de que el tercero perjudicado puede interponer el recurso de revisión en amparo indirecto donde se cuestione la inconstitucionalidad de una ley, se concluye que como tal aspecto de legitimación no es un problema exclusivo del amparo indirecto, aquellas reglas deben hacerse extensivas al directo y, por ende, el tercero perjudicado, en su calidad de parte en el juicio de garantías, está legitimado para recurrir la sentencia dictada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito que, con afectación a su esfera jurídica, resuelva un tema propiamente constitucional.” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, marzo de 2007, tesis 2a./J. 18/2007, página 513)



CUARTO. En los agravios hechos valer, el aduce recurrente tercero perjudicado, **Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey**, a través de su representante Alfredo de Guadalupe Martínez Garza, en esencia, que:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

FORMA A-53
389

A) La ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo, es violatoria y contraria a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento, no realizó el análisis de la causa de improcedencia relativa a que los actos reclamados fueron consentidos, motivo suficiente para que de acuerdo con el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, se sobresea en el juicio.

B) Los funcionarios públicos, Víctor Manuel Mendicuti y Alejandro Romero Gudiño, carecen de legitimación y personería para demandar en juicio, en virtud de que sus demandas fueron por su parte a los acuerdos plenarios números 25/2004 y 46/2004 del Consejo de la Judicatura Federal, requeridos para que dicho órgano del Poder Judicial de la Federación, pudiera iniciar los juicios respectivos, hecho que representa una causal de improcedencia no prevista en la resolución de la sentencia recurrida.

C) Los juzgadores se avocaron a hacer un estudio a favor del Consejo de la Judicatura Federal, violando en su perjuicio las disposiciones de orden público dispuestas en el artículo 73 de la Ley de Amparo.

D) La sentencia recurrida es imprecisa, incongruente y está incorrectamente fundamentada y motivada, por otro lado, tampoco contiene una interpretación exacta del artículo 115 constitucional.

E) Los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, debieron haber sobreseído en el juicio de amparo directo, ya que el Acuerdo de Tarifa Agua 2003, no constituye el primer acto de aplicación para el Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que entró en vigor el uno de febrero del mismo año y hasta el año de dos mil tres, promovió el juicio contencioso administrativo, por lo que el juicio de amparo debió sobreseerse por improcedente.

F) La sentencia recurrida viola en su perjuicio los artículos 14, 16, 103 y 107, todos ellos de la Constitución Federal, en virtud de que varía la acción legal del Consejo de la Judicatura Federal y modifica la *litis*, al introducir situaciones particulares no consideradas en las demandas originalmente planteadas, en relación con el artículo 9° del Acuerdo de Tarifa 2003, dictado por el Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, del veintiocho de febrero de dos mil tres.

G) Finalmente, señala que conforme al artículo 40 de la Constitución Federal que dispone que los Estados de la República están legalmente facultados para emitir sus propias leyes, la legislación local del Estado de Nuevo León, podía legislar en relación con la prestación del servicio público de agua potable y drenaje sanitario en el sentido de que está a cargo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; así como que el artículo 9° del Acuerdo de Tarifa 2003 es constitucional, por lo que la parte quejosa sí está obligada al pago de cuotas y tarifas del servicio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

referido, en términos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León.

QUINTO. Por su parte, los agravios hechos valer por el **Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León**, son los siguientes:

A) En el primero, que es inusitado e inconveniente el esfuerzo del tribunal *A quo* por justificar su independencia e imparcialidad frente al quejoso Consejo de la Judicatura Federal, pues el propósito es erróneo al observarse la clara dependencia y subordinación de dicho órgano jurisdiccional al Consejo de la Judicatura Federal, tal como se advierte de los artículos 94, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, particularmente en lo que hace a los aspectos operativos, administrativos, de vigilancia e incluso personales.

Continúa manifestando, que al estar a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, salvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es posible que el Consejo de la Judicatura Federal promueva un juicio de garantías y un Tribunal Colegiado de Circuito resuelva concederle el amparo, pues técnica y jurídicamente resulta paradójico que éste se haya concedido por el Poder Judicial de la Federación, a través del Tribunal Colegiado de Circuito, a favor de uno de sus órganos integrantes, como es el Consejo de la Judicatura Federal.

B) En el **segundo** agravio hecho valer, estima que el hecho de que el tribunal *A quo* haya abordado el estudio de lo que se consideró como el fondo de la *litis* constitucional, viola en su perjuicio, el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, porque omitió analizar la existencia de causales de improcedencia como es la referente a que el Acuerdo de Tarifa Agua 2003, es un acto derivado de otro consentido.

Asimismo, aduce que el Tribunal Colegiado de Circuito debió detectar que la parte quejosa en su demanda de amparo, en torno a la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo impugnado, no formuló propiamente un concepto de violación, por lo tanto, debió declarar sus argumentos inoperantes y sobreseer en el juicio. En efecto, señala que debió sobreseerse en el juicio de amparo, porque en contra de los actos reclamados a las autoridades del Estado de Nuevo León, la parte quejosa pudo promover la controversia constitucional contemplada en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

Considera que el juicio de amparo está creado únicamente para los gobernados y, el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un órgano sin personalidad jurídica, no tiene la titularidad de derechos constitucionales; por lo tanto, no podía presentar la demanda de amparo.

C) En el **tercer** agravio, la parte recurrente menciona, que la sentencia recurrida contiene una serie de incongruencias, tanto de orden procesal como de fondo, mismas que trascendieron al



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

391

sentido del propio fallo, en su perjuicio. Alega que se distorsionó la *litis* a favor del Consejo de la Judicatura Federal, para abordar el estudio de la constitucionalidad del Acuerdo impugnado, aseverando que en ésta se hallan fundados, tanto el acto impugnado en el procedimiento contencioso de origen, como en la sentencia reclamada en el juicio de amparo.

Sigue manifestando, que el Tribunal *A quo*, no advirtió la verdadera pretensión del Consejo de la Judicatura Federal al promover los juicios contenciosos administrativos cuya segunda instancia generó la sentencia reclamada en el juicio de amparo, pues la acción de nulidad tiende a que sea precisamente el Gobierno Constitucional del Estado de Nuevo León, y no el Director General de la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, quien resuelva la solicitud de exención formulada en el oficio correspondiente.

D) En el **cuarto** agravio y en cuanto a las cuestiones constitucionales, aduce el recurrente que la concesión del amparo constituye un desacierto, así como una equívoca interpretación y aplicación del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que el Tribunal *A quo* manifestó que la exención prevista en el artículo citado, se actualiza cuando el servicio lo preste el municipio, lo que no acontece en la especie, pues el servicio lo presta Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Asimismo, estima que la ilegalidad de la sentencia combatida surge al considerar que las cuotas que pagan los

particulares por la prestación del servicio de agua y drenaje, forman parte de los recursos municipales por disposición del artículo 115 de la Constitución Federal, cuando en realidad, este precepto constitucional alude a que la libertad hacendaria de los municipios aplica a los ingresos que reciban por los servicios que efectivamente presten, y no a que se deba recibir indiscriminadamente los ingresos de la prestación del servicio de agua potable, aunque no sea el Municipio quien brinde tal servicio.

En el mismo sentido, señala que resulta inexplicable que en la sentencia recurrida se haya declarado inconstitucional el artículo 9 del Acuerdo de Tarifa Agua 2003, al contravenir lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, bajo el argumento de que este numeral, exenta a la Federación del pago del servicio de agua potable, cuando lo que verdaderamente dispone, es que respecto de los ingresos que perciba el Municipio por los servicios que preste, los bienes de la Federación estarán exentos, sin que sea dable estimar que los ingresos que reciban otras dependencias u organismos pertenezcan a los Municipios, aunque éstos no presten el servicio.

También indica, que la exención no puede otorgarse a favor de la Federación, porque las tarifas de agua y drenaje, constituyen un aprovechamiento y no una contribución (derecho), debido a que entre los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado y la institución pública descentralizada, no existe una relación tributaria. De esta forma, el servicio no lo presta



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FEDERAL

alguna Secretaría o dependencia del Estado, sino un organismo paraestatal, por lo que los ingresos que se obtienen por el pago del servicio de agua y drenaje, forman parte de dicho organismo. Además, las cuotas y tarifas que aplican al organismo operador del servicio público de agua potable, no son establecidas como contribuciones por el Congreso de la Unión.

Finalmente, manifiesta que la deficiente interpretación del artículo 115 constitucional, colisiona gravemente con el sistema federal recogido en el artículo 40 de la Constitución Federal, pues se colisiona el interés de la Federación con el de los Estados federados con las entidades municipales, desconociendo la autonomía jurídico-política de su existencia y la individualidad de sus prerrogativas y de su patrimonio, careciendo de sustento pretender que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey deba brindar gratuitamente sus servicios institucionales, a costa de sus recursos financieros.

SEXTO. Previo el estudio de los agravios hechos valer por las recurrentes, es menester analizar la procedencia del recurso de revisión.

El artículo 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, establece los casos excepcionales en que procede el recurso de revisión en amparo directo:

Dicho numeral dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: --- IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.”

La exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 107, fracción IX, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras, respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual, la reforma pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en congruencia con el carácter uniinstancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en aquellos casos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal, pues éste debe concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprenden un alto nivel de importancia y trascendencia y que, por tal razón, impactan en la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional.



En base en lo anterior, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:

a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio, y

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

En relación con el segundo de los requisitos antes mencionados, el punto primero del Acuerdo en cita señala, que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, con casos análogos.

Ahora bien, en el caso, si bien por lo que hace a los argumentos hechos valer en los agravios —que se analizarán en el siguiente considerando—, no hay materia de constitucionalidad alguna, pues tienden a señalar la existencia de causas de improcedencia que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento a juicio de las recurrentes, debió advertir y, en otros se señalan cuestiones de legalidad, lo cierto es que, también en los agravios, se hacen valer cuestiones de constitucionalidad.

De manera que el presente recurso sí es procedente pues es necesario determinar si conforme al artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, los bienes del dominio público de la Federación están exentos del pago de las contribuciones por los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

conceptos de agua potable y drenaje, cuando dichos servicios son prestados por un organismo público descentralizado del Estado.

Además, se actualiza la excepción a la regla general relativa a que las sentencias dictadas en el juicio de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo supuestos como el presente si se toma en cuenta que se plantea la interpretación directa al artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional; por lo tanto, el recurso de revisión es procedente.

SÉPTIMO. En relación con los agravios resumidos en los incisos A), B), C), E) y F) del quinto considerando, así como los agravios marcados con los incisos A), B) y C) en el sexto considerando, este Tribunal Pleno estima que son aspectos de legalidad, por lo tanto, ha lugar a declararlos inoperantes, pues no corresponden a la materia de estudio de los amparos directos en revisión, que es propiamente la materia de constitucionalidad, tal como se advierte de la tesis de jurisprudencia número 2ª/J.53/98, de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio se comparte, y con el rubro, texto y datos de identificación que a la letra dicen lo siguiente:

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES. Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia

deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes.” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, tesis 2a./J. 53/98, página 326)

En efecto, la recurrente Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en sus agravios, estima esencialmente que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque los funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal que promovieron el juicio carecen de legitimación; además de que el Tribunal Colegiado de Circuito desvió la litis constitucional al estimar situaciones particulares no consideradas en la demanda de amparo.

Estos argumentos al no contener cuestión de constitucionalidad alguna, no son materia del presente recurso, por lo que deben declararse inoperantes.

Lo mismo sucede con los siguientes agravios hechos valer por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, quien en esencia considera que existe una dependencia entre el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento y el Consejo de la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

FORMA A-53

395

Judicatura Federal, por lo tanto, no es posible que éste órgano del Poder Judicial de la Federación haya interpuesto el juicio de amparo.

Además, señala que para resolver el asunto, pudo haber presentado una controversia constitucional, contemplada en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

Por otro lado, aduce que el Tribunal Colegiado de Circuito debió analizar la causa de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII de la Ley de Amparo, porque la parte que el Consejo de la Judicatura Federal, consintió la ley impugnada (es un acto derivado de otro consentido), y que se disipó la *litis* porque no advirtió la verdadera razón del Consejo, de haber presentado la demanda de amparo.

Pues bien, los argumentos antes resumidos, son de legalidad, de manera que al no corresponder su estudio a la materia de constitucionalidad, se declaran inoperantes.

OCTAVO. No obstante lo inoperante de dichos agravios, este Tribunal Pleno estima necesario precisar si la quejosa puede promover en contra del cobro de contribuciones locales juicio de amparo y si los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación pueden tramitarlo y resolverlo con total independencia.

En primer lugar, debe precisarse que las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías según las bases del

artículo 9° de la Ley de Amparo, cuyo precepto legal nació desde la vigencia de la ley publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, para distinguir la forma como podrían promoverlo las personas morales privadas y las oficiales, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 8o. Las personas morales privadas podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes.”

“ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.”

Como puede observarse, la Ley de Amparo distinguió entre personas morales privadas y personas morales oficiales, para los efectos de su representación, por lo que es básico señalar que el único ordenamiento que define a las personas morales también llamadas colectivas o jurídicas es la Convención Interamericana sobre personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el derecho internacional privado, publicada el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1°. La presente Convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA D

de los Estados Partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución.--- Se aplicará esta convención sin perjuicio de convenciones específicas que tengan por objeto categorías especiales de personas jurídicas."

Las personas jurídicas, a título enunciativo, están previstas en el artículo Segundo del Código Civil Federal, de la forma siguiente:

CO
LA FACCION
AL DE**TÍTULO SEGUNDO.--- De las personas morales.---**

ARTÍCULO 25. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.--- VII. Las personas

morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736."

Del anterior precepto se advierte que el Código Civil Federal no define el tipo de personas jurídicas colectivas, pero sí enuncia a las de "carácter público" y "de naturaleza privada", que en la doctrina se pretenden definir de la siguiente forma:

"C L A S E S --- 5) Clases. --- Las personas jurídicas pueden ser: públicas (de Derecho público) o privadas (de Derecho privado); asociaciones o fundaciones; de interés público o de interés privado.--- 6) Públicas y privadas.--- Se discute cuál es el criterio acertado para distinguir las personas en públicas y privadas. En nuestra opinión **Personas jurídicas públicas son las entidades que teniendo personalidad están encuadradas en la organización estatal, formando parte de la misma en uno u otro sector. Por ejemplo, una provincia, un municipio, una Universidad, el Instituto Nacional de Industria, el Patrimonio forestal del Estado y otras muchas Entidades autónomas.**--- La existencia, además del Estado, de pluralidad de personas públicas se debe a que aquél para la consecución de sus fines ha de servirse de organismos colaboradores y auxiliares, y, por ello, aceptar la existencia de entes menores o, a veces, crearlos él mismo o, incluso en ocasiones,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

incorporar a la maquinaria estatal, entes que existían desde antes como organizaciones privadas.--- Personas jurídicas privadas son las que no forman parte de la organización estatal, como un club de recreo o una sociedad mercantil.” (La Persona Jurídica. Manual Albaladejo García. Civitas. España 1974).

**“CAPÍTULO V --- LA PERSONA MORAL. -
CORPORACIONES. - FUNDACIONES. -**

DEFINICIÓN DE PERSONAL MORAL.--- En el título anterior fijamos el concepto de persona física, partiendo del punto de que la persona es el sujeto capaz de derechos y obligaciones, en virtud de que está dotada de razón y voluntad.--- Para el estudio de la persona moral e indispensable examinar y conocer primeramente las más importantes personas morales marcadas en nuestra legislación.--- Nuestro Código Civil vigente, en su artículo 25, nos enumera quiénes son personas morales. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; (la fracción XVI del 123

constitucional previene: "Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.).--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la Ley.--- Las personas morales comprendidas en la fracción I del artículo 25 que acabo de transcribir encajan dentro de la clasificación de personas morales de Derecho Público. Dado la brevedad de este trabajo, trato de explicar en él únicamente a la persona moral de Derecho Privado, no estudiaré ni analizaré a la Nación, a los Estados y a los Municipios, así como a las demás corporaciones de carácter público comprendidas en la fracción II del citado artículo 25." (Tesis para obtener el grado de licenciado en derecho de Rubén Talamantes P., titulada "Naturaleza de las personas morales", Escuela Libre de Derecho).

En tal virtud, las personas jurídicas públicas son aquellas entidades que teniendo personalidad están comprendidas en la organización estatal, formando parte de ella en uno u otro sector y, por exclusión, son personas jurídicas privadas aquellas que, por su naturaleza, no tienen estas características. Entre las primeras,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

se ubican las señaladas en las fracciones I y II del artículo 25 del Código Civil Federal, y las segundas, las restantes que se enuncian en este numeral.

Bajo esa óptica, la persona jurídica pública recae en un ente indeterminado denominado Estado-Gobierno, el cual se compone de diversos órganos públicos que dependen de él; por ende, para analizar si alguno de estos últimos, por su estructura, constituye una persona moral pública, debe atenderse a sus particularidades esenciales, dado que la actuación estatal es demasiado compleja para precisar en un solo postulado cuándo reúne los matices para ser considerada persona moral pública.

Así, las personas jurídicas públicas –nombre jurídicamente correcto– también son llamadas personas jurídicas oficiales, que en esencia, están referidas a la entidad Estado-Gobierno.

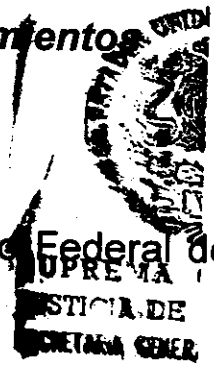
Esta concepción genérica fue adoptada en la Ley de Amparo, en especial, en su artículo 9º, que actualmente, dice:

“ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.--- Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes.”

El párrafo segundo del artículo transcrito se reformó mediante Decreto publicado el uno de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en cuya exposición de motivos, se estableció:

“Exposición de motivos.--- Entre estas importantes aportaciones son especialmente relevantes:--- La adición del segundo párrafo del artículo 9º, para que las personas morales oficiales estén exentas de otorgar las garantías que la Ley de Amparo exige, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles...”

Por su parte, el señalado artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevé:



“ARTÍCULO 4º. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes.--- Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN

atribuciones.--- La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o representación."

Con base en lo expuesto puede concluirse que las personas morales oficiales pueden actuar en un doble carácter como entes dotados de poder público, y esencialmente, como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hayan investidos, mientras que los segundos obran en condiciones similares a los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos.

Lo anterior significa que las personas morales oficiales, por regla general, tratándose de asuntos del orden civil en el que sean demandadas, al incorporarse con esta calidad en el juicio, lógico es que tienen la misma situación que el actor particular; por ende, actúan como persona moral de derecho privado, siendo evidente que contra las determinaciones que les sean desfavorables puede promover juicio de amparo y, de igual manera, por la naturaleza de la relación tributaria, el contribuyente, aunque sea una persona moral oficial, puede promover también juicio de amparo contra el cobro respectivo, ya que actúa en un plano de derecho privado al quedar ceñido al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Además, la afectación a los intereses patrimoniales no debe verse como una situación estricta vinculada a la privación de algún derecho de propiedad o posesión, sino en sentido amplio cualquier situación especial que pudiera afectar esos intereses, por tanto, si al Consejo de la Judicatura Federal se le pretenden cobrar tributos de carácter local o municipal es indudable que se ubica en la regla prevista en el artículo 9° de la Ley de Amparo, porque se trata de una persona moral oficial perteneciente a un poder público, el que no desarrolla su objeto al tener la calidad de obligado tributario en un determinado ordenamiento legal, es decir, tiene la calidad de cualquier otro contribuyente de derecho privado.

Luego, el Consejo de la Judicatura Federal es una persona moral oficial, por lo que en caso de que estime que se afectan sus intereses patrimoniales, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo puede acudir como parte quejosa a un juicio de garantías, siempre que actúe como persona oficial de derecho privado como puede suceder tratándose del cobro de contribuciones, ya que lo hace en su calidad de sujeto pasivo, sin que se soslaye que desde la Quinta Época hasta la actual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las contribuciones no forman parte del patrimonio privado del Estado en su carácter de persona moral al no ubicarse en la Ley General de Bienes Nacionales y, por ende, el juicio de amparo que intente es improcedente, lo cual obedece a que lo promueve como un ente dotado de poder público, esto es, con su calidad de sujeto activo de la relación tributaria, siendo por estos matices que no estaría en aptitud legal de promover el juicio a diferencia de la presente hipótesis donde el quejoso actúa en un



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

plano tributario de subordinación; además debe tenerse en cuenta que no es un órgano legitimado para promover una controversia constitucional, porque es incontrovertible que no se encuentra en alguna de las hipótesis descritas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, ya que este último señala:

“ARTÍCULO 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:--- I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:--- a).- La Federación y un Estado o el Distrito Federal;--- b).- La Federación y un municipio;--- c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;--- d).- Un Estado y otro;--- e).- Un Estado y el Distrito Federal;--- f).- El Distrito Federal y un municipio;--- g).- Dos municipios de diversos Estados;--- h).- Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;--- i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;--- j).- Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la

constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y--- k).- Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.--- Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.--- En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.”

SECRETARÍA DE JUSTICIA

NOVENO. Por lo que hace al segundo aspecto, es decir, respecto de la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal y su relación con los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Pleno estima que la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal estriba en ser un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, pues sus atribuciones no están encaminadas a resolver jurisdiccionalmente conflictos, sino que posee facultades de organización interna y de administración, reglamentarias, de designación, de organización jurisdiccional, de disciplina y carrera judicial.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Las anteriores atribuciones se encuentran consagradas en el artículo 94, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone, en la parte que interesa, que ***“La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes...”***, es decir, el citado Consejo tiene atribuciones administrativas y no de orden jurisdiccional, como sí las tienen esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito.

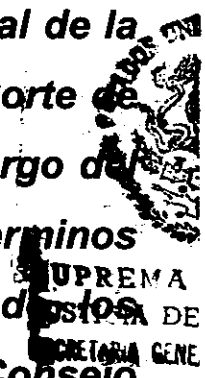
Por otra parte, con fundamento en el artículo 100 constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, particularidades paralelas a sus atribuciones de administración, vigilancia y disciplina que son únicamente de carácter administrativo y no jurisdiccional.

Asimismo, el artículo constitucional referido en el párrafo anterior, establece la integración del Consejo, los requisitos y cualidades que deben reunir los consejeros, el tiempo que dura su encargo, que se ejercerá con independencia e imparcialidad, que sólo pueden ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Federal, que funciona en pleno o en comisiones, así como las facultades del pleno para resolver sobre la designación,

adscripción y remoción de los Magistrados y Jueces, y diversos asuntos que la ley secundaria determine.

Es también, atribución del órgano referido, propiciar la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos restantes del Poder Judicial de la Federación, tal como lo señala el artículo 68 de la Ley Orgánica de este Poder, que a letra dice:

“ARTÍCULO 68. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. --- El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este último.”



Por lo anterior, no es posible estimar que exista una relación de jerarquía entre el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el primero es un órgano administrativo que realiza las tareas de vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y, por ende, no guarda relación jerárquica con los segundos.

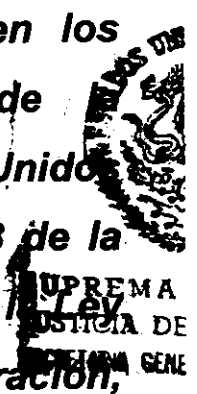


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Elo fue precisado por el legislador en la reforma del artículo 94 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, en donde se aclaró que entre el Consejo de la Judicatura Federal y los demás órganos del Poder Judicial de la Federación, no existe supremacía jerárquica de aquél frente a éstos últimos, tal como se advierte en la parte considerativa de la exposición de motivos de la citada reforma, que dice:

“... estas Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia advertimos que de aprobarse la reforma constitucional en estudio, se perfeccionaría la relación existente entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo interprete de nuestro ordenamiento jurídico, y el Consejo de la Judicatura Federal, cuya función constitucional es la correcta administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte.--- D. El Presidente de la República propuso adicionar en la última parte del párrafo primero del artículo 94, la mención de que el Consejo de la Judicatura Federal sea un órgano del Poder Judicial de la Federación. El objetivo perseguido en la iniciativa presidencial fue dejar en claro que el Consejo de la Judicatura Federal, si bien forma parte del Poder Judicial de la Federación, tiene una naturaleza jurídica diferente

consistente en que los Tribunales Colegiados de Circuito están impedidos para conocer de los asuntos en los que interviene el Consejo de la Judicatura Federal como su superior administrativo. --- En efecto, en principio debe decirse, en relación con la competencia originaria de los Tribunales Colegiados de Circuito que, tal y como lo aducen los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, dicha competencia tiene su fundamento en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva dictada por un órgano jurisdiccional en materia administrativa, dispositivos que a continuación se transcriben: --- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Se transcribe) --- Ley de Amparo. (Se transcribe) --- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (Se transcribe) --- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Se transcribe) --- Ley de Amparo. (Se transcribe) --- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (Se transcribe) --- Una vez precisado lo anterior, requiere determinarse si asiste o no razón a los Magistrados integrantes del





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto

Circuito cuando aducen que el asunto que se plantea en el caso reviste la importancia y trascendencia que justifique que este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción, apoyándose para arribar a dicha conclusión, sustancialmente, en que al ser el juicio de garantías promovido por el Consejo de la Judicatura Federal como superior administrativo de los Tribunales Colegiados de Circuito, impide su conocimiento por parte de aquellos órganos colegiados constituyendo una instancia de trascendencia universal para todos los Tribunales Colegiados de Circuito del país. --- No cabe duda que la mención del Consejo de la Judicatura Federal como quejoso constituye una característica particular del asunto que, por sí sólo, justifica que se trata de un asunto de interés y trascendencia por su originalidad, pero no por las razones que señalan los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito que solicita el ejercicio de la facultad de atracción. --- En principio, cabe precisar que respecto a las acepciones gramaticales de interés y trascendencia a que se refieren los artículos 107, fracción V, inciso d), segundo párrafo, de la Constitución Federal y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como causa para el ejercicio de la facultad de atracción

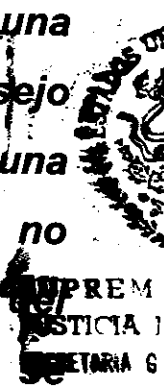
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos cuya competencia originaria corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, conviene precisar que la Segunda Sala del Alto Tribunal ha definido el alcance de la expresión trascendencia al analizar la procedencia del recurso de revisión fiscal ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a los artículos 240, 242 y 244 del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos sesenta y nueve; que por lo demás dicho recurso ya no es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino de los Tribunales Colegiados de Circuito en términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción I-B de la Constitución Federal: consideraciones que se contienen en la tesis visible a fojas 74, tomo 7, Tercera Parte, Séptima Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: --- "REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO." (Se transcribe) --- En cuanto al enunciado "interés", el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo define como: "--- (Del lat. interesse, importar). M. Provecho, utilidad, ganancia. 2. Valor que en sí tiene una cosa. (...) 4. Inclinação más o menos vehemente del ánimo hacia un objeto, persona,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

narración, etc. (...)" --- De lo anterior se tiene que la **naturaleza excepcional de un asunto, por su entidad y consecuencia, es una razón que justifica el ejercicio de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ello derivará cuando el propio órgano jurisdiccional estime que un asunto reviste características especiales que así lo ameriten, esto es, que por su interés, excepcionalidad y trascendencia deba ser ocer de él; sin embargo, dicha facultad es discrecional ya que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen disposición sobre el particular. Lo anterior fue precisado por la anterior Tercera Sala del Máximo Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 3a./J. 43/91, visible a fojas 62, tomo VIII, noviembre, Octava Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación, que señala: --- "ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL." (Se transcribe) --- Una vez precisado lo anterior, se tiene que en la especie las razones expuestas por el Tribunal Colegiado de Circuito para considerar de especial interés y consecuencia el amparo directo de que se trata, resultan incorrectas por lo siguiente. --- Efectivamente, es inexacto que el Consejo de la Judicatura Federal sea un órgano jerárquicamente superior a los Tribunales Colegiados de Circuito,**

eventualidad que, de suyo, desautoriza el criterio propuesto para solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción. --- Para arribar a la anterior conclusión, se hace necesario referirse a lo dispuesto por los artículos 94 y 100 de la Constitución Federal que establecen y regulan las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal. --- (Se transcribe) --- Como se desprende de la lectura integral de los preceptos constitucionales transcritos con antelación, es una determinación de la Ley Suprema que el Consejo de la Judicatura Federal tiene la naturaleza de una autoridad de carácter administrativo, no jurisdiccional. --- Así es, en el primer párrafo del artículo 94 constitucional se establece que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, esto es, en él se determina la estructura e integración del Poder Judicial de la Federación. --- En el segundo párrafo del propio numeral, se puntualiza que la administración, vigilancia y disciplina del propio Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las bases previstas en la misma Ley Suprema y en las demás





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

leyes; por tanto, es indudable que la competencia del Consejo se limita al orden administrativo, máxime si se toma en consideración que esas atribuciones originalmente correspondían a este Alto Tribunal y la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro tuvo como uno de sus objetivos principales ése, es decir, quitar funciones administrativas a la Corte y otorgárselas al Consejo. --- En efecto, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, modificó de manera importante la organización del Poder Judicial de la Federación.

CORTE DE LA NACIÓN
FUNDAMENTALMENTE

Dicha reorganización se tradujo, fundamentalmente, en una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyas facultades como tribunal constitucional fueron ampliadas y reforzadas, así como en la creación del Consejo de la Judicatura Federal como órgano especializado de gobierno, administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones. --- Dichas funciones fueron plasmadas en el artículo 100 constitucional que, como se dijo, señala la integración, estructura y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal al señalar las disposiciones generales sobre la función central del mismo, que es la

administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el dispositivo constitucional que se comenta, establece la integración del Consejo, los requisitos y cualidades que deben reunir los consejeros, el tiempo que dura su función, que ejercerán con independencia e imparcialidad, y el hecho de que sólo pueden ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Federal, el funcionamiento del Consejo en pleno o en comisiones, y las facultades del pleno para resolver sobre designación, adscripción y remoción de los Jueces y Magistrados así como diversos asuntos que la ley secundaria determine. --- En este sentido, los artículos 68 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisan las funciones del Consejo de la Judicatura Federal dispuestas por la Constitución Federal antes señaladas. --- Se desprende de todo lo anterior, que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con funciones y ubicación jerárquica distinta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Federal Electoral, a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a los Juzgados de Distrito, sin que entre aquél órgano y éstos exista un orden jerarquizado ni de índole administrativa ni mucho menos jurisdiccional, pues sus funciones están



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN


claramente delimitadas por la Constitución Federal al encomendar al Consejo de la Judicatura Federal, una función meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción, sin que de ningún modo pueda derivar de ellas alguna función superior a su esfera administrativa frente a los órganos jurisdiccionales que componen el Poder Judicial de la Federación. --- Ello fue explicitado por el legislador al modificar el artículo 94 de la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, donde el legislador precisó precisamente que entre el Consejo de la Judicatura Federal y los demás órganos del Poder Judicial de la Federación, no existe supremacía jerárquica de aquél frente a éstos últimos. --- En efecto, en la exposición de motivos propuesta a la Cámara de Origen (Senadores) el seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la parte que informa el asunto, dice: (Se transcribe) --- Mediante dictamen de veintisiete de abril de mil novecientos noventa y nueve, elaborado por la Cámara de Senadores en relación con la reforma en comento, en lo relativo, se expuso: --- (Se transcribe) --- Finalmente, en la discusión de la reforma, verificada en la Cámara de Senadores en la misma fecha del citado dictamen, en la parte relativa, se indicó: (Se transcribe) --- Por lo tanto, y debido a

que, como se expuso, el Consejo de la Judicatura Federal no es superior administrativo de los Tribunales Colegiados de Circuito, circunstancia relevante en la que se basa la solicitud de facultad de atracción del Tribunal Colegiado de Circuito, este Tribunal Pleno estima que, por lo que se refiere a dicho aspecto, no debe ejercer la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo promovido por el Consejo citado contra los actos reclamados del Juez Administrativo Municipal en el Estado de Guanajuato, pues tales argumentos revelan interés y trascendencia del asunto. ---

En apoyo a lo anterior, cabe citar las tesis de jurisprudencia emitidas por la Tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos criterios se comparten por esta Segunda Sala. --- Tesis 3a./J. 45/91 y 3a./J. 46/91, respectivamente, visibles a fojas 60, tomo VIII, noviembre, Octava Época, compiladas en el Semanario Judicial de la Federación, que dicen: ---

“ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO DEBE HACERSE RESTRICTIVAMENTE.” (Se transcribe) ---

“ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SÓLO DEBE EJERCERSE CUANDO SE FUNDE EN RAZONES QUE NO PODRÍAN DARSE EN LA MAYORÍA NI EN LA TOTALIDAD DE LOS ASUNTOS.” (Se transcribe)...



Suprema
Corte de
Justicia de
la Nación




PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

De las consideraciones transcritas derivó la tesis aislada de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo rubro, texto y datos de identificación dicen:

“CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO ES UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación integral de lo dispuesto en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 68 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que el consejo en cita es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con funciones distintas a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las del Tribunal Electoral, a las de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a las de los Juzgados de Distrito, por lo que entre aquel órgano y éstos no existe un orden jerarquizado de naturaleza jurisdiccional, toda vez que sus atribuciones están plenamente delimitadas por la mencionada Constitución Federal, al encomendar a tal consejo una actividad meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción. Lo anterior se confirma con el contenido de la exposición de motivos de seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, así como

del dictamen de veintisiete de abril siguiente elaborado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de su discusión, respecto de la reforma al citado artículo 94 de la Constitución Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mencionado año, en el sentido de que la modificación introducida en este precepto precisa el sentido de las reformas constitucionales de 1994, en tanto hace evidente que no existen jerarquías orgánicas al interior del Poder Judicial, sino fundamentalmente una distribución de funciones. (Novena Época, Segunda Sala, Apéndice actualización 2002, tomo VII, conflictos competenciales, tesis 20, página 66)



En consecuencia, este Tribunal Pleno considera necesario subrayar, que aun cuando no es materia de la *litis* en este asunto, no existe dependencia ni sumisión de órgano jurisdiccional alguno al Consejo de la Judicatura Federal, pues su naturaleza como órganos del Poder Judicial de la Federación, es distinta y no hay razón para considerar que existe una posición jerárquicamente subordinada en el caso concreto, del Tribunal Colegiado a la parte quejosa, Consejo de la Judicatura Federal, y con ello, pretender la decisión favorable en cuanto a la exención del pago de servicios de agua potable y alcantarillado, tal como se advierte de los argumentos vertidos a lo largo de este considerando.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FEDERAL

DÉCIMO. Para dar respuesta a los agravios vinculados con el problema de constitucionalidad, es pertinente señalar que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa manifestó que el artículo 9° del Acuerdo Tarifa Agua 2003 o Acuerdo por el que se aprueba la nueva estructura de cuotas y tarifas para la prestación de los servicios públicos de agua potable, de drenaje sanitario y saneamiento, incluyendo en su precio el 25% veinticinco por ciento por concepto de cuota de drenaje, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado el veintiocho de febrero de dos mil tres en el órgano oficial informativo estatal, que prevé las cuotas relativas a los servicios de agua potable y alcantarillado en los Municipios de Monterrey y San Pedro Garza García -lugares donde se encuentran inmuebles pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal-, contraviene las bases del artículo 115 de la Constitución Federal, porque no establece la exención atinente a los bienes de dominio público de la Federación.

Dicho artículo dispone:

“ARTÍCULO 9°. La Federación, el Estado, los Municipios, las empresas de participación estatal, los organismos descentralizados, las instituciones de asistencia pública o privada, universidades, colegios, escuelas y demás centros de enseñanza, oficiales y privados y cualquier otra institución o entidad pública, están obligados a pagar sus consumos de agua potable y servicio de drenaje sanitario de acuerdo a las tarifas y cuotas que les

sean aplicables de acuerdo a lo establecido en los artículos 27, 29, 40 inciso "a" y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León."

Estos servicios públicos no son prestados por los Municipios sino por un organismo público descentralizado llamado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado, el cual recauda los ingresos que derivan de la aludida prestación de servicios municipales, de acuerdo con los artículos 2°, 3° y 10 de la ley que crea esa institución pública, y 3°, 15, 40 y 41 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, que respectivamente señalan:

**LEY QUE CREA UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA
DESCENTRALIZADA CON PERSONALIDAD JURÍDICA
PROPIA Y CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MONTERREY
QUE SE DENOMINARÁ "SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE
DE MONTERREY"**

"ARTÍCULO 2o. La Institución tendrá por objeto prestar los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial..."

"ARTÍCULO 3o. El patrimonio de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey se integrará en la siguiente



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

forma:--- a)--- c) Con las cuotas percibidas por la prestación de los servicios de agua y drenaje..."

"ARTÍCULO 10. Las tarifas que hayan de someterse a la aprobación del Estado se elaborarán con el propósito de lograr que sus productos sean bastantes para cubrir los gastos de operación y mantenimiento, la depreciación, amortización de instalaciones y equipos, la amortización de principales e intereses de empréstitos a cargo de la producción, las reservas adecuadas para reparaciones normales del sistema y aquellas otras reservas que aconseje una prudente administración."

DE ACUERDO

LEY DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

"ARTÍCULO 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:--- a)--- e) Organismos Operadores: Organismos públicos descentralizados del Estado o de los Municipios cuyo objetivo general será la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento..."

"ARTÍCULO 5o. La administración de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento en el

Estado se llevará a cabo por:--- I.--- II. Los Organismos Operadores Estatales..."

"ARTÍCULO 6o. La administración a que se refiere el artículo anterior comprenderá las siguientes acciones, conforme a la distribución de competencia prevista en esta Ley:--- I.--- III. La prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en la entidad..."

"ARTÍCULO 15. En la zona conurbada del Área Metropolitana que comprende los Municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y el parque Ciudad Industrial Mitras, en García, N.L. los servicios se prestarán por el organismo público estatal descentralizado denominado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey" I.P.D. No obstante, y por circunstancias más favorables de carácter financiero, de eficiencia en la prestación de los servicios y de beneficio comunitario, los servicios que actualmente presta "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", I.P.D. podrán ser concesionados a los particulares, conforme a las prescripciones establecidas en el Artículo 7 fracción V y en el Capítulo V de esta ley.--- El



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

Organismo Público denominado "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey", I.P.D., efectuará la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial que se aprovechan para el suministro del área metropolitana de Monterrey, con sus respectivos acueductos, y podrá en su caso, celebrar convenios con los Municipios donde se originan las fuentes de abasto o los que estén aledaños a los acueductos que conducen el agua al área metropolitana, para entregarles agua en bloque, de acuerdo a la dotación que establezca la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y conforme a las tarifas que tenga establecidas para tal efecto

CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
SE DE ACUERDO

"ARTÍCULO 40. Las cuotas y tarifas que apliquen los distintos organismos operadores, serán aprobadas por las siguientes instancias:--- a) En las zonas conurbadas cuyos servicios se presten por los organismos públicos descentralizados o concesionarios, su aprobación será por el Estado, a través del Ejecutivo a propuesta del Consejo de Administración, en los términos de lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera del Estado."

"ARTÍCULO 41. Las cuotas y tarifas deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación,

administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema. Entendiéndose por costo financiero el derivado del servicio de la deuda.”

De igual forma, cabe puntualizar que el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, prevé que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos siguientes:

“ARTÍCULO 115.--- I.--- III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:--- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales...”

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARÍA GENERAL

De lo anterior se desprende claramente que la prestación de los servicios públicos, entre otros, de agua potable, alcantarillado y drenaje, son estrictamente municipales, aunque el inciso i), de la misma norma constitucional autoriza a que ***“cuando a juicio del ayuntamiento respectivo, sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.”***



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Lo anterior evidencia que los servicios públicos municipales pueden ser prestados temporalmente por el Estado en sí o por el organismo que precise (centralizado o descentralizado), por lo que en ambos casos el Estado lleva a cabo la función pública, sin que por este hecho pierda la calidad de servicio público municipal, ya que actúa auxiliariamente en su prestación, a cambio de recibir los ingresos derivados de ella.

Ahora bien, el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Carta Fundamental, prevé:



ARTÍCULO 115.-- IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, en todo caso:--- a)--- c) Los ingresos derivados de la prestación de servicio públicos a su cargo.--- Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean

utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público...”

De una cuidadosa lectura del anterior artículo, se podrá notar que expresamente señala que las contribuciones o ingresos que dimanen de los servicios públicos a cargo del Municipio, esto es, que los preste propiamente esta entidad de gobierno, podrán ser materia de exención, entre otros, sobre bienes de dominio público de la Federación, pero nada se destaca cuando los mencionados servicios públicos municipales no están a cargo del Municipio sino que en un plano de colaboración los presta el Estado en sí mismo o a través de un organismo público estatal.

En ese sentido, tiene especial importancia significar que los ingresos que recibe el Municipio por prestar servicios públicos en su demarcación territorial tienen la calidad de contribuciones o de ingresos tributarios según el propio artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, pero igualmente tienen esa calidad los ingresos que recauda el Estado o el organismo descentralizado local al prestar tales servicios públicos municipales, si se pondera que se trata de una prestación pública patrimonial porque puede ser exigida por un órgano del Estado y recae sobre los recursos o la fuente de riqueza de los sujetos obligados, que se establece de forma unilateral y coactiva ya que se impone su cumplimiento aun contra la voluntad del gobernado, sin darle garantía de audiencia.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Se expone que dichos ingresos provienen de una prestación pública patrimonial de carácter unilateral y coactiva, pues el mismo artículo controvertido señala que los particulares y las entidades de gobierno 'están obligados a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario', además de que el artículo 16 de la ley que crea el organismo público descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey establece que los adeudos se harán efectivos a través del procedimiento económico coactivo; de ahí que desde el punto de vista constitucional se trata de un tributo o contribución, ya que no pierde esta calidad por el hecho de que los servicios públicos los preste un órgano del Estado de Nuevo León.

De apoyo a lo anterior, en sentido contrario, la tesis de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro, texto y datos de localización, los siguientes:

A CORTE DE
DE LA NACIÓN.

SEMA DE JUEVES

CUOTAS COMPENSATORIAS. NO TIENEN NATURALEZA JURÍDICA DE CONTRIBUCIONES, EN VIRTUD DE QUE SU ESTABLECIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO AL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ESCUCHE A LAS PARTES INTERESADAS E, INCLUSO, AL ACREDITAMIENTO DE QUE LAS IMPORTACIONES SUJETAS A INVESTIGACIÓN SE REALIZARON EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Y CAUSARON O AMENAZARON CAUSAR DAÑO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL. De lo dispuesto en el contexto normativo que rige el establecimiento de


las cuotas compensatorias establecidas para contrarrestar las importaciones realizadas en condiciones de dumping, se advierte que la atribución que al respecto se confiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía), no es una expresión de la potestad tributaria conferida originalmente en sede constitucional al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Locales, menos aún, de la que al tenor del artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el referido Congreso puede autorizar al titular del Ejecutivo Federal, ya que al encontrarse condicionada al desarrollo de un procedimiento en el que se escuche a las partes que puedan verse afectadas con el establecimiento, al acreditamiento de que las importaciones respectivas se realizaron bajo la citada práctica desleal y causaron o amenazaron causar daño a la producción nacional, y existir la posibilidad de que aun cuando se reúnan estos elementos, la autoridad deba abstenerse de crear la respectiva prestación patrimonial o revocar la fijada provisionalmente, si los exportadores extranjeros asumen el compromiso de revisar sus precios o el nivel de sus exportaciones dirigidas hacia la República mexicana, resulta patente que las citadas cuotas no tienen las finalidades propias de una





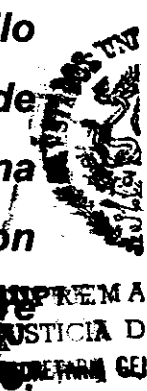
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

contribución, que justifican que su establecimiento no esté condicionado a requisitos de esa naturaleza, ni pueden considerarse, válidamente, como una expresión de la potestad tributaria del Estado, dado que ésta constituye una manifestación unilateral emitida en ejercicio del poder de imperio cuya expresión principal constituye el dictado de normas a fin de crear tributos.” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, agosto de 2001, tesis 2a. CXXII/2001, página 220)

 mismo tiempo, debe aclararse que con independencia de la denominación que les dé el legislador ordinario a los ingresos públicos, debe atenderse a su verdadera naturaleza a partir de los elementos estructurales que los configuran, con el propósito de evidenciar qué tipo de prestación pública se estableció, ya sea de carácter tributaria (contribuciones) o no tributaria (productos y en general cualquier aprovechamiento), de acuerdo con la siguiente jurisprudencia:

“INGRESOS PÚBLICOS. PARA VERIFICAR SU APEGO A LOS PRINCIPIOS QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RIGEN SU ESTABLECIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON

INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE LES DÉ EL LEGISLADOR ORDINARIO. Si bien es cierto que el legislador ordinario puede definir en cada época cuáles son las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas que existan en cada momento, atendiendo a la evolución de la administración pública y a las responsabilidades que el Estado vaya asumiendo en la prestación y mantenimiento de los servicios públicos que aseguren el desarrollo integral de los individuos que componen la sociedad, también lo es que ello no obsta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad de una prestación patrimonial de carácter público, con independencia de que formalmente se le considere como contribución o ingreso no tributario, desentrañe su verdadera naturaleza y, conforme a ésta, verifique si el contexto normativo que rige su establecimiento, liquidación y cobro se sujeta a las prerrogativas y obligaciones que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto para los gobernados como para las autoridades constituidas, dependiendo de su naturaleza tributaria o no tributaria.” (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, tesis 2a./J. 19/2003, página 301)





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En ese tenor, es innegable que los ingresos generados por la prestación de servicios públicos municipales son contribuciones aunque materialmente intervenga un organismo público descentralizado del Estado de Nuevo León, y no aprovechamientos, tanto es así que se tratan de derechos que es una especie de tributo, y para demostrar tal aserto, es menester conocer los atributos que distinguen a los aprovechamientos y a los derechos.

Los atributos que identifican a los derechos; son:

1. Prestaciones públicas patrimoniales impuestas por el Estado de forma unilateral y coactiva.


2. El hecho imponible está vinculado a la realización de un acto o actividad a cargo de la administración pública, de carácter individual y divisible, de modo que si no se lleva a cabo, no habrá nacido la obligación pecuniaria de pago (no debe confundirse con la época de pago).

3. Los particulares se ven beneficiados con la realización de los servicios públicos o por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación, siendo aquella realización o uso la que el legislador identifica como fuente de riqueza aislada, pues no es reflejo de una disponibilidad económica real, al no poderse advertir claramente.

4. Los ingresos públicos que recibe el Estado se destinan a cubrir los gastos públicos indivisibles (no debe confundirse con el gasto público específico).

Respecto de los aprovechamientos, la doctrina es muy escasa; sin embargo, se ha sostenido que ordinariamente derivan estos ingresos no tributarios de las facultades admonitorias y sancionatorias de las autoridades, por la inobservancia, violación o abuso de deberes jurídicos a cargo de los particulares, tal como se advierte de la siguiente transcripción:

“APROVECHAMIENTOS.--- que en el caso de las sanciones pecuniarias, puede asumir también una naturaleza no tributaria...” (Andrea Amatucc, Eusebio González García, Christoph Trzaskalik, Tratado de Derecho Tributario, Tomo Segundo, Editorial Themis, Bogotá-Colombia 2001, página 6).



No obstante la anterior generalidad, dichos ingresos pueden dimanar de cualquier otra función de derecho público que realice el Estado, distinta a su potestad tributaria, como se patentiza con el análisis literal del rubro de aprovechamientos que prevé la Ley de Ingresos para el Estado de Nuevo León.

Por estas razones, los aprovechamientos son ingresos que el Estado no puede tipificar e identificar plenamente al realizar su función pública, dentro de alguna contribución; por tanto, han sido ***“receptáculo de todos los ingresos que no pueden encontrar***



una cabida técnica en el concepto de contribuciones, ni en los ingresos por financiamiento a los que alude la Ley de Ingresos de la Federación, ni los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal..." (Según la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo I, Editorial Porrúa, 2002).

En ese contexto, es evidente que los ingresos que recauda el organismo público descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey por la prestación de tales servicios tienen la calidad de **contribuciones**, y no de aprovechamientos como lo sostiene la parte recurrente, habida cuenta que el hecho imponible está vinculado a la realización de una actividad de la administración pública estatal que **beneficia** en lo individual a los particulares, sin que tenga como origen la inobservancia, violación o abuso de deberes jurídicos a cargo de los particulares para que puedan identificarse dentro del ámbito de los aprovechamientos, de ahí que si son una especie de contribución pueden incluirse figuras minoritarias como la exención en la legislación que regula al tributo.

Entonces, al quedar evidenciado que por la prestación de los servicios públicos municipales -ya sea por el Ayuntamiento o por la Entidad Federativa- se genera una contribución, en particular, el pago de un derecho por servicio, procede ahora examinar si en la hipótesis de que se trata puede hacerse extensivo el beneficio de la exención prevista en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de

la Constitución Federal, cuando los servicios públicos municipales **no están a cargo del propio Municipio**, sino temporalmente los proporciona el Estado, pues quedó establecido que este supuesto no está instituido **expresamente** en esa norma constitucional.

En la exposición de motivos del Decreto de reformas de ese precepto, publicado el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se estableció sobre el particular, lo siguiente:

“Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones ni subsidios, evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son esenciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios...”

Por su parte, en la discusión de las reformas publicadas el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se dijo lo siguiente:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

“...Diputada Aurora Bazan López (PVEM)... Sin embargo, aun así no coincidimos completamente con este criterio, en tanto que los bienes donde se desarrollan actividades productivas o de servicios inmediatas como mediatas, requiere de una infraestructura que a su vez necesita de constantes recursos del municipio ... por lo que a la exención constitucional debe darse un enfoque adecuado en tanto que debe favorecerse el régimen hacendario de los municipios simultáneo con la necesidad de facilitar los servicios necesarios que requiere la población. La dispensa sólo se justificará si efectivamente el bien se destina a esa finalidad inmediata donde lo que compense la exención sea el beneficio inmediato que reciba la población. De no ser así, la prerrogativa no tendrá fundamento ni aplicación.”

Como puede verse, la exención hizo referencia a los ingresos tributarios como los derechos por servicios públicos municipales, porque en principio al ayuntamiento corresponde originariamente su prestación, pero si el Poder Reformador al pretender fortalecer la hacienda del Municipio realizó la anterior acotación, con mayor razón aplica la exención cuando los ingresos deriven de prestar el servicio público municipal por el Estado o un organismo, por no perder su objeto público los citados bienes de la Federación, ni el servicio público municipal, al ser prestado por el Estado.

De esa forma si los servicios públicos municipales prestados por el Estado de Nuevo León a favor de inmuebles pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal, pretenden ser gravados por el primero, como bien se estableció en la sentencia recurrida, serán inconstitucionales los ingresos tributarios que se cobren, pues se goza de la referida exención al tratarse de un servicio público de orden municipal, en el que los bienes de dominio público de la Federación no pierden su objeto público, tal como lo interpretó el Alto Tribunal del País en los siguientes criterios:

“ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EL PLANTEAMIENTO DE VIOLACIÓN AL, NO IMPLICA EL POSIBLE EJERCICIO POR PARTE DE LA AUTORIDAD ESTATAL DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES PRIVATIVAS DE LA FEDERACIÓN Y, EN CONSECUENCIA, NO SE SURTE LA COMPETENCIA DEL PLENO. El artículo 115 constitucional, en su fracción IV, inciso c), no consagra una facultad privativa de la Federación al señalar que los bienes inmuebles de ésta no podrán ser gravados con impuestos locales, sino que tal declaración viene a constituir el límite de la atribución que tienen las Legislaturas de los Estados y autoridades municipales para establecer y recaudar, respectivamente, los impuestos que afecten los inmuebles ubicados dentro de sus jurisdicciones;



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

luego entonces, de ningún modo puede considerarse que la posible inobservancia de la exención prevista en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, se traduzca en el ejercicio, por parte de la autoridad estatal, de una atribución reservada a la Federación, pues como se dijo, ni siquiera dicha disposición contempla una verdadera facultad a favor de aquélla, sino que únicamente delimita el campo de aplicación de las leyes fiscales locales dirigidas a gravar la propiedad inmobiliaria. Así pues, aun cuando sean fundados los conceptos de violación invocados por la parte quejosa, en el aspecto antes indicado, ello significaría únicamente que el cobro del impuesto predial reclamado es violatorio de garantías por su oposición a lo establecido en el artículo 115 constitucional, fracción IV, inciso c), pero no porque dicho cobro invada el ámbito de atribuciones de la autoridad federal.” (Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, tomo 205-216 primera parte, página 19).

“DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. El penúltimo párrafo de la base IV del artículo 115 constitucional,

al cual remite el texto vigente del artículo 122, base primera, fracción V, inciso b), del mismo Ordenamiento Fundamental, se debe interpretar en el sentido de que dentro de la exención autorizada para bienes del dominio público de la Federación y los Estados, quedan comprendidos los organismos descentralizados como titulares de los inmuebles descritos en el artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, por los servicios que preste el Municipio en materia de agua potable, toda vez que el autor del precepto constitucional, al autorizar la exención, claramente la hace extensiva no sólo a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, sino también a los ingresos que obtenga el Municipio por los servicios públicos a su cargo, lo cual significa que se refirió a las contribuciones causadas por aquellos servicios que se presten en relación con los bienes de dominio público en favor de la Federación, Estados u organismos descentralizados, en razón de la importancia que atribuyó a la función desarrollada a través de la afectación y destino de tales bienes sometidos al régimen de protección de que se trata." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, mayo de 1997, tesis 2a./J. 22/97, página 247).

ESTADO DE
SECRETARÍA DE
JUSTICIA Y
FEDERACIÓN
PREMIER
SECRETARÍA GE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FEDERAL

En consecuencia, los ingresos estatales que pretende cobrar el organismo público descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, al Consejo de la Judicatura Federal por los servicios públicos municipales de agua potable y alcantarillado prestados a los inmuebles ubicados en Monterrey y San Pedro Garza García, son inconstitucionales, al gozarse de la exención establecida en el citado artículo 115, fracción IV, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución Federal, si se pondera que el Poder Reformador, a pesar de que garantizó ampliamente la hacienda municipal, hizo una excepción acerca del objeto público de la actividad estatal que está ligada a la utilización de bienes de dominio público, ya que no es probable, desde el punto de vista social y económico, que el aparato estatal quede paralizado por falta de pago de tributos, por lo que estas mismas razones pueden aplicarse tratándose de las contribuciones estatales que dimanan de los servicios públicos en la medida que subsiste el orden público, no existe afectación al erario municipal ni pierde la calidad de municipal dicho servicio público, pues sólo constituye una modalidad en su prestación que no altera los fines que consideró el Poder Reformador al prever la exención tributaria de que se trata.

Es corolario de lo anterior que es inconstitucional el artículo 9° del Acuerdo por el que se aprueba la nueva estructura de cuotas y tarifas para la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado en el periódico oficial el veintiocho de febrero de dos mil tres, toda vez que contraviene la teleología establecida

en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, al no permitir la exención de los bienes de dominio público de la Federación afectos a su objeto público, en la especie, respecto de la labor jurisdiccional encomendada constitucionalmente al Poder Judicial de la Federación.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se **CONFIRMA** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **AMPARA Y PROTEGE** al Consejo de la Judicatura Federal, contra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el juicio contencioso administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de la ejecutoria, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca en que se actúa como asunto concluido.

Amparo Directo en Revisión 1070/05

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

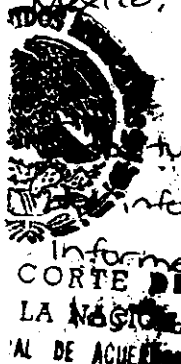
12 = 1234

2008 ABR - 3 A II: 38

SECRETARÍA
DE ACUERDOS
GENERAL

Secretario General de Acuerdos de la
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Presente.

Nélida Jannette González Evanisto, mexicana, mayor de
edad, servidora pública, con domicilio para oír y recibir
notificaciones en calle Filomeno Mata, número 12, Colonia
Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06000,
México, Distrito Federal; respetuosamente expongo:



En mi carácter de Delegada del Gobernador
Constitucional del Estado de Nuevo León, según se desprende
del informe respectivo, así como del auto recaído adicho
Informe, en ejercicio de las atribuciones conferidas por
los artículos 4. y II de la Ley Reglamentaria de las
fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación
con el Acuerdo General número 18/2006, por ser
conveniente a los intereses que jurídicamente
represento, acudo a usted a fin de solicitar que
si así lo tiene a bien, se sirva girar las
instrucciones necesarias a fin de que se expida
a mi costa copia simple del problemario
relativo al proyecto de resolución del procedimiento
constitucional indicado al rubro, solicitando que
dichas copias simples sean entregadas a cualquiera
de los Delegados autorizados por el mencionado Gobernador.

Reiterando la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración y respeto.

Nélida González.
Nélida Jannette González Evanisto

100-1002

100-1002





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EXPEDIENTILLO 14/2008

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN 1070/2005

QUEJOSO:
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL.



CORTE DE
LA NACIÓN.
RAL DE ACUERDOS

En tres de abril de dos mil ocho, se da cuenta con el escrito recibido el día de hoy de Nélida Jannette González Evaristo, en su carácter de delegada del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, tercero perjudicado en el amparo directo en revisión 1070/2005. Conste.

México, Distrito Federal, a tres de abril de dos mil ocho.

Visto el escrito de Nélida Jannette González Evaristo, en su carácter de delegada del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, tercero perjudicado en el amparo directo en revisión 1070/2005, en el que solicita copia simple del problemario que se acompañó al proyecto elaborado en la ponencia del señor Ministro José Fernando Franco González Salas, con fundamento en el Punto Único del Acuerdo General 18/2006 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en lo acordado por el propio Pleno en su sesión privada celebrada el veintinueve de enero de dos mil siete, proporciónesele copia del citado problemario, con efectos exclusivamente informativos y con las leyendas a que se refiere el párrafo segundo de dicho Punto.

Lo proveyó y firma el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy fe.

LVP/irp





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA 421



CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDOS

RAZÓN: En México, Distrito Federal, siendo las trece horas con treinta minutos del tres de abril de dos mil ocho, presente en el local que ocupa la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sito en Pino Suárez número dos, Colonia Centro, segundo piso, Nélida Jannette González Evaristo, quien se identifica con la credencial con número de empleado 506670, expedida por el la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Nuevo León, en la que aparece su fotografía que coincide con sus rasgos fisonómicos y manifiesta que recibe copia del problemario elaborado en el amparo directo en revisión 1070/2005, quejosa Consejo de la Judicatura Federal, constante de *cuatro* fojas que contienen las leyendas "Documento de Trabajo" y "copia simple con efectos informativos".- Conste.

Nélida González.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PGJ
NUEVO LEON


LA PRESENTE ACREDITA A
**NELIDA JANNETTE
GONZALEZ
EVARISTO**
COMO
ANALISTA JURIDICO

VENCIENDO: 31/12/2011

OF. DE LO CONTENCIOSO

RECIBIDO 31/12/2011

444570



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**CORTE DE
E LA NACION.
ERAL DE ACUERDOS**

Este comprobante es el documento para este efecto. Es otorgado de manera formal de conformidad a la
Estructura de Admisión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de N.L. (Código 1007)
Pg. Cuatro, Monterrey N.L. Tel. 3228915



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

Alcides Contreras

FIRMA DEL EMPLEADO

LIC. M. JE. LOURDES WILLIAMS C.
DIR. GRAL. DE ADM. Y REG. TRACON



**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005
QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL**

**PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZALEZ SALAS
SECRETARIOS: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS, ANTONIO
ESPINOZA RANGEL, BERTÍN VAZQUEZ GONZALEZ E ISRAEL
FLORES RODRÍGUEZ**



**CORTE DE
LA Federación
AL DE ACUERDO**

PROBLEMARIO:

- I. ¿El Consejo de la Judicatura Federal, está legitimado para presentar una demanda de amparo, en contra del cobro de contribuciones locales (derechos por el uso de agua)?

Grado de dificultad de la pregunta: Regular, porque el Consejo de la Judicatura Federal forma parte del Poder Judicial de la Federación, como órgano de administración, vigilancia y disciplina del mismo y, quien resuelve, como en el caso, los amparos directos son los Tribunales Colegiados de Circuitos, órganos jurisdiccionales que también son parte del Poder Judicial de la Federación por lo que hace a al ejercicio del Poder Judicial de la Federación (artículo 94 de la CF)

Respuesta en el proyecto: El Consejo de la Judicatura Federal sí está legitimado para presentar la demanda de amparo,

porque aún siendo persona moral oficial, puede actuar como persona moral de derecho privado, caso en el que se estima, que se afectan sus intereses patrimoniales, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, por lo tanto, sí puede acudir como parte quejosa a un juicio de garantías.

- II. **¿Existe dependencia y sumisión de algún órgano del Poder Judicial de la Federación al Consejo de la Judicatura Federal que impida que los primeros conozcan de las demandas de amparo presentadas por el Consejo de la Judicatura Federal?**

Grado de dificultad de la pregunta: Regular, por las mismas razones que en la pregunta anterior, es decir, porque podría parecer que el Consejo de la Judicatura Federal es en el asunto, juez y parte, al formar parte del Poder Judicial de la Federación, como órgano de administración, vigilancia y disciplina del mismo y quien resuelve, como en el caso, los amparos directos son los Tribunales Colegiados de Circuitos, órganos jurisdiccionales que también son parte del Poder Judicial de la Federación, por lo que hace al ejercicio del Poder citado. (artículo 94 de la CF).

Respuesta en el proyecto: Estas dudas (si en el caso, el CJF está siendo juez y parte) se resuelven, en primer lugar, pues su naturaleza como órganos del Poder Judicial de la Federación, es distinta y no hay razón para considerar que existe una posición

jerárquicamente subordinada en el caso concreto, del Tribunal Colegiado a la parte quejosa.

En segundo lugar, se precisa que no existe dependencia ni sumisión de órgano jurisdiccional alguno al Consejo de la Judicatura Federal, porque la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció en ese aspecto, al resolver por unanimidad de cinco votos, en sesión del dieciocho de enero del año dos mil dos, la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 10/2001, siendo quejoso el Consejo de la Judicatura Federal y ponente el señor ministro José Vicente Aguilar Alemán. En el proyecto se propone que el pleno comparta este criterio.

LA NACION
FEDERAL DE ACUERDO

- III. ¿Es posible que los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales sean prestados por un organismo público descentralizado de la administración pública Municipal? Y, en su caso, ¿Pierde la calidad de servicio público cuando es prestado por un organismo público descentralizado?

Grado de dificultad: Regular

Respuesta en el proyecto:


En el caso del Estado de Nuevo León, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, no son prestados por los Municipios sino por un organismo público descentralizado llamado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado, el cual recauda los ingresos que derivan de la aludida prestación de servicios municipales, de acuerdo con los artículos 2°, 3° y 10 de la ley que crea esa institución pública, y 3°, 5°, 6°, 15, 40 y 41 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. Además, nada impide que los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales sean prestados por un organismo público descentralizado de la administración pública Municipal.

En relación con la segunda pregunta formulada, se estima que toda vez que el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, prevé que los municipios tendrán a su cargo entre otros, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales y que pueden ser prestados temporalmente por el Estado en sí o por el organismo que precise (centralizado o descentralizado), entonces, en ambos casos el Estado lleva a cabo la función pública, sin que por este hecho pierda la calidad de servicio público municipal, ya que actúa auxiliariamente en su prestación, a cambio de recibir los ingresos derivados de ella.

IV. ¿ Están exentos los bienes del dominio público de la Federación cuando son prestados no por el Municipio, tal como lo contempla el artículo 115, fracción IV, inciso c) de la Constitución Federal, sino por un organismo público descentralizado?

Grado de dificultad. Regular

Respuesta en el proyecto:



El artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Carta Fundamental, precisa que las contribuciones o ingresos que ~~dimanan de~~ los servicios públicos a cargo del Municipio, pueden ~~ser materia~~ de exención, entre otros, sobre bienes de dominio público de la Federación.

Dicho numeral constitucional, no contempla la hipótesis de cuándo los servicios públicos municipales no están a cargo del Municipio, sino que en un plano de colaboración los presta el Estado en sí mismo o a través de un organismo público estatal.

Para resolver lo no dispuesto por la Constitución, se precisa que los ingresos que recibe el Municipio por prestar servicios públicos en su demarcación territorial tienen la calidad de contribuciones o de ingresos tributarios, pero igualmente tienen esa calidad los ingresos que recauda el Estado o el organismo descentralizado local al prestar tales servicios públicos municipales. Esto es así, porque los ingresos provienen de una

prestación pública patrimonial de carácter unilateral y coactiva, pues por una parte, el artículo 9 del ordenamiento legal impugnado, señala que los particulares y las entidades de gobierno **'están obligados a pagar sus consumos de agua potable y el servicio de drenaje sanitario'** y, por la otra, el artículo 16 de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey establece que los adeudos se harán efectivos a través del procedimiento económico coactivo; de ahí que desde el punto de vista constitucional se trata de un tributo o contribución, ya que no pierde esta calidad por el hecho de que los servicios públicos los preste un órgano del Estado de Nuevo León.

Además, con independencia de la denominación que les dé el legislador ordinario a los ingresos públicos, debe atenderse a su verdadera naturaleza a partir de los elementos estructurales que los configuran, con el propósito de evidenciar qué tipo de prestación pública se estableció, ya sea de carácter tributaria (contribuciones) o no tributaria (productos y en general cualquier aprovechamiento).

Se concluye que los ingresos que recauda el organismo público descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey por la prestación de tales servicios tienen la calidad de derechos, y no de aprovechamientos, porque el hecho imponible está vinculado a la realización de una actividad de la administración pública estatal que beneficia en lo individual a los particulares, sin que tenga como origen la inobservancia, violación

o abuso de deberes jurídicos a cargo de los particulares para que puedan identificarse dentro del ámbito de los aprovechamientos, de ahí que si son una especie de contribución pueden incluirse figuras minoritarias como la exención en la legislación que regula al tributo.

- V. ¿El artículo 9° del Acuerdo Tarifa Agua 2003 o Acuerdo por el que se aprueba la nueva estructura de cuotas y tarifas para la prestación de los servicios públicos de agua potable, de drenaje sanitario y saneamiento, incluyendo en su precio el 25% veinticinco por ciento por concepto de cuota de drenaje, expedido por el Gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado el veintiocho de febrero de dos mil tres en el órgano oficial informativo estatal, que prevé las cuotas relativas a los servicios de agua potable y alcantarillado en los Municipios de Monterrey y San Pedro Garza García -lugares donde se encuentran inmuebles pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal-, contraviene las bases del artículo 115 de la Constitución Federal, por no haber establecido la exención atinente a los bienes de dominio público de la Federación.?

Grado de dificultad: Regular

Respuesta en el proyecto:

Si por la prestación de los servicios públicos municipales -ya sea por el Ayuntamiento o por la Entidad Federativa- se genera una contribución, en particular, el pago de un derecho por servicio, entonces sí puede hacerse extensivo el beneficio de la exención prevista en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, cuando los servicios públicos municipales no están a cargo del propio Municipio, sino temporalmente los proporciona el Estado.

Por lo tanto, si los servicios públicos municipales prestados por el Estado de Nuevo León a favor de inmuebles pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal, pretenden ser gravados por el primero, son inconstitucionales los ingresos tributarios que se cobren, pues se goza de la referida exención al tratarse de un servicio público de orden municipal, en el que los bienes de dominio público de la Federación no pierden su objeto público.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-52

427

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO 1070/2005



CORTE DE
LA NACIÓN;
AL DE ACUERDOS

El veintidós de junio dos mil nueve el Secretario General de Acuerdos dio cuenta al Tribunal Pleno con el amparo directo en revisión número 1070/2005, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el recurso de revisión derivado del juicio contencioso administrativo número 251/2003 y acumulado 051/2003. Interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, para determinar si opera o no la exención en beneficio de los bienes del dominio público de la Federación, respecto de los ingresos derivados de la prestación del servicio público de agua y drenaje. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas se propuso: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Consejo de la Judicatura Federal, contra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el juicio contencioso administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003."

En relación con la legitimación de las autoridades recurrentes y las causas de improcedencia, en los términos consignados en el acta y en la versión taquigráfica respectivas hicieron uso de la palabra los señores Ministros Presidente en funciones Góngora Pimentel, quien sugirió eliminar el razonamiento contenido en las páginas cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, relativo a que el Consejo de la

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO
1070/2005**

Judicatura Federal no es un órgano legitimado para promover controversia constitucional, ya que la procedencia del amparo no se surte por la exclusión de otros medios de control constitucional sino porque se reúnen los extremos del artículo 9 de la ley de la materia; Valls Hernández, Cossío Díaz, Gudiño Pelayo, Aguirre Anguiano, ponente Franco González Salas, Silva Meza y Luna Ramos.

A sugerencia del señor Ministro ponente Franco González Salas el Tribunal Pleno acordó que el asunto se vea en la sesión que se celebre mañana, martes veintitrés de junio en curso, a fin de reflexionar en relación con los argumentos expresados por el señor Ministro Cossío Díaz en relación con el consentimiento de la norma materia de impugnación, a la falta de personalidad jurídica del Consejo de la Judicatura Federal y a su titularidad de derechos constitucionales.



Previo aviso, no asistieron los señores Ministros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón.- Doy fe.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Amparo directo en revisión número 1070/2005, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la sentencia de 24 de septiembre de 2004, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el recurso de revisión derivado del juicio contencioso administrativo número 251/2003 y acumulado 051/2003. Interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, para determinar si opera o no la exención en beneficio de los bienes del dominio público de la Federación, respecto de los ingresos derivados de la prestación del servicio público de agua y drenaje.

SESIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL PLENO del martes veintitrés de junio de dos mil nueve.

PROYECTO		VS.
	AGUIRRE ANGUIANO	1
1	COSSÍO DÍAZ	
2	LUNA RAMOS	
3	FRANCO GONZÁLEZ	
CORTE DE LA NACIÓN AL DE ACUERDO	SALAS	
6	GÓNGORA PIMENTEL	PRESIDENTE EN FUNCIONES
	GUDIÑO PELAYO	2
No asistió, previo aviso	AZUELA GÜITRÓN	
4	VALLS HERNÁNDEZ	
5	SÁNCHEZ CORDERO	
	SILVA MEZA	3
No asistió, previo aviso	ORTIZ MAYAGOITIA	

Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente en funciones Góngora Pimentel; los señores Ministros Aguirre Anguiano y Silva Meza votaron en contra y porque se concediera el amparo al quejoso; el señor Ministro Gudiño Pelayo votó en contra y porque es improcedente el juicio de amparo.





SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO
1070/2005

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



CORTE DE
LA NACIÓN
RAL DE ACUERDOS

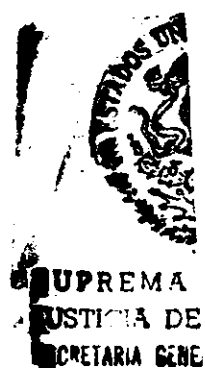
El martes veintitrés de junio dos mil nueve el Secretario General de Acuerdos dio cuenta al Tribunal Pleno con el amparo directo en revisión número 1070/2005, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el recurso de revisión derivado del juicio contencioso administrativo número 251/2003 y acumulado 051/2003. Interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, para determinar si opera o no la exención en beneficio de los bienes del dominio público de la Federación, respecto de los ingresos derivados de la prestación del servicio público de agua y drenaje. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas se proponía: *"PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Consejo de la Judicatura Federal, contra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el juicio contencioso administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003."*

El señor Ministro ponente Franco González Salas manifestó que en atención a las observaciones formuladas en la sesión celebrada ayer por el señor Ministro Cossío Díaz, se eliminarán las consideraciones que estimen inoperantes diversos argumentos de la autoridad recurrente; precisará que se desestima la causa de improcedencia relativa a que el primer acto de aplicación fue consentido, ya que el Consejo de la Judicatura Federal no impugnó el acuerdo-tarifa desde

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO 1070/2005**

su entrada en vigor (que no es propiamente un acto de aplicación), además de que la Ley de Amparo permite impugnar una disposición de observancia general desde la entrada en vigor del primer acto de aplicación y que en el expediente no existen pruebas de aplicación anterior; y adicionó un punto resolutivo, el Tercero, en los siguientes términos: "TERCERO. Se devuelve su jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento para que conozca de los conceptos de violación sobre legalidad cuyo estudio omitió."

En relación con la legitimación del Consejo de la Judicatura Federal para promover el juicio de amparo contra del cobro de contribuciones locales, en los términos consignados en el acta y en la versión taquigráfica respectivas hicieron uso de la palabra los señores Ministros Gudiño Pelayo, Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Silva Meza, Sánchez Cordero de García Villegas.



Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Góngora Pimentel, se determinó que el Consejo de la Judicatura Federal sí está legitimado para promover el juicio de amparo; el señor Ministro Gudiño Pelayo votó en contra y por la improcedencia del juicio de amparo y reservó su derecho para formular voto particular.

Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente en funciones Góngora Pimentel; los señores Ministros Aguirre Anguiano y Silva Meza votaron en contra y porque se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO 1070/2005

concediera el amparo al quejoso; el señor Ministro Gudiño Pelayo votó en contra y porque es improcedente el juicio de amparo.

El señor Ministro Presidente en funciones Genaro David Góngora Pimentel declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Previo aviso, no asistieron los señores Ministros Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón.- Doy fe.



CORTE DE
LA NACIÓN.
AL DE ACUERDO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53

Amparo directo en revisión número 1070/2005, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la sentencia de 24 de septiembre de 2004, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el recurso de revisión derivado del juicio contencioso administrativo número 251/2003 y acumulado 051/2003. Interpretación directa del artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, para determinar si opera o no la exención en beneficio de los bienes del dominio público de la Federación, respecto de los ingresos derivados de la prestación del servicio público de agua y drenaje.

SESIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL PLENO del martes veintitrés de junio de dos mil nueve.

PROYECTO		VS.
1	AGUIRRE ANGUIANO	
2	COSSÍO DÍAZ	
3	LUNA RAMOS	
4	FRANCO GONZÁLEZ SALAS	
5	GÓNGORA PIMENTEL	PRESIDENTE EN FUNCIONES
	GUDIÑO PELAYO	1
No asistió, previo aviso	AZUELA GÜITRÓN	
6	VALLS HERNÁNDEZ	
7	SÁNCHEZ CORDERO	
8	SILVA MEZA	
No asistió, previo aviso	ORTIZ MAYAGOITIA	

Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Góngora Pimentel, se determinó que el Consejo de la Judicatura Federal sí está legitimado para promover el juicio de amparo; el señor Ministro Gudiño Pelayo votó en contra y por la improcedencia del juicio de amparo y reservó su derecho para formular voto particular.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA,
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: -----

----- C E R T I F I C A : -----

Que el once de agosto de dos mil nueve se distribuyó a los señores Ministros copia del engrose elaborado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas de la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil nueve en el amparo directo en revisión 1070/2005 promovido por el Consejo de la Judicatura Federal para que estén en aptitud, en su caso, de formular dentro del plazo de cinco días, las observaciones que estimen pertinentes, y que dicho plazo concluirá el dieciocho de agosto de dos mil nueve.-----

México, Distrito Federal, a once de agosto de dos mil nueve.-----



CORTE DE
LA NACIÓN
RAL DE ACUERDOS

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA,
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: -----

----- C E R T I F I C A : -----

Que transcurrió el término de cinco días y que mediante escrito recibido el trece de agosto de dos mil nueve el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a través de la licenciada Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a su ponencia, formuló observaciones al engrose elaborado por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas de la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil nueve en el amparo directo en revisión 1070/2005 promovido por el Consejo de la Judicatura Federal, en la inteligencia de que el referido escrito se remitió al Ministro ponente el trece de agosto de dos mil nueve.-----

México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil nueve.-----

MAAS' mmmj.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005
QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
SECRETARIOS: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS, JORGE LUIS
REVILLA DE LA TORRE, BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ISRAEL
FLORES RODRÍGUEZ Y FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.



MINISTRO JOSÉ FERNANDO
FRANCO GONZÁLEZ SALAS

CORTE DE LA NACIÓN
AL DE JUSTICIA

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
veintitrés de junio de dos mil nueve.

COTEJADO.

SENTENCIA
VISTOS; Y,
RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el uno de noviembre de
dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo
León, el **CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL**, a través de
su representante Rebeca López Hernández, solicitó el amparo y

SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

2009 AGO 18 P 1:41

72-2388

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

Revisión
Sugerir para

SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS

2009 AGO 25 P 12:16

72-2465

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

protección de la Justicia Federal contra las siguientes autoridades y actos reclamados:

"5. Autoridad ordenadora: Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León. --- 6. Autoridades ejecutoras: --- a) Secretaría de Finanzas del Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León.--- b) Tesorería General de Estado (Palacio de Gobierno), con domicilio en la calle 5 de Mayo, entre Zaragoza y Zuazua Centro, C.P. 64009, en Monterrey, Nuevo León. --- c) Tesorería Municipal de Monterrey (Palacio Municipal) con domicilio en la calle de Ocampo y Zaragoza, Zona Centro, C.P. 64000, en Monterrey, Nuevo León.--- d) Tesorería Municipal de San Pedro Garza García (Palacio Municipal), con domicilio en la calle de Juárez y Libertad s/n, Zona Centro, C.P. 66200, en San Pedro Garza García, Nuevo León.--- 7. Actos reclamados: --- a) De la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, se reclama la ilegal sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, en los autos del recurso de revisión interpuesto por el Consejo de la Judicatura Federal,

**SUPLENTE
JUSTICIA
SECRETARIA**



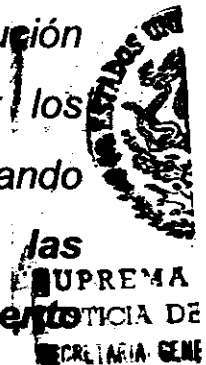
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



1A. CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ABOGADOS

a través de su representante legal, parte actora dentro del Juicio Contencioso Administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003, en la cual se resolvió:--- "PRIMERO: No ha procedido el recurso de revisión recibido en fecha 22-veintidós de abril del 2004-dos mil cuatro, interpuesto por el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, a través de su representante legal, la C. REBECA LÓPEZ HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE REGISTRO PATRIMONIAL, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CITADO CONSEJO parte actora dentro del juicio contencioso administrativo número 251/2003 acumulado al 051/2003, en contra de la sentencia definitiva de fecha 30-treinta- de marzo del año en curso, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria de este H. Tribunal, en la cual se declaró el sobreseimiento de juicio respecto al gobernador del Estado y del acto impugnado consistente en la amenaza de corte o suspensión del servicio de agua potable que supuestamente se contenían en las facturas T00131509 y T00134126, emitidas por la Institución Pública Descentralizada denominada Agua y Drenaje de Monterrey; la nulidad de las facturas T00114085, T00121863, T00131509 y T00134126, así como de la amenaza de corte o suspensión del servicio

de agua potable y drenaje contenida en la factura T00114085, emitidas por la ya citada institución pública descentralizada y la validez de la resolución contenida en el oficio 179-R10-1/2003, emitida por el Director General de la mencionada paraestatal, en fecha 05- cinco de diciembre de 2002-dos mil dos y de la negativa ficta configurada en torno a la solicitud de fecha 29- veintinueve de enero de 2003 (dos mil tres), que se elevara al gobernador del Estado donde se negara la exención del pago del servicio de agua potable.— SEGUNDO: Se confirma la resolución señalada en el punto resolutivo anterior, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución".--- **b) De las autoridades ejecutoras se reclama el cumplimiento que pretendan dar a la sentencia reclamada para realizar el indebido cobro del crédito fiscal por el servicio de agua potable y alcantarillado, así como la amenaza que conlleva su cobro para que se suspenda dicho servicio, derivado de las facturas T00131509, T00134126, T00121863, T00114085 y T00137699 que fueron ordenadas por la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., respecto del servicio que se proporciona en los inmuebles ubicados en calle Diagonal Santa Engracia número 221 de la**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Colonia Lomas de San Francisco del Municipio de San Pedro Garza García, y el de la avenida Constitución Poniente número 241, en la ciudad de Monterrey, ambos en el Estado de Nuevo León, en los cuales se encuentran funcionando órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación."

SEGUNDO. La quejosa estimó violados en su perjuicio, los derechos constitucionales que se encuentran consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, expresó los antecedentes de los actos reclamados y, señaló como conceptos de violación, los siguientes:

CORTE DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

1) En su **primer** concepto de violación, manifiesta que la sentencia reclamada, viola en su perjuicio los derechos constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, toda vez que incurre en contradicción al, **por una parte**, reconocer la validez de la solicitud de exención del pago del servicio de agua potable y alcantarillado de los inmuebles propiedad del Consejo de la Judicatura Federal y declararse incompetente para estudiar la constitucionalidad del artículo 9° del Acuerdo que expidió el Gobernador del Estado de Nuevo León, y **por otra**, determinar en su ejecutoria, que no se había reclamado en el escrito de demanda, la inconstitucionalidad planteada.

2) Asimismo, señala que la sentencia recurrida, viola en su perjuicio los derechos constitucionales anteriormente citados, en virtud de que se omitió que las solicitudes de exención del servicio de agua potable y alcantarillado, fueron fundadas en el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Federal, así como en la jurisprudencia 22/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ***"DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL"***, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, debió resolverse con apego al criterio jurisprudencial referido.

SUPREM.
CORTA
JUSTICIA
SECRETARIA

3) Aduce, en su **segundo** concepto de violación, que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, empleó razonamientos falsos al declarar infundado su cuarto concepto de invalidez, toda vez que consideró que el pago de servicios de agua y drenaje no constituye una contribución y sí un aprovechamiento, al derivar esta obligación de un contrato administrativo de adhesión y no de un derecho.

4) Precisa además, que los gravámenes con los que se cubre el pago de los servicios aludidos, al contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, tal como lo dispone



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

el artículo 31, fracción IV, constitucional, reciben el nombre de "derechos".

5) Por otra parte, en su **cuarto** concepto de violación, estimó que el Tribunal responsable, debió haber revocado la sentencia del *A quo*, toda vez que, **por una parte**, no valoró que los inmuebles que albergan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, son bienes de dominio público según su naturaleza, y, por lo tanto, que están exentos del pago de los impuestos por los servicios de agua potable y alcantarillado, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, constitucional, y **por otra parte** no consideró que la aplicación de una norma de carácter constitucional prevalece por encima de una norma sustantiva estatal, conforme al artículo 133 de la Constitución Federal, que dispone sobre la supremacía del propio ordenamiento legal.

6) Sigue aduciendo, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, al no haber considerado que el Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, carecía de competencia legal para resolver las peticiones de exención del pago de servicios de agua potable y alcantarillado, facultad que, en virtud de la naturaleza de las cuotas por el citado servicio, corresponde al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, por tener el carácter de autoridad fiscal en términos de lo

dispuesto por los artículos 34, fracción I, y 41, fracción I, ambos del Código Fiscal del mismo Estado.

7) Señala, en su **quinto** concepto de violación, que es ilegal el sobreseimiento que declaró la Sala Superior responsable, al considerar que se respetó el derecho constitucional de audiencia al Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que su solicitud de exención ya referida, fue remitida a la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues no basta que la exención sea decretada por un organismo público perteneciente a una institución pública descentralizada del Estado, del cual el Gobernador es el Presidente del Consejo de Administración, ya que los actos de molestia y privación deben ser emitidos por autoridad competente.

SUPREMA
JUSTICIA D
SECRETARIA GE

8) En el **sexto** concepto de violación, aduce que es ilegal la sentencia reclamada, al confirmar la validez de la negativa ficta que se demandó en el juicio de amparo, toda vez que no tomó en cuenta, que el único facultado para decretar la exención del pago de la cuota de servicios de agua potable y alcantarillado, es el Gobernador Constitucional del Estado, y que al no haber dado respuesta conforme al plazo que establece el artículo 39 del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, se configuró la negativa ficta, misma que debió declararse nula con apoyo en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

9) En el **séptimo** concepto de violación, manifiesta que el indebido cumplimiento que se pretenda dar a la sentencia reclamada o la probable suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado, viola en su perjuicio los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, porque desde un inicio, las facturas de las que requirió el pago por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, se encontraban viciadas, imposibilitándose su ejecución jurídica de forma legal.

10) Finalmente, en el **octavo** concepto de violación, señala que el artículo 9° del Acuerdo Tarifa 2003, expedido por el ~~Gobernador~~ **Gobernador** Constitucional del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de febrero de dos mil tres y su fe de erratas del veintisiete de ese mes y año, es inconstitucional porque contraviene el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Federal que dispone la exención a los bienes del dominio público de la Federación, de la obligación de pagar las contribuciones ya referidas.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, por auto del uno de diciembre de dos mil cuatro, admitió a trámite la demanda de amparo directo, misma que registró con el número **328/2004**.

Seguido el juicio en todos sus trámites legales, el Tribunal Colegiado de Circuito, en sesión de uno de abril de dos mil cinco, resolvió el asunto en el sentido siguiente:

“ÚNICO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa Consejo de la Judicatura Federal, en contra del acto y por la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución, por los motivos y para los efectos indicados en el último considerando de la misma.”

Las consideraciones en que se basó el Tribunal Colegiado de Circuito, fueron, en la parte que interesa, las siguientes:

1) Estimó que la existencia del acto reclamado queda acreditada con el informe justificado rendido por la responsable y las actuaciones que remitió para justificarlo, y que como una cuestión previa al estudio de los conceptos de violación, se debía aludir a la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal, parte quejosa en el juicio de amparo, a fin de determinar que este órgano está legitimado en el juicio y que, además, no existe relación de dependencia entre el Tribunal Colegiado del conocimiento y ese órgano técnico-administrativo.

2) Consideró que el Consejo de la Judicatura Federal, no es un órgano de naturaleza jurisdiccional, sino meramente administrativo encargado de la administración, vigilancia y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

disciplina de los órganos jurisdiccionales federales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, los Magistrados de Circuito, así como los Jueces de Distrito, cuentan con autonomía e independencia respecto de dicho organismo, conservando íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos.

Tal es la independencia que se suscita entre los órganos referidos, que el artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Federal dispone que las decisiones que tome el Consejo de la Judicatura Federal sobre designación, adscripción, ratificación y promoción de magistrados y jueces, podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de verificar su adecuación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que consagra el principio de independencia e imparcialidad de los juzgadores federales con el fin de mantener una aplicación adecuada del derecho.

Manifestaron que el hecho de que la parte quejosa pretenda obtener una decisión favorable en cuanto a la exención del pago de servicios de agua potable y alcantarillado, no implica que el Tribunal Colegiado del conocimiento vea afectada la imparcialidad de su dicho, dado que aun si se llegara a estimar fundada la pretensión, ningún beneficio se generaría al propio órgano jurisdiccional; menos aún, podría formularse consulta al Consejo

de la Judicatura Federal, para que brinde asistencia técnica-jurídica para la resolución del asunto, toda vez que éste, constituye una de las partes que intervienen en el juicio de amparo.

Indicó, que no se puede perder de vista, que en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, cuando el promovente del juicio de amparo tenga reconocida su personería ante la autoridad responsable, la misma será admitida en el juicio citado para todos los efectos legales, siempre que se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas, lo que en el caso sucede, por lo que este tema no puede introducirse oficiosamente a la revisión constitucional.

Por lo tanto, concluyó que el presente juicio de amparo resulta procedente, al ser promovido por el órgano facultado para acudir en defensa de los bienes que forman parte del Poder Judicial de la Federación, y que se destinan al servicio público federal de impartición de justicia.

3) Por otra parte, en cuanto al tema de la exención del pago de servicios públicos de agua potable y alcantarillado y, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, inciso c) constitucional, estimó que la consideración de preservar la Hacienda Municipal frente a las decisiones de política fiscal de las Legislaturas Estatales, originó que no se autorizara la exención de las



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

contribuciones reservadas a la Hacienda Municipal y que sólo por excepción, procedían aquellas referentes a los bienes de dominio público de la Federación, los Estados y los propios Municipios.

Consideró necesario identificar la naturaleza de las fuentes de ingreso reservadas al municipio, que se enumeran en el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal. Al respecto mencionó que son las:

- a).- contribuciones sobre propiedad inmobiliaria---**
b).- participaciones federales ---c) ingresos por la prestación de servicios públicos ---De estas tres categorías, interesan para la resolución del presente asunto las descritas en los incisos a) y c), que son las vinculadas a las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria y a las contribuciones causadas con motivo de los servicios públicos prestados por la administración municipal. ---Sobre esos ingresos de la Hacienda Municipal, la fracción IV del artículo 115 constitucional, dispone expresamente: 'Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. . . Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios,

salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.' ---De ello se infiere que el autor de la norma, al disponer que los bienes de dominio público de la Federación se encontrarán exentos del pago de las contribuciones previstas para los municipios, se refirió tanto a las derivadas de la propiedad inmobiliaria, como a las que surgen de ingresos captados por la hacienda municipal por la prestación de servicios públicos. ---Luego, si a estas dos categorías de ingresos tributarios se refiere claramente el autor de la norma, cuando prescribe que sólo se autorizarán las exenciones por los bienes de dominio público, resulta por tanto claro para este tribunal colegiado, que el caso de las contribuciones (derechos) por el servicio de agua que presta el Municipio, se halla efectivamente incluido en el supuesto de exención de mérito, con independencia de que el servicio público de agua potable y alcantarillado lo preste directamente el municipio, o lo haga por medio de un organismo descentralizado estatal, como en el caso lo es 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey'..."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

De esta manera, manifestó que las bases de organización política y administrativa municipal, que tienden a asegurar la libertad hacendaria, consisten en que los municipios tengan a su cargo, entre otras funciones, la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, y que únicamente cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que de forma directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo temporalmente de algunos de



A. CORTE DE
DE LA NACIÓN
ENERA DE ACUERDO

Así, en este aspecto, resolvió que:

... Por lo tanto, no es óbice lo que argumenta la autoridad responsable en la sentencia reclamada, en el sentido de que el supuesto de exención establecido en el artículo 115, fracción IV, inciso c), no se surte en el caso, porque no es el municipio quien presta el servicio público de agua potable y drenaje, sino que el mismo es prestado por un organismo público descentralizado del Estado, denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pues tal como ya se ha señalado, las cuotas que pagan los particulares por la prestación del servicio público de agua y drenaje forman parte de los recursos municipales por propia disposición constitucional, y participan de las características de los derechos, con independencia de que el servicio lo preste directamente el municipio, o lo

haga por medio de un organismo descentralizado estatal, porque la coordinación celebrada con el Estado para que éste preste el servicio por medio de un organismo como el señalado, que fue creado exclusivamente para ese fin, no es perpetua sino temporal por mandato de la norma suprema, y no debe afectar la calidad de 'recursos municipales' que corresponde a esas cuotas, sino que es factible revertirla cuando los municipios tengan la capacidad de hacerse cargo directamente de la prestación del servicio público."

En el mismo sentido, mencionó que en los artículos 119, 130 y 132, todos ellos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, también se dispuso la libertad hacendaria de los municipios de la Entidad, y que la prestación del servicio público de que se trata queda a cargo de los mismos, de manera exclusiva y temporal. Así, no es posible sostener que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, sea una institución pública descentralizada totalmente independiente del Estado y de los municipios que conforman el área metropolitana, dado que no se debe perder de vista, que es un organismo estatal, y que por disposición de la Constitución Federal, la prestación del servicio corresponde originariamente a los municipios, quienes se pueden coordinar con el Estado para que éste se encargue de prestarlo por sí mismo o por conducto del organismo creado para tal función.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Además, estimó que conforme al artículo 3° del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, las contribuciones locales se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, donde los derechos son contribuciones que establece la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por percibir servicios que presta el Estado en sus funciones, dentro de las cuales se halla el servicio de agua y alcantarillado, por lo que sus cuotas no pueden ser consideradas como un aprovechamiento sino como un derecho. Señaló que:

CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

Mientras que los derechos siempre son ingresos que consisten en sumas de dinero, que el Estado cobra a las personas que se benefician por la prestación de un servicio en funciones de derecho público, como lo es servicio de agua y alcantarillado, o bien por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, esto es, una remuneración legal, por un servicio, uso o aprovechamiento de bienes proporcionados por el Estado; los aprovechamientos son ingresos que derivan de otro tipo de funciones de derecho público, como las multas y los recargos, pero no constituyen una cantidad que se entrega a cambio de un beneficio prestado por el Estado."

Adujo, que es necesario precisar, que la pertenencia de los bienes al dominio público de la Federación en el presente caso, se acreditó, a través de las constancias correctamente exhibidas en el juicio contencioso administrativo, con la demostración de que éstos forman parte del patrimonio de la quejosa y que se destinan a la realización de un servicio público como lo es la impartición de justicia, por lo que encuadran en el supuesto de exención ya aludido, previsto en el artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional.

Indicó que al resultar fundados los conceptos de violación en materia de constitucionalidad, era innecesario estudiar los referentes a cuestiones de legalidad, pues la parte quejosa no podría obtener mayor beneficio que el alcanzado. Lo anterior, porque consideró que le asistía la razón a la parte quejosa, ya que el Acuerdo de Tarifa 2003 reclamado viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 115 tantas veces citado, al pretender que una dependencia federal que opera con bienes inmuebles del dominio público de la Federación, pague los derechos por el servicio de agua y alcantarillado.

CUARTO. Inconforme con dicha sentencia, **Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey**, a través de su representante Alfredo de Guadalupe Martínez Garza, quien tiene el carácter de tercero perjudicado en el presente juicio de amparo, interpuso el catorce de junio de dos mil cinco recurso de revisión, mismo que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

por acuerdo de presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintidós de junio de dos mil cinco, se remitió su conocimiento a la Segunda Sala de este órgano jurisdiccional, por declararse el Tribunal Pleno, legalmente incompetente para ello.

Por proveído de veintiocho de junio de dos mil cinco, el entonces Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, admitió el recurso de revisión de referencia en el que además, se ordenó la notificación a la autoridad responsable, al tercero perjudicado y al Procurador General de la República para la interposición del pedimento respectivo.

A CORTE DE
DE LA NACIÓN.

EN LA CIUDAD DE MEXICO

Asimismo, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, José Natividad González Parás, autoridad que también tiene el carácter de tercero perjudicado, interpuso recurso de revisión el veintisiete de junio de dos mil cinco.

Recurso, que por acuerdo de seis de julio de dos mil cinco, el entonces Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo admitió.

El Agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.

Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil cinco y, en acatamiento a lo acordado por los señores Ministros integrantes

de la Segunda Sala, en sesión pública de once de noviembre de dos mil cinco, se remitió el asunto al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por diverso acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil cinco, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó devolver los autos al señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia para que formulara el proyecto respectivo y diera cuenta con él al Pleno del Alto Tribunal.

Por proveído de tres de enero de dos mil siete y, en virtud de que el señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia fue designado Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se retornó el expediente al señor Ministro Mariano Azuela Güitrón para que actuara como ponente en el mismo.

En sesión de veintitrés de abril de dos mil siete, el Tribunal Pleno resolvió por unanimidad de ocho votos, el impedimento número de expediente 4/2007-PL, en el sentido de:

“... ÚNICO. Se califica de legal el impedimento planteado por el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón para actuar como ponente para conocer del amparo directo en revisión 1070/2005, deducido del juicio de amparo 328/2004, promovido por el Consejo de la Judicatura Federal.”

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto Tercero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que se promueve en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en la cual se declararon fundados los conceptos de violación, en los que se plantea la constitucionalidad del artículo 9° del Acuerdo por el que se aprueba la nueva estructura de cuotas y tarifas para la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado en el periódico oficial el veintiocho de febrero de dos mil tres.

SEGUNDO. Los recursos de revisión fueron interpuestos en tiempo, toda vez que la sentencia recurrida se notificó a las partes el diez de junio de dos mil cinco (fojas 287 y 288 del expediente

del juicio de amparo) y los recursos de revisión del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey y del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, se interpusieron, respectivamente, el catorce y veintisiete de junio de dos mil cinco, esto es, dentro del plazo concedido en la Ley de Amparo para ello.

En efecto, el plazo de diez días hábiles con que cuentan los recurrentes para interponer el recurso de revisión, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo, comenzó a correr el catorce de junio de dos mil cinco, y concluyó el veintisiete del mismo mes y año, debiéndose descontar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las recurrentes están legitimadas para interponer recurso de revisión en su carácter de terceros perjudicados que les fue reconocido en el juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fueron parte contraria del quejoso en el juicio natural del que proviene la sentencia reclamada.

Sirve de apoyo a la consideración anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial de rubro, texto y datos de identificación siguientes:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDO

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL TERCERO PERJUDICADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO SUBSISTA EL ESTUDIO DE UN TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL QUE AFECTE SU ESFERA JURÍDICA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la tramitación del recurso de revisión contra sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver amparos directos, disponen que tal recurso procede siempre que exista un tema propiamente constitucional y se colmen los requisitos de fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales que al efecto expida, sin que de su texto se advierta restricción alguna para que legítimamente cualquiera de las partes del juicio de garantías, entre ellas, el tercero perjudicado, pueda hacerlo valer. En estas condiciones, tomando en consideración lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXXIV/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena

Época, Tomo XI, junio de 2000, página 42, en el sentido de que el tercero perjudicado puede interponer el recurso de revisión en amparo indirecto donde se cuestione la inconstitucionalidad de una ley, se concluye que como tal aspecto de legitimación no es un problema exclusivo del amparo indirecto, aquellas reglas deben hacerse extensivas al directo y, por ende, el tercero perjudicado, en su calidad de parte en el juicio de garantías, está legitimado para recurrir la sentencia dictada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito que, con afectación a su esfera jurídica, resuelva un tema propiamente constitucional.” (Novena Época Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, marzo de 2007, tesis 2a./J. 18/2007, página 513)

CUARTO. En los agravios hechos valer, aduce la recurrente tercero perjudicado, **Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey**, a través de su representante Alfredo de Guadalupe Martínez Garza, en esencia, que:

A) La ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo, es violatoria y contraria a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento, no



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

realizó el análisis de la causa de improcedencia relativa a que los actos reclamados fueron consentidos, motivo suficiente para que de acuerdo con el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, se sobresea en el juicio.

B) Los funcionarios públicos, Víctor Manuel Mandicuti y Alejandro Romero Gudiño, carecen de legitimación y personería para demandar en juicio, en virtud de que sus demandas fueron mayores a los acuerdos plenarios números 25/2004 y 46/2004 del Consejo de la Judicatura Federal, requeridos para que dicho órgano del Poder Judicial de la Federación, pudiera iniciar los juicios respectivos, hecho que representa una causal de improcedencia no prevista en la resolución de la sentencia recurrida.

C) Los juzgadores se avocaron a hacer un estudio a favor del Consejo de la Judicatura Federal, violando en su perjuicio las disposiciones de orden público dispuestas en el artículo 73 de la Ley de Amparo.

D) La sentencia recurrida es imprecisa, incongruente y está incorrectamente fundamentada y motivada, por otro lado, tampoco contiene una interpretación exacta del artículo 115 constitucional.

E) Los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, debieron haber sobreseído en el juicio de amparo directo, ya que el *Acuerdo de Tarifa Agua 2003*, no constituye el primer acto de aplicación para el Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que entró en vigor el uno de febrero del mismo año y hasta el año de dos mil tres, promovió el juicio contencioso administrativo, por lo que el juicio de amparo debió sobreseerse por improcedente.

F) La sentencia recurrida viola en su perjuicio los artículos 14, 16, 103 y 107, todos ellos de la Constitución Federal, en virtud de que varía la acción legal del Consejo de la Judicatura Federal y modifica la *litis*, al introducir situaciones particulares consideradas en las demandas originalmente planteadas, en relación con el artículo 9° del Acuerdo de Tarifa 2003, dictado por el Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, del veintiocho de febrero de dos mil tres.

G) Finalmente, señala que conforme al artículo 40 de la Constitución Federal que dispone que los Estados de la República están legalmente facultados para emitir sus propias leyes, la legislación local del Estado de Nuevo León, podía legislar en relación con la prestación del servicio público de agua potable y drenaje sanitario en el sentido de que está a cargo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey; también aduce, que el artículo 9° del Acuerdo de Tarifa 2003 es constitucional, por lo que la



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

parte quejosa si está obligada al pago de cuotas y tarifas del servicio referido, en términos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León.

QUINTO. Por su parte, los agravios hechos ~~valer~~ por el **Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León**, son los siguientes:



En el primero, que es inusitado e inconveniente el
del tribunal *A quo* por justificar su independencia e
afianzamiento frente al quejoso Consejo de la Judicatura Federal,
pues tal propósito es erróneo al observarse la clara dependencia
DE LA NACION.
de dicho órgano jurisdiccional al Consejo de la
Judicatura Federal, tal como se advierte de los artículos 94,
párrafo segundo, de la Constitución Federal y 81 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, particularmente en
lo que hace a los aspectos operativos, administrativos, de
vigilancia e incluso personales.

Continúa manifestando, que al estar a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, salvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es posible que el Consejo de la Judicatura Federal promueva un juicio de garantías y un Tribunal Colegiado de Circuito resuelva concederle el amparo, pues

técnica y jurídicamente resulta paradójico que éste se haya concedido por el Poder Judicial de la Federación, a través del Tribunal Colegiado de Circuito, a favor de uno de sus órganos integrantes, como es el Consejo de la Judicatura Federal.

B) En el **segundo** agravio hecho valer, estima que el hecho de que el tribunal *A quo* haya abordado el estudio de lo que se consideró como el fondo de la *litis* constitucional, viola en su perjuicio, el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, porque omitió analizar la existencia de causales de improcedencia como es la referente a que el Acuerdo de Tarifa Agua 2003 es un acto derivado de otro consentido.

Asimismo, aduce que el Tribunal Colegiado de Circuito debió detectar que la parte quejosa en su demanda de amparo, en torno a la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo impugnado, no formuló propiamente un concepto de violación, por lo tanto, debió declarar sus argumentos inoperantes y sobreseer en el juicio. En efecto, señala que debió sobreseerse en el juicio de amparo, porque en contra de los actos reclamados a las autoridades del Estado de Nuevo León, la parte quejosa pudo promover la controversia constitucional contemplada en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

Considera que el juicio de amparo está creado únicamente para los gobernados y, el Consejo de la Judicatura Federal, al ser



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

un órgano sin personalidad jurídica, no tiene la titularidad de derechos constitucionales; por lo tanto, no podía presentar la demanda de amparo.

C) En el **tercer** agravio, la parte recurrente menciona, que la sentencia recurrida contiene una serie de incongruencias, tanto de orden procesal como de fondo, mismas que trascendieron al sentido del propio fallo, en su perjuicio. Alega que se distorsionó la tesis a favor del Consejo de la Judicatura Federal, para abordar el estudio de la constitucionalidad del Acuerdo impugnado, alegando que en ésta se hallan fundados, tanto el acto impugnado en el procedimiento contencioso de origen, como en la sentencia reclamada en el juicio de amparo.

Sigue manifestando, que el Tribunal *A quo*, no advirtió la verdadera pretensión del Consejo de la Judicatura Federal al promover los juicios contenciosos administrativos cuya segunda instancia generó la sentencia reclamada en el juicio de amparo, pues su acción de nulidad tiende a que sea precisamente el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y no el Director General de la Institución Pública Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, quien resuelva la solicitud de exención formulada en el oficio correspondiente.

D) En el **cuarto** agravio y en cuanto a las cuestiones constitucionales, aduce el recurrente que la concesión del amparo

constituye un desacierto, así como una equívoca interpretación y aplicación del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en virtud de que el Tribunal *A quo* manifestó que la exención prevista en el artículo citado, se actualiza cuando el servicio lo preste el municipio, lo que no acontece en la especie, pues el servicio lo presta Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Asimismo, estima que la ilegalidad de la sentencia combatida surge al considerar que las cuotas que pagan los particulares por la prestación del servicio de agua y drenaje, forman parte de los recursos municipales por disposición del artículo 115 de la Constitución Federal, cuando en realidad, este precepto constitucional alude a que la libertad hacendaria de los municipios aplica a los ingresos que reciban por los servicios que efectivamente presten, y no a que se deba recibir indiscriminadamente los ingresos de la prestación del servicio de agua potable, aunque no sea el municipio quien brinde tal servicio.

En el mismo sentido, señala que resulta inexplicable que en la sentencia recurrida se haya declarado inconstitucional el artículo 9º del Acuerdo de Tarifa Agua 2003, al contravenir lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, bajo el argumento de que este numeral, exenta a la Federación del pago del servicio de agua potable, cuando lo que verdaderamente dispone, es que respecto de los ingresos que perciba el municipio por los servicios



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que preste, los bienes de la Federación estarán exentos, sin que sea dable estimar que los ingresos que reciban otras dependencias u organismos pertenezcan a los municipios, aunque éstos no presten el servicio.

También indica, que la exención no puede otorgarse a favor de la Federación, porque las tarifas de agua y drenaje, constituyen un aprovechamiento y no una contribución (derecho), debido a que entre los usuarios del servicio de agua potable y el arillado y la institución pública descentralizada, no existe una relación tributaria. De esta forma, el servicio no lo presta alguna Secretaría o dependencia del Estado, sino un organismo paraestatal, por lo que los ingresos que se obtienen por el pago del servicio de agua y drenaje, forman parte de dicho organismo. Además, las cuotas y tarifas que aplican al organismo operador del servicio público de agua potable, no son establecidas como contribuciones por el Congreso de la Unión.

Finalmente, manifiesta que la deficiente interpretación del artículo 115 constitucional, colisiona gravemente con el sistema federal acogido en el artículo 40 de la Constitución Federal, pues se confunde el interés de la Federación con el de los Estados federados y con las entidades municipales, desconociendo la autonomía jurídico-política de su existencia y la individualidad de sus prerrogativas y de su patrimonio, careciendo de sustento pretender que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey deba

brindar gratuitamente sus servicios institucionales, a costa de sus recursos financieros.

SEXTO. Previo el estudio de los agravios hechos valer por las recurrentes, es menester analizar la procedencia del recurso de revisión.

El artículo 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, establece los casos excepcionales en que procede el recurso de revisión en amparo directo:

Dicho numeral dispone lo siguiente:

***“ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
--- IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en***





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

FORMA A-88

449

esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.

La exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 107, fracción IX, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras, respecto del recurso de revisión ~~interpuesto~~ contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual, la reforma pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en congruencia con el carácter uniinstancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en aquellos casos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal, pues éste debe concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprenden un alto nivel de importancia y trascendencia y que, por tal razón, impactan en la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional.

Con base en lo anterior, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:

a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio, y

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

En relación con el segundo de los requisitos antes mencionados, el punto primero del Acuerdo en cita señala, que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios o,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal Pleno, que por lo que hace a ciertos argumentos hechos valer en los agravios —que se analizarán en el siguiente considerando—, no hay materia de constitucionalidad alguna, pues tienden a señalar la existencia de causas de improcedencia, que el Tribunal Pleno de Circuito del conocimiento a juicio de las recurrentes, advertir y, en otros se señalan cuestiones de legalidad, sin embargo, es necesario analizarlos.

A CORTE DE
DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO

De manera que el presente recurso sí es procedente, pues es necesario determinar, si conforme al artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional, los bienes del dominio público de la Federación están exentos del pago de las contribuciones por los conceptos de agua potable y drenaje, cuando dichos servicios son prestados por un organismo público descentralizado del Estado.

Así, se actualiza la excepción a la regla general relativa a que las sentencias dictadas en el juicio de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo supuestos como el presente, si se toma en cuenta que se plantea la interpretación directa al artículo 115, fracción IV, inciso c), constitucional; por lo tanto, el recurso de revisión es procedente.

SÉPTIMO. En relación con los agravios resumidos en los incisos A), B), C), E) y F) del CUARTO considerando, así como los diversos marcados con los incisos A), B) y, C) en el QUINTO considerando, este Tribunal Pleno estima lo siguiente.

La recurrente Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en sus agravios, aduce esencialmente que en el caso, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque los funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal que promovieron el juicio carecen de legitimación; además de que el Tribunal Colegiado de Circuito desvió la *litis* constitucional al estimar situaciones particulares no consideradas en la demanda de amparo.

Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, en esencia considera que existe una dependencia entre el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento y el Consejo de la Judicatura Federal, por lo tanto, no es posible que éste órgano del Poder Judicial de la Federación haya interpuesto el juicio de amparo.

Además, señala que para resolver el asunto, pudo haber presentado una controversia constitucional, contemplada en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por otro lado, aduce que el Tribunal Colegiado de Circuito debió analizar la causa de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa, Consejo de la Judicatura Federal, consintió la ley impugnada (es un acto derivado de otro consentido), y que se distorsionó la *litis* porque no advirtió la verdadera razón del Consejo citado, de haber presentado la demanda de amparo.

De lo anterior, en esencia se advierten tres aspectos a considerar, el primero, referente a la legitimación del Consejo de Judicatura Federal para acudir al juicio de amparo, el segundo, que consintió el artículo impugnado -artículo 9º del Acuerdo de tarifa 1998 y 2003 y, el tercero, que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, están subordinados al Consejo de la Judicatura Federal y, por ello no pueden conocer de los asuntos en los que el Consejo de la Judicatura Federal sea parte quejosa.

Por lo que hace al primer aspecto, cabe precisar, que quien presentó la demanda de amparo en representación del Consejo de la Judicatura Federal, fue la Directora General Jurídica del citado Consejo, Rebeca López Hernández, acreditando su personalidad con copia certificada de su nombramiento, de diez de mayo de dos mil cuatro, tal como se aprecia a foja 29 del juicio de amparo 328/2004, pues los licenciados Víctor Manuel Mendicuti Gómez y Alejandro Romero Gudiño, no presentaron la

demanda de amparo, sino que presentaron respectivamente juicios de nulidad, en su carácter el primero, de encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, acreditando tal nombramiento con el oficio SEP/PLE/005/8667/2002 de veintitrés de septiembre de dos mil dos, que obra en copia certificada a foja 18 del juicio de nulidad 051/2003 del índice del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León y el segundo como Director General de Asuntos Jurídicos, cargo que acreditó con la copia certificada de la foja 3 del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de treinta de abril de dos mil tres, que obra a foja 18 del expediente del juicio de nulidad 251/2003 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo citado.

Respecto al juicio de amparo, que es el que aquí se presenta para efectos de la legitimación y personería para demandar en el juicio de garantías, Rebeca López Hernández, Directora General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, tal como lo acreditó con su nombramiento, sí cuenta con la legitimación y personería requeridas, pues ello se desprende de los artículos 37 y 38 de los Acuerdos Plenarios números 25/2004 y 46/2004, este último que reformó el artículo 38, fracción IX, del primero de los citados acuerdos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que respectivamente disponen lo siguiente:

"Artículo 37. Objetivo. La Dirección General de Asuntos Jurídicos se encargará de llevar a cabo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

gestiones legales ante toda clase de autoridades, instituciones, entidades y personas para el debido resguardo de los intereses del Consejo de la Judicatura Federal; de participar en la elaboración de la normatividad del propio consejo; así como de brindar asesoría y asistencia técnico-jurídica a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas que lo integran, a efecto de que los actos que realicen se ajusten al marco normativo que regula su actuación."

CORTE
LA NACIÓN
DE JUSTICIA

"Artículo 38. Atribuciones. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones: ... IX. **Intervenir**, previo acuerdo del consejo y en su representación, sin perjuicio de las facultades y atribuciones exclusivas de sus integrantes, secretarías ejecutivas y órganos, en todas las controversias jurídicas en que éste sea parte y con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público cuando así proceda, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, incluso del juicio

de amparo y otorgar el perdón si procediere, previa autorización del consejo transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recibir pagos, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, recusar Jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo y los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, para que promueva o realice todos los actos permitidos por las leyes que favorezcan a los derechos del Consejo de la Judicatura Federal. Por virtud de esta disposición, se entenderá ratificado por dicho órgano colegiado todo lo que se haga, en los términos de ley, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y los representantes delegados que designe, quienes gozarán de todas las facultades antes enunciadas; ...”



Esta última fracción transcrita, fue modificada por el diverso Acuerdo 46/2004, para quedar como sigue:

ÚNICO.-Se modifica la fracción IX del artículo 38 del Acuerdo General 5/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para quedar como sigue:

“... IX. Intervenir, en representación del consejo, sin perjuicio de las facultades y atribuciones



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

exclusivas de sus integrantes, secretarías ejecutivas y órganos, en todas las controversias jurídicas en que éste sea parte y con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público cuando así proceda, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, incluso del juicio de amparo y otorgar el perdón si procediere, previa autorización del consejo, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recibir pagos, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, recusar Jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo y los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, para que promueva o realice todos los actos permitidos por las leyes que favorezcan a los derechos del Consejo de la Judicatura Federal. Por virtud de esta disposición, se entenderá ratificado por dicho órgano colegiado todo lo que se haga, en los términos de ley, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y los representantes o delegados que designe, quienes gozarán de todas las facultades antes enunciadas,

debiendo, en todo caso, informar al Pleno de las actuaciones realizadas de manera cuatrimestral;

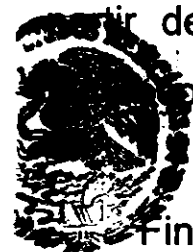
De la transcripción anterior se advierte, que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, está facultada para intervenir, en representación del Consejo, en todas las controversias jurídicas en que éste sea parte y con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público cuando así proceda, interponer toda clase de recursos y desistirse de ellos, incluso del juicio de amparo y otorgar el perdón si procediere, previa autorización del Consejo, transigir, comprometer árbitros, absolver y articular posiciones, recibir pagos, ofrecer y rendir toda clase de pruebas, recusar Jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo y los recursos previstos por la ley de la materia, entre otros.

Por lo tanto, si quien presentó la demanda de amparo fue la Directora General Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal, Rebeca López Hernández, actuando en su representación, es claro que cuenta con legitimación procesal para ello.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En relación con el segundo aspecto, este Tribunal Pleno estima que ha lugar a desestimar la causa de improcedencia relativa a que el primer acto de aplicación fue consentido, toda vez que las recurrentes lo hacen derivar de que el Consejo de la Judicatura Federal no impugnó **'desde la entrada en vigor'** el acuerdo de tarifa, el cual no es propiamente un acto de aplicación, además de que la propia Ley de Amparo permite impugnar una disposición de observancia general desde su entrada en vigor o a partir del primer acto de aplicación, debiéndose agregar que no existe prueba de aplicaciones pasadas.



MA. CORTE DE
DE LA NACIÓN.
SEÑAL DE ACUERDO

Finalmente, en relación con el tercer y último aspecto, la parte quejosa, Consejo de la Judicatura Federal, sí puede promover en contra del cobro de contribuciones locales, juicio de amparo, pues los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación sí pueden tramitarlo y resolverlo con total independencia.

Lo anterior porque las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías según las bases del artículo 9° de la Ley de Amparo, cuyo precepto legal nació desde la vigencia de la ley publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, para distinguir la forma como podrían promoverlo las personas morales privadas y las oficiales, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 8o. Las personas morales privadas podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes.”

“ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.”

Como puede observarse, la Ley de Amparo distingue entre personas morales privadas y personas morales oficiales, para los efectos de su representación, por lo que es básico señalar que el único ordenamiento que define a las personas morales también llamadas colectivas o jurídicas es la Convención Interamericana sobre personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el derecho internacional privado, publicada el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y siete, de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1°. La presente Convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los Estados Partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

persona jurídica según la ley del lugar de su constitución.--- Se aplicará esta convención sin perjuicio de convenciones específicas que tengan por objeto categorías especiales de personas jurídicas."



CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
EN REVISIÓN

Estas personas jurídicas, a título enunciativo, están previstas en el Título Segundo del Código Civil Federal, de la forma siguiente:

TÍTULO SEGUNDO.--- De las personas morales.---

ARTÍCULO 25. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.--- VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736."

Del anterior precepto se advierte que el Código Civil Federal no define el tipo de personas jurídicas colectivas, pero sí enuncia a las de "carácter público" y "de naturaleza privada", que en la doctrina se pretenden definir de la siguiente forma:

"C L A S E S --- 5) Clases. --- Las personas jurídicas pueden ser: públicas (de Derecho público) o privadas (de Derecho privado); asociaciones o fundaciones; de interés público o de interés privado.--- 6) Públicas y privadas.--- Se discute cuál es el criterio acertado para distinguir las personas en públicas y privadas. En nuestra opinión Personas jurídicas públicas son las entidades que teniendo personalidad están encuadradas en la organización estatal, formando parte de la misma en uno u otro sector. Por ejemplo, una provincia, un municipio, una Universidad, el Instituto Nacional de Industria, el Patrimonio forestal del Estado y otras muchas Entidades autónomas.--- La existencia, además del Estado, de pluralidad de personas públicas se debe a que aquél para la consecución de sus fines ha de servirse de organismos colaboradores y auxiliares, y, por ello, aceptar la existencia de entes menores o, a veces, crearlos él mismo o, incluso en ocasiones, incorporar a la maquinaria estatal, entes que





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

existían desde antes como organizaciones privadas.--- Personas jurídicas privadas son las que no forman parte de la organización estatal, como un club de recreo o una sociedad mercantil.” (La Persona Jurídica. Manual Albaladejo García. Civitas. España 1974).

**“CAPÍTULO V --- LA PERSONA MORAL. -
CORPORACIONES. - FUNDACIONES. -**



CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

SEAL DE ASESOR

DEFINICIÓN DE PERSONA MORAL.--- En el Capítulo anterior fijamos el concepto de persona física, partiendo del punto de que la persona es el sujeto capaz de derechos y obligaciones, en virtud de que está dotada de razón y voluntad.--- Para el estudio de la persona moral e indispensable examinar y conocer primeramente las más importantes personas morales marcadas en nuestra legislación.--- Nuestro Código Civil vigente, en su artículo 25, nos enumera quiénes son personas morales. Son personas morales:--- I. La Nación, los Estados y los Municipios;--- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley;--- III. Las sociedades civiles o mercantiles;--- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la

Constitución Federal; (la fracción XVI del 123 constitucional previene: "Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.").--- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;--- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la Ley.--- Las personas morales comprendidas en la fracción I del artículo 25 que acabo de transcribir encajan dentro de la clasificación de personas morales de Derecho Público. Dado la brevedad de este trabajo, trato de explicar en él únicamente a la persona moral de Derecho Privado, no estudiaré ni analizaré a la Nación, a los Estados y a los Municipios, así como a las demás corporaciones de carácter público comprendidas en la fracción II del citado artículo 25." (Tesis para obtener el grado de licenciado en derecho de Rubén Talamantes P., titulada "Naturaleza de las personas morales", Escuela Libre de Derecho).

En tal virtud, las personas jurídicas públicas son aquellas entidades que teniendo personalidad están comprendidas en la



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

457

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

organización estatal, formando parte de ella en uno u otro sector y, por exclusión, son personas jurídicas privadas aquéllas que, por su naturaleza, no tienen estas características. Entre las primeras, se ubican las señaladas en las fracciones I y II del artículo 25 del Código Civil Federal, y las segundas, las restantes que se enuncian en este numeral.

Bajo esa óptica, la persona jurídica pública recae en un ente indeterminado denominado Estado-Gobierno, el cual se compone de diversos órganos públicos que dependen de él; por ende, para que si alguno de estos últimos, por su estructura, constituye una persona moral pública, debe atenderse a sus particularidades esenciales, dado que la actuación estatal es demasiado compleja para precisar en un solo postulado cuándo reúne los matices para ser considerada persona moral pública.

Así, las personas jurídicas públicas —nombre jurídicamente correcto—, también son llamadas personas jurídicas oficiales, que en esencia, están referidas a la entidad Estado-Gobierno.

Esta concepción genérica fue adoptada en la Ley de Amparo, en especial, en su artículo 9º, que actualmente, dice:

“ARTÍCULO 9o. Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que

designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.--- Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes.

El párrafo segundo del artículo transcrito se reformó mediante Decreto publicado el uno de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en cuya exposición de motivos, se estableció:

“Exposición de motivos.--- Entre estas importantes aportaciones son especialmente relevantes:--- La adición del segundo párrafo del artículo 9º, para que las personas morales oficiales estén exentas de otorgar las garantías que la Ley de Amparo exige, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles...”

Por su parte, el señalado artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevé:

“ARTÍCULO 4º. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

238

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes.--- Las resoluciones dictadas en su **contra** serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.---

La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o representación."

Con base en lo expuesto puede concluirse que las personas morales oficiales pueden actuar en un doble carácter como entes dotados de poder público, y esencialmente, como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hayan investidos, mientras que los segundos obran en condiciones similares a los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos.

Lo anterior significa que las personas morales oficiales, por regla general, tratándose de asuntos del orden civil en el que sean

demandadas, al incorporarse con esta calidad en el juicio, lógico es que tienen la misma situación que el actor particular; por ende, actúan como persona moral de derecho privado, siendo evidente que contra las determinaciones que les sean desfavorables puede promover juicio de amparo y, de igual manera, por la naturaleza de la relación tributaria, el contribuyente, aunque sea una persona moral oficial, puede promover también juicio de amparo contra el cobro respectivo, ya que actúa en un plano de derecho privado al quedar ceñido al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Además, la afectación a los intereses patrimoniales no debe verse como una situación estricta vinculada a la privación de derecho de propiedad o posesión, sino en sentido amplio cualquier situación especial que pudiera afectar esos intereses, por tanto, si al Consejo de la Judicatura Federal se le pretenden cobrar impuestos de carácter local o municipal es indudable que se ubica en la regla prevista en el artículo 9° de la Ley de Amparo, porque se trata de una persona moral oficial perteneciente a un poder público, el que no desarrolla su objeto al tener la calidad de obligado tributario en un determinado ordenamiento legal, es decir, tiene la calidad de cualquier otro contribuyente de derecho privado.

Luego, el Consejo de la Judicatura Federal es una persona moral oficial, por lo que en caso de que estime que se afecten sus intereses patrimoniales, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, puede acudir como parte quejosa a un juicio de garantías,



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

459

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

siempre que actúe como personal oficial de derecho privado como puede suceder tratándose del cobro de contribuciones, ya que lo hace en su calidad de sujeto pasivo, sin que se soslaye que desde la Quinta Época hasta la actual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las contribuciones no forman parte del patrimonio privado del Estado en su carácter de persona moral al no ubicarse en la Ley General de Bienes Nacionales y, por ende, el juicio de amparo que intente es improcedente, lo cual obedece a que lo promueve como un ente dotado de poder público, esto es, con su calidad de sujeto activo de la relación jurídica, siendo por estos matices que no estaría en aptitud legal para promover el juicio a diferencia de la presente hipótesis donde el quejoso actúa en un plano tributario de subordinación.

LA NACIÓN.
ERAL DE ACUERDO

Por lo que hace a la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal y su relación con los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Pleno estima que aquella -la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal- estriba en ser un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, pues sus atribuciones no están encaminadas a resolver jurisdiccionalmente conflictos, sino que posee facultades de organización interna y de administración, reglamentarias, de designación, de organización jurisdiccional, de disciplina y carrera judicial.

Las anteriores atribuciones se encuentran consagradas en el artículo 94, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone, en la parte que interesa, que ***“La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes...”***, es decir, el citado Consejo tiene atribuciones administrativas y no de orden jurisdiccional, como sí las tienen esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados y Unitarios, Circuito y Juzgados de Distrito.

Por otra parte, con fundamento en el artículo 100 C

JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, particularidades paralelas a sus atribuciones de administración, vigilancia y disciplina que son únicamente de carácter administrativo y no jurisdiccional.

Asimismo, el artículo constitucional referido en el párrafo anterior, establece la integración del Consejo, los requisitos y cualidades que deben reunir los consejeros, el tiempo que dura su encargo, que se ejercerá con independencia e imparcialidad, que sólo pueden ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Federal, que funciona en pleno o en comisiones, así



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

como las facultades del Pleno para resolver sobre la designación, adscripción y remoción de los Magistrados y Jueces, y diversos asuntos que la ley secundaria determine.

Es también, atribución del órgano referido, propiciar la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos restantes del Poder Judicial de la Federación, tal como lo señala el artículo 68 de la Ley Orgánica de este Poder, que a letra dice:

"ARTÍCULO 68. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. --- El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este último."

Por lo anterior, no es posible estimar que exista una relación de jerarquía entre el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el primero es un órgano administrativo que realiza las tareas de vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial del

Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y, por ende, no guarda relación jerárquica con los segundos.

Ello fue precisado por el legislador en la reforma del artículo 94 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, en donde se aclaró que entre el Consejo de la Judicatura Federal y los demás órganos del Poder Judicial de la Federación, no existe supremacía jerárquica de aquél frente a estos últimos, tal como se advierte en la parte considerativa de la exposición de motivos de la citada reforma, que dice:

“... estas Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia advertimos que de aprobarse la reforma constitucional en estudio, se perfeccionaría la relación existente entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo interprete de nuestro ordenamiento jurídico, y el Consejo de la Judicatura Federal, cuya función constitucional es la correcta administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte.— D. El Presidente de la República propuso adicionar en la última parte del párrafo primero del artículo 94, la mención de que el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEAL DE ACUERDO

Consejo de la Judicatura Federal sea un órgano del Poder Judicial de la Federación. El objetivo perseguido en la iniciativa presidencial fue dejar en claro que el Consejo de la Judicatura Federal, si bien forma parte del Poder Judicial de la Federación, tiene una naturaleza jurídica diferente en tanto lleva a cabo funciones de diverso tipo de las estrictamente jurisdiccionales. Al rendir su dictamen, las Comisiones de la Colegisladora propusieron trasladar al segundo párrafo del artículo 94 la disposición contenida actualmente en el primer párrafo del artículo 100, con el propósito de precisar las principales funciones del Consejo y su posición jerárquica al interior del Poder Judicial de la Federación. --- Desde el punto de vista de la técnica legislativa, se estima adecuada la modificación introducida por el Senado de la República a la iniciativa presidencial, pues la ayuda a clarificar la posición del Consejo de la Judicatura y, fundamentalmente, diferenciar las atribuciones entre los órganos del Poder Judicial de la Federación. Esta modificación, por lo tanto, precisa el sentido de las reformas constitucionales de 1994, en tanto hace evidente que no existen jerarquías orgánicas al interior del Poder Judicial, sino fundamentalmente una distribución de funciones.

En adelante, deberá quedar claro que mientras la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación tienen encomendadas las funciones de impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura tiene a su cargo las tareas de administración, vigilancia y disciplina de los órganos y de los individuos del Poder Judicial de la Federación, excepción hecha de quienes laboren en la Suprema Corte o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.--- En segundo término, se propone que se traslade la definición del Consejo de la Judicatura Federal contenida en el primer párrafo del artículo 100 en vigor, al segundo párrafo del artículo 94, ambos de la Constitución. En este sentido, y nuevamente en el espíritu de la iniciativa de reforma, se determina que el Consejo, en su carácter de órgano del Poder judicial de la Federación, contará con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones."

Además de todo lo anterior, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció en ese aspecto, al resolver por unanimidad de cinco votos, en sesión del dieciocho de enero del año dos mil dos, referente a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 10/2001, siendo quejoso el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

FORMA A-55

462

Consejo de la Judicatura Federal y ponente el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.

En la parte que interesa señaló lo siguiente:

“CUARTO.--- Ahora bien, puntualizado lo anterior, se estima procedente, en primer lugar, analizar el obstáculo que aducen los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito para conocer del juicio de garantías, consistente en que los Tribunales Colegiados de Circuito están impedidos para conocer de los asuntos en los que interviene el Consejo de la Judicatura Federal como su superior administrativo. --- En efecto, en principio debe decirse, en relación con la competencia originaria de los Tribunales Colegiados de Circuito que, tal y como lo aducen los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, dicha competencia tiene su fundamento en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el acto reclamado consiste en la sentencia

CORTE DE
LA NACIÓN.
AL DE ACUERDO

definitiva dictada por un órgano jurisdiccional en materia administrativa, dispositivos que a continuación se transcriben: --- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Se transcribe) --- Ley de Amparo. (Se transcribe) --- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (Se transcribe) --- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Se transcribe) --- Ley de Amparo. (Se transcribe) --- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (Se transcribe) --- Una vez precisado lo anterior, requiere determinarse si asiste o no razón a los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito cuando aducen que el asunto que plantea en el caso reviste la importancia y trascendencia que justifique que este Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción, apoyándose para arribar a dicha conclusión, sustancialmente, en que al ser el juicio de garantías promovido por el Consejo de la Judicatura Federal como superior administrativo de los Tribunales Colegiados de Circuito, impide su conocimiento por parte de aquellos órganos colegiados constituyendo una circunstancia de trascendencia universal para todos los Tribunales Colegiados de Circuito del país el definir tal aspecto. --- No cabe duda que la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

mencción del Consejo de la Judicatura Federal como quejoso constituye una característica particular del asunto que, por sí sólo, justifica que se trata de un asunto de interés y trascendencia por su originalidad, pero no por las razones que señalan los Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito que solicita el ejercicio de la facultad de atracción.

--- En principio, cabe precisar que respecto a las acepciones gramaticales de interés y trascendencia a que se refieren los artículos 107, fracción V, inciso d), segundo párrafo, de la Constitución Federal y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como causa para el ejercicio de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos, cuya competencia originaria corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, conviene precisar que la Segunda Sala del Alto Tribunal ha definido el alcance de la expresión trascendencia al analizar la procedencia del recurso de revisión fiscal ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a los artículos 240, 242 y 244 del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos sesenta y nueve; que por lo demás dicho recurso ya no es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación sino de los Tribunales Colegiados de Circuito en términos de lo dispuesto por el artículo 104, fracción I-B de la Constitución Federal: consideraciones que se contienen en la tesis visible a fojas 74, tomo 7, Tercera Parte, Séptima Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: --- "REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO."

(Se transcribe) --- En cuanto al enunciado "interés", el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo define como: "--- (Del lat. interesse, importar). M. Provecho, utilidad, ganancia. 2. Valor que en sí tiene una cosa. (...) 4. Inclinação más o menos vehemente del ánimo hacia un objeto, persona, narración, etc. (...)" --- De lo anterior se tiene que la naturaleza excepcional de un asunto, por su entidad y consecuencia, es una razón que justifica el ejercicio de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ello derivará cuando el propio órgano jurisdiccional estime que un asunto reviste características especiales que así lo ameriten, esto es, que por su interés, excepcionalidad y trascendencia deba conocer de él; sin embargo, dicha facultad es



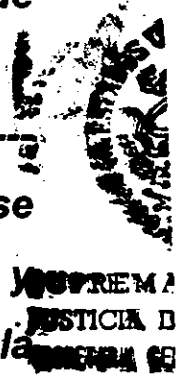
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

discrecional ya que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen disposición sobre el particular. Lo anterior fue precisado por la anterior Tercera Sala del Máximo Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 3a./J. 43/91, visible a fojas 62, tomo VIII, noviembre, Octava Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación, que señala: --- "ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL." (Se transcribe) --- Una vez precisado lo anterior, se tiene que en la especie las razones expuestas por el Tribunal Colegiado de Circuito para considerar de especial interés y consecuencia el amparo directo de que se trata, resultan incorrectas por lo siguiente. --- Efectivamente, es inexacto que el Consejo de la Judicatura Federal sea un órgano jerárquicamente superior a los Tribunales Colegiados de Circuito, eventualidad que, de suyo, desautoriza el criterio propuesto para solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción. --- Para arribar a la anterior conclusión, se hace necesario referirse a lo dispuesto por los artículos 94 y 100 de la Constitución Federal que establecen y regulan las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal. --- (Se transcribe) --- Como

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DE ACUERDO

se desprende de la lectura integral de los preceptos constitucionales transcritos con antelación, es una determinación de la Ley Suprema que el Consejo de la Judicatura Federal tiene la naturaleza de una autoridad de carácter administrativo, no jurisdiccional. --- Así es, en el primer párrafo del artículo 94 constitucional se establece que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, esto es, en él se determina la estructura e integración del Poder Judicial de la Federación: --- En el segundo párrafo del propio numeral, se puntualiza que la administración, vigilancia y disciplina del propio Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las bases previstas en la misma Ley Suprema y en las demás leyes; por tanto, es indudable que la competencia del Consejo se limita al orden administrativo, máxime si se toma en consideración que esas atribuciones originalmente correspondían a este Alto Tribunal y la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro tuvo como uno de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

sus objetivos principales ése, es decir, quitar funciones administrativas a la Corte y otorgárselas al Consejo. --- En efecto, la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, modificó de manera importante la organización del Poder Judicial de la Federación. Dicha reorganización se tradujo, fundamentalmente, en una nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyas facultades como tribunal constitucional fueron ampliadas y reforzadas, así como en la creación del Consejo de la Judicatura Federal como órgano especializado de gobierno, administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones. --- Dichas funciones fueron plasmadas en el artículo 100 constitucional que, como se dijo, señala la integración, estructura y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal al señalar las disposiciones generales sobre la función central del mismo, que es la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el dispositivo constitucional que se comenta, establece la integración del Consejo, los requisitos y cualidades



CORTE DE
E LA NACIÓN
ERAL DE ACUERDO

que deben reunir los consejeros, el tiempo que dura su función, que ejercerán con independencia e imparcialidad, y el hecho de que sólo pueden ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Federal, el funcionamiento del Consejo en pleno o en comisiones, y las facultades del pleno para resolver sobre designación, adscripción y remoción de los Jueces y Magistrados así como diversos asuntos que la ley secundaria determine. --- En este sentido, los artículo 68 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisan las funciones del Consejo de la Judicatura Federal dispuestas por la Constitución Federal antes señaladas. --- Se desprende de todo lo anterior, que el Consejo de Judicatura Federal es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con funciones y ubicación jerárquica distinta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Federal Electoral, a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a los Juzgados de Distrito, sin que entre aquél órgano y éstos exista un orden jerarquizado ni de índole administrativa ni mucho menos jurisdiccional, pues sus funciones están claramente delimitadas por la Constitución Federal al encomendar al Consejo de la Judicatura Federal,



PREMA
TICIA DE
GENE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



CORTE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

una función meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción, sin que de ningún modo pueda derivar de ellas alguna función superior a su esfera administrativa frente a los órganos jurisdiccionales que componen el Poder Judicial de la Federación. --- Ello fue explicitado por el legislador al modificar el artículo 94 de la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, donde el legislador aclaró precisamente que entre el Consejo de la Judicatura Federal y los demás órganos del Poder Judicial de la Federación, no existe supremacía jerárquica de aquél frente a éstos últimos. --- En efecto, en la exposición de motivos propuesta a la Cámara de Origen (Senadores) el seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la parte que informa el asunto, dice: (Se transcribe) --- Mediante dictamen de veintisiete de abril de mil novecientos noventa y nueve, elaborado por la Cámara de Senadores en relación con la reforma en comento, en lo relativo, se expuso: --- (Se transcribe) --- Finalmente, en la discusión de la reforma, verificada en la Cámara de Senadores en la misma fecha del citado dictamen, en la parte relativa, se indicó: (Se transcribe) --- Por lo tanto, y debido a

que, como se expuso, el Consejo de la Judicatura Federal no es superior administrativo de los Tribunales Colegiados de Circuito, circunstancia relevante en la que se basa la solicitud de facultad de atracción del Tribunal Colegiado de Circuito, este Tribunal Pleno estima que, por lo que se refiere a dicho aspecto, no debe ejercer la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo promovido por el Consejo citado contra los actos reclamados del Juez Administrativo Municipal en el Estado de Guanajuato, pues tales argumentos no revelan interés y trascendencia del asunto. --- En apoyo a lo anterior, cabe citar las tesis de jurisprudencia emitidas por la Tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos criterios se comparten por esta Segunda Sala. --- Tesis 3a./J. 45/91 y 3a./J. 46/91, respectivamente, visibles a fojas 60, tomo VIII, noviembre, Octava Época, compiladas en el Semanario Judicial de la Federación, que dicen: --- "ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO DEBE HACERSE RESTRICTIVAMENTE." (Se transcribe) --- "ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SÓLO DEBE EJERCERSE CUANDO SE FUNDE EN RAZONES QUE NO PODRÍAN DARSE EN LA MAYORÍA NI EN

SUPREM
JUSTICIA
SECRETARIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LA TOTALIDAD DE LOS ASUNTOS.” (Se
transcribe)...

De las consideraciones transcritas derivó la tesis aislada de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo rubro, texto y datos de identificación dicen:

“CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NO ES UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación integral de lo dispuesto en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 68 y 81 de la Ley Orgánica del

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SEGUNDA SALA DE JUSTICIA

Poder Judicial de la Federación se desprende que el consejo en cita es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con funciones distintas a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las del Tribunal Electoral, a las de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a las de los Juzgados de Distrito, por lo que entre aquel órgano y éstos no existe un orden jerarquizado de naturaleza jurisdiccional, toda vez que sus atribuciones están plenamente delimitadas por la mencionada Constitución Federal, al

encomendar a tal consejo una actividad meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción. Lo anterior se confirma con el contenido de la exposición de motivos de seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, así como del dictamen de veintisiete de abril siguiente elaborado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de su discusión, respecto de la reforma al citado artículo 94 de la Constitución Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mencionado año, en el sentido de que la modificación introducida en este precepto precisa el sentido de las reformas constitucionales de 1994, en tanto hace evidente que no existen jerarquías orgánicas al interior del Poder Judicial, sino fundamentalmente una distribución de funciones."

(Novena Época, Segunda Sala, Apéndice actualización 2002, tomo VII, conflictos competenciales, tesis 20, página 66)

En consecuencia, este Tribunal Pleno considera necesario subrayar, que no existe dependencia ni sumisión de órgano jurisdiccional alguno al Consejo de la Judicatura Federal, pues su naturaleza como órganos del Poder Judicial de la Federación, es distinta y no hay razón para considerar que existe una posición



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

jerárquicamente subordinada en el caso concreto, del Tribunal Colegiado a la parte quejosa, Consejo de la Judicatura Federal, y con ello, pretender la decisión favorable en cuanto a la exención del pago de servicios de agua potable y alcantarillado, tal como se advierte de los argumentos vertidos a lo largo de este considerando.

OCTAVO. Ahora bien, por lo que hace al planteamiento en el que en esencia se duelen de que contra todo derecho, el Tribunal Colegiado de Circuito en la sentencia recurrida determinó otorgar el amparo para el efecto de que a la quejosa se le conceda la exención por concepto del derecho por suministro del servicio de agua potable. Sin embargo, dicha concesión supone un desacierto así como una equivocada interpretación y aplicación del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues de resultar fundado, haría innecesario el estudio de los demás agravios.

A fin de resolver el problema jurídico planteado consistente en determinar si conforme al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, los bienes de dominio público de la Federación, están exentos del pago de la contribución por concepto de servicio de agua potable, cuando dicho servicio es suministrado materialmente por un organismo público descentralizado, es necesario tener en cuenta que Don

Venustiano Carranza, al presentar el proyecto de Constitución ante el Congreso Constituyente, en relación con el Municipio, dijo:

“El Municipio Independiente, que es sin disputa una de las grandes conquistas de la revolución, como que es la base del Gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades, sustrayéndose así a la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores...”

En la sesión del veinticuatro de enero de mil novecientos diecisiete, el diputado Heriberto Jara, señaló:

“No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a pueblos como refiriéndose a entidades en lo general.”

De lo anterior se ve, que desde el origen de la actual Constitución, se puso de manifiesto la importancia de la autonomía económica como un medio para asegurar la autonomía política; pues, según se sustentó, sin libertad



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

económica, el Municipio Libre, base de la organización política de México, es una ficción irrealizable.

Cabe precisar, que la fracción IV del artículo 115 constitucional se incorporó al texto constitucional mediante reforma de dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres,¹ estableciéndose en la Constitución un conjunto de reglas básicas tendientes a fortalecer y preservar al Municipio Libre y, específicamente, su Hacienda Municipal, a modo de garantizarle un mínimo de ingresos por diversos conceptos, según se explica en la iniciativa presidencial de la cual derivó el Decreto de reformas, que en la parte conducente dice:

" ... Por su amplia reiteración y sustentación en toda la consulta popular, se concluyó en la necesaria reestructuración de la economía

¹ En la reforma, se incluyó, entre otros, la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, que quedó en los siguientes términos:

"V. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones.

Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egreso serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles."

municipal, entendiendo, como así también lo proclamaron los Constituyentes de Querétaro, que no podrá haber cabal libertad política en los Municipios mientras éstos no cuenten con autosuficiencia económica. Por ende, en este renglón, fundamental para la subsistencia y desarrollo de los Municipios, consignamos en la fracción IV de la iniciativa, en primer término, como concepto originario del artículo 115 la libre administración de su Hacienda por parte de los Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de descentralización, de correcta redistribución de competencias en materia fiscal, estimamos conveniente asignar a las comunidades municipales los impuestos o contribuciones, inclusive con tasas adicionales, que establezca los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así como de su fraccionamiento, división, consolidación, traslado y mejora y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, previendo en casos de carencia de capacidad para la recaudación y administración de tales contribuciones que los Municipios podrán celebrar convenios con los Estados para que éstos se hagan cargo de algunas de las funciones relacionadas con la mencionada administración





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

contributiva. Se atribuyen igualmente a los Municipios los rendimientos de sus bienes propios, así como de las otras contribuciones y los otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y fundamentalmente también los ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos a su cargo. Por último, en esta área hacendaria, se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas Locales de establecer anualmente las bases, montos y plazos con arreglo a los cuales la Federación debe cubrir a los Municipios dichas participaciones. Como una disposición importante para la seguridad de los ingresos municipales, se consigna la obligación del pago de sus contribuciones para toda persona, física o moral o instituciones oficiales o privadas, sin exenciones o subsidios evitando de esta manera a nivel constitucional las prácticas de exentar a diversas personas o empresas del sector público, de estas contribuciones que son consustanciales para la vida de los Municipios. Sin embargo, por imperativas razones de orden público, que por sí solas se explican, se exceptuó de estas reglas a los

CORTE DE
LA NACIÓN
A DE ACUERDO

bienes de dominio público de la Federación, Estados y Municipios. Además, como consecuencia lógica del principio de la libre administración de la Hacienda Municipal, se propone que los presupuestos de egresos de los Municipios deban ser aprobados sólo por los Ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos que se les hubiesen autorizado."

La decisión de preservar la Hacienda Municipal frente a las decisiones de política fiscal de las Legislaturas Estatales, a fin de evitar que aquélla fuera gravemente afectada por cualquier género de exenciones en favor de sujetos determinados, que en la iniciativa presidencial de que se trata y en los dictámenes elaborados por las comisiones respectivas de los órganos legislativos, se sentara con toda claridad que el propósito del órgano reformador fue disponer, como regla general, que no se autorizaban exenciones en el pago de contribuciones reservadas a la Hacienda Municipal y que sólo por excepción procedían aquéllas referentes a los bienes de dominio público de la Federación, los Estados y los propios municipios, como se corrobora con la lectura de los dictámenes formulados por las Cámaras de Diputados y Senadores sobre la iniciativa de reformas, de los cuales se transcriben las partes de interés:



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

" ... En forma particularmente acuciosa fueron estudiados por las comisiones dictaminadoras, los términos en que la iniciativa redactó la fracción IV del artículo 115, sobre la que fue notable el número de aportaciones y comentarios de los ciudadanos senadores. Por principio, en esta fracción se orienta lo que por origen ha correspondido siempre a los Municipios, o sea, su facultad de administrar libremente la Hacienda Municipal, la que en los términos del proyecto se enriquece notablemente al conformarla con contribuciones y participaciones que el propio texto enumera, mereciendo particular relevancia las participaciones por contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y su tasa adicional por todos los conceptos. Se establece así un sentido de territorialidad en materia fiscal, que hace que los ingresos por impuestos prediales se reviertan en favor de la localidad en la que los predios y toda propiedad inmobiliaria adquieran valor económico por su uso y circulación, lo cual ya no estará sujeto, una vez establecida la vigencia de esta fracción, a reversión de ningún tipo. Como un principio de congruencia y también de justicia, formarán parte de la Hacienda Municipal los ingresos que provengan por la prestación de los servicios públicos a cargo de los Municipios. Cabe

ORTE
A NACIÓN
DE ACUERDO

destacar que, según el texto de la iniciativa, de su exposición de motivos y de las explicaciones escuchadas durante la comparecencia del ciudadano secretario de Gobernación, los ingresos municipales no quedan limitados a lo que expresamente consigna la fracción IV, sino que las Legislaturas Locales podrán agregar otros renglones importantes como aprovechamientos, productos, financiamientos, cooperaciones diversas, y otros rubros cuya terminología varía con la dinámica del propio desarrollo y no es por ello susceptible de quedar consignado en un precepto de rango constitucional. Quedó entendido asimismo que la distribución de las participaciones que la Federación entrega a los Municipios habrá de realizarse a través de las normas que expidan los Congresos Locales, los cuales adecuarán en forma equitativa lo que corresponda a cada uno de ellos, con lo que se eliminan arbitrariedades, caprichos y desórdenes. Novedad que fortalece al Municipio es la autorización para que con el gobierno de su Estado concerte convenios de coordinación y éste ejecute alguna de las funciones relacionadas con la administración impositiva, necesidad de organización compartida que no deba gravitar sobre los recursos municipales ni



SUPREMA
CORTA DE JUSTICIA DE
LA FEDERACION
SECRETARIA GENERAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

entenderse como forma obligatoriamente perpetua, sino susceptible de eliminarse en la medida en que la autosuficiencia municipal acceda al campo de su capacidad administrativa. --- La determinación de los impuestos cuya recaudación beneficiará al Municipio así como de ciertos derechos, no hace limitativos los renglones de ingresos y sí permite, inicialmente, conocer con certeza las fuentes primarias propias e intocables del haber municipal, estableciendo la posibilidad de convenir con el Estado que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la recaudación de esas contribuciones. Rasgo importante de su autonomía es que sus presupuestos de egresos serán aprobados internamente por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles."



CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

Una vez precisado lo anterior, se tiene que el artículo 115, fracción IV, dispone lo siguiente:

"Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: --- ... --- IV.- Los municipios

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: --- ... --- c).- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. --- Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. --- ..."



PREMA C
JUSTICIA DE LA
SECRETARÍA GENERAL

En la parte que interesa, la fracción IV, inciso a), señala que los municipios percibirán las contribuciones incluyendo las tasas adicionales que establezcan los Estados, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Por su parte, el inciso c) dispone que percibirán los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

En un párrafo aparte, contempla que las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas; las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones, sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

De lo anterior se advierte, que el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, dispone una regla general consistente en prohibir todo tipo de exención sobre las contribuciones municipales, pues señala que las leyes federales, no pueden limitar a los Estados la facultad de establecer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria o sobre los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos municipales.

Asimismo establece que las leyes federales no pueden conceder exenciones sobre los mismos; es decir, sobre la propiedad inmobiliaria o sobre los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos municipales.

Y finalmente, que las leyes estatales no pueden conceder exenciones a favor de persona o institución alguna respecto de los mismos conceptos –la propiedad inmobiliaria o los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos municipales–.

También contempla una excepción a la prohibición general de exentar, al señalar que:

“Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”.



Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al alcance del artículo 115, fracción IV de la Constitución Federal, un primer momento, sustentó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/97, que dice:



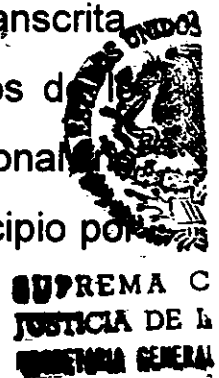
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

(Novena Época --- No. Registro: 198730 --- Instancia: Segunda Sala -
--- Jurisprudencia --- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta V, Mayo de 1997 --- Materia(s): Constitucional,
Administrativa --- Tesis: 2a./J. 22/97 --- Página: 247)

"DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. El penúltimo párrafo de la base IV del artículo 115 constitucional, al cual remite el texto vigente del artículo 122, base primera, fracción V, inciso b), del mismo Ordenamiento Fundamental, se debe interpretar en el sentido de que dentro de la exención autorizada para bienes del dominio público de la Federación y los Estados, quedan comprendidos los organismos descentralizados como titulares de los inmuebles descritos en el artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, por los servicios que preste el Municipio en materia de agua potable, toda vez que el autor del precepto constitucional, al autorizar la exención, claramente la hace extensiva no sólo a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, sino también a los ingresos que obtenga el Municipio por los servicios públicos a su cargo, lo cual

significa que se refirió a las contribuciones causadas por aquellos servicios que se presten en relación con los bienes de dominio público en favor de la Federación, Estados u organismos descentralizados, en razón de la importancia que atribuyó a la función desarrollada a través de la afectación y destino de tales bienes sometidos al régimen de protección de que se trata.”

Sin embargo, el criterio contenido en la tesis antes transcrita ha dejado de tener aplicación, toda vez que en términos de lo dispuesto actualmente, por el mismo precepto constitucional es viable la exención a los ingresos que obtenga el municipio por los servicios públicos a su cargo.



En efecto, al momento de resolverse la contradicción de tesis 53/96, entre las sustentadas por el Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, por la misma Segunda Sala y que dio origen a la tesis jurisprudencial antes transcrita, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115, disponía después de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, lo siguiente:

“Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, a favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de la Federación de los estados o de los municipios, estarán exentos de dichas contribuciones.

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La parte final del párrafo transcrito, establecía que únicamente los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o de los municipios estarían exentos de dichas contribuciones.

El vocablo "dichas" se refiere a las contribuciones a que se refieren los incisos a) y b) de la propia fracción IV, en relación con el impuesto predial y con los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos, respectivamente.

De ello se desprende que hasta antes de la reforma, se podía interpretar que los inmuebles de dominio público se encontraban exentos no solo del pago por concepto del impuesto predial a que se refiere el inciso a), sino también de los derechos por servicios públicos prestados en relación con esos inmuebles mencionados en el inciso c).

Ciertamente, el Constituyente lo que estaba determinando era que los bienes del dominio público pueden estar exentos de las contribuciones mencionadas en el párrafo anterior.

No obstante lo anterior, el párrafo en comento, fue modificado según Decreto promulgado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; en tal virtud, la fracción IV del artículo 115 constitucional, cuya transcripción es necesaria volver a realizar, en la parte que interesa actualmente señala lo siguiente:

“ ... Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. ...”

De esto se desprende, que anteriormente se establecía “sólo los bienes del dominio público estarán exentos de dichas contribuciones” y a partir de la reforma de noventa y nueve se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

dispone: *"sólo estarán exentos los bienes de dominio público"*, es decir, se suprimió la remisión que se hacía a las contribuciones que se refieren los incisos a) y c), para simplemente señalar que la exención abarca única y exclusivamente a los inmuebles del dominio público; por tanto, la reforma introducida al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional precisó por sí sola, el alcance de la exención en estudio, la cual se refiere exclusivamente a los inmuebles respecto de los impuestos generados sobre la propiedad raíz, y no respecto a las demás contribuciones.

CORTE DE LA NACIÓN
En otras palabras, la exención no puede hacerse extensiva a los derechos por la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, por el simple hecho de que —el usuario del agua— ocupe un inmueble de dominio público, sea de la Federación, del Estado o del municipio.

Lo anterior, se confirma con la lectura del dictamen de quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, del que se desprende, que la exención se refiere únicamente a los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.

"CONSIDERACIONES --- (...) --- 4.4. La fracción IV es de reformarse, atentos a las motivaciones

expresadas en las iniciativas en estudio. --- En efecto, el segundo párrafo debe ser modificado en relación a la prohibición para exentar u otorgar subsidio respecto de las contribuciones municipales a las que dicho párrafo se refiere, para dejar el término amplio de "personas" con lo cual se entiende que se trata de personas físicas o morales indistintamente, lo mismo que la denominación genérica "institución", ya que nos referimos a "instituciones públicas o privadas". --- Por tal razón, los bienes del dominio público de los tres órdenes del gobierno, que utilicen las entidades paraestatales o cualquier forma de concesión, contrato o autorización mediante los cuales particulares hagan uso de dichos bienes para actividades accesorias al objeto público. --- Lo anterior responde al hecho de que dichos bienes e instituciones o personas que los utilizan demandan los mismos servicios municipales que otros bienes que no tienen la calidad de bienes del dominio público y que sin embargo, tributan impuesto predial. --- Además del principio equidad, se busca fortalecer el ámbito municipal en lo que se refiere a sus ingresos propios, por lo que a partir de la presente reforma, debe verificarse en contrapartida un esfuerzo recaudatorio municipal en donde la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

tasa y los valores que le sirvan de base sean justos, y no se concedan subsidios, (como ya lo previene la Constitución en el párrafo que se reforma en su parte subsistente) y las tasas sean la pauta de los principios de proporcionalidad y equidad para los causantes. ..."

Lo que se buscó con esta reforma fue evitar, que la Federación y sus organismos descentralizados tuvieran que pagar impuestos sobre la propiedad inmobiliaria por las grandes toras, presas, refinerías y, puertos, entre otras, pero no dejar de pagar por el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Así, el hecho de que en las discusiones que giraron en torno a las reformas al artículo 115 constitucional, en mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve, respecto del tema de las exenciones a las contribuciones municipales, éstas se refieren al impuesto predial, supuesto en que la calidad de bien del dominio público sí es determinante para el surgimiento de la figura tributaria, y no se refiere a la exención de pago de contribuciones por la prestación de servicios públicos, por lo que es claro que respecto de éstos no puede entenderse la exención.

De lo anterior se sigue, que la exención no se da en atención al sujeto y tampoco se otorga en atención a la función u

objeto público, salvo que se trate de las entidades paraestatales y de los particulares.

En este orden de ideas, la exención se otorga atendiendo a la calidad de bien de dominio público; y en este sentido, aunque la Federación sea el sujeto pasivo de la obligación tributaria y el bien inmueble esté afecto a un objeto público, no se puede hacer extensiva la exención, si no se trata de un bien de dominio público.

En este tenor, si la calidad de bien de dominio público es la que hace surgir la exención, entonces, dicho elemento objetivo deberá ser determinante para la configuración de la figura tributaria.

Con el objeto de advertir cuándo es determinante y cuándo no lo es, es conveniente hacer una comparación entre contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria (entre otras, impuesto predial) y las contribuciones derivadas de la prestación de servicios públicos.

Así tenemos que, en el caso del impuesto sobre bienes raíces, el aspecto objetivo del hecho imponible, consiste en la propiedad o posesión de un bien inmueble necesaria en este supuesto para el nacimiento de la obligación tributaria.

En cambio, en los derechos, el hecho imponible consiste en la recepción del servicio público de agua y, por tal motivo, la



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

calidad de un bien inmueble, ya sea de dominio público o no, es indiferente para la configuración del tributo; lo anterior se explica a través del distinto papel que juega el bien de dominio público en cada tipo de contribución. En el primer caso, la propiedad o posesión de dicho bien inmueble, es el elemento necesario de la figura tributaria, que hace nacer la obligación, por lo que, si es de dominio público, impedirá que ésta nazca, ya que goza de la exención constitucional; en cambio, en el segundo caso, el bien inmueble no es parte de la figura tributaria, y en nada le afecta si tiene la calidad de bien de dominio público, por lo que nace la obligación tributaria y no opera la exención; por tanto, las exenciones sólo proceden si para el surgimiento de la figura tributaria es determinante un acto o un hecho jurídico, relacionado con un bien inmueble de dominio público, como es la propiedad o posesión.

Sin que sea obstáculo a la conclusión arribada, el hecho de que sea un organismo descentralizado quien preste el servicio público que originalmente corresponde al municipio, porque la norma constitucional de que se trata, prohíbe exentar a los bienes del dominio público que requieran de tales servicios municipales.

Por todo lo anterior, es válido interpretar que las exenciones sólo operan respecto del inciso a) del artículo 115 constitucional; es decir, respecto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, por ser éste el único caso en el que la calidad de bien de dominio público es determinante para el surgimiento de la

obligación, pues sólo aquí un acto o un hecho jurídico, relacionado con la propiedad inmobiliaria, influirá en el nacimiento de la obligación tributaria, impidiendo que ésta nazca, y haciendo procedente la exención.

De allí que este Tribunal Pleno estime, que es constitucional el artículo 9° del Acuerdo por el que se aprueba la nueva estructura de cuotas y tarifas para la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, conocido como Acuerdo Tarifa de Agua 2003, expedido por el gobernador del Estado de Nuevo León, y publicado en el periódico oficial veintiocho de febrero de dos mil tres.

En atención a que existen conceptos de violación hechos valer sobre cuestiones de legalidad, ha lugar a devolver el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento para que los analice.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se **REVOCA** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **NO AMPARA NI PROTEGE** al Consejo de la Judicatura Federal, contra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el juicio contencioso administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

TERCERO. Se devuelve su jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento para que conozca de los conceptos de violación sobre legalidad cuyo estudio omitió.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de la ejecutoria, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca en que se actúa como asunto concluido.

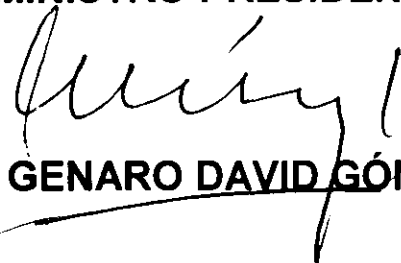


CORTE DE
LA NACIÓN
CAL DE ACUERDO

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en funciones Góngora Pimentel; por lo que hace a que el Consejo de la Judicatura Federal sí está legitimado para promover el juicio de amparo; el señor Ministro Gudiño Pelayo votó en contra y porque es improcedente del juicio de amparo y reservó su derecho de formular voto particular y, por mayoría de seis votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente en funciones Góngora Pimentel; los señores Ministros Aguirre Anguiano, y Silva Meza votaron en contra y porque se concediera el amparo al quejoso. Previo aviso, no asistieron los señores Ministros Azuela Güitrón y Presidente Ortiz Mayagoitia.- Doy fe.

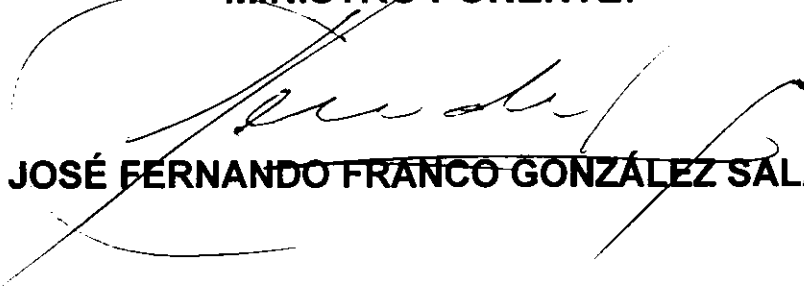
Firman los señores Ministros Presidente en funciones y Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MINISTRO PRESIDENTE EN FUNCIONES:



GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

MINISTRO PONENTE:



JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:



LIC. RAFAEL COELLO CETINA

Esta hoja forma parte del Amparo Directo en Revisión 1070/2005. Quejoso: Consejo de la Judicatura Federal. Fallado en la sesión de veintitrés de junio de dos mil nueve, en el sentido siguiente: **PRIMERO.** Se REVOCA la sentencia recurrida. **SEGUNDO.** La Justicia de la Unión **NO AMPARA NI PROTEGE** al Consejo de la Judicatura Federal, contra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el juicio contencioso administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003. **TERCERO.** Se devuelve su jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento para que conozca de los conceptos de violación sobre legalidad cuyo estudio omitió. Conste.

EN 26 AGO. 2005 POR LISTA DE LA MISMA FECHA, SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 28. FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO DOY FE.

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OÍR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, DOY FE.



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

No. expediente: 01070/2005-00

Pertenece: PLENO

Materia: ADMINISTRATIVA

QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

SUJETO RELACIONADO: REBECA LÓEZ HERNÁNDEZ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA PARTE QUEJOSA).

TERCERO PERJUDICADO: GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

TERCERO PERJUDICADO: DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICO DESCENTRALIZADA DENOMINADA SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY.

SUJETO RELACIONADO: ALFREDO DE GUADALUPE MARTÍNEZ GARZA (APODERADO GENERAL DE LA PARTE TERCERO PERJUDICADA).

RECURRENTE: TERCERO PERJUDICADO

Acto reclamado: LA SENTENCIA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004, DICTADA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 251/2003 Y SU ACUMULADO 051/2003

Acto recurrido:

Motivo del conflicto:

Autoridad responsable: SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Autoridad emisora del acto:

Garantías violadas:

Tema: INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO C), CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR SI OPERA O NO LA EXENCIÓN RESPECTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EL SERVICIO PÚBLICO LO PRESTA UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.

F. turno a ponencia: 10/07/2007

Ministro: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

Secretario proyectista: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ

Sentido de la resolución: REVOCA, NO AMPARA NI PROTEGE, SE ORDENA DEVOLVER AUTOS

F. resolución: 23/06/2009

F. ingreso engrose: 25/08/2009

EL SUSCRITO LIC. RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS,



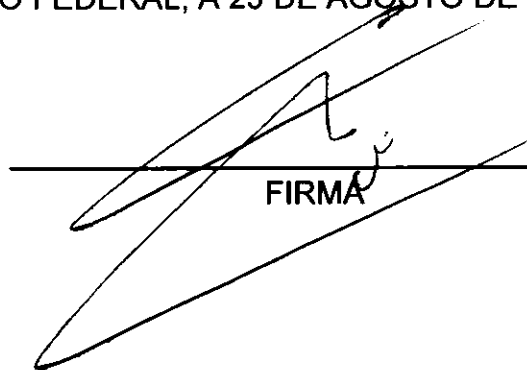
PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA SE PROCEDIÓ A INGRESAR A LA RED DE INFORMÁTICA JURÍDICA EL ENGROSE DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2009, DICTADA POR EL PLENO EN EL PRESENTE ASUNTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 25 DE AGOSTO DE 2009.


FIRMA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA D.
SECRETARÍA GENERAL DE A



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

SEÑOR LICENCIADO
MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E

De conformidad con lo establecido en el artículo 67, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me permito remitirle el expediente del amparo directo en revisión 1070/2005, incluido el engrose correspondiente, para su notificación y la continuación del trámite respectivo.

Sin otro particular le reitero mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 25 de agosto de 2009

Atentamente



LIC. RAFAEL COELLO CETINA

2

2

2

2

2

2



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA 124
482

QUEJOSO: CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN NÚMERO:
1070/2005
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS
ASUNTOS

En México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil nueve, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio número SGA-MAAS/0276/2009, de veinticinco de agosto de dos mil nueve, del licenciado Rafael Coello Setina, Secretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal.	Original
2. Amparo directo en revisión 1070/2005.	Un cuaderno
3. Juicio de amparo directo 328/2004.	Un cuaderno
4. Expediente 251/2003 acumulado al 051/2003.	Dos cuadernos
5. Expediente 051/2003.	Un cuaderno

Las constancias anteriores se recibieron en la Subsecretaría General de Acuerdos el veinticinco del mes y año que transcurren. Conste.

México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil nueve.

Agréguese a los autos el oficio de remisión de los autos de cuenta, para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, toda vez que con fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió resolución en el presente asunto, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: **"PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida.- SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Consejo de la Judicatura Federal, contra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal**

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en el juicio contencioso administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003.- TERCERO. Se devuelve su jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento para que conozca de los conceptos de violación sobre legalidad cuyo estudio omitió.- Notifíquese..."; por tanto, con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse dichos autos, al órgano jurisdiccional del conocimiento, los pliegos originales de expresión de agravios de los recursos de revisión hechos valer, debiéndose dejar en autos copias certificadas de los mismos, así como copia certificada de la sentencia de mérito; en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA

MABO/VPMM

EN 31 AGO. 2009 POR LISTA DE LA MISMA FECHA, SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO D.O.Y.FE.

QUE HUBIERA DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER INTERESADOS A QUIEN NOTIFICACIONES SE TIENE POR FECHA DICHA POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, DOY FE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53

483

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

**QUEJOSO: CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO: 01070/2005**

**AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN
NÚMERO
1070/2005**

En la misma fecha, para notificar el acuerdo que
antecede, se giró el siguiente oficio

OF. SSGA-VI-36690/2009.-SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL CUARTO CIRCUITO. MONTERREY,
NUEVO LEÓN.



DERACIÓN
LA NACIÓN
GUERDOS

México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil
nueve.

SECRETARIA EN FUNCIONES
DE ACTUARIA

LIC. VONNE BRIONES ESQUIVEL

rmdm



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

QUEJOSO: CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO: 01070/2005

484

OF. SSGA-VI-36690/2009.-SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

AMPARO DIRECTO EN
REVISIÓN
01070/2005

ANEXOS:

- RECURSO DE REVISIÓN
DE 14 DE JUNIO DE 2005
CONSTANTE DE 16
FOJAS Y UNA COPIA
DEL MISMO.
- RECURSO DE REVISIÓN
DE 25 DE JUNIO DE 2005
CONSTANTE DE 125
FOJAS.
- COPIA CERTIFICADA DE
LA RESOLUCIÓN DE 23
DE JUNIO DE 2009
CONSTANTE DE 38
FOJAS.
- AUTOS DEL JUICIO DE
AMPARO DIRECTO
328/2004 CONSTANTE DE
337 FOJAS.
- AUTOS DEL
EXPEDIENTE 251/2003
CONSTANTE DE 259
FOJAS.
- AUTOS DEL
EXPEDIENTE 51/2003
CONSTANTE DE 194
FOJAS.
- AUTOS DEL
EXPEDIENTE 251/2003
ACUMULADO DEL
51/2003 CONSTANTE DE
98 FOJAS.

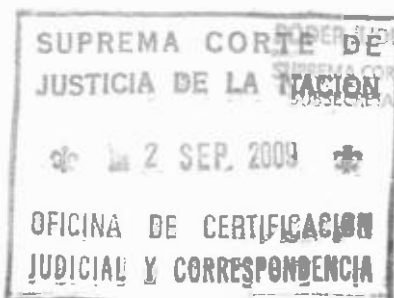
"México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil
nueve.

Agréguese a los autos el oficio de remisión de los autos de
cuenta, para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, toda vez que con
fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, el Tribunal en Pleno de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió resolución en el presente
asunto, cuyos puntos resolutive son del tenor siguiente: **"PRIMERO. Se
REVOCA la sentencia recurrida.- SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO
AMPARA NI PROTEGE al Consejo de la Judicatura Federal, contra la
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Nuevo León, en el juicio contencioso
administrativo 251/2003 acumulado al 051/2003.- TERCERO. Se devuelve
su jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento para que conozca
de los conceptos de violación sobre legalidad cuyo estudio omitió.-
Notifíquese..."**; por tanto, con fundamento en el artículo 14, fracción II,
párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, remítanse dichos autos, al órgano jurisdiccional del conocimiento,
los pliegos originales de expresión de agravios de los recursos de revisión
hechos valer, debiéndose dejar en autos copias certificadas de los mismos,
así como copia certificada de la sentencia de mérito; en su oportunidad,
archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese por lista.
Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, licenciado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien actúa con el
Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto
Esparza Ortiz" **FIRMADO**

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida
consideración.

México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil
nueve.



LIC. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRET



SECRET



PODER EJECUTIVO
SUPLENTE
SUBSECRETARÍA



SECRET

SECRET

SECRET



S. 7

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO DIRECTO 328/2004
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 251/2003 ACUMULADO AL
51/2003

CO NS. JUJ FED

- 8231.- SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
- 8232.- MAGISTRADO DE LA SALA SUPERIOR Y PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO.
- 8233.- GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
- 8234.- SUBPROCURADOR JURÍDICO DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
- 8235.- INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DENOMINADA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
- 8236.- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.

EN EL AMPARO DIRECTO 328/2004 SE DICTO UN AUTO QUE

A LA LETRA DICE:

Monterrey, Nuevo León, a once de septiembre de dos mil nueve.

Vista la cuenta que antecede; con fundamento en los artículos 2º y 3º de la Ley de Amparo y 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, agréguese a los autos el oficio número **SSGA-VI-36690/2009**, signado por el subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el que remite copia certificada de la resolución de veintitrés de junio de dos mil nueve dictada en el amparo directo en revisión **1070/2005** del índice del Tribunal Pleno del Alto Tribunal, en la que se resolvió negar el amparo y protección de la justicia de la Unión a la quejosa Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, ordenó la devolución de la jurisdicción a este Tribunal Colegiado, para que conozca de los conceptos de violación sobre legalidad cuyo estudio se omitió.

En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad este tribunal se avoca al conocimiento de los conceptos de violación sobre legalidad de la demanda de amparo promovida por Rebeca López Hernández, en representación del Consejo de la Judicatura Federal, en contra de la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, dictada por la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo en el Estado, dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 251/2003 acumulado al 51/2003, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 46, 158, 167 y 179 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso b de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En atención a lo solicitado por la superioridad, acúsese el recibo correspondiente.

Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

Por último, atento a lo dispuesto por los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información resguardada en este tribunal colegiado; y conforme a los preceptos invocados las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales en los términos a que se refieren los artículos citados, en la inteligencia de que al existir una solicitud de acceso a la misma y en cumplimiento a lo ordenado en dichos preceptos, se generará una versión pública, en la que se suprimirán además de los datos personales, los datos sensibles que esa información resguardada pueda contener, como son los que revelan, entre otros, el origen

étnico o religioso, así como el estado de salud, etcétera, esto aún cuando dichas partes no ejerzan tal oposición.

Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio a las autoridades responsables, notifíquese además al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y al magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado.

Así lo acordó y firma el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito licenciado Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, ante el secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. Doy fe.

FIRMAS.-LO QUE ME PERMITO COMUNICARLE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES A QUE SE CONTRAE EL PROVEIDO INSERTO.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

LIC. NAÚ OROZCO QUEVEDO.



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN**

039238

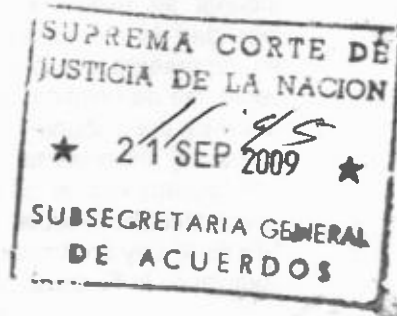
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2009 SEP 21 AM 10 25

OFICINA DE COORDINACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

**RECIBI POR CORREO, SIN ANEXOS,
CON EL SOBRE QUE SE AGREGA.**

VICTOR JUAN RUIZ BARRERAS



“ Por acuerdo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el suscrito Subsecretario General de Acuerdos, Lic. Mario Alberto Esparza Cruz agrega la presente promoción al expediente para los efectos legales.

21 SET. 2009

México, D.F.

Handwritten signature



**PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION**

AMPARO DIRECTO 328/2004

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

OF. 9231/2009

14

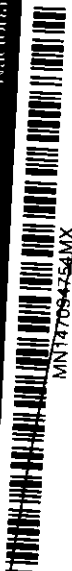
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE SUAREZ No. 2 COL. CENTRO, DELEGACION CUAUHTÉMOC,
MEXICO, D.F., C.P. 06065.



R

**CORREOS
DE MÉXICO**

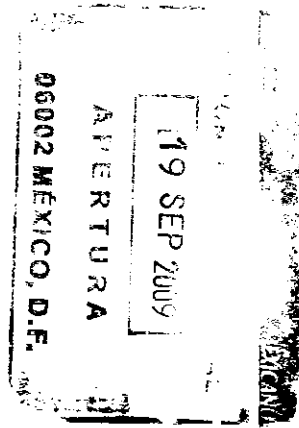
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
DIAGONAL SANTA ENGRACIA 221
FRACC. LOMAS DE SAN FRANCISCO
MONTERREY, N.L., C.P. 64710



MNT47684754MX

FRANQUICIA POSTAL No. FP-SCJN-N.L. 20-2009
CONCEDIDA AL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION PARA EL ENVIO DE CARTAS
DE CARÁCTER OFICIAL

SPC



486

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

OFICIO NÚM. SGA-MAAS/056/2009.

SEÑOR LICENCIADO
MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ
SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
P R E S E N T E

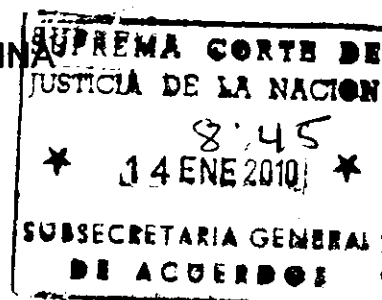
De conformidad con lo establecido en los artículos 67, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 197-A de la Ley de Amparo, me permito remitirle en original el voto particular formulado por el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en el amparo directo en revisión 1070/2005, para su integración en el expediente respectivo, que previamente le fuera remitido mediante oficio SGA-MAAS/276/2009 desde el pasado veinticinco de agosto de dos mil nueve.

Sin otro particular le reitero mi atenta y distinguida consideración.

México, D. F., a 13 de enero de 2010.

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL COELLO CETINA



RCC/maas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

VOTO PARTICULAR

QUE FORMULA EL MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO, EN EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

No comparto el criterio adoptado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1070/2005, en el sentido de que el Consejo de la Judicatura Federal sí está legitimado para presentar demanda de amparo en contra del cobro de contribuciones locales, por las razones que enseguida expondré.

1. Antecedentes

El primero de noviembre de dos mil cuatro el Consejo de la Judicatura Federal —de ahora en adelante “el Consejo”—, a través de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León —entre otras autoridades—, de la que reclamó la sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro, en los autos del recurso de revisión, en el que se resolvió, entre otros puntos, la negativa a la exención del pago del servicio de agua potable.

2. Conceptos de violación

La entonces representante legal del Consejo argumentó que la solicitud de exención del servicio de agua potable y alcantarillado debió concederse conforme al criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:

**"DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO
POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.
QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115
CONSTITUCIONAL".¹**

Por otra parte, estimó que el Tribunal responsable debió haber revocado la sentencia del *A Quo*, toda vez que, por una parte, no valoró que los inmuebles que albergan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, son bienes de dominio público según su destino y, por lo tanto, que están exentos del pago de los derechos por los servicios de agua potable y alcantarillado, con fundamento en el artículo 115, fracción IV, constitucional,² y por otra, no consideró que la aplicación de una norma de carácter constitucional prevalece sobre

¹ El penúltimo párrafo de la base IV del artículo 115 constitucional, al cual remite el texto vigente del artículo 222, base primera, fracción V, inciso b), del mismo Ordenamiento Fundamental, se debe interpretar en el sentido de que dentro de la exención autorizada para bienes del dominio público de la Federación y los Estados, quedan comprendidos los organismos descentralizados como titulares de los inmuebles descritos en el artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, por los servicios que preste el Municipio en materia de agua potable, toda vez que el autor del precepto constitucional, al autorizar la exención, claramente la hace extensiva no sólo a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, sino también a los ingresos que obtenga el Municipio por los servicios públicos a su cargo, lo cual significa que se refirió a las contribuciones causadas por aquellos servicios que se presten en relación con los bienes de dominio público en favor de la Federación, Estados u organismos descentralizados, en razón de la importancia que atribuyó a la función desarrollada a través de la afectación y destino de tales bienes sometidos al régimen de protección de que se trata.

² **Artículo 115.** Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: [...]

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

[...].



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

una norma sustantiva estatal, conforme al artículo 133 de la Constitución Federal.

3. Consideraciones de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito

El Tribunal del conocimiento, previo al estudio de los conceptos de violación propuestos por la representante legal de la parte quejosa, atendió a la naturaleza del Consejo, a fin de determinar si está o no legitimado en el juicio de garantías; y, si existe o no una relación de dependencia entre el Tribunal Colegiado y el órgano técnico-administrativo.

Y consideró que el Consejo no es un órgano de naturaleza jurisdiccional, sino meramente administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales federales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además, de que los Magistrados de Circuito, así como los Jueces de Distrito, cuentan con autonomía e independencia respecto de dicho organismo, conservando íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos.

Que tal es la independencia que se suscita entre los órganos referidos, que el artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Federal dispone que las decisiones que tome el Consejo sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de verificar su adecuación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que consagra el principio de independencia e imparcialidad de los juzgadores federales con el fin mantener una aplicación adecuada del derecho.

La circunstancia de que la parte quejosa pretenda obtener una decisión favorable en cuanto a la exención del pago de servicios de agua potable y alcantarillado, no implica que el Tribunal Colegiado del conocimiento vea afectada la imparcialidad de su dicho, dado que aún si se llegara a estimar fundada la pretensión, ningún beneficio se generaría al propio órgano jurisdiccional; menos aún, podría formularse consulta al Consejo para que brinde asistencia técnica-jurídica en la resolución del asunto, toda vez que éste constituye una de las partes que intervienen en el juicio de amparo.

En adición, consideró que en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, cuando el promovente del juicio de amparo tenga reconocida su personería ante la autoridad responsable, la misma será admitida en el juicio citado para todos los efectos legales, siempre que se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas, lo que en el caso sucede, por lo que este tema no puede introducirse oficiosamente a la *litis* constitucional.

SUPREMA CO
CORTESIA DE LA
SECRETARÍA GENERAL

Por lo tanto, concluyó que el juicio de amparo resulta procedente, al ser promovido por el órgano facultado para acudir en defensa de los bienes que forman parte del Poder Judicial de la Federación, y que se destinan al servicio público federal de impartición de justicia.

Por otra parte, el Tribunal Colegiado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, al considerar sustancialmente que conforme al artículo 115, fracción IV, inciso c) constitucional, se debe preservar la Hacienda Municipal frente a las decisiones de política fiscal de las Legislaturas Estatales, en ese sentido, no se autoriza la exención de las contribuciones reservadas a la Hacienda Municipal, y sólo por excepción, proceden aquellas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

referentes a los bienes de dominio público de la Federación, los Estados y los propios Municipios.

4. Agravios expuestos en el recurso de revisión

Inconformes con la determinación del Tribunal Colegiado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, mediante su legítimo representante, y el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, en su calidad de terceros perjudicados, interpusieron recurso de revisión.

Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, expresó, entre otros aspectos, que el *A Quo* justificó su independencia e imparcialidad frente al quejoso -Consejo de la Judicatura Federal-, sin embargo, de los artículos 94, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, particularmente en lo que hace a los aspectos operativos, administrativos, de vigilancia e incluso personales, se desprende la dependencia y sumisión de dicho órgano jurisdiccional al Consejo.

Que al estar a cargo del quejoso la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, salvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es posible que promueva un juicio de garantías y un Tribunal Colegiado resuelva concederle el amparo, pues técnica y jurídicamente resulta paradójico que éste se haya concedido por el Poder Judicial de la Federación, a través del Tribunal Colegiado, a favor de uno de sus órganos integrantes, como es el propio Consejo.

5. Criterio adoptado por el Tribunal Pleno

El Consejo de la Judicatura Federal sí puede promover en contra del cobro de contribuciones locales el juicio de amparo, pues los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación sí pueden tramitarlo y resolverlo con total independencia.

Lo anterior, porque las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías según las bases del artículo 9° de la Ley de Amparo, cuyo precepto legal nació desde la vigencia de la ley publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, para distinguir la forma como podrían promoverlo las personas morales privadas y las oficiales.

Luego si, el Consejo de la Judicatura Federal es una persona moral oficial, en caso de que estime que se afecten sus intereses patrimoniales, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, puede acudir como parte quejosa a un juicio de garantías, siempre que actúe como personal oficial de derecho privado como puede suceder tratándose del cobro de contribuciones, ya que lo hace en su calidad de sujeto pasivo, sin que se soslaye que desde la Quinta Época hasta la actual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que las contribuciones no forman parte del patrimonio privado del Estado en su carácter de persona moral al no ubicarse en la Ley General de Bienes Nacionales y, por ende, el juicio de amparo que intente es improcedente, lo cual obedece a que lo promueve como un ente dotado de poder público, esto es, con su calidad de sujeto activo de la relación tributaria, siendo por estos matices que no estaría en aptitud legal de promover el juicio a diferencia de la presente hipótesis donde el quejoso actúa en un plano tributario de subordinación.



VOTO PARTICULAR EN EL AMPARO
DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por lo que hace a la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal y su relación con los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Pleno estima que aquella -la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal- estriba en ser un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, pues sus atribuciones no están encaminadas a resolver jurisdiccionalmente conflictos, sino que posee facultades de organización interna y de administración, reglamentarias, de designación, de organización jurisdiccional, de disciplina y carrera judicial.

Las anteriores atribuciones se encuentran consagradas en el artículo 94, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone, en la parte que interesa, que *"La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes..."*, es decir, el citado Consejo tiene atribuciones administrativas y no de orden jurisdiccional, como sí las tienen esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito.

Por otra parte, con fundamento en el artículo 100 constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, particularidades paralelas a sus atribuciones de administración, vigilancia y disciplina que son únicamente de carácter administrativo y no jurisdiccional.

Asimismo, el artículo constitucional referido en el párrafo anterior, establece la integración del Consejo, los requisitos y cualidades que deben reunir los consejeros, el tiempo que dura su

encargo, que se ejercerá con independencia e imparcialidad, que sólo pueden ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Federal, que funciona en pleno o en comisiones, así como las facultades del Pleno para resolver sobre la designación, adscripción y remoción de los Magistrados y Jueces, y diversos asuntos que la ley secundaria determine.

Es también, atribución del órgano referido, propiciar la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos restantes del Poder Judicial de la Federación, tal como lo señala el artículo 68 de la Ley Orgánica de este Poder.³

Por lo anterior, no es posible estimar que exista una relación de jerarquía entre el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el primero es un órgano administrativo que realiza las tareas de vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y, por ende, no guarda relación jerárquica con los segundos.

Ello fue precisado por el legislador en la reforma del artículo 94 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, en donde se aclaró que entre el Consejo de la Judicatura Federal y los demás órganos del Poder Judicial de la Federación, no existe supremacía jerárquica de aquél frente a estos últimos, tal como se advierte en la parte considerativa de la exposición de motivos de la citada reforma.

³ ARTÍCULO 68. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. — El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este último.”.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Además de todo lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció en ese aspecto, al resolver por unanimidad de cinco votos, en sesión del dieciocho de enero del año dos mil dos, referente a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 10/2001, siendo quejoso el Consejo de la Judicatura Federal y Ponente el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.

Del asunto en cuestión derivó la tesis aislada, cuyo rubro, texto y datos de identificación dicen:



SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERAL

"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO ES UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación integral de lo dispuesto en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 68 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que el consejo en cita es un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, con funciones distintas a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las del Tribunal Electoral, a las de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y a las de los Juzgados de Distrito, por lo que entre aquel órgano y éstos no existe un orden jerarquizado de naturaleza jurisdiccional, toda vez que sus atribuciones están plenamente delimitadas por la mencionada Constitución Federal, al encomendar a tal consejo una actividad meramente administrativa con singulares funciones de vigilancia y sanción. Lo anterior se confirma con el contenido de la exposición de motivos de seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, así como del dictamen de veintisiete de abril siguiente elaborado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de su discusión, respecto de la reforma al citado artículo 94 de la Constitución Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mencionado año, en el sentido de que la modificación introducida en este precepto precisa el sentido de las reformas constitucionales de 1994, en tanto hace evidente que no existen jerarquías orgánicas al interior del Poder Judicial, sino fundamentalmente una distribución de funciones." (Novena Época, Segunda Sala, Apéndice actualización 2002, tomo VII, conflictos competenciales, tesis 20, página 66)

En consecuencia, no existe dependencia ni sumisión de órgano jurisdiccional alguno al Consejo de la Judicatura Federal, pues su naturaleza como órganos del Poder Judicial de la Federación, es distinta y no hay razón para considerar que existe una posición jerárquicamente subordinada en el caso concreto, del Tribunal Colegiado a la parte quejosa, Consejo de la Judicatura Federal, y con ello, pretender la decisión favorable en cuanto a la exención del pago de servicios de agua potable y alcantarillado, tal como se advierte de los argumentos vertidos con antelación.

6. Opinión del suscrito

No comparto la determinación adoptada por el Tribunal Pleno en el sentido de que el Consejo de la Judicatura Federal sí tiene legitimación para acudir al juicio de amparo.

Al respecto, es preciso atender al contenido del artículo 100 de la Constitución Federal, producto de la reforma de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que dispone:

“Artículo 100.- La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado de los Tribunales Colegiados de Circuito, un Magistrado de los Tribunales Unitarios de Circuito y un Juez de Distrito, quienes serán electos mediante insaculación; dos Consejeros designados por el Senado y uno por el Presidente de la República. Los tres últimos, deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

VOTO PARTICULAR EN EL AMPARO
DIRECTO EN REVISIÓN 1070/2005

492
FORMA A-53

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación. Con ambos se integrará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación que será remitido por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente".

Del precepto en referencia se obtienen las siguientes conclusiones:

- a) El Consejo es un órgano del Poder Judicial de la Federación.
- b) El Pleno del Consejo resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces y magistrados.
- c) El Consejo está facultado para emitir acuerdos generales para el mejor ejercicio de sus funciones, y,

- d) El Consejo elaborará el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, salvo el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde un punto de vista constitucional, el Consejo es un órgano del Poder Judicial de la Federación, encargado del nombramiento, adscripción, ratificación y remoción de los titulares de juzgados y tribunales; tiene la facultad de emitir la normatividad que le es aplicable y determina el monto y los conceptos de gasto público de dichos órganos jurisdiccionales.

¿No son éstas acaso algunas de las facetas del poder jerárquico? En efecto, si acudimos a la doctrina advertimos que la jerarquía se expresa a través del poder de mando o poder jerárquico que prácticamente, y en términos generales, se concreta en lo siguiente:⁴

- I. Posibilidad de que el superior jerárquico dirija e impulse la acción del inferior dando las órdenes pertinentes. Esta potestad de "órdenes" generalmente no surge en forma expresa del ordenamiento positivo, pero es una consecuencia implícita del poder jerárquico.
- II. Posibilidad de dictar normas de carácter interno, de organización o de actuación, tales como instrucciones, circulares, etcétera.
- III. Posibilidad para el superior de nombrar los integrantes de los órganos inferiores, así como formalizar los contratos en la rama concreta de su competencia.
- IV. Posibilidad de avocación de facultades de competencia.

⁴ MARIENHOFF, Miguel S. *Tratado de Derecho Administrativo*. Tomo I. Ed. Abeledo-Perrot. Quinta edición. Buenos Aires, Argentina. Página 613 y 614.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

V. Facultad de vigilancia de control o de fiscalización por parte del superior, de oficio o a petición de parte sobre actos o sobre personas.

VI. Facultad de resolver los conflictos o cuestiones de competencia que se produzcan entre órganos inferiores.

Por tanto, el Consejo tiene en su haber el poder jerárquico de nombramiento y remoción, de vigilancia, disciplina y fiscalización, de emisión de normatividad aplicable, el control económico del Poder Judicial, e incluso, tiene la potestad de resolver conflictos competenciales por razones de turno.⁵

A mi parecer, éstas son razones suficientes para influir en el ánimo jurídico de un órgano jurisdiccional que se encuentre sujeto a su dirección, lo que conduce a negarle legitimación para acudir al juicio de amparo.

Es cierto, que desde un punto de vista constitucional, el Consejo no es un revisor del contenido de las sentencias dictadas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, ni mucho menos les indica la directriz a seguir, pero ello en nada le beneficia porque se conservan otros vínculos de jerarquía entre los juzgadores y tribunales con el Consejo.

En efecto, antes de la reforma de mil novecientos noventa y cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezaba la pirámide del Poder Judicial y se ocupaba de manera integral, de la organización del Poder Judicial de la Federación; por ello, en la exposición de motivos de dieciocho de abril de mil novecientos

⁵ Acuerdo General 13/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de mayo de dos mil siete.

noventa y cinco, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, producto de la reforma, se sostuvo lo siguiente:

“[...] Como consecuencia, las reformas constitucionales, un buen número de las atribuciones administrativas y disciplinarias que ejercitaba la Suprema Corte, fueron conferidas al Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, es importante destacar que el Consejo, habrá de administrar el Poder Judicial de la Federación [...]”.

Así el Constituyente permanente, refrenda la naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura, como un órgano que ejerce el control administrativo y disciplinario del Poder Judicial de la Federación, esto último no se logra ni se entiende, sino es a través de los vínculos de jerarquía ya referidos en el presente voto.

En la exposición de motivos de la Ley en cuestión, se agrega lo siguiente:

“[...] Se desarrollan las facultades constitucionales del Consejo de la Judicatura Federal, para asumir adecuadamente las importantes y numerosas tareas que se le encomiendan, de esta manera, podrá llevar a cabo una gama muy variada de atribuciones en materia de organización, administración, presupuesto, reglamentación de los órganos jurisdiccionales de carrera judicial y de disciplina en particular respecto de leyes orgánicas anteriores, destaca la previsión expresa del conocimiento de los conflictos de trabajo, entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos, la dirección de política informática y estadística para todo el Poder Judicial de la Federación, la determinación de las bases de celebración de las licitaciones y concursos de obra, la administración de la carrera judicial, la dirección de su Defensoría de Oficio, la coordinación y supervisión de un sistema permanente de vigilancia de los Tribunales de Circuito y juzgados de Distrito entre otras, [...]”.

El trabajo legislativo expuesto, me persuade en que la vocación del Consejo es la de ejercer poderes jerárquicos para la mejor dirección y funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación, toda vez que no es un órgano ajeno al Poder Judicial, ni tampoco es un órgano de consulta, es nada más y nada menos que el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

órgano que dirige el rumbo del referido Poder Judicial y para hacer cumplir sus determinaciones emite la normatividad aplicable, vigila su cumplimiento, aplica medidas disciplinarias en caso de infracción, nombra y remueve a los servidores públicos que lo integran, en fin, como lo previó el propio Constituyente permanente, el Consejo ha asumido las funciones que en el pasado ejercía la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por las razones expuestas, estimo que el Consejo de la Judicatura Federal no está legitimado para acudir al juicio de amparo, pues éstas se deben incluir entre los órganos de los cuales ejerce funciones administrativas, vigilancia y disciplina, y por lo tanto, se puede concluir que la falta de legitimación, radica en que existe un importante grado de subordinación de los órganos que integran el Poder Judicial hacia él.

Con lo anterior, no quiero decir que el Consejo de la Judicatura Federal, en tanto representante del Poder Judicial de la Federación, carezca de medios de defensa para hacer valer las prerrogativas que en su favor concede la Constitución Federal y en general los derechos que le asisten a este Poder.

Me parece que precisamente por su delicada situación dentro de la organización del Estado, es que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, informa que existe un medio de defensa a su alcance *sui generis* –si se quiere-, que es el previsto en el artículo 11, fracción XX, que dispone lo siguiente:

"Artículo 11.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros; y tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

XX.- Para conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias públicas con la Suprema Corte de Justicia o con el Consejo de la Judicatura Federal; [...]."

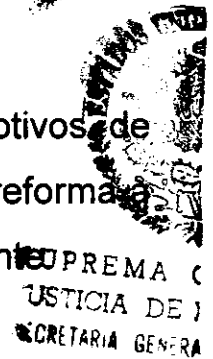
Creo que debe efectuarse una interpretación amplia del referido precepto, para incluir en él cualquier controversia que pudiera suscitarse entre la Suprema Corte y otros Poderes públicos, con el fin de analizar toda clase de actos, normas generales o cuestiones que restrinjan su esfera de competencia.

Esta interpretación amplia se hace necesaria a fin de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia pueda cumplir de manera efectiva, con el deber de velar por la autonomía y la independencia de sus miembros, pues se trata de controversias que de otro modo no podrían ser resueltas.

Mi apreciación se refuerza con la exposición de motivos de dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, de la reforma a la Ley Orgánica que nos ocupa, en la que se precisó lo siguiente:

"[...] Por otra parte, se dota expresamente a la Suprema Corte, de dos nuevas atribuciones de carácter jurisdiccional; en segundo lugar, la atribución necesaria para interpretar y resolver las controversias derivadas de los contratos y convenios celebrados con cualquier órgano del Poder Judicial de la Federación con un tercero, con lo cual se evita que el Consejo de la Judicatura Federal, se constituya en juez y parte respecto de los contratos que celebre con entidades públicas o particulares. [...]."

Con lo anterior se da respuesta a la interrogante planteada en cuanto a que si el Consejo está siendo juez y parte en el presente juicio de amparo; y, estimo que sí, pues al ocupar el punto más alto de la pirámide organizacional del Poder Judicial de la Federación, existe





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cierto grado de dependencia y sumisión administrativa con respecto a los órganos de control constitucional.

Sin embargo, el Consejo tiene a su alcance un mejor medio de defensa, cuyo trámite compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante quien sí guarda una completa escisión, independencia e imparcialidad.

Cabe agregar que de la interpretación del artículo 9º de la Ley de Amparo, se desprende que las personas morales oficiales están legitimadas para acudir al juicio de amparo, cuando se colocan en la misma situación de los particulares; es decir, cuando se afectan sus intereses patrimoniales; sin embargo, tal legitimación reviste excepciones expresas previstas en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que surgen de la propia naturaleza de los órganos.

Por lo que reitero que debe interpretarse de forma amplia la fracción XX, del artículo 11 de la Ley Orgánica, toda vez que en la especie se trata de obligaciones contraídas por la Ley y exigidas por una dependencia pública con la Suprema Corte o con el Consejo.

Si se considera que siempre que se violen los derechos patrimoniales del Consejo éste puede recurrir al amparo, entonces no tendría sentido el referido precepto.

Bajo ese mismo orden de ideas, cabe preguntarse lo siguiente: si se violan los derechos patrimoniales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿también esta última podrá acudir al juicio de amparo? Considero que no, pues sería absurdo, por lo que reafirmo mi punto de vista.

Este es el sentido de mi voto y las consideraciones que lo sustentan.



MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO



**LIC. RAFAEL COELLO CETINA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

496
FORMA A-34

QUEJOSO: CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
1070/2005
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
AMPAROS, CONTRADICCIONES DE
TESIS Y DEMÁS ASUNTOS

En México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de
dos mil diez, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, con lo siguiente:

Contenido:	Presentado en:
1. Oficio número SGA-MAAS/056/2009, de trece de enero del presente año, del licenciado Rafael Coello Cotina, Secretario General de Acuerdos de este Máximo Tribunal.	Original.
2. Voto particular que formula el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.	Original

Las constancias anteriores se recibieron en la
Subsecretaría General de Acuerdos el catorce del mes y año que
transcurren. Conste.

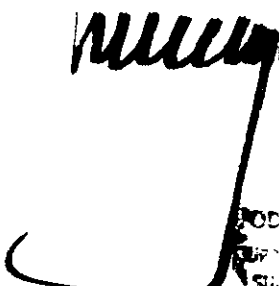
México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de dos
mil diez.

Agréguese para que surtan sus efectos legales
consiguientes el oficio y anexo de cuenta, a través de los cuales
el Secretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal remite a
esta Subsecretaría General de Acuerdos, el voto particular que
formula el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en la sentencia
emitida el veintitrés de junio pasado en el presente asunto; con
fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, primera

parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase copia certificada del mencionado voto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, para los efectos legales consiguientes; en su oportunidad, devuélvase el presente asunto al Archivo de este Alto Tribunal. Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien actúa con el Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz.

MAEO/VPMM


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS QUE DA FE

EN 19 ENE. 2010 POR LISTA DE LA MISMA FECHA, SE NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN ANTERIOR A LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO DOY FE.

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS A OÍR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III Y 29 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, DOY FE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

**QUEJOSO: CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO: 01070/2005**

**AMPARO DIRECTO
EN REVISIÓN
NÚMERO
1070/2005**

En la misma fecha, para notificar el acuerdo que
antecede, se giró el siguiente oficio:

**OF. SSGA-VI-3356/2010.-SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO. MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

LA FEDERACIÓN
CORTA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de dos mil diez.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

VPMM/mgm

Secretaria Auxiliar de Acuerdos en
funciones de Actuaría

Lic. Ivonne Briones Esquivel

ESTADO

WALTER JUD
GRUPPO
QUE PETAI

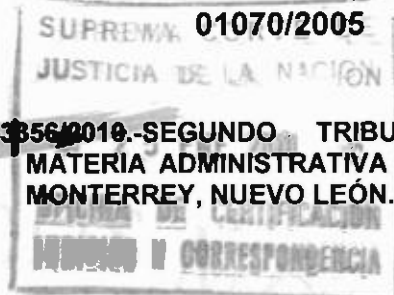


AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS, CONTRADICCIONES DE TESIS Y DEMÁS ASUNTOS.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

QUEJOSO: CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL
AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO:
01070/2005



OF. SSGA-VI-356/2010-SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

AMPARO EN REVISIÓN
01070/2005

ANEXO: VOTO PARTICULAR QUE
FORMULA EL MINISTRO JOSÉ DE
JESÚS GUDIÑO PELAYO.

En el expediente que se menciona al margen, el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el
acuerdo siguiente:

México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de dos mil
diez.

Agréguese para que surtan sus efectos legales
consiguientes el oficio y anexo de cuenta, a través de los cuales el Secretario
General de Acuerdos de este Alto Tribunal remite a esta Subsecretaría
General de Acuerdos, el voto particular que formula el Ministro José de Jesús
Gudiño Pelayo, en la sentencia emitida el veintitrés de junio pasado en el
presente asunto; con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo
primero, primera parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
remítase copia certificada del mencionado voto al Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, para los efectos
legales consiguientes; en su oportunidad, devuélvase el presente asunto al
Archivo de este Alto Tribunal. Notifíquese por lista.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, licenciado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien actúa con el
Subsecretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Mario Alberto
Esparza Ortiz. **FIRMADO**

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y
efectos legales consiguientes, y en vía de notificación del auto
inserto.

Protesto a usted mi atenta y distinguida
consideración.

México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de dos mil diez.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
VPMM/rmdm

Secretaría Auxiliar de Acuerdos en
funciones de Actuaría

Lic. Ivonne Bienes Esquivel

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1947

1947

